

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL
LINARES

CONTRA : **CLAUDIA ANDREA DEL PINO ACUÑA y RICARDO IGNACIO VEGA GUERRERO**

DELITO : **OBSTRUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN, VIOLACIÓN DE SECRETO, COHECHO, PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA, FALSIFICACIÓN O USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO PÚBLICO y FRAUDE DE SEGUROS**

R. U. C. : **N° 2000670379-9.-**

R. I. T. : **N° 178-2023.-**

Linares, a treinta de diciembre del año dos mil veintitrés.

VISTOS:

Entre los días 2 de noviembre y 14 de diciembre de este año 2023 se constituyó la **Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares**, integrada por los Magistrados don Mauricio Leyton Salas, quien presidió, doña Scarlet Quiroga Jara y don Christian Leyton Serrano, para conocer de las acusaciones deducidas por el Ministerio Público, representado por los Fiscales Adjuntos don Patricio Caroca Luengo y don Francisco Ávila Calderón, y el Querellante Consejo de Defensa del Estado, representado por los abogados don Roberto Valentín Rojas Valenzuela y doña María Fernanda González Faúndez, en contra de **CLAUDIA ANDREA DEL PINO ACUÑA**, cédula nacional de identidad N° 13.101.361-2, nacida en la comuna de Talca el día 25 de noviembre del año 1976, casada, abogado, domiciliada en Calle 11 Poniente N° 189, Villa Los Maquis de la comuna de Talca, representada por los Defensores Penales Privados doña María Pezo Elgueta y don Fabricio Calderón Andrade; y de **RICARDO IGNACIO VEGA GUERRERO**, cédula nacional de identidad N° 18.890.618-4, nacido en la comuna de Rengo el día 9 de febrero del año 1995, casado, chofer, domiciliado en calle Huáscar N° 138 Rengo, representado por el Defensor Penal Privado don Víctor Beltrán Valenzuela, **por estimarlos, según la Fiscalía, autores de los delitos consumados y reiterados de obstrucción a la investigación, descrito y sancionado en los artículos 269 bis y 269 ter, ambos del Código Penal, de violación de secreto, descrito y sancionado en el artículo 246 del Código Penal, de cohecho, descrito y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, de falsificación de instrumento público, descrito y sancionado en el artículo 193 N°**



1 del Código Penal, y de fraude de seguros, descrito y sancionado en el artículo 470 N° 10 en relación al 467 N° 2, ambos del Código Penal; y según el Querellante, autores de los delitos consumados y reiterados de obstrucción a la investigación, descrito y sancionado en los artículos 269 ter del Código Penal, de prevaricación administrativa, descrito y sancionado en el artículo 228 del Código Penal, de violación de secreto, descrito y sancionado en el artículo 246 del Código Penal, de cohecho, descrito y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, y de falsificación o uso malicioso de instrumento público, descrito y sancionado en el artículo 193 N° 1 y N° 4 en relación con el artículo 196, todos del Código Penal.

Los domicilios para estos efectos de los intervinientes letrados recién individualizados constan en la carpeta judicial virtual.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Ministerio Público sostuvo acusación por los siguientes hechos:

“Entre los años 2019 y 2020, la imputada doña CLAUDIA ANDREA DEL PINO ACUÑA se desempeñó como abogado asistente de fiscal de la Fiscalía Local de Linares, Región del Maule, Grado IX. Dentro de sus funciones, tenía a su cargo la coordinación de causas de tramitación de mediana complejidad (TCMC), de acuerdo con la organización interna de la Fiscalía. En el ejercicio de sus funciones, le correspondía tramitar causas penales de mediana complejidad, respecto de las cuales debía manejar el sistema informático de apoyo a los fiscales (SAF), debiendo ejecutar las acciones correspondientes a cada caso.

En el desempeño de dicho cargo, y con incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias, la imputada Pino ejecutó diversas acciones destinadas a obstaculizar el esclarecimiento de los hechos investigados en varias causas, y, asimismo, en concierto con su cónyuge don Ricardo Vega Guerrero solicitó beneficios económicos a varios imputados a cambio de dar de baja o terminar causas, en circunstancias que aquellas debían haber seguido en tramitación.

Asimismo, reveló información confidencial de imputados a su cónyuge la que fue mal utilizada como medio de comisión de delitos que se señalarán, forjó documentos falsos comunicando decisiones de término inexistentes y omitió realizar gestiones procesales debidas, todo lo anterior, con infracción grave a los deberes propios de su cargo.



Los hechos ejecutados por la imputada fueron los siguientes:

1.1.- HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITO DE OBSTRUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN:

1. En causa RUC 1900060766-8, por el delito de conducción en estado de ebriedad, en donde existía una alcoholemia de 0,82 gramos por mil respecto de don VÍCTOR SEGUNDO MUÑOZ FAÚNDEZ, solicitó el Archivo Provisional de los antecedentes y posteriormente adoptó la facultad de no inicio de la investigación, contra el mérito de la misma, obstaculizando gravemente y a sabiendas la persecución criminal.

2. En causa RUC 1900104808-5 por el delito de conducción en estado de ebriedad, en el cual existía una alcoholemia de 1,37 gramos por mil respecto de FABIAN ENRIQUE ORTEGA BUSTAMANTE, procedió al Archivo provisional de los antecedentes, obstaculizando gravemente y a sabiendas la persecución criminal por cuanto existía antecedentes para perseguir criminalmente a los responsables.

3. En la causa RUC N°1900680959-9, ingresada como cuasidelito de lesiones, los hechos daban cuenta de un atropello de carácter doloso, con resultado de lesiones graves por parte de la pareja de la víctima, en la cual aplicó principio de Oportunidad, ocultando antecedentes al Tribunal para la toma de la decisión jurídica, debido a que los hechos investigados no permitían dicha decisión, alterando maliciosamente los antecedentes entregados al Tribunal para obtener la aprobación de dicha salida facultativa.

4. En la causa RUC N°1900840692-0, por el delito de conducción en estado de ebriedad, en el cual existía una alcoholemia de 0,92 gramos por mil respecto de don Carlos Manuel Sumonte Vásquez, quien adicionalmente conducía sin haber obtenido la licencia de conducir, requirió en procedimiento simplificado sólo por la conducción en estado de ebriedad, ocultando antecedentes de alcoholemia y también evito la agravación de la pena, obstaculizando gravemente y, a sabiendas, la persecución criminal.

5. En causa RUC N° 1900915769-K, agrupada al RUC 1900624788-4, se solicitó solamente la formalización por un delito, por sistema de interconexión, sin que fuera formalmente presentada al Tribunal y tampoco requerido el procedimiento simplificado como correspondía, ocultando antecedentes y de esta manera obstaculizando gravemente la investigación.



6. En causa RUC 1900836255-9, por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol y paralelamente cuasidelito de lesiones de otro involucrado, se solicitó sólo la formalización respecto del delito de la conducción bajo la influencia del alcohol, pero no respecto del responsable del cuasidelito de lesiones. Habiendo el Tribunal solicitado nuevos antecedentes, éstos nunca fueron presentados, omitiendo realizar los actos propios de su cargo y ocultando antecedentes que obstaculizan gravemente la persecución criminal.

7. En la causa RUC N°2000122215-6, por delitos de daños, luego de la audiencia de control de detención, se fijó audiencia de procedimiento simplificado para el 15 de diciembre de 2020, no obstante, la imputada archivó provisionalmente los antecedentes y terminó la causa en el sistema informático, en contravención a las normas legales que impiden el archivo provisional de causas judicializadas, impidiendo así la continuación de la persecución criminal y obstaculizando gravemente la investigación.

8. En la causa RUC N° 2000145861-3, por el delito de conducción en estado de ebriedad, existía una prueba de intoxilaizer de 1,23 gramos por mil respecto de don RODRIGO ADOLFO GUERRA MORALES, quien se negó a que le practicaran alcoholemia, la imputada del Pino recalificó el delito como hurto de hallazgo en el sistema informático, permitiendo el archivo provisional de los antecedentes y obstaculizando gravemente la investigación y la continuación de la persecución criminal.

9. En la causa RUC Ni 2000237477-4, por conducción en estado de ebriedad, existía una alcoholemia de 1,58 gramos por mil respecto de don SAMUEL ANDRES ALARCON URRUTIA, la imputada del Pino archivo provisional los antecedentes, impidiendo y obstaculizando gravemente la investigación y la persecución criminal.

10. En la causa RUC 2000284126-7, por delito de conducción en estado de ebriedad, en el cual existía una alcoholemia de 2,04 gramos por mil respecto de DIEGO IGNACIO VÁSQUEZ RIQUELME, la imputada del Pino recalificó el delito en el sistema como amenazas, impidiendo y obstaculizando gravemente la investigación y la persecución criminal.

11. En la causa RUC N° 2000014933-1, por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, se fijó audiencia de suspensión condicional del procedimiento para el día 19 de noviembre de 2020, sin embargo, la



imputada del Pino archivó provisionalmente los antecedentes, registrando el término de la causa en los sistemas informáticos, contraviniendo las normas legales que impiden esa salida respecto de investigaciones judicializadas, e impidiendo y obstaculizando gravemente la investigación y la persecución final.

1.2.- EN CUANTO A LOS DELITOS DE VIOLACIÓN DE SECRETO y DE COHECHO:

En su calidad de abogada asistente de la Fiscalía Local de Linares, CLAUDIA DEL PINO ACUÑA, por sus labores asociadas como por su cargo, tenía conocimiento de las claves de acceso a los sistemas computacionales internos de la Fiscalía de Chile, tales como el Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF), Sistema de Apoyo a la Operación (SAO) y Sistema Integral de Gestión (SIGE). Estos sistemas permiten no solamente acceder a la tramitación de las causas sino acceder a información reservada de las mismas y de las personas involucradas. Del Pino Acuña en conocimiento de aquello, violó el secreto legal de las causas que se harán mención posteriormente, para entregar los datos privados a su cónyuge RICARDO VEGA GUERRERO. Estos consistían en partes policiales, datos de domicilios, teléfonos y otros que le facilitaban a Vega Guerrero el contacto con los imputados para instar por el cohecho. Igualmente, entre los datos que facilitaba estaban las formas de ingreso a dichos sistemas, como claves, propias y otros funcionarios de la Fiscalía, las que tienen un carácter de personal e intransferible.

En mérito de lo anterior, se produjo un grave daño a la causa pública, por cuanto dichos datos fueron empleados en la comisión de delitos.

En este desempeño doña Claudia del Pino Acuña, reveló información confidencial de ciertos imputados a Ricardo Vega Guerrero y por su intermedio solicitaba beneficios económicos a distintos imputados, a cambio de terminar causas por términos improcedentes, cambiar calificaciones jurídicas en el sistema informático, agrupando investigaciones que no correspondía agrupar legalmente ni reglamentariamente, cambiando la naturaleza jurídica de los intervinientes en el sistema informático, entre otras, ejecutando estos actos con clara infracción de sus deberes del cargo y omitiendo actuaciones propias del mismo.

De esta manera la imputada del Pino Acuña, desempeñando su cargo público de abogado asistente de la Fiscalía Local de Linares como encargada del equipo de tramitación de causas menos complejas (TCMC), ejecutó las siguientes acciones concertadamente con su cónyuge don Ricardo Ignacio Vega Guerrero:



1. Con relación a la causa RUC 2000284126-7, seguida en contra de DIEGO IGNACIO VÁSQUEZ RIQUELME por el delito de manejo de vehículo en estado de ebriedad cometido con fecha 12 de marzo de 2020 en la comuna de Linares, el imputado Ricardo Ignacio Vega Guerrero a los días de su detención dentro del mes de marzo del año 2020 contactó a Vásquez Riquelme solicitándole la suma de \$400.000, a cambio que su cónyuge Claudia del Pino terminara la causa fuera de los márgenes legales, a lo que Vásquez Riquelme accedió, pagando dicha suma a Vega Guerrero. Posteriormente, del Pino, con infracción grave a los deberes de su cargo, recalificó los hechos por un delito diverso que no guardaba relación alguna con la investigación, para posteriormente proceder a su archivo provisional, poniendo término a la investigación.

2. En relación con la causa RUC 2000237477-4, seguida en contra de SAMUEL ALARCÓN URRUTIA, por el delito de manejo en estado de ebriedad cometido con fecha 29 de febrero de 2020 en la comuna de Linares, el imputado Ricardo Ignacio Vega Guerrero en el mes de abril de 2020 contactó a Alarcón Urrutia, solicitándole \$500.000, a cambio que Claudia del Pino archivara provisionalmente los antecedentes de la investigación, a lo que Alarcón Urrutia accedió, pagando dicha suma a Vega Guerrero. Posteriormente, Claudia del Pino Acuña, con infracción grave a los deberes de su cargo, archivó provisionalmente la causa, poniendo término a la investigación.

3. A fines del mes de marzo del año 2020, en relación con la causa RUC 2000319388-9 seguida en contra de ENRIQUE LEOPOLDO TORRES VALENZUELA por el delito de conducción en estado de ebriedad cometido el 23 de marzo de 2020 en la comuna de Linares, el imputado Ricardo Ignacio Vega Guerrero contactó a Torres Valenzuela, solicitándole \$500.000, a cambio que Claudia del Pino archivara provisionalmente los antecedentes de investigación, a lo que Torres Valenzuela accedió, no pagando finalmente esa suma a Vega Guerrero por cuanto no le fue entregada su licencia de conducir, no obstante aquello y posteriormente con infracción grave a los deberes de su cargo, archivó provisionalmente la causa, poniendo término a la investigación.

4. En relación con la causa RUC 2000145861-3 seguida en contra RODRIGO GUERRA MORALES por el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad cometido con fecha 07 de febrero de 2020 en la comuna de Linares, el imputado Ricardo Ignacio Vega Guerrero en el mes de marzo de 2020 contactó a



este último, solicitándole \$300.000, a cambio que Claudia del Pino Acuña archivara provisionalmente los antecedentes de investigación, a lo que Guerra Morales accedió, pagando dicha suma a Vega Guerrero. Posteriormente, Claudia del Pino Acuña cambió la calificación jurídica al delito de hurto de hallazgo, con infracción grave a los deberes de su cargo, y con fecha 28 de marzo de 2020 archivó provisionalmente la causa, poniendo término a la investigación y entregándole a Guerra Morales, por intermedio de Vega Guerrero, una carta de carácter falso, en la que se comunicaba el archivo provisional, forjada por ambos imputados, con el timbre de la Fiscalía Local de Linares y contrahaciendo una firma en dicho documento.

5. En el mes de marzo del año 2020, en relación con la causa RUC 2000222937-5, seguida en contra de don ELÍAS ROLANDO APABLAZA VÁSQUEZ, por el delito de manejo en estado de ebriedad cometido con fecha 26 de febrero de 2020 en la comuna de Linares, el imputado Ricardo Ignacio Vega Guerrero contactó a Apablaza Vásquez, solicitándole \$400.000, a cambio que Claudia del Pino Acuña con infracción grave a los deberes de su cargo, archivara provisionalmente los antecedentes de investigación, frente a lo cual Apablaza Vásquez a pesar de estos contactos, no accedió.

6. En relación a la causa RUC 1900498181-5, seguida en contra de RALPH JOHN VELOZ RODRÍGUEZ por el delito de manejo en estado de ebriedad cometido con fecha 5 de mayo de 2019 en la comuna de Linares, el imputado Ricardo Ignacio Vega Guerrero entre febrero y marzo de 2020 contactó a Veloz Rodríguez, solicitándole la suma de \$300.000, a cambio que Claudia del Pino archivara provisionalmente los antecedentes de investigación, a lo que Veloz Rodríguez accedió, pagando dicha suma a Vega Guerrero. Posteriormente, Claudia Del Pino Acuña, con infracción grave a los deberes de su cargo, archivó provisionalmente la causa, poniendo término a la investigación, entregándole a Veloz Rodríguez, por intermedio de Vega Guerrero, una carta de carácter falso, en la que se comunicaba el archivo provisional de una causa con un RUC ficticio forjada de esta manera por los imputados y con un timbre de la Fiscalía Local de Linares y una firma.

7. En relación con la causa RUC 1900534650-1 por el delito de conducción en estado de ebriedad cometido con fecha 18 de mayo de 2019 en la comuna de Linares seguida en contra de EDUARDO ANTONIO LOBOS TAPIA, el imputado



Ricardo Ignacio Vega Guerrero con posterioridad entre febrero y abril de 2020 contactó a Lobos Tapia, solicitándole el pago de \$500.000, a cambio que Claudia del Pino Acuña ejecutara acciones con infracción a los deberes de su cargo dando un término administrativo que no correspondía, a lo que Lobos Tapia accedió, pagando dicha suma a Vega Guerrero. Posteriormente, Claudia del Pino Acuña cambió en el sistema la calificación jurídica por un delito que no se relacionaba con dicha investigación y posteriormente la reagrupó con el delito de lesiones menos graves, con infracción grave a los deberes de su cargo.

1.3.- HECHOS CONSTITUTIVOS DE FRAUDE DE SEGUROS

Con fecha 05 de julio del año 2019, la imputada Claudia del Pino Acuña denunció en causa RUC 2000213518-4 que la transferencia electrónica realizada desde su cuenta Rut 18.890.618-4 del Banco Estado a su cónyuge Ricardo Vega Guerrero por la suma \$200.000, denunciando falsamente que esta transferencia no se había ejecutado ni había sido autorizada por ella, con el objeto de hacer valer el seguro de fraude a todo evento por ella contratada. En circunstancias que efectivamente realizó la transferencia antes indicada y el dinero fue recibido por Vega Guerrero, obteniendo del banco antes mencionado una devolución indebida.

En causa RUC 1901128408-9, la imputada Claudia del Pino Acuña denunció que con fecha 17 de octubre de 2019, se había realizado un giro desde su cuenta corriente por la suma de \$200.000, situación que indicó no era posible y que correspondía a un fraude por una transacción no autorizada, denunciando falsamente esta transferencia que no había sido ejecutada ni autorizada por ella, para hacer valer el seguro de fraude a todo evento por ella contratada. En circunstancias que efectivamente sí realizó la transferencia antes indicada y el dinero fue retirado por la propia del Pino Acuña de la cuenta, obteniendo la devolución de estos dineros.

En causa RUC 1900171008-K, la imputada Claudia del Pino Acuña denunció que con fecha 25 de enero de 2019 se realizó una transferencia desde su cuenta corriente 39100065511 por la suma de \$20.000 y luego un giro por \$70.000, que desconocía haber ejecutado ni haber sido autorizada por ésta, con el objeto de hacer valer el seguro de fraude a todo evento por ella contratada. En circunstancias que efectivamente realizó la transferencia antes indicada y este dinero fue retirado por la propia del Pino Acuña, obteniendo una devolución indebida.

1.4.- HECHOS CONSTITUTIVOS DE FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PÚBLICO



Doña Claudia del Pino Acuña, en su calidad de abogada asistente de fiscal, grado IX de la Fiscalía Local de Linares, abusando de su oficio, firmó a nombre de la Fiscalía Local de Linares las cartas de Archivo Provisional dictadas en las causas RUC 2000145861-3, RUC 2000237477-4, RUC 2000145895-3 y RUC 1900104808-5. Para ello, confeccionó los referidos documentos públicos emanados por competente funcionario y que guardan requisitos y formalidades legales específicas. Estos corresponden a las cartas de comunicación de archivo provisional que fueron confeccionadas por la citada del Pino Acuña en los siguientes términos:

a) En causa RUC 2000145895-3, supuso la intervención del fiscal jefe de Linares, confeccionado una firma sobre el nombre de “Fiscalía Local de Linares” en el documento de Archivo provisional que beneficiaba a RALPH VELOZ RODRÍGUEZ.

b) En el RUC 2000237477-4 supuso la intervención del fiscal jefe de Linares, confeccionado una firma en el documento de Archivo provisional que le beneficiaba a SAMUEL ALARCÓN URRUTIA

Sumado a esto, es decir en las citadas causas y en los procesos RUC 2000145861-3 y RUC 1900104808-5 confeccionó las cartas de archivo provisional en la impresora que le fue incautada en su propio domicilio particular, específicamente impresas en la impresora marca “Brother”, modelo DCP-T510W, que no corresponde a la Fiscalía Local de Linares, sino a una impresora particular”.

Calificó esos presupuestos fácticos como constitutivos de los delitos consumados y reiterados de obstrucción a la investigación, descrito y sancionado en los artículos 269 bis y 269 ter, ambos del Código Penal, de violación de secreto, descrito y sancionado en el artículo 246 del Código Penal, de cohecho, descrito y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, de falsificación de instrumento público, descrito y sancionado en el artículo 193 N° 1 del Código Penal, y de fraude de seguros, descrito y sancionado en el artículo 470 N° 10 en relación al 467 N° 2, ambos del Código Penal, asignando a la acusada del Pino Acuña participación en ellos en calidad de autora de conformidad con lo prescrito en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, y al acusado Vega Guerrero, en los delitos de violación de secreto y cohecho, participación en calidad de autor, también de conformidad con lo prescrito en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Igualmente, la Fiscalía consignó en su acusación que, a su juicio, en relación con las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, “favorece a la



acusada la circunstancia atenuante contemplada en el artículo 11 N° 6 del Código Penal. Respecto del acusado RICARDO VEGA GUERRERO no concurren modificatorias de responsabilidad penal”.

En razón de lo anterior, el Ministerio Público requirió se impongan a los inculpados las siguientes penas:

“1. OBSTRUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN del Art. 269 bis del Código Penal, en carácter de reiterado para CLAUDIA DEL PINO ACUÑA en calidad de autor, grado de desarrollo consumado la pena de OCHOCIENTOS DIECIOCHO DÍAS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO, y multa de doce unidades tributarias mensuales, accesorias del artículo 30 del Código Penal.

2. COHECHO del Art. 248 bis del Código Penal, en carácter de reiterado, para CLAUDIA DEL PINO ACUÑA en calidad de autor, grado de desarrollo consumado, la pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO y, además, con las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado. Accesorias del artículo 28 del Código Penal

3. COHECHO del Art. 248 Bis del Código Penal, en carácter de reiterado en calidad de autor, RICARDO VEGA GUERRERO grado de desarrollo consumado, La pena DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO y, multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado

4. VIOLACIÓN DE SECRETO REITERADO, artículo 246 inciso 2do del Código Penal, el que se atribuye a CLAUDIA DEL PINO ACUÑA, en calidad de autor, grado de desarrollo consumado a la pena de OCHO AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MINIMO, multa de 21 UTM , accesorias del artículo 28 del Código Penal.

5. VIOLACIÓN DE SECRETO REITERADO, artículo 246 inciso 2do del Código Penal, el que se atribuye a RICARDO VEGA GUERRERO, en calidad de autor, grado de desarrollo consumado a la pena de OCHO AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MINIMO, multa de 21 UTM, accesorias del artículo 28 del Código Penal.

6. FALSIFICACIÓN DE INSTRUMENTO PUBLICO, en la hipótesis del artículo 193 N° 1 del Código Penal, en carácter de reiterado respecto CLAUDIA DEL PINO ACUÑA, en calidad de autor de conformidad al artículo 15 N°1 del Código Penal, grado de desarrollo consumado se solicita la pena de CINCO AÑOS



Y UN DIA de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias del artículo 28 del código Penal.

7. Delito: 470 N° 10 del Código Penal REITERADO (fraude de seguros): En relación al 467 N° 2 del Código Penal respecto de CLAUDIA DEL PINO ACUÑA, en calidad de autor grado de desarrollo consumado a la pena De TRES AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO, multa de 10 UTM, accesorias artículo 30 código penal.

En todos los casos con el comiso de las especies incautadas, además de las costas de la causa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 del Código Procesal Penal”.

Por su parte, el Querellante sostuvo acusación por los siguientes hechos:

“Entre los años 2019 y 2020, la acusada CLAUDIA ANDREA DEL PINO ACUÑA se desempeñó como abogado asistente de fiscal de la Fiscalía Local de Linares, Región del Maule. Dentro de sus funciones, tenía a su cargo la coordinación de causas de tramitación de mediana complejidad (TCMC), de acuerdo con la organización interna de la Fiscalía. En el ejercicio de sus funciones, le correspondía tramitar causas penales de mediana complejidad, respecto de las cuales debía manejar el sistema informático de apoyo a los fiscales (SAF), debiendo ejecutar las acciones correspondientes a cada caso.

En el desempeño de dicho cargo, y con incumplimiento grave de sus obligaciones funcionarias, la acusada ejecutó diversas acciones destinadas a obstaculizar el esclarecimiento de los hechos investigados en diversas causas, y en concierto con su cónyuge, el querellado RICARDO VEGA GUERRERO solicitó beneficios económicos a varios imputados a cambio de dar de baja y terminar las causas en las que eran investigados, en circunstancias que aquellas debían haber seguido en tramitación.

Asimismo, reveló información confidencial de imputados a su cónyuge Vega Guerrero, forjó documentos falsos comunicando decisiones de término inexistentes y omitió realizar gestiones procesales debidas, todo lo anterior, con infracción grave a los deberes propios de su cargo, según se expone a continuación.

I.1.- HECHOS CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS DE OBSTRUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN:

1.- En la causa RUC N°1900680959-9 de la Fiscalía Local de Linares, ingresada como cuasidelito de lesiones, los hechos daban cuenta de un atropello de



carácter doloso, con resultado de lesiones graves por parte de la pareja de la víctima, en la cual aplicó principio de oportunidad, ocultando antecedentes al Tribunal para la toma de la decisión jurídica, debido a que los hechos investigados no permitían dicha decisión, alterando maliciosamente los antecedentes entregados al Tribunal para obtener la aprobación de dicha salida facultativa.

2.- En la causa RUC N°1900840692-0 de la Fiscalía Local de Linares, por el delito de conducción en estado de ebriedad, en el cual existía una alcoholemia de 0,92 gramos por mil respecto de don Carlos Manuel Sumonte Vásquez, quien adicionalmente conducía sin haber obtenido la licencia de conducir, requirió en procedimiento simplificado sólo por la conducción en estado de ebriedad, ocultando antecedentes de alcoholemia y también evito la agravación de la pena, obstaculizando gravemente y, a sabiendas, la persecución criminal.

3.- En causa RUC N° 1900915769-K, agrupada al RUC 1900624788-4, de la Fiscalía Local de Linares, se solicitó solamente la formalización por un delito, por sistema de interconexión, sin que fuera formalmente presentada al Tribunal y tampoco requerido el procedimiento simplificado como correspondía, ocultando antecedentes y de esta manera obstaculizando gravemente la investigación.

4.- En causa RUC N° 1900836255-9 de la Fiscalía Local de Linares, por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol y paralelamente cuasidelito de lesiones de otro involucrado, se solicitó sólo la formalización respecto del delito de la conducción bajo la influencia del alcohol, pero no respecto del responsable del cuasidelito de lesiones. Habiendo el Tribunal solicitado nuevos antecedentes, éstos nunca fueron presentados, omitiendo realizar los actos propios de su cargo y ocultando antecedentes que obstaculizan gravemente la persecución criminal.

I.2.- HECHOS CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS DE PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA:

1.- En causa RUC 1900060766-8 de la Fiscalía Local de Linares, por el delito de conducción en estado de ebriedad, en donde existía una alcoholemia de 0,82 gramos por mil respecto de VÍCTOR SEGUNDO MUÑOZ FAÚNDEZ, solicitó el Archivo Provisional de los antecedentes y posteriormente adoptó la facultad de no inicio de la investigación, contra el mérito de la misma, obstaculizando gravemente y a sabiendas la persecución criminal.

2.- En causa RUC 1900104808-5 de la Fiscalía Local de Linares, por el delito de conducción en estado de ebriedad, en el cual existía una alcoholemia de



1,37 gramos por mil respecto de FABIAN ENRIQUE ORTEGA BUSTAMANTE, procedió al archivo provisional de los antecedentes, obstaculizando gravemente y a sabiendas la persecución criminal por cuanto existía antecedentes para perseguir criminalmente al responsable.

3.- En la causa RUC N° 2000122215-6 de la Fiscalía Local de Linares, por delitos de daños, luego de la audiencia de control de detención, se fijó audiencia de procedimiento simplificado para el 15 de diciembre de 2020, no obstante, la imputada archivó provisionalmente los antecedentes y terminó la causa en el sistema informático, en contravención a las normas legales que impiden el archivo provisional de causas judicializadas, impidiendo así la continuación de la persecución criminal y obstaculizando gravemente la investigación.

4.- En la causa RUC N° 2000145861-3 de la Fiscalía Local de Linares, por el delito de conducción en estado de ebriedad, existía una prueba de intoxilyzer de 1,23 gramos por mil respecto de RODRIGO ADOLFO GUERRA MORALES, quien se negó a que le practicaran alcoholemia, la imputada del Pino recalificó el delito como hurto de hallazgo en el sistema informático, permitiendo el archivo provisional de los antecedentes y obstaculizando gravemente la investigación y la continuación de la persecución criminal.

5.- En la causa RUC N° 2000185678-3 de la Fiscalía Local de Linares, por el delito de conducción en estado de ebriedad, existía una prueba de intoxilyzer respecto al imputado MANUEL ALEJANDRO PAREDES DAGNINO de 1,64 gramos por mil, no obstante, la querellada terminó la causa en el sistema informático aplicando la Facultad de no iniciar investigación, impidiendo y obstaculizando gravemente la investigación y persecución criminal, sin perjuicio que el escrito no se halla presentado efectivamente al Tribunal.

6.- En la causa RUC N° 2000237477-4 de la Fiscalía Local de Linares, por conducción en estado de ebriedad, existía una alcoholemia de 1,58 gramos por mil respecto de don SAMUEL ANDRES ALARCON URRUTIA, la imputada del Pino archivó provisional los antecedentes, impidiendo y obstaculizando gravemente la investigación y la persecución criminal.

7.- En la causa RUC N° 2000284126-7, por delito de conducción en estado de ebriedad, en el cual existía una alcoholemia de 2,04 gramos por mil respecto de DIEGO IGNACIO VÁSQUEZ RIQUELME, la imputada del Pino recalificó el



delito en el sistema como amenazas, impidiendo y obstaculizando gravemente la investigación y la persecución criminal.

8.- En la causa RUC N° 2000014933-1, por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, se fijó audiencia de suspensión condicional del procedimiento para el día 19 de noviembre de 2020, sin embargo, la imputada del Pino archivó provisionalmente los antecedentes, registrando el término de la causa en los sistemas informáticos, contraviniendo las normas legales que impiden esa salida respecto de investigaciones judicializadas, e impidiendo y obstaculizando gravemente la investigación y la persecución final.

I.3.- HECHOS CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS DE VIOLACIÓN DE SECRETOS:

En su calidad de abogada asistente de la Fiscalía Local de Linares, la acusada CLAUDIA DEL PINO ACUÑA, tanto por sus labores asociadas como por su cargo, tenía conocimiento de las claves de acceso a los sistemas computacionales internos de la Fiscalía de Chile, tales como el Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF), Sistema de Apoyo a la Operación (SAO) y Sistema Integral de Gestión (SIGE). Estos sistemas permiten no solamente acceder a la tramitación de las causas sino acceder a información reservada de las mismas de las personas involucradas. Durante los años 2019 y 2020, la acusada Del Pino Acuña en conocimiento de aquello, violó el secreto legal respecto de las siguientes causas tramitadas en la Fiscalía Local de Linares: RUC 2000284126-7, RUC 2000237477-4, RUC 2000319388-9, RUC 2000145861-3, RUC 2000222937-5, 1900498181-5, y RUC 1900534650-1, tres de los cuales ya fueron identificados por este acusador particular como objeto del delito de prevaricación administrativa en los números 4.-, 6.- y 7.- del acápite anterior, entregando dichos datos privados a su cónyuge, el acusado RICARDO VEGA GUERRERO, entre los que se encontraban partes policiales, con datos de domicilios, teléfonos y otros de los imputados que fueron proporcionados por la acusada Del Pino Acuña a Vega Guerrero. Igualmente, entre los datos que facilitaba estaban las formas de ingreso a dichos sistemas, como claves, propias y de otros funcionarios de la Fiscalía, las que tienen un carácter de personal e intransferible. Lo anterior produjo grave daño a la causa pública, por cuanto dichos datos fueron empleados en la comisión de delitos.

I.4.- HECHOS CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS DE COHECHO:



Entre los años 2019 y 2020, la acusada Claudia del Pino Acuña, actuando por intermedio de Ricardo Vega Guerrero solicitó beneficios económicos a distintos imputados, a cambio de terminar causas por términos improcedentes, cambiar calificaciones jurídicas en el sistema informático, agrupando investigaciones que no correspondía agrupar legalmente ni reglamentariamente, cambiando la naturaleza jurídica de los intervinientes en el sistema informático, entre otras, ejecutando estos actos con clara infracción de sus deberes del cargo y omitiendo actuaciones propias del mismo.

De esta manera la acusada del Pino Acuña, desempeñando su cargo público de abogado asistente de la Fiscalía Local de Linares como encargada del equipo de tramitación de causas menos complejas (TCMC), ejecutó las siguientes acciones concertadamente con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero:

1.- Con relación a la causa RUC 2000284126-7, seguida en contra de DIEGO IGNACIO VÁSQUEZ RIQUELME por el delito de manejo de vehículo en estado de ebriedad, el acusado Ricardo Ignacio Vega Guerrero contactó a Vásquez Riquelme solicitándole \$400.000, a cambio que Claudia del Pino terminara la causa fuera de los márgenes legales, a lo que Vásquez Riquelme accedió, pagando dicha suma a Vega Guerrero. Posteriormente, del Pino Acuña, con infracción grave a los deberes de su cargo, recalificó los hechos por un delito diverso que no guardaba relación alguna con la investigación, para posteriormente proceder a su archivo provisional, poniendo término a la investigación.

2.- En relación con la causa RUC 2000237477-4, seguida en contra de SAMUEL ALARCÓN URRUTIA, por el delito de manejo en estado de ebriedad, el acusado Ricardo Ignacio Vega Guerrero contactó a Samuel Alarcón Urrutia, solicitándole \$500.000, a cambio que Claudia del Pino archivara provisionalmente los antecedentes de la investigación, a lo que Alarcón Urrutia accedió, pagando dicha suma a Vega Guerrero. Posteriormente, Claudia Del Pino Acuña, con infracción grave a los deberes de su cargo, archivó provisionalmente la causa, poniendo término a la investigación.

3.- A fines del mes de marzo del año 2020, en relación con la causa RUC 2000319388-9 seguida en contra de ENRIQUE LEOPOLDO TORRES VALENZUELA por el delito de conducción en estado de ebriedad, el imputado Ricardo Ignacio Vega Guerrero contactó a Torres Valenzuela, solicitándole \$500.000, a cambio que Claudia del Pino archivara provisionalmente los



antecedentes de investigación, a lo que Torres Valenzuela accedió, no pagando finalmente esa suma a Vega Guerrero por cuanto no le fue entregada su licencia de conducir.

4.- En relación con la causa RUC 2000145861-3 seguida en contra RODRIGO GUERRA MORALES por el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, el imputado Ricardo Ignacio Vega Guerrero contactó a este último, solicitándole \$300.000, a cambio que Claudia del Pino Acuña archivara provisionalmente los antecedentes de investigación, a lo que Guerra Morales accedió, pagando dicha suma a Vega Guerrero. Posteriormente, Claudia Del Pino Acuña cambió la calificación jurídica al delito de hurto de hallazgo, con infracción grave a los deberes de su cargo, y con fecha 28 de marzo de 2020 archivó provisionalmente la causa, poniendo término a la investigación y entregándole a Guerra Morales, por intermedio de Vega Guerrero, una carta de carácter falso, en la que se comunicaba el archivo provisional, forjada por ambos imputados, con el timbre de la Fiscalía Local de Linares y contrahaciendo una firma en dicho documento.

5. En el mes de marzo del año 2020, en relación con la causa RUC 2000222937-5, seguida en contra de don ELÍAS ROLANDO APABLAZA VÁSQUEZ, por el delito de manejo en estado de ebriedad, el acusado Ricardo Ignacio Vega Guerrero contactó a Apablaza Vásquez, solicitándole \$400.000, a cambio que Claudia del Pino Acuña con infracción grave a los deberes de su cargo, archivara provisionalmente los antecedentes de investigación, frente a lo cual Apablaza Vásquez a pesar de estos contactos, no accedió.

6. En relación a la causa RUC 1900498181-5, seguida en contra de RALPH JOHN VELOZ RODRÍGUEZ por el delito de manejo en estado de ebriedad, el acusado Ricardo Ignacio Vega Guerrero contactó a Veloz Rodríguez, solicitándole la suma de \$300.000, a cambio que Claudia del Pino archivara provisionalmente los antecedentes de investigación, a lo que Veloz Rodríguez accedió, pagando dicha suma a Vega Guerrero. Posteriormente, Claudia Del Pino Acuña, con infracción grave a los deberes de su cargo, archivó provisionalmente la causa, poniendo término a la investigación, entregándole a Veloz Rodríguez, por intermedio de Vega Guerrero, una carta de carácter falso, en la que se comunicaba el archivo provisional de una causa con un RUC inventado, forjada de esta manera por los imputados y con un timbre de la Fiscalía Local de Linares y una firma.



7. En relación con la causa RUC 1900534650-1 por el delito de conducción en estado de ebriedad seguida en contra de EDUARDO ANTONIO LOBOS TAPIA, el acusado Ricardo Ignacio Vega Guerrero contactó a Lobos Tapia, solicitándole el pago de \$500.000, a cambio que Claudia del Pino Acuña ejecutara acciones con infracción a los deberes de su cargo dando un término administrativo que no correspondía, a lo que Lobos Tapia accedió, pagando dicha suma a Vega Guerrero. Posteriormente, Claudia del Pino Acuña cambió en el sistema la calificación jurídica por un delito que no se relacionaba con dicha investigación y posteriormente la reagrupó con el delito de lesiones menos graves, con infracción grave a los deberes de su cargo.

I.5.- HECHOS CONSTITUTIVOS DE LOS DELITOS DE FALSIFICACIÓN O USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO PÚBLICO.

La acusada Claudia del Pino Acuña, en su calidad de abogada asistente de fiscal, grado IX de la Fiscalía Local de Linares, abusando de su oficio, firmó a nombre de la Fiscalía Local de Linares las cartas de Archivo Provisional dictadas en las causas RUC 2000145861-3, RUC 2000237477-4, RUC 2000145895-3 y RUC 1900104808-5. Para ello, confeccionó los referidos documentos públicos emanados por competente funcionario y que guardan requisitos y formalidades legales específicas. Estos corresponden a las cartas de comunicación de archivo provisional que fueron confeccionadas por Claudia del Pino Acuña en los siguientes términos:

a) En causa RUC 2000145895-3, supuso la intervención del fiscal jefe de Linares, confeccionado una firma sobre el nombre de “Fiscalía Local de Linares” en el documento de Archivo provisional que beneficiaba a RALPH VELOZ RODRÍGUEZ.

b) En el RUC 2000237477-4 supuso la intervención del Fiscal Jefe de Linares, confeccionado una firma en el documento de Archivo provisional que le beneficiaba a SAMUEL ALARCÓN URRUTIA

Sumado a esto, es decir en las citadas causas y en los procesos RUC 2000145861-3 y RUC 1900104808-5 confeccionó las cartas de archivo provisional en la impresora que le fue incautada en su propio domicilio particular, específicamente impresas en la impresora marca “Brother”, modelo DCP-T510W, que no corresponde a la Fiscalía Local de Linares, sino a una impresora particular”.

Calificó esos presupuestos fácticos como constitutivos de los delitos consumados y reiterados de obstrucción a la investigación, descrito y sancionado en



los artículos 269 ter del Código Penal, de prevaricación administrativa, descrito y sancionado en el artículo 228 del Código Penal, de violación de secreto, descrito y sancionado en el artículo 246 del Código Penal, de cohecho, descrito y sancionado en el artículo 248 bis del Código Penal, y de falsificación o uso malicioso de instrumento público, descrito y sancionado en el artículo 193 N° 1 y N° 4 en relación con el artículo 196, todos del Código Penal, asignando a la acusada Del Pino Acuña participación en ellos en calidad de autora de conformidad con lo prescrito en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, y al acusado Vega Guerrero, en los delitos de violación de secreto y cohecho, participación en calidad de autor, también de conformidad con lo prescrito en el artículo 15 N° 3 del Código Penal.

Igualmente, la parte Querellante consignó en su acusación que, a su juicio, en relación con las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, “concorre respecto de la acusada CLAUDIA DEL PINO ACUÑA la circunstancia atenuante contemplada en el Art. 11 N° 6 del Código Penal, esto es, la irreprochable conducta anterior, ya que su extracto de filiación y antecedentes no registra condenas, tampoco le perjudican circunstancias agravantes de su responsabilidad penal. Respecto del acusado RICARDO VEGA GUERRERO no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal”.

En razón de lo anterior, el Querellante requirió se impongan a los inculpados las siguientes penas: “1. Por el delito de OBSTRUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN del Art. 269 Ter del Código Penal, en carácter de reiterado se condene a la acusada CLAUDIA DEL PINO ACUÑA en calidad de autor, y en grado de desarrollo consumado, a la pena de TRES AÑOS DE PRESIDIO MENOR EN SU GRADO MEDIO, inhabilitación especial perpetua para el cargo, multa de doce unidades tributarias mensuales, y accesorias del artículo 30 del Código Penal.

La pena solicitada se realiza en función del marco penal aplicable para el presente delito de obstrucción a la investigación previsto en el artículo 269 Ter del Código Penal, que contempla una pena de presidio menor en cualquiera de sus grados e inhabilitación especial perpetua para el cargo, debiendo tener además presente la existencia de una circunstancia atenuante de responsabilidad penal, sin que concurren circunstancias agravantes, y al aumento de grado que procede según lo previsto en el artículo 351 atendida la reiteración de delitos.

2. Por el delito de PREVARICACIÓN ADMINISTRATIVA del Art. 228 del Código Penal, en carácter de reiterado se condene a la acusada CLAUDIA DEL



PINO ACUÑA en calidad de autor, y en grado de desarrollo consumado, a la pena de TRES AÑOS DE SUSPENSIÓN DE EMPLEO EN SU GRADO MÁXIMO, y multa de 15 Unidades Tributarias Mensuales.

La pena solicitada se realiza en función del marco penal aplicable para el presente delito de prevaricación administrativa previsto en el artículo 228 del Código Penal, que contempla una pena de suspensión del empleo en su grado medio y multa de 11 a 15 unidades tributarias mensuales, a la existencia de una circunstancia atenuante de responsabilidad penal sin que le perjudiquen circunstancias agravantes, y al aumento de grado que procede según lo previsto en el artículo 351 atendido que se trata de conductas delictivas realizadas con carácter de reiteradas.

3. Por el delito de VIOLACIÓN DE SECRETOS, del artículo 246 inciso 2do del Código Penal, en carácter de reiterado, se condene a la acusada CLAUDIA DEL PINO ACUÑA, en calidad de autor, y en grado de desarrollo consumado a la pena de DIEZ AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, multa de 25 unidades tributarias mensuales, y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, previstas en el artículo 28 del Código Penal.

La pena solicitada se realiza en función del marco penal aplicable para el presente delito de violación de secretos previsto en el artículo 246 inciso segundo del Código Penal, que contempla la pena de reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales, a la existencia de una circunstancia atenuante de responsabilidad penal sin que le perjudiquen circunstancias agravantes, y al aumento de grado que procede según lo previsto en el artículo 351 atendido que se trata en este caso de crímenes cometidos de manera reiterados.

4. Por el delito de VIOLACIÓN DE SECRETOS, del artículo 246 inciso 2do del Código Penal, en carácter de reiterado, se condene al acusado RICARDO VEGA GUERRERO, en calidad de autor, grado de desarrollo consumado a la pena de DIEZ AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO, multa de 25 unidades tributarias mensuales, y accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación



absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, previstas en el artículo 28 del Código Penal.

La pena solicitada se realiza en función del marco penal aplicable para el presente delito de violación de secretos previsto en el artículo 246 inciso segundo del Código Penal, que contempla la pena de reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de veintiuna a treinta unidades tributarias mensuales, a la inexistencia circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, y al aumento de grado que procede según lo previsto en el artículo 351 atendido que se trata de crímenes cometidos de manera reiterada.

5. Por el delito de COHECHO del Art. 248 bis del Código Penal, en carácter de reiterado, se condene a la acusada CLAUDIA DEL PINO ACUÑA en calidad de autor, y en grado de desarrollo consumado, a la pena de DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO y, además, con las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado y, accesorias del artículo 28 del Código Penal.

La pena solicitada se realiza en función del marco penal aplicable para el presente delito de cohecho previsto en el artículo 248 bis del Código Penal, que contempla la pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y además con las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado, a la existencia de una circunstancia atenuante de responsabilidad penal, a la inexistencia de circunstancias agravantes, y al aumento de grado que procede según lo previsto en el artículo 351 atendido que se trata de conductas delictivas realizadas con carácter de reiteradas.

6. Respecto del delito de COHECHO del Art. 248 Bis del Código Penal, en carácter de reiterado, se condene en calidad de autor a RICARDO VEGA GUERRERO y en grado de desarrollo consumado, a la pena DIEZ AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO, además de las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del cuádruplo del provecho solicitado o aceptado y, accesorias del artículo 28 del Código Penal.

La pena solicitada se realiza en función del marco penal aplicable para el presente delito de cohecho previsto en el artículo 248 bis del Código Penal, que



contempla la pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y además con las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado, a la inexistencia circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, y al aumento de grado que procede según lo previsto en el artículo 351 atendido que se trata de conductas delictivas realizadas con carácter de reiteradas.

7. Respecto del delito de FALSIFICACIÓN O USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO PÚBLICO, previsto en el artículo 193 en relación con el artículo 196 del Código Penal, en carácter de reiterado, se condene a la acusada CLAUDIA DEL PINO ACUÑA, a la pena de CINCO AÑOS Y UN DÍA de presidio mayor en su grado mínimo y accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, previstas en el artículo 28 del Código Penal.

La pena solicitada se realiza en función del marco penal aplicable para el presente delito de falsificación o uso malicioso de instrumento público previsto en los artículos 193 en relación con el artículo 196 del Código Penal, que contempla la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, a la existencia de una circunstancia atenuante de responsabilidad penal, y la inexistencia de circunstancias agravantes, y al aumento de grado que procede según lo previsto en el artículo 351 atendido que se trata de conductas realizadas con carácter de reiteradas.

En todos los casos con el comiso de las especies incautadas, además de las costas de la causa de conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 del Código Procesal Penal”.

SEGUNDO: Que el Ministerio Público, en su alegato de apertura, en suma sostuvo que este caso los desnuda, les produce un dolor porque viene desde su interior. Se les daña la imagen, se les daña el clima interno y a todos como institución. Tienen principios que son la probidad, la buen a fe, la transparencia y el respeto por el orden público que no son principios establecidos de manera vaga, tienen para ellos un orden reglamentario interno, deben cumplirlos, está incluso en el artículo 37 del Reglamento de Fiscales que aplica a la acusada y en el artículo 33 del



Reglamento de Funcionarios. Pero en 22 años que llevan trabajando, jamás les había tocado un caso que les genere tal dolor, desnudez y tal vulneración.

Destacó que, como se ve en la acusación, son reiterados actos de corrupción que venían de una manera tal que era muy difícil detectarlos internamente. Sus sistemas de control y gestión no pudieron. Esto sólo se pudo detectar por un aviso de terceros. Ello demuestra que hubo internamente una gestión computacional destinada a ocultar los vicios que se cometían por la acusada Claudia del Pino, por dar lugar y pie a la comisión de los ilícitos. Eso dice también que los sistemas computacionales pueden tener elementos de registro y control, pero siempre van a depender de la buena fe de la persona que ingrese los datos. Este es el caso. En este caso, Claudia del Pino, abogada asistente de Fiscal, grado 9, encargada de la tramitación de causas menos complejas dentro de su organigrama, gestionaba y alteraba los sistemas computacionales para facilitar la comisión de los ilícitos, vulnerar sus sistemas internos de gestión y propender a la comisión del ilícito de cohecho.

Señaló que, sobre cómo lo hacía, la acusada, funcionaria pública, en ejercicio de sus funciones, tenía acceso a las claves, a la información y el conocimiento, que entregaba a su cónyuge Ricardo, vivían juntos, y con esa información secreta contactar a privados que tenían causas por manejo en estado de ebriedad y con esa información secreta y reservada, se acudía a estas personas y se les solicitaba una suma de dinero para no dar tramitación a la causa por manejo en estado de ebriedad vigente. Para ello se hacía una gestión tanto externa como interna porque los hitos del sistema computacional eran alterados de tal forma que no se podía realizar un rastreo suficiente hasta que se descubrió este caso por una denuncia de un tercero presentada en Rengo.

Refirió que acá hay una participación necesaria. Podrá discutirse si es del N° 3 o del N° 1 del artículo 5, pero Ricardo Vega tenía una participación absolutamente necesaria en el ilícito, no habría una Claudia del Pino sin un Ricardo Vega, son compatibles y necesarios para este engranaje.

Puntualizó que hablan de violación de secretos porque la información que tienen ellos en causas penales es reservada y además secreta por el artículo 182 del Código Procesal Penal y esta información era entregada a un extraneus, Ricardo, y éste contactaba a los clientes de las causas de manejo en estado de ebriedad. Por ende, es susceptible susceptible de ser castigada. Hay obstrucción a la investigación



porque doña Claudia es sujeto activo del artículo 269 ter del Código Penal y, alterando los sistemas informáticos y aportando información falaz y vulnerando la buena fe, entregaba datos falsos al sistema para poder lugar a la comisión del cohecho y evitar que se dieran cuenta las alarmas internas, lo que así sucedió. Es más, hay causas tramitadas judicial o no judicialmente en que la información era omitida, incluso no subida a la Oficina Judicial Virtual, pero en el registro interno, en el antiguo SAF, era registrada como ejecutada, por lo que el control y el registro estaba hecho, lo que era importante para la situación penal. Sobre el cohecho, es la cuestión principal. No habría obstrucción, violación de secretos y otros ilícitos sino con la finalidad de cohechar y ser cohechado. Dejaron abierta el grado de participación de don Ricardo, pero sin él no existiría doña Claudia en la comisión de los delitos. Sobre la falsificación de instrumento público, con el objeto de dar una mejor actuación a quien estaba cohechando y un mejor servicio podría decirse, se entregaron cartas de archivo provisional a los imputados que daban cuenta de que su causa ya estaba archivada provisionalmente. Les llamó la atención porque esas cartas no se entregan a los imputados, se entregan a las víctimas, pero era una forma de acreditar el trabajo realizado y esto se generó desde la casa de Claudia del Pino, en su computador personal y en su impresora, lo que se demostrará pericialmente. Se forjaba un documento oficial, con las solemnidades y formalidades correspondientes, incluso suponiendo la firma e intervención de personas que no estuvieron en el proceso para dar ese mejor servicio. Lujo de males es el fraude de seguros, que no es de menor intensidad. Acá Claudia del Pino efectuaba denuncias por mal uso de su tarjeta o fraudes bancarios aprovechando que tenía un seguro bancario, pero la denuncia que se presentaba en la Fiscalía por Claudia del Pino la tramitaba ella, y obtuvo así un beneficio económico indebido.

Añadió que tienen 22 años en la Fiscalía del Maule, nunca les había pasado y espera no vuelva a ocurrir. Ha dejado en evidencia que sus sistemas son vulnerables a la adulteración pero siempre van a depender de la buena fe que se vulneró.

Concluyendo, instó por el veredicto condenatorio en contra de los acusados como autores de los delitos de cohecho y en su caso, respecto de doña Claudia, por todos los ilícitos y en todos los grados de desarrollo.

Al clausurar, la Fiscalía en síntesis, afirmó que nos encontramos aquí para cerrar un capítulo crucial en un caso que ha capturado la atención y preocupación de



todos nosotros, no es un caso común y corriente, no es una situación habitual, es primera vez que ocurre una situación así en la región del Maule, y cree que los hechos que se han presentado en este juicio rebelan un comportamiento escandaloso por parte de Claudia del Pino, una ex abogada de la Fiscalía, magíster, con 15 años de experiencia en la institución, y a su vez la participación de su coautor Ricardo Vega Guerrero, su esposo. Los delitos de cohecho, violación de secreto, obstrucción a la investigación y fraude de seguro han dejado una mancha en la confianza en la Fiscalía y en el sistema de justicia general en esta localidad puesto que la acusada, como abogada de la Fiscalía, traicionó la confianza de esta institución en la que todos los funcionarios públicos, al ejercer una función de servidor público, se fundan en los principios de buena fe y probidad y de esta forma, al traicionar la confianza de esta institución, traiciona la fe pública, al desempeñar su cargo con motivaciones corruptas y aprovecharse de su acceso a privilegiada información confidencial, de esta forma los actos ejecutados por la acusada y su marido como coautor necesariamente han demostrado una violación flagrante de los deberes de su cargo, de su juramento como abogada, del mínimo deber cívico exigible a cualquier funcionario público. La obstrucción a la investigación, la recalificación de delitos, el archivo indebido de causas, la alteración de la información en los sistemas informáticos, son acciones sorprendentes y que han socavado la esencia misma de la justicia, transformando a quién debía cumplir la misión institucional de la Fiscalía de investigar y perseguir delitos en protagonista de un sinnúmero de delitos que afectan la probidad, actos que no sólo afectaron actos específicos sino que también afectaron el prestigio de la Fiscalía de Linares. Todos escuchamos varias veces cómo ya se escuchaba entre el año 2019 y 2020, inclusive hasta en carreras de perros, que en la Fiscalía de Linares se podían hacer movidas, lo que sencillamente es inaceptable. El cohecho mediante el cual Claudia del Pino y Ricardo Vega solicitaron beneficios económicos a cambio de manipular el curso de investigaciones rebela una corrupción sistemática y eso sólo respecto de los casos que lograron descubrir. Estos actos no sólo afectaron a imputados involucrados, sino que también han degradado la integridad y confianza en cómo se tramitaban y cómo se tramitan las causas en la Fiscalía de Linares, otorgando soluciones fuera del marco legal, soluciones clandestinas. Por otro lado, la violación de secretos, uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema procesal penal, ha sido llevado de manera consciente y deliberada por Claudia del Pino. Ella usó su posición para revelar



información confidencial a Ricardo Vega, quien a su vez, en concomitancia con ella, la usó para cometer actos delictivos. Esto no sólo compromete la confianza en la justicia, sino que también en la seguridad de todas las personas que creen que los datos que se encuentran en Fiscalía son datos confidenciales, que sus datos personales, que la información de sus causas no se va a conocer. El fraude de seguros forma parte también de este abanico de delitos cometidos por la acusada, denunciando falsamente transacciones que ella misma ejecutó, siniestros inexistentes que buscaban beneficios económicos indebidos. Finalmente, la falsificación de instrumentos públicos, específicamente la creación de cartas de archivo provisional con firmas falsas, demuestra un desprecio total por la legalidad y la ética profesional, que afectaba a su jefatura, a sus compañeras de trabajo. Este acto no sólo afecta la credibilidad de la Fiscalía, sino que también pone en entredicho la validez de todo el trabajo o los documentos legales realizados por la acusada. En resumen, la evidencia presentada en este juicio, creen, es abrumadora y se traduce en una sola palabra, que es corrupción.

Manifestó que cuestiones previas que parece conveniente tener claro y a su juicio son hechos que no son controvertidos, primero, son que Claudia del Pino es abogada de la Fiscalía y que fue abogada de la Fiscalía durante 15 años aproximadamente. Que trabajó durante el 2018, 2019 y 2020, pero el 2019 y 2020 principalmente en la Fiscalía de Linares. Que tenía a su cargo la tramitación de causas menos complejas. Tampoco es controvertido y está acreditado con abundante material que en sus funciones tenía acceso a todos los sistemas informáticos, SAF, SIGE, SAO, SIAU y VPN para conexión a distancia, todas con claves personales e intransferibles. Que Claudia del Pino estaba a cargo de las causas de tramitación menos complejas (TCMC) y que para su trabajo tenía completa autonomía, también con la declaración de todos los testigos, inclusive con la propia declaración de la acusada, no había controles periódicos, no había controles específicos, es decir, completa y total autonomía. Tampoco es controvertido que Ricardo Vega Guerrero, su coautor, a la sazón era y es su esposo. Que las causas mencionadas por manejo en estado de ebriedad fueron procedimientos reales con personas detenidas conduciendo en estado de ebriedad, que fueron sometidas a los procedimientos de alcoholemia respectivos. Que fueron denunciados por Carabineros. Que se generaron causas a su respecto que debieron seguir el trámite legal de todas las personas que se encuentran en esa situación y que todas esas causas además se le



asignaron a Claudia del Pino, que eran de su responsabilidad. A su vez, quedó acreditado que en todas esas causas salió alcoholemia positiva y que correspondía realizar la imputación por manejo en estado de ebriedad. Por otro lado, tampoco es controvertido que Ricardo Vega se contactaba con los imputados. Es un hecho pacífico en la causa que él tomaba contacto con los imputados, que él negociaba con las instrucciones previas de Claudia del Pino los montos, que finalmente recibía el dinero a cambio de terminar las causas y tampoco es controvertido que estas causas fueron terminadas en el sistema, inclusive en muchas de ellas se recalificó el delito. Todo esto, tanto los archivos provisionales, la recalificación del delito en las causas de Claudia del Pino, con sus claves. Finalmente, sobre las cartas de archivo, es un hecho pacífico que son falsas y sus firmas también son falsas. Respecto de las denuncias de seguros, tampoco está controvertido que estas denuncias fueron realizadas por Claudia del Pino, que ella misma se tomó las denuncias en la Fiscalía, que en una de ellas denunció a Ricardo Vega no mencionando que era su marido, indicando que era una persona desconocida. Que de todos los siniestros denunciados ella recibió la indemnización respectiva. Todas estas cuestiones previas se encuentran acreditadas con el material probatorio que ya conocemos: Carola D'Agostini, Nelly Zenteno, Karem Torres, Mauricio Jorquera, todos los Carabineros que participaron en los procedimientos respectivos, todas las causas que fueron leídas e incorporadas, los certificados de recursos humanos, el sumario, que permiten decir que estos hechos son pacíficos y se encuentran acreditados.

Agregó que, en cuanto a los hechos específicos de la acusación, sobre la obstrucción a la investigación del artículo 269 bis y 269 ter del Código Penal, sabemos que esta disposición castiga el incumplimiento del deber específico de los fiscales del Ministerio Público, extendido, obviamente, a los abogados asistentes, de conducir las investigaciones penales bajo el principio de objetividad, ya sea que lo obtengamos de la Constitución o del artículo 3° la Ley 19.640, que obliga en el ejercicio de las funciones a velar por la correcta aplicación de la ley, a investigar con igual celo todas las circunstancias que fundan la responsabilidad, las que la agravan o las que lo eximen. Ocultar antecedentes entonces no es únicamente una ocultación material, esconder bajo la alfombra, sino también ocultar la manera en que la Fiscalía tramita la calificación jurídica de un hecho por ejemplo, ocultar la real calificación jurídica del hecho, como quedó en evidencia plasmado, cambiar un manejo en estado de ebriedad por un hurto de hallazgo. Eso es ocultar la real



calificación jurídica, cambiar un manejo en estado de ebriedad por lesiones, se oculta la real calificación jurídica, o el caso de la amenaza. Esto en pos de lograr la no revisión o alerta del sistema, puesto que se daría cuenta de que una causa de manejo en estado de ebriedad estaba archivada. O aplicar un principio de oportunidad en un manejo en estado de ebriedad para lo cual, como sabemos, se cambió la calificación jurídica. Estamos hablando de una obstrucción digital, como hoy día se tramitan las causas de la Fiscalía. Pero no sólo aquello, pudimos ver en el juicio que los sobornantes mantuvieron sus procesos retardados indebidamente durante años hasta que la Fiscalía de Linares, luego de la remoción de Claudia del Pino, corrigió los procesos y reactivó las causas, motivado únicamente por la develación que surgió en la sede administrativa y en la sede penal. Si no hubiese ocurrido la develación, estas causas hasta el día de hoy estarían en el estado en que estaban a esa fecha, es decir, terminadas. Cómo olvidar a Ralph Veloz, que tenía una orden de detención cuando declaró como testigo en juicio precisamente por la causa que había pagado para terminar. Los otros imputados, después de un tiempo injustificado, debido a una decisión improcedente, han retomado sus causas por el descubrimiento que generó que estas causas se reactivaran, no por una decisión de la acusada, no fue por una retractación oportuna, no fue porque se dio cuenta de que había un error, fue sencillamente porque se descubrió la maquinación que existía en conjunto con su cónyuge. Esto lo dice porque la Defensa acompañó en los últimos días la tramitación digital de las causas, en las que se demuestra precisamente la inactividad en estas causas puesto que, como se demuestra, actualmente las causas pueden estar con requerimiento simplificado, algunos condenados o con suspensión condicional, pero fue por la actividad de la Fiscalía que revirtió un acto criminal descubierto, no por una actitud de la imputada, y eso es precisamente la obstrucción a la investigación que denunciaron. En el sumario y en el juicio oral pertinente se acreditó que a los imputados por manejo en estado de ebriedad, por ejemplo, Fabián Ortega y Víctor Muñoz, se les archivaron las causas sin motivo alguno a pesar de que no ocurrieron pagos en sus casos, como indicó el investigador en el sumario, para dar una falsa sensación de actividad y eficiencia. Los otros casos no son baladís, se trataba de decisiones jurídicas que no eran apropiadas a la realidad fáctica del caso, no velándose por la aplicación de la ley y las instrucciones regionales, sino que sencillamente para dar por concluidas las causas y salir del estado en que estaban, de tramitación vigente, para pasar a causas terminadas. En otros casos



omitiendo los antecedentes propios de la investigación para realizar una actividad procesal atenuada. En esto valga lo indicado por Mauricio Jorquera y el sumario que fue incorporado en estrados. El sumario es esclarecedor, como también la exposición de Karem Torres. Las causas asignadas a Claudia del Pino por la adopción irregular de decisiones contra mérito provocaron que se archivaran causas que estaban judicializadas, lo que es completamente contra ley, jurídicamente imposible, y que además el Tribunal jamás podría enterarse de una decisión administrativa por cuanto es decisión interna y no comunicable, y si se decidiera comunicarla, se aplica una decisión de no perseverar, es lo que correspondía. Es, como se dijo, una obstrucción que buscaba dar una representación de eficacia. De esta forma, se encuentra acreditado que entre las 11 causas que forman parte de la obstrucción, en especial las causas de Samuel Alarcón, Diego Vásquez y Rodrigo Guerra, éstas no tuvieron la tramitación normal, no fue demora, no fue retardo, no fue equivocación, no fue un error de vista, no fue un error de cálculo, no fue una omisión involuntaria, fue una actitud permanente entre el año 2019 y 2020. Consta en el sumario el análisis de cada causa, tramitación contra instructivo, tramitación contra ley, negativa a la persecución. Es decir, se terminaron causas que debieron estar con persecución criminal. Las causas ingresadas mediante su lectura demuestran el estado en que estaban cuando las descubrieron y es lo que pide al Tribunal que valore. Requeridas con infracciones menores antes que se descubriera el delito. No importa lo que ocurrió después, la develación permitió solucionar la obstrucción. Lo que la Defensa acompaña del estado actual es irrelevante y si se tramitaron, fue por la investigación penal que dio luces a la oscuridad en que se encontraban estas causas. Para acreditar esto, cuenta con las fotos del sistema SAF incorporadas por doña Karem Torres, que dan cuenta de que estas causas se tramitaron por el usuario Claudia del Pino, las declaraciones de los sobornantes, la declaración de Ricardo Vega, de Carola D'Agostini y una serie de otros elementos que dan cuenta de que efectivamente estas causas fueron y se encontraron en la hipótesis del 269 ter.

Señaló que, por otra parte, el cohecho pasivo agravado del artículo 248 bis sanciona al empleado público que solicitare o aceptare recibir un soborno en las mismas condiciones del artículo anterior pero por un motivo diferente, omitir o haber omitido un acto propio del cargo o por ejecutar o haber ejecutado un acto con infracción a los deberes del cargo. Este artículo calza perfecto con la conducta



realizada por Claudia del Pino y Ricardo Vega, funcionaria pública que omitió su función principal, que era perseguir e investigar delitos. Omitir los actos propios de su cargo y no sólo eso, realizar delitos en la tramitación de sus causas. Estos hechos se encuentran claramente acreditados por múltiples antecedentes. No sólo los sobornantes que comparecieron, todos contestes en indicar que sus causas existieron, que pagaron para terminar sus causas y que fueron contactados por Ricardo Vega quien, en todos los casos, los sobornantes indicaron, refería que tenía una funcionaria, una esposa, una colega, un contacto en la Fiscalía de Linares, que no era sino la funcionaria pública. El cohecho se ha acreditado porque se ha demostrado en estrados que hay pagos que lograron que la Fiscalía cerrara causas por manejo en estado de ebriedad, a las que no se dio el término judicial que por ley correspondía. Tuvo Claudia del Pino dominio del hecho, claramente. Las causas estaban todas asignadas a su cuenta, en su cuenta TCMC, donde ella tenía total autonomía, sin supervisión directa. Las decisiones las tomaba ella autónomamente y debieron tomarse conforme a derecho y el mérito investigativo. Tenía 15 años de experiencia, nadie puede decir seriamente que fue por desconocimiento legal o que desconocía los procedimientos que se aplicaban. Hay un dolo reforzado en este punto, decisiones en causas en que, en correlato al pago económico para darla por terminada en cumplimiento al negocio prometido, es decir, las causas estaban asignadas a ellas, se modificaron con sus cuentas, se ofreció un pago y las causas consecuentemente tuvieron el término ofrecido, cinco, modificaciones en el sistema público de las calificaciones jurídicas de los delitos para imposibilitar su tramitación precisamente de las causas a que se refirieron los pagos. Modificación sofisticada hecha específicamente para evitar una revisión superior, recalificando a delitos cuyo archivo no era con pena aflictiva, que no era objeto de consulta y por ende no iba a ir al fiscal regional, y por delitos no conocidos por el vulgo, como el hurto de hallazgo. Es decir, se trata de una sofisticación que requiere conocimiento y experiencia. No cabe alguna duda del concierto previo y acuerdo de voluntades entre Claudia del Pino y Ricardo Vega, que todo esto está hecho previo a los contactos para captar a los clientes, por información secreta obtenida del sistema SAF o SIGE, tanto en cuanto a nombre, en cuanto al teléfono, los datos de detención y alcoholemia, sumado a procesos previos de cada imputado, lo que es obtenido por del Pino, entregado y usado por Vega para lograr el cohecho. Es un trabajo conjunto y coordinado. En definitiva, dominio del hecho conjunto.



Argumentó que sobre el extraneus, Ricardo Vega, la jurisprudencia mayoritaria indica que cuando el extraneus conoce la calidad del sujeto calificado, en este caso, del funcionario público, y conoce además que éste está realizando actuaciones con omisión o infracciones a los deberes de su cargo y no sólo eso, participa, comparte la responsabilidad penal y el dominio del hecho. En este caso Ricardo Vega también tenía dominio del hecho, uno, contactaba a los clientes pudiendo no hacerlo, porque elige a los sobornantes junto a Claudia del Pino, porque negocia los precios, porque recibe los pagos y porque entregó los comprobantes pudiendo en cualquiera de estos casos no hacer las conductas que conformaban el delito de cohecho. Los casos de cohecho, Diego Vásquez, acreditado no por la declaración de Vega Guerrero, sino por el propio Vásquez, por el ex funcionario de la Fiscalía Froilán Cofré, lo que demuestra además lo que decía al inicio, ya se estaba escuchando de la “movida”, tanto así que un funcionario de la Fiscalía lo estaba escuchando de terceros. Pago monetario con resultado específico de archivo provisional en causa por manejo en estado de ebriedad. Se suma a la acreditación la carpeta, las fotografías de Ricardo Vega, los chats que existen entre Vega y Vásquez, existen un cúmulo de antecedentes. Lo que vamos a escuchar en general en todos los delitos es corroboración. Cada hecho está corroborado por múltiples elementos que tienen fuentes diferentes. Ejemplos, Diego Vásquez, Froilán Cofré, Ricardo Vega, el propio Vásquez, información que surgía de la revisión del sumario, la declaración del funcionario policial que detuvo a Diego Vásquez. Lo mismo ocurre con Samuel Alarcón, no sólo Ricardo Vega, Samuel Alarcón que declaró con la Policía de Investigaciones, su hermana Valesca Alarcón. Todo esto nos devela que fue parte de la génesis de la develación de este negocio. La carpeta física. En igual situación Enrique Torres Valenzuela, uno de los casos en que la carpeta original investigativa estaba en la casa de Claudia del Pino, ni siquiera en un escritorio, en un clóset, acreditado por la declaración de Vega Guerrero y el propio Torres Valenzuela, quien no accedió al pago concordado a pesar de haberse ofrecido el negocio, pero que terminó igualmente por archivo. Rodrigo Guerra Morales, otra situación, que además, fue el corredor de propiedades que le arrendó la casa a los imputados cuando llegaron a Linares, caso con acreditación integral. Hay declaración de Vega, de Guerra, se logró archivar su causa previo pago en efectivo del dinero solicitado para dar por terminada la causa, se archivó su causa, inclusive se forjó un documento, para su tranquilidad y certeza, se logró acreditar igualmente



que hubo un cambio de calificación jurídica en el SAF por Claudia del Pino, manteniendo el RUC de la causa, pero por otro delito, hurto de hallazgo. En esto tener en cuenta la exposición y detalle entregado por Karen Torres, quien explicó la manera compleja y sofisticada de hacer este cambio. Elías Apablaza, imputado por manejo en estado de ebriedad, contactado por Vega, con información secreta que sólo podía tener Claudia del Pino con acceso al sistema integral, por cuanto se trata de su causa, pero que no aceptó el negocio. Sólo en el 2021 fue condenado finalmente por manejo en estado de ebriedad, luego de casi dos años desde su detención. Ralph Veloz, otro caso emblemático, persona que fue contactada Vega Guerrero y que accedió al pago de dinero para dar por terminada su causa por manejo en estado de ebriedad y que siempre supo que lo que se le estaba ofreciendo, en suma, era algo corrupto, a quien le llamó la atención la gran cantidad de información que manejaba Vega Guerrero sobre su causa, sus datos, al igual que los anteriores, cuestión que sólo podía haber entregado Claudia del Pino. Que tenía causas previas, condenas anteriores, que inclusive le podían suspender la licencia, en este caso, por 5 años. Quién puede saber que en la segunda causa por manejo en estado de ebriedad la suspensión es por 5 años sino un abogado asistente. En el caso de Ralph Veloz, también se le entregó una carta, un documento de acreditación. Se verifica una clara obstrucción, tanto que esta persona tenía orden de detención por la reactivación de su causa. Aquí se cambió la calificación jurídica a un fraude de tarjeta de crédito para facilitar el archivo y evitar la revisión de la Fiscalía a su respecto. Eduardo Lobos, una causa de impunidad obtenida por el negocio ilícito. Es un detenido por manejo en estado de ebriedad del 2019 que aún ni tiene resolución penal debido a que este señor pagó \$500.000 para archivar su causa a Ricardo Vega. No olvidemos su declaración, él le dijo que su señora trabajaba en la Fiscalía y que cobraba \$600.000 pero quedaron en \$500.000. Que le pidió una copia del parte, como en diez días nos juntamos de nuevo, le mostró en el teléfono información personal que fue incorporada acá, sus causas previas, sus delitos previos. Lo que vimos acá y fue incorporado debidamente era una fotografía del sistema informático de la Fiscalía. Esto también fue reconocido por Ricardo Vega como una movida, así lo dijo Eduardo Lobos.

Añadió que, en cuanto a la Defensa de Vega Guerrero, la discusión fáctica no es tal sino que la discusión es jurídica. Vega Guerrero no ha negado la existencia del cohecho, de los pagos, del término de causas, de la coordinación previa con su



esposa, sino que plantea un discusión jurídica, si opera o no la comunicabilidad de la conducta de su esposa la funcionaria pública a él, así es como lo señaló en la apertura. Una frase que ocuparon en la apertura, no hay Claudia del Pino sin Ricardo Vega, no hay Ricardo Vega sin Claudia del Pino, es precisamente el llamamiento a aplicar el derecho y jurisprudencia actual y vigente, que plantea la teoría de la comunicabilidad en los delitos especiales propios y en eso cita la doctrina de Politoff, Matus y Ramírez, que comparten el criterio de Etcheberry al señalar que, en los casos de los delitos especiales propios, la antijuridicidad de la conducta se basa en la infracción del deber respectivo, la que aparece así como una circunstancia objetiva cuyo conocimiento es suficiente para la imputación del delito a todos los copartícipes. Estamos todos contestes que en el caso de Ricardo Vega él sabía que su esposa era funcionaria pública, que trabajaba en la Fiscalía y que inclusive en la conversación en que indica cómo surgió esto, él le preguntó si esto que era irregular no iba a traer consecuencias o no se iba a descubrir y ella le plantea que no se va a descubrir. Estamos ante delitos especiales propios, prevaricación, enriquecimiento ilícito, etc, en los cuales la calidad del sujeto activo es inherente a la clase de mal que la ley pretende evitar. El particular que participa en el hecho del que porta ese deber, conociendo su calidad de tal, ha de responder por su responsabilidad en el hecho ajeno bajo el mismo título que su autor, porque ha colaborado a que el sujeto activo infrinja su especial deber. Francisco Grisolia señala que, en los delitos especiales propios, los comportamientos de los extraneus deben considerarse siempre como accesorios al del intraneus de modo que responden por el delito especial en igual forma que este último, sin perjuicio que el intraneus lo haga por el especial. La incomunicabilidad o la postura extrema están siendo dejadas de lado por la doctrina y la jurisprudencia. Tratándose de delitos especiales propios, a los que debemos atender es al dominio del hecho, que en este caso, como dijimos, es conjunto, ambos autores tiene dominio del hecho, tienen conocimiento de lo que está realizando el otro, por eso hablamos de coautoría. Pensemos en Vega, quien tiene total capacidad de negociar, de elegir el negocio y el precio, incluso de cumplir los requerimientos de documentación que pedían los sobornantes. Entonces el dominio del hecho que tiene Vega Guerrero es propio del autor, por ende se le aplica la comunicabilidad del hecho, no como cómplice, y aquí hay una cuestión que va más allá de la doctrina, estamos hablando de coautores que además tienen un vínculo matrimonial, o sea, el conocimiento, la interacción, la participación es total, no es



esporádica, ellos no se juntan específicamente para cometer un delito, ellos viven juntos, comparten el dinero producto del cohecho y planean los siguientes casos. Es decir, la comunicación, el compartimiento de la información es total.

Refirió que, sobre la violación de secretos, Claudia del Pino, como supimos, contaba con una clave única, intransferible, para actuar en el sistema reservado del Ministerio Público y aquí quedó claro que los sistemas de la Fiscalía no son fáciles, no son intuitivos y requieren de varias claves. Las investigaciones penales son secretas, de eso no cabe ninguna duda no por lo que plantea la Fiscalía, sino por lo que dice la ley, norma expresa, y esto es distinto a la reserva, ya que la reserva y su violación no es penalmente reprochable, pero el secreto sí lo es. La investigación penal es secreta para los terceros ajenos al procedimiento, en este caso, Ricardo Vega Guerrero. Opera el secreto del artículo 182 del Código Procesal Penal. Se imagina que las Defensas citarán el fallo del fiscal Arias, pero desde ya indicar que no es aplicable ese caso en particular a éste porque la situación es completamente diferente. Allá se usó información reservada, fichas casos, que era la información de una persona, no de una investigación penal, para denunciar un hecho, acá hubo un ingreso completo a la causa penal porque sólo en ellas constan las alcoholemias, el lugar de la detención y procesos previos, no consta en la ficha caso, sumado a que fue en pos de la acción de la justicia el caso de Arias, para delatar a un involucrado en un delito, acá para buscar clientes de cohecho. El objeto material de este delito es el secreto, el secreto es un hecho que no es de conocimiento general respecto del cual hay un interés de mantener en confidencialidad la información que está ahí. La conducta consiste en revelar el secreto, entregar la información, su comunicación por escrito o verbalmente a terceros no autorizados para conocerlo, sin que sea necesario que se divulgue, como por ejemplo al haber entregado Claudia del Pino la información a Ricardo Vega e inclusive, como después nos enteramos en este juicio, a su pareja actual, Jonathan, quien recibió copia del sumario, copia del peritaje, copia de la carpeta, de la evidencia y que incluso antes de venir a declarar, durante 15 días estuvo escuchando todo lo que ocurrió en este juicio. El acceder a los sistemas informáticos, a sus causas asignadas y entregar esta información a Vega Guerrero, tercero ajeno a la causa, dando detalles, nombres, lugar de detención, fecha y alcoholemia de los sobornantes, es violar un secreto, ya que se aprovecha de una información que tiene por su cargo y especialidad. El artículo 39 del Reglamento de Funcionarios del Ministerio Público es una prohibición que forma



parte de los deberes, no tan sólo por los deberes del artículo 182, sino que forma parte de los deberes del cargo, artículo 18, está prohibido divulgar la información de la que han tenido conocimiento con ocasión o a causa de sus funciones sin requerimiento legal o judicial, o de sus superiores, o utilizar dicha información para fines personales o ajenos a la institución y permitir el acceso de terceros a la base de datos que posea o maneje la institución. El artículo 21 de la Ley 19.628 sobre protección de datos personales dispone que los organismos públicos que someten a tratamientos datos relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos, y plantea unas excepciones, a menos que sea solicitado por los tribunales de justicia u otros organismos públicos dentro de su ámbito de la competencia. A su vez indica que estos organismos deben guardar respecto de ellos, la debida reserva o secreto.

Sostuvo que, sobre la falsificación de instrumentos públicos, el profesor Matus para esto indica que el expediente es un instrumento público. La información que está en una carpeta criminal es un instrumento público porque no sólo se debe mantener con reserva o secreto, sino que también es confeccionado por un competente funcionario público y además, regulado por la ley. Tipo de falsedad, falsedad material o real, consistente en forjar un documento inexistente o hacer adulteraciones físicas sobre uno existente. Calidad de instrumento público, la carta de archivo no cabe duda que es un documento que forma parte de la carpeta investigativa, lo confecciona la Fiscalía de Chile, lo confeccionan funcionarios públicos, es un documento con formalidades, con citas legales, que se aplica en base a un procedimiento legalmente establecido, lo aprueba el fiscal jefe, su comunicación da lugar y derecho a pedir la reapertura de la investigación, o sea, estamos hablando de un procedimiento que está regulado, es formal, que se funda en esta carta de archivo y genera consecuencias jurídicas. No es menor la consecuencia jurídica, termina de tramitarse o investigarse una causa, no es baladí, es un documento oficial, proveniente de una autoridad. Recordemos que Claudia del Pino no es la fiscal jefe, sino Carola D'Agostini, quien es la habilitaba para comunicar la decisión y, al ser causa TCMC, debe ser evacuado por ella como fiscal jefe, por nadie más. El artículo 193 no se refiere a toda clase de documentos suscritos o reconocidos por empleados públicos, sino que en particular a los documentos públicos o auténticos, esto es, a los que dan cuenta de modificación o extinción de alguna obligación y los derechos correlativos y que han sido autorizados con las



solemnidades legales por competente funcionario, citando al profesor Matus. Las cuatro cartas de archivo incorporadas son falsas, de las cuales dos de ellas corresponden a las causas de Ralph Veloz y Samuel Alarcón, específicamente impresas en las impresoras marca Brother que no corresponden a la Fiscalía de Linares, sino a una impresora particular. Germán Miranda fue categórico, que el procedimiento para la obtención de las pruebas caligráficas se ajustó a las normas de su ciencia u oficio, en este caso, obtener las muestras caligráficas de las tres personas. Los procedimientos que adoptó y los estudios y la metodología que realizó, esto tiene que ver con el estudio grafológico de las firmas y escrituras de cada uno. Su conclusión también es categórica, esto lo realizó Claudia del Pino y con el estándar de seguridad determinó que eran compatibles con una firma inventada de parte de Claudia del Pino. Sobre por qué hay que darle credibilidad a Germán Miranda, desde ya adelanta lo que puede decir la Defensa respecto de su perito privado, Germán Miranda tiene más de veinte años de experiencia, sólo se dedica a esto, no es un abogado que se dedique a tramitación de causas en su tiempo libre, no se dedica a pericia de armas, o pericias fotográficas, o a escribir artículos de otra materia, sólo se dedica al estudio grafológico y las pericias, todos meses realiza un sinnúmero de pericias, durante 20 años. El perito de la Defensa, esta era la tercera vez que declaraba en un juicio oral. La experiencia tiene que pesar, pero por otro lado también está el tema metodológico, la pericia de la Defensa que fue pagada a pedido de Claudia del Pino utilizó las muestras caligráficas de Germán Miranda y fueron, tal como dijo el perito, buenas muestras, obtenidas con el estándar necesario. Entonces, no puede sino restársele validez a una metapericia para la que es conveniente una parte de la pericial que analizó pero la que le perjudica no le sirve. Eso está mal realizado. Sin embargo, yerra en sus propias conclusiones al decir que lo fundamental para poder concluir que esto no lo hizo Claudia del Pino fue la muestra caligráfica que él tomó, que fue una muestra caligráfica especial, con rapidez, con lentitud, de pie, sentada, etc., que él tomó a la persona que lo contrató y concluye que ella no hizo la firma sino Ricardo Vega. Pero metodológicamente ya tenemos un problema, a Ricardo Vega no le tomó esa prueba caligráfica especial, importante y determinante. Entonces, sobre si esta pericia realizada por este perito privado cumple el estándar necesario para darle credibilidad, la verdad es que no, ya que esta pericia del señor Miranda debe analizarse en conjunto con todos los demás elementos. Ricardo Vega indicó que los firmaba Claudia del Pino, las causas estaban



asignadas a Claudia del Pino, la impresora estaba en la casa de Claudia del Pino, eran de Claudia del Pino y con un nivel de certeza menor el perito dice que los documentos fueron impresos con esa impresora.

Argumentó que, sobre el fraude de seguros, son un acto ilegal en el cual alguien miente y tergiversa intencionalmente los datos sobre los seguros para obtener un beneficio económico, falsear la información de un siniestro. Pide especial atención a la denuncia que genera la causa RUC 900718513-0, en que la denuncia que realiza Claudia del Pino, indica que un desconocido recibió una transferencia sin su consentimiento. Esta persona es Ricardo Vega. Que fue una transacción que desconoce y se contactó con esta persona y no le dio una respuesta. La verdad es que el abuso del sistema para defraudar es escandaloso porque Claudia del Pino lo hizo en los sistemas de la Fiscalía para obtener un beneficio económico indebido, para denunciar un siniestro inexistente, inclusive denunciando y falseando información respecto de que la persona que recibe la denuncia. Estas denuncias las tomaba ella misma, vulnerando nuevamente el deber de probidad. Si nos ocurre algo que es personal o afecta a nuestras familias, no vamos a tomar personalmente los casos porque esto afecta la probidad, como el deber genérico de probidad que tenemos todos los funcionarios públicos, y esto afecta a una compañía de seguros que no tuvo cómo detectar la falsedad de la denuncia, pagando los montos. En resumen, siniestros falaces. La compañía cayó en el error, pagó por un siniestro inexistente. Por más que la defensa quiera decir que no hay perjuicio, existió un engaño, un error, disposición patrimonial, existió perjuicio. Estos son delitos de acción penal pública, no se requiere denuncia de la compañía de seguros para que la Fiscalía pueda intervenir. El artículo 470 N° 10 indica que en este caso, se aplicarán las penas del artículo 467.

Afirmó que la prueba no sólo es coherente en sí misma, sino corroborable como lo dijo antes, pero además no desvirtuada por la contraria. Todos los involucrados en el cohecho dijeron que Ricardo los contactaba porque tenía una “movida” en la Fiscalía, lo que es conteste con todo el caudal probatorio que han incorporado. Sin embargo, la prueba de la Defensa no aporta. Claudia del Pino intenta confundir, su comportamiento es desleal, se basa en la mala fe. Vimos cómo se pretendió engañar al Tribunal presentando información falsa que fue desmentida por un perito informático. Las denuncias de VIF que se presentaron son de terceras personas que ocurrieron hace muchos años, no tienen ninguna vinculación con esta



causa. Lo que haya ocurrido con ex parejas de Claudia del Pino no tiene ninguna vinculación y por más que se nos quiera plantear que esto algo tiene que ver con la perspectiva de género, una funcionaria pública que deja de cumplir los deberes de su cargo para cometer delitos no tiene nada que ver con la perspectiva de género. Las denuncias de VIF contra Ricardo fueron posteriores al allanamiento, de qué violencia estamos hablando. Durante el 2017, 2018, 2019, 2020 no hubo ninguna denuncia previa, qué pasó con esa denuncia de amenaza, terminada porque no se logró acreditar el hecho. Si se habla de que Ricardo la quería perjudicar y que por eso hizo todo esto, Ricardo Vega estuvo preso más de un año y medio y con la oposición de la Fiscalía salió en libertad en la audiencia de preparación de juicio oral. En todas las ocasiones fueron a la Corte de Apelaciones a pedir que mantuviera la prisión preventiva de Ricardo Vega y además quien denunció esto no fue Ricardo Vega, fue su hermano Nelson Vega, no hay antecedentes que demuestren que ella haya sido amenazada para cometer estos hechos o que sea víctima de una vendetta. Ricardo, como lo dijo su hermana ayer, tristemente, es una persona que no tiene ninguna capacidad, no hay ninguna prueba que demuestre que tiene conocimientos informáticos de tal envergadura que sea capaz de manejar todos los sistemas SAF, SIGE y todos los sistemas informáticos de la Fiscalía. La prueba de la Defensa está llena de deficiencias y problemas de incorporación. Para ello cita el artículo 333 del Código Procesal Penal. Todos conocemos cómo se incorpora la prueba, múltiples evidencias incorporadas por la Defensa tienen defectos fundamentales para poder ser valoradas por el Tribunal, sólo cita los Whatsapp incorporados, no tienen denominación de origen, no tienen trazabilidad, nadie se sentó a decir estos Whatsapp son de tal fecha, de tal teléfono. Estos audios que escuchamos son de tal persona, de tal fecha, yo los obtuve. No hay trazabilidad, no hay posibilidad de acreditar el origen de estos medios de prueba. Los audios que decía tener Jonathan y los Whatsapp que no aparecieron en el juicio, no se pueden valorar. Cuando la Defensa intentó decir que este fiscal borró información, el fiscal Ávila hace una sola pregunta, señor, cuándo hizo esto estaba conectado a internet, no, no estaba conectado a internet. Por eso no pudo bajar la información. Se nos intentó engañar mostrando un ejercicio sin posibilidad real de cargar. Lo cierto es que hubo concierto previo, coordinación que tuvieron en su primer momento Claudia con Ricardo. Claudia, como quedó demostrado en juicio, pagó los abogados, tenían ambos los mismos abogados. En el sumario, cuando Ricardo Vega declara y no



declara autónomamente, sino porque Claudia del Pino presenta un recurso de reposición y le pide a Mauricio Jorquera recibir la declaración inculpatoria de Ricardo Vega, siempre teniendo la información de que ambos mantenían a los mismos abogados, mantenía una posición unitaria. Estas contradicciones lógicas y fácticas hacen imposible creer en lo que en ese minuto dijo hasta que Ricardo asume la posición de cooperar y dar la versión coherente con el resultado de la investigación. Mauricio Jorquera intentó que Ricardo Vega demostrara informáticamente cómo funcionaban los sistemas, lo cual fue imposible. Claudia del Pino también indicó que Ricardo Vega aprendió a utilizar el sistema informático en la misma Fiscalía, en su oficina, sentándose detrás de ella, durante múltiples jornadas. Esto fue total y tajantemente descartado por los funcionarios de la Fiscalía Carola D'Agostini, Nelly Zenteno, Froilán, Paulina, todos, inclusive Tatiana Díaz. Decían que lo veían en el estacionamiento a este señor, nunca lo vieron dentro, porque no se podía, porque no corresponde. Aprender un sistema complejo como el SAF es imposible y menos una persona sin instrucción, sin conocimiento jurídico, cosas que nunca fueron acreditadas. También nos indicó que al momento del allanamiento ella se desmayó y sólo atinó a pedir que Ricardo cooperara. Falso, ella no se desmayó, se negó a dar sus claves del teléfono, no hubo mayor intención de cooperar. Luis Gutiérrez fue a su domicilio a pedirle la clave del teléfono y ella lo negó, dijo que no lo recordaba. Al explicar el SAF dice que siempre la clave queda ingresada y que el SAF es fácil. Eso es falaz, la clave del SAF es compleja, de hecho es sólo una mayúscula, requiere de un ingreso a máquina virtual previo, sumado a un ingreso al VPN que, según Tatiana Díaz, después de un tiempo se desactiva. Eso entre otras tantas. Sumado a ello, la propia declaración de Ricardo Vega, quien indicó que Claudia decía que era imposible que la pillaran, lo que era efectivo. Sin la denuncia de Nelson Vega no hubiese habido ninguna investigación porque el sistema se basa en la buena fe, en el buen comportamiento, lo que ocurrió en este caso es que ocuparon las brechas de vulnerabilidad que todo sistema tiene.

Añadió que no se debe obviar que el abogado Hidalgo representó a Vega conjuntamente y se armó esta teoría exculpatoria en el sumario. Los únicos tres testigos que presentó la Defensa tienen claras líneas de interés. Jonathan es la pareja, 15 días escuchando a Claudia del Pino, declaró luego de haber visto la carpeta, de haber tenido las declaraciones. Cuando declaró en la investigación tenía la declaración que había enviado Claudia del Pino previamente. Paulina Cisternas es



amiga íntima de Claudia del Pino, tan amigas que Claudia del Pino no fue capaz de abstenerse de tramitar sus causas por violencia intrafamiliar, no una, dos, lo que claramente es irregular, lo que demuestra el comportamiento irregular tanto de la testigo como de la acusada. Su madre, quien, como cualquier madre, sólo repite lo que su hija le dijo que dijera.

Concluyó que, en síntesis, agradece al Tribunal la dedicación y paciencia en este proceso que ha sido largo, tedioso, y junto con ello pide que se dicte un veredicto condenatorio para Claudia del Pino y Ricardo Vega. Es urgente dar una señal contra la corrupción para que un caso como éste no vuelva a ocurrir. Aquellos que violan la ley y corrompen nuestras instituciones deben ser responsables de sus acciones. Nuestro sistema judicial debe dar una respuesta firme contra la corrupción y actuar como un guardián de la correcta aplicación de la ley.

Finalmente, el Ministerio Público, en su réplica, resumidamente planteó que les llama la atención que la Defensa de Claudia del Pino señalase que ésta fue una cacería de brujas, una vulneración a los principios de equidad de género y una investigación sesgada. Ello porque no hay elemento alguno que acredite eso. Al contrario, vemos que hay un acusado hombre y otro mujer en igualdad de condiciones. Cuando alguien dice tener la razón y que todos los demás están equivocados, al final la realidad es distinta, demuestra que todos tienen la razón. Eso vimos en el juicio, extenso.

Detalló que se les indicó primero que no había delito de obstrucción de la investigación porque el fiscal no acusó por el 269 ter. Revisando el auto de apertura, aparece claramente que la cita legal es por el 269 ter. La calificación jurídica siempre será del Tribunal, pero los hechos que invocó el Ministerio Público siempre han dicho relación con la figura agravada. Luego les incorporaron pruebas relacionadas con la tramitación judicial, los ebooks. Advirtió que hay referencia a causas de las que la Defensa no incorporó ebooks, que son las causas terminadas en 808-5 y 769-K. Sobre esa tramitación virtual, debe esclarecerse que la tramitación judicial es muy distinta a la tramitación interna de la Fiscalía, porque las acciones que Claudia ejecutaba en función de su cargo eran de tramitación interna, no se comunica necesariamente al Tribunal. Por lo pronto, un archivo provisional jamás será comunicado a los Tribunales. Esa es una gestión interna que frenaba los procesos investigativos, la tramitación. Pero si revisamos el ebook, en la causa no aparecerá el archivo provisional porque no es comunicado. Lo que se acreditó, como



señaló Mauricio Jorquera, era la sensación de dar una falsa percepción de eficacia, y eso se hacía archivando causas judicializadas. Para la Fiscalía, causa terminada, no seguible. Para las estadísticas, una causa no investigable posteriormente, por más que esa causa judicialmente seguía vigente y así se pudo reanudar la tramitación cuando se descubrió esta situación. Ahí la Fiscalía y sus funcionarios empezaron a tramitar y reactivar estas causas. También se dice que en la investigación más personas ocuparon la clave de Claudia del Pino, pero pregunta en base a qué, cuántas personas, quiénes fueron. No lo señaló la Defensa. Dice que Mauricio Jorquera indicó que había cinco personas que ocuparon esas claves posteriormente y eso no es correcto, no fue así. Él dijo que posteriormente se ocuparon dos veces esas claves para objetos investigativos propios del sumario administrativo. También se busca justificar la situación de Fabián Vera, culpando a los servicios administrativos y señalando que el escrito estaba bien ejecutado pero que le faltaban columnas y por eso no llegarían al Tribunal, reconociendo que los escritos fueron realizados siempre con la clave de responsabilidad exclusiva de Claudia del Pino. Pero a la interconexión le faltaban columnas y por eso el escrito no se remitió al Tribunal y por eso no se comete delito. Pudimos ver los escritos que se registraban en el SAF, incompletos, no interconectables porque al fallar puntos básicos de la singularización y de la referencia exigida por la interconexión, ese escrito no iba a pasar, como no pasó. Es por tanto una justificación inconexa, incoherente, no ratificada ni ratificable por otro medio de prueba y desvirtuada por los propios medios de prueba que entregó la Fiscalía y especialmente por lo señalado por Karem Torres, quien explicó, causa por causa, los defectos en la tramitación y las omisiones graves de esos escritos que impedían que pasaran el viso de la interconexión. Sobre la violación de secretos y el cohecho, le llama la atención la hipervaloración que la Defensa de del Pino da a la declaración de Ricardo Vega en el sumario. Eso porque en ese tiempo estaban juntos, tenían la misma Defensa, Huber Hidalgo, a quien del Pino pagó desde su cuenta. Tenían una teoría conjunta que era la de la incomunicabilidad, échate la culpa porque tú no eres funcionario público y con eso me limpias a mí y te limpias a ti. Esa era la teoría que se mantenía y se ejecutó de manera conjunta por parte de los coimputados. Tiene toda la lógica. En un principio funcionaron de acuerdo, eran un matrimonio, vivían juntos. Al momento del allanamiento estaban juntos. Sus celulares fueron incautados juntos. Claudia no se desmayó ni exigió explicaciones a Ricardo en el acto. No fue así. Lo señalaron los



dos funcionarios que participaron en el allanamiento al domicilio. Hasta que algo se rompió y tomaron caminos separados. Dicen que el fiscal sólo se basó en la información entregada por Vega y no corroboró con nadie más. Lo que ha acreditado el Ministerio Público está corroborado por varios medios de prueba, no sólo la declaración de Ricardo Vega, que incluso fue descreída en la etapa sumarial por ilógica, incoherente e imposible de ejecutar en la realidad, por una persona que señaló que podía ocupar los sistemas computacionales y fue incapaz, incluso con clave ingresada, de hacer una gestión mínima en SAF como era su teoría y su exposición. Sobre que no había problemas económicos de Claudia, acá se demostraron los préstamos familiares para pagar los servicios profesionales, incluso se mostró una cartola de banco en que en etapas primarias de abril, posterior a recibir el bono, Claudia tenía la cuenta con 0 pesos. Eso habla de problemas económicos y la Defensa no ha podido acreditar que no tenía estos problemas económicos. Luego la Defensa ha dicho que ningún testigo señaló que Claudia haya ido a trabajar ebria. No fue eso parte de la acusación pero sí hay un testigo, Camila. El Tribunal verá cómo la valora. Tanto es así que Camila fue la que ameritó una sanción administrativa a Claudia por hacerla comparecer como una falsa estudiante en práctica en una audiencia. Eso demuestra el comportamiento de la acusada ante la Fiscalía y Tribunales. Luego da una gran trascendencia a la declaración de Richard Araya, de un contacto falso para efectuar el cohecho. Pero Richard señaló que eran asiduos compradores de alcohol ambos, que incluso solicitaban fiado y dejaban cheques en custodia para costear gastos de alcohol, lo que ratifica la teoría del por qué se generó este cúmulo de actos ilegales, partiendo con el fraude de seguros, para seguir luego con el cohecho, problemas económicos. Se dijo que todos estos ingresos de tramitación jurídica virtual y de ejecución delictual son exclusivos de Ricardo, pero Ricardo no fue capaz de ingresar al SAF con la clave abierta, como alega Claudia quedaba su computador cuando trabajaba. Es ilógico que no supiera uno lo que hacía el otro porque estábamos en época de pandemia. A lo más se podía salir dos horas y Claudia tenía autorización especial para teletrabajo 100%. Por tanto, plantear que esto ocurría cuando ella salía, es ilógico. Además, el computador era único para trabajar en la Fiscalía porque tenía instalada la VPN. Entonces nos encontramos con que Ricardo, según la teoría de Claudia, tenía que ingresar al VPN, al escritorio remoto, al escritorio de la máquina virtual del SAF, al SAF y a SIGE. Eso es imposible. Eso es ilógico, plantear que una persona sin la capacitación, una



persona con conocimientos limitados, no un subnormal, que le pareció una falta de respeto de la Defensa, pudiera ejecutar estos actos. Pregunta en base a qué medio probatorio la Defensa logró probar que Ricardo creó las cartas de archivo si demostraron en SAF y en los sistemas que la persona que generó las cartas de archivo fue exclusivamente Claudia del Pino, no otro. En cuanto al fraude de seguros, es obvio que quien decidía el destino de las causas era Paulina Salazar, pero se dice que no había prohibición legal de tomarse las denuncias. Hay una prohibición ética de tomarse las denuncias y de ingresar al sistema los datos propios de la denuncia. Eso es importante porque la denuncia se la tomaba y la ingresaba al sistema Claudia, pero en el caso de Ricardo Vega, ella no señala en la denuncia que era su cónyuge, señala a un sujeto de nombre Ricardo Vega Guerrero y en la singularización de SAF, colocó NN, no que era su cónyuge. Luego les dicen que si el liquidador es negligente, no habría delito. Esto es una estafa, un fraude, y el artículo 470 se remite al 467 porque en este caso hay un engaño al simular un siniestro falso, al generar una solicitud a las compañías de seguro que caen en un error porque les presentan una denuncia penal sobre el delito y luego efectúan la disposición patrimonial con el consecuente perjuicio. Sobre la falsificación de instrumento público, la Defensa de del Pino comete un error en cuanto al instrumento público, incluso exige que para que sea instrumento público debe estar inscrito en el repertorio, lo que es propio de las escrituras públicas u otro tipo de documentos protocolizados. La carpeta investigativa es un instrumento público porque debe guardar formalidades, está ejecutada por competentes funcionarios. Tanto es así que tiene reglas especiales de registro, artículo 227 del Código Procesal Penal. Las decisiones que se tomen, como un archivo provisional, producen efectos jurídicos relevantes y mantenidos en el tiempo. Por tanto, el forjamiento de un documento público falso, falaz, como una carta de archivo, produce todos los efectos del instrumento público forjado. Tanto es así que generó en estas personas la confianza de que su causa estaba archivada para el Ministerio Público y la tranquilidad de andar en la calle pensando y sabiendo que su causa estaba terminada previo pago de estas sumas de dinero. Incluso se indica que esto se parece a los casos de los salvoconductos falsificados en pandemia, pero el motivo de las absoluciones por ello se debe a otro punto, a la firma electrónica avanzada y el no cumplimiento de sus protocolos. Acá es distinto, hay firmas efectuadas en un documento que se genera por el sistema público de la Fiscalía, el sistema reservado



de la Fiscalía, que tienen la apariencia y de hecho están en el SAF como generados y forman parte de la carpeta investigativa. Es un documento público, forjado, con declaraciones falaces en cierto punto, porque el archivo sí se ejecutó. El carácter de documento público de la carpeta ha sido establecido por el 227 del Código Procesal Penal. También la Defensa pretende que hubo prueba incorporada de mala manera. Primero dice que hubo una vulneración al artículo 334, lo que es erróneo porque él opera para los documentos que forman parte de la investigación de la misma causa, de lo contrario jamás se podría acreditar en juicio la falsificación de un parte policial. El artículo 334 se refiere a los documentos o actuaciones policiales de la misma causa, no de las investigaciones de otros ilícitos. También dice que se vulneró el artículo 315 por las alcoholemias, pero por ese mismo artículo las alcoholemias sí se pueden leer. Sobre el testigo Jonathan, él tiene una vinculación sentimental clara con Claudia. Jonathan no tiene nada que ver con la prueba incorporada al juicio. La pseudo pericia que hizo él dice relación con un teléfono que no fue incorporado por la Fiscalía o en sus peritajes porque a su juicio no tenía pruebas relevantes. Pero él dice que toda la información que estaba en él la recibía como backup de Claudia y nos entrega un teléfono celular que venía sin cadena de custodia, en una bolsa. Pregunta si da fe al Tribunal de que ese sea el teléfono de Jonathan, más allá de su propia exposición. Jonathan tenía una activa participación durante la investigación para Claudia. Retiraba las evidencias, pidió su teléfono celular y lo recuperó de la Fiscalía, analizaba las pruebas del Ministerio Público y nos dice insólitamente que la Fiscalía borró esos documentos. Quedó en evidencia que nos intentó engañar porque revisaron esas fotos y venían esas descargas imposibilitadas de ejecutarlas por carencia de internet. Sobre la pericia grafológica, el perito de la Defensa señaló que una prueba esencial para él poder establecer la veracidad o no de la prueba caligráfica era una prueba de velocidad que realizaba in situ a la persona, para poder establecer si era una prueba lícita. Sólo la ejecutó con su cliente, no respecto de Ricardo Vega, menos de Carola D'Agostini. No obstante ello, dice que la acreditación de la veracidad de la firma era respecto de Ricardo Vega, al que no le tomó las pruebas de velocidad y de ritmo. Por tanto, esa pericia, metodológicamente, no tiene asidero, más si el perito entregó citas improbables del profesor Duce sobre la validez de los testimonios caligráficos. En cuanto a la prueba de la Defensa, los Whatsapp sin fecha, eso generó una investigación penal. No tiene mayor sentido repetir lo que el fiscal Caroca con claridad señaló en cuanto



a la intención de la Defensa de presentar prueba falsa e intentar engañar. La diferencia con la prueba de la Fiscalía es que la Fiscalía presentó fotos de Whatsapp con acreditación de origen, que eran los funcionarios que practicaron las fotografías de esas conversaciones. Los audios de la Defensa, realmente eran de Ricardo con un mecánico. Importante es que se dice o da a entender que la Fiscalía tenía un acuerdo con Ricardo por renunciar a los plazos de la apelación cuando Ricardo fue liberado. Eso es falso, no fue así. Pide a la Defensa que en su réplica acredite que la Fiscalía, en el acto de la liberación de Ricardo, renunció a los plazos. No fue así.

Agregó que, sobre lo que expuso la Defensa de Ricardo Vega, se les dice que la acusación no señala la fuente legal del secreto, pero está y es conocida por todos, el artículo 182 del Código Procesal Penal. Sobre la ley de quórum calificado, hablamos del Código Procesal Penal. No hablamos de información obtenida de la hoja SAU o SIGE, que no están sometidas a secreto. Acá la información viene directamente de la carpeta investigativa porque en la ficha SAO y en la hoja SIGE jamás aparecerá una alcoholemia, que forma parte de la carpeta investigativa. Tampoco aparece en la ficha caso o la hoja SAO el funcionario aprehensor, el lugar de detención, el día y hora de la detención. Eso solamente se puede extraer del parte policial. Sobre que en este caso se debe absolver porque, a pesar de que Ricardo Vega cometió todos los elementos del tipo penal conjuntamente con Claudia del Pino, hay incomunicabilidad, los fallos a los que la Defensa alude son por delitos especiales impropios, como malversación de caudales públicos o fraude al Fisco. La teoría de la comunicabilidad limitada opera respecto de los delitos especiales propios, como es el caso del cohecho. Es una teoría que ha sido avanzada por diversos profesores, como Matus, Etcheberry y Grisolia, porque no se puede llegar al ilógico de que la persona que ejecuta y forma parte incluso en ciertos casos de organizaciones criminales al amparo de un funcionario público, sean excluidos de responsabilidad a pesar de haber ejecutado todos o gran parte de los delitos por los que se les involucra. Las sentencias absolutorias que el colega aportó fueron por otro punto, en que hubo un error del Tribunal al no llamar a recalificar, y por eso se anuló. Acá, claramente la teoría es que, en materia de delitos especiales impropios, opera la incomunicabilidad, pero en delitos especiales propios, la comunicabilidad limitada. Acá si hay diferencia. Unos dicen que se traspasa el grado de participación de autor al extraneus y otros que puede ser partícipe. En este punto, la participación en Chile está bastante delimitada por el artículo 15, que establece grados de



participación incluso a los cómplices penados como autor. Por eso tiene una diferencia jurídica con el Consejo de Defensa, porque consideran que Vega Guerrero es autor del artículo 15 N° 1 porque ejecutó por sí todos los elementos del tipo penal conjuntamente con Claudia del Pino, hay un dominio del hecho conjunto y unificado, de hecho es un matrimonio que actuó conjuntamente, viviendo en la misma casa y ocupando el mismo computador en época de pandemia. En cambio, el Consejo de Defensa acá aplica la teoría de Grisolia y dice que la participación de Ricardo Vega es del 15 N° 3, un cómplice penado como autor. Lo importante es que acá no se puede llegar a la petición absurda de absolución de ambos, uno porque no es funcionario público y otro porque el mundo está contra ella. Es importante la nobleza de los recursos que se ocupen y en este caso ello ha venido de la Fiscalía y no de una de las defensas.

Por su parte, el Querellante, en su alegato de apertura, en suma sostuvo que es acusador particular en esta causa. Los hechos en que se funda su acusación son exactamente los mismos que los del Ministerio Público y la prueba ofrecida para acreditarlos más allá de toda duda razonable también es la misma, con las siguientes salvedades. No acusa por el delito de fraudes de seguros porque entiende no son víctimas. En relación con el delito de obstrucción a la investigación, entiende que cuatro de estos delitos configuran ese ilícito por la conducta que se realizó en aquellos, que se conlleva mejor con los verbos rectores del artículo 269 ter, como son el ocultar, alterar o destruir evidencias o pruebas que acrediten la inocencia o responsabilidad o comisión del delito y, en relación con otro grupo, que son ocho causas en que la acusada Del Pino ejecutó conductas, considera que se compatibilizan mejor con el delito de prevaricación administrativa, donde existe una resolución manifiestamente injusta del funcionario público. En relación con los delitos de violación de secreto y cohecho, efectuaron similar imputación a la del Ministerio Público. En relación con la violación de secreto, piden más pena porque por la reiteración alcanzan una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público. En ambos casos atribuyen responsabilidad a los acusados, a ella por el artículo 15 N° 1 y a él por el artículo 15 N° 3, porque le comunica la imputación del tipo penal.

Planteó que la comunicabilidad en nuestra jurisdicción ha sido reconocida y citó como ejemplo el RIT 10035-2015 del Juzgado de Garantía de Talca, confirmada por la Excm. Corte suprema, en que se condenó a dos extraneus como cómplices



del delito de malversación de caudales públicos, al igual que al acusado principal en esa causa.

Acotó que, sobre el delito de falsificación, sólo hace la salvedad de que puede ser de falsificación o uso malicioso dependiendo de lo que se acreditará en relación con el artículo 193 N° 1 y 4.

Señaló que hace hincapié en que acá tenemos a una acusada, Claudia del Pino, que es funcionaria de la Fiscalía que lleva al menos 14 años en el ejercicio de sus funciones, que conoce a cabalidad el sistema de enjuiciamiento, no sólo los procedimientos internos del Ministerio Público, sino que en general el sistema de enjuiciamiento penal y aprovechándose de esta condición y sus conocimientos y vulnerando la obligación de respetar el principio de probidad administrativa es que pudo cometer estos ilícitos sola y en concierto con Ricardo Vega. Coincide también con el Ministerio Público en que Claudia Pino finalmente podrá ser condenada y cumplir sus penas pero acá existe una mancha sobre la Fiscalía local de Linares. Algunos testigos dicen que queda en la retina que en esta Fiscalía se realizaban movidas. Es un grave perjuicio a la Fiscalía de Linares, lo que es grave sobre todo en estos tiempos en que la generalidad de las instituciones están en desprestigio. No podemos permitir que esto ocurra.

Al clausurar, el Querellante en síntesis, afirmó que es acusador particular, pero los hechos y la prueba en que se funda es la misma del Ministerio Público. Solamente efectuó una calificación jurídica distinta de los hechos que el Ministerio Público estima como obstrucción a la investigación, porque sólo respecto de cuatro estima hay obstrucción a la investigación y en los restantes, estima hay prevaricación administrativa. En cuanto al delito de falsificación de instrumento público, hace extensiva la calificación a uso malicioso de instrumento público, que para efectos penológicos da lo mismo. Además precisó la calidad de coautor de Ricardo Vega, que considera se encasilla dentro del artículo 15 N° 3 del Código Penal.

Desde su perspectiva, gravita en este juicio con intensidad el cohecho agravado cometido por ambos acusados. Ha quedado demostrado en el juicio, por la abundante prueba rendida, que la acusada del Pino, en su condición del fiscal del Ministerio Público, con 15 años de experiencia, conocedora del derecho y de los procedimientos informáticos e instructivos del Ministerio Público, era quien



ingresaba a estos sistemas computacionales complejos como señalaron Carola D'Agostini, Paulina Salazar, Froilán Cofré, Karem Torres, Pablo Becerra. Lo dicen por lo mismo que expresó el fiscal, son sistemas muy contra intuitivos, que requieren diversas claves de acceso, a lo que hay que sumar que el 2020 se realizaban por la acusada trabajos vía remota, por lo que además debía incorporar las claves de VPN en su pantalla de acceso del computador remoto. En consecuencia, la única persona que podía obtener estos datos que se presentaban a los imputados por conducción en estado de ebriedad era Claudia del Pino y no Ricardo Vega, quien tenía conocimientos limitados en computación y no sólo porque lo diga él o su hermana, sino que cuando fue a declarar al sumario administrativo en noviembre del 2020, el instructor le ofreció la posibilidad de ingresar al sistema, incluso Jorquera dijo que le dejó instaladas sus claves, y no tenía idea, no supo hacer nada, sólo podía verbalizar algunos conceptos claramente en un discurso aprendido que buscaba exculpar a Claudia del Pino, inculpándose él.

Refirió que Karem Torres señaló que esto es un delito muy rebuscado, porque los mecanismos de control no tienen acceso y además hay un abogado experto. Claudia del Pino, como tramitadora de causas de menor complejidad, tenía absoluta independencia en su gestión. En la gestión y decisión que adoptaba en cada causa a su cargo, tenía absoluta independencia. Sabía que los controles eran por tiempos de gestión, pero en ningún caso de la decisión misma adoptada, porque se entiende que los fiscales del Ministerio Público desarrollan su labor de manera correcta, apegados a los principios de probidad y buena fe. Además, en relación con los imputados que declararon como testigos y que pagaron los sobornos, todos ellos están contestes en que Ricardo Vega les ofrecía terminar sus causas de manejo en estado de ebriedad, dándoles cuenta detallada de los antecedentes de su causa y de otras causas que tuvieron. Esos antecedentes obviamente los había obtenido Claudia del Pino. En el caso de Rodrigo Guerra, es el vecino, un corredor de propiedades. Con él suscribió el contrato de arrendamiento Claudia del Pino. El pago siempre fue en efectivo y se hizo afuera de la casa de los acusados. Obtuvo el archivo provisional y conservó el documento, que entregó luego a la Policía de Investigaciones. Sobre Eduardo Lobos, este negocio ya tenía cierta fama porque él anhelaba que fuera contactado para poder terminar su causa y acceder a esta movida. Esta causa fue descubierta gracias a la declaración del denunciante Nelson Vega y porque Ricardo Vega mantenía información de él en su celular. En el caso de



Enrique Torres, a él le cobraron \$500.00 y señala que no pagó esa suma, pero igual le archivaron su causa y fue reactivada. Elías Apablaza dijo que fue contactado por Vega Guerrero, todos dijeron lo mismo, telefónicamente, con información secreta que sólo podía conocer Claudia del Pino. De hecho le dijo que trabajaba con su esposa en estas causas ofreciendo esta movida. Dijo que no pagó la suma, pero su causa igual fue archivada. Dijo que llamó a una amiga y Ricardo Vega le dijo que iba a ver a otro imputado para ofrecerle lo mismo. Diego Vásquez es fundamental porque, según declaró Vega, queda en evidencia que del Pino tenía claro que no podía ser la cara visible frente a los imputados por conducción en estado de ebriedad en este delito de cohecho. En un papelito escrito a mano, su marido se lo llevaba, aparte de las llamadas telefónicas. Vásquez negoció el pago de \$400.000 en dos cuotas y cuando vio que no le resultaba la movida porque fue el primer testigo que declaró en la causa, fue a exigir su dinero y como vio que no resultaba, le tomó fotografías a Ricardo Vega y cuando vio que no le pagaban el dinero, fue donde la jefa, fue a pararse a la casa de Claudia del Pino y ella vio su peor temor, cómo esto podía ser descubierto. Se apersonó en la casa, preguntó por Cristian Fiscal y obtuvo inmediatamente el pago de los \$400.000. En el caso de Ralph Veloz, incluso una vez que le entregaron el archivo provisional, lo guardó en su guantera pensando que quedaría libre de toda investigación. Este señor pudo tener solucionada su causa por manejo mucho antes, pero se vio envuelto en esta situación. Él también pagó \$300.000. Finalmente está el caso de Samuel Alarcón, al que se refirió el comisario Gutiérrez, el acusado Vega y su hermana Valesca Alarcón, quien también declara que se enteró de que su hermano había accedido al pago de esta suma de dinero.

Señaló que, sobre la comunicabilidad, estamos frente a un delito especial propio, no tiene el correlato de un delito común, y la jurisprudencia está conteste en que en los delitos especiales propios sí se comunica la calidad de funcionario público al extraneus. Citó jurisprudencia. Ricardo Vega conocía la calidad de funcionaria pública, conocía y quería la ejecución del delito, tenía dominio del hecho porque podía contactar a los imputados que estimara conveniente de acuerdo a los datos que le proporcionaba la coacusada. Además, a uno de estos testigos dijo piénselo, voy y vuelvo, es decir, podía realizar una serie de acciones en pos de la comisión de este ilícito de manera conjunta.

Indicó que, en cuanto a la obstrucción a la investigación, cree esa figura se da respecto de cuatro causas que indica, toda vez que ahí se ocultaron antecedentes y



el Tribunal, con los antecedentes presentados, adoptó decisiones. En el resto de las causas, hasta la once, en que la acusada dispuso archivos provisionales, se configura una prevaricación administrativa, donde hay en el ámbito administrativo una resolución manifiestamente injusta porque se dispusieron los archivos de causas que tenían mérito para seguir su tramitación de otra manera. Sobre la violación de secretos, es una figura independiente del delito de cohecho. No se cobran las sumas de dinero para revelar secretos, sino que se revelan secretos para mayor convencimiento y dar credibilidad a la oferta. Es previo a la ejecución del cohecho, que es un delito de mera actividad. Esto es previo y no se pide para revelar secretos la suma de dinero, se pide por los archivos. Primero del Pino comunica los secretos a Vega y éste a los imputados. También solicita la condena de ambos vía comunicabilidad. Sobre el delito de falsificación o uso malicioso de instrumento público, Carola D'Agostini dijo que los archivos provisionales falsificados son instrumentos públicos porque en ellos va la decisión del Ministerio Público. Se genera conforme a los protocolos del Ministerio Público y legales. No se firman por lo masivos que son, pero no existe duda de que son instrumentos públicos. Fueron forjados íntegramente y se entregaron a tres testigos que fueron imputados por conducción en estado de ebriedad que pagaron dinero, como son Rodrigo Guerra, Samuel Alarcón, documento que venía con firma y decía Fiscalía sin el nombre de Carola D'Agostini, quien explicó que los archivos provisionales siempre llevan su nombre pero no su firma por la masividad. En el caso de Ralph Veloz, también iba suscrito y decía Fiscalía, sin el nombre de una persona. También respecto de Fabián Ortega, que no es una causa por la que se acuse por cohecho, está en el acápite de las causas por obstrucción a la investigación del Ministerio Público y, por su parte, de prevaricación administrativa. Dijo que no reconocía haber recibido ofertas, sino que el documento se lo entregaron en la Fiscalía. Entiende que también puede ser extensiva la figura del uso malicioso. Todos ellos tenían el instrumento y lo entregaron, pero en el caso de Ralph queda patente, lo tenía en su vehículo con el íntimo convencimiento de que ese documento le iba a servir para quedar a salvo de la autoridad.

Resaltó que no es querellante en el fraude de seguros.

Concluyó señalando que, en relación al comportamiento de la Defensa, comparte lo señalado por el Ministerio Público, y reiteró su solicitud de condena.



Finalmente, el Querellante, en su réplica, resumidamente planteó que la Defensa de Claudia del Pino nos ofrece una teoría de la persecución en su contra y de discriminación de género que está en su mente solamente y obedece a un ejercicio constante de atacar la investigación, al fiscal Caroca y al comisario investigador Gutiérrez. No se ha vulnerado ningún derecho, los ha podido ejercer todos. El comisario Gutiérrez es un hombre de experiencia que desarrolló una labor excepcional. Desarrolló la investigación en Linares y otras ciudades. De una conducta funcionaria y vida personal intachable, como declararon él y otros funcionarios que lo conocen. Se cae esta teoría de que el señor Gutiérrez prácticamente vivía en los bares, como declaró la inicialmente la acusada.

Manifestó que, como bien dice el Ministerio Público, la Defensa valora mucho la declaración de Ricardo Vega en el sumario. El fiscal sumariante dijo que en la etapa de investigación fue ofrecido expresamente por del Pino para que declarara como testigo. Se le ofreció la oportunidad de que fuera dos veces y no fue. Una vez que se formularon cargos contra del Pino, ella, en sus descargos, con orgullo señaló que ingresó a trabajar al Ministerio Público, que tiene 15 años de ejercicio y tiene estudios de postgrado, y solicitó que declarara Ricardo Vega, insistentemente. El fiscal sumariante lo rechazó y ella, por escrito, repuso y explicó por qué no fue las dos veces, en una porque sus abogados le dijeron que no fuera y en la otra porque tuvo que contener a un amigo con crisis de pánico. Posteriormente declaró y no tenía idea de cómo usar los sistemas informáticos, lo que guarda coherencia con lo señalado por funcionarios de la Fiscalía local de Linares y de la Fiscalía Regional y algunos de ellos reconocían que no sabían utilizarlos todos, que son sistemas complejos. Además el fiscal sumariante señaló que, tras prestar declaración Ricardo Vega, lo llamó y le dijo que quería contar la verdad, lo que hizo en marzo de este año ante el Ministerio Público. Sobre esta declaración de marzo, ya había declarado Diego Vásquez, uno de los conductores que pagó el dinero y reconoció a Ricardo Vega. Además, a propósito de la declaración de Ricardo Vega surgieron los nombres de Ralph Veloz y Eduardo Lobos, que no habían aparecido hasta ese momento, se corroboró lo dicho y tanto ellos como los otros imputados reconocieron a Ricardo Vega y que llegaba a hacerles estas ofertas. En el caso de Rodrigo Guerra y Diego Vásquez, ellos sabían perfectamente que Claudia del Pino era la esposa de él y trabajaba en la Fiscalía. Los otros sabían que estaba casado con



alguien o tenía un amigo ahí o tenía un amigo o funcionario en la Fiscalía que lo ayudaba. Se van corroborando esas pruebas.

Destacó que, en este Tribunal, la Defensa subrepticamente quiso incorporar estas conversaciones de Whatsapp absolutamente falsas. No pueden ser valoradas porque no tienen credibilidad en cuanto a su origen, su procedencia, y el contenido interno es de una lógica contraria a lo que existe en el juicio, es una copia feliz de lo que ella declaró en su alegato de apertura. El mismo coacusado declaró en una tercera oportunidad que esto era absolutamente falso, que jamás tuvo esa conversación. Cree que todos nos dimos cuenta del contenido falaz de ese documento. Además, previamente el acusado ya había declarado que fueron sus abogados Huber Hidalgo y Víctor quienes le dijeron que se acusara, que se inculpara en la declaración que presentó en el Ministerio Público con del Pino. Ellos estuvieron dispuestos para prestar declaración como testigos de la Defensa. Más de un día estuvieron disponibles para declarar y aclarar la mentira de Ricardo Vega y no fue así, no se atrevieron a presentarlos. Este supuesto Whatsapp, si fuese verídico, pudo exculpar. En cualquier momento, incluso en su fantasiosa línea de tiempo, lo pudo tener este año, pero de todas maneras antes de la audiencia de preparación de juicio oral, y bien pudo pedir el sobreseimiento definitivo y no lo hizo. En relación con la falsificación y uso malicioso de instrumento público, ayer dijo que los documentos debían tener una serie de requisitos, códigos, verificaciones. El instrumento público es el que realiza el competente funcionario en el ámbito de sus funciones. Piénsese en un cúmplase del Tribunal, una fecha, un rol y firmas, pero nadie puede desconocer la calidad de instrumento público de aquél. La falsificación se cometió por tres cohechos. Se separa del cohecho de la acusada. Es un delito independiente. Hay otras cuatro figuras donde no hay falsificación y no por eso no hay cohecho. A la inversa, el cohecho no fue cometido para cometer la falsificación documental. El uso queda de manifiesto. Todos los imputados en cuyo poder estaban tenían la convicción de que sí les iba a ayudar, decisiones de archivo que nada tenían que hacer en manos del acusado. Sobre el perito que ofreció el Ministerio Público, dijo que tenía 20 años de experiencia, que había realizado en su vida miles de peritaje. Sobre la argumentación del colega Beltrán, sorprende que diga que una sentencia del año 2018 es de muy antigua data. Es reciente. En esos tres fallos que ofreció esa Defensa, en ninguno se desconoce la incomunicabilidad, al contrario. La incomunicabilidad habría acarreado la absolución. En la causa de



esta región, el voto disidente dice que los imputados en esa causa por malversación de caudales públicos, un delito especial impropio, no deben ser condenados como cómplices sino que como cómplices de hurto o una figura de ese tipo, no que no deben ser condenados. Lo mismo con los otros dos fallos del 2022, que citó, ambos reafirman la comunicabilidad. Dicen que en materia de delitos especiales impropios, los copartícipes responden por la figura común, no dicen que no se comunica el tipo penal. Acá no está ese problema, no es necesario llamar a recalificar porque estamos ante un delito especial propio. Se podrá diferir en la calidad en que participa. Sostiene que es un autor del artículo 15 N° 3, el Ministerio Público del artículo 15 N° 1. No existiría inconveniente en que el Tribunal considere que puede ser en otra calidad. El concierto está. Son un matrimonio que actúa en conjunto con una labor específica en la comisión del delito, conocían y querían el resultado y ambos fueron determinantes en la perpetración de los mismos. La argumentación de la Defensa de Ricardo Vega es más coherente cuando habla de la colaboración del imputado. Eso lo entiende muy atendible y se deberá apreciar en su momento. Sobre la violación de secreto y lo señalado por María Inés Horwitz y el grave daño a la causa pública, hay diversas causas de manejo en estado de ebriedad que quedaron sin tramitación y terminadas, para siempre si no fuera por esta investigación. Además, el Ministerio Público tuvo que utilizar recursos humanos y físicos por meses para pesquisar todas las causas. El fiscal sumariante, en el cargo tres que formula, da cuenta de ochenta y cinco causas por conducción en estado de ebriedad en que la acusada nada había hecho, año 2019 y 2020, causas con alcoholemia. El sumariante lo vio como un retraso. A la luz de la investigación que hemos visto, esas ochenta y cinco causas eran probablemente un motor de búsqueda, probables clientes para ofrecerles la movida que hacían. Además es grave daño a la causa pública el enlodamiento a la Fiscalía local de Linares. Pregunta si se va a decir que Claudia del Pino y Ricardo Vega realizaron movidas en la Fiscalía de Linares. La opinión pública dice que es en la Fiscalía donde se realizan estas movidas.

TERCERO: Que la Defensa de la acusada Del Pino Acuña, en su alegato de apertura, en suma sostuvo que solicita la absolución por todos los hechos por los cuales está acusada su representada. Espera, y para ello ofrece prueba, demostrar que lo que ocurrió en estos años de investigación es que hubo una investigación absolutamente sesgada, basada en que los hechos involucran a una ex funcionaria del Ministerio Público que generan una conmoción pública, lo que estima generó



una cacería de brujas en contra de Claudia del Pino, que resultó en esta acusación, buscando ciegamente condenar a su representada para limpiar el nombre del Ministerio Público, que se vio manchado por las conductas que tuvo el acusado Ricardo Vega Guerrero. Con su prueba y sobre todo con la declaración de su representada, pretende demostrar el contexto en que sucedieron estos hechos. La acusación nos remite a la época de la pandemia, de los encierros y cuarentena. En ese tiempo, Claudia tuvo que trabajar desde su casa, desde su computador, con todos los sistemas institucionales que la misma Fiscalía incorporó a su computador personal para que pudiera realizar sus gestiones porque ella tenía ciertas patologías base que recomendaban que su trabajo lo hiciera desde su domicilio. Según su teoría del caso, esa fue la circunstancia que Ricardo Vega aprovechó para utilizar los instrumentos que tenía Claudia para trabajar y, teniendo plena disposición de esos elementos, poder, desde el domicilio en común, realizar todos los delitos por los que se acusa. Es importante saber que no sólo tuvo acceso por estar en el mismo domicilio, sino que además pretende demostrar la sumisión que existía de Claudia en relación con los maltratos reiterados que recibió de Ricardo Vega. Generan incluso denuncias de violencia intrafamiliar, de tal manera que Claudia ni siquiera pudo percatarse del riesgo que corría respecto de su trabajo y no supo de esto hasta que la Policía de Investigaciones llegó a allanar su domicilio. Sobre los delitos por los que se acusa a su representada, pide la absolución porque no se podrá acreditar el contexto o los elementos del tipo penal.

Manifestó que, por ejemplo, en algunos casos de obstrucción a la investigación, debe acreditarse el dolo, el querer obstruir la investigación generando elementos que impidieran que se pudiera determinar quién es el verdadero culpable o el hecho delictivo. Sin embargo, como se verificará, no hubo dolo en las obstrucciones a la investigación que se presentaron por el Fiscal. Además, respecto de varias de las causas de obstrucción a la investigación ni siquiera hubo investigación, no se pasó a control de detención e internamente se presenta un requerimiento simplificado. Para que haya obstrucción a la investigación debe haber una investigación, diligencias por realizar para que se pueda realizar alguna acción que impida el normal desarrollo de diligencias propias de esa investigación. En varias de esas causas ni siquiera hubo investigación como para plantear la existencia de ese delito. Y en general, en ninguna de esas causas hubo algún elemento que permitiera o impidiera el normal desarrollo de las causas en los tribunales. Este



delito debe recaer en lo que podemos ver en los tribunales y eso no ocurrió. En varias de esas causas en que se le cuestionó su postura jurídica en cuanto a la manera de tramitar y terminar las causas, con el tiempo se corroboró que su criterio jurídico era correcto, volviendo a terminar las causas de la manera que se cuestionó a su representada. En cuanto a la violación de secretos, el punto está en la entrega de las claves supuestamente, que su representada habría hecho al coacusado Vega para acceder a todos los antecedentes de las causas en que finalmente Vega contacta a imputados, pide dinero, entrega las cartas de término de causas. Sin embargo, plantea que Claudia no participó en eso. Su principal prueba para demostrar que no podemos cómo saber quién asesoró a Ricardo de tal manera es que un año después de la desvinculación de Claudia del Pino, hubo movimientos en las causas según las pericias que realizó el Ministerio Público con las claves de Claudia del Pino y al día de hoy no sabemos quién sería esa tercera persona que habría asesorado a Ricardo Vega para realizar las gestiones que realizó cobrando dinero a terceros, en lo que se denominó en la investigación “la movida” para terminar las causas. Sobre la falsificación de instrumento público, una comunicación en un formulario tipo de la Fiscalía donde se señala una forma de término no corresponde a las exigencias de la ley sobre lo que es un instrumento público. Al no cumplir con ese elemento, ya no permite averiguar la existencia de los otros elementos que la falsificación de instrumento público. Ese es el fundamento de la absolución sobre ese delito. Además, la violación de secretos y la falsificación de estos supuestos instrumentos públicos no serían más que el medio para cometer el delito principal, que es el cohecho. Sobre el fraude de seguros, ni siquiera concurre la víctima, que sería el banco o la aseguradora. Ello porque hay un procedimiento interno en el banco, que va a demostrar, en que no se pudo establecer alguna ilegalidad o irregularidad por parte de Claudia del Pino. Sí se estableció que hubo movimientos en su cuenta que vinculaban a Ricardo Vega con montos que le fueron devueltos a Claudia del Pino porque se estableció que esos movimientos no estaban autorizados, incluso congelando la cuenta de Ricardo Vega a raíz de esa investigación interna del banco. Sobre la prevaricación administrativa que postula el Querellante, entiende que es necesario, incluso en el tipo de negligencia, que haya una gestión manifiestamente injusta y acreditará en el juicio que sí hubo algunos errores de tipeo y de ingresos en el sistema del Ministerio Público, lo que generó que se sancionara a Claudia del Pino por ello, como le pasa a cualquiera que tramita con estos sistemas y se digita



equivocadamente alguna vez. Pero un error de tipeo o el envío de un formulario tipo al Tribunal faltando todos los datos no permite calificar ello con la magnitud que exige este tipo penal. Debe ser una negligencia gravísima y no un simple error de tipeo en envíos e ingreso de información a los sistemas.

Afirmó que, sobre por qué su representada está acusada hoy, es derechamente porque el coacusado, en la investigación, modifica su declaración y empieza acomodaticiamente a vincular a su representada en todas las gestiones, lo que no ocurrió en un primer momento en que esto empezó a averiguarse, pese a que los problemas que tenían como pareja ya existían. Sin embargo el acusado, buscando beneficios o mejorar su situación, finalmente involucra a su representada en todos los hechos de este juicio. El único medio de prueba que permite vincular a su representada es la declaración del coacusado.

Resumió que eso pretende la Defensa acreditar respecto de su representada. Entiende que esto va más allá de una duda razonable, van a poder demostrar que sólo con la declaración del acusado, sin que otra prueba lo corrobore, se vincula a su representada en esta situación en que el acusado, abusando de esta confianza, de compartir el techo con su esposa, accedió a información confidencial de su trabajo, sin que ella haya participado en estos hechos.

Al clausurar, la misma Defensa en síntesis, afirmó que estimaba que el único veredicto posible en esta causa, respecto de su representada es, como ha indicado desde el principio, la absolución, agregando que toda esta investigación no fue más que una cacería de brujas, porque se pudo constatar, una y otra vez, toda la discriminación que ha sufrido Claudia por estar casada con un hombre menor. Fue cuestionada incontables veces a ese respecto y a la violencia que ella y los testigos relataron que sufrió durante el matrimonio con el coimputado. Ha sido juzgada por el hecho de estar con un hombre que tiene menos estudios que ella y por eso entiende que es una discriminación de género, asegurando que eso no se habría dado en el caso de que fuera al revés y fuera un hombre el que se presentara acá casado con una persona de pocos estudios y de menor edad que el imputado. Por ello ha quedado en evidencia absoluta que sí hay un contexto de género en la manera en que fue tramitada esta causa y en la manera en que fue investigada.

Sostuvo que, a diferencia de lo que ha dicho el fiscal, éste jamás formalizó y acusó a su defendida por el artículo 269 ter del Código Penal, como lo hace parecer en todas sus alegaciones, porque lo cierto es que su formalización fue hecha



solamente por el 269 bis, que aplica a un particular que afecta la tramitación de causas, como en el caso de Ricardo Vega, pero no así respecto de la función que ejercía Claudia, que a su vez sí correspondería el 269 ter, que fue finalmente el artículo por el que acusó el Consejo de Defensa del Estado.

Indicó que la obstrucción a la investigación debe ser grave y provenir de una conducta dolosa, no puede simplemente corresponder a un error de pinchar en el sistema informático de la Fiscalía, porque requiere necesariamente algún efecto en la causa que se está obstruyendo, así que en detalle se puede verificar lo siguiente.

En la causa RUC 190006766-8, relativa al imputado Víctor Segundo Muñoz Faundes, efectivamente, se remitió al Tribunal un formulario incompleto de decisión de no iniciar investigación, siendo evidente el error al remitir dicho escrito, pues no contenían la información mínima que permitía al Tribunal proveerlo, lo que hizo que finalmente, con fecha 21/11/2019, éste ordenara que viniera en forma la solicitud. Afirma que errar no es inusual en el trabajo de la Fiscalía, tal como lo indicaron testigos y entre ellos la fiscal Tatiana, quien habló concretamente de esa situación respecto a los reportes, a la falta de ellos y cuándo finalmente empezaron a hacerse esos reportes. En relación a esta misma causa, una vez que se devolvió ese formulario incompleto con un previo a proveer, el 12 de diciembre del año 2019 se provee la solicitud remitida por Claudia al Tribunal en el sentido de solicitar la pertinente formalización de la causa, ordenando el Tribunal que ésta se realizaría el 27 de enero del año 2020 a las 9:40, despachándose orden de detención en contra del imputado, quien estaba ausente en esa audiencia. Él es detenido el 2 de febrero del año 2020 y pasa a audiencia de control de la detención. Es formalizado el 03/02/2020 por su autoría en el delito de manejo en estado de ebriedad. Queda fijada la audiencia de salida alternativa, la cual se realiza el 10 de marzo del año 2020, quedando el imputado obligado a cumplir las condiciones establecidas para la suspensión condicional, aplicándole además la suspensión de su licencia de conducir por 2 años. Queda fijada también una audiencia para entrega de la licencia que debió realizarse el 16 de abril del año 2019. Se suspende la audiencia por el Tribunal por motivo de la emergencia sanitaria, realizándose el 23 de octubre del año 2020 para finalmente ser sobreseída por cumplimiento de las condiciones impuestas en el 2022. Preguntó si hubo alguna intervención, algún escrito de Claudia que interfiriera en la normal tramitación de esta causa, y se respondió que ninguna.



Respecto a la causa de Fabián Enrique Ortega Bustamante, RUC N° 1900104808-5, fue recepcionada en la Fiscalía a través de los servicios administrativos. Una vez que se realizan los trámites preliminares, efectivamente, aparece generado un escrito incompleto de archivo provisional, el cual fue realizado con la clave de Claudia del Pino, como se pudo ver en la foto 27 de aquellas incorporadas del informe N° 90. Sin embargo, como ya lo sabe el Tribunal, también se pudo detectar que a lo menos cinco personas realizaban gestiones con la clave de Claudia. Asimismo, el Tribunal advirtió que en las fotos de peritajes exhibidos del sistema SIGE faltaban columnas, las cuales habrían permitido revisar quién pidió el archivo provisional, no solo con qué clave se realizó una información, lo que quedó claramente faltando en la exposición de las pruebas que se hicieron aquí, sobre todo del informe 90, como bien lo advirtió el Tribunal respecto a la columna que había abajo, que permitía ver otra información que no fue expuesta en ese informe. Faltaban entonces las columnas, lo cual podría haber permitido revisar quién pidió el archivo provisional y no sólo con qué clave se realizó. Además, también hay que señalar que ese escrito nunca fue remitido al Tribunal, lo que significa que tampoco pudo afectar la normal tramitación de la causa y queda en evidencia al no haberse incorporado por parte del Ministerio Público alguna gestión en esa causa que indicara que algún escrito se remitió con el fin de evitar el conocimiento de él por el Tribunal. Señala que además se pudo establecer que el imputado de esos hechos concurrió al Ministerio Público, recibiendo ahí una carta de la señorita del mesón, situación que resultó ser bastante particular. A nombre de Claudia del Pino, donde constaba una firma pero que no correspondía a la carta que finalmente se le exhibió aquí durante el juicio. Eso nos indica que como también se señaló en el alegato de apertura, pudo existir participación de otras personas en el término de las causas. Sí hubo gestiones que fueron realizadas con las claves de Claudia del Pino, como en esta causa, pero también se advierte esa inusual situación que desde el Ministerio Público se le entrega a este imputado una carta de término de su causa directamente por la funcionaria que trabajaba ahí. Preguntó cómo podríamos saber si esto es verdad o no. La única persona que entiende pudo haber entregado una versión completa y explicado realmente todas esas situaciones que quedaron en el aire habría sido Ricardo Vega, quien jamás se refirió a la participación de otras personas, pese a que entienden que toda esta investigación en distintos momentos ha



demostrado de que sí hay más personas que han utilizado la clave de Claudia del Pino para poder modificar las causas que finalmente llegaron a este juicio.

Respecto a la causa RUC 1900680959-9 relativa a la víctima Natalia Alejandra Lara Sobarzo, donde se presentó un escrito comunicando el principio de oportunidad, que es lo que lleva al Ministerio Público a entender una obstrucción a la investigación, se pudo apreciar que eso estaba basado principalmente en el desistimiento de la víctima, que se indica al Tribunal con toda claridad, y a las lesiones diagnosticadas médicamente como lesiones de mediana gravedad, lo que hace correcto buscar dicha forma de término, admitiendo que puede entenderse como un criterio equivocado cuando se trata de un criterio jurídico distinto donde, además, la víctima señala que no quiere seguir participando, que no coopera y no concurre al Servicio Médico Legal. Parece una decisión absolutamente conforme a derecho. Una vez que leemos el escrito de aplicación de principio de oportunidad, el cual fue incorporado, se puede verificar que constaba toda la información del hecho, por lo que el Tribunal aprueba dicha forma de término. Asimismo, en el sumario, según las propias declaraciones de Mauricio Jorquera, en este caso, se estimó una diferencia de criterio jurídico, no calificando los hechos siquiera para una falta administrativa.

En el RUC N° 1900840692-0, también se pudo establecer que Claudia recibía las causas que le correspondían tramitar una vez que la preclasificadora Paulina Salazar revisaba los antecedentes y derivaba al abogado o al fiscal correspondiente. Lo cierto es que Claudia debía tramitar los manejos en estado de ebriedad simples, eso también quedó establecido en el juicio. Es decir, sin que tuviera, por ejemplo, la agravante del 209 de la Ley 18.290. Considerando que el Ministerio Público estima que se debe trabajar con buena fe, frase que escuchamos muchísimo durante este juicio, le parece también lógico que esa buena fe deba existir respecto de los otros funcionarios que participaban de todo el engranaje del trabajo. En la realidad nunca hubo una investigación porque esta causa empieza con requerimiento y necesita, el delito imputado, que exista una investigación vigente para que esa pueda ser obstaculizada, lo cual no ocurre ya que la causa, después de todas las gestiones de ingreso de servicios administrativos, es derivada y, como primera gestión, se presenta un requerimiento simplificado donde se indica que todo lo que consta está en la carpeta. Se basa en el requerimiento en la alcoholemia que presentó de 0.92 grados de alcohol acompañando además la Hoja de Vida del



Conductor. Le parece importante aclarar que la mala gestión de la preclasificadora es lo que finalmente hace que Claudia cometa un error al no advertir que la causa no era de aquellas que ella tenía que tramitar, sino que era una que debió ser asignada a la fiscal Carmen Caamaño por la especialidad. Sin embargo, es la misma Carmen Caamaño quien termina la causa sin hacer ninguna gestión con el fin de poder incorporar la agravante de la que acusan a Claudia de haber omitido al realizar el requerimiento, ya que el imputado efectivamente no tenía licencia de conducir. Y es en ese momento que la fiscal concreta esa incongruencia que había entre el requerimiento y los documentos que lo acompañaban, no fue Claudia quien finalmente concreta en esta causa un requerimiento sin la agravante. Afirma que esto no habría ocurrido si la clasificadora hubiera remitido la causa a la fiscal que correspondía y no a alguno de los abogados asistentes que trabajaban solamente con manejos en estado de ebriedad simples porque todo parte de que se confía en toda la línea de trabajo que hay antes y después. Si falla quien debe derivar el trabajo que deben realizar, como aquí ocurrió, claramente expone a error a la persona que finalmente, confiada, lo hace.

En la causa RUC 19009015769- K la investigación fue agrupada a la RUC 190062788 -4, según se desprende de la fotografía que se aportó del informe 90, y la tramitación de aquélla se encuentra en esta segunda causa. Al verificar la foto 52 del informe 90 consta esta agrupación. En la foto 56 se puede verificar que efectivamente se requiere por los dos delitos que correspondían, pero el formulario está incompleto, no se terminó su redacción y no se envió al Tribunal, era un trabajo realizado por Claudia que estaba a medias y que no fue enviado ni eliminado, sino que estaba en proceso. Con posterioridad se remitió ese requerimiento. Luego, lo que se percibe en esta causa, que no sólo se agrupó como correspondía, sino que el requerimiento incluyó ambos delitos porque Claudia fue suspendida de sus funciones. Es así como, según la foto, la 55 del informe 90, se verifican dos relaciones que, como explicaron todos los funcionarios del Ministerio Público que hablaron del SAF, cada relación que aparece en la pantalla corresponde a un delito en el que está vinculado el imputado y justamente es esa la situación que se ve reflejada en el sistema SAF por los dos delitos de manejo en estado de ebriedad que fueron agrupados. No se ocultó ningún antecedente de la carpeta, además no hubo investigación que obstruir porque en la causa el primer escrito que se remite al Tribunal correspondió a un requerimiento que contiene todos los hechos tal cual



correspondía y existían en la carpeta, no hubo ninguna modificación, ninguna alteración, ninguna obstrucción a una investigación que además no existió.

En la causa RUC 1900836255-9 se puede verificar que se solicitó audiencia de formalización el día 26 de diciembre del año 2019 por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol, lo que fue redactado de acuerdo a la información agregada al sistema por la preclasificadora y personal administrativo quienes son, como quedó claro, los responsables de escanear los partes, ingresar los intervinientes y finalmente derivar la causa a un abogado asistente o fiscal. Es así como con esa información Claudia redacta el escrito pertinente y el Tribunal, con fecha 27 de diciembre del año 2019, determina que, previo a proveer, se deben aclarar las víctimas y el delito ingresado al sistema del Ministerio Público y es así como 18 meses después recién se cuenta con la información correcta respecto a ambas víctimas, esto es, cuando Claudia ya no estaba trabajando en el Ministerio Público, pidiendo el sobreseimiento por la causal de la letra a). Acá no hubo ocultación, más bien Claudia fue diligente en el sentido de querer investigar los hechos, sin tener cómo advertir el error que había sido causado por los servicios administrativos al individualizar a las víctimas. Nada de eso impidió la normal tramitación de la causa, que además, como ya señaló, culmina con un sobreseimiento definitivo, observando que nadie más de la Fiscalía fue sumariado y sancionado que su representada.

En la causa RUC N° 200122215-6 se pudo apreciar que fue tramitada correctamente en Tribunales existiendo, eso sí, un registro de archivo provisional en el sistema SAF. Como en todas las gestiones anteriores y posteriores a eso, lo que pudimos ver es que ese también es un error administrativo que no impidió que la causa se tramitara correctamente, iniciándose el 1 de febrero del 2020 mediante audiencia de control de la detención, culminando con el sobreseimiento por el pago total del acuerdo reparatorio.

En la causa RUC N° 2000014933-1 también se puede verificar que ésta se inicia con una cautela previa a la formalización en favor de la víctima de VIF, solicitándose posteriormente y como corresponde, la formalización por ese hecho, fijándose a continuación, para ese propósito, la audiencia respectiva, la que no se concreta sino hasta después de emanada una orden de detención en contra del imputado con fecha 31 de enero del año 2020. Luego se intenta una audiencia de salida alternativa el día 04 de marzo del 2020 que tampoco se realiza. Después se fija fecha para este efecto, ordenando citar a las víctimas, la que se suspende por la



emergencia sanitaria del COVID. Finalmente, se intenta terminar la causa mediante la suspensión condicional del procedimiento el 17 de noviembre del año 2020, en que la fiscal a cargo solicita la reformalización de la investigación por haber un hecho paralelo en causa diversa de la misma naturaleza con el fin de arribar a la salida alternativa por ambos hechos. Así, el 8 de abril del año 2020, ante la falta de resultados respecto a la orden de detención que había sido decretada en contra del imputado que no se presentó, es declarado rebelde. Concluyó que si hubo error de digitación en el sistema de la Fiscalía, este no generó obstrucción a la investigación y no afectó la normal tramitación de la causa, que como pudimos ver, hasta el día de hoy no se pudo terminar por la rebeldía del imputado.

Agregó que, respecto a la acusación de violación de secreto y cohecho, estima que no se puede establecer que Claudia del Pino haya realizado la conducta de la que se acusa en el sentido de que violó el secreto legal de las causas y que entregó datos de los imputados como partes policiales, datos de domicilio, teléfonos y otros. Tal aseveración hecha por el fiscal se basa únicamente en las declaraciones cambiantes del coimputado, sin que haya existido prueba alguna que corrobore los dichos de Ricardo Vega; en ese sentido puede verificar que Ricardo Vega entrega una primera declaración ante el abogado asesor Mauricio Jorquera, en la cual indica cómo accedía a la información a través del computador que tenía la clave de SAF de Claudia, que lo hacía cuando ella no se encontraba utilizando el computador, indicando también detalles de cómo contactaba a las personas a las cuales le ofrecía la movida, los precios, los datos de esos imputados, y que anotaba para poder contactarlos, porque también quedó claro que si Claudia estuviera por detrás, podría perfectamente haberle impreso el parte, podría haberle impreso documentos de la causa y por una extraña razón, él llegaba con una hoja escrita a mano, que además no fue incautada cuando se incautó todo aquello con lo que trabajaba Claudia. Pregunto que si estaban de acuerdo, por qué ese documento que se usaba para poder contactar a los imputados, escrito a mano, no fue incautado al momento de allanar la casa de Claudia. Volviendo específicamente a la violación de secreto entiende que en esa primera declaración entregada en el sumario es la única declaración que resultó plenamente corroborada por los testigos que declararon, por los documentos, acompañados, incluso por el Ministerio Público, no así al momento en que el imputado dice que comparece ante el fiscal y ahora en la investigación penal en que señala que ahora sí va a decir la verdad. Incluso antes de eso ya había dicho que iba



a decir la verdad, supuestamente al fiscal del sumario administrativo, quien por una extrañísima razón señala haber sido contactado por Rodrigo por otro número y que no recibió su declaración. Es más, ni siquiera registró esa actuación dentro del sumario, siendo su obligación legal y reglamentaria consignar todo aquello que ocurre durante la investigación y, por una situación sumamente extraña, sólo él sabe que eso ocurrió porque no se consignó en ningún lugar. Ahora cuando tratamos de entender por qué Ricardo Vega empieza a cambiar su declaración, es porque queda en evidencia que se percata de la existencia de Jonathan Rebolledo. Cambia ahí radicalmente su versión y es así como se presenta a declarar ante el fiscal de la causa, entregando antecedentes respecto a los cohechos y relatando una versión llena de detalles, entienden que con el fin de que pueda ser creíble decirle al fiscal que efectivamente quiere cooperar. En esa nueva versión entregada al fiscal habla de la participación de Claudia en los hechos. Bastante llamativo es que específicamente en aquella estafa que realizó Ricardo, relata, respecto a Ralph, haber llamado a Claudia y que ésta estaba justamente en el supermercado en el cual estaría Ralph y que estaba con el dinero para pagar la movida, como la denominaron. Indica que además ella estaba realizando compras en ese lugar y que le dijo que se acercara a Ralph para poder recibir el dinero, que utilizó para pagar alcohol y algunas cuentas de la casa. En evidencia quedó que este relato de la segunda declaración ante el fiscal, donde sí estaba diciendo la verdad, no se pudo corroborar. Es más, se pudo descartar absolutamente eso por todas las declaraciones que escuchamos, principalmente respecto a declaración de Ralph, quien indica que sólo conoce a Ricardo, sólo trató con Ricardo, sólo fue contactado por Ricardo, sólo de él recibió documentación y sólo a él pagó. El principal PDI que trabajó en esta causa, Luis Gutiérrez, señaló que después de esa declaración donde dijo toda la verdad y todo lo que hizo Claudia con Ralph, volvió a declarar, señalando que lo que dijo antes no era correcto, que se había equivocado, que en realidad Claudia no había tenido contacto con Ralph y por razones que todavía no se pueden comprender, pese a la evidente falta de veracidad en la declaración y en las cambiantes declaraciones de Ricardo, el oficial Luis Gutiérrez, el principal encargado de la investigación, recibe instrucciones en el sentido de que hiciera llegar su declaración y que indicara cómo Ricardo Vega no solo cooperó, que dijo toda la verdad en todo momento, situación que el mismo señaló era cierta al momento de preguntarle sobre la forma en que fue instruido a dar su declaración.



Planteó que, dentro de la versión entregada por Ricardo, señala que el motivo de que Claudia le propusiera hacer las movidas era por su precaria situación económica, justificando su decisión de no trabajar porque Claudia lo dominaba o era celosa. Al respecto, entienden que quedó claro con toda la información respecto a las cuentas de Claudia, que no se puede encontrar nada que pueda comprobar problemas económicos de Claudia, siendo ese otro punto de la segunda declaración de Ricardo que no se acreditó. Más bien se desacreditó, porque ni siquiera hay duda, no se pudo acreditar algún problema económico, que sería el motor de la idea que, según Ricardo, tuvo Claudia para empezar a vender los términos de las causas. También mucho se habló de que Claudia consumía drogas y alcohol. Tanto Ricardo como su hermana señalaron que era tal su nivel de consumo que le afectaba en su trabajo, que se presentaba a trabajar en estado de ebriedad. Sin embargo, ni un solo testigo, de todos los que declararon del Ministerio Público, señaló haber visto a Claudia en momento alguno presentarse al trabajo en estado de ebriedad o con indicios de haber consumido alcohol. Ricardo, en su afán de corroborar a cualquier costa su segunda versión de los hechos, trae a su hermana a declarar, quien no sólo señala que Claudia era alcohólica, sino que también que Claudia no era capaz de ir a tomar su turno, ir a sus audiencias y llegar al Tribunal por la ebriedad en la que se encontraba, señalando además que por eso fue reprochada, que ella la ayudó en esas audiencias. Pero se les olvidó al contar en esta versión el detalle de que la fiscal Jefe indicó que le había dado calificación máxima a Claudia y, según los certificados acompañados por el mismo Ministerio Público, Claudia no tenía sanciones, ni una anotación, ni una amonestación o reproche, nada que pudiera corroborar esa versión tan fantástica que cuenta Camila, que fue ayudar a un abogado asistente a tomar audiencias. Otro elemento que entregó Ricardo Vega en su segunda declaración fue que Claudia había reconfigurado su computador, entienden que como para poder justificar que al momento de analizar el computador de Claudia, no se encontró ningún elemento que pudiera vincularla a los hechos de esa acusación, señalando que esa configuración del computador se hizo a través de un funcionario informático llamado Fernando, quien presta servicios a la Fiscalía, pero que de una manera inexplicable resultó que nadie lo conocía. Solo existía esa persona en la declaración que entregó Ricardo. También se pudo descartar, de su segunda declaración, que Ricardo le haya hecho la movida a Richard Araya Brunett, quien negó haber tenido una causa por manejo en estado de ebriedad, negó que Ricardo le hubiese ofrecido



alguna movida y además nos indicó que él ha sido comprador de la botillería, que hasta fiado compraba o con las tarjetas de Claudia, porque incluso señaló, recordarse de la situación en que se confundió con las claves de su señora. Por lo tanto, respecto al consumo de alcohol, señala que lo único que se puede establecer, es que quien consumía y quién compraba era Ricardo, no Claudia, aunque eso ni siquiera podría tener algún interés en esta causa, porque nada afectaría los delitos por los cuales se está acusando. Pero cómo fue un tema del cual se habló mucho y se trató de dar como una justificación en el contexto en que Claudia podría ser autora de esto, tiene que hacerse cargo. Incluso con respecto a Richard Araya se pudo acreditar que era Ricardo quien consumía de manera reiterada alcohol, señaló dos a tres veces por semana. Hay que entender también que si el afán de esto es poder demostrar que generaba problemas económicos por los gastos, se puede verificar de las cartolas que ninguno de los valores en que se utilizó la tarjeta de Claudia para comprar en botillerías era un valor que pudiera generar un menoscabo económico a los ingresos de Claudia. La segunda declaración de Ricardo, muy coincidente con la de su hermana, solo logró corroborar la falta de veracidad de ambos. Respecto al punto de que Claudia llegaba ebria a trabajar, de que siempre había que estar despabilándola como señaló Camila, los funcionarios la describieron textualmente como amable, risueña, con buenas relaciones con los funcionarios, con buena disposición para asumir los juicios orales de los fiscales y las audiencias. La manera en que fue descrita por los funcionarios es totalmente contraria a la descripción que hicieron Ricardo con su hermana. Terminó además Camila señalando que ese día estaba tan mal que se fue antes de terminar las audiencias. Entiende que no es necesario mayor análisis para poder comprender que toda esa situación que describe es absolutamente inexistente.

Destacó que lo que sí se pudo acreditar es que Ricardo Vega contactó a Diego Ignacio Vázquez Riquelme, a Samuel Alarcón Urrutia, a Enrique Leopoldo Torres Valenzuela, a Rodrigo Guerra Morales, a Elías Orlando Vázquez, Ralph John veloz Rodríguez y Eduardo Antonio Lobos. Todos esos contactos ocurrieron en periodo de pandemia, cuando Claudia efectivamente trabajó desde su casa con un computador que, como quedó establecido, tenía una VPN para poder acceder a los sistemas de Ministerio Público y que de otra forma, de otro computador, era imposible poder realizar eso. Sin embargo, también se acreditó que en ese momento, ya existían las carpetas digitales. Para acceder a ellas bastaba ingresar a los sistemas



de la Fiscalía, pero al realizar su trabajo desde la oficina, Claudia tenía tanto acceso a las carpetas como también acceso a los sistemas y señala que sólo en su oficina y nadie más podía acceder a ellos. Sin embargo, ya empezando la pandemia, todo eso se traslada a su domicilio, sin que varíe el acceso que Claudia ya tenía a sus carpetas. Lo único distinto es que Ricardo ahora también podía acceder a las carpetas que llevaba a casa Claudia o en el computador familiar, que tenía a lo menos la clave del sistema SAF, la cual, como se acreditó en el juicio, era la única que no se caía, que había que volver a ponerla. Mientras el computador estuviera prendido, la clave no se caía una vez ingresada. Justamente es sólo en el sistema SAF en que se encontraron modificaciones, el sistema SIGE no fue modificado, más allá de lo que explicaron todas las personas que declararon en cuanto a que al terminar una causa se refleja de manera automática en el sistema SIGE, pero no es una alteración directa que se haya hecho en el sistema SIGE, solamente se hicieron modificaciones en el sistema SAF, justo el sistema en que la clave nunca se caía a menos que se cerrara el computador.

Sobre los documentos aportados con los números 10, 11 y 12, que serían las cartas de termino de las causas que, en palabras de la fiscal jefe Carola D'Agostini, tales documentos están con distintos tamaños de letra, algunos no tienen fecha, sin hora, sin lugar, sin víctima, documentos mal hechos expresa la fiscal, el apellido D'Agostini mal escrito, señalando además que, textual, alguien de la Fiscalía si tuviese que hacer a mano las cartas sabría entonces que faltan datos. Si Claudia estuviera involucrada, las cartas de término que se entregaron a los imputados no estarían tan mal redactadas, incompletas y con tantos defectos como lo están. Señaló que invocará los mismos términos que han usado los colegas, 15 años de experiencia, sabía manejar perfectamente el sistema, conocía perfectamente las cartas que se entregaron. De haberlo hecho ella, preguntó si las habría hecho con la precariedad que se hicieron las cartas que entregó Ricardo, y se respondió que no. Indicó que, con lo anteriormente dicho, llega a la conclusión de que no fue Claudia y fue posiblemente Ricardo, ya que como él bien señaló, no dominaba el sistema y le costaba poder hacer gestiones dentro del sistema SAF cuando se le pidió, meses después de la última vez de haber ingresado al sistema, por Mauricio Jorquera, para que demostrara sus habilidades.

Señaló que, enfocándose en la dinámica en que Ricardo ofrece la movida, en todas las situaciones, en todo lo que se pudo escuchar de las personas involucradas y



contactadas por él, siempre señaló en su discurso estafador a un tercero, que tiene un pariente, un amigo, la señora, un amigo de la Fiscalía que se encargaría de archivar la causa. También se acreditó que parte del servicio que ofrecía era entregar la licencia de conducir retenida, lo que corrobora aún más su primera declaración, puesto que quedó en evidencia que las licencias, cuando son retenidas por Carabineros, son enviadas a la Fiscalía y custodiadas y sólo mediante gestiones con la fiscal jefe se pueden devolver. Sin embargo, dicho trámite era tan simple como ir a la Fiscalía y la persona de atención de público tramitaba la solicitud y realizaba la devolución del documento. Eso quedó absolutamente claro durante la declaración de los testigos. Esta información la conoce cualquier funcionario de la Fiscalía, lo que lleva a la lógica conclusión de que si un abogado asistente quisiera realizar dichos arreglos con el imputado, hacer la movida con los imputados, les indicaría que fueran a retirar su licencia en la Fiscalía. Es más, con el afán de poder engañar a estas personas, podría simplemente haber dicho, si hubiese la participación de un abogado asistente, que la licencia va a quedar a disposición para su retiro en la Fiscalía, usándolo como un elemento para poder hacer parecer más serio el negocio ofrecido, como si hubiese habido una gestión para poder recuperar la licencia directamente en la Fiscalía, ya que el imputado contactado no tenía cómo saber que la devolución de la licencia no era el resultado de ninguna gestión hecha por Ricardo o supuestamente por Claudia, pudiendo haberse aprovechado de esa simplicidad del trámite y de la devolución de la licencia para demostrar más poder, más control y hacerse más convincente al promover su movida. Sin embargo, la persona que contactó a los imputados no conocía esa información. De haber estado involucrado un abogado asistente, habría sabido que no podía entregar la licencia por mano, pero sí derivar al imputado a la Fiscalía para el trámite normal de la devolución. Eso habría permitido que su potencial cliente, Enrique Leopoldo Torres, hubiese pagado a Ricardo al haberle dicho de que la devolución de la licencia ya la había tramitado y bastaba simplemente ir a la Fiscalía en el mesón de atención de público para que se la devolvieran. Pero como entienden que no hubo participación de ningún abogado asistente, Ricardo no podía tener esa información y nunca supo cómo poder captar y concretar la movida con Enrique Leopoldo Torres, porque a lo que él se comprometía era entregar la licencia, cosa que claramente sabemos y todos los funcionarios saben, no se podía hacer. En la declaración que dieron todas las personas que fueron contactadas por Ricardo pudimos verificar y escuchar que todo



era el mismo modus operandi en cuanto recibían información de Ricardo, quien les cobraba el precio por hacer la movida.

Añadió que, en cuanto al uso de las claves, entienden que claramente quedó establecido con toda la prueba que se incorporó, que todos los movimientos en las causas de la acusación por cohecho sí se realizaron con las claves de Claudia. Eso entienden quedó absolutamente acreditado. Pero que eso ocurrió también incluso cuando ella ya no era parte del Ministerio Público y justamente en las causas que fueron objeto de esta acusación. Carola D'Agostini señaló que, ya estando Claudia suspendida de sus licencias, encontrándose bloqueadas sus cuentas, se realizó una modificación en una de esas causas por manejo en estado de ebriedad, explicando incluso Carola D'Agostini que cómo era posible que Claudia estuviera suspendida, con sus claves bloqueadas, por lo que ya no tenía acceso al computador con VPN ni a su oficina, y se duplicó esa causa apareciendo como un fraude, todo ello sólo en el sistema SAF. Queda la interrogante de si Claudia no lo pudo hacer, quién lo hizo. Preguntó quién estaba ayudando Ricardo a realizar este tipo de gestiones con la clave de Claudia, ya que eso no se puede cuestionar, que todo fue con la clave de Claudia. En la fotografía 101 del informe 90 incorporado por la Fiscalía se puede visualizar la causa RUC 2000185678-3 por manejo en estado de ebriedad, la cual fue terminada el 14 de mayo del año 2021, supuestamente por Claudia del Pino, ya que con esa clave se pudo ver que se realizó la gestión, pero sus claves, como ya lo indicó, estaban bloqueadas desde agosto del año 2020 y a esa fecha incluso ella ya se encontraban destituida del Ministerio Público, por lo que de su computador con VPN nunca más pudo acceder a su oficina. Preguntó quién ayudaba a Ricardo a usar la clave de Claudia para hacer estas modificaciones en todas estas causas de la acusación.

Planteó que, respecto al fraude de seguros, lo que quedó obvio en este Tribunal es que quien decidía el rumbo de esas causas era la preclasificadora Paulina Salazar, quién, en sus propias palabras, por instructivo regional archivó todas las denuncias realizadas por Claudia del Pino cuando el objetivo era poder hacer uso del seguro. Indica que quedó establecido que nunca hubo instructivo alguno respecto a las denuncias de los funcionarios, pero tampoco prohibición de que se tomaran sus propias denuncias, y que finalmente la manera en cómo esa denuncia ingresa al Ministerio Público no tiene ninguna relevancia penal, no tiene ninguna importancia respecto a lo que finalmente vinimos a discutir acá, sobre todo cuando queda en



evidencia que quien finalmente decide qué se hace, qué no se hace, cuándo se hace diligencia, cuándo no se hace, cuándo se archivan las causas respecto a las denuncias que hizo Claudia, fue Paulina Salazar, no hubo interferencia de Claudia en ninguna de esas causas. No ve de qué manera puede ella ser imputada o condenada por un fraude de seguro en esa situación. Cita a los profesores Matus y Ramírez que, su manual de Derecho Penal Chileno señalan que la intervención de liquidadores de seguros en la comprobación de los antecedentes presentados por peritos más o menos independientes de las compañías de seguro, ha de ponernos en alerta acerca de la posibilidad del rompimiento del vínculo causal en esta clase de hechos y su influencia en la imputación objetiva del hecho. Si el liquidador ha sido negligente o sencillamente la liquidación no se ha practicado, el pago del seguro no puede imputarse objetivamente a la conducta del asegurado, sino que corresponde imputarlo a la esfera de responsabilidad de la compañía y de los liquidadores que a ella informan. Señala que lo mismo debe decirse en caso de que, descubriendo el intento de fraude, de todos modos se pague el seguro por el siniestro. La compañía incurriría en un perjuicio causado por su propia organización y no imputable al asegurado. La tácita aceptación del intento de defraudación también podría llevar a sostener que en estos casos el consentimiento, el perdón del afectado antes de la consumación del hecho, excluye toda la punibilidad, incluso de la tentativa. Así que entienden que, en las denuncias que fueron hechas por Claudia, que fueron debidamente tramitadas por el Banco, no se puede verificar ningún tipo de irregularidad. Aun así, en el caso de que alguna persona intentara hacerlo y le resultara y recibiera pagos del seguro, claramente esa responsabilidad quedaría derivada a quien pagó erróneamente el seguro, a la aseguradora, a sus peritos, y no hacia la persona que solicita activar el seguro que tiene contratado.

Argumentó que, respecto a la falsificación de instrumento público, estas cartas que fueron entregadas a las personas contactadas por el cohecho por Ricardo y entregadas por Ricardo no constituyen de ninguna manera un instrumento público. Es importante señalar que para que sea instrumento público, tiene que tener ciertas características el documento, como por ejemplo número de repertorio, tener un archivo, tener una firma autorizada o, en su caso, una firma electrónica y no es así un simple documento que se puede sacar de un sistema computacional. Una situación similar se dio mucho y se pudo ver en los Tribunales respecto al artículo 318 en época de pandemia, donde hubo muchas causas respecto a permisos



falsificados, salvoconductos falsificados, lo que finalmente zanjó la Corte Suprema señalando que ese tipo de documentos, muy similares a éste, incluso más completos que éste, porque sí tenían timbre y algunas características de electrónicos, pero que no cumplía con el requisito de ser un instrumento público, malamente éste podría cumplir entonces con esos requisitos, siendo que es un documento bastante más completo como los salvoconducto y todos los permisos que se sacaban por comisaría virtual que, cuándo eran falsificados, no podían ser castigados como falsificación de instrumento público por no contener esas características mínimas esenciales y necesarias para que un documento pueda ser considerado con esas características. Citó, a modo de ejemplo, un fallo de fecha 16 de diciembre del año 2021, en la causa ROL 1202-2021 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que lee extractadamente. Como quedó en evidencia durante este juicio, ni siquiera tenían un número de repertorio, un número correlativo, ni siquiera tenían una formalidad mínima dichas cartas que sí fueron adulteradas al momento en que Ricardo las entregó a las personas contactadas.

Señaló que el Ministerio Público también hizo mención a que la Defensa habría incorporado de mala manera la prueba que ofreció en el auto de apertura. También quiere referirse a cómo el Ministerio Público incorpora sus pruebas. Pese a la disposición expresa en el sentido de prohibir la incorporación de documentos policiales como partes o declaraciones, se utilizó esa forma para tratar de acreditar la existencia de los delitos de manejo en estado de ebriedad que recaen en los cohechos. También la declaración de los funcionarios policiales, las cuales, pese a haber sido ofrecidas sobre determinadas causas, lo que fue objeto de una discusión ante este Tribunal, porque el auto de apertura indicaba que iban a declarar respecto a RUC que acompañaba su nombre. Lo cierto es que declararon sobre causas distintas a aquéllas por las cuales fueron ofrecidos, como es el caso de Cristian Salas Silva, ofrecido para declarar en el procedimiento en contra de Elías Apablaza y terminó declarando sobre Rodrigo Guerra. Asimismo, el funcionario policial Carlos San Martín Almarza se ofreció para declarar sobre la causa de Samuel Alarcón y terminó declarando sobre la causa de Diego Vázquez. En todas las causas de cohecho, se incorporó la alcoholemia sin la declaración de perito. Se refiere a las causas de cohecho que recae en un manejo en estado de ebriedad, donde se incorpora la alcoholemia sin la declaración del perito, sin que se haya solicitado ni debatido respecto a introducirla vía 315, prescindiendo de la declaración del perito, lo que



requiere solicitud y previo debate. En la causa de Eduardo Lobos Tapia ni siquiera se acompañó la alcoholemia de esta manera indebida, simplemente no existe tal elemento en esa causa.

Resaltó que pudieron verificar en la declaración de Camila que ella señala por qué motivo se realiza esta denuncia por parte de su hermano Nelson, a quien ella se refiere como Andrés. Dice que Ricardo se encontraba en tal situación de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar y sometimiento, que su hermano decidió, para poder salvarlo de esa situación, realizar la denuncia. Lo raro es que Luis Gutiérrez, quien sí tuvo acceso a toda la carpeta de investigación, dijo que Valesca, quien conoció los detalles respecto a cómo se dio esta denuncia, señala que esto ocurrió en el momento en que Nelson, en un ímpetu de vengarse de Claudia porque le había contado a Valesca que él tenía otra pareja embarazada en Rengo, lo que generó la furia de Nelson, es que se genera la denuncia de Nelson en contra de su hermano y en contra de Claudia, no como refirió Camila en una declaración absolutamente acomodaticia, quien además, nos indica que Ricardo no sabe usar su celular. La descripción que hace de Ricardo es prácticamente como un subnormal que no sabe usar el celular. Sin embargo, pudimos apreciar durante todo este juicio que lo que más hizo Ricardo fue estar utilizando todas las aplicaciones que existen en su celular. Además viene a declarar respecto a la dinámica familiar que existía en la casa de Claudia pese a que indicó que hace 4 años vive en Viña del Mar, sin indicar cuántas veces vino, cuándo vino, en qué fechas vino, solamente relatando que vio que Claudia lo maltrataba en los mismos términos en que señaló Ricardo en su declaración, en la última de las declaraciones.

Indicó que, en cuanto a la declaración de Jonathan, él señaló que tuvieron una relación afectiva, w tienen una relación ahora muy cercana. Efectivamente, la ha acompañado en distintos días durante este juicio, él puede señalar incluso que a lo menos en 15 oportunidades la trajo o la fue a dejar. Pero resulta que, respecto a lo que declaró Jonathan, no tiene absolutamente nada que ver con la prueba que se incorporó durante este juicio. Aunque Claudia o cualquier otra persona le hubiese comunicado esta situación, lo cierto es que toda la información que él entrega en este juicio se basa en todo lo que ocurrió mientras él usaba su celular, en lo que escuchó mientras estaba al otro lado de la línea, en toda la información que Claudia le mandaba para respaldar a raíz de las agresiones que sufría Claudia de Ricardo del teléfono que quedó inutilizado. Jonathan finalmente terminó siendo la persona que



guardaba toda la información que Claudia estimaba le podía servir para poder comprender qué estaba ocurriendo y poder demostrar su inocencia. Luego, no tiene ninguna importancia si Claudia se juntó con él o no y además estamos hablando de los tiempos actuales, o sea, no era necesario que Jonathan viniera para acá, podría cualquier persona haberlo llamado, Claudia haberlo llamado, haberlo llamado la misma abogada y haberle contado día a día qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces ese contacto que tuvo con Claudia no tiene ninguna importancia y no afecta la información para la cual él finalmente fue ofrecido como testigo. Lo esencial es escuchar los hechos de violencia intrafamiliar y a raíz de eso es que Claudia, porque quedó muy claro que efectivamente no hizo ninguna denuncia anterior, sólo las hizo cuando ya hubo participación en eso, presión en eso, acompañamiento en eso tanto de Jonathan como de su ex amiga Paulina Cisterna, para que efectivamente hiciera la denuncia que durante todo el tiempo de maltrato no lo hizo. Preguntó si hay alguna sorpresa en esto, si hay alguna dinámica de violencia intrafamiliar que no se acomode exactamente a lo que describió Claudia, que vivió ella su vida sin hacer denuncias, aguantando con temor, haciendo las denuncias, retirándolas. Preguntó si hay alguna diferencia con los hechos de violencia intrafamiliar que generalmente vemos en los Tribunales. Se respondió que ninguna, es la situación clásica de violencia intrafamiliar. Respecto al testigo Jonathan, lo importante y lo que quedó en evidencia es que él voluntariamente se presentó a declarar porque quería compartir con la Fiscalía todos los elementos de prueba para poder sostener la inocencia de Claudia del Pino y finalmente, como se pudo apreciar por este Tribunal, no sólo ello no fue incorporado en los informes en que se bajó toda la información del celular de Jonathan, sino que además fue eliminada toda la evidencia, todos los correos, todos los Whatsapp, todos los audios que Jonathan fue recopilando del reenvío de Claudia para poder aportar a la causa y demostrar su inocencia. Luego, al día de hoy, si tuviéramos toda esa información que fue eliminada, podríamos concluir que Claudia del Pino es probablemente inocente, pero no lo podremos saber porque esa información no se pudo recuperar y, a diferencia de lo que señaló la Fiscalía, no es que no tenía Internet. Claro, se mostró una foto en que efectivamente no se podía ver el símbolo de estar conectado con internet, las rayitas, pero en todas las demás fotos sí se ve y el Tribunal pudo apreciar que toda esa operación de prender el celular y verificar en qué estaba y tratando de rescatar y ver todos los archivos eliminados, sí estaba conectado a



internet y si no se pudo hacer y además al entregar el teléfono, el mismo Tribunal puede verificar que esa información es así, siendo eliminada y reenviada a correos del fiscal y de Luis Gutiérrez de una manera absolutamente irregular porque esa prueba debió quedar custodiada para su análisis pertinente, retiro de toda la información, y no mandarse a pericia después de eliminarse toda la información que importaba a la Defensa para poder acreditar la inocencia de Claudia. Jonathan, conoció a Claudia físicamente en marzo del año 2020, relató donde se encontraron, dónde fueron, qué comieron. Lo interesante de eso es que efectivamente, en las cartolas, hay un giro de \$200.000 pesos, del 28 de marzo del año 2020, que corrobora lo señalado por Jonathan respecto a que estaban juntos al momento en que se hizo ese giro, misma fecha en que Ricardo, por otro lado, hacía las modificaciones en el sistema el día 28 de junio. Tanto la cartola con el giro, como la declaración de Jonathan nos permite determinar que ella no pudo acceder en ese momento al VPN y a su computador para realizar los cambios.

Refirió que, en cuanto a la situación que se trató de demostrar acá, que Ricardo prácticamente tiene una inteligencia inferior, no pudieron ver ninguna opinión técnica al respecto. El que sea flojo para el colegio o no le guste estudiar eso jamás, nunca ha implicado un deterioro cognitivo o una inhabilidad. Ni siquiera se pudo determinar que afectara esa parte de la inteligencia que permite tener el razonamiento lógico que permite utilizar sistemas informáticos que cualquier persona que tiene esa habilidad en ese ámbito de la inteligencia sí lo puede hacer, independiente de su formación. Eso porque es una situación que todos sabemos, todos conocemos a alguien, todos podemos corroborar que efectivamente hay personas sin formación con ciertos talentos y con cierto tipo de inteligencia. No hubo algún informe al respecto para poder determinar que fuera realmente un subnormal que nos ha venido a decir que no sabe usar el celular. Pero respecto a Claudia, si compareció una psicóloga que la describe con características de sumisión, sometimiento, idealización, que por más que pasen cosas, no consigue verlas, por el contrario, las justifica, niega las cosas negativas que puedan haber y eso explica perfectamente por qué Claudia aguantó tanto tiempo tanto maltrato, tanta vulneración psicológica, física y económica por parte de Ricardo. También entiende que corrobora esa versión de la Defensa la declaración de Paulina, quién señaló que llevaba más de 1 año sin tener ningún contacto ni con Claudia ni con su familia a raíz del temor que le generó estar involucrada en toda esta situación. Nos dijo que él



no la dejaba conducir, no la dejaba hacer nada sola. Lo cierto es que quedó en evidencia que, hasta el día de hoy Claudia aún no le cuenta toda la realidad que efectivamente vivió en la casa con Ricardo y que fue verificada por Paulina, sobre todo después del allanamiento, que fue cuando Paulina empezó a estar entre comillas cuidando a Claudia por toda la violencia y amenazas que estaba ejerciendo Ricardo sobre ella. Paulina nos entregó una información súper importante, que incluso antes del allanamiento ya había visto a Ricardo en el computador familiar y que pudo verificar en al menos dos oportunidades que estaba en una página con el logo de la Fiscalía y que le llamó mucho la atención, no pudo ver de qué se trataba porque Ricardo se enojó, le puso mala cara y le llamó la atención y quedó tan marcado eso que cuando declaró, nos señaló que efectivamente se dio esa situación.

Mencionó que, respecto a la pericia grafológica, entiende que se indicó una falta de rigor técnico que dejó en evidencia la precariedad de la presentada por el Ministerio Público, ya que la idea de un informe pericial supone explicar no sólo el método, el procedimiento, y las operaciones realizadas, sino que también permita llegar a la misma conclusión al escucharlo, situación que no advierte en el peritaje entregado por el Ministerio Público pero sí con el perito grafológico que ellos incorporan, ya que éste sí explicó de qué manera se van notando las diferencias respecto a la firma y las coincidencias de la firma de Ricardo en los documentos que fueron entregados a los imputados que aceptaron la movida.

Finalmente esta Defensa, en su réplica, resumidamente planteó que, sobre lo señalado sobre el uso del SAF, que nadie no capacitado podría utilizarlo, en el mismo informe 90, foto 88, cuando se preguntó a la testigo Karem Torres por qué en esa causa existen tres decisiones de término incorporadas, dijo que era muy extraño y que alguien que sabe manejar el sistema no cometería ese error. Eso la lleva a poder indicar que una persona abogado asistente, con 15 años de experiencia, no cometería ese error. En esta causa, por una extraña razón, la misma decisión de término fue ingresada tres veces. El mismo Pablo Becerra señaló que alguien que no conoce el sistema sí podría manipularlo, con errores, con dificultad, pero sí podría hacerlo si estuviese en la página SAF en que ya consta la clave del sistema. Lo dijo el mismo perito que declaró en el juicio. También lo dijo Tatiana Díaz. En general los abogados asistentes son gente recién titulada con poca experiencia y dijo que no tuvo capacitación en el SAF y empezó a trabajar y mayor dificultad no tuvo porque le parecía intuitivo el sistema. Palabras de Tatiana Díaz.



Señaló que, sobre el reclamo del Ministerio Público de que no incorporaron dos ebooks, es el Ministerio Público quien debe demostrar la obstrucción a la investigación, no la Defensa. En la que termina en 808-5, en la foto 27 del informe 90 se ven los movimientos de la causa y en ninguno se ve algo que haya obstruido la tramitación de la causa. Había formularios incompletos, perfectamente, empezó a redactar un formulario, no lo terminó ni envió porque tenía que tramitar la causa de otra manera. Quién no empieza a redactar y luego retoma el trabajo desde otro punto. Al percatarse de que no era esa la gestión, siguió tramitando la causa como correspondía, dejando ese formulario sin terminar ni enviarlo al SIGE. Sobre la otra causa, la que termina en K, esa causa está agrupada a la que termina en 788-4, y en el informe 90 hay una foto que demuestra que esa causa tenía las dos relaciones y la pantalla donde salía que la causa estaba acumulada a la que termina en 788-4, por lo que información sobre ambas causas sí fue incorporada y basándose en la prueba del Ministerio Público.

Fue Mauricio Jorquera quien dijo que cinco personas sí tenían la clave de Claudia y que además se encontró con una causa, una de las de cohecho, manipulada de tal manera que incluso después del bloqueo de las claves y cuentas de Ricardo, aparecía duplicada la causa con otro delito por fraude. Eso se explica por la declaración de Carola D'Agostini y Mauricio Jorquera.

Sobre que siempre tuvieron la misma Defensa y declaró en el sumario con la misma Defensa, hay un problema de cronología. Mauricio Jorquera indicó que Claudia no tenía abogado en el sumario, dicho por Mauricio Jorquera. Malamente podía ser un abogado de ambos porque Claudia no tenía abogado. Cuando declaró Ricardo el 20 de noviembre del 2020, ya no estaban juntos. El término de la relación fue tras el allanamiento en agosto. Después empezaron incluso a hacerse denuncias de Claudia contra Ricardo y aun así, coherente con algunos de los audios que incorporaron, Ricardo dijo que sería hombrecito, que contaría la verdad, que lo hizo todo solo. Claudia estaba sola con los abogados porque los abogados nunca asumieron la causa de ella, no hay patrocinio y poder en esta causa ni en otra respecto de esos abogados. Meses después del quiebre y de todo lo que ocurría, él aun así le mandaba audios y le escribía diciendo que iba a ser hombrecito y reconocería lo que hizo y fue lo que realizó. Le dan tanta importancia a la declaración del sumario porque es la única que pudo ser corroborada por todas las pruebas e investigaciones que se hicieron. Las demás, que eran claramente



acomodaticias, tuvieron todos los errores que ya señaló respecto de los datos que entregó, siempre con el afán de involucrar a Claudia en la conducta que él realizó solo, aunque duda que haya sido solo por los usos de la clave, la entrega de documentos desde el mesón del Ministerio Público. Hay dudas para ellos de que hay alguien más que pudo ayudar a Ricardo a hacer estas gestiones, alguien que probablemente no es abogado porque no habría cometido tantos errores en las cartas, en el SAF o en el ofrecimiento de entregar las licencias, según ya señaló. Todo eso se fue acreditando en la investigación y por eso señala la investigación del sumario, porque es la única que fue acreditada de manera íntegra.

Sobre que ambos iban a comprar alcohol, Richard dijo claramente que a Claudia nunca la vio, que Ricardo iba a comprar dos o tres veces a la semana, a veces con la tarjeta de su señora cuando se equivocó de la clave. Dijo no conocer a Claudia, que nunca la vio. También señaló que cuando fue a declarar, el fiscal le arrebató el celular, corroborando la conducta que señaló Jonathan. Ambos señalaron las mismas amenazas. Pero como Richard no tenía ninguna vinculación ni archivo, se le devolvió el celular, eso lo dijo el testigo.

Sobre lo que señaló en relación con que Ricardo no pudo usar el SAF al declarar con Mauricio Jorquera, preguntó si hubo alguna prueba en el Tribunal de esa gestión que permita al Tribunal llegar a la misma conclusión, que la pantalla que se le ofreció para trabajar era la que se indicaba, del SAF con la clave puesta. Nunca aclaró desde qué página lo puso. Era un sumario. Lo puede entender de un testigo que vio algo, pero no de un sumario que tiene la obligación de consignar todas las gestiones que se hagan. O sea, todas las gestiones que perjudican a Claudia no fueron consignadas, el llamado en que Ricardo supuestamente dijo que ahora sí iba a decir la verdad y no consignó nada y no quiso recibirle la declaración. No hay ningún respaldo ni consignación de la operación que se hizo.

Sobre que Claudia realizó su propia denuncia, conocimos que otros funcionarios de la Fiscalía también lo hacían y ninguno fue sancionado ni sumariado porque no había prohibición. Si se esperaba o era mejor, eso es subjetivo, no hace que Claudia haya hecho algo equivocado, turbio u oculto. La causa fue normalmente tramitada. No hay instrucción al respecto y otros funcionarios lo hicieron según los propios testigos del Ministerio Público.

Sobre el concepto de instrumento público, es único. Cuando se refirió a las causas del 318, hay fallos de la Excma. Corte Suprema que aclararon que esos



documentos generados por el sistema, en su contenido, eran adulterados para que las personas pudieran salir otro día. A esos casos se refiere, en que el documento sacado del sistema tiene una adulteración en su contenido. La Excma. Corte Suprema dijo que eso no era instrumento público.

Sobre el perito que trajeron, lo juzgan porque en el trabajo de años solo dos veces expuso su trabajo en un Tribunal, pero lo que interesa es cuánto tiempo lleva realizando su trabajo, su formación y la calidad del trabajo. Hay que averiguar cuál de los dos peritos realizó un mejor peritaje, cuál explicó mejor el método, las operaciones realizadas, por qué y cómo llegaron a las conclusiones y cuál fue más objetivo. El que se presentó la Defensa señaló que las tomas de muestra correspondían a las que él sacaba o a las firmas que él debía periciar y para ser más acucioso con su trabajo, decidió tomar más muestras a Claudia para hacer un informe más completo. Preguntó cuál es el reproche por eso.

Sobre la incorporación de las alcoholemias por el 315, se pueden incorporar por lectura, pero se solicita y debe autorizar por el Juzgado de Garantía en la audiencia de preparación de juicio oral, no por decisión del fiscal.

Sobre que Jonathan no tenía información útil en su teléfono y que esto era prácticamente una farsa en relación con lo que ocurrió con su celular, lo curioso es que fue incautado, y si no tenía importancia por qué lo incautaron. Jonathan contó que mostró los audios, los empezó a pinchar y le arrebataron el celular, lo que escuchamos del otro testigo, que así procedía el fiscal. Luis Gutiérrez reconoció que empezó a decir que tenía elementos de prueba en su celular y supuestamente fue Jonathan quien le mandó los primeros correos cuando estaba en la Fiscalía, lo que le causa extrañeza porque ya incautado el celular, cuando Jonathan ya no estaba en la Fiscalía, se siguieron mandando a los correos de Luis Gutiérrez y al correo personal del Fiscal, además de todos los audios y correos que pretendía Jonathan incorporar ese día. La excusa es que ellos mienten y no se puede acreditar de dónde viene la prueba. Lo dicen, es del celular de Jonathan y de no ser cierto, pudieron pedir prueba nueva, acreditar con un peritaje, y eso no se hizo. Se conformaron con atacarlos pese a que la evidencia está ahí, a disposición del Tribunal.

Sobre los Whatsapp sin fecha, va al mismo ejercicio. Trajeron un perito que vio el documento digital, en que se trató de decir que era falso porque el color no se veía, pero se pudo hacer el ejercicio de traer el celular original en que consta esa conversación y compararlas. Eso habría sido más fácil para acreditar o desacreditar



la prueba que incorporaba la Defensa. Como hay una causa penal y volvió a tener contacto con su parte Paulina, que dijo llevaba más de un año sin contacto con Claudia por las amenazas que ella relató, tiene material suficiente para aportar a esta denuncia que se hizo, que no corresponde en este momento debatir. Tienen por Paulina Cisternas la posibilidad de demostrar que esa prueba es íntegra y real. De hecho, tienen la misma característica de los Whatsapp que el Ministerio Público ofreció como prueba pero no quiso incorporar y que ellos sí incorporaron para ver la similitud de los pantallazos de Whatsapp, para verificar que así estaban los celulares con que se comunicaban Ricardo y Claudia.

Sobre la renuncia de los plazos cuando Ricardo quedó en libertad, cree que este no es el lugar ni la oportunidad para demostrar que eso sí ocurrió. En un eventual recurso de nulidad sí lo demostrará con el audio. En la audiencia de preparación de juicio oral, lo recuerda perfectamente, el fiscal Caroca dijo que no presentaría recursos y renunciaba a todos los plazos. Eso se verá en un eventual recurso de nulidad.

Sobre que el Ministerio Público formalizó y acusó por el 269 bis y 269 ter, Claudia fue formalizada sólo por el artículo 269 bis, tanto es que al pedir la pena en esta acusación respecto a Claudia señala sólo la pena que pide por el 269 bis. Quien acusa sí por el 269 ter es el Querellante.

Sobre que Claudia enloda la reputación de Luis Gutiérrez, con el Whatsapp pudieron demostrar que Claudia sólo señaló lo que el coimputado le señaló. No tienen cómo saber si eso es cierto, pero sí que fue Ricardo quien a través de un Whatsapp dio esa información a Claudia.

Sobre que Huber y Víctor, ellos se contactaron con ellos desde el primer día del juicio señalando que no se sentían cómodos en declarar y por una extrañísima razón aparecieron y estuvieron conversando con los fiscales de esta causa, quienes además les advirtieron que estaban ahí. Con todo lo que ha ocurrido en esta causa, con lo que le ocurrió a Jonathan, con la denuncia por un Whatsapp que saben es auténtico, les llamó la atención de que vinieran acá tras señalar que no querían declarar el día uno. No pueden exponerse a más situaciones que puedan perjudicarlos respecto a ciertas condiciones que no pueden catalogar ni entender. Por eso a Víctor y Huber no los hicieron pasar, porque a ellos nunca les dijeron que cambiaron de idea y ahora sí querían declarar.

Insistió en su solicitud de veredicto absolutorio con condena en costas.



Que la Defensa del acusado Vega Guerrero, en su alegato de apertura, en suma sostuvo que va a reservar la mayor cantidad de sus argumentos de fondo para la clausura. Sin embargo, anticipa que en este debate habrá disconformidad sustancial sobre las participaciones, la calificación jurídica y la atribución de responsabilidad que se hace a su defendido, a quien se le iguala con un empleado público, calificación y calidad que jamás tuvo porque tiene 1° medio rendido como señaló. También habrá problemas respecto de la tipicidad delictual respecto de su representado, partiendo de la base de que la responsabilidad penal es individual y el derecho penal de última ratio. Obviamente habrá problemas que analizar sobre la comunicabilidad. Citó un fallo de la Il. Corte Suprema de mayo del 2023 en que estableció que no hay comunicabilidad respecto de un extraneus por un fraude o malversación de caudales públicos. Es un problema del que hay que hacerse cargo y que afecta la penalidad y la tipicidad.

Señaló que se acusa a su representado de dos delitos, cohecho y violación de secretos, encuadrándolos en los hechos de la acusación, pero a su representado le asiste la presunción de inocencia, que importa que el Ministerio Público debe superar el estándar para dar por establecida una responsabilidad penal. A la Defensa no le empecé ese tema. Con todo, cree que la prueba de cargo, respecto de su representado, será insuficiente para establecer la participación que se atribuye y la penalidad tipificada que se le pide. Por ejemplo, a él se le aplican los artículos 248 bis sobre el cohecho y 246 respecto de la violación de secretos. Su representado, por no ser empleado público, no podía tener algún resguardo o deber administrativo que tenga efecto en la función pública.

Planteó que además la acusación y la formalización tienen un problema de congruencia, lo que es un problema para el Tribunal porque la condena debe sujetarse a los hechos de la acusación y una incongruencia afecta todo el razonamiento. La acusación no señala la fuente legal del secreto y los preceptos legales aplicables, sino que únicamente lo señala en términos generales cuando es sabido por todos que sólo una ley de quórum calificado establece secretos. Hay que distinguir que no es lo mismo secreto o reserva o secreto reservado. La Ley General de Bancos contiene los conceptos de reserva y secreto bancario. O el artículo 247 bis del Código Penal, que habla de información reservada que posee un empleado público. No sabemos la situación que se imputa a su representado para que tenga él un deber de reserva. Tampoco existe ley que establezca que los sistemas internos del



Ministerio Público son secretos o al menos una ley de quórum calificado que así lo establezca. Solamente hay un reglamento interno que no tiene la calidad de ley de quórum calificado. Los datos SAF, SAF o SIGE de la Fiscalía no revisten el carácter de secretos, pues se limitan a señalar datos de una causa que pueden ser obtenidos inclusive del sistema interno del poder judicial. Otra cosa es la reserva. Insistió en la falta de congruencia. Sobre esta reserva, trae a colación que fue conocido por el foro el juicio oral seguido contra el Fiscal regional de la región de O'Higgins. Emiliano Arias, que fue acusado por violación de secretos y fue absuelto dos veces. Lo importante es que se estableció que la ficha SAO y SAF del Ministerio Público no son secretas y en esas causas no se imputó a terceros no empleados públicos.

Aseveró que habrá problemas sobre la comunicabilidad, la participación, tipo penal y subsunciones entre otras. A lo mejor la conflictiva que plantea sea más aparente que real porque basta leer la acusación en la parte pertinente para darnos cuenta de que la Fiscalía tiene claridad de que su representado no tiene participación penal en los hechos. En el N° 1 de los hechos señala que Claudia del Pino tramitaba causas y debía manejar el sistema informático SAF y ejecutar las acciones correspondientes en cada caso. Luego, cuando va a lo particular, dice, respecto de la violación de secreto y cohecho, Claudia del Pino Acuña tenía conocimiento de las claves de acceso a los sistemas computacionales y que por intermedio de su representado solicitaba beneficios económicos a imputados a cambio de terminar causas por términos improcedentes. Vale decir, era Del Pino la que recibía el beneficio económico a través de su representado, por lo que la responsabilidad directa y única era de la coacusada, quien sí era empleada pública y le afectaban, de la Ley Orgánica de la Fiscalía, los artículos 2, 11 y 45. Pide se considere por el Tribunal

Refirió que, para terminar, en esta causa se busca la fabricación de un culpable, de su defendido, lo que es errado. Su representado es 18 años menor que la coacusada, tiene 1° medio rendido, no es profesional, no tiene formación académica o instrucción especial. Funge de chofer cuando puede y se le permitía y fue objeto de las órdenes de su mujer, sin capacidad de oposición. Pide que se tenga en cuenta la diferencia cultural. La parte más débil es su representado, por lo que pide la exclusión de todo sesgo epistémico, sea por su origen, género, formación o extracción social.



Finalizó haciendo presente que, por todo lo expuesto, lo que se recibirá en el juicio oral, la abierta falta de congruencia en la acusación para el estándar de condena, la falta de circunstancias, atribuciones de responsabilidad, es que aboga por la absolución de su representado.

Al clausurar, la misma Defensa en síntesis, afirmó que, antes de avocarse a los hechos de este juicio, anunció en la apertura que en el juicio encontraríamos disconformidades sustanciales respecto a las participaciones de los involucrados, la calificación jurídica y la atribución de responsabilidades que se hace respecto de su defendido, en que se le iguala a la acusada, quien a la época de los hechos ostentaba la calidad de empleada pública y no su representado. En efecto, si consideramos los hechos brutos versus los institucionales, tenemos que es un hecho bruto que Ricardo Vega no es un empleado público. Es un hecho institucional que, para incurrir en los supuestos normativos previstos en la acusación, cohecho y revelación de secretos, se requiere la calidad de empleado público. Lo anterior se traduce en que a Ricardo Vega se le imputan cohechos y revelaciones de secreto en circunstancias de que no es empleado público, por lo que no tienen ningún nivel de resguardo ni administrativo que tenga efecto en la función pública. Es del caso que el verbo rector en ambos delitos imputados a Vega Guerrero tenga la calificación de empleado público y, no siéndolo su representado, no puede ser sujeto activo de ellos, no tiene el deber de secreto ni es sujeto activo de cohecho agravado, que sí empece a la coacusada.

Precisó que, además, la acusación tiene un problema de congruencia, y la sentencia que se pueda dictar se debe sujetar a los hechos de la acusación y una incongruencia afecta todo el racionamiento que se pueda pretender. En ese orden de ideas, la acusación no señala la fuente legal del secreto ni los preceptos legales aplicables, sino que únicamente los hechos están señalados de forma genérica, en circunstancias que sólo una ley de quórum calificado puede establecer secretos. Acá es válido distinguir que no es igual lo secreto que lo reservado y para ello basta recordar las diferencias que entre secreto y reserva entrega, por ejemplo, la Ley General de Bancos, o cuando el artículo 247 bis del Código Penal sanciona al empleado público que usa un secreto o información secreta o reservada. No existe una ley que establezca que los sistemas internos de la Fiscalía sean secretos o al menos una ley de quórum calificado que así lo ordene, siendo insuficientes, para fines penales, reglamentos internos de la Fiscalía. Quedó claro que los datos SAF,



SAO y SIGE de la Fiscalía no son secretos porque se limitan a señalar datos de cada causa genéricamente, a lo que se puede acceder con la clave única a la página web de Fiscalía en Línea o al Portal Judicial si la investigación estuviese judicializada. En los hechos acusados y en el delito de violación de secretos, hay una evidente falta de congruencia, pues no se señaló cuáles fueron los secretos revelados, lo que impide al Tribunal la formación de un elemento clave del tipo penal. Citó la regla de congruencia del artículo 341 del Código Procesal Penal. Ni la acusación fiscal ni la particular indican cuáles son los secretos revelados. En la misma acusación se indica que Claudia del Pino tenía conocimiento de las claves de acceso a los sistemas computacionales de la Fiscalía y que violó el secreto de información reservada. Son dos aspectos distintos. Preguntó quién tiene el deber de reserva, el empleado público o a quien se le ha revelado la información reservada. Cree que el segundo no. No corresponde hacer extensivo el deber de reserva a un no empleado público. Prueba de esto es que existe un solo caso que conoce en que se condenó a un tercero por una reserva, pero era un caso en que se aplicaba la Ley de Drogas y acá no existe un deber de reserva erga omnes, como en la Ley de Drogas. Cuando un funcionario policial da cuenta a la prensa de un accidente y señala el participante y los grados de alcohol de la persona no comete violación de secreto. La ley precisa que se trate de piezas físicas de la investigación.

Agregó que, en cuanto al delito de cohecho, se señala en la acusación que la coacusada solicitaba beneficios económicos a distintos imputados a cambio de terminar causas por términos improcedentes, percibiéndolos para sí. Eso quedó claro cuando Vega declaró y dijo que era el mensajero y que nunca se quedó con un peso, y era la coimputada quien, por su rol y estatus, tenía el dominio total del hecho y además era la que ostentaba el cargo público. No era fiscal, pero en términos prácticos lo era. Son fiscales chicos, como dijo la señora D'Agostini. Por ende se le aplican las normas de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Lo que la señora del Pino cometió es un delito especial propio en que el extraneus es su representado, el intraneus la empleada pública. Si se suprime mentalmente en el hecho al empleado público, el hecho es atípico. Cree ha justificado que Ricardo Vega era sujeto de una relación jerárquica o dominante de su cónyuge hacia él, una asimetría de poder. Ella era la abogada, la fiscal, 20 años mayor que él, quien no lo dejó trabajar porque él hacía las cosas de la casa. Ciertamente tenía el dominio completo de la situación. Era una mujer que, como dijo la señora D'Agostini, no se dejaba avasallar. Cree



quedó eso demostrado en el procedimiento. Ella manejaba sistemas, claves y efectuaba los cambios. De eso ninguna duda cabe, la prueba indiciaria es relevante. Respecto de la concertación que pretende la acusación fiscal, no se ha establecido. Cree fue todo lo contrario. Ricardo Vega, cuando ella le dijo que estaba mal de plata y sabía cómo ganarla porque nadie la vigilaba, él le preguntó si estaba segura, si no te van a pillar, vale decir, la previno. Lo mismo dijo Luis Gutiérrez y su testigo Camila Guerrero Vega. Ricardo Vega en los hechos reconoció que era el mensajero, no era artífice, nunca pudo tener dominio del hecho, por tanto cree que respecto de la señora del Pino, ella es la responsable de todo. Sin embargo, su actuar encuadra más bien en el artículo 247 bis del Código Penal porque en la causa existe un concurso aparente de leyes penales.

Refirió que, sobre la revelación de secretos, la Fiscalía lo plantea bajo la figura del inciso segundo. Ese grave daño no es tal porque toda la gente que fue objeto de esta limpieza de antecedentes por parte de la coacusada, fue luego condenada e incorporó la Defensa las causas donde fueron condenados todos ellos o sujetos a salidas alternativas uno o dos. No hay grave daño. Cita a la profesora María Inés Horwitz y procede leer una intervención suya. Se refiere a la causa del Registro Civil y que nunca se estableció que aún ahí haya habido un grave daño a la causa pública, porque la gente fue condenada por las causas o terminaron por salidas intermedias. Vuelve a leer una intervención de la misma profesora Horwitz. Comentó que ahí ella llama a los parlamentarios a modificar la normativa porque nuevamente es un delito conectado a un cohecho en concurso aparente.

Indicó que, en los delitos especiales propios, al extraneus, para imputarlo, hay una laguna de punibilidad, y si alguna vez se ha sancionado a un extraneus en este tipo de casos ha sido por un tema distinto, pero esa condena pone en jaque el principio de legalidad, que pide se respete.

Destacó que la acusada del Pino declaró para defenderse y acá nada de eso ocurrió. Ella nos habló de su vida, de su vida sentimental, de lo mal que lo ha pasado, pero este no es un juicio terapéutico, estamos frente a un caso penal. Nada de lo importante a decir dijo y dejó todo en la nebulosa. Cree que su representado sí cooperó sustancialmente con la investigación y declaró todo, lo que fue validado por cada pieza probatoria del Ministerio Público. Si bien escuchó una defensa no fundada de la coacusada, cada aspecto y afirmación que dio se cayó uno a uno, por lo que cree debe ser valorada negativamente esa declaración porque nada aportó.



Argumentó que, respecto a la incomunicabilidad del intraneus al extraneus, citaba sentencias de la Excma. Corte Suprema. Una, la ROL 31-2018 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, otra de la Excma. Corte Suprema en la causa ROL 13123-2018, que leyó extractadamente. Comentó que allí se argumentó en el voto en contra que la condena impuesta a los extraneus como cómplices del delito de malversación de caudales públicos tropieza con el escollo insalvable de que la calidad de funcionario público es incomunicable a los extraños a la administración estatal. Lo relevante de ese caso es que hoy tenemos dos sentencias actuales, una del 3 de mayo del 2022, dictada en la causa ROL de la Excma. Suprema 59857-2022, donde se absuelve a los acusados del delito del 239 del Código Penal porque a la época de ocurrencia de los hechos no tenían la calidad de empleado público. La última, del ROL de la Excma. Corte Suprema 122925, donde también se absuelve sobre la misma lógica. Lo que subyace en las últimas sentencias es la incomunicabilidad de la calidad de funcionario público. La comunicabilidad no es un principio del derecho penal. La analogía está fuera de toda discusión. Considerarlo así como principio del derecho penal vulnera la prohibición de analogía in malam partem y con ello el principio de legalidad.

Manifestó que, sobre la prueba vertida por la coacusada, es muy importante la pregunta de qué impacto en la epistemología del caso produce esa prueba y respondió que ninguna. Cree esa valoración debe ser negativa. Por ejemplo, trajo testigos claros de lo que ella dijo en su primera declaración, que no sabían que en este juicio se fueron cayendo uno a uno. Trajo testigos hostiles, como la señora motoquera, que declaró de forma hostil respecto del fiscal y su representado, que lo amenazó y si él hacía algo, hablaba con sus amigos los motoqueros. Cero aporte epistémico. También su madre, que hizo lo que toda madre hace, pero fue cero aporte. Jonathan Rebolledo es el hombre con quien ella le fue infiel a su representado estando casados. Este señor es abiertamente hostil con el fiscal y sólo trajo prueba feble, baladí. Se autodenominó perito, trajo una pseudo pericia de un teléfono donde se veían los archivos y dijo que no los pudo bajar, pero estaban los íconos y no tenía internet. O cree que somos todos subnormales o quiso pasarse de pillo frente a un Tribunal de la República. No tenía internet, nunca los iba a poder bajar. Amén de que esa prueba no tiene trazabilidad, la hizo él solo. Lo mismo sobre los pantallazos de Whatsapp, quedó claro que es prueba implantada. Es feo que eso ocurra en un Tribunal. La sicóloga no era sicóloga, nunca justificó su calidad de tal.



Sobre su representado, el señor Vega no es subnormal, pero es limitado, no tiene estudios, repitió 2° básico. No tiene las capacidades de un abogado asistente, con formación en la Fiscalía, con 15 años, con conocimientos jurídicos. No trabajaba porque su señora no lo dejaba, era la nana de la casa, ella lo llamaba gorda. Pide se valore esa parte desde el punto de vista cultural y no se consideren las normas invocadas en contra de su representado in malam partem.

Resaltó que acá, conforme al principio de especialidad y no existiendo norma residual que empezca a su defendido, sólo existe un responsable que no es otro que la empleada pública Claudia del Pino, quien primero gestionaba y alteraba sistemas computacionales para cometer delitos, tenía acceso a las claves e información reservada, los datos de imputados los tenía ella, no cooperó con la investigación, su información no fue veraz en relación con el señor Gutiérrez, trajo testigos hostiles que no dijeron la verdad, trajo un perito que con este juicio era la tercera vez que declaraba y no tomó muestras a la fiscal jefe o a Vega y que no siendo una contrapericia, fue solamente una opinión. Presentó un video hecho por Jonathan Rebolledo, con quien fue infiel a su representado, que fue enconado con el fiscal e igualmente mendaz porque el video no podía efectuar lo que presentaba porque no tenía internet. Presentó comunicaciones de Whatsapp supuestamente de su representado, prueba declarada claramente implantada como se explicó por el testigo experto de la Fiscalía local, que importó una investigación penal. Presentó también audios supuestamente emanados de Ricardo Vega sin ninguna trazabilidad o confiabilidad y nadie lo validó porque ciertamente no era él, era la voz de un niño. Su declaración como medio de defensa no fue veraz. No fue cierto que su representado se iba a la oficina de la Fiscalía todos los días a verla cómo trabajaba. Hizo que Ricardo Vega se culpara en el sumario administrativo dirigido en su contra. Visitaron a la madre de su defendido para que se culpara, lo que no es común, pero revela el constante proceder de la coacusada, quien dirigía todo. Le colocó abogados a Ricardo Vega. Hay dos transferencias de 4 millones y medio a Huber Hidalgo. No se cayó de un sillón cuando llegó la policía al allanamiento. No entregó las claves de su teléfono. Los computadores no mantenían las claves abiertas. En la falsificación de las cartas de archivo, ellas salieron de la impresora de ella y la firma era de ella según la pericia caligráfica. No era verdad que los sistemas de computación en alguna parte del SAF o SIGE estuvieran permanentemente sin bloquearse, se bloqueaban. No era fácil cambiar delitos y cambiarlos por aquéllos



que por instrucción de la Fiscalía Nacional no eran revisados por el fiscal regional. Había que ser abogado. El sistema SAF no era intuitivo, no era amigable y requería capacitación. Este señor no tenía esa facultad y quedó claro cuando fue a declarar al sumario. Los cambios que se hacían en el SIGE fueron realizados en horario de trabajo. Cuando vimos fotografías reconocidas por la ingeniera de la Fiscalía de Talca, rescató ocho o nueve que fueron en horario de trabajo, pero ella dijo que Ricardo Vega a las 3:00 am o cuando ella dormía cambiaba las cosas en SAF, pero no reparó que los sistemas comulgan de noche y a esa hora aparecían los traspasos de SAF, se actualizaba el SAF con lo que SIGE le aportaba, pero el cambio de información era desde el SIGE en horas de trabajo. Quedó claro también que el inspector Gutiérrez no era un borracho consuetudinario, como dijo la señora del Pino, y que tampoco era amigo de Ricardo Vega. También quedó claro que el fiscal Caroca no realizó ofrecimientos al señor Vega. Estuvo un año ocho meses. En la audiencia de juicio oral lo pudo sacar en libertad y no hubo renuncia a los plazos. En los movimientos o cartolas de cuentas corrientes de la señora del Pino hay ingresos de dinero, es obvio, pero hay depósitos constantes que no se condicen con el común proceder de un empleado público porque quien sea tal y no ejerza otra actividad lícita y tributable, sólo puede tener en su cuenta corriente su sueldo, los bonos que puedan llegar, y de ahí sólo débitos. Si se revisan las cartolas, hay ingresos constantes no justificados. No dice que eso sea un incremento relevante, pero es curioso ese desarrollo en el movimiento de su cuenta corriente. La prueba debe ser pesada. Pide que respecto del más débil de los acusados, su representado, se evite toda injusticia hermenéutica y testimonial por la jerarquía social y ninguna fortuna que tiene. Es el pobre en todo esto. El fiscal señaló que Claudia del Pino no existiría sin Ricardo Vega. Cree está equivocado. Acá hay un cerebro, que es Claudia del Pino, y sin ella nada pudo suceder.

Finalmente, esta Defensa, en su réplica, resumidamente planteó que quien otorgó la competencia específica al Tribunal sobre estos hechos fue el Ministerio Público y el acusador particular. Para ello se debe tener en cuenta que lo que radica los hechos es la acusación. Los jueces ponderan el derecho frente a esos hechos. Además, el derecho lo conoce el juez.

Señaló que Ricardo Vega declaró en el Tribunal y ante la Fiscalía cuando en un acto moral, incidido por su conducta, su madre y hermana, dijo la verdad sobre lo que él hizo o no hizo. Ese hecho no libera a la Fiscalía del deber de probar los



hechos de la acusación con la coherencia que debiera. Más allá de los defectos que reclamó sobre congruencia, rescata lo declarado por Ricardo Vega sobre el valor de los coimputados cuando declaran. En la declaración de Vega hay ausencia de incredibilidad subjetiva, firmeza a lo largo del procedimiento y corroboración mediante datos objetivos, que es el cúmulo de pruebas que trajo la Fiscalía. Lo importante de ello es que esos aspectos garantizan la fiabilidad de su declaración, versus la prueba de la acusada, porque parece que los separa un portal. Todos hemos visto una situación concreta, el mundo real, y los argumentos de la otra Defensa en esta audiencia. Es una cuestión que nadie ha visto. Por ejemplo, respecto de Rebolledo, quedó claro que fue o es la pareja de Claudia, que partió con una infidelidad y que en realidad estaba totalmente contaminado respecto de esta investigación. Luego, respecto del perito grafológico, cuando declaraba y le preguntaron si alguien escribió en Chile sobre los porcentajes de falsos positivos en los peritajes, leyó dos textos del profesor Duce que no se hacen cargo de porcentajes. Además, era la tercera declaración en juicio que entregó.

Refirió que en la revelación de secretos no se señala la norma legal infraccionada, sólo hoy la ha mencionado, pero no es relevante porque acá no se habló nunca de que se entregaban piezas de la carpeta investigativa porque todos los testigos de la Fiscalía han dicho que en el SIGE aparecen los documentos, el parte policial, todo. Por tanto, no hablamos de una carpeta investigativa.

Luego, el Ministerio Público pretende coautoría respecto de su representado, pero a su juicio no se probaron por el Ministerio Público los actos preparatorios de la concertación ni que en la construcción del cohecho pasivo agravado del empleado público, en su inicio, vale decir, en la obtención de datos del sistema, o en la fase final, en la modificación de los delitos y archivos, Ricardo Vega tenga participación y dominio del hecho, lo que es importante. Es justa y procedente la absolución por la incomunicabilidad. Se remite a lo ya que señaló. Reiteró que en Chile no hay norma de comunicabilidad, es doctrinario, y la comunicabilidad no es un principio del derecho penal. Considerarlo así para penalizar a un extraneus vulnera la prohibición de analogía in malam partem y el principio de legalidad. En los delitos cometidos por empleados públicos el extraño, al responder penalmente en base al delito cometido por el empleado público, no podría ser un acto de justicia material ni proporcional. Además, para el cohecho debe haber un escenario de conectividad, lo que acá no ocurre, por lo que si se pena a su representado, deben verse conductas separadas.



Luego, de haber un delito, no es el de revelación de secreto de parte de su representado, quien no pudo tener la calidad de autor. Además la figura que se le plantea a Vega no es reiteración, sino que es delito continuado que es posible apreciar por una conducta típica, reiterada, por hechos independientes pero que pueden ser calificados bajo una unidad.

Insistió en la absolución por el principio de que el juez conoce el derecho.

CUARTO: Que, en presencia de sus respectivos Defensores, Claudia Andrea Del Pino Acuña y Ricardo Ignacio Vega Guerrero fueron debida y legalmente informados acerca del contenido de la acusación y, en la oportunidad prevista en el artículo 326 del Código Procesal Penal, ambos prestaron declaración.

Por último, en el momento fijado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, luego de que el Presidente del Tribunal les informó que tenían derecho a manifestar lo que les pareciera o estimaran conveniente en relación con el juicio seguido en su contra, señalaron que nada deseaban agregar.

QUINTO: Que en este juicio los intervinientes no acordaron convenciones probatorias.

SEXTO: Que, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de la acusación y la participación de los inculcados en los mismos, los persecutores incorporaron legalmente al juicio las siguientes probanzas:

I. Ministerio Público.

A) Testifical, consistente en la declaración de las siguientes personas, todas debidamente individualizadas y juramentadas antes de deponer en estrados:

1. Carola Milena D'Agostini Ibáñez,
2. Nelly del Carmen Zenteno Flores,
3. Froilán Enrique Cofré Mendez,
4. Paulina Alejandra Salazar Hernández,
5. Karem Silvana Torres De La Fuente,
6. Carlos Alberto San Martín Almaza,
7. Carlos Andrés Mora Zenteno,
8. Cristian Leonardo Silva Salas,
9. Paulo Marcel Becerra Maldonado,
10. Rodrigo Adolfo Guerra Morales,
11. Eduardo Antonio Lobos Tapia,
12. Valesca de Las Mercedes Alarcón Urrutia,



13. Enrique Leopoldo Torres Valenzuela,
14. Elías Rolando Apablaza Vásquez,
15. Valentina Antonia Roa Acuña,
16. Diego Ignacio Vásquez,
17. Ralph John Veloz Rodríguez,
18. Víctor Segundo Muñoz Faúndez,
19. Cristian Eduardo Bahamondes Mardones,
20. Irene Katerine Castillo Aravena,
21. Fabián Enrique Ortega Bustamante,
22. Patricio Antonio Salgado Cerda,
23. Pedro Felipe Méndez Tapia,
24. Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez y
25. Mauricio Jorquera Loyola.

B) Pericial, conformada por la declaración de Germán Edgardo Miranda Pérez, quien también fue previa y debidamente individualizado y juramentado.

C) Instrumental, ofrecida según el auto de apertura en los siguientes términos textuales:

1. “Causa RUC N° 2000319388-9 por el delito de conducción en estado de ebriedad seguida en contra de Enrique Leopoldo Torres Valenzuela”,
2. “Certificado URH N° 3220 correspondiente a Claudia del Pino Acuña de la Unidad de Recursos Humanos de la fiscalía regional del Maule”,
3. “Copia Sumario administrativo FRM – IA N° 78-2020 junto a B) resolución FN/MP 58-2021 del fiscal nacional mediante la cual se confirma la sanción de remoción a Claudia del Pino Acuña”,
4. “Causa RUC N° 2000237477-4 por del delito de Conducción en estado de Ebriedad respecto de Samuel Alarcón Urrutia”,
5. “Causa RUC N 200030964-9 por del delito de Conducción en estado de Ebriedad respecto de Patricio Campos Bahamonde”,
6. “Causa RUC N° 1900104808-5 por del delito de Conducción en estado de Ebriedad respecto de Fabian Ortega Bustamante”,
7. “Causa RUC 2000284126-7 de la Fiscalía Local de Linares por el delito de conducción en estado de ebriedad seguida en contra Diego Vásquez Riquelme”,
8. “Causa RUC 1900534650-1 manejo en estado de ebriedad de Eduardo Lobos Tapia”,



9. “Causa RUC N° 190060766-8 por del delito de Conducción en estado de Ebriedad respecto de Víctor Muñoz Faundez”,
10. “Causa RUC N° 1900915769-k por del delito de Conducción en estado de Ebriedad respecto de Octavio Ayala Aravena”,
11. “Causa Ruc N° 2000145861-3 por del delito de Conducción en estado de Ebriedad respecto de Rodrigo Guerra Morales”,
12. “Copia causa RUC 2000213518-4 de La Fiscalía Local de Linares por el delito de uso fraudulento denunciante victima CLAUDIA DEL PINO ACUÑA”,
13. “Copia causa RUC 1901128408-9 de La Fiscalía Local de Linares por el delito de uso fraudulento denunciante victima CLAUDIA DEL PINO ACUÑA”,
14. “Copia causa RUC 1900718513-0 de La Fiscalía Local de Linares por el delito de uso fraudulento denunciante victima CLAUDIA DEL PINO ACUÑA”,
15. “Copia causa RUC 1900171008-k de La Fiscalía Local de Linares por el delito de uso fraudulento denunciante victima CLAUDIA DEL PINO ACUÑA”,
16. “Certificado de matrimonio de Claudia del Pino Acuña Ricardo Vega Guerrero”,
17. “Causa RUC N° 2000222937-5 por el delito de conducción en estado de ebriedad seguida en contra de Elías Apablaza Vásquez” y
18. “Causa RUC N° 2000145895-3 por el delito de conducción en estado ebriedad seguida en contra de Ralph Veloz Rodríguez”.

D) Otros Medios de Prueba, ofrecidos según el auto de apertura en los siguientes términos textuales:

1. “NUE 5948291 correspondiente a un documento de la Fiscalía Local de Linares, Decisión de archivo provisional de fecha 28 de marzo de 2020”,
2. “NUE 5948283 correspondiente donde se indica como evidencia dos hojas de la Fiscalía con el título de archivo provisional marzo 2020”,
3. “NUE 5948290 correspondiente a evidencia. Una hoja de con logo de Fiscalía Decisión de Archivo Provisional”,
4. “NUE N° 5948316. Un documento de decisión de archivo provisional a nombre Ralph John Veloz Rodríguez CI 25.711.952-1 con nombre y logo de la Fiscalía Local de Linares”,
5. “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA”,



6. “Cinco Video mp4 contenido en DVD-R que forma parte del informe pericial Sección sonido y audiovisuales N° 312/2022 de Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones. (Evacuado por el perito N° 5)”, de los cuales se incorporaron cuatro videos,
7. “Cinco fotografías entregadas por Diego Vásquez Riquelme que muestran a Ricardo Vega Guerrero”,
8. “Siete fotografías de la casa de Claudia del Pino Acuña donde se incauta las impresoras indicadas en los puntos 97 y 98”,
9. “NUE 5948315: Una impresora marca HP, modelo Laser Jet P1102W”,
10. “NUE 5948315: Una impresora marca Brother, modelo DCP-T510w”,
11. “Siete fotografías de oficina de Claudia del Pino Acuña de la Fiscalía Local de Linares, al momento de la incautación de las especies que se encontraban en dicha dependencia”,
12. “Un CPU marca Lenovo modelo Thinkcentre, evidencia encontrada en la oficina de CLAUDIA del Pino Acuña de la Fiscalía Local de Linares”.
13. “Dos Captura de pantalla de mensaje de texto de conversaciones Diego Vásquez Riquelme con Ricardo Vega Guerrero”,
14. “Nueve fotografías aportadas por la testigo Valesca Alarcón Urrutia en las que se aprecia a Claudia del Pino, Ricardo Vega, Nelson Vega y Valesca Alarcón”,
15. “Conversaciones de WhatsApp aportada por la testigo Valesca Alarcón Urrutia desde el 28 de mayo de 2020 a 24 de junio de 2020”,
16. “Doce fotografías correspondientes al domicilio de Claudia del Pino Acuña y Ricardo Vega Guerrero”,
17. “NUE 5948278: un set de detalle causas vigentes a nombre de Claudia del Pino Acuña”,
18. “NUE 5948279: Un cuaderno marca Torre tapa color negro”,
19. “Set fotográfico de nueve fotografías al vehículo de Ralph Veloz Rodríguez”,
20. “Fotografía de parte denuncia de Carabineros por detención de Eduardo Tapia Lobos conducción en estado de ebriedad de 18 de mayo de 2019”,
21. “Fotografía de antecedentes que mantiene Antonio Tapia Lobos por detención por conducir en estado de ebriedad”,



22. “Oficio Banco estado de fecha 25 de abril de 2021 el cual adjunta. a. Movimientos efectuados entre el 01-01-2019 al 30-08-2020 de los productos registrados a nombre de la clienta Claudia Andrea del Pino Acuña. a. Movimientos efectuados entre el 01-01-2019 al 30-08-2020 de los productos registrados a nombre de la clienta Claudia Andrea del Pino Acuña. d. Siniestro 3127118. e. Siniestro 3203376. g. Documentos anexos entre ellos póliza cartola históricas”,

23. “Fotografía conversación mediante aplicación Whatsapp de fecha 10 de junio de 2020 con Andrés Vega”,

24. “Un celular marca Samsung A70, color celeste, el domicilio pasaje Estero la Gloria N° 1879 villa Las Vertientes de Linares”,

25. “Un notebook marca Lenovo color gris. Encontrado en el domicilio pasaje Estero la Gloria N° 1879 Villa Las vertientes de Linares”,

26. “Un celular marca Samsung Galaxy 80 color rosado encontrado en el domicilio pasaje Estero la Gloria N° 1879 villa Las Vertientes de Linares”,

27. “Un notebook marca Lenovo color negro, encontrado en el domicilio pasaje Estero la Gloria N° 1879 villa Las Vertientes de Linares”,

28. “Una fotografía de carta presentada en Banco Estado para activar seguro de fraude, compuesto de 4 hojas, de fecha 26 de febrero de 2020, firmada por Claudia del Pino, anexo de comprobante de entrega al banco y posterior respuesta de aprobación de devolución de dinero”,

29. “Fotografía de carta presentada en Banco Estado de fecha 06 de noviembre de 2019 relacionada con movimientos no reconocidos de fecha 17 de octubre de 2019 por un monto de \$ 200.000, pesos junto a comprobante de notificación de giro en cajero Redbanc por la suma de \$ 200.000”,

30. “50 fotografías que están anexas al informe pericial documental 49-2021, evacuado por el perito German Miranda”, de las que se incorporaron dieciséis,

31. “Oficio de 31 de marzo de 2021 de banco estado respecto de seguros de Claudia del Pino Acuña”,

32. “Siniestros, cuentas de ahorros e información de productos de Claudia del Pino Acuña”,

33. “Siniestros, cuentas de ahorros e información de productos de Ricardo Vega Guerrero”,

34. “Oficio de fecha 21 de febrero de 2022 de Banco estado compuesto de 6 hojas” y



35. “NUE 5948278: Carpeta con logo de la fiscalía regional del Maule RUC N° 2000319388-9”.

II. Querellante.

Compartió las probanzas del Ministerio Público.

SÉPTIMO: Que las Defensas, en apoyo de sus pretensiones, incorporaron legalmente al juicio las siguientes probanzas:

I. Defensa de la acusada Claudia del Pino Acuña.

A) Testifical, consistente en la declaración de las siguientes personas, todas debidamente individualizadas y juramentadas antes de deponer en estrados:

1. Sonia Eugenia Acuña Corsini,
2. Richard Lorenzo Araya Brunett,
3. Tatiana Samantha Díaz Coloma,
4. Paulina Alejandra Cisterna Muñoz y
5. Jonathan César Rebolledo Durán.

B) Pericial, conformada por la declaración de las siguientes personas, ambas también debida y previamente individualizadas y juramentadas:

1. Cristian Alfonso Cáceres Muñoz y
2. Nidia Silvana Insulza Palma.

C) Instrumental, ofrecida textualmente, según el auto de apertura, como “Tramitación electrónica que consta en la oficina virtual del poder judicial de los 11 hechos de obstrucción a la investigación señalados por la Fiscalía, cuyos RUC son: 1900060766-8, 1900680959-9, 1900840692-0, 1900836255-9, 2000122215-6, 2000145861-3, 2000237477-4, 2000284126-7 y 2000014933-1”, causas de las cuales no se incorporaron la segunda ni la quinta de dicha enumeración.

D) Evidencia Material, a saber, “Un celular marca Samsung modelo A – 31 incautado a Jonathan Rebolledo Duran”.

E) Otros Medios de Prueba, ofrecidos según el auto de apertura en los siguientes términos textuales:

1. “Acta de audiencia de formalización en causa Ruc 1701166996-4 de fecha 10 de diciembre de 2017, víctima Claudia del Pino, imputado Arturo Daniel Canales Vega”,
2. “Acta de audiencia de formalización en causa Ruc 1200391563-6 de fecha 16 de mayo de 2012, formalización respecto de Rolando Gabriel Valdebenito



Bustamante por el delito de amenazas en contexto Violencia Intrafamiliar, como víctima Claudia Del Pino”,

3. “Informe de cese de convivencia entre los imputados para demostrar la dinámica entre ellos, de fecha 08 de enero de 2021”,

4. “Certificado de dominio y anotaciones de la moto patente EN-0106”,

5. “Seguro obligatoria del vehículo patente GX.RP-96 pagado por Claudia Del Pino”,

6. “Cartola N° 8 de Claudia Del Pino del Banco Estado de la cuenta corriente que le pertenece entre el 11 de marzo de 2020 al 19 de marzo del mismo año”,

7. “Cartola histórica N° 6 de Claudia Del Pino de su cuenta corriente entre el período de fecha 14 de febrero de 2020 a 2 de marzo de 2020”,

8. “Dos conversaciones mediante plataforma de WhatsApp entre los acusados Claudia Del Pino y Ricardo Vega entre los meses de noviembre de 2020 al 22 de febrero de 2021, que recae en el teléfono que aparece las copias de la página 74”,

9. “Fotografía de conversación de WhatsApp, entre Ricardo VEGA y Claudia DEL PINO, donde se especifica el número de teléfono +5642768633, consta de 4 páginas”,

10. “Cuatro Certificado de la oftalmóloga Ramina Ferreti Difonso: 1.- Presbicia; 2.- certificado de diagnóstico de astigmatismo y presbicia; 3.- receta de anteojos; 4.- receta de medicamentos con fines oftalmológicos, para poder ilustrar la dificultad que tuvo la imputada en algún momento en el uso de los sistemas de la Fiscalía, de fecha 25 de abril de 2023 y los otros tres del 21 de abril de 2023”,

11. 21 Ministerio Público. Fotografía de cuenta corriente N° 39100065511 con el monto disponible de \$7.966.144.

12. “Fotografía de conversación WhatsApp titulado Ceja Ctm”,

13. “NUE 5948329: Un compact Disc que contiene audio aportado por Claudia del Pino Acuña”,

14. “Oficio Banco estado de fecha 25 de abril de 2021 el cual adjunta. a. Movimientos efectuados entre el 01-01-2019 al 30-08-2020 de los productos registrados a nombre de la cliente Claudia Andrea del Pino Acuña”,

15. “Dos capturas de pantalla donde constan transferencia realizadas por Claudia Del Pino a Mauricio Obrador Hurtado”,



16. “Transferencia realizada por Claudia Del Pino a Hernán Villanueva Estrada, en cuyo asunto se lee abono Ricardo Vega”,

17. “Captura de pantalla donde consta transferencia realizada por Claudia Del Pino a Jennifer Gacitúa Arenas por concepto de arriendo de departamento”,

18. “205 fotografías del celular de propiedad del testigo Jonathan Rebolledo Durán que el mismo las tomó respecto en la forma que le fue devuelto el celular por parte de la Fiscalía”, de las que se incorporaron cuarenta y tres,

19. “Siete videos grabados por el testigo Jonathan al momento de recuperar su celular que le fue incautado y periciado por la Fiscalía que recae en la evidencia NUE 5948328, devuelto el 05 de mayo de 2023 y video capturado el 11 de mayo de 2023”,

20. “74 correos obtenidos de los correos respaldados de correo institucional de Claudia Del Pino entre el 04 de enero de 2019 al 30 de agosto de 2020”,

21. “Cinco fotos que recaen en esta misma denuncia de Violencia Intrafamiliar” y

22. “26 audios extraídos de la pericia al celular del co imputado Ricardo Vega que están dentro de los CD que se ofrecen como anexos de la pericia correspondiente”, de los que se incorporaron ocho audios.

II. Defensa del acusado Ricardo Vega Guerrero.

A) Testifical, consistente en la declaración de Camila Aileen Guerrero Vega, quien fue debidamente individualizada y juramentada antes de deponer en estrados.

b) Instrumental, ofrecida textualmente, según el auto de apertura, como “Set de 10 certificados de estudios de su representado más el pantallazo del portal de certificados en línea, de 2° básico a 2° medio”.

OCTAVO: Que las referidas probanzas fueron legalmente incorporadas al juicio y percibidas en su rendición de manera íntegra, personal e inmediata por los Jueces de este Tribunal, quedando el debido y cabal registro de ello, así como de toda la audiencia del juicio oral. Debido a lo mismo y por economía procesal, en este fallo sólo se extractará, de la extensa prueba rendida durante la audiencia, lo que en definitiva resultó relevante y pertinente para la formación de la convicción del Tribunal.

NOVENO: Que, tal como ya se comunicó a los intervinientes, este Tribunal, luego del debate de rigor según lo prescrito en los artículos 339 y 340 del



Código Procesal Penal y de ponderar la prueba producida en juicio conforme lo dispone el artículo 297 del referido código, logró adquirir, más allá de toda duda razonable, la convicción de que sólo se acreditaron los siguientes hechos penalmente relevantes materia de este juicio:

1. Entre los años 2019 y 2020, Claudia Andrea del Pino Acuña se desempeñó como abogado asistente de fiscal en la Fiscalía Local de Linares, Región del Maule. Dentro de sus funciones, tenía a su cargo la coordinación de causas de tramitación de mediana complejidad (TCMC), de acuerdo con la organización interna de dicha Fiscalía. En el ejercicio de sus funciones, le correspondía tramitar causas penales de mediana complejidad, respecto de las cuales debía manejar el sistema informático de apoyo a los fiscales (SAF) y ejecutaba las acciones correspondientes a cada caso.

2. En dicho contexto, Claudia Andrea del Pino Acuña procedió a desplegar las siguientes conductas propias de su cargo:

2.1. En la causa RUC N° 1900060766-8, por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol, en donde existía una alcoholemia de 0,82 gramos por mil respecto del imputado Víctor Segundo Muñoz Faúndez, archivó provisionalmente dicha investigación contra el mérito de la misma y obstaculizándola.

2.2. En la causa RUC N° 1900104808-5, por el delito de conducción en estado de ebriedad, en que existía una alcoholemia de 1,35 gramos por mil respecto del imputado Fabián Enrique Ortega Bustamante, archivó provisionalmente dicha investigación, contra el mérito de la misma y obstaculizándola.

2.3. En la causa RUC N° 1900680959-9, ingresada como cuasidelito de lesiones, aplicó un principio de oportunidad, postulando en el mismo y en suma un atropello con resultado de lesiones.

2.4. En la causa RUC N° 1900840692-0, por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol, requirió un procedimiento simplificado por el delito de conducción en estado de ebriedad en contra del imputado Carlos Manuel Sumonte Vásquez, indicando en los hechos que conducía en estado de ebriedad y con 0,92 gramos por mil de alcohol en la sangre.

2.5. En la causa RUC N° 1900915769-K, agrupada al RUC N° 1900624788-4, ingresó al sistema SAF una solicitud de formalización por un delito y un requerimiento de procedimiento simplificado incompleto.



2.6. En la causa RUC N° 1900836255-9, al menos por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol, solicitó la formalización por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol.

2.7. En la causa RUC N° 2000122215-6, por el delito de daños, luego de la audiencia de control de detención, se fijó audiencia de procedimiento simplificado por el Tribunal, pero Claudia del Pino Acuña archivó provisionalmente la investigación, contra el mérito de la misma y obstaculizándola.

2.8. La causa RUC N° 2000145861-3, por el delito de conducción en estado de ebriedad supuestamente cometido el 7 de febrero del año 2020, contenía el resultado de una prueba respiratoria de 1,23 gramos por mil del alcohol en la sangre respecto del imputado Rodrigo Adolfo Guerra Morales y el antecedente de que el mismo se negó a que le practicaran alcoholemia.

En conocimiento de ello, Claudia del Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente, a lo menos, en la descripción de la conducta punible a que se refería dicha causa, así como la graduación alcohólica con que fue sorprendido Guerra Morales, con el fin de que solicitara al último beneficios económicos a cambio de terminar su causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación.

Consecuentemente y con aquella información en su poder, Vega Guerrero contactó a Guerra Morales y le solicitó \$300.000 a cambio de que Claudia del Pino Acuña terminara la referida causa, a lo que Guerra Morales accedió, pagando posteriormente dicha suma a Vega Guerrero.

Ocurrido ello, del Pino Acuña, con infracción grave a los deberes de su cargo, a sabiendas y contra el mérito de la causa, con fecha 28 de marzo del año 2020 archivó provisionalmente la misma y cambió en un registro del SAF la calificación jurídica de conducción en estado de ebriedad a hurto de hallazgo, obstaculizando con ello gravemente la investigación.

Adicionalmente del Pino Acuña entregó a Guerra Morales, por intermedio de Vega Guerrero, un documento.

2.9. La causa RUC N° 2000237477-4, por el delito de conducción en estado de ebriedad, contenía un informe de alcoholemia cuyo resultado era de 1,58 gramos por mil de alcohol en la sangre respecto del imputado Samuel Andrés Alarcón Urrutia.



En conocimiento de ello, Claudia del Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente en, a lo menos, una descripción de la conducta punible a que se refería dicha causa más el nombre, dirección y número telefónico del imputado Samuel Andrés Alarcón Urrutia, así como la graduación alcohólica con que fue sorprendido, con el fin de que solicitara al mismo beneficios económicos a cambio de terminar su causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación.

Consecuentemente y con aquella información en su poder, Vega Guerrero contactó a Alarcón Urrutia y le solicitó \$500.000 a cambio de que Claudia del Pino Acuña terminara la referida causa, a lo que Alarcón Urrutia accedió, pagando posteriormente la suma de dinero solicitada a Vega Guerrero.

Ocurrido ello, del Pino Acuña, con infracción grave a los deberes de su cargo, a sabiendas y contra el mérito de la causa, archivó provisionalmente la misma, obstaculizando con ello gravemente la investigación.

2.10. La causa RUC N° 2000284126-7, por el delito de conducción en estado de ebriedad, contenía un informe de alcoholemia cuyo resultado era de 2,04 gramos por mil de alcohol en la sangre respecto del imputado Diego Ignacio Vásquez Riquelme.

En conocimiento de ello, Claudia del Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente en, a lo menos, una descripción de la conducta punible a que se refería dicha causa más el nombre y número telefónico del imputado Diego Ignacio Vásquez Riquelme, así como la graduación alcohólica con que fue sorprendido, con el fin de que solicitara al mismo beneficios económicos a cambio de terminar su causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación.

Consecuentemente y con aquella información en su poder, Vega Guerrero contactó a Vásquez Riquelme a los días de su detención en razón de la causa recién singularizada y le solicitó \$400.000 a cambio de que Claudia del Pino Acuña terminara la referida causa, a lo que Vásquez Riquelme accedió, pagando posteriormente dicha suma a Vega Guerrero.

Ocurrido ello, del Pino Acuña, con infracción grave a los deberes de su cargo, a sabiendas y contra el mérito de la causa, archivó provisionalmente la misma y cambió en dos registros del SAF la calificación jurídica de conducción en estado



de ebriedad a amenazas simples, obstaculizando con ello gravemente la investigación.

2.11. En la causa RUC N° 2000014933-1, por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, y cuando dicha causa ya había sido judicializada, Claudia del Pino Acuña archivó provisionalmente la investigación, contra el mérito de la misma y obstaculizándola.

2.12. La causa RUC N° 2000319388-9, por el delito de conducción en estado de ebriedad, era seguida en contra de Enrique Leopoldo Torres Valenzuela.

En conocimiento de ello, Claudia del Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente en, a lo menos, una descripción de la conducta punible a que se refería dicha causa más el nombre, dirección y número telefónico del imputado Enrique Leopoldo Torres Valenzuela, así como la graduación alcohólica con que fue sorprendido, con el fin de que solicitara al mismo beneficios económicos a cambio de terminar su causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación.

Consecuentemente y con aquella información en su poder, Vega Guerrero contactó a Torres Valenzuela y le solicitó \$500.000 a cambio de que Claudia del Pino Acuña terminara la referida causa, a lo que Torres Valenzuela accedió, sin que éste finalmente pagase dicha suma a Vega Guerrero por cuanto no le fue entregada su licencia de conducir.

2.13. La causa RUC N° 2000222937-5, por el delito de conducción en estado de ebriedad, era seguida en contra de Elías Rolando Apablaza Vásquez.

En conocimiento de ello, del Claudia Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente en, a lo menos, una descripción de la conducta punible a que se refería dicha causa más el nombre, dirección y número telefónico del imputado Elías Rolando Apablaza Vásquez, así como la graduación alcohólica con que fue sorprendido, con el fin de que solicitara al mismo beneficios económicos a cambio de terminar su causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación.

Consecuentemente y con aquella información en su poder, Vega Guerrero contactó a Apablaza Vásquez y le solicitó \$400.000 a cambio de que Claudia del Pino Acuña terminara la referida causa, a lo que Apablaza Vásquez no accedió.

2.14. La causa RUC N° 1900498181-5, por el delito de conducción en estado de ebriedad, era seguida en contra de Ralph Johnn Veloz Rodríguez.



En conocimiento de ello, Claudia del Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente en, a lo menos, una descripción de la conducta punible a que se refería dicha causa más el nombre, dirección y número telefónico del imputado Ralph Johnn Veloz Rodríguez, así como la graduación alcohólica con que fue sorprendido, con el fin de que solicitara al mismo beneficios económicos a cambio de terminar su causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación.

Consecuentemente y con aquella información en su poder, Vega Guerrero contactó a Veloz Rodríguez y le solicitó \$300.000 a cambio de que Claudia del Pino Acuña terminara la referida causa, a lo que Veloz Rodríguez accedió, pagando posteriormente dicha suma a Vega Guerrero.

2.15. La causa RUC N° 1900534650-1, por el delito de conducción en estado de ebriedad, era seguida en contra de Eduardo Antonio Lobos Tapia.

En conocimiento de ello, Claudia del Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente en, a lo menos, el nombre y número telefónico del imputado Eduardo Antonio Lobos Tapia, con el fin de que solicitara al mismo beneficios económicos a cambio de terminar su causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación.

Consecuentemente y con aquella información en su poder, Vega Guerrero contactó a Lobos Tapia y le solicitó \$500.000 a cambio de que Claudia del Pino Acuña terminara la referida causa, a lo que Lobos Tapia accedió, pagando posteriormente dicha suma a Vega Guerrero.

2.16. En la causa RUC N° 2000185678-3, por el delito de conducción en estado de ebriedad, seguida contra el imputado Manuel Alejandro Paredes Dagnino, se ejerció una facultad de no iniciar investigación.

2.17. En la causa RUC N° 2000213518-4, Claudia del Pino Acuña denunció que, sin su autorización, alguien había realizado una transacción desde una de sus cuentas del Banco Estado por una suma que no mencionó, haciendo presente que mantenía al momento de dicha transacción un seguro contra fraudes. Dicha suma denunciada por del Pino Acuña le fue devuelta.

2.18. En la causa RUC 1901128408-9, Claudia del Pino Acuña denunció que, con fecha 17 de octubre del año 2019, se realizó, sin su autorización, un giro desde su cuenta corriente por la suma de \$200.000, lo que a su juicio correspondía a



una clonación o a un delito similar. Dicha suma denunciada por del Pino Acuña le fue devuelta.

2.19. En la causa RUC N° 1900171008-K, Claudia del Pino Acuña denunció que, con fecha 25 de enero de 2019, se realizó, sin su autorización, una transferencia desde su cuenta corriente por la suma de \$20.000 y luego un giro por \$70.000, haciendo presente que contaba con un seguro contra fraudes.

DÉCIMO: Que los presupuestos fácticos consignados en el considerando anterior resultaron legalmente acreditados, primeramente y en lo referente al punto 1 del considerando precedente, con el mérito de lo declarado sobre el punto por la testigo Carola Milena D'Agostini Ibáñez, quien manifestó ante estrados que es fiscal jefe de la Fiscalía de Linares y trabaja en la Fiscalía hace 22 años. Comenzó en el Ministerio Público designada del 14 de mayo del 2001, en Linares. El 2009 fue designada como fiscal jefe de Parral. De octubre o noviembre del 2009 a agosto de 2011, entre medio fue fiscal Regional en Talca por el cambio de fiscal Regional. En agosto del 2011 regresó a Linares previo concurso público y se le designó como fiscal jefe. De agosto del 2011 está en la Fiscalía de Linares como fiscal jefe.

Explicó que en la Fiscalía de Linares han ido mejorando su capacidad en cuanto a fiscales. Comenzaron siendo cuatro fiscales, posteriormente se les asignó uno más y actualmente son seis fiscales. Se dividen por especialidades. La carga de trabajo anual de la Fiscalía es de aproximadamente 10.000 casos. Cuentan con tres abogados asistentes actualmente que conforman un equipo de tramitación que se llama tramitación menos compleja o TCMC, a los que se asignan casos de menor complejidad habitualmente asociados a penas que no exceden de los 540 días. Hoy eso ha mutado y se han considerado como de baja complejidad otros delitos que puedan tener un poco más de pena, de 541 días. Habitualmente son los manejos en estado de ebriedad, algunas causas de receptación, pero en la medida en que esos casos se conviertan en complejos, se resignan a los fiscales. Además, desde el 2017 se creó el sistema SIGE que es de gestión, que crea la carpeta digital. Desde el año 2017 reestructuraron todo el sistema administrativo en equipos de trabajo. Tienen un equipo descentralizado que se encarga de la digitalización de las carpetas, un equipo administrativo que ejecuta todas las tareas que como fiscales disponen, como órdenes de investigar, solicitudes de alcoholemia, autopsias, citaciones de personas. Les resuelven los requerimientos del sistema de información y de atención de usuarios o SIAU. También todas las tareas que antiguamente le asignaban a un



gestor que los ayudaba en sus labores administrativas de apoyo a la investigación, las hace ahora este equipo llamado de servicios administrativos. También hay un equipo de servicios generales, donde está la oficina de parte, la atención de público además, y apoya en otro tipo de gestiones. Ahí están los auxiliares de la Fiscalía que se encargan de trasladar evidencia, personas o a fiscales si deben ir al sitio del suceso. De la mano con el fiscal jefe está la administradora, que en Linares es Nelly Zenteno. Ambas trabajan muy en conjunto. La administradora ve lo administrativo y el fiscal jefe se supone debe hacerse cargo de lo jurídico. Los fiscales jefes reparten su jefatura con las especialidades. En principio el fiscal jefe es más un coordinador y transmite al personal las directrices del fiscal regional para que se ejecuten.

Señaló que, sobre el funcionamiento de la Fiscalía, cuentan con varias plataformas informáticas distintas. La que funciona a nivel nacional es el sistema de apoyo a Fiscales, que existe desde el 2000 o 2001, que es el SAF. Es la plataforma informática donde se ingresan los partes, se generan las relaciones de víctima, delito e imputado, donde están ingresados todos los intervinientes de la causa y donde se debe ir dejando constancia de la historia de la carpeta, esté o no asociada a un documento, porque no necesariamente se genera un documento cada vez que se hace una actividad. Por ejemplo, si se va a citar telefónicamente a una persona, se deja constancia pero no necesariamente se genera un documento. El SAF es el sistema donde se genera el historial jurídico de la causa. Desde el 2017 se creó el SIGE. Desde esa época hasta hoy se ocupa el SAF igual, pero con cambios. Sobre el SIGE, es paralelo al SAF. Es un sistema de gestión que se creó en la Fiscalía de Talca, validado por la Fiscalía Nacional. No funciona autónomamente. Está aprobado y visado por la Fiscalía Regional. El SIGE vino a reemplazar varias cosas. Para ilustrar, ella tenía una carpeta material armada con papel y portada, su etiqueta para saber el RUC y el nombre del delito, entre otras cosas. Cuando quería una diligencia, le colocaba un post it o un papelito y la pasaba a su gestor, como si necesitaba un oficio, o una alcoholemia. Como la carpeta material desapareció y se transformó en una digital, todo lo que estaba en esos papelitos se hace a través de SIGE, que tiene una serie de aplicaciones donde están las decisiones de término o no de término. Hay que conocer mucho la plataforma para entenderlo. Tiene varios hitos. Se debe primero tener una clave de acceso, que es personal y se supone es intransferible, porque da acceso al conocimiento de una carpeta investigativa. Salvo cuando se sale de vacaciones o se va a estar ausente, se entrega la clave para que



alguien entre al sistema si es necesario. Ella no conoce la clave de ninguno de sus colegas. Salvo que se las entreguen por algún motivo, esa información la desconoce. Al entrar al sistema hay varias alternativas. Unas son las decisiones como las de término, donde se pide se archive provisionalmente una causa. Esa solicitud la hace a través de SIGE y rebota en un equipo de trabajo que debe ejecutar la orden que dio, ejecutar materialmente el documento que diga archivo provisional. Lo mismo con el principio de oportunidad, la facultad de no iniciar. De todo lo que decide, queda constancia en las diligencias que pide a través del SIGE. Hoy el SAF sólo sirve para dejar constancia del historial de la carpeta, pero el historial de las diligencias que se hacen y la ejecución de las mismas y la constancia material de una carpeta, lo que el día de mañana se entrega en copias a una Defensa, está en SIGE, no en SAF. Prioritariamente, desde el 2017, SIGE lo deben ocupar todos. No se puede trabajar sin entrar al SIGE, que es el que reparte todas las actividades que se hacen dentro de la Fiscalía. SAF, salvo que quiera hacer una actividad independiente lo ocupa, si no se deriva por SIGE. Lo normal es que todas sus actividades las derive por el SIGE y es importante porque va dejando constancia de la historia de la causa.

Refirió que, sobre el TCMC en esa época, 2018 en adelante, ha evolucionado. Uno de los equipos que se creó el 2017 con la llegada de SIGE fue el equipo de preclasificación a cargo de abogados asistentes. Les sacaron un abogado asistente, que en Linares fue Paulina Salazar, y ella se hizo cargo de la preclasificación, que revisa todos los partes que ingresan a la Fiscalía, debe leer el parte, la ficha SAO y determina el tipo jurídico, si están bien hechas las relaciones y las diligencias que se ejecutarán. Así, en el TCMC, de tres abogados que tenía antes, se quedó con dos. Es tramitación de casos menos complejos. El equipo de la Fiscalía de Linares de TCMC eran Patricia Spiess y Gustavo Flumen. A fines del 2017, Gustavo pidió su traslado a Talca y quedó el cargo vacante. Pensó iban a llamar a concurso interno. Linares no tiene muy buena fama por la carga de trabajo. En marzo o abril llegó Claudia Del Pino, a la que reconoce en la sala de audiencias. La verdad es que tuvo muy poco contacto con ella el 2018 cuando llegó porque ella se fue a Temuco a ser parte de un equipo, se fue un 2 de abril a Temuco, pensando que no iba a volver en hartos tiempos. Cuando volvió, Claudia se fue con licencia médica porque se operó de la cadera. Ella volvió el 18 de mayo de ese mismo año. En ese período la subrogó María Teresa Recabarren. Por un tema de comisión de servicio, ella (la testigo) iba y venía cada 10 días. Por esa intermitencia decidió volver. Llegó



el 18 de mayo a Linares de nuevo y se incorporó a sus funciones de fiscal jefe. Se encontró con este equipo de trabajo con una abogada asistente menos. Pidió apoyo porque la carga de trabajo era muy fuerte. Era complejo el trabajo del TCMC por los ingresos. La vigencia era muy alta, por sobre 1000 causas por abogado asistente. Han tratado de bajar vigencias porque lo que se termina ingresa, incluso más, y tienen el mismo número de abogados asistentes, que son dos en Linares. El 2018 ella se hizo cargo de las causas asignadas a Claudia que Claudia prácticamente no vio porque llegó y se fue con licencia médica. Cree volvió en enero del 2019, pero estuvo todo el 2018 afuera. Tuvieron breves apoyos de abogados asistentes que vinieron a trabajar por unos meses, pero no fue mucho el avance. El 2019 volvió Claudia.

Manifestó que, sobre el trabajo de TCMC, cada abogado asistente tiene su asignación y trabajan de manera bastante independiente. Los fiscales jefe son los jefes de equipo y deben hacer varias labores de control, como la vigencia, los califican, ven sus metas, asocian lo que hacen al cumplimiento de metas. El control de vigencia siempre ha sido bien importante. En eso hay un control regional mensual en que se les mandan un reporte de causas sin actividad por más de 60 días y se solicita a los abogados asistentes y a los fiscales también, que vayan avanzando con las causas sin actividad. Los fiscales jefe son más bien coordinadores que controladores. Entre sus labores está la de comunicar a los colegas las directrices regionales en cuanto a sus metas, qué había que priorizar, darle un contenido jurídico a las causas. Por ejemplo, como criterio jurídico, todos los archivos provisionales con pena aflictiva deben ser aprobados por el fiscal regional. En materia de manejo en estado de ebriedad, todos los que tengan alcoholemia superior a 1,5, para llegar a una suspensión condicional, se requiere autorización del fiscal regional.

Añadió que desde el 2019, el equipo eran Patricia Spiess y Claudia del Pino. Patricia había trabajado muchos años con ellos en la Fiscalía. De Claudia no sabía nada porque fue una designación del fiscal regional. A ella nadie le preguntó nada, no hubo entrevista personal. El 2019 llegó y recién empezaron a conocerse entre comillas, porque el conocimiento es a nivel laboral, no tanto a nivel personal. Sabía que Claudia se había operado de la cadera, que venía de la Sexta Región. Más de una vez fue a su oficina, miró sus diplomas, en qué universidad estudió, vio un diploma de un magíster o un diplomado. Se notaba que era una persona que estudió



posteriormente. En verano, en vacaciones, se pregunta a los abogados asistentes si querían subrogar y Claudia siempre estaba disponible. Claudia subrogó a tres fiscales si mal no recuerda. En las subrogancias incluso debió tomarle un juicio oral a una fiscal. Incluso ella la vino a acompañar. Recuerda que cuando tuvo una causa de abigeato con un juicio este año, tenía el control de detención con varias personas imputadas, y le preguntó o Claudia le pidió acompañarla. Vinieron a la audiencia, estuvieron acá, pidieron prisión preventiva. Claudia la acompañó. Le preguntó si la podía acompañar al juicio oral y le respondió que sí. Todos los fiscales han tenido la misma disposición con quienes quieran acompañarlos a un juicio o subrogar. Le pareció bien eso de una abogada asistente que quiere ser fiscal y aprender. Claudia siempre tuvo muy buena disposición para ir a audiencias, subrogar, tomar juicios orales. Tenían una confianza súper, cero cuestionamiento. Además, venía con estudios previos. Estaba ella muy interesada en apoyar a la fiscal de delitos sexuales. A diferencia de Paty, quien tenía ciertas falencias, era un poco dispersa y cometía más errores jurídicos que se veían en las audiencias. Con Claudia no, se notaba que se manejaba. Con Paulina Salazar le pasa lo mismo, es muy proactiva, estudia. Cuando volvió Claudia del Pino el 2019, hasta julio del 2020 estuvo porque el 24 de julio tomaron conocimiento de esto. A Claudia se le asignó la cartera de causas de Gustavo Fluman, tramitó esas carpetas, que eran más de 1000 causas. Al volver Claudia se quedó con esa cartera de delitos y se le asignó, como a Paty, hasta que igualaron más menos sus cargas de trabajo, y tramitaba sus carpetas de manera autónoma. Ella tomaba las decisiones, qué archivaba, qué oportunizaba, dónde había una facultad de no iniciar, dónde iba a haber un requerimiento, recibía su correspondencia, decidía si la descartaba sin leerla o no. Era una tramitación completamente autónoma, como la de las Fiscales.

Coincidentemente, Paulina Alejandra Salazar Hernández testificó que es fiscal del Ministerio Público y trabaja en dicha institución desde el 2008 en suplencias y, como titular, del 2009 en Linares. El 2009 como abogado asistente hasta el año 2022, cuando en mayo empezó a ejercer como fiscal subrogante. Entre el 2017 y 2020 era abogado asistente como preclasificadora, lo que consistía en que todos los partes ingresados a la Fiscalía los analizaba, determinaba la asignación y daba las primeras diligencias o una salida anticipada. Con TCMC, ella preclasificaba las causas y podía determinar a quién se le asignaba bajo los criterios de la Fiscalía Regional y Nacional y sobre esa base, se determinaba qué causas iban a TCMC y a



los fiscales. Los criterios que seguía eran regionales, no locales. El criterio inicialmente era en base a la pena asignada al delito. Todos los de 540 días al TCMC para pedir el simplificado y los con penas superiores, a los fiscales correspondientes. Eso era siempre. Generalmente, como excepción, algún delito con imputado prolífico se evaluaba y eventualmente se asignaba a un fiscal. Cuando ella no estaba, la subrogaba la fiscal jefe. En ese periodo, TCMC eran Patricia Spiess y Claudia del Pino, a la que conoció el 2018 cuando llegó a la Fiscalía de Linares. Como colegas en el trato diario interactuaron, tenía la oficina contigua a la suya y en el día se topaban y conversaban. Claudia llegó el 2018, estuvo un tiempo y después salió con una licencia bastante larga por una cirugía a la cadera y luego regresó poco tiempo y comenzaron con teletrabajo. Volvió el 2019. En ese periodo del 2019 en adelante, la veía cuando regresó, diariamente, cuando llegaba a la oficina en la mañana, ella iba a audiencias también como Patricia una o dos veces a la semana y el resto del día estaba en la oficina.

Indicó que, de la denuncia del cohecho, supo que había una investigación contra Claudia cuando ya estaban en teletrabajo. Sobre el contenido de la investigación, no supo qué se investigaba. Solamente en general que se hizo una investigación por diversos delitos. Luego supo que estaba el tema de estas denuncias sobre los cobros en las cuentas de ella y además que existía una investigación en que se habría señalado que Claudia habría modificado información del SAF para cambiar el delito, no sabe el detalle, al parecer para cambiar el tipo de delito, generalmente manejo en estado de ebriedad por otros, para luego archivarlas. Hubo una causa en que hubo una denuncia, que preclasificó e informó, en que se acusaba a Claudia por un tercero que señalaba que ella efectuaba cobros a partir de darle término a causas por manejo en estado de ebriedad. Recuerda que el denunciante decía que no era de Linares, que no conocía a las personas a las que Claudia contactó pero sí los domicilios. Lo informó a la fiscal jefe y a la administradora. Esto tiene que haber sido el 2019, pero no tiene certeza.

Contestó que, sobre el TCMC y la autonomía el 2019 y 2020 con que trabajaban las abogadas de esa unidad, siempre ha funcionado totalmente autónomo porque es un equipo jurídico que tramita causas menos complejas a las que se les asigna diariamente causas y, partiendo del principio de la buena fe, de la probidad y objetividad, las personas de estos equipos tramitan las causas y toman las decisiones correspondientes, por lo que su funcionamiento es totalmente autónomo, sin



perjuicio de que tienen una comunicación directa con la fiscal jefe o fiscales a los que pueden consultar por causas con complejidades. Ella trabajó en el TCMC.

En el mismo sentido, Tatiana Samantha Díaz Coloma declaró que es fiscal de la Fiscalía Local de Curicó e ingresó a la Fiscalía el 2007, el 2008 pasó a ser abogado asistente en la Fiscalía de Arica y el 2012 se trasladó a la Fiscalía de Rengo, donde conoció a Claudia, donde fueron compañeras de trabajo, ambas como abogado asistente. El 2014 se fue a Rancagua como abogado asistente y finalmente el 2018 fue nombrada fiscal en la Fiscalía de Linares, donde estuvo hasta agosto del 2021. En ese tiempo, también estaba Claudia como abogado asistente de la unidad de tramitación con Patricia Spiess. Ella era fiscal de apremios, armas, violencia intrafamiliar. Tenía contacto con ella porque era una compañera de trabajo que en su opinión era muy responsable. La conocía de antes. Era preocupada por las causas. En vacaciones le pidió que la subrogara e incluso ella le tomó un juicio oral. Tenía confianza en su trabajo y en su responsabilidad. Sobre si tuvieron una relación de amistad, no. Tenían tanto trabajo en la Fiscalía de Linares y ella tenía a sus hijos. No compartían fuera del trabajo, pero sí la consideraba una amiga y compañera de trabajo con la que podía contar. Conversaban, hicieron un par de veces cambio de turno de salas, tenían buena relación. Sobre la forma de trabajo de la Fiscalía, en Linares los abogados asistentes tramitaban delitos con simplificado, las acusaciones eran de especialidad. Por ejemplo, tramitaban robos, violencia intrafamiliar, manejos, pero siempre sin acusación. Respondían el SIAU, atendían a sus citados, a veces tomaban denuncias e iban a audiencias las dos abogados porque la otra abogado asistente, Paulina Salazar, preclasificaba. Hacían minutas para las audiencias. También subrogaban a fiscales y tomaban juicios en ese caso. Ese era en general su trabajo. No había reglas claras en cuanto a lo que hacía el abogado asistente del fiscal. Los dos fiscales nuevos de Linares pidieron que se estableciese bien, para evitar sobrecargas, pero eso no se estableció, por lo que dependía de cada fiscal qué entregaba al abogado asistente. En su caso, era responder el SIAU y se encargó de que no se cerraran causas en su ausencia. No había reglas claras de qué debía hacer el abogado asistente en las subrogancias. Eso generaba una sobrecarga para los asistentes porque Paty y Claudia debían hacer minutas de todas las causas con audiencias. Ella, el 2019, tenía más de 500 causas y ellas tenían el doble, como 1000 causas cree. Tenían sobrecarga por responder los SIAU o requerimientos de



víctima y abogados, que son con plazo. A veces responder los SIAU del fiscal subrogante y hacer escritos de plazo en causas que no habían tramitado.

Siguiendo con el hecho analizado, Nelly del Carmen Zenteno Flores manifestó en el Tribunal que es administradora de la Fiscalía Local de Linares y administrar la Fiscalía implica manejar recursos económicos y humanos, gestión de personas y procesos. En la Fiscalía local de Linares está del 2005 y antes partió el 2001 como administradora de la Fiscalía de Parral y el 2003 asumió como profesional de finanzas de la Fiscalía Regional del Maule. En lo jurídico, hay dos grandes equipos en la Fiscalía de Linares, tres e un minuto dado. Primero el equipo de fiscales con sus especialidades. Luego el equipo de abogados asistentes o TCMC y un abogado pre clasificador que era un abogado asistente. El abogado de TCMC tramita causas menos complejas, como amenazas, hurtos, lesiones, en un momento dado por la pena. Ellos dictan diligencias de investigación, leen la correspondencia y toman decisiones sobre la causa, como términos judiciales o facultativos. El abogado de TCMC tiene autonomía completa en relación con sus causas.

Añadió que declaró en una investigación administrativa que nació por una denuncia que recibieron en la Fiscalía contra una compañera de trabajo, Claudia del Pino, quien era abogado TCMC. Claudia llegó a la Fiscalía de Linares en marzo del 2018, a las semanas presentó licencia médica, casi todo el 2018 con licencia y se reincorporó el 2019. El 2019 y 2020 estuvo presencial hasta la pandemia, en que prestó servicios por teletrabajo. Cuando partió la pandemia se les indicó que podían unirse a teletrabajo las personas de riesgo y Claudia le señaló que tenía un problema de presión arterial y se fue 100% al teletrabajo. En el sumario se investigaba, de lo que sabe según la denuncia de julio del año 2020, que Claudia terminaba causas a cambio de dinero. Eso supo a través de la denuncia que recibieron en la Fiscalía, que llegó por transferencia de la Sexta Región y recibió el funcionario a cargo de recepción de la denuncia, que debe leer el relato, y el funcionario subió y le dijo que necesitaba que viese esa denuncia, la leyó y le dijo que se la pasara porque lo vería con la fiscal jefe, a la que se lo informó y ella empezó a tomar contacto con la Fiscalía Regional. Froilán Cofré era el encargado de la recepción de las denuncias.

Explicó que en la Fiscalía se usa como sistema informático el SAF, sistema de apoyo a los fiscales, que es de tramitación y gestión de causas y evidencias, un similar a SIAGJ del Poder Judicial. Con el tiempo se fueron sumando otros sistemas como el SIAU o sistema integral de atención de usuarios. También el OPA que es un



sistema de orientación y apoyo a víctimas de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. También el SIGE o sistema integral de gestión, que incorpora la carpeta digital y toda la tramitación y solicitudes de los equipos jurídicos a los administrativos. Antes, con la carpeta física, se dejaban notas de las diligencias en la carpeta. Con el SIGE eso se eliminó y ahora, cuando el fiscal pide una diligencia, se hace por esta plataforma y llega a un equipo. También opera para todo el equipo jurídico, fiscales, abogados asistentes y pre clasificador. El SAF en la Fiscalía es el sistema principal. Toda la información que se obtiene de bases de datos se obtiene en el SAF. El SIGE opera con un sistema operativo más nueva, distinto al del SAF. En el SIGE el objetivo principal es mantener y nutrir la carpeta digital. Todas las actividades que se hacen en SIGE se reflejan en la carpeta digital, por lo que se tendrá una carpeta digital lógica, ordenada de acuerdo al tiempo en que se realizan las actividades. El SIGE y el SAF tienen comunicación completa, deberían tener los mismos registros. Si se toma una declaración en SAF y se digita, graba, esa, en la noche, se copiará automáticamente en el SIGE y los documentos que no se copian automáticamente, porque no siempre tienen permiso para que todos los documentos se copien automáticamente por la Fiscalía Nacional, se deben subir a la carpeta digital. Lo que se haga en SIGE pasa directamente al SAF y lo que se hace en SAF también y si no, debe subirse, lo que es obligación del jurídico que ejecuta la actividad, el fiscal o abogado asistente.

Con mayor precisión en cuanto a las fechas en que la acusada del Pino Acuña se desempeñó en la Fiscalía local de Linares, la prueba descrita en el auto de apertura como “Certificado URH N° 3220 correspondiente a Claudia del Pino Acuña de la Unidad de Recursos Humanos de la fiscalía regional del Maule. (que era funcionario público)”, que aparece suscrita por Mariela Méndez Vega, jefa de recursos humanos de la Fiscalía Regional del Maule y fechado el 4 de agosto del año 2020, refrenda, dada la certificación que contiene, que dicha encausada a ese día trabajaba para tal Fiscalía desde el 18 de agosto del año 2005 y que desde el 6 de marzo del año 2018 se desempeñaba en la Fiscalía local de Linares en el cargo de abogado ayudante de fiscal, adscrita al grado IX del escalafón superior del Poder Judicial, con contrato indefinido.

Pasando ahora a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.1 de la motivación precedente, resultaron debidamente establecidos, primero, con lo declarado sobre ellos por el testigo Víctor Segundo Muñoz Faúndez, quien



manifestó ante estrados que es psicopedagogo, trabaja para el servicio Mejor Niñez, ex SENAME. Es parte de una dupla psicosocial. Está por ello familiarizado con el sistema de justicia en general. Tuvo un accidente en que se vio involucrado. Estaba bajo la influencia del alcohol en ese momento y pasado el tiempo, se hizo un proceso de audiencia normal hasta que en un momento Carabineros fue a su casa por desacato a una audiencia y se generó una nueva audiencia en que se dictaminó la suspensión de su licencia y un pago a bomberos. El 2019, cree en febrero, en Linares, una motocicleta se pasó un ceda el paso y lo chocó por la derecha. Hubo daños leves físicos de ambos. Fue un accidente común y corriente en que llegó Carabineros y tomó el procedimiento. Fue entre las 8:30 y 9:30 pm. Carabineros lo llevó al CESFAM, al SAR San Juan de Dios de Linares, le hicieron dos pruebas sanguíneas de alcohol, estuvo detenido por un par de horas y fue dejado en libertad como a las 12:00 de la noche. Cree que la primera prueba fue un alcotest y la segunda una alcoholemia. Sobre el alcotest, fue positivo, dio como 0,7, y el segundo salió más alto, no recuerda el número. Su licencia quedó retenida por Carabineros. Esto fue en febrero del año 2019 Desde esa fecha se iba a hacer una audiencia ese mismo año, cree el 2020, pero empezó la pandemia y llegó una resolución en que las audiencias se suspendían hasta nuevo aviso. Luego pasó la pandemia, se regularizaba un poco el sistema, no se le notificó de una nueva audiencia y llegó Carabineros con una orden de detención por no haber ido a una audiencia de la que no sabía. Se hizo esa audiencia y se dictaminó la suspensión de su licencia y el aporte a bomberos. Eso pudo ser el 2021. Le suspendieron la licencia por dos años más el pago de montos a bomberos y la suspensión condicional de la causa cree por 6 meses en que no debía meterse como en problemas para que la causa fuera totalmente cerrada. Sobre la tramitación de su causa y si fue normal o no, cree que fue regular, porque con el tema de la pandemia hubo una irregularidad en las audiencias y eso generó que la audiencia que se iba a realizar en una fecha se suspendiera. En ese escrito el Tribunal decía que se iba a retomar en una fecha indicada por ellos y quedó a la espera de una notificación, pero después llegó Carabineros a su casa con una orden de detención. No sabe por qué no se notificó antes. Luego de esto, no tuvo participación en otro proceso o investigación. Sí lo citó la Policía de Investigaciones porque al inicio de la causa fueron a su casa consultándole si algún estamento de Tribunal se había comunicado con él para solucionar la causa y contestó que no tuvo contacto con nadie de Tribunales.



En relación con lo mismo, el comisario de la Policía de Investigaciones Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez testificó que trabaja en la Policía de Investigaciones hace 17 años, solamente en la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) en Santiago y en Linares. La BRIDEC investiga un abanico de delitos que van de la estafa, cohecho, usurpaciones y otros. Hasta hace poco era subjefe de unidad pero llegó un funcionario más antiguo y ahora está tercero en el escalafón. Por 5 años fue subjefe, entre el 2018 y el 2023. Como subjefe, se le asignaban las investigaciones un poco más complejas o mediáticas dado que junto con ser funcionario de la Policía de Investigaciones, tiene el título de contador auditor. Ejerció en el sector privado en un banco, en una empresa exportadora, como jefe de finanzas y gestión. Esto nació a fines junio del 2020 por un requerimiento de la Fiscalía de San Javier para investigar un hecho por una denuncia de Nelson Vega, quien denunció en Rengo, a mediados de junio del 2020, una situación irregular que estaba vinculada a una persona relacionada con él, su hermano Ricardo Vega.

Señaló que en las primeras diligencias que se realizaron recuerda que leyó los antecedentes, validó la información y se coordinó con el fiscal. Primero fue validar si el denunciante era fiable y los antecedentes que aportaba eran acordes a lo que indicaba. Para eso fueron a Rengo con el fiscal y el colega Cristian Bahamondes y entrevistaron a Nelson Vega quien aportó antecedentes que eran en primera instancia bien vagos, pero posteriormente hizo alusión a la identidad de personas que daban cierto indicio de la comisión de algunos ilícitos. En el relato que recuerda entregó Nelson, dio cuenta de que su hermano le dio cuenta a él de que su cuñada, Claudia del Pino, junto a él, Ricardo, hacían gestiones para arreglar causas en los delitos de manejo en estado de ebriedad y dentro de esto, que cobraba por hacer estas movidas entre paréntesis y daba mención de tres personas, entre las cuales recuerda un señor de una botillería, otro de una verdulería y otro de Longaví y mencionó que este señor, dentro del pago, consideró un cordero para un asado, lo que dio cuenta de cómo validar esa información. También refirió que había mantenido una relación sentimental con la Valesca Alarcón y al hermano de ella le habían ayudado a cambio de dinero por archivar o borrar la causa por un manejo en estado de ebriedad.

Añadió que dentro de las diligencias que realizó en dicha investigación, contactaron a algunas personas, entre las que recuerda a Patricio Campos, Víctor Muñoz y Héctor Tapia, a los que se tomó declaración, dieron cuenta de haber sido



detenidos por manejo en estado de ebriedad en su momento y desconocieron que alguien los hubiese contactado de la Fiscalía o de un Tribunal. Del Ministerio Público indicaron que esas causas estaban archivadas.

Análogamente, el comisario de la Policía de Investigaciones Pedro Felipe Méndez Tapia manifestó en la audiencia que su unidad de trabajo es la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de Linares, donde trabaja por ya 5 años. Este juicio es contra Claudia del Pino y Ricardo Vega, por unas causas de cohecho que fueron tramitadas en la Fiscalía Local de Linares y en que diferentes personas pagaron dinero y se les archivaron las causas. Le correspondió ser testigo de algunas causas porque esta investigación la llevó el comisario Luis Gutiérrez. Fue testigo en algunas actuaciones con él. Gutiérrez era el oficial de caso y en la unidad es oficial investigador. Fue testigo de la declaración de Octavio Ayala, Patricio Campos, Víctor Muñoz y Humberto Tapia. Los cuatro tenían un patrón en común porque en todas esas declaraciones, si bien estas personas dicen que no fueron contactadas ni realizaron pagos, sí sus causas fueron archivadas. También todas eran causas por manejo en estado de ebriedad y detenciones por Carabineros por esos delitos. Lo único que no reconocen ellos que alguien los haya contactado pidiendo dinero para el archivo.

En la misma línea y estableciendo el grado de alcoholemia con que conducía el vehículo motorizado el señor Muñoz Faúndez, se incorporó la carpeta investigativa la prueba descrita como “Causa RUC N° 190060766-8 por del delito de Conducción en estado de Ebriedad respecto de Víctor Muñoz Faundez”, misma en que, en su página 1, figura un parte de detenidos, emanado de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares, donde se lee Fiscalía Local de Linares; N° de Parte 00102; fecha de detención 14/01/2019; hora de detención 23:25; funcionario a cargo del procedimiento Ceferino Arcadio Retamal Parraguez, suboficial; código del delito 12078 conducción bajo la influencia del alcohol con o sin daños; fecha del delito 14/01/2019; hora del delito 21:15; lugar de ocurrencia cruce con señal ceda el paso; dirección México/Nueva Imperial de la comuna de Linares; identificación del detenido Víctor Segundo Muñoz Faúndez; N° de documento de identificación 18655953-3; lugar de detención consultorio San Juan de Dios de la comuna de Linares; documentos adjuntos acta de declaración de la víctima, acta de declaración de carabinero, acta derechos detenido, acta de alcoholemia, acta de daños, acta de comprobación de identidad, formulario de accidente de tránsito, muestra intoxilycer;



Relación de los Hechos: VICTOR SEGUNDO MUÑOZ FAUNDEZ, 24 años, Chileno, [...] detenido a las 23:25 horas de hoy, en el interior del SAR San Juan de Dios, por el Suboficial Ceferino Retamal Parraguez y Cabo 2do. Cristian Silva Salas, ambos de esta dotación y de servicio en la población, pasa a disposición de esa Fiscalía Local Linares por el siguiente hecho: porque momentos antes de su detención, el personal aprehensor recibió un comunicado radial de la Central de Comunicaciones, señalándoles que se trasladaran a la calle Nueva Imperial esquina calle México de esta comuna, en atención a que habían recibido un llamado telefónico al nivel 133, denunciado un accidente de tránsito. Conforme a lo anterior el personal se trasladó al lugar antes indicado presentándose FRANCISCO JAVIER CARO LOBOS, 21 años [...] y expuso: que, a las 21:15 horas de hoy, conducía por calle México en dirección al oriente la motocicleta, P.P.U. JDG-056, marca UM, modelo Max, color rojo, año 2017, al llegar a la esquina de calle Nueva Imperial no se percató de la señal ceda el paso existente en el lugar colisionado con el automóvil P.P.U. DGFB-95, el cual era conducido por el detenido en comento, y a consecuencia del accidente la motocicleta resultó con daños de consideración valuados en \$1.100.000; que, en tanto, el detenido señaló que a las 21:15 horas de hoy, conducía el automóvil P.P.U. DGFB-95, marca Geely, modelo New, color plateado, año 2011, por calle Nueva Imperial y al llegar a la intersección de calle México, colisionó con la motocicleta P.P.U. JDG-056, conducida por Francisco Caro Lobos, quien no respetó la señal ceda el paso existente por calle México, y a raíz de lo anterior el automóvil resultó con daños en el parachoques delantero, foco delantero y tapabarros delantero costado derecho, valuados en \$300.000; prueba respiratoria: una vez en el SAR San a ambos conductores se les efectuó una prueba respiratoria con el equipo Drager, el que arrojó al detenido VICTOR MUÑOZ 0,78 G/L, realizada a las 22:00 horas y una segunda prueba con el mismo equipo, el que arrojó como resultado 0,55 G/L, siendo notificado que se encontraba detenido por conducir bajo la influencia del alcohol, lesiones leves y daños en colisión. En tanto que, a CARO LOBOS, le arrojó como resultado 0.00 G/L, dejándose constancia de que el equipo Drager se encuentra desconfigurado en lo que respecta a la hora y a la fecha; y sobre la alcoholemia, que no obstante a ello a los conductores se les realizó la alcoholemia en SAR San Juan de Dios, depositando la muestra de sangre extraídas a los conductores en los frascos Nro. 336 y 337, respectivamente. Al Final se aprecian dos firmas ilegibles y un timbre de la Primera Comisaría de Linares.



Luego figura un dato de atención de urgencia, emanado del SAR San Juan de Dios de Linares, en que se lee que la fecha de ingreso es 12/03/2020; que el nombre es Vásquez Riquelme Diego Ignacio; que el motivo de la consulta es Alcoholemia y constatación de lesiones; que llegó en un vehículo policial de Carabineros; que el diagnóstico complementario fue sin lesiones, hálito OH; y que se le efectuó una alcoholemia. Al final del documento se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Benítez Navas Wilmer Médico General.

Luego figura un dato de atención de urgencia, emanado del SAR San Juan de Dios de Linares, en que se lee que la fecha de ingreso es 14/01/2019; que el nombre es Muñoz Faúndez Víctor Segundo; que el motivo de la consulta es Alcoholemia y constatación de lesiones; que llegó en un vehículo policial de Carabineros; que el diagnóstico complementario fue escoriaciones múltiples en piernas, escoriación en flanco izquierdo; y que se le efectuó una alcoholemia. Al final del documento se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Julián Chávez Pérez Médico Cirujano.

Luego figura otro dato de atención de urgencia, emanado del SAR San Juan de Dios de Linares, en que se lee que la fecha de ingreso es 14/01/2019; que el nombre es Caro Lobos Francisco Javier; que el motivo de la consulta es Alcoholemia y constatación de lesiones; que llegó en un vehículo policial de Carabineros; que el diagnóstico complementario fue herida superficial antebrazo izquierdo de 2 cms aproximadamente; y que se le efectuó una alcoholemia. Al final del documento se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Julián Chávez Pérez Médico Cirujano.

Luego figuran tres boletas de alcotest tituladas Dräger, en que se lee que la fecha es 2004.01.03; que la hora es 14:55; que el nombre es Francisco Javier Caro Lobos y Víctor Segundo Muñoz Faúndez; y que la prueba del primero fue 0.00 g/L y la del segundo 0.55 y 0.78 g/L. Al final de los documentos se aprecia una firma ilegible.

Luego figura el Informe de Alcoholemia N° 502/2019, correspondiente a la causa 1900060766-8 de la Fiscalía de Linares, fechado en Talca el 1 de febrero del año 2019. En él también se lee que “el funcionario administrativo que suscribe certifica que la muestra para este examen de alcoholemia se recibió como perteneciente a Don (a): VÍCTOR SEGUNDO MUÑOZ FAÚNDEZ C.I. 18655953-3 Siendo tomada el 14/01/2019 a las 22:23 hrs. en el SAR SAN JUAN DE DIOS.



Por el Dr.(a) JULIÁN CHÁVEZ PÉREZ [...] según consta en la boleta de remisión de la muestra. El Perito BIOQUÍMICO LEGISTA que suscribe certifica que el examen científico de dicha muestra, asignada con el 502-2019 dio un resultado de 0,82 g%, (cero coma ochenta y dos gramos por mil). Al final se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Natalia Torrealba Miranda, Perito Ejecutor, Servicio Médico Legal de Talca.

Luego figura una pieza titulada “Decisión de Archivo Provisional”, fechada en Linares el 11 de diciembre del año 2019. En ella se aprecia, además, en su parte superior, un logo en que se lee Fiscalía Ministerio Público de Chile; R.U.C. 1900060766-8; Fecha denuncia 15-01-2019; Delito, Fecha en que se cometió el delito, Hora en que se cometió el delito y Lugar en que se cometió el delito, conducc. Inf. Alcohol con o sin daño o les. Leve 193 inc 1,14-01-2019 2115 México con Nueva Imperial, Linares; víctima Nombre: Francisco Javier Caro Lobos; Imputado Nombre: Víctor Segundo Muñoz Faúndez; Vistos: 1.- Que la presente investigación se encuentra en estado de tomarse una decisión de término. 2.- Que a la fecha no aparecen antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. 3.- Que lo anterior se comunicará a la víctima del delito investigado, mediante carta enviada a su domicilio, a fin de que informe si cuenta con nuevos antecedentes, caso en el cual se procederá a la reapertura de la investigación. 4.- Que no se ha producido aún la intervención del Juez de Garantía en este procedimiento. 5.- Lo dispuesto en los artículos 109 letra d) y 167 del Código Procesal Penal; SE DECIDE: Archivar provisionalmente esta investigación. Archívese y sométase si corresponde a la aprobación del Fiscal Regional; abajo Carola Milena Dagostini Ibáñez Fiscal Jefe Fiscalía Local de Linares (sin firma); y al lado un timbre circular en que se lee Fiscalía Local, República de Chile, Ministerio Público.

Luego figura un documento titulado “Comunicación”, fechado en Linares el 11 de diciembre de 2019, en que se aprecia el número 1900060766-8; que “con el fin de mantenerle informado/a respecto de su denuncia recibida en la Fiscalía Local, mediante Parte Policial de fecha 15-01-2019, que da cuenta del delito de: CONDUCC. INF. ALCOHOL CON O SIN DAÑO O LES. LEVE 193 INC 1, me permito comunicar a usted; que a la fecha los antecedentes recibidos resultan insuficientes para lograr el esclarecimiento de los hechos, determinar algún responsable de los mismos o decretar alguna diligencia útil de investigación, por lo



que solo en el evento que exista o surja otro antecedente será posible continuar con ésta indagación”; abajo Carola Milena Dagostini Ibáñez Fiscal Jefe Fiscalía Local de Linares (sin firma); y al lado un timbre circular en que se lee Fiscalía Local, República de Chile, Ministerio Público.

Luego figura una pieza titulada Poder Judicial Juzgado de Garantía de Linares, fechada el 12 de diciembre del año 2019, en que se lee la siguiente resolución: “A LO PRINCIPAL: Como se pide, se fija la audiencia del día 23 de enero de 2020, a las 09:40 horas, para formalizar la investigación. Cítese al imputado VÍCTOR SEGUNDO MUÑOZ FAÚNDEZ [...]. AL OTROSÍ: Designese como defensor del imputado a don Marco Caballero Catalán [...]. Notifíquese a la víctima FRANCISCO JAVIER CARO LOBOS, por cédula, a través del funcionario habilitado del Tribunal. Notifíquese al Ministerio Público y Defensoría Penal Pública, vía correo electrónico. RUC: 1900060766-8 RIT: 5288 – 2019 Proveyó CLAUDIA CRISTINA OLEA TAPIA, Juez de Garantía Titular”

En relación con aquella decisión de archivo provisional, la persona que la generó y la diferencia que guarda con la carta de comunicación de archivo provisional, muy esclarecedor resultó lo depuesto por Karem Silvana Torres de La Fuente, quien señaló, y con el tenor de su declaración justificó, ser jefa de la unidad de gestión informática (UGI) de la Fiscalía Regional del Maule desde junio del año 2008. Dicha testigo autorizadamente, dada su experticia y labor que desempeña por años, explicó, en especial y con detalle, el funcionamiento de los sistemas informáticos usados por dicha Fiscalía, el registro de trazabilidad que guardan los mismos respecto de las actividades que los usuarios, a los que se asignan claves personalizadas e intransferibles de ingreso, realizan en ellos. A la vez y acreditando las fotografías que el Ministerio Público le exhibió al efecto, logró concretar lo precedente en las múltiples causas que a continuación se singularizarán, asentado certeramente las decisiones jurídicas que sobre ellas decantamos, así como su autoría por parte de la acusada del Pino Acuña.

Así, la señora Torres de La Fuente partió su declaración manifestando que es jefa de la unidad de gestión informática de la Fiscalía Regional del Maule. Antes entró al Ministerio Público el 5 de marzo del 2001 como profesional de informática y de junio del 2008, está como jefe de esa unidad de gestión. Allí vela por la continuidad operacional de la Fiscalías Locales en relación con los sistemas informáticos y con otorgar el soporte a usuarios. Tiene el área de informática, de



gestión y estadística. También le corresponde hacer seguimiento a los indicadores de gestión, metas individuales, indicadores institucionales de sus compromisos de gestión, seguir el cumplimiento regional, todo lo asociado a las metas individuales de todos los equipos de trabajo y está a cargo de generar las estadísticas regionales y locales, asociadas también al control de gestión y a toda la información estadística que solicitan los externos.

Más adelante indicó que su profesión es ingeniera en ejecución informática e ingeniero civil industrial con un diplomado en control de gestión y un magister en gestión tecnológica.

Comentó que los principales sistemas informáticos que usa la Fiscalía están en el ámbito de gestión de causas, el SAF o sistema de apoyo a los fiscales, que se generó por el Ministerio Público, que el 2000 contrató a una empresa externa. Es el sistema usado en todo Chile. Otro sistema que se ocupa en nuestra región, que fue creado por su equipo de trabajo, es el SIGE o sistema integral de gestión. Lo crearon el 2015 y lo implementaron en octubre del 2016 con la Fiscalía de Talca y el 2017 con Linares y Cauquenes. Los otros sistemas están asociados al ámbito proteccional de víctimas y test u OPA. También está el sistema SIAU, asociado a la atención de usuarios, es el sistema integral de atención de usuarios por call center, web o presencial. Además está el SAO, que es un sistema nacional del que se obtiene la ficha de un sujeto con todo su historial, las causas en que ha participado, sentencias, prisiones preventivas, cautelares o también se puede obtener la ficha de una causa con sus actividades y etapas procesales, sujetos e intervinientes.

Sobre qué marca deja en el SAF el funcionario que ejecuta una actividad, detrás de SAF hay una base de datos Oracle y esa base se compone de tablas, donde quedan registrados todos los antecedentes que una persona haga en el SAF, el día en que se hizo la actividad, la hora y la cuenta SAF. Si se entró con la cuenta SAF, deja registrada a la persona que ingresó un día y hora y todo lo que se registre en SAF queda en tablas de auditoría que guardan todo lo que un funcionario determinado haga sobre el sistema. Técnicamente la base de datos SAF guarda lo que hace cada funcionario en el SAF. Las modificaciones a una causa también tienen ese registro. Las modificaciones que se hagan sobre SAF quedan en las tablas de auditoría y si se ingresa, modifica o anula una actividad, también queda registro. La asignación de una causa, quién es el fiscal encargado de la causa, también tiene registro en SAF. Hay un módulo en SAF de gestión tramitar caso, se ingresa, se



ingresa el RUC, se presiona el botón ficha, que permite revisar el historial de asignaciones SAF y que una causa se ingrese a un fiscal o a un abogado TCMC y si se asignó a un abogado TCMC y luego a un fiscal o de un fiscal a otro, en ese botón ficha aparece el historial de todas las asignaciones que ha tenido la causa, qué funcionario hizo la reasignación y fecha y hora de la asignación o reasignación del RUC.

Explicó que, sobre el SIGE, su equipo lo generó. Se creó primero porque tenían un sistema que era el SAF que no satisfacía todo lo que necesitaban como región en materia de gestión, control y registro. Además, el 2015, a nivel de Fiscalía Nacional, se estaban definiendo procesos de trabajo. La Fiscalía Nacional definió en ese entonces en documentos qué tenía que tener el proceso de ingreso, el de preclasificación con abogados que revisaran los partes y la documentación adjunta al parte, y estaba el proceso de tramitación, de término y los procesos de especies. En ese año 2015 debían prepararse para reestructurarse y se dieron cuenta de que había que crear un equipo centralizado de carpetas, en ese tiempo trabajaban con carpetas físicas. Al analizar su equipo y abogados, analizaron cómo implementar esos procesos y se dieron cuenta de que tenía que ser acompañado de un sistema robusto que el SAF no permitía. Además, quisieron dar el paso a innovar hacia la carpeta digital. El 2015 o 2016 ninguna región tenía carpeta digital. Todos esos análisis los llevaron a crear el SIGE, que programaron dos personas de su unidad. Lo hicieron sólo con recursos propios, obedeciendo a una lógica de procesos de trabajo. El SIGE tiene módulos que dan cuenta del proceso de ingreso, de preclasificación, de aprobación de las propuestas de los equipos de preclasificación, de asignación de las causas a TCMC o a fiscales y permite hacer todas las diligencias con las policías. La pandemia les evidenció más que el haber llevado ya 4 años de experiencia con carpeta digital les vino muy bien. Podían así seguir pidiendo diligencias a la policía. Todas las diligencias que se solicitan a las policías se hacían por el SIGE, se despachaban y llegaban a los sistemas de la Policía de Investigaciones, el TIE, y al de Carabineros o GDD. Las policías les responden a través del sistema y SIGE lee y recibe la información que llega de las policías. En el caso de los partes, en pandemia hicieron que las policías les enviaran los partes por sistema, digitalizados, que llegan al SIGE. La lógica del SIGE es una lógica de gestión, control y de la trazabilidad de todo el proceso jurídico de una causa desde que ingresa, se preclasifica, se asigna y deja todo el registro de quién hace qué, cuándo lo pide, cuándo un abogado o fiscal



pide una diligencia, cuándo los equipos administrativos la materializan, cuándo la diligencia se despacha a las policías y también la trazabilidad en las policías. También tienen reportes operativos, de control, para los distintos procesos que le sirven a ella, a fiscales jefe y administradores, para tomar decisiones en el sentido de si tiene un equipo con cuellos de botella o demoras, ya que hay reportes de control. SIGE, a diferencia de SAF, tiene la lógica de la trazabilidad desde el inicio hasta que la causa termine y permite hacer seguimiento y control. Entre SIGE y SAF, SAF es el sistema institucional que usan todas las regiones. SIGE lee información de SAF. El RUC se debe generar en SAF y SIGE rescata esa información del SAF, lo lee por funciones programables y rescata de SAF y muestra esa información en SIGE, dependiendo de los módulos o proceso en que se encuentre. Además actuaciones de SIGE se graban en SAF en packages, que son instrucciones que define la Fiscalía Nacional, para que SIGE pueda grabar en SAF, por ejemplo cuando se recibe un informe policial por SIGE y SIGE graba en SAF la recepción del documento. En SIGE queda el documento digital, que pasa a formar parte de la carpeta digital y va grabando o leyendo información desde la base de datos de SAF online y de la base de datos stand by, que es una réplica que se actualiza cada una hora y media aproximadamente. Pueden leer desde ambas y grabar en la base de datos SAF online. Lo que se hace en SAF pasa a SIGE y viceversa, se dan algunas situaciones que se hacen en SIGE que pasan a SAF y de SAF se puede leer SIGE. Eso es automático. No es que el funcionario recibe una diligencia y el sistema hace la grabación, no se debe apretar un botón para ello. El sistema automáticamente lee o graba dependiendo del proceso en que se encuentre.

Señaló que sabe de este juicio que es contra una ex funcionaria de la Fiscalía de Linares, que es cuestionada por un delito en particular. Se enteró de los hechos por una investigación administrativa que instruyó el Fiscal Regional, quien la encargó a un abogado asesor. Primero supo porque le solicitaron, como jefa de la unidad de gestión informativa, pedir a Santiago los bloqueos de acceso a todos los sistemas. Eso por protocolo del Ministerio Público. Después por información que le pidieron por la investigación administrativa. Le pidieron información asociada a la agrupación de causas con la cuenta de la ex funcionaria, información asociada a términos registrados en SAF con la cuenta de la ex funcionaria, también información asociada a los movimientos de carpetas en SIGE asociados a cuenta de la ex funcionaria, de actividades SAF asociadas a la cuenta SAF de la ex funcionaria.



También información asociada a ciertos RUC, como de sesenta RUC, sobre los registros asociados a esos RUC y si había registro de actividades hechos por la cuenta de la ex funcionaria. También tuvo que solicitar a la Fiscalía Nacional modificaciones hechas a delitos con la cuentas de la ex funcionaria. Eso se lo entregó al abogado asesor Mauricio Jorquera.

Refirió que el TCMC es tramitación de casos menos complejos. Está generado en casi todas las regiones del país. Está compuesto por abogados asistentes que tramitan casos de menor complejidad. Hay instructivos del Fiscal Regional que indica qué delitos tramita el TCMC y cuáles los fiscales. Los menos complejos pueden transformarse en más complejos y esa causa, por las instrucciones, pasa a ser más compleja y debe ser asignada a un fiscal adjunto. Por definición de regla de negocio, los manejos en estado de ebriedad son asignables al TCMC. El abogado encargado del TCMC y la tramitación de la causa tiene facultades de tramitar. Todos los funcionarios del Ministerio Público, fiscales y abogados, pueden tramitar una causa de acuerdo al Código Procesal Penal. Son autónomos en las decisiones que toman sobre las causas, pueden hacer escritos jurídicos, solicitar diligencias a las policías, solicitar audiencia, enviar escritos por interconexión a los Juzgados de Garantía, toda la tramitación y decisiones jurídicas de una causa.

Sobre si tienen los sistemas una forma de controlar las decisiones de los abogados del TCMC, respondió queda todo registrado en SAF. Como esas con decisiones jurídicas, ella no tiene cuestionamiento porque parte de la base de la buena fe, no cuestiona decisiones de un fiscal o de un abogado TCMC sobre algo en particular. Sí tienen mecanismos de control respecto de causas sin actividad por distintos tramos de tiempo, de causas sin movimiento por más de 7 días corridos desde que se toma conocimiento de la causa, asociados a los partes que llegaron y no se les ha generado RUC, asociados a los tiempos entre que la causa llega y se formaliza, a los tiempos entre la recepción y término de una causa, a dónde están las causas, etc. Hay diversos mecanismos de control principalmente en SIGE y otros que generan ellos en su unidad y que envían a fiscales jefes y administradores. También tienen mecanismos de control asociados a los escritos enviados por interconexión en que no han tenido respuesta, asociados a faltas, asociados a los hitos procesales de SAF.

Sobre si SIGE puede cuestionar el mérito de lo que se realiza jurídicamente en cuanto al cambio, si tiene la opción de cuestionar la decisión jurídica, contestó



que no. Ni SIGE ni SAF pueden cuestionar jurídicamente una decisión o una diligencia o un término que un fiscal o abogado determinó. Se parte de la buena fe, de que todos los funcionarios del Ministerio Público, tienen valores y cumplen con la probidad, transparencia y otros. Cuando se efectúa un cambio de calificación jurídica o de naturaleza de una persona o de individuo en SAF, no aparece alguna alerta sobre ese cambio, no aparece ninguna alerta sistémica por un cambio de delito porque es una decisión jurídica. Ni SIGE ni SAF tienen alertas. Eso sólo queda en las tablas de auditoría a las que sólo puede acceder la Fiscalía Nacional.

En relación con el SAF o SIGE y la acción de hacer efectivo un archivo provisional, manifestó que desde el 2008, cuando asumió como jefa de la unidad, una de sus primeras decisiones fue automatizar el proceso de archivo provisional con y sin consulta porque tenían como dieciocho o más personas haciendo el proceso de archivo sin consulta, que es el registro en SAF más la carta de comunicación y el despacho de la carta respectiva a la víctima. Con la lógica de las economías de escala y al generar el SIGE, decidió designar a un funcionario de su unidad y ahorrarse los otros dieciocho que hacían ese proceso en cada Fiscalía Local, y ese funcionario no efectúa un cuestionamiento jurídico porque hay una decisión de un abogado o fiscal que pide el archivo provisional sin consulta por SIGE y marca la relación a la que afecta. En el archivo sin consulta, el fiscal o abogado debe marcar la relación que se verá afectada por ese archivo sin consulta y con eso, en la noche, como esos archivos no requieren aprobación del Fiscal Regional, se genera un proceso masivo que graba en SAF la actividad de archivo provisional y la causa con eso pasa de vigente a terminada, le genera la actividad de comunicación a la víctima, que es una carta predefinida regionalmente, y al otro día la funcionaria a cargo del proceso imprime las cartas, se preocupa de que estén aplicados los archivos y remite las cartas al servicio postal.

Especificó que, sobre el TCMC y las solicitudes de archivo que efectúe un abogado del TCMC, el archivo no lo revisa el fiscal jefe por los volúmenes y porque la regla de negocios definida es que el fiscal o abogado TCMC que tiene la asignación en SAF es el dueño y responsable de la causa, en el archivo sin consulta el abogado toma la decisión y eso pasa al flujo automatizado. No intervienen el fiscal jefe o regional porque se subentiende que hay una decisión jurídica atrás y eso está definido del 2008 y con SIGE automatizaron más el proceso de archivo provisional sin consulta. La comunicación del archivo está entregada a la Fiscalía



Regional y el archivo sin consulta a una funcionaria, porque es un proceso automatizado administrativo, no cuestionan la decisión. El documento de archivo lo genera automáticamente el SIGE porque SIGE tiene la carta de comunicación que está definida en la región y automáticamente SIGE, por funciones, tienen la causa, tienen la trazabilidad completa de cuando un fiscal pide un archivo sin consulta, la relación afectada. Por tanto, SIGE lee los datos SIGE de la solicitud, en que solicitan un archivo sin consulta por un imputado y un delito, y SIGE automáticamente genera la carta y la graba en SAF y también graba en SAF la actividad de archivo provisional y la actividad de comunicación a la víctima del archivo provisional. Son las dos actividades que se registran en SAF por los archivos. El documento de comunicación del archivo, se definió cuando partieron el 2008 y siguió con SIGE el 2016. El pie de firma en realidad es un timbre y va siempre el nombre completo del fiscal jefe de la Fiscalía Local. Eso se definió. Como es un proceso automatizado, SIGE sabe quién es el fiscal jefe. Si pide el archivo sin consulta un fiscal o abogado asistente, se genera el documento con el nombre del fiscal jefe. La carta de comunicación de archivo sale con el pie de firma de fiscal jefe, no con el de abogados del TCMC si es un fiscal, sale con el nombre del fiscal. Esa carta se coordina con correos, se envía esa comunicación de archivo provisional a las víctimas registradas en SAF porque SIGE lee de la relación que marcó el fiscal o abogado del TCMC la víctima o víctimas de esa relación y del SAF trae la información de la víctima, nombre y dirección y los consigna en la carta, que es un documento Word que se genera, con la dirección de la víctima y eso entregan al servicio postal. Es una carta que se entrega doblada y corcheteada, donde la persona de correos sólo puede ver el nombre de la víctima y la dirección. Esos datos SIGE los lee desde SAF. A los imputados, sobre el archivo provisional, la información que se les da debe ser lo definido en el protocolo. Como regla de negocios, no se notifica a los imputados el archivo provisional. Las cartas se generan sólo para las víctimas.

Afirmó que la carta de archivo y la decisión de archivo son dos cosas distintas. Una es la decisión que toma el fiscal o abogado del TCMC que queda registrada en SAF como decisión de archivo y que termina la causa que antes estaba vigente en SAF. Al pedir el archivo sin consulta y tras el proceso automático nocturno, se genera la actividad de decisión y se refleja en SAF que el fiscal o abogado asistente decidió terminar la causa por archivo provisional. En SIGE se puede ver que es un archivo sin consulta. La comunicación es una segunda actividad



que genera el SIGE y también se graba en SAF, después de la decisión y con el documento Word que generó SIGE de manera automática. Son dos actividades y registros distintos.

Sobre la materialidad de esas cartas y decisiones, desde que partió la pandemia el Fiscal Regional decidió no generar carpetas físicas, porque todo queda en la carpeta digital. Por ello, en los archivos sin consulta, quedan en la carpeta digital la decisión de archivo y la carta de comunicación de archivo. Si se mete a SIGE, debiera aparecer la decisión y la carta de comunicación, también en el SAF.

Respondió que, sobre el sumario que mencionó, sabe que por él se descubrió que se modificaron delitos en SAF, delitos de manejo bajo la influencia o en estado de ebriedad, algunos delitos de daño, de uso fraudulento de tarjetas, de lo que recuerda. Ahí estaba el principal tema, obviamente también asociado a los términos que hubo en esas causas. En esas causas estaba consignada la cuenta SAF F703 de Linares de la ex funcionaria Claudia Del Pino. Sobre si es factible que ellos hayan podido prever esta situación, no. Es una situación muy rebuscada y como unidad de gestión no tienen acceso a las tablas de auditoria de SAF, donde se deja registro de las modificaciones de delito. Además, sus mecanismos de control no están asociados a eso porque no tienen acceso y porque parten del principio de la buena fe y de que hay un abogado experto detrás que toma una decisión.

Les pidieron en la investigación administrativa levantar información de términos, de causas agrupadas asociadas a la ex funcionaria, ver la trazabilidad de los movimientos de las carpetas en SIGE de ciertos RUC, como de sesenta RUC en que le pidieron revisar sus movimientos, también las modificaciones de delitos asociadas a la cuenta de la ex funcionaria, lo que tuvo que pedirlo a la Fiscalía Nacional. De ello recuerda que envió los correos electrónicos y archivos Excell con la información solicitada. La ayudó el funcionario Pablo Becerra. En la investigación penal hubo diligencias que solicitaron a Pablo Becerra y también una que pidieron a Juan Cáceres. Lo recuerda porque el fiscal le pidió coordinar el día y hora porque iban a ir también peritos de la Policía de Investigaciones.

Ya con esa introducción, el Ministerio Público procedió a exhibirle lo que en el auto de apertura de juicio oral se ofreció como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA” y, al observarlas, manifestó que las primeras once corresponden a su colega Juan Cáceres, de su unidad, con los computadores institucionales en la oficina de Juan Cáceres en la



Fiscalía Regional del Maule; al escritorio del computador de Juan Cáceres; Por definición institucional trabajan con doble pantalla; a la indicación del ícono al medio de la pantalla que permite el acceso al virtualizado de SAF, en cada pc el ícono queda con el nombre de Windows XP SAF; a un acercamiento al mismo; al inicio de la máquina virtual; al momento en que Windows XP pide el inicio de sesión, es la pantalla de acceso al virtualizado, en que se pide el nombre de usuario, la contraseña y el dominio; al ingreso de esos datos de cada funcionario, regularmente con la primera letra del nombre, el apellido y a veces la primera letra del segundo apellido, mientras que la clave es secreta; a lo que se ve cuando se entra al visualizador, se ve el ícono de Internet Explorer, esa es la pantalla de inicio de SAF donde pide nombre de usuario y contraseña, donde el nombre de usuario es la letra F más números y la nomenclatura del nombre del usuario, luego se debe ingresar la contraseña de SAF que generalmente es distinta a la de ingreso a la máquina virtual, pero el usuario lo define; al momento en que el funcionario Juan Cáceres ingresa su clave SAF; y a la pantalla principal de SAF, que muestra los módulos de SAF, que en el caso de Juan, tiene los módulos que se ven, que son los mismos de ella. Explicó que el primer módulo es el de recepción, que permite generar un RUC y registrar los antecedentes del parte, el delito, los sujetos, el hecho delictual, especies denunciadas etc., y al dar el botón grabar, el SAF genera el RUC, el RIF y las relaciones. El segundo es el de asignación de caso, para asignar la causa. Con SIGE las asignaciones se hacen por SIGE, que graba en SAF. Se asigna ahí un RUC a un abogado TCMC, de preclasificación o a un fiscal, y también ahí se hacen las transferencias entre Fiscalías. Luego está el módulo gestión tramitar caso, para registrar todas las actividades jurídicas. El cuarto es el módulo de interconexión con el Poder Judicial, que se habilitó el 2003 o 2004, ya que se firmó un convenio con los Juzgados de Garantía. Permite en los escritos jurídicos autorizar un escrito y los escritos definidos para enviar por esta vía son las solicitudes de audiencia, los requerimientos monitorios y simplificados, las decisiones de no iniciar investigación y los principios de oportunidad. Acá hay dos hitos importantes, que son la autorización en que el abogado o fiscal dice a SAF que está el escrito listo para enviarlo al Poder Judicial y que a última hora del día un funcionario hace una confirmación y el envío a los Juzgado de Garantía. Luego viene el módulo de custodia, en que se registran todos los movimientos de especies incautadas. Luego los módulos de consultas que en SAF, al ser sólo un sistema de registro, tienen muy



poca reportabilidad. Luego unos módulos de consultas básicas y un módulo en desuso, porque se usa SIGE para reportes y seguimiento, que es el de estadísticas. Más abajo está el módulo de cambio de clave, que es lo principal y lo primero que debe hacer un funcionario cuando entra por primera vez, cambiar la clave. En relación con la fotografía N° 11, refirió que consiste en el módulo gestión tramitar caso, que es uno de los módulos principales de SAF. El RUC ya fue generado, ya hay un RUC, eventualmente asignado a alguien y se ven los botones de las opciones de SAF. Arriba está el RUC, luego el RIF, luego el estado del caso que en el SAF son ingresados, que es vigente cuando la causa se asignó a alguien y está en tramitación, suspendida, si es que en las relaciones de SAF se aplicó una suspensión condicional por ejemplo, o terminado si a todas las relaciones de SAF se aplicó un término. Además, por lo complejo, SAF trabaja con la lógica de las relaciones que se llamaban ámbito relación, ámbito de sujetos y ámbito caso. Son los tres ámbitos técnicos de SAF y allí se muestra la relación de imputado y delito y puede mostrar la víctima y las distintas relación de la causa.

Pasando ya a imágenes del set analizado en que se observan, en aquel módulo de gestión tramitar caso del SAF, números de RUC ingresados, al ver las pertinentes a lo revisado, que van de la N° 12 a la N° 24, la señora Torres de La Fuente comentó que la primera corresponde a la pantalla superior del módulo tramitar casos, con la información que mencionó. Sobre el nombre del caso, el SAF lo genera automáticamente, pero es un campo evitable y se puede modificar. El origen es de dónde viene. Arriba, no se ve, pero aparece a quién está asignada la causa. Lee el RUC que allí aparece, que es el 1900060766-8. Luego se ve el módulo de tramitar caso, ya desplegado el RUC que leyó, aparece el fiscal o abogado asignado a la causa, que acá es el abogado TCMC Claudio Ávila. Acá la causa tiene una sola relación. Cuando Claudia del Pino dejó de pertenecer a la Fiscalía, a Claudio Ávila se le asignaron las causas vigentes de esa ex funcionaria. Se ve el nombre del caso, acá es un manejo bajo la influencia, se ve el nombre del imputado, Víctor Muñoz. Luego de que se presiona el botón historia, se muestran, como se ve, todas las actividades registradas en SAF, que permite mostrara la fecha de inicio de la actividad y la cuenta con que se hizo esa actividad. Luego se ve una pantalla de SIGE y arriba la trazabilidad, donde dice el usuario, Claudia del Pino, y que ella solicitó un archivo provisional en ese RUC, la fecha y hora de la solicitud, la fecha de la asignación y del usuario que ejecuta esto, que cuando son procesos masivos,



como en el caso del archivo provisional, se ve en los parámetros sin consulta porque el usuario ejecutante es el sistema de tramitación. Abajo se muestra la relación que marcó el solicitante pidiendo el archivo sin consulta. Lee el RUC 1900060766-8. SIGE también tiene la trazabilidad de todo el movimiento de la solicitud, es decir, el estado ingresado que indica quién la solicita, fecha y hora, a qué equipo pertenece y, en este caso la decisión de archivo provisional sin consulta ejecutado, cuándo se ejecutó. Ese es el proceso centralizado que SIGE hace automáticamente. Según ello, en este caso la decisión la adoptó el usuario Claudia Andrea del Pino Acuña, ella hizo la solicitud, tomó la decisión y la pidió por SIGE. También se indica en SIGE que está el archivo provisional, cuándo se realizó, en este caso a las 3:00 am, porque son procesos técnicos que se realizan en la noche, y después viene la carta a la víctima de archivo provisional realizada también en la noche. Luego se ve el historial de la causa del RUC que leyó y se destaca la fecha de digitación la actividad decisión archivo provisional, la fecha es 11 de diciembre del año 2019. Se ve el detalle de la actividad de archivo provisional, los datos de la actividad y la fecha y abajo la ruta donde se dejan todos los documentos del SAF. También se muestra el archivo Word cuando se hace doble clic a la ruta que aparecía abajo en la foto anterior, es la decisión de archivo provisional. Ese documento, SAF tiene plantillas predefinidas, pero pueden ser modificadas por un fiscal o abogado. En el caso del archivo provisional sin consulta, lo generan en SIGE y lo graban en SAF, pero igual alguien puede modificarlo. El RUC es 1900060766-8 y el imputado Víctor Muñoz. Luego viene la parte de abajo del mismo escrito de archivo provisional, que como es sin consulta, viene con el pie de firma del fiscal jefe y el timbre de la Fiscalía. Luego el historial del SAF del RUC 1900060766-8, en que remarcada está la fecha de digitación y hora en SAF de la actividad decisión de no iniciar investigación del 15 de octubre del 2019 a las 17:05. Luego un detalle de la actividad de FNI con la relación afectada, la fecha de la actividad, abajo a la derecha que ese escrito se va por interconexión y abajo la ruta del documento. Esto es de la causa 1900060766-8 y la realizó la cuenta F703CdelPino. Luego un escrito de una decisión de no iniciar investigación o FNI. Ese escrito lo evacuó según la fotografía, Claudia del Pino Acuña. Finalmente el historial del RUC 1900060766-8 y marcada la cuenta de la persona que hizo la digitación en SAF, F703CdelPino. Aparece el estado anulada, que es un estado SAF. Los fiscales y abogados pueden, habiéndose registrado una actividad, anular y SAF no elimina sino que deja registro de que esa



actividad fue anulada. Sobre la fecha de inicio y de término, es 15 de octubre de 2019.

Aclaró al Tribunal que en la imagen 15 aparece destacada una actividad del 11 de diciembre del 2019 y una cuenta F703_TCMCAR_GACT, que no es la de CdelPino. En cambio, en la imagen 18, del mismo RUC, se ve el detalle del archivo provisional del 11 de diciembre de 2019 y lo que aparece abajo como ubicación es donde se guarda el archivo Word de esa actividad, esto se guarda en los file check, que son discos duros grandes institucionales. Ahí se ve CdelPino porque la cuenta anterior, la de TCMCAR, es la cuenta que deja SIGE cuando hace el proceso nocturno masivo en el caso de los archivos provisionales. Esa actividad de archivo provisional fue hecha masivamente por esa última cuenta. Ese proceso masivo se hace en la noche, graba en SAF el proceso de archivo provisional sin consulta desde SIGE y deja esos antecedentes. La persona que ingresó el archivo provisional como causa de término, la persona que hizo la solicitud, está en SIGE y aparece en la ruta, pero cuando son archivos sin consulta, se deja con la cuenta que se leyó. Lo importante ahí es el solicitante. Como solicitud está en SIGE, la decisión de archivo provisional es lo que se traspasa a SAF. Que allí aparezca CdelPino, en ubicación de la lámina 18, quiere decir que ahí hay un solicitante y una cuenta asociada a la solicitud, que se solicitó con esa cuenta. No se reflejó en la lámina 15 porque esa es la cuenta de la masividad.

También aclaró, en relación con el origen de los escritos que se ven desplegados en las fotografías que se le exhibieron, que, por ejemplo, en la lámina 18, al hacer clic en la ruta de ubicación o en abrir documento, se despliega el texto de la lámina 19. En la lámina 85 aparece como relación conducción ebriedad. Eso quiere decir que en SIGE, a la fecha de la toma de la fotografía, el delito todavía estaba calificado así. También en SAF, porque SIGE lee de SAF. No se puede cambiar la calificación en SIGE y que no quede reflejada en SAF o viceversa. La calificación se hace sólo en SAF y se va a SIGE y por el botón actualizar datos se le dice a SIGE que vaya a SAF y actualice el dato que recién cambió y se actualiza la causa en SIGE. En la lámina 108, que deriva de la 107, aparece un delito. Ese documento de archivo provisional, el SIGE lo genera pero lo deja en SAF, donde se puede abrir dándole doble clic a la ruta o a abrir documento y es editable. SIGE trae todo lo del campo de arriba, hay una plantilla, viene llenado pero se puede modificar. Por ello, sobre la lámina 108, en su momento en SAF el documento decía



conducción en estado de ebriedad y se cambió. SAF tiene plantillas para los principios, los FNI, los archivos y al grabar la actividad queda en formato Word y con el doble clic se abre Word y se puede modificar, independiente de que traiga por defecto el encabezado de arriba y la plantilla. Es absolutamente modificable.

Sobre aquellas fotografías y la acreditación que acabamos de exponer, cabe destacar que, en consonancia con lo que antes ya había expuesto la señora Torres de La Fuente, se trata de imágenes tomadas desde los sistemas SIGE y SAF del Ministerio Público, específicamente relacionadas con actividades registradas en el mismo respecto de la causa RUC 1900060766-8, y que aquéllas revelan, dado el historial de dicho proceso y las credenciales de usuario que se muestran, que en esa plataforma informática y RUC la usuaria Claudia Andrea del Pino Acuña ingresó una decisión de archivo provisional que fue ejecutada el día 11 de diciembre del año 2019.

Cabe agregar, en relación con el hecho pertinente sostenido por los acusadores y el principio de congruencia, que si bien en la correspondiente fotografía del historial SAF de la causa en comento se aprecia como ingresada la actividad “Decisión de no iniciar la inve”, ella figura con la fecha 15 de octubre del año 2019, por lo cronológicamente es anterior y no posterior a la aludida decisión de archivo provisional (que es lo que postularon los persecutores), y que sobre aquella actividad no se agregó una fotografía de su registro de trazabilidad, por lo que no es dable tenerla como efectuada por la acusada del Pino Acuña.

Finalmente, a este Tribunal resulta evidente, considerando lo dispuesto en el artículo 167 del Código Procesal Penal, que tanto por figurar en el historial SAF de la causa (fotografía N° 17) al menos una intervención judicial anterior a la mentada decisión de archivo provisional ejecutada el día 11 de diciembre del año 2019, como por el tenor de la carpeta investigativa ya expuesta (en particular atendido el parte policial de detenido y el informe de alcoholemia adjuntado, de fecha 1 de febrero del año 2019), que dicho archivo provisional se dispuso por la acusada del Pino Acuña contra el mérito de la investigación y obstaculizándola.

En referencia a lo último, esto es, al entorpecimiento que significa para el normal desarrollo de una investigación la incorporación a los sistemas informáticos de la Fiscalía de una actividad como el archivo provisional, la misma señora Torres de La Fuente explicó el gran alcance práctico de aquél, ya que cuando se le preguntó si tienen esos sistemas informáticos una forma de controlar las decisiones de los



abogados del TCMC, respondió que queda todo registrado en SAF, pero como esas son decisiones jurídicas, no tienen cuestionamiento porque parten de la base de la buena fe, no cuestionan decisiones de un fiscal o abogado TCMC sobre algo en particular. Sí tienen mecanismos de control respecto de causas sin actividad por distintos tramos de tiempo, de causas sin movimiento por más de 7 días corridos desde que se toma conocimiento de la causa, asociados a los partes que llegaron y no se les ha generado RUC, asociados a los tiempos entre que la causa llega y se formaliza, a los tiempos entre la recepción y término de una causa, a dónde están las causas, etc. Hay diversos mecanismos de control principalmente en SIGE y otros que generan ellos en su unidad y que envían a fiscales jefes y administradores. También tienen mecanismos de control asociados a los escritos enviados por interconexión y que no han tenido respuesta, asociados a faltas, asociados a los hitos procesales de SAF. Sobre si el SIGE puede cuestionar el mérito de lo que se realiza jurídicamente, si tiene la opción de cuestionar la decisión jurídica, no. Ni SIGE ni SAF pueden cuestionar jurídicamente una decisión o una diligencia o un término que un fiscal o abogado determinó. Se parte de la buena fe, de que todos los funcionarios del Ministerio Público tienen valores y cumplen con la probidad, transparencia y otros.

Sobre lo mismo, el testigo Mauricio Jorquera Loyola expuso ante estrados que es abogado asesor del Ministerio Público, de la Fiscalía Regional del Maule. Entró al Ministerio Público como abogado asesor hasta el 2009, después tuvo 10 años de ejercicio privado y volvió el 2019 al Ministerio Público también como asesor. Su trabajo, en general, como asesor, es múltiple. Cada asesor tiene una especialidad. Él tiene la de drogas y delitos residuales. Antes era de delitos funcionarios y económicos, el 2019. Alegan en la Corte, asesoran al Fiscal Regional, analizan ciertas cosas que llegan a la Fiscalía. Es un rol jurídico y también participa en el equipo directivo. Con las Fiscalías Locales, hasta el 2009 era asesor directo de las Fiscalías de Talca y San Javier. Cuando regresó eso ya no era así, es por especialidad. También es asesor directo de la Unidad de Análisis y Alta Complejidad. Sobre los archivos provisionales, les toca revisarlos pero de acuerdo a la especialidad. En su caso, solamente de drogas y de causas residuales como amenazas, delitos chicos, conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia. La mayor cantidad de archivos que revisa se relacionan con la Ley 20.000.



Señaló que, desde su cargo, los controles de los abogados se hacen por actividades. Por ejemplo, siempre se ha hecho la vigencia de la causa, cuántas se tienen, cómo se terminan, cuántos requerimientos se hacen, etc. Son reportes. En esa fecha, porque ahora están más modernos, el mayor proceso de fiscalización respecto de Claudia del Pino Acuña era el de descongestión, que se hizo el 2019 y 2020, en que se revisaban todas las causas vigentes de abogados asistentes y fiscales y se les daba movimiento a las causas atrasadas y sin tramitar. Él no revisó a Claudia del Pino. Los procesos de descongestión son para las causas vigentes solamente, no para las terminadas. Las causas terminadas en SAF no se podían ver porque nadie las revisaba, aunque no se hiciera ninguna gestión, porque se partía del principio de buena fe. Sí había auditorías de Santiago en que revisaba una muestra pequeña de causas terminadas. El asesor que revisó a Claudia en la descongestión era imposible que verificara lo que él notó (en la tramitación del sumario administrativo que instruyó en contra de Claudia del Pino Acuña) porque no revisaba causas terminadas, sólo vigentes. Por ejemplo, revisó como causas vigentes que llegaba la alcoholemia y ella no hacía requerimiento de simplificado hasta un año. En el proceso de descongestión se revisa esa causa y se dice hacer requerimiento, es para apurar y poner término. Los términos jamás se han revisado. Actualmente se hacen auditorías de causas terminadas precisamente por esta situación. Lo que permitió encontrar estas causas fue que él revisó todas las causas de Claudia del Pino terminadas el 2019 y 2020 y las causas vigentes de manejo en estado de ebriedad. Eran como 1000.

Expuso que, sobre estas causa terminadas y si eso impidió que quien recibió dichas causas pudiese tramitarlas según lo que correspondiese en el Tribunal, que nadie podía tener conocimiento de que esas causas había que reabrir las, esas causas no existían porque estaban terminadas.

Afirmó que sin la investigación administrativa que tuvo a su cargo, no se podría haber descubierto lo ocurrido en las causas que estaban terminadas en que no se hicieron o presentaron los escritos.

Respondió a una Defensa que, sobre estas causa terminadas y si eso impidió que quien recibió esas causas pudiese tramitarlas según lo que correspondiese en el Tribunal, nadie podía tener conocimiento de que esas causas había que reabrir las, esas causas no existían porque estaban terminadas.



En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.2 de la novena motivación, resultaron debidamente establecidos, primero, por lo declarado por el testigo Fabián Enrique Ortega Bustamante, quien manifestó que es contratista pero trabajó para una empresa. Vive en Santiago. En Linares, en Mesamávida, viven sus suegros. Viene para el verano por lo general o ahora en invierno. Para la pandemia vino también. Conduce y tiene licencia clase B. La tiene desde antes del 2011. Nunca se la han suspendido. Sobre si ha tenido problema conduciendo, en Longaví, para la fiesta de la cerveza, lo detuvieron por conducir en estado de ebriedad. Salieron de la fiesta de la cerveza, no recuerda fecha, se iban para la casa y a la vuelta estaba Carabineros, que le hizo alcotest y salió con alcohol, así que lo tomaron detenido y lo llevaron a la comisaría. Había consumido alcohol. No recuerda cuánto salió en el examen. Conducía su camioneta Toyota Hylux. Le dijeron que tenía que avisarle a alguna persona que fuera a buscar el vehículo, que quedó donde lo detuvieron. Ahí lo tuvieron una hora y hora y media y llegó un carabinero que mandaba más, le dijeron que lo pillaron conduciendo en estado de alcohol y dijo que lo soltaran y le retuvieron la licencia. Lo detuvieron cree un viernes y sábado y le dijeron que tenía que ir el lunes a la Fiscalía para ver qué iba a pasar. Fue a la Fiscalía, preguntó por su causa, les dijo que tenía que viajar a Santiago y le respondieron que, por el momento, no pasaba nada porque tenían que ver lo de su sangre, que ahí estaba su licencia y que en 3 o 4 meses tenía que estar en la Fiscalía para ver lo de su causa. Le entregaron su licencia y se fue. Esperó los 3 o 4 meses y volvió a la Fiscalía a consultar por su causa y le dijeron que su causa había sido caducada y le entregaron un documento que decía que fue así. Eso significaba, caducada, que había prescrito, que se había terminado su causa. Para respaldo le entregaron un documento que lo entregó a la Policía de Investigaciones cuando fueron a su casa. No le tomó atención a ese documento. Sobre si alguien lo llamó en ese período, nadie. Sobre si supo por qué se terminó la causa, no sabe. Cometió una infracción y ya le retenían la licencia, lo sabía. Ese día recuerda que tomó dos o tres cervezas, de las artesanales, un shop, de poco más de medio litro. Sobre su licencia, no le pasó nada, no se la suspendieron. No lo citaron. Hace 10 o 12 días tuvo que venir y le dijeron que lo iban a llamar. El siguiente contacto que tuvo con esta situación, fue con el fiscal, Patricio. Sobre si lo entrevistó la Policía de Investigaciones, fueron a su casa a Santiago y ahí dijo lo mismo que acá.



En este punto de su declaración, el Ministerio Público procedió a mostrar a este testigo el que se describió en el auto de apertura como “NUE 5948290 correspondiente a evidencia. Una hoja de con logo de Fiscalía Decisión de Archivo Provisional”, ante el cual respondió, a la pregunta de si ese es el documento que le entregaron, que recuerda que no estaba así en blanco, lo recuerda con firma, está seguro. A la Policía de Investigaciones le entregó el documento y ellos le tomaron fotos y se lo llevaron. Sí era parecido a ese documento.

Al Querellante contestó que le tomaron el alcotest. La alcoholemia también. Ahí mismo fue, tenían una ambulancia, había una niña. En el mismo lugar le tomaron ambas pruebas.

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña contestó que a la Fiscalía fue el lunes y allí le entregaron su licencia y le dijeron que volviera 3 o 4 meses después. En el mesón una niña le entregó un documento. No la recuerda. Esa niña trabajaba en el mesón de la Fiscalía y ese documento salió de ahí. Sobre el llamado sobre la licencia, nunca lo llamaron por esta causa. Sobre ese documento que le entregaron en el mesón de la Fiscalía, lo entregó en la Policía de Investigaciones y ese documento tenía una firma, el que le mostraron acá no tiene firma.

Destacable es entonces que, en lo relacionado con ese citado otro medio de prueba, el señor Ortega Bustamante en definitiva no lo reconoció ante estrados, con lo que le desvirtuó el mérito y contenido probatorio que la Fiscalía y el Querellante procuraron asignarle, consideración que resulta especialmente gravitante respecto de los cargos que los mismos formularon por falsificación y uso malicioso de instrumento público.

También lo es, como más adelante se relevará, que dicho documento no consiste en una carta de comunicación de archivo provisional, sino que en una decisión de archivo provisional propiamente tal. En efecto, en dicha probanza se observan y leen, en lo pertinente, los siguientes gráficos y textos: arriba un logo en que se lee Fiscalía Ministerio Público de Chile; Decisión de Archivo Provisional; R.U.C.: 1900104808-5; Fecha denuncia 27-01-2019; Delito, Fecha en que se cometió el delito, Hora en que se cometió el delito y Lugar en que se cometió el delito, Conducción Ebriedad con o sin Daño o Les. Leve 196 inc. 1; víctima Nombre: NN Domicilio: N°; Imputado Nombre: (en blanco) Domicilio: (en blanco); En Linares, Vistos: 1.- Que la presente investigación se encuentra en estado de tomarse una decisión de término. 2.- Que a la fecha no aparecen antecedentes que



permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. 3.- Que lo anterior se comunicará a la víctima del delito investigado, mediante carta enviada a su domicilio, a fin de que informe si cuenta con nuevos antecedentes, caso en el cual se procederá a la reapertura de la investigación. 4.- Que no se ha producido aún la intervención del Juez de Garantía en este procedimiento. 5.- Lo dispuesto en los artículos 109 letra d) y 167 del Código Procesal Penal; SE DECIDE: Archivar provisionalmente esta investigación. Archívese y sométase si corresponde a la aprobación del Fiscal Regional; Claudia Andrea Pino Acu?a Fiscal Adjunto Fiscalía Local de Linares; al lado de lo precedente, un timbre circular en que se lee República de Chile, Ministerio Público Fiscalía Local. Importante es hacer presente que se trata de un documento en blanco y negro, que no cuenta con firma alguna.

En consonancia con lo precedente y especificando la graduación alcohólica que al momento de la detención que describió registraba el señor Ortega Bustamante, en la prueba descrita en el auto de apertura como “Causa RUC N° 1900104808-5 por del delito de Conducción en estado de Ebriedad respecto de Fabian Ortega Bustamante”, figura lo siguiente: en su página 1, un parte de detenidos, emanado de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares en que figura Fiscalía Local de Linares; N° de Parte 00073; fecha de detención 27/01/2019; hora de detención 01:18; funcionario a cargo del procedimiento Diego Alonso Valdés Hormazábal, subteniente; código del delito 14052 conducción estado de ebriedad con o sin daños o lesiones; fecha del delito 27/01/2019; hora del delito 01:15; lugar de ocurrencia vía pública; dirección Calle 3 Poniente/calle 1 Sur de la comuna de Longaví; identificación del detenido Fabián Enrique Bustamante Ortega; N° de documento de identificación 11320201-7; lugar de detención Calle 3 Poniente/calle 1 Sur de la comuna de Longaví; documentos adjuntos acta de derechos del detenido, acta alcoholemia voluntaria, informe de lesiones, boleta de alcoholemia, licencia de conducir, declaración aprehensor y prueba intoxilycer; Relación de los Hechos: FABIÁN ENRIQUE ORTEGA BUSTAMANTE 50 años, nacionalidad chileno, cédula nacional de identidad Nro. 11.320.201-7K, [...] detenido el hoy a las 01:18 horas, por pasa a disposición de ese tribunal por el siguiente hecho: momentos antes de su detención el personal de Carabineros de servicio en la población a cargo del Subteniente Diego Valdez Hormazábal con personal a su cargo de dotación de la 1ra. Comisaría Linares y en compañía del



Personal de SENDA del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, realizaban control y fiscalización selectivo a diferentes vehículos que circulan por la calle 3 Poniente, esquina calle 1 Sur, de esta Comuna, instantes en el cual fiscalizan la Camioneta Marca Toyota, modelo Hilux, color Gris, [...] la cual era conducida por el imputado Fabián Ortega Bustamante, al realizar el examen alcotest, la primera Prueba respiratoria Nro. 15722 a las 01:18 horas, la cual arrojó 1.273 G/L en la sangre y posteriormente al realizar la segunda Prueba respiratoria Nro. 15724, a las 01:34 horas, esta arrojó 1.257 G/l en la Sangre, motivo por el cual el personal a cargo del procedimiento, procedió a su detención, dando a conocer el Motivo de su Detención y sus Derechos de detenido que le asisten; alcoholemia: se le realizó la alcoholemia Voluntaria al imputado en el lugar, por el médico Yoel Constante Ormanm, con la Boleta de Alcoholemia Nro. 1171; y licencia de conducir: el detenido en comento, lo hacía con licencia de Conductor Nro. 11.320.201-7 clase B, de la Ilustre municipalidad de Pudahuel, con vigencia hasta el 21 de Septiembre del 2020. Al Final se aprecian dos firmas ilegibles y un timbre de la Primera Comisaría de Linares.

Luego figura la boleta de alcoholemia N° 11171, en que se lee que la empresa es Senda; que la fecha de la toma de muestra es 27/01/2019 a la 01:35 horas; que el nombre de la persona a quien pertenece la muestra es Ortega Bustamante Fabián Enrique; que la apreciación clínica es ebriedad manifiesta; que el resultado del alcotest fue 1.273. Al final del documento se aprecian dos firmas ilegibles.

Luego figura una pieza titulada “Comprobante de Entrega”, con el logo de la Fiscalía Ministerio Público de Chile, en que se lee que comparece Fabián Enrique Ortega Bustamante, a quien se hace entrega de la licencia de conducir clase B otorgada por la Municipalidad de Pudahuel, a nombre de Fabián Enrique Ortega Bustamante, recibéndola a entera conformidad. Al final se aprecian dos firmas ilegibles, una sobre el RUT 11320201-7.

Luego figura el Informe de Alcoholemia N° 700/2019, correspondiente a la causa 1900104808-5 de la Fiscalía de Linares, fechado en Talca el 18 de febrero del año 2019. En él también se lee que “el funcionario administrativo que suscribe certifica que la muestra para este examen de alcoholemia se recibió como perteneciente a Don (a): FABIÁN ENRIQUE ORTEGA BUSTAMANTE C.I. 11320201-7 Siendo tomada el 27/01/2019 a las 01:35 hrs. en el SENDA. Por el



Dr.(a) YOEL CONSTANTE ORMAN [...] según consta en la boleta de remisión de la muestra. El Perito QUÍMICO FARMACÉUTICO LEGISTA que suscribe certifica que el examen científico de dicha muestra, asignada con el 700-2019 dio un resultado de 1,35 (uno coma treinta y cinco) gramos por mil. Al final se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Mauricio Recabal Sandoval, Perito Ejecutor, Servicio Médico Legal de Talca.

Luego figura una pieza titulada “Decisión de Archivo Provisional”, fechada en Linares el 12 de marzo del año 2020. En ella se aprecia, además, en su parte superior, un logo en que se lee Fiscalía Ministerio Público de Chile; R.U.C. 1900104808-5; Fecha denuncia 28-01-2019; Delito, Fecha en que se cometió el delito, Hora en que se cometió el delito y Lugar en que se cometió el delito, conducción ebriedad con o sin daño o les. Leve 196 inc. 1, 27-01-2019 0115, Calle 3 Poniente con Calle 1 Sur de Longaví; víctima Nombre: NN Domicilio: (en blanco); Imputado Nombre: Fabián Enrique Ortega Bustamante; Vistos: 1.- Que la presente investigación se encuentra en estado de tomarse una decisión de término. 2.- Que a la fecha no aparecen antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. 3.- Que lo anterior se comunicará a la víctima del delito investigado, mediante carta enviada a su domicilio, a fin de que informe si cuenta con nuevos antecedentes, caso en el cual se procederá a la reapertura de la investigación. 4.- Que no se ha producido aún la intervención del Juez de Garantía en este procedimiento. 5.- Lo dispuesto en los artículos 109 letra d) y 167 del Código Procesal Penal; SE DECIDE: Archivar provisionalmente esta investigación. Archívese y sométase si corresponde a la aprobación del Fiscal Regional; abajo Carola Milena Dagostini Ibáñez Fiscal Jefe Fiscalía Local de Linares (sin firma); y al lado un timbre circular en que se lee Fiscalía Local, República de Chile, Ministerio Público.

Luego figura un documento titulado “Comunicación”, fechado en Linares el 12 de marzo de 2019, en que se aprecia el número 1900104808-5; que “con el fin de mantenerle informado/a respecto de su denuncia recibida en la Fiscalía Local, mediante Parte Policial de fecha 28-01-2019, que da cuenta del delito de: CONDUCCIÓN EBRIEDAD CON O SIN DAÑO O LES. LEVE 196 INC. 1, me permito comunicar a usted; que a la fecha los antecedentes recibidos resultan insuficientes para lograr el esclarecimiento de los hechos, determinar algún responsable de los mismos o decretar alguna diligencia útil de investigación, por lo



que solo en el evento que exista o surja otro antecedente será posible continuar con ésta indagación”; abajo Carola Milena Dagostini Ibáñez Fiscal Jefe Fiscalía Local de Linares (sin firma); y al lado un timbre circular en que se lee Fiscalía Local, República de Chile, Ministerio Público.

De la observación de la penúltima de tales piezas, nuevamente resalta la complejidad de relacionar el ya expuesto “NUE 5948290 correspondiente a evidencia. Una hoja de con logo de Fiscalía Decisión de Archivo Provisional” con esta causa, puesto que en aquélla, si bien se aprecia un documento consistente en una decisión de archivo provisional, evidentemente es distinto en muchos aspectos de la que se incorporó al juicio y se exhibió al señor Ortega Bustamante.

En relación con la decisión de archivo provisional que se dio por probado aplicó la acusada del Pino Acuña en la plataforma computacional de la Fiscalía, así como la diferencia entre tal decisión y la carta de comunicación de la misma, nuevamente fue muy convincente, por el conocimiento y experticia específicos que demostró manejar, lo depuesto por Karem Silvana Torres de La Fuente, respecto de la cual damos acá por reproducida la primera parte de su declaración y las aclaraciones que aportó porque ya fueron extractadas al analizar los hechos relacionados con la causa RUC 1900060766-8 y, por lo mismo, para evitar extendernos inoficiosamente.

Sin perjuicio de ello, en lo atinente a los presupuestos que ahora revisamos, la señora Torres de La Fuente, al serle exhibidas las pertinentes fotografías del que se llamó en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA”, que corresponden a las que van de la N° 25 a la N° 30, señaló que la primera corresponde a la pantalla inicial del módulo de tramitación de SAF y a una causa asignada a Claudia Andrea del Pino, no ve bien el RUC, el estado es terminado, el nombre del caso es conducción estado y en las relaciones, el imputado es Fabián Ortega y el delito conducción estado de ebriedad. Luego figura que la causa está asignada a Claudia del Pino Acuña y se puede leer el RUC, el 1900104808-5, y que el estado de la causa es terminado. Luego se ve una pantalla de SIGE, de trazabilidad, donde se solicitó un archivo provisional en la misma causa por Claudia Andrea del Pino Acuña del TCMC, están las fechas y que pasó por el proceso automático de archivo sin consulta. Es la relación afectada y la trazabilidad de cuando Claudia del Pino hizo la solicitud y cuándo se gestionó. El proceso automático se hizo en horario nocturno, el archivo y



la comunicación. La decisión que tomó la abogada fue el 11 de marzo del 2019 y en el proceso nocturno se aplicó el 12 de marzo del 2019. Luego se ve la historia del caso del RUC que leyó, está marcada la fecha de digitación del archivo provisional, el 12 de marzo del 2019. Está el detalle de la actividad de archivo provisional del RUC que leyó, la relación afectada por el archivo provisional, y el nombre del denunciado Fabián Ortega. Luego el documento de la decisión de archivo provisional de SAF, con los detalles del delito, sin víctima, del imputado Fabián Ortega, con fecha 12 de marzo del 2019.

Sobre estas fotografías y la acreditación que acabamos de exponer, también debe destacarse que, en consonancia con lo que antes ya había explicado la señora Torres de La Fuente, se trata de imágenes tomadas desde los sistemas SIGE y SAF del Ministerio Público, específicamente relacionadas con actividades registradas en el mismo respecto de la causa RUC 1900104808-5, y que aquéllas revelan, dado el historial de dicho proceso y las credenciales de usuario que se muestran, que en esa plataforma informática y RUC la usuaria Claudia Andrea del Pino Acuña ingresó una decisión de archivo provisional que fue ejecutada el día 12 de marzo del año 2019.

Finalmente, a este Tribunal resulta evidente, considerando lo dispuesto en el artículo 167 del Código Procesal Penal, que por el tenor de la carpeta investigativa ya expuesta (en particular atendido el parte policial de detenido y el informe de alcoholemia adjuntado, de fecha el 18 de febrero del año 2019), que dicho archivo provisional se dispuso por la acusada del Pino Acuña contra el mérito de la investigación y obstaculizándola.

Sobre lo último y el grave entorpecimiento que significa para el normal desarrollo de una investigación la incorporación a los sistemas informáticos de la Fiscalía de una actividad como el archivo provisional, nos remitimos a lo ya expuesto sobre el punto para no redundar.

En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.3 de la novena motivación, resultaron debidamente establecidos, primero, por lo declarado en relación con la nomenclatura del delito y el principio de oportunidad que se dio por probado aplicó la acusada del Pino Acuña en la plataforma computacional de la Fiscalía, con la exposición, revestida de los atributos que ya destacamos, de la testigo Karem Silvana Torres de La Fuente, respecto de la cual damos acá por reproducida la primera parte de su declaración y las aclaraciones que aportó porque



ya fueron extractadas al analizar los hechos relacionados con la causa RUC 1900060766-8 y, por lo mismo, para evitar extendernos inoficiosamente.

Sin perjuicio de ello, en lo atinente a los presupuestos que ahora revisamos, la señora Torres de La Fuente, al serle exhibidas las pertinentes fotografías del que se llamó en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA”, que corresponden a las que van de la N° 31 a la N° 37, señaló que la primera corresponde a la pantalla principal del módulo tramitar caso de una causa asignada a Claudia del Pino, del RUC 1900680959-9, causa terminada, por el cuasidelito de lesiones, en que el imputado es Luis Godoy. Luego ve el detalle de la historia de la causa del RUC que indicó, donde está marcada la decisión de término, un principio de oportunidad. Arriba en subtipo aparece la fecha de digitación, que no es modificable por el usuario. Sobre la decisión de término principio de oportunidad está la constancia que da cuenta en SAF de que el principio de oportunidad se vino por interconexión y fue aprobado por el Tribunal. Luego se ve una pantalla del SIGE, donde está la solicitud de la decisión de término de principio de oportunidad en la causa del RUC 1900680959-9, solicitada por Claudia del Pino Acuña, la fecha de la solicitud, que fue el 24 de julio del 2019, la relación afectada que es el cuasidelito de lesiones con el imputado Claudio Godoy y se indica que ingresó una observación, cual fue agregar que la víctima está desistida, no quería colaborar con la investigación y no aportaba antecedente. Señaló que en los movimientos de la solicitud está el ingreso de la solicitud de Claudia del Pino del principio de oportunidad y una decisión de término de principio de oportunidad ejecutado por el funcionario Luis Zepeda, lo que quiere decir que la decisión de principio de oportunidad la solicitó Claudia Andrea del Pino y la ejecutó el funcionario Luis Zepeda. Luego está la pantalla de SAF del detalle de la actividad del principio de oportunidad del mismo RUC, la fecha de la actividad, se eligió la plantilla de interconexión y abajo está la ruta de la ubicación. Adoptó la decisión la cuenta F307CdelPino. Luego se ve una pantalla con el escrito del principio de oportunidad del mismo RUC en que se indica a la fiscal Carola D’Agostini. En el contenido del escrito, se comunica al Juzgado de Garantía la adopción de la decisión del principio de oportunidad. Finalmente se ve la historia del caso del mismo RUC y está marcada la cuenta con que se generó una actividad, F703LZepeda.



Sobre estas fotografías y la acreditación que acabamos de exponer, también debe destacarse que, en consonancia con lo que antes ya había explicado la señora Torres de La Fuente, se trata de imágenes tomadas desde los sistemas SIGE y SAF del Ministerio Público, específicamente relacionadas con actividades registradas en el mismo respecto de la causa RUC 1900680959-9, y que aquéllas revelan, dado el historial de dicho proceso y las credenciales de usuario que se muestran, que en esa plataforma informática y RUC la usuaria Claudia Andrea del Pino Acuña ingresó un principio de oportunidad que fue ejecutado el día 25 de julio del año 2019.

Finalmente, en cuanto al contenido de dicho principio de oportunidad, en la fotografía N° 36 puede leerse, en lo que se observa, pues el documento evidentemente está parcialmente registrado, que en el escrito en que se materializó dicha actuación se postuló en suma un atropello con resultado de lesiones. Pertinente es añadir que esa información fue completada por la prueba incorporada por la Defensa de la acusada del Pino Acuña, que se designó en el auto de apertura como “Tramitación electrónica que consta en la oficina virtual del poder judicial de los 11 hechos de obstrucción a la investigación señalados por la Fiscalía, cuyos RUC son: [...] 1900680959-9 [...]”, pues en ella figura un escrito completo que coincide totalmente con el que parcialmente se aprecia en la citada fotografía N° 36, escrito en que, en lo atinente y textualmente, se relata que “la víctima Nataly Alejandra Lara Sobarzo, expuso ante carabineros que el 21 de junio de 2019, siendo las 17:40 horas aproximadamente, en circunstancias que se encontraba en su lugar de trabajo, ubicado en la ruta L-13 km 2 callejón interior Sta. Ana de Queri, en la empresa áridos denominada santa fe, donde se encontraba compartiendo con un grupo de trabajadores de dicha planta, instante que mantuvo un intercambio de palabras con el dueño de la planta, el Sr. Luis Antonio Godoy Vásquez, el cual mantiene una relación amorosa y por lo que decidió retirarse del lugar y antes de salir de la planta de áridos, se percató que detrás de ella venia en la misma dirección una camioneta, de la cual desconoce mayores antecedentes y la que era conducida por Luis Godoy Vásquez, al cual le realizó señas para que se detuviera, haciendo caso omiso de esta, no deteniéndose, impactándola con la parte delantera, cayendo al suelo, para posteriormente retirarse del lugar la camioneta en dirección desconocida, procediendo la victima a llamar a carabineros para estampar la denuncia. Acción policial: personal de servicio de población procedió a efectuar un patrullaje por el sector, con la finalidad de dar con la ubicación del autor y conductor de la



camioneta, trasladándose además a la empresa de áridos, encontrándose esta cerrada, por lo que se procedió a trasladar a la víctima hasta el hospital San Javier para constatar sus lesiones. Lesiones: la víctima resultó con "aumento de volumen y equimosis occipital derecha, heridas erosivas en codo derecho, dolor a palpación costado derecho, aumento de volumen y equimosis ante pie derecho, fractura de costilla, halito etílico", de carácter de mediana gravedad, según comprobante de atención de urgencia del hospital base de San Javier, con el dato de atención urgencia nro. 32047 4, otorgado por el facultativo de turno Dra. Loreto Valentina Hernández Álvarez, quien la observó y derivó a su domicilio". Esos hechos son, en la misma presentación, calificados jurídicamente como constitutivos de cuasidelito de lesiones, agregándose que "el Ministerio Público estima que los hechos indicados no comprometen gravemente el interés público, toda vez que víctima está desistida y no quiere colaborar con la investigación ni aportar antecedentes, además, la pena mínima asignada al delito no excede la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, y no se trata de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones".

En esa misma prueba figura además una resolución del Juzgado de Garantía de Linares, recaída en el RUC N° 1900680959-9, fechada el 31 de julio de 2019 y suscrita por una magistrada con firma electrónica avanzada, en que se dispone que, "constatándose con la presentación del fiscal, que el Principio de Oportunidad ejercido satisface los presupuestos formales del artículo 170 inciso 1° del Código Procesal Penal, comuníquese a la víctima la decisión del Ministerio Público para los fines que corresponda; dándole a conocer los derechos que le consagra el citado artículo, los cuales podrá hacer valer dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de esta resolución".

Por lo anterior y a falta de más probanzas pertinentes producidas en el juicio oral, este Tribunal concluyó que no es factible aseverar, con el estándar exigido por la ley, que, como los persecutores sostuvieron en sus libelos, los hechos de la causa en comento "daban cuenta de un atropello de carácter doloso, con resultado de lesiones graves por parte de la pareja de la víctima", o que la acusada del Pino, al aplicar el principio de oportunidad decantado, haya "ocultando antecedentes al Tribunal para la toma de la decisión jurídica, debido a que los hechos investigados no permitían dicha decisión, alterando maliciosamente los antecedentes entregados al Tribunal para obtener la aprobación de dicha salida facultativa".



En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.4 de la novena motivación, resultaron debidamente establecidos, primero, por lo declarado en relación con la nomenclatura del delito y el requerimiento de procedimiento simplificado que se dio por probado realizó la acusada del Pino Acuña en la plataforma computacional de la Fiscalía, con la exposición, revestida de los atributos que ya destacamos, de la testigo Karem Silvana Torres de La Fuente, respecto de la cual damos acá por reproducida la primera parte de su declaración y las aclaraciones que aportó porque ya fueron extractadas al analizar los hechos relacionados con la causa RUC 1900060766-8 y, por lo mismo, para evitar extendernos inoficiosamente.

Sin perjuicio de ello, en lo atinente a los presupuestos que ahora revisamos, la señora Torres de La Fuente, al serle exhibidas las pertinentes fotografías del que se llamó en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA”, que corresponden a las que van de la N° 38 a la N° 45, señaló que la primera corresponde a una causa asignada a Claudia del Pino, el RUC es 1900840692-0, por conducción bajo la influencia del alcohol, el estado es terminado y el denunciado es Carlos Sumonte. Luego se ve la historia del caso del mismo RUC, donde se destaca un requerimiento de procedimiento simplificado con fecha de digitación 29 de octubre del 2019. Luego se ve esa actividad de requerimiento de procedimiento simplificado por el imputado Carlos Sumonte, con la fecha de la actividad, 29 de octubre de 2019 y la ruta donde está el documento, aparece generando ese documento la cuenta F703CdelPino. Luego ve un escrito de procedimiento simplificado con los antecedentes del RUC señalado, con su continuación en otra imagen, en que aparece presentando el escrito por Carola D’Agostini, con una relación de hechos, la calificación jurídica de conducción en estado de ebriedad y que se piden pide 540 días de presidio, multa, suspensión de licencia y accesorias legales generales y costas.

Sobre estas fotografías y la acreditación que acabamos de exponer, también debe destacarse que, en consonancia con lo que antes ya había explicado la señora Torres de La Fuente, se trata de imágenes tomadas desde los sistemas SIGE y SAF del Ministerio Público, específicamente relacionadas con actividades registradas en el mismo respecto de la causa RUC 1900840692-0, y que aquéllas revelan, dado el historial de dicho proceso y las credenciales de usuario que se muestran, que en esa plataforma informática y RUC la usuaria Claudia Andrea del Pino Acuña ingresó un requerimiento de procedimiento simplificado el día 29 de octubre del año 2019.



Finalmente, en cuanto al contenido de dicho requerimiento de procedimiento simplificado, en las fotografías N° 42 a N° 44 puede leerse que en el escrito en que se materializó dicha actuación, dirigido en contra del imputado Carlos Manuel Sumonte Vásquez, en suma se postuló, tras una relación de los hechos, que el mismo conducía en estado de ebriedad y con 0,92 gramos por mil de alcohol en la sangre. Así, allí puede leerse que, como descripción de lo sucedido, que “el día 04 de agosto de 2018, siendo aproximadamente las 20:55 horas, en la intersección de las calles Chorrillos esquina Presidente Ibáñez de la ciudad de Linares, el imputado CARLOS MANUEL SUMONTE VASQUEZ conducía su motocicleta marca Kinlon, P.P.U. BVT.015-7, en estado de ebriedad, con una dosificación alcohólica de 0.92 G/L de alcohol en la sangre”, lo que se califica jurídicamente como constitutivo del delito consumado de conducción en estado de ebriedad.

Por lo anterior y a falta de más probanzas pertinentes producidas en el juicio oral, este Tribunal concluyó que no es factible aseverar, con el estándar exigido por la ley, que, como los persecutores sostuvieron en sus libelos, Carlos Manuel Sumonte Vásquez, en los hechos ventilados, “adicionalmente conducía sin haber obtenido la licencia de conducir”, o que la acusada del Pino Acuña requirió en procedimiento simplificado “ocultando antecedentes de alcoholemia y también evitó la agravación de la pena, obstaculizando gravemente y, a sabiendas, la persecución criminal”.

En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.5 de la novena motivación, resultaron debidamente establecidos, primero, por el mérito de la prueba descrita en el auto de apertura como “Causa RUC N° 1900915769-k por del delito de Conducción en estado de Ebriedad respecto de Octavio Ayala Aravena”, en que figura en su página 1, un parte de detenidos, emanado de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares en que figura Fiscalía Local de Linares; N° de Parte 02106; fecha de detención 25/08/2019; hora de detención 02:40; funcionario a cargo del procedimiento Sergio Alberto Fuentes Manríquez, suboficial; código del delito 14052 conducción estado de ebriedad con o sin daños o lesiones; fecha del delito 25/08/2019; hora del delito 02:00; lugar de ocurrencia vía pública; dirección Av. El Bosque/Quinta Libertad de la comuna de Linares; identificación del detenido Octavio Enrique Ayala Aravena; N° de documento de identificación 18655612-7; lugar de detención Av. El Bosque/Quinta Libertad de la comuna de Linares; documentos adjuntos acta declaración aprehensor, dato de



atención médica, acta alcoholemia, boucher prueba respiratoria, acta derecho detenido; Relación de los Hechos: OCTAVIO ENRIQUE AYALA ARAVENA, 25 años, soltero, chileno [...], detenido hoy a las 02:40 horas en Av. el Bosque con Quinta la Libertad, Linares, por el Suboficial Sergio Fuentes Manríquez, ambos de esta dotación y de servicio en la población, pasa a disposición de esa Fiscalía Local de Linares, por el siguiente hecho: porque hoy siendo las 02:40 horas mientras el personal aprehensor efectuaba un patrullaje por el sector estando de servicio segundo patrullaje, recepcionaron un llamado al teléfono del cuadrante nro. 2, donde indicaban que por el sector de la el Bosque con calle Manuel Rodríguez, transitaba un auto marca Toyota, modelo Yaris, [...] y que su conductor al parecer lo hacía en estado de ebriedad, concurriendo al lugar logrando ubicar el vehículo, que transitaba por calle el Bosque en dirección al Poniente, logrando fiscalizarlo en calle Quinta Libertad, identificando a su conductor como, Octavio Enrique Ayala Aravena, Cédula de identidad Nro. 18.655.612-7, [...] quien lo hacía en estado de ebriedad, lo que constó por su fuerte hálito alcohólico, incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar, siendo sometido a la prueba respiratoria con el equipo Dräger arrojando 1,39 gramos por litro en la sangre, por lo que se procedió, a su detención, dándole a conocer sus derechos que le asisten conforme a los Art. 93,94 y 135 del CPP, posteriormente siendo trasladado hasta el Hospital Base de Linares finalidad efectuar alcoholemia de rigor; licencia: se adjunta clase "B", de la Ilustre Municipalidad de Linares, vigente; sobre la alcoholemia, se indica que se le efectuó en el Hospital Base de Linares, conforme a acta de salud Nro. 1301142, Frasco Nro. 3488, la cual firma en conformidad y se adjunta. Al Final se aprecian dos firmas ilegibles y un timbre de la Primera Comisaría de Linares.

Luego figura un dato de atención de urgencia, emanado del hospital de Linares, en que se lee que la fecha de ingreso es 25/08/2019; que el nombre es Ayala Aravena Octavio Enrique; que el motivo de la consulta es Alcoholemia; que llegó en un vehículo policial de Carabineros; y que se le efectuó una alcoholemia. Al final del documento se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Linares Ruiz Antonio Médico Cirujano.

Luego figuran tres boletas de alcotest tituladas Dräger, en que se lee que la fecha es 2019.08.25; que la hora es 02:50; que el nombre es Octavio Enrique Ayala Aravena; y que la prueba del examinado fue siempre 1.39 g/L. Al final de los documentos se aprecia una firma ilegible.



Luego figura una pieza titulada “Comprobante de Entrega”, con el logo de la Fiscalía Ministerio Público de Chile, en que se lee que comparece Octavio Enrique Ayala Aravena, a quien se hace entrega de la licencia de conducir clase B otorgada por la Municipalidad de Parral, a nombre de Octavio Enrique Ayala Aravena, recibéndola a entera conformidad. Al final se aprecian dos firmas ilegibles, una sobre el RUT 18655612-7.

Luego figura el Informe de Alcoholemia N° 6489/2019, correspondiente a la causa 1900915769-K de la Fiscalía de Linares, fechado en Talca el 1 de octubre del año 2019. En él también se lee que “el funcionario administrativo que suscribe certifica que la muestra para este examen de alcoholemia se recibió como perteneciente a Don (a): OCTAVIO ENRIQUE AYALA ARAVENA C.1. 18655612-7 Siendo tomada el 25/08/2019 a las 03:23 hrs. en el HOSPITAL DE LINARES. Por el Dr.(a) ANTONIO LINARES RUIZ [...] según consta en la boleta de remisión de la muestra. El Perito BIOQUÍMICO LEGISTA que suscribe certifica que el examen científico de dicha muestra, asignada con el 6489-2019 dio un resultado de 1,63 g%, (uno coma sesenta y tres gramos por mil). Al final se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Natalia Torrealba Miranda, Perito Ejecutor, Servicio Médico Legal de Talca.

En esa línea, recordaremos que el comisario de la Policía de Investigaciones Pedro Felipe Méndez Tapia manifestó en la audiencia que le correspondió en esta causa ser testigo de la declaración de Octavio Ayala, Patricio Campos, Víctor Muñoz y Humberto Tapia. Los cuatro tenían un patrón en común porque en todas esas declaraciones, si bien estas personas dicen que no fueron contactadas ni realizaron pagos, sí sus causas fueron archivadas. También todas eran causas por manejo en estado de ebriedad y detenciones por Carabineros por esos delitos. Lo único que no reconocen ellos que alguien los haya contactado pidiendo dinero para el archivo.

En lo referente a la agrupación de investigaciones y la solicitud de formalización por un delito y el requerimiento de procedimiento simplificado incompleto que se dio por probado realizó la acusada del Pino Acuña en la plataforma computacional de la Fiscalía, fueron establecidas por la testigo Karem Silvana Torres de La Fuente con la exposición, revestida de los atributos que ya destacamos, respecto de la cual damos acá por reproducida la primera parte de su declaración y las aclaraciones que aportó, porque ya fueron extractadas al analizar



los hechos relacionados con la causa RUC 1900060766-8 y, por lo mismo, para evitar extendernos inoficiosamente.

Sin perjuicio de ello, en lo atinente a los presupuestos que ahora revisamos, la señora Torres de La Fuente, al serle exhibidas las pertinentes fotografías del que se llamó en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA”, que corresponden a las que van de la N° 46 a la N° 64, señaló que la primera corresponde a un RUC asignado a Claudia del Pino, el 1900915769-K, en estado terminado, por conducción en estado de ebriedad y aparece el mensaje de SAF de cuando una causa es agrupada a otra y la causa queda terminada por esa agrupación. Indica ese mensaje que este RUC fue agrupado al 1900624788-4. La causa con la decisión de agrupación queda terminada inmediatamente en SAF. La que continúa es la otra, que se mantiene vigente. Luego ve otras dos imágenes donde aparece asignada a Claudia del Pino la causa RUC 1900915769-K, agrupada al RUC que termina en 788-4. Luego un detalle de la historia del mismo RUC, en que está marcada la actividad “agrupación de investigación”, que se digitó el 13 de abril del 2020. Luego ve el mismo RUC que termina en 769-K, donde se marca el usuario F703CdelPino, con fecha de inicio y de término. Luego ve el detalle de esa actividad de agrupación de investigación del mismo RUC, fecha de decisión 13 de abril del 2020, está también el RUC al que se agrupa digitado por el usuario, que termina en 788-4. Aparece realizando esta actividad la cuenta de F703CdelPino. Luego ve el escrito de agrupación de investigaciones, en que lee lo que alcanza a distinguir, sí que el imputado es Octavio Ayala. Ese escrito lo generó Claudia del Pino. Luego ve una imagen de la pantalla del módulo tramitar casos, causa asignada a Claudio Ávila, del RUC terminado en 788-4, en que el imputado es Octavio Ayala, donde hay dos relaciones, por lo que puede que haya dos víctimas o si hay una relación que no corresponde, el fiscal o abogado debe pedir que se anule. Cuando hay agrupación, no recuerda si se traspan todos los antecedentes, pero la regla es que se debe revisar la causa madre que queda vigente y chequear que los sujetos y relaciones estén todos, también las actividades. Luego ve la pantalla de la historia de ese caso, está marcado un requerimiento de procedimiento simplificado con fecha de digitación 13 de abril del 2020, también se ve un requerimiento de procedimiento simplificado del 11 de noviembre del 2021. En esa fecha cree Claudia del Pino ya no estaba en funciones, porque le tocó a ella pedir la desactivación de sus cuentas y cree eso fue antes, el



primer semestre. Luego ve una actividad de requerimiento de procedimiento simplificado, se ven las relaciones asociadas, una con víctima NN y otra, del mismo imputado y delito, con la víctima Luis Barros. La fecha de la solicitud es el 13 de abril del 2020 y digitando aparece la cuenta F703CdelPino. En la siguiente fotografía se alcanza a distinguir el nombre del imputado Octavio Ayala, es un escrito de requerimiento de procedimiento simplificado que redactó o generó Claudio del Pino Acuña. Luego se, muestra lo que, por su estructura, es un requerimiento de procedimiento simplificado, y en cuanto a las penas solicitadas, están en blanco. Este escrito, según los parámetros y reglas de negocios de la unidad y Fiscalía, no está en condiciones de ser presentado porque está incompleto. Luego ve la continuación de la anterior y que está incompleto, porque no se mencionan los testigos y peritos. Luego ve la pantalla de historia de SAF del RUC 1900624788-4, está marcada una solicitud de audiencia digitada el 9 de marzo del 2020. Luego se muestra esa solicitud de audiencia con la relación compuesta por el imputado Octavio Ayala y la víctima Luis Barros del RUC terminado en 788-4, de una audiencia de formalización de la investigación. Aparece realizando esta actividad la cuenta de F703CdelPino. Luego ve un escrito de solicitud de audiencia de formalización, con el imputado Octavio Ayala y la víctima Luis Barros. Aparece como redactora Carola D'Agostini. Luego ve la historia del caso del RUC terminado en 788-4, está marcada una solicitud de audiencia digitada el 24 de marzo del 2020. Arriba de lo marcado aparecen dos actividades de requerimiento de procedimiento simplificado, la primera con fecha de digitación 11 de noviembre del 2021 y la segunda 13 de abril del 2020. Debajo de la marcada se lee una solicitud de audiencia. Luego ve una pantalla de una actividad del RUC terminado en 788-4, de fecha 24 de marzo del 2020, una solicitud de audiencia de formalización de investigación con la ruta respectiva, que aparece generada por la cuenta de F703CdelPino. Luego ve un documento de solicitud de audiencia de formalización, con el RUC que termina en 788-4, con la víctima y el imputado Octavio Ayala, que lee.

Sobre estas fotografías y la acreditación que acabamos de exponer, también debe destacarse que, en consonancia con lo que antes ya había explicado la señora Torres de La Fuente, se trata de imágenes tomadas desde los sistemas SIGE y SAF del Ministerio Público, específicamente relacionadas con actividades registradas en el mismo respecto de la causa RUC N° 1900915769-K, agrupada al RUC N°



1900624788-4, y que aquéllas revelan, dado el historial de dicho proceso y las credenciales de usuario que se muestran, que en esa plataforma informática y RUC la usuaria Claudia Andrea del Pino Acuña ingresó una solicitud de formalización por un delito el día 24 de marzo del año 2020 y un requerimiento de procedimiento simplificado incompleto el día 13 de abril del año 2020.

Precisando, en cuanto al contenido de dicho requerimiento de procedimiento simplificado, en las fotografías N° 56 a N° 58 puede leerse que en el escrito en que se materializó dicha actuación, dirigido en contra del imputado Octavio Enrique Ayala Aravena, en suma se postuló, tras una relación de los hechos que, por la mala calidad de la dichas fotografías, no son legibles, que aquellos son constitutivos del delito de conducción en estado de ebriedad, pero hay blancos en el artículo que prescribe y sanciona dicho ilícito, en el listado de los antecedentes que fundamentan el requerimiento, en la pena solicitada, y en el listado de testigos y peritos cuya citación se pide.

En lo tocante a la solicitud de formalización por un delito del día 24 de marzo del año 2020, en el historial de SAF que se muestra en la fotografía N° 54, figuran dos solicitudes de audiencia de fechas 24 de marzo y 9 de marzo del año 2020, ambas detalladas en las fotografías N° 55 y N° 60, donde las dos se registran como realizadas en la cuenta F703_CDELPINO. De ambas además se desplegó el respectivo escrito en las fotografías N° 61 y N° 64 y, de la lectura de los mismos, se puede colegir que son iguales. Si bien de ello podría concluirse que la acusada del Pino solamente solicitó la formalización por uno de los delitos cuyas investigaciones fueron agrupadas, no puede obviarse que, como explicó la señora Torres de la Fuente, tras dicha agrupación quedaron en la causa RUC N° 1900624788-4 dos relaciones, que se pueden observar en la fotografía N° 55. Dado que no consta de las imágenes en comento que se haya efectuado la operación de revisar el historial de ambas relaciones, pues sólo siempre se muestra uno (fotografías N° 54 y 59), tampoco consta que en la relación no explorada se haya omitido ejecutar actividades como la solicitud de audiencia de formalización. Adicionalmente, no se incorporó algún reporte o se aseveró por la señora Torres de la Fuente que las solicitudes de formalización desplegadas, sin perjuicio de estar ejecutadas en SAF, no hayan sido presentadas al Juzgado de Garantía competente.

Por lo anterior y a falta de más probanzas pertinentes producidas en el juicio oral, este Tribunal estima que no es factible aseverar, con el estándar exigido por la



ley, que, como los persecutores sostuvieron en sus libelos, que se haya solicitado la formalización sólo por uno de los delitos a que se refiere la causa analizada, o que dicha solicitud no fue presentada al Tribunal como correspondía. Tampoco que la acusada, al ingresar un requerimiento de procedimiento simplificado incompleto, con esa sola omisión haya ocultado antecedentes, pues de lo uno no se colige con certeza lo otro, sobre todo si el contenido con blancos de tal requerimiento quedó así ingresado a SAF. Por lo mismo, concluimos que en este caso no se acreditó suficientemente que con las acciones que dimos por establecidas, la acusada del Pino Acuña haya obstaculizado gravemente la investigación.

En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.6 de la novena motivación, resultaron debidamente establecidos, primero, en particular respecto de la nomenclatura del delito y la solicitud de formalización por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol que se dio por probado realizó la acusada del Pino Acuña en la plataforma computacional de la Fiscalía, por lo aportado por la testigo Karem Silvana Torres de La Fuente con la exposición revestida de los atributos que ya destacamos y respecto de la cual damos acá por reproducida la primera parte de su declaración y las aclaraciones que aportó, porque ya fueron extractadas al analizar los hechos relacionados con la causa RUC 1900060766-8.

Sin perjuicio de ello, en lo atinente a los presupuestos que ahora revisamos, la señora Torres de La Fuente, al serle exhibidas las pertinentes fotografías del que se llamó en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA”, que corresponden a las que van de la N° 65 a la N° 69, señaló que la primera corresponde a la pantalla del módulo de tramitar caso de una causa asignada a Claudio Ávila, del RUC N° 1900836255-9, causa terminada. Luego ve la historia del caso de ese RUC, está marcada la fecha de digitación del 24 del 12 del 2019 y la actividad de solicitud de audiencia. Lee que esta causa tiene un sobreseimiento definitivo, ingresado el 15 de octubre del 2021. Luego ve el detalle de la referida actividad de solicitud de audiencia en el mismo RUC, la fecha de la actividad es el 24 de diciembre del 2019, es una solicitud de audiencia de formalización con su ruta respectiva, y este documento se generó con la cuenta F703CdelPino. Luego ve una solicitud de audiencia de formalización, en que se lee que el imputado es Alejandra Salas, que el RUC termina en 255-9 y que el delito es conducción bajo la influencia del alcohol. Luego ve una actividad “previo resolver”, la relación es con Alejandra Salas contra la víctima Esteban Acuña y en el



campo observaciones se indica aclárese solicitud, está con la cuenta F703CdelPino, se generó el 13 de diciembre de 2019.

Sobre lo que se acaba de exponer, también debe destacarse que, en consonancia con lo que antes ya había explicado la señora Torres de La Fuente, se trata de imágenes tomadas desde los sistemas SIGE y SAF del Ministerio Público, específicamente relacionadas con actividades registradas en el mismo respecto de la causa RUC N° 1900836255-9, y que aquéllas revelan, dado el historial de dicho proceso y las credenciales de usuario que se muestran, que en esa plataforma informática y RUC la usuaria Claudia Andrea del Pino Acuña ingresó una solicitud de formalización por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol el día 24 de diciembre del año 2019.

Precisando, en cuanto al contenido de dicha solicitud de formalización, en la fotografía N° 68 puede leerse que en el escrito en que se materializó tal actuación, que se muestra parcialmente y está dirigido en contra del imputado Alejandra Lorena Salas Pizarro, en suma se planteó que, en la causa RUC N° 1900836255-9, se solicita disponer la realización de una audiencia a objeto de formalizar a la nombrada por la participación y responsabilidad en el delito de conducción bajo la influencia del alcohol.

Por lo anterior y a falta de más probanzas pertinentes producidas en el juicio oral, este Tribunal estima que no es factible aseverar, con el estándar exigido por la ley, que, como los persecutores sostuvieron en sus libelos, primeramente que la analizada haya sido, al momento de la intervención en ella de la acusada, también una causa por el cuasidelito de lesiones de otro involucrado, dado que en la fotografía respectiva, a saber, la N° 65, únicamente se observan en el campo “relaciones”, una de ellas, llamada “Alejandra Lorena Salas Conducir infl alcohol causa”, y en el campo “Nombre Caso”, las menciones “Conducción bajo la influencia”. Más adelante se ahondará en este hecho.

En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.7 de la novena motivación de este fallo, resultaron debidamente establecidos, primero, en particular respecto de la nomenclatura del delito, la fijación de una audiencia de procedimiento simplificado por el Tribunal y el archivo provisional que se dio por probado realizó la acusada del Pino Acuña en la plataforma computacional de la Fiscalía, por lo aportado por la testigo Karem Silvana Torres de La Fuente con la exposición revestida de los atributos que ya destacamos y respecto de la cual damos



acá por reproducida la primera parte de su declaración y las aclaraciones que aportó, porque ya fueron extractadas al analizar los hechos relacionados con la causa RUC 1900060766-8.

Sin perjuicio de ello, en lo atinente a los presupuestos que ahora revisamos, la señora Torres de La Fuente, al serle exhibidas las pertinentes fotografías del que se llamó en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA”, que corresponden a las que van de la N° 70 a la N° 74, señaló que la primera corresponde al módulo gestión tramitar causa y a una causa asignada a Claudio Ávila de RUC N° 202122215-6. Luego ve la pantalla de trazabilidad de SIGE de la decisión de archivo provisional, con fecha de solicitud 14 de junio del 2020, es un archivo sin consulta. Fue solicitado por Claudia del Pino Acuña, luego fue ejecutado el archivo el 15 de junio en el proceso masivo, se registró el archivo provisional el 15 de junio del 2020 en la madrugada y la comunicación de archivo en la misma fecha y horario por el proceso masivo del SIGE. Luego ve la historia del caso terminado en 215-6, está marcada una decisión de término, un archivo provisional del 15 de junio del 2020, y continúa la historia con la comunicación a la víctima, luego una audiencia, luego un cita a juicio simplificado, luego una revocación del término, otra constancia de audiencia, un nuevo cita a juicio simplificado, un acuerdo reparatorio, un fijación de día y hora de audiencia. Bajo la decisión de archivo provisional aparece una cita a juicio simplificado, “otras” y un fija día y hora. Ese tipo de actividad es bastante extraño, es un procedimiento simplificado con un archivo, después otro procedimiento simplificado, una revocación, está bastante enredado, un término por acuerdo reparatorio. Luego ve el detalle de la actividad de archivo provisional en el mismo RUC del imputado Máximo Troncoso, de fecha 15 de junio del 2020, aparece digitando la cuenta de F703CdelPino. Luego ve el escrito de decisión de archivo provisional en el mismo RUC por el delito de daños simples del imputado Máximo Troncoso.

Sobre lo que se acaba de exponer, también debe destacarse que, en consonancia con lo que antes ya había explicado la señora Torres de La Fuente, se trata de imágenes tomadas desde los sistemas SIGE y SAF del Ministerio Público, específicamente relacionadas con actividades registradas en el mismo respecto de la causa RUC N° 202122215-6, y que aquéllas revelan, dado el historial de dicho proceso y las credenciales de usuario que se muestran, que en esa plataforma



informática y RUC la usuaria Claudia Andrea del Pino Acuña ejecutó un archivo provisional de la investigación el día 15 de junio del año 2020, cuyo contenido en ese sentido puede observarse en la fotografía N° 74.

En lo tocante a que antes de ello se fijó una audiencia de procedimiento simplificado por el Tribunal, en el historial de la causa que se muestra en la fotografía N° 72 se observa que antes de tal archivo provisional, figuran registrados dos subtipos de actividad llamados “Fija día y hora para audienci” y “Cita a juicio (procedimiento”, de fechas 4 de marzo del 2020 y 3 de febrero del 2020, respectivamente. Si bien el contenido de ellas no está desplegado en las fotografías analizadas, la Defensa de la acusada del Pino Acuña complementó lo anterior con la prueba que incorporó y que se designó en el auto de apertura como “Tramitación electrónica que consta en la oficina virtual del poder judicial de los 11 hechos de obstrucción a la investigación señalados por la Fiscalía, cuyos RUC son: [...] 202122215-6 [...]”, pues en ella figura un acta titulada “Individualización de Audiencia de presentación voluntaria de imputado c/ord Detención”, fechada el 4 de marzo del año 2020 y emanada del Juzgado de Garantía de Linares, correspondiente a la causa RUC N° 202122215-6, en que, en lo relevante, se consigna que “Máximo Andrés Troncoso Navarrete NO ADMITE responsabilidad”; que el Ministerio Público ofrece la prueba que se singulariza y que comparte la Defensa; y que se cita, bajo los apercibimientos legales, a dicho imputado y a los testigos ofrecidos a la audiencia de juicio oral simplificado del 8 de abril del año 2020. Luego, con fecha 3 de abril del año 2020, también se lee una resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Linares el día 3 de abril del año 2020, en que se dispone la suspensión de la audiencia de juicio oral simplificado fijada para el día 08 de abril del 2020 debido a la contingencia sanitaria del momento, resolución que cuenta con una firma electrónica avanzada de la magistrado Paula Sánchez Gutiérrez.

Finalmente, a este Tribunal resulta evidente, considerando lo dispuesto en el artículo 167 del Código Procesal Penal, que por el tenor de la carpeta investigativa ya expuesta y las resoluciones previas que se estableció dictó en la misma causa el Juzgado de Garantía de Linares en pos de la realización de una audiencia de juicio oral simplificado, que aquél archivo provisional se dispuso por la acusada del Pino Acuña contra el mérito de la investigación y obstaculizándola, pues al 15 de junio del año 2020 ya se había producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento.



Sobre el grave entorpecimiento que significa para el normal desarrollo de una investigación la incorporación a los sistemas informáticos de la Fiscalía de una actividad como el archivo provisional, nos remitimos a lo ya expuesto sobre el punto para no redundar.

En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.8 de la novena motivación de este fallo, resultaron debidamente establecidos, primero, con lo testificado por Rodrigo Adolfo Guerra Morales, quien en la audiencia manifestó que es ejecutivo comercial de factoring y hace corretaje de propiedades. Eso lo hace desde hace años. Estudió administración de empresas. Vive en la comuna de Linares desde hace 14 años. Sobre Claudia del Pino, fue una clienta de él en el arriendo de una casa. Por el corretaje contacta a clientes por redes sociales para hacer vistas a casas. En ese tiempo tenía una casa en arriendo. Eso fue el 2019. La publicó para arrendar y se contactó con él un señor que quería visitar la casa. No era una casa barata, por lo que tenía que tener un sueldo acorde al arriendo. Estaba en avenida Las Vertientes, Cerro La Gloria. En ese tiempo él vivía a la vuelta. Para él era súper fácil mostrar la casa. Llegó la familia, les mostró la casa, le dijeron que vivían en la María del Valle. Llegaron a acuerdo, pero les dijo que necesitaba liquidaciones de sueldo. Ahí supo que trabajaba ella en la Fiscalía, Claudia. Ella fue con los dos niños y el marido. Les gustó la casa, la recorrieron. Se pidió la documentación correspondiente, calificó y se arrendó la casa. La documentación del sueldo la presentó Claudia. Con ella le bastaba y sobraba por su sueldo. El contrato de arriendo lo firmó Claudia. En su parecer, cree ella tomaba las decisiones del arriendo. Ella era la que calificaba por el sueldo. En ese tiempo eran como \$320.000 de arriendo y se pagaba el mes de arriendo y el de garantía más comisión. A los dos adultos que fueron a la casa podría reconocerlos. Reconoce al caballero del final (el acusado Vega). A ella no la podría reconocer. Sobre el siguiente contacto con ella, a Claudia la vio esa vez de la entrevista del arriendo solamente. Para la firma del contrato no estuvo.

Añadió que después tuvo un percance, en febrero del siguiente año, donde lo pillaron bajo estado de ebriedad conduciendo, lo llevaron detenido, le cursaron la infracción y lo dejaron citado a Fiscalía. Lo detuvieron en Linares los Carabineros. Lo llevaron a hacer alcoholemia y nada más. Ese día lo llevaron a la comisaría y después lo dejaron en libertad. Eso fue en febrero del 2020. Después fue a consultar qué pasaba con su causa y le dijeron que estaba en la Fiscalía y en algún momento lo



citarían para ver el caso. Un día, saliendo de su casa, se encontró con el señor ahí y le comentó que lo vio en una foto en un tema de manejo en estado de ebriedad y que estaba la oportunidad de borrar esos antecedentes. Le dijo que estaba en una foto, que lo reconoció, que sabía que estaba como acusado de estar bajo el estado de ebriedad, las consecuencias las sabía de suspensión de licencia y firmar, y que estaba la posibilidad de borrar esos antecedentes. Había un papel donde decía lo que había hecho. Era un documento impreso. Ese documento lo vio. No recuerda exactamente qué salía ahí, pero tenía una foto suya. Cuando le dijo eso, en realidad dentro de todo sabía que estaba infringiendo algo porque le pidió dinero a cambio de. El precio era \$300.000 por borrar. Él no le dijo de dónde sacó los documentos, pero sabía que la señora trabajaba en la Fiscalía, así que la información seguramente era de ahí. La persona le dijo que lo pensara, que fuera rápido para finiquitar el tema, que iba a demorar un par de semanas o un mes pero quedaría en nada. Sólo le dijo que la señora podía hacer el tema porque trabajaba en Fiscalía, la señora era Claudia. Le decía que ella podía hacer el trámite y que quedaría en nada. Lo dudó primero porque pudo ser un cuento del tío. Le dio hartas vueltas, pero en otro encuentro en la calle tomó la decisión. En marzo del 2020 fue a consultar a la Fiscalía y como en marzo también debe haber sido este encuentro. Fue de día, cerca de la casa de la villa. Casi siempre saliendo de la casa. Él vivía a una casa de distancia. Lo pensó, decidió acceder y pagó el dinero. Era la transacción por \$300.000 y tenía que ser en efectivo. Sacó el dinero y lo entregó en efectivo. Fue en la casa. Fue más de una semana después. Se juntaron afuera de la casa de ellos, en la puerta de la casa. Le dijo que iba con el tema y le pasó el dinero, él lo guardó. Se topaban en la calle y era normal verlo. Entregó el dinero y le dijo que en una semana o más estaba listo el trámite.

Señaló que después se encontraron de nuevo y le entregó un documento súper ambiguo e igual quedó con la duda, pero nunca más preguntó. Era un documento impreso. No recuerda el texto, pero decía algo que no era lo que había visto antes. Sí aparecía su nombre en ese documento. No tenía timbre y era ambiguo. Luego que le pasaron ese documento, perdió conexión con su causa.

Recordó que después fue citado por este tema, por la Policía de Investigaciones y relató todo lo que pasó. Sobre su causa por manejo en estado de ebriedad, fue condenado a 2 años de suspensión de licencia y un año de firma mensual. Está cumpliendo su condena. Eso en un Tribunal de Linares. Entre que



pagó el dinero y la causa por manejo en estado de ebriedad se reactivó pasaron un par de años. Lo condenaron ahora, hace uno o tres meses.

En este punto el Ministerio Público procedió a mostrar al señor Guerra Morales la prueba que se nomina en el auto de apertura como “NUE 5948291 correspondiente a un documento de la Fiscalía Local de Linares, Decisión de archivo provisional de fecha 28 de marzo de 2020”, y al observarla refirió que ese es un documento que dice decisión de archivo provisional, tiene su nombre, fecha, la palabra Manimávida que no sabe qué es, no sale algún delito, aparece como fiscal Carolina D’Agostini. Este es el documento que le entregó el señor (indica hacia el acusado). Lo guardó en su casa, en un cajón. Llegó ese documento a la policía porque se lo solicitó la policía, lo buscó y lo entregó. No tenía cómo saber si era original o falso. Siempre quedó con la duda de que podía ser legítimo. Sí tiene su nombre y logo de la Fiscalía.

Al Querellante contestó que antes no había visto un documento de esas características. Le causó extrañeza porque había datos erróneos, como Manimávida. Por eso no le dio confianza. Al Tribunal que lo sentenció, antes de la sentencia, lo citaron una vez y no fue, y a la segunda fue. Todo eso este año.

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña respondió que, sobre el nombre de la persona que reconoció acá, no recuerda su nombre, pero fue la persona que acompañó a Claudia del Pino a arrendar la casa. Él le pidió los \$300.000 que pagó. No le devolvió ese dinero ni él se lo pidió. No volvió a tener contacto con él.

Indicó que por esta situación igual tuvo que enfrentar la causa por el manejo. Este arreglo no prosperó. Lo condenaron. No tiene otra causa pendiente. No lo han citado por haberle pagado a una persona por este arreglo. Lo citaron solamente de la Policía de Investigaciones. No declaró más que en la Policía de Investigaciones. Cuando fue citado, declaró. Fue citado una vez, no recuerda la fecha. Declaró en la Policía de Investigaciones. En la Fiscalía sí declaró con un funcionario de la Fiscalía. Estaban en pandemia y estaban por cámara. En esa declaración no recuerda con quién habló. Sobre si recuerda si en esa declaración dijo que nunca le entregaron un documento, como fue on line, no recuerda, pero sí siempre tuvo el documento guardado. Tras un ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal, señaló que ahora recuerda haber señalado que no le entregó documento alguno sobre su causa, es lo que dice ahí.



A la Defensa del acusado Vega Guerrero señaló que se le acercó su vecino, y, sabiendo que la vecina trabajaba en la Fiscalía, dudó de la propuesta porque nada es seguro.

Al Tribunal aclaró que cuando le hicieron esa declaración, fueron preguntas, nada como muy para él, le preguntaban si pasó esto o esto otro, cómo fue el tema, y como era on line, no fue tan de peso. En realidad no recordaba el documento pero sí se lo entregaron. En esa declaración recuerda que dijo que no le entregaron el documento.

En un nuevo interrogatorio, al Ministerio Público contestó que tras esa declaración por Zoom, luego hubo otra declaración presencial en la Policía de Investigaciones, donde estaba ud. (el fiscal) y otra persona. A la primera no le tomó tanto el peso. Ese documento lo fue a buscar de inmediato y lo trajo de inmediato. En la declaración ante el fiscal y la Policía de Investigaciones recordó el documento y lo trajo.

Sobre el tema de la acreditación del documento que se presentó al señor Guerra Morales, si bien a instancias de una de las Defensas recordó que inicialmente declaró que no le entregaron ese documento, a la vez dijo que en prestó declaración dos veces y que a la primera, que fue realizada on line, no asignó mayor importancia, y en ella respondió que el acusado no le había entregado un documento, lo que no ocurrió en la segunda, que fue presencial y realizada ante un fiscal, donde recordó el documento en comento y lo entregó de inmediato. De ello desprende este Tribunal que en definitiva el señor Guerra Morales desconoció en esa primera declaración que el acusado le dio el documento que se le exhibió debido a que no se tomó con la seriedad debida aquella entrevista y no porque dicho traspaso no haya ocurrido, lo que queda confirmado por la entrega que refirió haber hecho del mentado instrumento a la policía y al Ministerio Público en su segunda declaración, corroborada por el hecho de que el documento fue acompañado materialmente al juicio.

Sobre esa misma evidencia, consignaremos que en ella se observa, arriba, un logo en que se lee Fiscalía Ministerio Público de Chile; Decisión de Archivo Provisional; R.U.C. 2000145861-3; Fecha denuncia 08-02-2020; Fecha en que se cometió el delito, Hora en que se cometió el delito y Lugar en que se cometió el delito, 15-08-2019 1600 Manimavida, Linares; víctima Nombre: NN Domicilio: (en blanco); Imputado Nombre: Rodrigo Adolfo Guerra Morales Domicilio: Chacabuco



445, Linares; En Linares, Sábado 28 Marzo de 2020 Vistos: 1.- Que la presente investigación se encuentra en estado de tomarse una decisión de término. 2.- Que a la fecha no aparecen antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. 2.- Que lo anterior se comunicará a la víctima del delito investigado, mediante carta enviada a su domicilio, a fin de que informe si cuenta con nuevos antecedentes, caso en el cual se procederá a la reapertura de la investigación. 4.- Que no se ha producido aún la intervención del Juez de Garantía en este procedimiento. 5.- Lo dispuesto en los artículos 109 letra d) y 167 del Código Procesal Penal; SE DECIDE: Archivar provisionalmente esta investigación. Archívese y sométase si corresponde a la aprobación del Fiscal Regional; Carola Milena Dagostini Ibáñez Fiscal Jefe Fiscalía Local de Linares (sin firma); y nuevamente el logo del Ministerio Público que se describió al inicio.

En relación con la permanencia en el tiempo de la declaración del testigo precedente, el ya nombrado comisario de la Policía de Investigaciones Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez aportó que, en el contexto de esta investigación, contactaron a Rodrigo Guerra y le tomaron declaración en octubre del 2020 en calidad de imputado, porque la causa de él también aparecía archivada. Tenía una causa por manejo en estado de ebriedad, pero aparecía archivada con otra tipificación, cree por hurto de hallazgo, y parecía extraño. Accedió a presentarse a la unidad. Le leyeron sus derechos y relató que se dedica al corretaje de propiedades y el 2019 lo contactó Ricardo por el tema del arriendo de una propiedad que ellos querían ver en villa Las Vertientes. Le dio cuenta de que estaban interesados por la propiedad con su esposa y dos hijos. Cuando llegó a ver la propiedad le entregó más antecedentes, que quien hacía cabeza en el arriendo era Claudia del Pino, a la que solicitó sus liquidaciones y cumplía con el perfil para arrendar porque Ricardo no tenía liquidaciones y creía que Ricardo no generaba ingresos, así que era más viable que ella arrendase la propiedad. Se arrendó y él tuvo el contacto para el arriendo. Añadió que lo detuvieron en marzo del 2020 por un manejo en estado de ebriedad, donde no aceptó tomarse la alcoholemia, lo dejaron libre y el mes de marzo o abril aproximadamente lo contactó Ricardo Vega, le dio cuenta de si había sido detenido por un manejo en estado de ebriedad y le dio indicios de los antecedentes de su detención, del lugar, las fechas, los antecedentes que manejaban, que ellos mantenían en la Fiscalía, y dentro de eso le ofreció cerrar la causa porque para él también era problemático no tener licencia de conducir disponible porque se mueve mucho. Se dio la instancia y



por los antecedentes que le entregó y en conocimiento de que la esposa de él sabía trabajaba en la Fiscalía o el Tribunal, creyó que era factible hacer esa gestión del cierre o borrar la causa y acordaron un valor. Guerra tenía antecedentes previos por manejo en estado de ebriedad y casi en todas las declaraciones que tuvieron de las personas que pagaron, todos dan cuenta de que tenían antecedentes de manejo en estado de ebriedad y que Ricardo conocía esa información. Dijo que Ricardo señaló que la jefa le hacía los arreglos, en abierta alusión a Claudia del Pino. Los \$300.000 los cobró él, llegó él al acuerdo con Guerra. También dijo Guerra que acordaron el pago de \$300.000 en efectivo como todos los pagos de esta causa. Lo acordaron fuera de la casa de Claudia en una fecha. Por eso Ricardo le hizo llegar una carta con un archivo provisional dando cuenta de que la causa fue archivada o borrada. Se le hizo un reconocimiento fotográfico y se le pidió la entrega del documento que daba fe de que la cosa era en serio. Ese documento lo revisó, era muy similar al que se entregó al declarante anterior, similar al que ya se le exhibió.

Entonces el Ministerio Público pasó a exhibir al señor Gutiérrez Gutiérrez el ya citado antecedentes designado como “NUE 5948291 correspondiente a un documento de la Fiscalía Local de Linares, Decisión de archivo provisional de fecha 28 de marzo de 2020”, y ante él manifestó que ese es el documento que Ricardo le entregó a Rodrigo Guerra sobre el archivo provisional de su causa por manejo en estado de ebriedad, aparece el nombre de Guerra como imputado y como fiscal Carola D’Agostini Ibáñez.

Acotó que, sobre Guerra y su causa por manejo en estado de ebriedad, estaba archivada por hurto de hallazgo, terminada, y que Guerra conducía y tenía su licencia.

Refrendando lo depuesto por el señor Guerra Morales en relación con la detención de la que fue sujeto por haber sido sorprendido por la policía conduciendo en estado de ebriedad, el cabo primero de Carabineros Cristian Leonardo Silva Salas señaló que trabaja en la Quinta Comisaría de Concepción, pero en febrero del 2020 trabajaba en la Primera Comisaría de Linares, donde trabajó hasta diciembre del 2021 aproximadamente. El 7 de febrero del 2020, siendo las 3:15 horas aproximadamente, estaba de servicio nocturno y conducía su vehículo policial. Lo antecedía un vehículo station negro marca Jeep que realizaba maniobras con peligro de accidente, zigzagueos y unos metros más adelante lo fiscalizaron, en Max Jara 515 aproximadamente. Al llegar al lugar, le pidieron la documentación e



identificación. Lo identificaron como Rodrigo Guerra Morales. Ahí pudo percatarse del fuerte hálito alcohólico del conductor, rostro congestionado e incoherencia al hablar. Le pidieron al conductor descender del vehículo y tenía inestabilidad al caminar. Le señalaron al conductor que le realizarían un alcotest, que se realizó y mantuvo un número que no recuerda, 1.23 cree gramos de alcohol en la sangre. Le notificaron que estaba en estado de ebriedad y que sería detenido. Le dieron a conocer sus derechos y que lo trasladarían al hospital para realizarle una alcoholemia. En el hospital la persona se negó a ese examen. La Fiscalía no recuerda qué instrucciones dio. El imputado le parece mucho que quedó apercibido por el artículo 26. Sobre la licencia, no recuerda qué pasó con ella. Lo habitual en esa época con las licencias de conducir y lo manejo en estado de ebriedad, no sabría responder.

En el mismo sentido y aportando la graduación alcohólica decantada, corroborando además que el señor Guerra Morales se negó a que le practicaran la alcoholemia, la Fiscalía incorporó lo que en el auto de apertura de juicio oral se nomina como “Causa Ruc N° 2000145861-3 por del delito de Conducción en estado de Ebriedad respecto de Rodrigo Guerra Morales”, en que rola, en su página 1, un parte de detenidos emanado de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares en que figura Fiscalía Local de Linares; N° de Parte 00316; fecha de detención 07/02/2020; hora de detención 03:18; funcionario a cargo del procedimiento Maritza Carolina Faúndez Castillo, subteniente; código del delito 14052 conducción estado de ebriedad con o sin daños o lesiones; fecha del delito 07/02/2020; hora del delito 03:17; lugar de ocurrencia vía pública; dirección Max Jara 515 de la comuna de Linares; identificación del detenido Rodrigo Adolfo Guerra Morales; N° de documento de identificación 14290360-1; lugar de detención Max Jara frente al Nro. 515 de la comuna de Linares; documentos adjuntos: declaración personal policial, derechos del detenido, dato de atención médica, verificación de identidad, prueba respiratoria, licencia de conductor clase B y acta alcoholemia; Relación de los Hechos: RODRIGO ADOLFO GUERRA MORALES, 45 años, soltero, chileno [...], detenido hoy a las 03:18 horas, en calle Max Jara frente al Nro. 515 de esta ciudad, por la Subteniente Maritza Faúndez Castillo y Cabo 1ro. Cristian Silva Salas, ambos de esta dotación y de servicio en la población, pasa a disposición de esa Fiscalía, por el siguiente hecho: Porque momentos antes, mientras realizaban patrullajes preventivos. Se percataron que el Station Wagon, patente CWCB-95,



marca Jeep, modelo Grand Cherokee, año 2011, color negro carbón, que antecedió al vehículo policial en el mismo sentido del tránsito y pista de circulación. Lo hacía en forma errática zigzagueando. Por lo que al llegar a calle Max Jara, frente al Nro. 515 de esta ciudad, procedieron a su fiscalización, presentando su conductor su Licencia de conducir y documentación del móvil. Siendo identificando como; Rodrigo Adolfo Guerra Morales, Cédula de Identidad Nro. 14.290.360-1, constatando en esos momentos que lo hacía en estado de ebriedad, denotado por su fuerte hálito alcohólico, incoherencia al hablar, rostro congestionado y al descender de su vehículo mostro su inestabilidad al caminar. Seguido a ello, fue sometido a una prueba respiratoria, arrojando 1,23 g/l., procediendo a su detención, dándole a conocer el motivo y los derechos que le asisten conforme lo estipula la Ley, siendo trasladado a un centro asistencial y posterior entrega en la Sala de Guardia de la Unidad para procedimiento de rigor; Prueba Respiratoria: conforme a lo anterior siendo las 03:18 horas, se le efectuó una prueba respiratoria con el equipo Dräger, el que arrojó como resultado 1,23 G/L en la sangre, con el número de muestra 7622. [...]; Lesiones: El imputado fue trasladado hasta el SAR San Juan de Dios, siendo examinado por el médico cirujano de turno; José Becerra Sánchez, quien diagnosticó SIN PRONOSTICO MEDICO, según D.A.U. Nro. 274242; Alcoholemia: Consultado por el personal a cargo del procedimiento, el detenido se negó a realizarse la Alcoholemia voluntaria; [...] Licencia De Conducir: El conductor posee licencia de conducir clase 5 de la Ilustre Municipalidad de Linares, vigente hasta el 02.12.2022, la cual se adjunta al parte policial, conforme procedimiento de rigor por instrucciones emanadas de la Fiscalía Local [...]. Al Final se aprecian dos firmas ilegibles y un timbre de la Primera Comisaría de Linares.

Luego figura una pieza titulada “Acta de Consentimiento para Practicar Alcoholemia en Forma Voluntaria”, en que se lee que el Linares, a 7 de febrero del año 2020, la subteniente Maritza Faúndez Castillo y otro funcionario condujeron hasta el SAR San Juan de Dios a Rodrigo Adolfo Guerra Morales, quien no accedió en forma voluntaria a que le extraiga sangre para su examen de alcoholemia. Al final se aprecia un afirma ilegible sobre el nombre manuscrito Rodrigo Adolfo Guerra Morales, más otras dos firmas ilegibles al lado de las menciones Maritza Faúndez Castillo y Cristian Silva Salas.

Luego figura una boletas de alcotest tituladas Dräger, en que se lee que la fecha es 2004.01.02; que la hora es 07:46; que el nombre es Rodrigo Adolfo Guerra



Morales; y que la prueba del examinado fue siempre 1.23 g/L. Al final de los documentos se apreciaba una firma ilegible.

Luego figura un dato de atención de urgencia, emanado del hospital del SAR San Juan de Dios de Linares, en que se lee que la fecha de ingreso es 07/02/2020; que el nombre es Guerra Morales Rodrigo Adolfo; que el motivo de la consulta es Alcoholemia; que llegó en un vehículo policial de Carabineros; que se le efectuó una alcoholemia y constatación de lesiones; y, como observación, que no aceptó la toma de muestra. Al final del documento se apreciaba una firma ilegible sobre las menciones Becerra Sánchez José Gregorio Médico Cirujano.

Luego figura una pieza titulada “Comprobante de Entrega”, con el logo de la Fiscalía Ministerio Público de Chile, en que se lee que comparece Rodrigo Adolfo Guerra Morales, a quien se hace entrega de la licencia de conducir clase B otorgada por la Municipalidad de Linares, a nombre de Rodrigo Adolfo Guerra Morales, recibéndola a entera conformidad. Al final se aprecian dos firmas ilegibles, una sobre el RUT 14.290.360-1.

Luego figura un documento titulado “Boleta de Alcoholemia”, emanado del Servicio de Salud del Maule, SAR San Juan de Dios, correspondiente al frasco N° 612-2020, en que se consigna que la toma de la muestra fue el 7 de febrero del año 2020 a las 3:40 horas; que Rodrigo Adolfo Guerra Morales clínicamente presentaba signos de ingesta alcohólica o hálito alcohólico y que el paciente rechaza la toma de muestra de sangre. Al final se apreciaba un timbre en que se lee Dr. José Becerra.

Luego figura el documento titulado “Decisión de Archivo Provisional” que fue incorporado al juicio como el Otro Medio de Prueba N° 1.

Luego figura un documento titulado “Comunicación”, que en su parte superior presenta un logo en que se lee Fiscalía, fechado el 28 de marzo del año 2020 y el número 2000145861-3. En su cuerpo se lee que “con el fin de mantenerle informado/a respecto de su denuncia recibida en la Fiscalía Local, mediante Parte Policial de fecha 07-02-2020, que da cuenta del delito de: HURTO DE HALLAZGO, me permito comunicar a usted; que a la fecha los antecedentes recibidos resultan insuficientes para lograr el esclarecimiento de los hechos, determinar algún responsable de los mismos o decretar alguna diligencia útil de investigación, por lo que solo en el evento que exista o surja otro antecedente será posible continuar con ésta indagación”; al final se lee Carola Milena Dagostini



Ibáñez Fiscal Jefe Fiscalía Local de Linares (sin firma), junto a un timbre circular en que se consigna Fiscalía Local, República de Chile, Ministerio Público.

Luego figura un documento en que aparece, arriba, un logo en que se lee Fiscalía Ministerio Público de Chile; luego el título “Decisión de Archivo Provisional”; R.U.C. 2000145861-3; Fecha denuncia 07-02-2020; Delito, Fecha en que se cometió el delito, Hora en que se cometió el delito y Lugar en que se cometió el delito, hurto de hallazgo, 15-08-2019 1600 Señor Colbún; víctima Nombre: NN Domicilio: (en blanco); Imputado Nombre: Rodrigo Adolfo Guerra Morales Domicilio: Chacabuco 445, Linares; En Linares, viernes 3 abril de 2020 Vistos: 1.- Que la presente investigación se encuentra en estado de tomarse una decisión de término. 2.- Que a la fecha no aparecen antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. 2.- Que lo anterior se comunicará a la víctima del delito investigado, mediante carta enviada a su domicilio, a fin de que informe si cuenta con nuevos antecedentes, caso en el cual se procederá a la reapertura de la investigación. 4.- Que no se ha producido aún la intervención del Juez de Garantía en este procedimiento. 5.- Lo dispuesto en los artículos 109 letra d) y 167 del Código Procesal Penal; SE DECIDE: Archivar provisionalmente esta investigación. Archívese y sométase si corresponde a la aprobación del Fiscal Regional; Carola Milena Dagostini Ibáñez Fiscal Jefe Fiscalía Local de Linares (sin firma); y un timbre circular en que se consigna Fiscalía Local, República de Chile, Ministerio Público.

Luego figura otro documento titulado “Comunicación”, que en su parte superior presenta un logo en que se lee Fiscalía, fechado el 3 de abril del año 2020 y el número 2000145861-3. En su cuerpo se lee que “con el fin de mantenerle informado/a respecto de su denuncia recibida en la Fiscalía Local, mediante Parte Policial de fecha 07-02-2020, que da cuenta del delito de: HURTO DE HALLAZGO, me permito comunicar a usted; que a la fecha los antecedentes recibidos resultan insuficientes para lograr el esclarecimiento de los hechos, determinar algún responsable de los mismos o decretar alguna diligencia útil de investigación, por lo que solo en el evento que exista o surja otro antecedente será posible continuar con ésta indagación”; al final se lee Carola Milena Dagostini Ibáñez Fiscal Jefe Fiscalía Local de Linares (sin firma), junto a un timbre circular en que se consigna Fiscalía Local, República de Chile, Ministerio Público.



Con dicho instrumento, congruente con las otras probanzas ya expuestas, puede darse por certeramente establecido que el resultado de una prueba respiratoria que se aplicó en dicho procedimiento al imputado Rodrigo Adolfo Guerra Morales fue 1,23 gramos por mil del alcohol en la sangre respecto y que el mismo se negó a que le practicaran alcoholemia.

Centrándonos ahora el supuesto consistente en que, en conocimiento de que Rodrigo Adolfo Guerra Morales era imputado en una causa por el delito de conducción en estado de ebriedad, Claudia del Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente, a lo menos, en la descripción de la conducta punible a que se refería dicha causa, así como la graduación alcohólica con que fue sorprendido Guerra Morales, con el fin de que solicitara al último beneficios económicos a cambio de terminar su causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación, importante es, para iniciar, tener presente que Ricardo Ignacio Vega Guerrero declaró ante estrados y corroboró dicha dinámica, describiéndola en definitiva como un *modus operandi* que acordó con Claudia del Pino Acuña y que aplicaron en múltiples casos, entre ellos éste y algunos que más adelante se analizarán.

Así, aquél encausado manifestó al comienzo del juicio oral, renunciando a su derecho a guardar silencio, que jamás ha hecho un escándalo en la Fiscalía, jamás se ha ido a tomar un vaso de agua a la Fiscalía y si alguna vez estuvo en la oficina de ella, no fueron más de 2 minutos. Para eso hay muchos testigos. A ella la llevaba, entraban al estacionamiento de la Fiscalía, le bajaba el bolso y ella entraba. Cuando de repente le llevaba algo que eran dos panes y una Vital que siempre le encargaba, se lo pasaba por la ventana y siempre había más colegas de ella que se percataban de eso.

Sobre el tema del banco, de la transferencia que figura a su nombre, ese día cuando ella le dijo eso, ella tenía su tarjeta. Si bien su tarjeta nunca estaba con plata, ella siempre le transfería 20, 50, plata para ir al supermercado porque siempre había que comprar cosas y le transfería. Ese día salió reflejada la transferencia, pero nunca la hizo del teléfono de ella o de alguna parte y él mismo la acompañó al banco a hacer la denuncia porque supuestamente a ella le habían clonado su tarjeta. A los días se percató de que su tarjeta (del testigo) estaba bloqueada. Fue al banco y debió hacer un papel de su puño y letra sobre que ella le había bloqueado su tarjeta en base a la denuncia que hizo y a la que la acompañó.



Señaló que a Claudia la conoció en diciembre de 2017 por un amigo, Joel. Llegó a su casa un día en la noche, ella ebria con Joel, compartieron esa noche y no se separaron más hasta que se fue él de la casa de Linares. Cuando a ella la trasladaron a Linares, ella le pidió que él se viniera con ella porque no conocía Linares, no quería estar sola y porque con los dos niños se le iba a hacer muy complicado. En el tiempo en Linares, ella trabajó un par de meses y después se operó de la columna y estuvo como un año sin trabajar. Después empezó a trabajar en la Fiscalía, siempre con problemas económicos porque desde el primer día que la conoció, tomaban todos los días y del sueldo que ella recibía le descontaban como la mitad y de lo que recibía tenía que pagar muchas cosas siempre. Siempre en el mes le pedían plata a su mamá, ella le pedía plata a su papá, a Joel. Están todas esas transferencias y esas cosas. Ella empezó a trabajar y con problemas económicos por el tema de alcohol. Un día le dijo que estaba cagada de plata y que sabía cómo ganar plata. Le dijo que era con el tema de la movida de las licencias y que era fácil para ella porque eran causas de ella y nadie se iba a meter a esas causas. Le preguntó si estaba segura y dijo que la única forma de que la pillaran era que algunos de los que ayudaran, “sapearan”. Así lo hizo. Ella sacaba la información del computador y escribía en un cuaderno que incautó la Policía de Investigaciones, donde estaba todo escrito con letra de ella, escribía los RUC y le pasaba a él un papel con el nombre de la persona, los grados alcohólicos y el número de teléfono y él la llamaba y le decía que se llamaba Cristian, que había una movida y si le interesaba. Unos le decían que sí y otros que no. Con los que accedieron, se juntaron en Linares, les explicaba la movida en persona y le decían que sí. Ahí él iba a la casa, le decía a ella que este guevoñ dijo que sí y ella hacía el tema en el computador. Él jamás se ha metido al computador. Sólo le explicaba el tema de la movida y si le decían que sí, él le decía a ella y ella cambiaba los delitos y hacía todo eso y después ella misma imprimía un papel en la impresora de la casa, una negra que él indicó al fiscal dónde estaba, imprimía los papeles y él los entregaba a los que accedían a hacer esto.

En el computador, nunca tuvo clave pegada o anotada porque están todas las fotos de todos los artefactos los de la Policía de Investigaciones y sabe que no están esas cosas, claves y cosas que dice que tiene pegadas. Nunca trabajó en un fundo como encargado de informática. Días antes del allanamiento ella mandó a formatear su computador con un informático que iba a la Fiscalía a prestar asesoría, se llamaba Fernando y vivía cerca de ellos. Formateó su computador como dos o tres veces.



Afirmó que él entregaba, le pasaban la plata, él se la llevaba a ella y ella cambiaba el delito, nada más que eso.

Al Ministerio Público contestó que se conocieron en diciembre del 2017. Él tiene condenas previas, en el 2015, en Rengo. Claudia trabajaba en ese tiempo en la Fiscalía de Rengo. Cuando se conocieron, él ya tenía estos procesos. Ella se enteró de esas condenas después de estar juntos. En abril del 2018 se casaron, ya viviendo en Linares. Ella empezó a trabajar en Linares en marzo del 2018. En la Fiscalía empezó a trabajar en marzo del 2018. Trabajó un par de meses y después se operó, ahí con licencia hartó tiempo, luego volvió a la Fiscalía un tiempo y llegó la pandemia, donde ella trabajaba en la casa. La oficina de la Fiscalía de Linares tenía puerta de vidrio. No era habitué de ahí.

Indicó que del allanamiento no recuerda la fecha, pero fue el 2020. Cuando ocurrió ese allanamiento no tenía una denuncia de violencia intrafamiliar de Claudia, esa denuncia fue después. En esa causa de violencia intrafamiliar no recuerda haber declarado. Nunca declaró o que recuerde se llegó a algo. Si le dijese que declaró el 2020, no recuerda. Por amenazas tampoco lo recuerda. Por Zoom no. Si le mostrara una declaración, podría recordarla. Tras un ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal realizado por el fiscal, en que le exhibió una declaración, manifestó que es su firma la que está en el documento, pero no recuerda esa declaración.

Agregó que cuando declaró dijo que el abogado de Claudia era Huber. Cuando fueron a allanar la casa, él fue con Claudia a una notaría y firmaron dos mandatos, firmaron los papeles de notaría, a favor de Huber, entregándole patrocinio y poder, algo así.

Dijo que declaró en un sumario. Allí se echó la culpa de todo porque el día que allanaron, Claudia estaba mal y le decía que le había quedado la “cagá” con la pega, que no sabía que responderle a sus papás y que si él se echaba la culpa no le pasaría nada porque no era funcionario público. De hecho ella llamó a su mamá y le dijo lo mismo y que si se echaba la culpa le iba a poner el mejor bufete de abogados. En esa declaración del sumario, hizo un ejercicio práctico con quien le tomó la declaración. Le hizo abrir los programas de la Fiscalía y le dijo que hiciera como lo mismo que hizo con el tema del cambio de las licencias y eso y no supo hacer nada. Lo dejó hartó rato en el computador para ver si tenía conocimientos. Tiene hasta 1° medio. Nunca ha tenido estudios de informática.



Sobre esto de los problemas económicos, cuando llegaron a Linares ya tenían esos problemas porque ella tenía muchas deudas. Eran deudas que ella traía de antes. En Linares los niños estaban en colegio particular, estaba el arriendo. A ella le pagaban y el sueldo le duraba una semana. Ella tuvo esta idea de ganar plata con el tema de las licencias a principios del 2020. Un día en la casa tomaban y ella le dijo que se le ocurrió una idea, que sabía cómo ganar plata. Le dijo que era entregando licencias de conducir que eran de causas de ella y nadie la pillaría porque nadie se iba a meter a revisarle las causas porque tenía tantas que era como imposible que le pillaran esa causa. Cuando se lo propuso, le preguntó si estaba segura y que lo pensara bien porque era su pega y ella respondió que no la iban a pillar, que si alguien “sapeaba”, ahí sí jodía, pero que las causas nadie se las revisaba.

Sobre el mecanismo que ocuparon para hacer esto, ella sacaba los RUC en un cuaderno, anotaba causas como con licencia y el que le servía decía éste está fácil y le pasaba el nombre, dirección, número de teléfono, los grados alcohólicos con que los habían pillado y todo eso y ahí él lo llamaba. Esos datos los sacaba ella del computador y se los pasaba a él escritos con letra de ella en un papel de cuaderno. Ahí él llamaba a las personas. Por eso llamó a personas como diez veces. Les decía que estaba la movida de archivarle la causa, que se tenía que cuidar y no lo podían volver a pillar y que se cobraban 500 o 600 lucas. Resultó eso cinco veces. Recuerda a un vecino de la casa, Rodrigo Guerra, otro era Diego Vásquez, otro de apellido Lobos de Longaví y otro de apellido Alarcón y dos más que un día se los dijo al fiscal, Ralph y otro que no recuerda. Ralph no era chileno. Esas personas pagaron, en efectivo.

Precisó que el señor Guerra era el vecino y trabajaba en una corredora de propiedades porque cuando arrendaron la casa, él la fue a mostrar. Él sabía que Claudia trabajaba en la Fiscalía. Un día Claudia estaba en el computador, se metió no sabe a qué parte y salió la foto, dijo ella mira el vecino, empezó a ver y salía que le habían quitado la licencia y lo mandó a hablar con el vecino. Él esperó que llegara y le explicó la movida que había, personalmente. El vecino Guerra le dijo que sí, que tenía que ver el tema de la plata y le avisaba en unos días y le avisó como el otro día. El trato fue que pagó \$300.000, luego Claudia hizo la carta esa de archivo, ella la firmó y él la entregó al vecino. Claudia generó esa carta de archivo. Al entregarle la carta al vecino, le dijo que era para que tuviera confianza y no pensara que lo iban a



cagar o algo así. Era como una carta que decía como que se archivaba la causa y encima del logo tenía una firma, Claudia le ponía una firma que inventaba. La plata él se la entregaba a Claudia, se gastaba en copete, en pagar la luz y el agua. El pago de Guerra fue en la casa de él. Ese dinero él lo tomó todo y lo entregó a Claudia. Ella nada le pasó a él.

Añadió que, sobre el caso de Lobos, de Longaví, que él fue por un amigo cree. Llegó y le dijo que tenía un problema por un tema de la licencia. Le dijo a Claudia, ella vio la causa, parece no era de ella, no sabe qué habrá hecho y a él le cobró \$700.000 pero terminó pagando 500. A él no se le dio carta de archivo. Pagó en efectivo a él y él entregó todo el dinero a Claudia.

Con Ralph, a él lo llamó por teléfono por los datos que sacó Claudia y se juntaron en la carretera afuera. Le explicó la movida y le cobró \$300.000. Se los pagó en efectivo la señora de él, en una clínica de diálisis en calle Brasil y a él se le dio la carta de archivo que confeccionó Claudia. El dinero se lo entregó todo a Claudia.

Sobre Diego Vásquez, era un cabro que trabajaba en el campo y también lo llamó y se juntaron en la Iansa. Él les pagó \$400.000 en dos cuotas, una en el colegio Alborada y otra en la Shell de calle Brasil, ahí le pagó los otros \$200.000 en efectivo. A él también se le dio una carta de archivo. Era la tercera carta de archivo. Después, como trabajaba en taxis y siempre se lo topaba, quería la plata. Le dijo a Claudia y Claudia ese día le pasó la plata y él se la devolvió a Diego. Diego le pedía la plata porque decía que si no iban a tener problemas. A él fue a único que devolvió la plata. Después que allanaron la casa, los llamaron a declarar y ahí él (Diego) llegó hartas veces a la casa, él ya no vivía en la casa. Claudia lo llamaba y le decía que andaba ese gallo y le dijo que el cabro quería la plata. Claudia le pasó el dinero, 400, se los pasó en una cuota y él lo devolvió a Diego Vásquez y Diego ese mismo día cree fue a la Policía de Investigaciones a decir que le devolvió la plata.

A Alarcón lo contactó por teléfono pero resultó ser hermano de una amiga de Claudia, que conoció por Facebook en una página de permutas. A él lo llamó y le explicó la movida. Trabajaba en el norte en ese tiempo. Le explicó que salía 500 lucas y se archivaba la causa y no le iban a quitar la licencia. Le pasó 300 y también se le dio una carta de archivo. Los otros 200 se los dio como a los días o semanas en la alameda de Linares. El dinero lo entregó todo a Claudia. También le entregaron una carta de archivo.



Afirmó que, para hacer esos negocios, él se movilizaba en una moto Honda XR patente EN106.

Sobre Enrique Torres, a él no se le hizo nada. Lo llamó y al último dijo que no. Era de Colbún parece. Usó la misma modalidad de antes, obtuvo los datos de Claudia y lo contactó. Le ofreció el negocio. Él no tenía la licencia, se la habían quitado. Claudia fue a la Fiscalía un día, sacó la carpeta y en la carpeta no estaba la licencia y por eso no se hizo el negocio, porque él quería la licencia de vuelta. Esa carpeta se la encontraron después a Claudia en la casa. Sobre si era común que Claudia tuviera carpetas de la Fiscalía en su casa, ella siempre andaba con carpetas. No sabe si eso estaba permitido o no.

Respondió, a la pregunta de si sabía cómo se descubrió todo esto, que se lo contó a su hermano una vez, a Nelson. Lo vino a ver una vez a Linares e hicieron un asado. Ahí le dijo que estaba la pura “cagá”, que Claudia tenía la pura “cagá” y que iba a salir pillada tarde o temprano. Le preguntó su hermano qué hacía y le contó. Después él (su hermano) tuvo una discusión con Claudia y su hermano la amenazó y le dijo que le iba a durar poco lo que ganaba porque la iba a denunciar. Le contó a su hermano a principios del 2020. Ya se estaba haciendo este tema con Claudia. Claudia discutió con su hermano porque Claudia siempre lo humillaba, siempre humillaba a toda su familia, que eran unos ignorantes. Ella se curaba y dejaba la embarrada. Se puso ella a discutir con su hermano por teléfono, ahí él la amenazó, ella se picó más y se agarraron fuerte. Ahí Claudia le mandaba mensajes de que se iba a arrepentir y todo el tema. Su hermano denunció en Rengo, no recuerda cuándo. No tuvieron más contacto con él hasta que llegó la Policía de Investigaciones a su casa. Su hermano a la policía en Rengo dijo que Claudia estaba entregando licencias y cosas así, casos de corrupción o algo así puso en la denuncia.

Indicó que no sabe lo que es el SAF. El SIGE cree es donde sacan el historial de la persona o algo así. El SAU u OPA no sabe qué es.

Sobre Ralph, le preguntaron en la investigación el tema de la recepción del dinero de Ralph. Se lo entregó la señora de él en la clínica de diálisis. En algún momento dio una versión distinta, dijo que Claudia había recibido la plata en un supermercado porque él andaba en Rengo, pero lo recibió él y él lo entregó a Claudia.

Sobre el consumo de alcohol, venía desde que conoció a Claudia, todos los días. Los dos consumían. También consumían cocaína, los dos. No era siempre, de



repente consumían. Eso se costaba primero con plata de Claudia, al último, cuando recibía la plata de las licencias, ella compraba alcohol. Cocaína no porque ella estaba operada.

Señaló que no ha golpeado a Claudia. Malos tratos sí, pero eran mutuos. Eran esos malos tratos siempre por temas de copete, ella no lo dejaba trabajar, era celosa, le levantó la mano hartas veces y él llamaba a Carabineros, que terminaba conversando con ella. En ese tiempo ella no lo dejaba trabajar. Podía trabajar de chofer, que era lo que hacía antes. Tenía licencia profesional para conducir. Tuvo problemas judiciales por trabajar sin licencia, lo pillaron manejando un camión sin licencia. Eso en Rengo. Iba manejando un camión y no tenía licencia profesional. Por eso estuvo firmando un año.

Explicó que la declaración del sumario fue distinta a la que da acá para ayudarla porque ella estaba asustada y le dijo que como él no era funcionario público, no le iba a pasar nada. Después se enteró de que ella tenía otra pareja y su misma familia le decía que no valía la pena cubrirla, siendo que ella había hecho todo del tema de los sistemas y todo eso y decidió contar la verdad.

Manifestó que la nueva pareja de Claudia se llama algo de Jonathan. Nunca lo ha visto. Tras irse de la casa, como al mes, se enteró de que ella tenía otra pareja. Él se fue como en junio o julio del 2020, como en agosto, después del allanamiento se fue de la casa. Actualmente, con Claudia no tiene contacto. Continúan casados. Se hizo el cese de convivencia.

Sobre la transferencia del banco, ella tenía protección por fraude en el Banco Estado, donde tenía cuenta corriente y cuenta RUT. La tarjeta de coordenadas la tenía ella siempre en su cartera. Esa transferencia que fue alegada, fue de \$150.000 que ella un día en la mañana le dijo que había aparecido reflejada en su cuenta pero él no tenía su cuenta. Después a ella esa plata del seguro se la devolvieron del seguro. O sea, según ella, apareció una transferencia desde su cuenta a la de él pero él no tenía la tarjeta de coordenadas, nunca, de hecho ni siquiera tenía la aplicación en su teléfono para transferir. Ella lo llamó y le preguntó si fue él, respondió que no, él mismo la fue a buscar a la Fiscalía y fueron los dos al banco y ella hizo la denuncia por el tema del fraude, lo hizo en el banco. No sabe si se denunció en la Fiscalía. Sí sabe que le devolvieron la plata. El problema de las transferencias, con él, fue esa vez no más pero ella siempre llamaba que le habían clonado la tarjeta y el seguro iba y le devolvía la plata. Eso pudo ocurrir unas siete



veces. Sobre los montos, siempre eran 200, 100. No sabe si esas transferencias o clonaciones eran efectivas o no.

No trabajó en algún fundo. Cuando empezó a trabajar a los 17, siempre en el campo en cosechas y después trabajó como cuatro años como apicultor. Ha trabajado en el campo, de apicultor y como chofer y operador de maquinaria pesada. Tenía la licencia D.

A Paulina Cisternas la conoce, es amiga de Claudia de cuando llegaron a Linares. Ella iba bien seguido a la casa. Ella también estuvo involucrada en el consumo de alcohol, de drogas no.

En la casa, el lugar de trabajo de Claudia era en el comedor. Ahí ella se sentaba, ponía el computador, sus carpetas, papeles, cuaderno, todo encima del comedor. Se usaba una impresora en la casa, negra. En ese trabajo él no intervenía. Tampoco nunca se sentó en la Fiscalía a ver cómo ella trabajaba. En la Fiscalía lo conocían de vista.

Al Querellante respondió que, sobre un depósito de 8 millones de Claudia que ella mencionó, era por un bono que le daban de la Fiscalía.

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña contestó que un día Claudia le preguntó por una transferencia que aparecía en su cuenta y le respondió que no sabía nada. Esa transferencia fue a su cuenta. Fueron al banco y antes fue a trabajar y de la Fiscalía le dijo que iba a hacer la denuncia. Ella fue a denunciar, él la llevó al banco a hacer la denuncia. Ella estaba preocupada por lo que pasaba. No sabe cómo llegó el dinero a su cuenta. Desde que fue al banco con ella su cuenta se bloqueó. Nunca vio tampoco ese dinero porque ella tiene su tarjeta. Un día quiso usar su tarjeta y estaba bloqueada. Después fue a sacar un plástico nuevo y le dijeron que estaba bloqueada por la denuncia que puso ella. Ese día Claudia tenía su tarjeta y él nunca vio la plata en su tarjeta tampoco. Ella dijo que era otro fraude más y fue a poner la denuncia. Cree que ese dinero lo sacaron de su tarjeta porque él nunca más pudo usar su tarjeta. Sobre esa transferencia, no la hizo de su teléfono. Ahí no tenía ni la aplicación. No sabía si esa transferencia se hizo de un teléfono, ella solamente le dijo que la transferencia se había hecho de su cuenta a la de él y ella tenía su cuenta.

En marzo ella tuvo un depósito de \$8.000.000 por su trabajo.

Expuso que, sobre los gastos de Claudia, ella le prestaba plata a su familia de repente, así como su mamá le prestaba plata a ella también. Eso está en transferencias. Si a ella le sacaron el historial en el banco, se imagina que aparece



todo. Su mamá le prestaba de repente 20, 30, 100, y ella decía que se lo devolvía. A Claudia siempre le duraba el sueldo dos o tres días. Sobre préstamos de Claudia a su familia, su mamá pagaba cosas allá porque había cerrado el negocio y vivía sola con su hermano. No recuerda que pagara un servicio o arriendo, le prestaba no más. Claudia le prestó el nombre solamente a su hermana para arrendar un departamento en Viña. Su hermana siempre ha pagado el departamento, hasta hoy. No había nadie en su casa con una renta como la que pedían y Claudia hizo el favor de como que ella arrendaba el departamento. Claudia nunca pagó el departamento, sólo prestó el nombre. Sobre que Claudia pagó deudas de pensión alimenticia, sí pagó ella una vez, por \$1.000.000. Él tenía una orden pendiente. Le pagó otras pensiones mensuales y como ella no lo dejaba trabajar, él hacía las cosas de la casa, la llevaba a ella a la pega porque no podía manejar por el tema de la pierna y le decía que si la ayudaba en la casa, ella le pagaba la pensión y le depositó unas seis veces más. También tenían una nana, pero la señora iba dos o tres veces a la semana y medio día. Al principio ella se vino con la nana, pero estuvo un tiempo acá y se fue y después había una señora que iba, de repente una vez a la semana y más no iba. Así fue siempre. Los niños estaban en el Colegio Concepción. Él los iba a dejar y a buscar todos los días, él se preocupaba de ellos. Ella siempre estaba curada. La hija le llegó hasta a levantar la mano más de una vez porque decía que la tenía aburrida. La hija se llama Alina. El horario de colegio de ellos era de las 8:15 a 4:00 pm. De repente al más chico le cocinaba y le iba a dejar la comida al colegio porque no le gustaba la comida del colegio.

Él nunca tenía sus tarjetas. Pero no era que siempre ella las tuviera en su poder. La tenía ella o él, porque cuando llegaba el fin de mes y le descontaban plata de un seguro del banco, la plata que tenía la transfería a su cuenta para que no le descontaran esa plata, que eran como \$8.000. Le transfería lo que le quedaba, que de repente eran 100.000, 200, 70. O de repente le pedía al amigo Joel 10 o 20 lucas y que se las transfiriera a Ricardo para que no le descontaran el seguro. Sus tarjetas las tenía ella y él siempre. Él también tenía sus tarjetas y las usaba para hacer giros. De repente él iba a comprar y le decía que le iba a transferir 100 y él con su tarjeta sacaba la plata y se la pasaba a ella. Ella no impedía que él usara sus tarjetas, no las tenía ella controladas ni las tenía todo el tiempo.

Reiteró que, sobre la declaración que le exhibió el fiscal, la de la vif, no la recuerda.



Tuvo un abogado, Huber, porque como a la semana del allanamiento, Claudia fue donde Huber y un día en la tarde, en la notaría, firmaron un papel. Sobre otro que trabajaba con Huber, eran los dos que habían tomado la causa. Las primeras veces cuando iba a declarar con el fiscal le decían que los llamara y él los llamaba y les decía que iba a declarar para que supieran. No recuerda si con el fiscal declaró solo. Declaró una vez en Talca, otra acá, después fue como a dar la clave del teléfono, después fue a dar una prueba caligráfica, pero no eran declaraciones. Unas tres declaraciones más las gestiones que hizo. Nunca fue con un abogado defensor. Claudia pagó al abogado. Él fue a firmar con ella. Firmaron los dos. Primero declaró con el sumario. La hizo a un fiscal de Talca, en la Fiscalía de Talca. Ahí se echó la culpa y lo sentaron en el computador. Ahí dijo que él hizo todo y que Claudia no tenía idea. Dijo que lo hacía cuando Claudia estaba durmiendo o curada o cuando salía.

El consumo de alcohol era todos los días. Pedía fiado en las botillerías porque ella le decía. Muchas veces, cuando Claudia estaba de turno los fines de semana, él tenía que despertarla cuando la llamaba Carabineros en la noche por un procedimiento. Despertaba con olor a alcohol. Ella se levantaba, se duchaba, un chicle y se iba a trabajar. Que sepa, en la Fiscalía no le representaban eso. Su familia también se dio cuenta porque siempre llamaban a Rengo por video llamada y ella siempre estaba curada. Su familia no convivía con ellos en la casa que compartían. A esa casa llegaron su mamá, su hermana y un hermano. Su hermana fue unas diez veces.

Señaló que él se movilizaba en una motocicleta, que estaba a nombre de Claudia. Eso se pagó al contado. Claudia lo pagó con parte de su sueldo. No recuerda cuándo la compró ella. Antes de ir a hablar con las personas, dos o tres meses antes Claudia la compró. Por ejemplo, a inicios del 2020. Esa moto no recuerda cuánto costó, como un millón y algo, no alcanzó al millón y medio. Cuando contactaba a las personas que nombró, Ralph y otros, él les llevaba su nombre completo, grados alcohólicos, número de teléfono y su dirección, que se lo pasaba Claudia de su puño y letra, sacaba una hoja de una libreta y con eso iba. Nunca le mandó un Whatsapp a ninguno. Con Samuel Alarcón tuvo llamadas y un mensaje de texto cree cuando le pagó los últimos \$200.000 que le debía. A los otros, a todos los llamaba para hablarles del tema de la movida. Solamente iba con el papel



que Claudia le pasaba. Por Whatsapp no hubo intercambio de información de causas, sólo un mensaje de texto con Alarcón.

En una declaración indicó al Ministerio Público, sobre quien fue a buscar el dinero por la movida a Ralph, no se acordaba bien y después se acordó y le explicó al fiscal. Cuando dijo eso de que Claudia se encontró con Ralph, no recuerda bien lo que contó, pero pasó como una semana y haciendo memoria. En la versión que entregó en la segunda declaración al fiscal dijo que Claudia se encontró con Ralph en un supermercado de Linares a buscar el dinero. Siempre iba Claudia a comprar ahí. En esa versión informó que Claudia compraba ahí y se juntó con Ralph. En esa versión, no le informó a Claudia que tenía que recibir el dinero, sólo le dijo cuando estaba la plata. Cuando recordó fue donde el fiscal y le dijo cómo fue. En esa primera versión, la equivocada, dijo que Ralph y Claudia estaban en ese supermercado y no que le dijo a Claudia que se juntara con Ralph. Cuando decidió contar la verdad, había tres personas no más que habían encontrado y él dijo al fiscal que había dos más. Sobre cómo explicó al fiscal por qué Claudia sabía que estaría ahí en esa versión en que se equivocó, el fiscal interrogó a Ralph y le dijo que no la conocía. De ahí tuvo que declarar nuevamente y le contó cómo fue. Ahí se acordó que Claudia no tuvo contacto con Ralph, era él el que contactaba a la gente y llevaba el papel que ella le pasaba.

Enrique Torres no aceptó la movida porque a él le habían quitado la licencia físicamente, eso le contó, él lo contó a Claudia, quien dijo que la licencia de él debía estar en la carpeta de él en la Fiscalía. Claudia fue a buscar la carpeta y llegó con esa carpeta y más carpetas, abrió la carpeta de él y no estaba la licencia y ahí él no quiso hacer nada porque quería que le devolvieran la licencia. Claudia fue a buscar la carpeta después de contactar a Torres. Claudia le dijo que antes de que pasara a Tribunales, se saca de allá y fue a buscar un alto de carpetas y entre medio venía la de Enrique.

Respondió que a la unidad de custodia de la Fiscalía no la conoce. No sabe que las licencias quedan en la unidad de custodia y no en la carpeta. No sabe que jamás quedan en la carpeta y Claudia debería saberlo si es así, pero Claudia le dijo que la licencia estaba en la carpeta y tenía que recuperarla para ver si estaba la licencia. Al final no se hizo porque no estaba la licencia.

Sobre archivos que rescató del computador familiar según Claudia, nunca hizo eso. No era un computador familiar. El hijo tenía un computador y la hija otro.



Si se llevaron el computador del hijo fue porque el Policía de Investigaciones lo revisó. El otro computador lo usaba sólo Claudia. El Policía de Investigaciones se llevó todo, pero ese día revisó el computador que era del hijo. Lo revisó, encontró algo y se lo llevó. No vio la orden del Policía de Investigaciones, Claudia la vio. Después que allanaron, Claudia firmó una hoja y le dijeron que venían por un delito de cohecho. Sobre la incautación, revisaron toda la casa. El policía le dijo algo a ella, a él no. Le dijo que iba con una orden de entrada y registro a la casa. No escuchó más, al último escuchó que era por un delito de cohecho que investigaban.

Después del sumario siguió declarando. En esa declaración indicó cuántas personas contactó, cree le preguntaron. No recuerda cuántas, pero fueron como 8 o 10, 12 personas. Los que sí aceptaron fueron 5. Claudia los seleccionaba. Sobre si declaró sobre cuántas personas contactaba, desde que dijo la verdad no hubo confusiones. Lo de Ralph no lo recordaba bien. A Ralph no lo habían encontrado y él mismo al fiscal con el Policía de Investigaciones dijo que faltaba Ralph y otro más y efectivamente ellos buscaron y faltaban. Si hubiese querido esconder algo, no les dice.

Aseveró que estudió hasta 1° medio. Cuando fue a declarar dijo que estudió hasta 2°. Estuvo a punto de terminar 2°, pero no lo terminó. Están los certificados de estudio.

Sobre el vehículo que usaban para trasladarse, era un Kia Sportage. Cuando esto ocurrió, habían comprado ese vehículo no recuerda cuándo, un par de meses, era recién. Sobre cuánto costó, algo de como 4 millones porque era en prenda. Ella vendió el auto que tenía, un Suzuki Grand Nómade, y compró otro para quedar con un poco de plata. Eso también se pagó con el sueldo. El jeep blanco estaba cuando empezó a pasar esto. Se compró al contado, tenía prenda. El otro lo compró también en Linares y lo pagó al contado con su sueldo. A Claudia la conoció con un auto.

Refirió que cuando le prestó el millón de pesos fue cuando le dieron un bono en la Fiscalía. No le consta cuánto lograba Claudia guardar, no guardaba, siempre ella le pedía a la familia. Todos los meses el papá le depositaba.

A su Defensa contestó que, sobre su día a día, él era el que hacía las cosas, llevaba a los niños al colegio, lavaba la ropa, hacía las camas, iba al supermercado, hacía todo eso. Ella no manejaba por el problema a la pierna, se operó.

Su mamá y hermana conocen esa declaración donde se culpó. Cuando fue a hablar con Huber y le contó que él hizo todo porque Claudia se lo pidió para que la



sacaran a ella y quedaran con él. Después decidió decir la verdad. Ella le alcanzó a dar como 3 millones a Huber. Al abogado Huber firmó un papel en notaría con Claudia. Declaró solo y le avisaba al abogado, las primeras veces que fue a declarar a la Policía de Investigaciones llamaba al abogado y le decía porque el abogado le dijo que le avisara cuando fuese a declarar para saber.

Cuando Claudia le dijo que tenía la fórmula para ganar más plata, le advirtió que tuviera cuidado y ella respondió que no la iban a pillar porque eran causas de ella y nadie se metía a revisar sus causas y la única forma de que alguien la pillara era alguien “sapeara”.

Manifestó que hay como 18 o 19 años de diferencia con Claudia. Sobre la relación matrimonial, ella siempre mandando, él hacía lo que ella le pedía, iba a comprar, si había que hacer algo a los niños lo hacía. Ella siempre fue celosa, salía a comprar y se demoraba y lo llamaba para que se apurara. Una vez quiso a trabajar y le dijo que estaba loco, que tenía que ayudarla en la casa con los niños.

No tiene estudios de computación.

Cuando lo interrogaron en la Fiscalía de Talca y el fiscal lo sentó en un computador, abrió los programas y le pidió hacer algo y no supo qué hacer. El fiscal le dijo claramente no tienes conocimientos. Estuvo hartos ratos en el computador y el fiscal lo miraba. Nunca pudo acceder a las claves de la Fiscalía. Nunca hubo claves en el computador pegadas. Estarían en las fotos de cuando incautaron el computador. Hoy cuenta la verdad.

Al Tribunal aclaró que en Talca declaró en la Fiscalía ante un fiscal.

Sobre el vecino al que dieron esta posibilidad, es de apellido Guerra y vivía al lado de la casa. Lo conocía como vecino y sabía que Claudia trabajaba en la Fiscalía porque cuando llegaron, él les fue a mostrar la casa. Rodrigo Guerra esa vez sólo habló con él.

En nuevos interrogatorios, al Ministerio Público contestó que cuando fue a Talca, esto fue en el sumario que realizaban a Claudia del Pino, y a la Defensa de del Pino Acuña que en la declaración en el sumario, ahí él se echó la culpa, señaló claramente el SAF y SIGE de la Fiscalía porque antes de salir pasó a la casa y Claudia le explicó en un bloc y con un plumón azul para qué funcionaba cada programa por si le preguntaban. Al fiscal le dijo que no podía avanzar mayormente en el sistema porque no sabía, empezó y no tuvo conocimiento de hacer nada. Sobre qué le dijo al fiscal en cuanto a por qué no podía mover el sistema, dijo que no sabía,



que no se acordaba. Esa declaración fue como a los dos meses de destaparse esto, no recuerda fechas exactas. Al fiscal le dijo que no podía usar el sistema porque no se acordaba y no sabía.

Complementando su declaración, el acusado Vega Guerrero añadió que sí firmó un mandato con Huber Hidalgo y Víctor Moraga el 6 de agosto del 2020. Fue con Claudia a firmar los mandatos y ella pagó los mandatos y después le pagó a los abogados.

Al Ministerio Público respondió que no dijo esto antes porque no recordaba bien el nombre del otro abogado, pero sabía que Huber Hidalgo sí era su abogado porque lo llamaba cuando iba a declarar y todas esas cosas. Esto fue el 6 de agosto del 2023, como a los dos o tres días después del allanamiento. Declaró como imputado por unas amenazas después de ese mandato. Tenía los dos abogados cuando declaró, que eran los mismos abogados de ella. Esos abogados sabían que él declaraba como imputado en el tema de las amenazas. Cuando dice los abogados, se refiere a ambos. Ellos sabían que él iba a declarar porque los llamaba telefónicamente. Presencialmente estuvo con ellos más de una vez en su oficina en calle Colo Colo, a la altura de Chacabuco. Una vez fue con Claudia y otra vez fue solo. Cuando fue con Claudia, ella decía que no tenía idea de lo que pasaba, pero ambos lo sabían. Después, cuando ella le dijo que se echara la culpa porque él no era funcionario público y no le iba a pasar nada, él fue y se echó la culpa, cuando fue solo donde ellos.

Sobre este mandato, nunca tuvo el papel físico, solamente lo firmó en la notaría y cuando Claudia empezó a echarle toda la culpa a él, los abogados desistieron de él y se quedaron solamente con ella. De ahí él no tuvo más abogado hasta que cayó en prisión preventiva. Ella pagó el mandato en la notaría. No recuerda cuánto salió. Fueron a firmar juntos, ella firmó el de ella y él el de él. Ella pagó los honorarios de los abogados, cree como 4 millones y medio pero ella no alcanzó a dar todo. Lo pagó en efectivo y él lo vio. Lo pagó en la oficina de ellos.

Sobre con quiénes se identificó como Cristian, no recuerda bien, pero sí con Diego Vásquez y con Ralph. Eligió ese nombre porque se lo cambió para no dar su nombre real. Claudia sabía que él usaba ese nombre o apodo Cristian. Cuando Diego fue a la casa y preguntó por Cristian ella seguramente sabía que se refería a él.

En el sumario, cuando declaró, fue después del mandato, no recuerda cuánto tiempo después. El mandato seguía vigente en esa época y ambos tenían el mismo



abogado. Los abogados que lo representaban sabían lo que iba a declarar, que se iba a echar la culpa. Lo sabían los dos abogados, Huber y Víctor, y Claudia también lo sabía. Cuando decidió contar la verdad ya no los tenía a ellos de abogado.

Sobre si sabe si ese mandato se dejó sin efecto formalmente, no sabe. No fue a firmar un documento para dejarlo sin efecto.

Sobre alguna amiga de Claudia que lo haya visto ocupar el computador, no porque no ocupaba el computador.

Al Querellante contestó que nunca fue a firmar algún documento o escritura revocando el mandato.

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña señaló que, sobre el mandato, en la práctica a declarar no fue con abogado porque los llamaba y siempre estaban ocupados, pero cuando iba a declarar lo sabían porque los llamaba. En ninguna declaración suya fue un abogado. Sobre si en alguna audiencia suya algún abogado particular lo representó, ellos no. En el mandato que firmó, nunca ejerció ese mandato en alguna actuación en que participó. El mandato es como una representación general. El 6 de agosto del 2020 fue eso, uno o dos días después del allanamiento. Cuando recién todo eso salía a flote. Sobre un precio para pagar los servicios de los abogados, Claudia preguntó por los dos y el precio que le dieron fue de como 4 millones y medio por ambos.

A su Defensa respondió que, sobre haber ido a la notaría con Claudia a firmar en mandato el mismo día, fue a una cerca de la plaza en Linares. Luego se entrevistó con Huber Hidalgo y Víctor Moraga y después fueron a firmar el mandato. Ellos les dijeron que fueran a firmar el mandato y fueron a la notaría. Huber y Moraga no le instruían qué hacer cuando era citado. Sí le decía de repente que no fuera a declarar. Él informaba lo que hacía o no a los dos abogados. Sobre qué abogado escuchó esa confesión suya, fueron los dos porque cuando los llamaba ponían en altavoz y hablaban los dos.

Finalmente el acusado Vega Guerrero complementó su declaración señalando que, respecto de los Whatsapp que se presentaron ayer, son totalmente falsos y obviamente están hechos por ella. Cuando dice que él estuvo en la Fiscalía mañanas enteras, gente que declaró acá lo desmiente. Jamás le envió un Whatsapp culpándose de algo que él hizo, ella sabe que eso lo hizo ella.

Sobre lo que declaró la mamá ayer, sobre la flota de colectivos, eso Claudia le pidió lo dijera para que su familia lo aceptara.



Dijo que una impresora se compró en el Líder, no que era de Paulina Cisternas.

Al Ministerio Público contestó que su celular se lo incautaron el día del allanamiento, el 3 de agosto del 2020. Después, a los meses, compró celular. No recuerda el número.

En las conversaciones que vimos, sobre la primera vez que se conocieron fue por esta causa, cuando fue a declarar. No recuerda, pero fue el 2020 o 2021. Esos términos de “fiscalucho” o “abogaducho” los usa Claudia, ella siempre hablaba así.

Al Querellante respondió que de noviembre del 2020 a febrero del 2021, no conocía el celular de Claudia del Pino. Él tenía otra pareja. Lo último cree fue un correo que le mandó para que lo dejara tranquilo.

A su Defensa señaló que, sobre si llamó a Mauricio Jorquera a su casa, lo llamó para contarle la verdad después, que la primera vez que declaró mintió y después no tuvo más contacto con él. Lo llamó en la tarde porque le dijo que estaba en su casa. Después no fue a declarar con él, sí a la Policía de Investigaciones y contó toda la verdad.

Como puede apreciarse, en estas declaraciones el acusado Vega Guerrero, sobre lo analizado, en lo nuclear afirmó que del Pino Acuña siempre estaba con problemas económicos y un día le dijo que sabía cómo ganar plata a través de causas con licencias que ella tramitaba y en las que nadie se iba a meter, con las que la única forma de que la pillaran era que algunos de los que ayudaran la delatara. Tras ello, del Pino Acuña sacaba la información del computador que escribía en un cuaderno y a él le pasaba un papel con el nombre de la persona, los grados alcohólicos y el número de teléfono y él la llamaba y le decía que se llamaba Cristian, que había una movida y si le interesaba, ante lo que unos le decían que sí y otros que no, y con los que accedieron, se juntó en Linares, les explicaba la movida en persona y le decían que sí. Ahí él iba a la casa, le decía a del Pino Acuña que tal persona dijo que sí y ella hacía el tema en el computador, ella cambiaba los delitos y hacía todo eso y después ella misma imprimía un papel en la impresora de la casa y él lo entregaba a los que accedían a hacer esto.

Precisó que, sobre el mecanismo que ocuparon para hacer esto, del Pino Acuña sacaba los RUC a un cuaderno, anotaba causas como con licencia y el que le servía, decía éste está fácil y le pasaba a él el nombre, dirección, número de



teléfono, los grados alcohólicos con que los habían pillado y todo eso y ahí él lo llamaba. Esos datos los sacaba ella del computador y se los pasaba a él escritos con letra de ella en un papel de cuaderno. Ahí él llamaba a las personas. Por eso llamó a personas como diez veces. Les decía que estaba la movida de archivarles la causa, que se tenía que cuidar y no lo podían volver a pillar y que se cobraban 500 o 600 lucas. Resultó eso cinco veces. Recuerda a un vecino de la casa, Rodrigo Guerra, otro era Diego Vásquez, otro de apellido Lobos de Longaví y otro de apellido Alarcón y dos más que un día se los dijo al fiscal, Ralph y otro que no recuerda. Esas personas pagaron, en efectivo.

Esos dichos, estima este Tribunal, dan cuenta de un modus operandi preacordado por ambos acusados que se ajusta al que este Tribunal tuvo por suficientemente probado.

Esencial es consignar que dicho estándar de convicción fue completado en virtud de los múltiples razonamientos y corroboraciones que debidamente se demostraron durante la audiencia de juicio oral.

Así, en primer lugar salta a la vista que con aquella declaración, Vega Guerrero reconoce, con seguridad, circunstanciación y coherencia, una participación voluntaria, activa y determinante en los hechos ilícitos que contiene, elementos que desde ya la revisten de un principio de credibilidad.

Luego, en relación con los problemas económicos que, según Vega Guerrero, enfrentaba del Pino Acuña a la época de los hechos materia de estos antecedentes y que importan una motivación para la ejecución de las conductas que describió y atribuyó a la acusada del Pino Acuña, fueron incorporadas, tanto por el Ministerio Público como por la Defensa de del Pino Acuña, cartolas bancarias referidas a dicha encausada donde efectivamente se puede observar que, al menos durante cinco meses de los años 2019 y 2020, la misma llegó en varias ocasiones a tener saldos sumamente bajos, incluso iguales a \$0 o negativos.

En efecto, de la prueba compartida por el Ministerio Público y la Defensa de del Pino Acuña, designada en el auto de apertura como “Oficio Banco estado de fecha 25 de abril de 2021 el cual adjunta. - a. Movimientos efectuados entre el 01-01-2019 al 30-08-2020 de los productos registrados a nombre de la cliente Claudia Andrea del Pino Acuña. [...] b. Movimientos efectuados entre el 01-01-2019 al 30-08-2020 de los productos registrados a nombre del cliente Ricardo Vega Guerrero. c. Listado de siniestro de seguros de Claudia del Pino Acuña. d. Siniestro 3127118 e.



Siniestro 3203376. f. Siniestro S/N de fecha 21 de febrero de 2020. g. Documentos anexos entre ellos póliza cartola históricas”, la Fiscalía incorporó un oficio que cuenta con el logo del Banco Estado, fechado en Santiago el 25 de abril del año 2021, en que se indica, en lo atinente, que se remite información respecto a lo solicitado en oficio de referencia, causa RUC N° 2000844920-2, RIT N° 5621-2020, específicamente los movimientos efectuados entre el 01/01/2019 al 30/08/2020 de los productos registrados a nombre de clienta Claudia Andrea del Pino Acuña, C.I. 13.101.361-2, y que se remiten movimientos efectuados entre el 01/01/2019 al 30/08/2020 de los productos registrados a nombre del cliente Ricardo Ignacio Vega Guerrero, C.I. 18.890.618-4.

También incorporó la cartola histórica N° 17 del Banco Estado de la cuenta corriente cuyo número se indica y que registra como titular a “Claudia Andrea del Pino Acuña”, correspondiente al período que va desde el 13/08/2020 al 01/09/2020. En ella se aprecia que al 19/08, justo antes de aparecer el ingreso “pago de remuneraciones” de ese mismo día, el saldo era de \$860.408, pero también se aprecia que el día 13/08 se ingresó un abono o depósito por \$2.150.127 correspondiente a “pago diez por ciento AFP Provida”, lo que matiza la cuantía de aquél saldo.

A la vez se incorporó la cartola histórica N° 12 del Banco Estado de la cuenta corriente cuyo número se indica y que registra como titular a “Claudia Andrea del Pino Acuña”, correspondiente al período que va desde el 28/06/2019 al 12/07/2019. En ella se aprecia que al 28/6, 1/7, 2/7, 4/7, 8/7 y 12/7, el saldo fue \$0.

Igualmente incorporó la cartola histórica N° 16 del Banco Estado de la chequera electrónica cuyo número se indica y que registra como titular a Claudia Andrea del Pino Acuña, correspondiente al período que va desde el 17/10/2019 al 28/10/2019. En ella se aprecia que al 23/10 el saldo era de \$2.000, mismo que subió a \$202.990 debido a un depósito que se le efectuó como “tef de del Pino Ormachea Claudio En”, llegando al 28/10 a un saldo de \$77.710. El saldo más cuantioso que se observa en esta cartola asciende a \$579.593.

También incorporó la cartola histórica N° 7 del Banco Estado de la chequera electrónica cuyo número se indica y que registra como titular a “Claudia Andrea del Pino Acuña”, correspondiente al período que va desde el 17/02/2020 al 24/02/2020. En ella se aprecia que al 19/02 el saldo llegó a \$0. El saldo más cuantioso que se observa en esta cartola asciende a \$600.000.



A la vez se incorporó la cartola histórica N° 4 del Banco Estado de la cuenta corriente cuyo número se indica y que registra como titular a “Claudia Andrea del Pino Acuña”, correspondiente al período que va desde el 25/01/2019 al 18/02/2019. En ella se aprecia que al 28/01, 30/01, 7/02, 12/02 y 18/02 el saldo llegó a \$0, y que el 1/02 el saldo fue negativo. El saldo más cuantioso que se observa en esta cartola asciende a \$1.663.444 correspondiente al 28/1.

Por su parte, la Defensa de la acusada del Pino Acuña incorporó la prueba que en el auto de apertura se llamó “Cartola N° 8 de Claudia Del Pino del Banco Estado de la cuenta corriente que le pertenece entre el 11 de marzo de 2020 al 19 de marzo del mismo año”. Ella corresponde a la cartola histórica N° 8 del Banco Estado de la cuenta corriente cuyo número se indica y que registra como titular a “Claudia Andrea del Pino Acuña”, correspondiente al período que va desde el 11/03/2020 al 19/03/2020. En ella se aprecia que al 17/03 y el 19/03 el saldo llegó a \$0. El saldo más cuantioso que se observa en esta cartola es del 19/03 y asciende a \$8.054.500, pero también se aprecia que el día anterior el saldo era de \$14.000 y que ese mismo día 19/03 se ingresó un abono o depósito por \$8.040.500 correspondiente a “pago de remuneraciones”, lo que matiza la cuantía de aquél saldo.

La misma Defensa también incorporó la prueba que en el auto de apertura se llamó “Cartola histórica N° 6 de Claudia Del Pino de su cuenta corriente entre el período de fecha 14 de febrero de 2020 a 2 de marzo de 2020”. Ella corresponde a la cartola histórica N° 6 del Banco Estado de la cuenta corriente cuyo número se indica y que registra como titular a “Claudia Andrea del Pino Acuña”, correspondiente al período que va desde el 14/02/2020 al 02/03/2020. En ella se aprecia que al 17/02 el saldo llegó a \$0 y subió a \$2.580.124 tras un abono o depósito del 10/02 por \$2.424.546 correspondiente a “pago de remuneraciones”.

La misma Defensa también incorporó como parte de la prueba compartida que en el auto de apertura se llamó “Oficio Banco estado de fecha 25 de abril de 2021 el cual adjunta. - a. Movimientos efectuados entre el 01-01-2019 al 30-08-2020 de los productos registrados a nombre de la clienta Claudia Andrea del Pino Acuña. [...] b. Movimientos efectuados entre el 01-01-2019 al 30-08-2020 de los productos registrados a nombre del cliente Ricardo Vega Guerrero. c. Listado de siniestro de seguros de Claudia del Pino Acuña. d. Siniestro 3127118 e. Siniestro 3203376. f. Siniestro S/N de fecha 21 de febrero de 2020. g. Documentos anexos entre ellos póliza cartola históricas”, la cartola histórica N° 10 del Banco Estado de la cuenta



corriente cuyo número se indica y que registra como titular a “Claudia Andrea del Pino Acuqa”, correspondiente al período que va desde el 24/03/2020 al 14/04/2020. En ella se aprecia que al 09/04 el saldo fue \$0, que llegó a esa cifra tras bajar progresivamente desde el 24/03, cuando el saldo era de \$2.148.899 y que luego subió a \$100.00 tras un depósito o abono por ese monto correspondiente a un “depósito en efectivo caja vecina”, que es el último registro que se figura en esta cartola.

Cabe agregar que la misma Defensa también incorporó la prueba que en el auto de apertura se llamó “Fotografía de cuenta corriente N° 39100065511 con el monto disponible de \$7.966.144”. Ella corresponde a una imagen en cuya parte superior se lee “autorizar con BE Pass”, luego aparece un número de cuenta corriente, que es el que se señala en las cartolas ya expuestas como correspondiente a Claudia del Pino Acuña, y la suma de \$7.966.144 como “saldo disponible”. Abajo se ve una propaganda de la tarjeta BIP!. Sobre este documento, sólo cabe concluir que nada relevante aporta pues carece de fecha y no es factible determinar su origen dado que no fue acreditado en juicio y carece incluso de algún logo que permita objetivar su procedencia.

Analizando estas probanzas, resulta llamativo que efectivamente, como plantea Ricardo Vega Guerrero, Claudia del Pino Acuña, incluso en las cartolas bancarias incorporadas por su propia Defensa, exhibe una notoria estrechez financiera, llegando en dos productos bancarios, varias veces e incluso dentro de un mismo mes, al saldo \$0. Si bien ello no es suficiente para afirmar que Claudia del Pino Acuña, a la época de estos hechos, carecía de liquidez suficiente para pagar sus gastos debido a que no se expuso en el juicio prueba que ilustrase sobre la totalidad de sus activos, nos parece innegable el valor indiciario de las cartolas recién expuestas en el sentido afirmado por Vega Guerrero, sobre todo si el testigo señor Guerra Morales testificó que, como corredor de propiedades, arrendó a Claudia del Pino una casa cuya renta mensual ascendía a \$320.000 y que, como reconoció ante estrados dicha acusada, contaba con un vehículo de su propiedad y tenía y tiene dos hijos menores de edad en el colegio.

Luego, sobre la información de los imputados en causas de manejo en estado de ebriedad que dicho acusado aseveró le proporcionaba del Pino Acuña tras extraerla de un computador para que él contactara a los primeros y para que en definitiva pudiese sustentar la oferta que les propondría, información que a lo menos



dijo abarcaba una descripción de la conducta punible así como la graduación alcohólica del involucrado, y también sobre los términos de dicha oferta, la contraprestación demandada y los pagos efectuados por sus destinatarios, recordaremos que, para este caso, Rodrigo Adolfo Guerra Morales refrendó que, cuando lo contactó Ricardo Vega, le dijo que estaba en una foto, que lo reconoció, que sabía que estaba como acusado de estar bajo el estado de ebriedad, las sabía las consecuencias de la suspensión de la licencia y de tener que ir a firmar, y también le dijo que estaba la posibilidad de borrar esos antecedentes. Afirmó que Ricardo Vega tenía un papel donde decía lo que había hecho y que el precio que le cobró fue de \$300.000 para borrar. Vega no le dijo de dónde sacó los documentos, pero sabía que la señora trabajaba en la Fiscalía, así que la información seguramente era de ahí. Vega le dijo que iba a demorar un par de semanas o un mes, pero su causa quedaría en nada y que su señora podía hacer el tema porque trabajaba en Fiscalía, la señora era Claudia, le dijo que ella podía hacer el trámite y que quedaría en nada. Le dio hartas vueltas y en otro encuentro en la calle, en marzo del 2020, tomó la decisión, accedió y pagó a Vega los \$300.000, que tenían que ser en efectivo

Por su parte Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez, como testigo de oídas, corroboró que el señor Guerra Morales declaró en la investigación que lo contactó Ricardo Vega, quien le dio cuenta de que había sido detenido por un manejo en estado de ebriedad y le dio indicios de los antecedentes de su detención, del lugar, las fechas, de los antecedentes que manejaban, y dentro de eso le ofreció cerrar la causa por \$300.000. Dijo que Ricardo señaló que la jefa le hacía los arreglos, en abierta alusión a Claudia del Pino. Los \$300.000 los cobró Vega, llegó con él al acuerdo, y tenían que ser en efectivo

Desde ya conviene adelantar que la mecánica delictiva que contiene este relato fue en lo nuclear reproducida y así corroborada por otros testigos que fueron imputados por delitos de conducción en estado de ebriedad, según más adelante se explicitará al analizar los testimonios de Valesca Alarcón Urrutia y Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez como testigos de oídas de Samuel Alarcón Urrutia, de Diego Vásquez Riquelme, de Enrique Torres Valenzuela, de Elías Apablaza Vásquez, de Ralph Veloz Rodríguez y de Eduardo Lobos Tapia.

Sobre la manera en que Vega Guerrero afirmó haber obtenido dicha información de imputados en causas por manejo en estado de ebriedad y la manera en que lo ofertado por él y del Pino Acuña iba a materializarse, circunstancias que



evidentemente son demostrativas del concierto previo decantado, determinante resultó que se estableció debidamente que Vega Guerrero, incluso cuando su patente intención era asumir la responsabilidad por todos los hechos de esta causa y exculpar con ello a del Pino Acuña, fue incapaz de realizar operación útil alguna en las plataformas informáticas del Ministerio Público tendiente a recabar aquellos datos, menos aún a lograr el archivo provisional de las respectivas causas. Tal incapacidad confirma lo que planteó durante la investigación penal y ante estrados en cuanto a que él era incapaz de realizar dichas gestiones y que fue su cónyuge, del Pino Acuña, quien las ejecutó, sirviéndose indudablemente para ello de los conocimientos con que contaba por su profesión y la función pública que desempeñaba, amén de los privilegios informáticos de los que, en razón de lo último, era titular.

Sobre ello, el ya mencionado testigo Mauricio Jorquera Loyola también expuso ante este Tribunal, extrayendo acá de su larga declaración lo atinente al caso y a lo analizado, que en investigaciones administrativas, los abogados asesores excepcionalmente investigan, son nombrados para ello en investigaciones de mayor relevancia. La regla general es que los sumarios los lleven fiscales y tras su informe, ellos revisan que se cumplan los requisitos, se analiza el informe y dan su opinión al Fiscal para que decida. En los 4 años que lleva, una sola vez, en este caso, fue nombrado como fiscal en una investigación administrativa, contra Claudia del Pino. El 1 de agosto del 2020 le notificaron una resolución del Fiscal Regional, la N° 78 del 31 de julio, en que se le designa como fiscal sumariante en una investigación para establecer la responsabilidad administrativa de la abogado asistente de Linares Claudia del Pino y cualquier otro involucrado por una denuncia efectuada por la fiscal jefe de Linares, Carola D'Agostini, en que comunica al fiscal regional que recibió una denuncia que involucraba a una funcionaria en la recepción de solicitudes de pagos para modificar causas que tramitaba. El 1 de agosto se la notificaron. Aceptó el cargo e inmediatamente fue a Linares y notificó personalmente a Claudia del Pino. Solicitó a recursos humanos su domicilio, en villa Las Vertiente, cerca del colegio Alborada. Fue el 1 de agosto y la notificó personalmente, a la que no conocía cree a esa época. Claudia entró el 2018 pero el 2019 a trabajar, igual que él en su regreso. La notificó, venía con suspensión del cargo la resolución del fiscal regional y después dictó una resolución con diligencias mínimas a realizar. Solicitó, por ejemplo, a Contraloría, su historia, si había tenido



sanciones anteriores. No tenía sanciones. También solicitó sus calificaciones y contratos de trabajo a recursos humanos y en síntesis se establecía que ella entró como abogado asistente hacía 15 años en la Fiscalía de Rengo, después en la de Rancagua y el 2018 en la del Maule, en teoría, porque estuvo en la práctica con licencia todo el 2018 y empezó a trabajar el 2019 en la Fiscalía de Linares como asistente grado 9. También estableció que ella, desde el 20 de marzo del 2020, estaba en teletrabajo porque el 19 de marzo, el día anterior, presentó antecedentes de que sufría hipertensión crónica y se le autorizó el teletrabajo desde el 20 de marzo de ese año. También solicitó un listado de causas terminadas del 2019 y 2020 de causas vigentes de ella del 2019 y 2020.

También tomó declaración a la fiscal Carola D'Agostini, fiscal jefe de Linares, quien denunció al fiscal. Le tomó dos veces declaración. En la primera, fue para saber cómo se enteró de los hechos que denunció y le dijo que la administradora Nelly Zenteno le comunicó que llegó una denuncia de Rengo, en que se denunciaba por amenazas a la asistente de fiscal Claudia del Pino y que si continuaba en esas amenazas, iba contar esa persona que ella solicitaba dinero para ponerle término a determinadas causas. Ese antecedente lo recibió el auxiliar de Linares, Froilán Cofré, quien lo comunicó a la administradora y ella a la fiscal jefe, quien lo comunicó al fiscal regional. Posteriormente supo que esa denuncia fue realizada por el hermano de la pareja de del Pino. Ricardo Vega se lo dijo. A partir de esa denuncia preguntó a Carola cómo era el trabajo de Claudia y le contó que entró el 2018, que el 2019 empezó a trabajar, que era bogada del TCMC, que era en Linares un grupo de tres abogados asistentes con una alta carga laboral, alrededor de 1000 causas fácilmente cada uno. Le dijo que en esa época ella no había tenido comportamientos extraños, sí atrasos en la vigencia de las causas. Le señaló un incidente con una causa por manejo en estado de ebriedad en que aplicó principio de oportunidad y el Juzgado de Garantía de Linares le representó eso por correo. A partir de eso se comunicó con Claudia y le señaló este tema y le respondió que fue un error de digitación, que digitó mal el RUC que era de una estafa y que iba a solucionar el tema, pero el Juzgado de Garantía ya había rechazado el principio de oportunidad, y que iba a solicitar una audiencia de formalización. En la investigación comprobó que eso era efectivo, ella cometió el error al digitar el RUC que era de una estafa. Efectivamente hubo un error, nada extraño.



También tomó declaración a Nelly Zenteno, la administradora de la Fiscalía de Linares. Le dijo lo mismo que Carola sobre el sistema de trabajo de los abogados asistentes, del TCMC, del sistema de carpetas.

También tomó declaración a Carmen Caamaño, fiscal del Linares, quien le refirió que Claudia trabajaba como abogado de TCMC y le señaló un incidente en que Claudia la subrogó un tiempo y en una causa importante para ella que iba a ir a juicio oral, Claudia pidió un abreviado sobre eso. Estableció ella que fue una situación rara que no le parecía. Determinó que no hubo actuar ilegal o arbitrario de Claudia porque ella aplicó su criterio y pidió al abogado asesor autorización y la autorizó para llegar a abreviado. Fue una actuación correcta de parte de del Pino. Nada más importante le aportó.

También tomó declaración a Froilán Cofré, auxiliar de la Fiscalía de Linares, quien le señaló que recibió una denuncia de la Fiscalía de Rengo en que establecía que una persona denunció a Claudia del Pino por amenazas y que si esas amenazas no cesaban, contaría que Claudia cobraba por causas que tramitaba y eso lo comunicó a Nelly Zenteno y ésta a la fiscal jefe. También le señaló que tenía un amigo, Diego Vásquez, quien le contó que un varón se había comunicado con él para solucionar una causa que tenía por conducción en estado de ebriedad, que para eso tenía que pagar \$400.000 y que este amigo le preguntó si eso era posible, a lo que le respondió que no. Diego Vásquez le mandó a este testigo una foto que sacó de la persona y la identificó como la pareja de del Pino, al que conocía, a Ricardo Vega, porque siempre iba a dejar a Claudia a la Fiscalía y lo ubicaba de vista. Dijo que eso fue antes de la denuncia y después llamó a Vásquez y le preguntó si había pagado y respondió que sí lo había hecho por el servicio del término de la causa.

A partir de eso, Carola le entregó un antecedente nuevo, una causa. Dijo que el fiscal que llevaba la causa penal, esto en agosto del 2020, Patricio Caroca, le dijo que había una causa que aparecía terminada y en que se había cambiado la calificación jurídica. Esa causa, por conducción en estado de ebriedad, era de Rodrigo Guerra.

También señaló que tras declarar del Pino Acuña en su investigación, le pidió el número de teléfono de Vega y se comunicó con él. Le contestó y quedaron en que iría a la Fiscalía Regional. Esto en pandemia, en septiembre u octubre. Sin embargo, lo llamó y no contestó ni llegó.



Añadió que tomó otras declaraciones y realizó otras diligencias y en octubre cerró la investigación y formuló seis cargos. El primero por el término de causas sin haber presentado los escritos. El segundo por tomar decisiones de término que no guardaban mérito con la investigación o el delito investigado, cuando aplicaba facultades de no iniciar a causas en que debería haber requerido simplificado o formalización o cuando archivó causas cuando debió solicitar otras actuaciones. El tercero por las causas por conducción en estado de ebriedad y la forma en que tramitaba esas causas, en el retraso de presentar requerimientos o formalizaciones o no presentar requerimientos. Olvidó que en Linares, los abogados asistentes tenían la costumbre de solicitar audiencia de formalización y no requerir simplificado de inmediato, lo que retrasaba la investigación, y eso va en contra de los criterios regionales. El cuarto cargo se refiere cree a las decisiones jurídicas que tomaba de terminar causas inexplicables con el mérito de la investigación. El quinto, por las carpetas encontradas en su oficina y su casa. Y el sexto por cuatro causas de conducción en estado de ebriedad en que recalificó esos hechos y las terminó. Una era de Diego Vásquez, otra de Rodrigo Guerra, otra de Samuel Alarcón y otra causa que archivó sin recalificar.

Claudia del Pino contestó esos cargos en general en los mismos términos de lo que le declaró en la Fiscalía Regional. En el fondo repitió en sus descargos la declaración y acompañó una serie de documentos, hojas sueltas con subrayados y sub inscripciones en causas. También correos electrónicos. Le pidió diligencias. Le pidió tomar declaración a Tatiana Díaz, fiscal de Linares en esa época, tomar declaración a Ricardo Vega y otras diligencias. Accedió, pero a la de Vega no porque ya había intentado tomarle declaración. Ella repuso y le dijo que era absolutamente necesario y que él no asistió por un problema para llegar y porque los abogados de ella le dijeron que no tenía que ir a declarar, pero que ahora sí se presentaría. Acogió la reposición y citó a declarar a Ricardo Vega, a Tatiana Díaz y a una amiga de Claudia. El interés de Claudia era que Ricardo Vega declarara. Dijo ella en el escrito que él estaba dispuesto a declarar.

Refirió que Vega declaró en la Fiscalía Regional, en su oficina. Declaró que tenía conflictos con Claudia, que no se llevaban bien, que ella lo denostaba ante terceros y en la misma casa. Que sí tomó contacto con Diego Vásquez y Rodrigo Guerra, ofreciéndoles el servicio de poner término a las causas por dinero, Guerra por \$300.000 y Vásquez por \$400.000, y le señaló a un sujeto que no tenía



identificado, Samuel Alarcón, al que le cobró \$500.000 por ponerle término a la causa. Le dijo que esto lo hizo solo, sin Claudia. Que ella trabajaba en el comedor, que el computador estaba siempre abierto, también los sistemas SIGE y SAF, que él la veía trabajar y aprendía cómo funcionaban el SIGE y el SAF y que cuando Claudia no estaba porque iba donde los padres, se metía al SIGE y obtenía la información de imputados por conducción en estado de ebriedad, después él cambiaba la calificación jurídica en el SAF y cortaba, pegaba y cambiaba hechos en el SAF y ponía término. Que una vez, cree respecto de Guerra, le imprimió un archivo en un ciber y firmó por Carola, la fiscal jefe. La declaración de él era similar a la de Vásquez y Guerra. A Alarcón nunca lo pudo contactar. Le preguntó su escolaridad y dijo que tenía hasta 2° medio, incompleto, que no trabajaba. Conoce (el testigo) el SAF y el SIGE, que no son sistemas simples, el SAF incluso él no lo maneja bien, el SIGE sí. El SAF es difícil de manejar y de entrar a él. Ante esta inconsistencia le pidió a Vega en su oficina que entrara a SIGE y al SAF en su computador. Abrió (el testigo) su SIGE, colocó su contraseña y le pidió hacer lo que hacía. Vega no tenía la menor idea de lo que había que hacer. En SIGE, para hacer lo que decía Vega, es muy fácil, se pincha la parte de abajo en la primera página el SAO o donde dice carpeta digital y sale todo el dato del parte y se puede sacar información. Vega no sabía hacer eso. Después le dijo que entrara al SAF y menos noticia tenía de qué saber ahí. Ahí supuestamente hacía la recalificación de los hechos y los cambiaba, les daba una calificación distinta, pero no tenía la menor idea de cómo hacerlo. Le preguntó por qué y dijo que había pasado mucho tiempo, que ya se le había olvidado cómo hacerlo y que siempre le había costado realizar esa gestión. Dejó constancia de esta situación.

Refirió que cuando le tomó declaración a Vega, su disposición fue buena, un poco nervioso. Contó la historia que indicó, le agregó el antecedente de Alarcón y dijo que sólo en esos tres casos hizo esto. Cuando le pidió usar los sistemas, se sentó Vega en su silla y no tenía la menor idea, sobre todo en SAF. Nada. Para cambiar la calificación en SAF se debe pinchar dos veces el delito y ahí recalificar, cambiar el delito, pero decía que cortaba, pegaba y escribía nuevos hechos. Pero revisando esas causas, no cambió los hechos, solamente se recalificó, es decir, pinchar. Pidió una certificación a UGI sobre dónde se realizaron esos cambios y se realizaron del computador de Claudia del Pino, al menos las dos que pidió de marzo y julio, de



Guerra y Vásquez. Le pareció que él (Vega) no tenía conocimiento alguno de cómo funcionaba el sistema y de lo que tenía que hacer.

Explicó que, para hacer este ejercicio, abrió él el sistema con su clave y le dejó abierto a Vega el SIGE, que era lo más fácil, porque Vega decía que obtenía los datos por SIGE. Nada hizo. Era pinchar en la primera página solamente y no sabía. En el SAF hizo lo mismo y le preguntó cómo se cambia la calificación jurídica y nada sabía, ni siquiera dónde pinchar.

Añadió que, sobre los archivos provisionales con consulta al fiscal regional, no todos los archivos provisionales requieren autorización del Fiscal Regional, algunos sí. Lo más extraño es que de esas cuatro causas que vio, los archivos provisionales por conducción en estado de ebriedad no van al fiscal regional. Las recalificaciones fueron de conducción en estado de ebriedad a amenazas, otro a lesiones leves y otro a hurto de hallazgo, que son tres delitos que nunca se envían a la regional. Es imposible que una persona con 2° medio, que no tiene conocimiento de derecho ni de los criterios regionales y nacionales, sepa que precisamente debe recalificar esos delitos para que nadie lo descubra. Eso lo razonó para determinar que es imposible que Vega haya hecho eso. Esto de los archivos provisionales está en criterios nacionales, regionales y algunos en la ley, es un tema jurídico. Un abogado normal, que no sea del Ministerio Público, no sabe que unas amenazas, hurto de hallazgo o lesiones no deben ir al fiscal regional para su aprobación.

El hurto de hallazgo es un delito súper extraño. Las lesiones leves son muy habituales, las amenazas también, pero el hurto de hallazgo si no es el penúltimo más frecuente, es el último. Duda que un estudiante de derecho penal dos le pregunten por el hurto de hallazgo, pocas personas lo conocen. La pena menos, de 61 a 540 días, como las amenazas no condicionales. Estos delitos no califican como un delito de especialidad. Para los controles, si le enviaran para consulta una amenaza o hurto de hallazgo, le debería llegar a él porque su especialidad es drogas y los delitos residuales. Si hubiese tenido dudas en un hurto de hallazgo le debió consultar a él como hacen todos los abogados asistentes. Estos delitos como hurto de hallazgo, lesiones o amenazas, si sus causas se terminan no pueden ser revisados, ninguna causa terminada a esa fecha se revisaba salvo las auditorías que mencionó de la nacional con muestras muy pequeñas, ellos sí revisan vigentes y terminadas.

Señaló que también declaró una amiga de Claudia, de apellido Cisternas cree. Le refirió que era amiga de Claudia, que tenía montones de problemas con



Ricardo Vega, que era muy sumisa respecto de Vega, que él la violentó, que Vega tenía acceso al computador, que vio a Vega trabajando en portales o link con la imagen del Ministerio Público, lo que le pareció extraño porque el SAF y SIGE no tienen los símbolos del Ministerio Público.

Hizo presente que un hecho importante que no está en el sumario porque tenía dudas de si debía incorporarlo o no, fue que ya en el término probatorio un día recibió, un viernes, cuando ya estaba en su casa, un llamado de Ricardo Vega después de su declaración y le señaló que quería hablar con él porque quería contar toda la verdad, porque mintió y había más cosas. Le dijo que sí y que declarara la próxima semana, pero no concurrió Vega. Después cerró el término probatorio. No dejó constancia de esto porque tenía la duda, el número telefónico no estaba asociado a Ricardo Vega por lo que no le pudo sacar un pantallazo.

Comentó que posteriormente no tuvo injerencia en ese proceso, pero sabe que el fiscal regional confirmó su propuesta de destitución y que Claudia repuso apelando en subsidio y el fiscal nacional también confirmó sus criterios.

Al Querellante contestó que, sobre la llamada de Ricardo Vega, está absolutamente seguro de que era Ricardo Vega. Le preguntó y le dio ese nombre. No tenía registrado ese número. Esto fue una semana o dos después de tomarle declaración.

A la Defensa de del Pino Acuña respondió que sólo en situaciones importantes en las investigaciones sumarias se designa a un abogado asesor. La regla general es que las lleven fiscales. Una sola vez lo nombraron para esta tarea, para el sumario de Claudia del Pino. Ha participado en otros sumarios pero en otras regiones. Para realizar el sumario, hay un reglamento de investigaciones administrativas que establece obligaciones mínimas, como solicitar la historia de vida funcionaria, plazos que cumplir, que sea rápido, etc. Sobre lo que se folia, por lo que recuerda, debe ser con letras y números y se folia la investigación administrativa hasta que se hace el informe. Él sí folió hasta su informe final. No sabe qué pasa después. Sobre cuántas páginas folió, eran unas 300, no recuerda el número exacto.

Sobre una formalidad mínima, está el entregar copias de todo. Es una obligación y derecho que respetó absolutamente. Claudia se lo pidió al declarar, cuando formuló los cargos, en el informe final. Dentro de eso también agregó las pruebas de descargo en anexos, estaban las hojas foliadas y archivadores con



anexos, con las pruebas de Claudia y el listado de causas revisadas. Se señala que están en anexos. En el sumario sí están incorporadas todas las pruebas que señaló Claudia y cree se hizo cargo de todas. Ese criterio fue confirmado, está ejecutoriado.

Señaló que, en relación con las diligencias que hizo con Ricardo Vega, tras su declaración pasó a la parte de confirmar los conocimientos informáticos de Ricardo y no sabía hacer nada de nada en los sistemas. A Ricardo le tomó declaración a fines de octubre cree. Tomó contacto en tres instancias con él. Cuando declaró, le refirió lo que ya mencionó. Le preguntó su escolaridad y dijo media incompleta, 2° medio, y como dijo que entró al sistema y conocía los antecedentes de los imputados por SIGE y en SAF hacía el cambio de calificación jurídica cortando, pegando y cambiando los hechos, abrió su SIGE y le pidió que lo hiciera. Repite lo que señaló sobre el punto. Dejó constancia de ello en el sumario. Eso lo hizo en esa declaración que tomó a Ricardo. Después fue cuando Ricardo lo llamó y le dijo que quería contar todo, que había mentido, pero no fue a declarar de nuevo. De eso no dejó constancia porque lo llamó de un número que no tenía registrado como Ricardo Vega, por lo que no tenía cómo dejar constancia de ese número que recibió. Cuando le hizo ese ejercicio a Ricardo, no lo grabó. Sí le tomó declaración, la imprimió, le preguntó si quería cambiar algo, luego imprime y se firma. Sobre ese ejercicio está sólo su certificación. Ricardo, cuando declaró, cuando tuvo problemas para tramitar, dijo que siempre le costó entrar y lo hacía solamente cuando Claudia no estaba en la casa y por el tiempo transcurrido se le había olvidado. Ricardo siempre planteó, también Claudia, que el computador siempre estaba abierto y con las claves. Ricardo señaló que le costaba usar el sistema por el tiempo transcurrido y le costaba ingresar. Eso no es lo que le pasa a los funcionarios cuando vuelven de vacaciones. Puede ser en el SAF. Cuando volvió después de 10 años al Ministerio Público, se le había olvidado el SAF. El SIGE, después de quince días de vacaciones es imposible si se trabaja todos los días con él. Después de un período largo, como le pasó a él, como de 10 años, en eso está de acuerdo. El SIGE, después de las vacaciones, no. El SIGE es muy amigable, con módulos, con el que se trabaja todos los días. En 15 días no se pierde la práctica. Si a un funcionario le pasa, habría que preguntarle a ese funcionario. Ricardo dijo que no tenía educación media completa. Eso no es suficiente para determinar la capacidad intelectual de una persona. Lo que pasa es que para hacer todo esto de la calificación jurídica, no es solamente el acceso al computador y las claves, sino que se deben manejar sistemas más o menos



complejos que requieren capacitación. Además, acá se cambió una calificación jurídica por otro delito, y hurto de hallazgo no es un delito común, implica tener conocimiento jurídico. Además se deben conocer los reglamentos internos, qué causas que van a archivo van a revisión del fiscal regional, y precisamente esos tres delitos no van a revisión. Por eso concluyó que debió hacer eso una persona de adentro. Por ejemplo, la niña que atiende en el mesón no lo sabe. Sólo los abogados asistentes y los fiscales. Sobre si la niña del mesón que da información, que se mete al sistema a ver las causas, sabe cuál causa va a consulta o no, respondió que el Ministerio Público es un servicio público que funciona muy compartimentado. La persona de atención de mesón no sabe los criterios jurídicos. Hasta hoy fiscales dicen que algunas cosas van a aprobación del fiscal regional y otras no. Una gran mayoría de los funcionarios administrativos ni siquiera sabe qué es un hurto de hallazgo. La señorita de atención de público puede informar a la persona que en el sistema esa causa está con archivo provisional pendiente de aprobación, porque eso está en el sistema. Trabajó 10 años en el área privada, en el área penal en su mayoría. Sobre si sus imputados sabían la diferencia por el monto de los delitos de hurto, la regla general es que los imputados que él veía eran empresarios, pero no distinguían los tipos penales ni la pena asignada a cada uno de ellos. No conoce ha defendidos imputados sin educación superior. No puede conocer cómo piensan los imputados que no conoce, cada persona es distinta.

Señaló que una amiga de Claudia declaró, de apellido Cisternas cree, que Claudia ofreció como testigo. Le tomó declaración y dijo lo que ya señaló, inclusive que lo vio trabajando en las páginas del Ministerio Público, lo que sabía porque tenían el logo del Ministerio Público. Ni SAF ni SIGE tienen el logo. Sobre si las cartas de archivo tienen el logo del Ministerio Público, sí. No tuvo a la vista ninguno de los archivos que supuestamente hizo Vega y entregó a Vásquez y Guerra. Sobre si tampoco indagó con Paulina lo que dijo haber visto en la pantalla, no, lo descartó.

A la Defensa del acusado Vega Guerrero contestó que, sobre si en el cierre del sumario, del Pino repuso y dentro de sus fundamentos estaba el pedir como diligencia la declaración de Vega y que el abogado de ella le dijo que no declarara, respondió que todavía tiene la duda de si fueron los abogados de ella o de Ricardo Vega los que le habrían señalado eso, porque ellos señalan, los dos, que él solamente reconoció la acción ante los abogados de ella. Nunca ha sabido si en esa época Vega tenía abogados. Ella compareció personalmente en el sumario.



Cuando recibió la declaración de Ricardo Vega, le dijo que se relajara, y le explicó el tema. Al declarar, sobre si pudo apreciar que su declaración estaba dirigida, tiene certeza que la declaración de Vega era muy muy similar a la de Claudia que había tomado un mes antes, agregando cosas que no preguntó a Claudia, como que la denuncia era de su hermano, su escolaridad. En lo fundamental era muy similar.

Hizo sentarse en su asiento frente al computador a Ricardo Vega y no supo hacer nada. Hizo como una simulación. Tenía su computador una pantalla, abrió SIGE y dejó el ingreso, la primera imagen de SIGE, y le pidió que le dijera cómo hacía para obtener en SIGE la información de los imputados. Vega se sentó y nada. Después en SAF, ingresó a SAF con su clave y lo dejó. Vega dijo que en SAF cambiaba la calificación, el delito y hechos. Le pidió que lo hiciera. Él puso un RUC cualquiera para que lo hiciera y nada. Sobre el rostro de Vega, se complicó y le dijo que siempre le había costado entrar porque aprendió viendo a Claudia y que por el tiempo transcurrido se le había olvidado. El último ingreso que estableció en SAF de cambio de calificación jurídica era junio. En su declaración ya habían pasado tres o cuatro meses.

Estos dichos del señor Jorquera Loyola armonizan plenamente con la prueba descrita en el auto de apertura como “Copia Sumario administrativo FRM – IA N° 78-2020 junto a resolución FN/MP 58-2021 del fiscal nacional mediante la cual se confirma la sanción de remoción a Claudia del Pino Acuña”, ya que en ella rola, en su foja 254, una declaración prestada el 20 de noviembre del año 2020 por Ricardo Ignacio Vega Guerrero, y el tenor de la misma coincide en lo relevante con lo que de ella reprodujo el señor Jorquera Loyola. Destacable es que allí, en dos ocasiones, Vega Guerrero señala que la ayuda que prestaba a los imputados consistía en que ingresaba al sistema SAF y allí copiaba, pegaba y cambiaba cosas y que ingresaba a SIGE y luego al SAF donde borraba, copiaba y pegaba. También se consignó que Vega Guerrero dejaba constancia de que se le hizo ingresar a SIGE y SAF y que ha olvidado algunos pasos que hacía debido al tiempo transcurrido, ya que cuando lo hacía, pasaba mucho tiempo intentándolo hasta que le resultaba, agregando que para obtener los datos de las causas siempre entraba en SIGE y entraba a la carpeta y obtenía los datos de los imputados y para cambiar la calificación jurídica y archivar, lo hacía por SAF. En la foja 257 rola además una certificación, también de fecha 20 de noviembre del año 2020, suscrita por Mauricio Jorquera Loyola, en que señala



que, en el marco de la declaración de Ricardo Ignacio Vega Guerrero, se realizó como diligencia el ingreso de éste a los sistemas SAF y SIGE, siempre bajo la presencia de ese investigador, y a partir de lo anterior pudo constatar que no demostró experticia alguna para el ingreso y operación de SIGE y SAF y que Vega Guerrero fue capaz de verbalizar las tareas que debía realizar, pero no demostró habilidad práctica alguna en la realización de dichas actividades.

De esa manera, el señor Jorquera Loyola afirmó haber escuchado personalmente la declaración que prestó ante él Ricardo Vega Guerrero en el sumario que instruyó, declaración en que, en definitiva, el último hizo recaer la responsabilidad en las conductas ilícitas que relató sólo sobre él, exculpando a su cónyuge Claudia del Pino Acuña. Agregó que, no obstante ello, al solicitarle a Vega Guerrero que reprodujese las conductas que relató, relacionadas con la sustantiva parte de su declaración en que aseveró haber hecho indagaciones y cambios en plataformas informáticas del Ministerio Público, fue incapaz incluso de dar inicio a la ejecución de alguna. De todo ello dejó la debida constancia en el sumario que instruyó.

Sobre lo último, llama la atención que Vega Guerrero haya declarado en que para obtener los datos de las causas siempre entraba en SIGE y entraba a la carpeta y obtenía los datos de los imputados y para cambiar la calificación jurídica y archivar, lo hacía por SAF, pero al describir cómo efectuaba tales operaciones sólo indicó, de manera sumamente genérica y desvirtuando así lo anterior, que ingresaba al sistema SAF y allí copiaba, pegaba y cambiaba cosas y que ingresaba a SIGE y luego al SAF donde borraba, copiaba y pegaba. Tal disonancia fue decisivamente potenciada por el ejercicio que el señor Jorquera Loyola realizó con él, ya que si bien Vega Guerrero procuró explicar su total incapacidad para materializar las operaciones informáticas que indicó argumentando que había olvidado algunos pasos por el tiempo transcurrido, ya que cuando lo hacía, pasaba mucho tiempo intentándolo hasta que le resultaba, dicha justificación no guarda relación con que haya sido completamente incapaz de realizar acción alguna en los sistemas SIGE y SAF, ni siquiera intentos infructuosos.

Dicha incapacidad, sumada al hecho de que indudablemente la intención de Vega Guerrero en la diligencia analizada era asumir toda la culpa de las conductas ilícitas que expuso, evidencia, según el parecer de este Tribunal, que Vega Guerrero, como el mismo sostuvo ante estrados y en la investigación penal según replicó el



testigo Luis Gutiérrez Gutiérrez, en realidad faltó a la verdad en la declaración que prestó ante el señor Jorquera Loyola en lo tocante a la exculpación de Claudia del Pino Acuña debido a que ésta se lo pidió y le señaló que no sería sancionado por no ser empleado público, dado que va en completo desmedro de la parte de su relato que precisamente demandaba la intervención de su cónyuge habida cuenta de sus conocimientos, experticia y función pública,

No huelga acotar que el tenor de dicha declaración en sede administrativa y el ejercicio práctico que describió el señor Jorquera Loyola, como ya se expuso, fueron refrendados por Vega Guerrero ante estrados.

Lo antedicho también quedó reforzado por los numerosos antecedentes acompañados al juicio que demostraron que el ingreso y la operación a y de las mentadas plataformas informáticas del Ministerio Público es bastante compleja y que, por ello, resulta altamente improbable que una persona que carece de capacitación y práctica en esos sistemas, como es el caso de Ricardo Vega Guerrero, pueda realizar en los mismos actividades como las que se ejecutaron en la presente causa, específicamente la consulta de los pormenores de un hecho punible, la aplicación de decisiones de archivo provisional y la alteración de ciertos registros informáticos, como son textos que plasman dichas decisiones o cartas de comunicación de las mismas.

Desarrollando tal aserto, la testigo Carola Milena D'Agostini Ibáñez, fiscal jefe de la Fiscalía Local de Linares, también manifestó que, sobre la complejidad del uso de las plataformas del Ministerio Público, son complejas de usar. No cualquiera sabe cómo funcionan o dónde buscar la información, porque tienen muchas alternativas. En SAO se pueden ver causas vigentes, las con problemas de datos, las terminadas. A dónde se busca esa información que señaló, hay que saberlo. SAF es sumamente complejo. Hasta hoy puede decir que a ellos todos los meses les miden un nivel de errores de ingreso. Se supone que todas las causas deben tener una triple identidad de imputado, víctima y delito. Si se hace mal eso todo lo que se ingrese estará mal hecho. Eso no lo sabe todo el mundo, hay que saber cómo ingresar al sujeto, el delito, el hecho, generar la relación.

Cuando llegan personas nuevas o estudiantes en práctica, se les asigna una clave que es personal e intransferible. A medida que ellos hacen algo, queda registro de la clave que se usó para hacer la actividad. Se pudo saber quién hizo tal o cual cosa, el sistema lo arroja. En el caso de los alumnos en práctica se les asigna una



clave y tienen una semana de inducción para usar lo más básico del sistema. No es que se pinche y dé un resultado, debe haber un llenado de información.

Sobre si es posible que una persona que no trabaja en la Fiscalía pueda usar estos sistemas, lo ve muy difícil porque los sistemas son muy complejos. Tiene que haber una inducción, un trabajo permanente de las plataformas. No basta con sentarse frente al computador. Además, para hacer algo en estos sistemas, se necesita la clave, alguien tiene que dar acceso entregando la clave personal asignada por el Ministerio Público, entiende se asignan desde la Fiscalía Nacional. Ella tiene clave que le da acceso al correo electrónico, a las distintas plataformas.

Sobre el SAF, SIGE y SAO son plataformas complejas de usar. El SIGE es un poco más complejo. Los tres sistemas son complejos porque tienen bastante información y actividades de las que se puede dejar constancia. Una persona de afuera no familiarizada con estos sistemas, cómo sabrá cómo pedir una audiencia de formalización, cómo citar a una persona. En SIGE se deben conocer los hitos de la persona, cómo acudir para pedir una diligencia, cómo consignar su contenido, peticiones de término, etc. Debe haber conocimiento jurídico y familiaridad con el sistema.

Añadió que, para acceder al computador, hay una VPN con clave de letras, símbolos y números. Luego al computador se accede con otra clave. Las claves SAF, SIGE, SAO y SIAU son algunas distintas y otras mantienen la clave de ingreso al computador. SAF tiene una clave distinta, pero puede ocurrir que alguien le coloque la misma clave a todo. Si fueran diferentes, podrían ser unas seis claves diferentes.

Sobre si estando el SAF, SAO o SIAU abierto, se bloquea el sistema si no se usan y debe ingresarse de nuevo, SAO se bloquea y cierra tras un tiempo y hay que reactivarlo con la clave. Corrige que cree que SAF tiene una clave pero SAO, SIGE y SIAU tienen la misma clave de ingreso al computador, así que son menos claves. SAF sí tiene una clave distinta. SAF no se bloquea. SIGE sí se bloquea actualmente, antes no. SAO no se bloquea y SIAU sí se bloquea.

En relación con el SAF, ahí se ve algo similar a la página del Poder Judicial, es la misma empresa la que la hizo. Dependiendo de lo que se quiera hacer, se despliegan distintas actividades. Tiene varias alternativas de parte, antecedente del caso, fecha de ingreso, buscar casos, delitos, sujeto, casos relacionados, casos asociados. Ese SAF es respecto de esa causa, que puede tener más de un delito y



saldrán todas las relaciones asociadas a los delitos. Si se ingresa a la parte que corresponde del SAF, se puede buscar el domicilio de la persona. La alcoholemia no aparece en el SAF. La alcoholemia, como documento, no está, pero como hecho delictual sí, aparece como documento recibido alcoholemia número tanto. El SAF es un registro jurídico de todas las actividades, donde está la orden de investigar, la solicitud de peritajes, la recepción de documentos, todas las actividades que pide como autorizaciones judiciales y audiencias, y en SIGE está la carpeta digital, donde se pueden ver la alcoholemia, el parte, la boleta de alcoholemia. A SIGE se entra con una clave distinta del SAF en su caso, porque alguien puede tener la misma clave para todo.

Sobre la inducción para el uso de las plataformas, ellos tuvieron una capacitación previa para usar el SAF o SIGE. El 2001 tuvo una capacitación de SAF. La inducción no es tan difícil, pero dependiendo de lo que se quiere hacer se debe estar familiarizado con el sistema. Sobre SIGE, también tuvo inducción, saber cómo realizar solicitudes, dónde están, varias cosas que se tenían que manejar.

La testigo Nelly del Carmen Zenteno Flores, administradora de la Fiscalía Local de Linares, señaló sobre el punto que para entrar a SAF se entra a una máquina virtual y luego se pincha el icono del SAF, se despliega una pantalla de inicio, se pone nombre de usuario y contraseña. Al entrar eso, el nombre de usuario se asocia a la Fiscalía y la persona y la contraseña obviamente es personal. Ahí se despliegan una infinidad de módulos y los módulos a los que se accede dependen del perfil del cargo. Ella y el encargado de custodia, por ejemplo, tienen acceso al módulo de custodia. Un fiscal o un administrativo no tiene acceso a ese módulo. Desde el 2001, según su experiencia, es de uso complejo. Es antiguo, complejo. Hay muchas actividades, ella con 22 años en la institución, que ella no sabe, como ingresar la constancia de una audiencia. Por ejemplo, en la tramitación de causas, cuando se mete a tramitar causas, existen los sujetos y las relaciones. Las relaciones siempre van con la víctima, el delito y el imputado. Puede tenerse infinidad de ellos, pero hay acciones que se ejecutan sobre la relación y otras sobre los sujetos. Si se quiere pedir una orden de detención, se debe pinchar al sujeto, pero para terminar la causa se debe pinchar en la opción relación. Para eso se debe tener conocimientos jurídicos para entender lo que es relación, delitos, intervinientes, y conocimiento acabado de la tramitación y del sistema para saber dónde se debe marcar.



La testigo Karem Silvana Torres De La Fuente, jefa de la unidad de gestión informática de la Fiscalía Regional del Maule, manifestó que el SAF es un sistema antiguo, generado el 2000, que no ha tenido actualizaciones desde el 2005, trabaja con Windows XP, antiguo, hoy tenemos el Windows 10 u 11 en los computadores, por lo que para acceder a SAF deben abrir una máquina virtual en los computadores, que es un software que genera un computador dentro del computador. Se ingresa allí y esa máquina virtual está asociada al Windows XP y a una versión de Microsoft Office antigua. Como SAF no se ha actualizado, se debe usar de esa forma. Se ingresa con nombre de usuario y clave de SAF que es individual por cada funcionario.

Su unidad está a cargo de realizar las capacitaciones de SAF y SIGE, también de OPA y SIAU, a los funcionarios del Ministerio Público que se incorporen como titulares, suplentes, etc. Se les hace la capacitación asociada a las labores y perfil que tendrá el funcionario. En esa capacitación, como el SAF tiene hartos módulos y opciones, se hace énfasis en los que el funcionario usará.

El SAF, según su criterio, es un sistema complejo porque primero se tiene que entrar a través del virtualizado, que no todo el mundo conoce. Además, es la única forma de acceso al SAF y como tiene hartos módulos, una persona del Ministerio Público que conoce los procesos jurídicos y administrativos y como se tramita una causa y solicitan diligencias, sólo ellos pueden conocer el SAF. De hecho ella en el día sólo ocupa módulos específicos del SAF. Al ser un sistema antiguo, no es un sistema web, se usa con el Internet Explorer, que ya no se usa y caducó. Además como tiene tantas opciones, no es un sistema intuitivo para una persona que no conozca los procesos de trabajo del Ministerio Público o la tramitación de una causa.

Agregó que hay un concepto complejo del SAF que es el de las relaciones. Se maneja en la institución. El SAF genera una relación que se compone por el imputado, el delito y la víctima. Pueden existir una o más relación. Ese es un concepto básico pero no fácil de entender. En el archivo sin consulta, el fiscal o abogado debe marcar la relación que se verá afectada por ese archivo sin consulta en la noche, como esos archivos no requieren aprobación del fiscal regional, se genera un proceso masivo que graba en SAF la actividad de archivo provisional y la causa con eso pasa de vigente a terminada, le genera la actividad de comunicación a la víctima que es una carta predefinida regionalmente y al otro día la funcionaria a



cargo del proceso imprime las cartas y se preocupa de que estén aplicados los archivos y remite las cartas al servicio postal.

Sobre el sumario que mencionó, sabe que por él se descubrió, por lo que sabe, que se modificaron a los delitos en SAF, en delitos de manejo bajo la influencia o en estado de ebriedad, en algunos delitos de daño, de uso fraudulento de tarjetas, de lo que recuerda. Ahí estaba el principal tema, obviamente también asociado a los términos que hubo en esas causas. En esas causas estaba consignada la cuenta SAF F703 de Linares de la ex funcionaria Claudia del Pino. En relación con la complejidad de realizar lo que se pesquisó en esa investigación sumaria, es rebuscado porque lo puede hacer alguien con conocimiento jurídicos y que conoce SIGE, cómo se hacen las solicitudes en SIGE, qué y cómo se debe solicitar, alguien que conoce claramente los procesos automáticos del SIGE y alguien que conoce claramente y muy bien todas las cosas que se pueden hacer en SAF, las modificaciones de delito o de actividades, o cómo se ingresan términos, jurídicos. Claramente es alguien que conoce los procesos jurídicos de una Fiscalía, que conoce muy bien el SAF y cómo trabaja SIGE.

Sobre si en la pantalla de tramitación de casos, para llegar a una causa basta poner el RUC, respondió que primero se debe ingresar a la pantalla del SAF con usuario y contraseña, aparecen los menú, se ingresa al módulo tramitar caso, se digita el RUC y se despliegan esos antecedente. Si ella pincha nombre de caso manejo en estado de ebriedad, eso se puede modificar, el nombre del caso se puede modificar, poner ahí hurto falta por ejemplo y queda modificado. Si se pincha al lado del nombre del imputado no se puede terminar la causa, se debe pinchar la relación respectiva. Se abre la actividad de término, por ejemplo un principio de oportunidad, se piden detalles dependiendo del tipo de término, que la persona debe completar, y de ahí presionar grabar. Si se pincha archivar, no queda directamente reflejado en el SIGE, es al revés. Hoy el archivo lo solicita el abogado o el fiscal en SIGE y si es sin consulta, SIGE automáticamente, en el proceso masivo nocturno, graba en SAF la actividad de archivo provisional y de comunicación a la víctima. Si el delito tiene pena aflictiva, el camino es distinto porque requiere aprobación del fiscal regional. Si se pincha archivar se podría generar la carta de comunicación, pero no automáticamente. El proceso automático masivo es el que se usa casi por el 100% de los usuarios porque esa es la regla de negocios, que se pida por SIGE



porque SIGE tiene la trazabilidad de todos los equipos. SIGE va grabando en SAF las actividades, en este caso, de archivo provisional, de manera automática.

Sobre si al pinchar la relación en SAF y archivar, se genera la carta cuando se actualiza en la madrugada, respondió que no, son procesos distintos, las solicitudes se hacen por SIGE. Si se va a SAF está la actividad de archivo provisional y de comunicación a la víctima, se abre una plantilla que trae SAF por defecto, pero la regla de negocios es que se usa la carta que genera SIGE, que está definida regionalmente para comunicación de archivo.

En el mismo acápite, el testigo Paulo Marcel Becerra Maldonado declaró ser funcionario de la Fiscalía Regional del Maule y que su profesión es ingeniero informático, con un diplomado en gestión de operaciones. Trabaja en la Fiscalía como profesional de gestión y control de la Fiscalía del Maule dentro de la unidad de informática. En la Fiscalía trabaja del 2001 y en la unidad desde el 2005 cree. Sus funciones son en esa unidad las asociadas a la extracción de información, generación de sistemas informáticos y con el equipo de desarrollo y el apoyo en general como unidad de servicio a las solicitudes de las Fiscalías Locales. Le tocó desarrollar varios sistemas, en particular el SIGE, asociado a procesos de trabajo, gestión de carpeta, mantención de especies, oficios y un sinnúmero de otros sistemas regionales. En cuanto al SAF, tienen interacción. Trabaja en SAF, que es un sistema nacional desarrollado por el 2000. En SAF tiene funciones de operador con privilegios regionales, puede hacer algunas mantenciones y la gestión de operación, revisión de los procesos de la Fiscalía

Sobre la ex funcionaria Claudia del Pino, recuerda diversos informes para distintas áreas de la Fiscalía. En particular recuerda solicitudes de cotejar informaciones con el sistema nacional y extracción de información del SIGE. Recuerda la solicitud, no recuerda la fecha, de extracciones de información de los sistemas nacionales con el criterio de comparar o buscar información de la que no estaba a su vista el objetivo. Ciertas actividades realizadas en la plataforma nacional. Con el SIGE lo mismo, pero en la plataforma regional.

También una solicitud sobre ingresos o formas de operar del SAF y SIGE por accesos web o de usuarios o de VPN, que son estructuras de acceso telemático o de lugares distintos a la oficina. Eso lo hizo operando y relatando las acciones que hacía apoyado por un funcionario policial. En eso hizo una demostración de cómo se accede a la plataforma de SAF desde el acceso del computador de la Fiscalía y cómo



se accede a los mismos lugares desde VPN, que es un enlace seguro dentro de un computador ubicado en un lugar distinto al computador fiscal, con los accesos de contraseña segura de usuario y direcciones específicas de IP. Mientras él hacía esto, estaba presente un funcionario policial, no recuerda a más personas presentes. La demostración la hizo con la solicitud de ejemplificar cómo se efectuaban los accesos a los sistemas que mencionó. El funcionario de la Policía de Investigaciones dejaba registro por una cámara. No recuerda si lo hizo fotográficamente, pero sí por un video.

A continuación, el Ministerio Público procedió a exhibir a este testigo la prueba nominada en el auto de apertura como “Cinco Video mp4 contenido en DVD-R que forma parte del informe pericial Sección sonido y audiovisuales N° 312/2022 de Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones. (Evacuado por el perito N° 5)”, de los cuales mostró cuatro, y observándolos el señor Becerra Maldonado refirió que en el primero aparece él presentándose y explica la forma de ingreso desde su computador a los sistemas informáticos de la Fiscalía. Habla de la máquina virtual, del ingreso de las credenciales de usuario, de las claves que deben cambiarse cada cierto tiempo y son intransferibles. Muestra el ingreso de usuario y clave al sistema virtualizado, tras lo cual le aparece la ventana que le da acceso a la plataforma SAF, donde se deben ingresar nuevas credenciales de usuario. En su cuenta explica que es F7_PBECERRA, ingresa su clave y se ingresa al sistema SAF. Responde que para el ingreso a SAF, las contraseñas y nombre de usuario en esa plataforma van en mayúsculas. En el video, explica el ingreso al módulo tramitar casos, donde se ingresa el RUC. Explica que para acceder a una causa, se agrega el RUC y se muestra la información relativa a la causa que lee, también se despliegan las relaciones, que son cómo se vincula un imputado o víctima a través del delito. En otra pestaña van los sujetos que intervienen en la causa. En particular muestra cómo se pueden modificar las actividades o los intervinientes o delitos en una causa. Por ejemplo, muestra la historia de la causa donde aparecen acciones realizadas que afectan a usuarios o relaciones. Aparecen los usuarios que efectuaron las actividades, que quedan guardados en el sistema. Se ven algunas acciones anuladas y la eliminación de una anulación sólo se hace por mantención de la unidad informática con un ticket que se deriva a la Fiscalía Nacional. Abre un informe pericial donde aparece una ruta de un documento, esa información no se puede modificar desde acá. No se pueden hacer



mantenciones sobre esa información. Sí se puede cambiar el documento de la ubicación, pero no la ruta. Por eso no se puede modificar la información de una actividad, se puede anular y agregar otra actividad. Del punto de vista de los sujetos, se puede entrar al módulo de sujetos, cargar a uno de ellos, como el imputado, y podría cambiar el tipo de sujeto a otro tipo y el sistema, al ponerlo como víctima, al grabar cambiará el tipo de sujeto, por ejemplo, a víctima. Eso el sistema lo permite, pero la diferencia está en que las acciones que quedaron en la historia quedarán vinculadas a ese sujeto en su estado anterior. Lo mismo si se quiere efectuar un cambio del delito, se debe cargar el delito de la causa y se cargan los datos del delito, dónde ocurrió, en qué lugar, su código y puede reemplazar, por ejemplo, el delito y, al grabarlo, cambiará su código y se reemplaza el delito. También generará una inconsistencia en el resto de las actividades, porque están realizadas con el otro delito, no con el cambiado. Por ello, siempre es factible hacer un cambio y reversarlo.

Añadió que, para hacer esos cambios, desde el punto de vista del SAF, hay que tener amplio conocimiento porque si bien ahí se muestran dos ámbitos del SAF, éste tiene tres. Por ejemplo, el de relaciones. Si no se marca ninguna relación ni ningún sujeto, SAF entiende se trabaja en el ámbito causa. No es muy amigable, por lo que no es tan fácil la forma en que se trabaja. Además, por ejemplo, si se trabaja en el ámbito relación y la causa tiene más de una relación, SAF hace acciones por relación, por lo que no se afecta al estado total de la causa si se afecta sólo a una relación. Hay que tener un conocimiento acabado o bastante importante del sistema para saber cómo gestionar bien las actividades.

Sobre qué significa que un sistema sea intuitivo, un sistema intuitivo refleja la capacidad de auto guiar a lo que se debe hacer, o un sistema fácil de entender. Ver y entender qué se debe hacer sin tener información previa. El SAF no tiene esa característica porque es generado o estructurado con un criterio de registro, no está hecho para ser intuitivo. El que no sea intuitivo para el usuario plantea para el usuario una exigencia mayor, debe ser capacitable. Es un sistema que a todas las personas que ingresan al Ministerio Público se les capacita en SAF porque no es intuitivo y requiere recapitaciones constantes porque cuando un funcionario no trabaja en un área específica, pierde la costumbre de hacerlo y olvida la forma de trabajar, lo que demuestra que no es intuitivo.



Al observar los videos restantes señaló que en el primero se muestra en un notebook el acceso remoto por VPN. Está en el video él pero en otra oficina, con un notebook conectado a wifi, no a la red local del Ministerio Público, simulando a un usuario en su casa. Para eso se debe instalar un programa de VPN. El Ministerio Público usa un programa de Cisco para conectar la VPN, que es una conexión virtual desde ese computador a otro por una línea segura. Para conectar la VPN, muestra que aparece una dirección que corresponde a la VPN institucional. Sin ese nombre, no se puede acceder a la VPN, se debe escribir. Luego se conecta y ahí se debe saber a qué grupo se va. En el caso de su usuario, es el que indica. Se debe acceder por las credenciales de usuario que tiene para el Ministerio Público, donde está escrito su nombre, y después accede con las credenciales de VPN, que escribe. Se le pregunta si está autorizado, marca que sí y VPN establece el vínculo con la red del Ministerio Público. Con ello sólo se conecta a VPN. Para acceder al computador, se debe abrir un escritorio remoto. Muestra el acceso directo para ello y señala que donde dice equipo, se debe poner la dirección IP de su computador, por lo que se debe conocer. La completa para su caso. Presiona conectar y el sistema solicita credenciales para conectarse a una máquina que se singulariza con un número y le pide sus credenciales de usuario, que agrega. Acepta y el sistema le dice que va a acceder y que aplica un certificado remoto, o sea, que guarda su conexión en el computador al que ingresará. Ahí se ingresa y visualiza su computador con las cosas que tiene cargadas en él. Resume que para conectarse a su pc desde la casa o de cualquier otro lugar, primero se debe tener cargado el programa de CISCO, conocer el nombre de la VPN, el grupo al cual se debe conectar, el usuario que tiene para la VPN y la clave institucional de la VPN que es distinta de las claves de usuario. Una vez que se logra esa conexión, se debe levantar el escritorio remoto, donde se puede acceder a su equipo siempre y cuando conozca los números de la IP de su equipo y las credenciales para conectarse. Pasa a mostrar el acceso al sistema SIGE. Está en la plataforma de intranet de la Fiscalía Regional y muestra un ícono que pincha y el sistema le ofrece usar su login, o sea, su usuario y password, Las ingresa y logra acceder a la plataforma. SIGE, a diferencia del SAF, es un sistema de gestión y se pueden hacer solicitudes de gestión, pero no se pueden aplicar términos a la causa que son propios y exclusivos de SAF. SIGE sirve para gestión y trazabilidad de las causas, búsqueda de información o saber el estado de una causa. Accede a una causa como cualquier funcionario, eso le muestra el título Infocarpeta, y se muestra la



información general de la causa que lee. Permite hacer solicitudes, pero ninguna materializa un término, sólo se puede solicitar y el sistema sigue y audita quién hace las actividades. Manifestó que luego el mismo video muestra el acceso al sistema SAO. Pincha el ícono y el sistema pide, como todos los sistemas del Ministerio Público, ingresar su usuario y clave. Las ingresa y accede tras agregar sus credenciales. Es un sistema de gestión de información, por el que no se puede acceder a efectuar solicitudes o términos en una causa. Las más usadas son generalmente los accesos a casos extracto SAF y la ficha del sujeto, es información del caso y de la persona.

Conviene en este punto hacer presente que en los cuatro videos expuestos efectivamente se apreciaron, a medida que el señor Becerra Maldonado los fue describiendo, las pantallas y operaciones que indicó y la complejidad de acceso a las plataformas digitales del Ministerio Público que describió.

Respondió que desde el punto de vista de la complejidad de uso, el SAF es un sistema complejo dadas varias variables. Del punto de vista del diseño, no está generado para facilitar el trabajo al usuario. Es bastante antiguo, del 2000. Además corre sobre un sistema virtualizado, por lo que es como tener un computador dentro de otro, así que para hacerlo funcionar se debe tener cargada esta información y activarla cada vez que se usa. Además de las complejidades propias del mismo sistema, tiene complejidades técnicas asociadas a lo que mencionó. Cuando un usuario de la Fiscalía debe conectarse remotamente, primero uno de los grandes problemas es que se requiere un enlace de datos, estar conectado a internet. Para que la VPN funcione requiere un enlace más bien estable. Además, la VPN del Ministerio Público es respaldada por CISCO, lo que hace que la VPN sea bastante segura. Por ello requiere de la dirección de la VPN de la institución. Además los grupos de trabajo a los que puede acceder la cuenta. Ya eso es complejo. Además de conocer las contraseñas de cada usuario que normalmente son de complejidad alta, con letras mayúsculas, números y normalmente signos. Después, ya conectado a VPN, se debe acceder a un escritorio remoto. En general no todos los computadores personales tienen ese acceso porque generalmente pertenecen a computadores sin Windows 10 profesional, que tiene este acceso. Dentro de ese escritorio remoto, se debe conocer la dirección IP de esa máquina que le pertenece y las claves de usuario. Los computadores, cuando alguien accede a uno de su uso personal, ese computador tiene un perfil agregado donde se carga todo lo que se ve en la pantalla.



De no ser así, los computadores generan un nuevo perfil en blanco, por lo que no se accede a nada en ese computador. Si tuviese una credencial válida del Ministerio Público pero no de ese computador específico, podría acceder a una sesión en blanco, pero no a la de costumbre.

A la Defensa de del Pino Acuña contestó que, sobre la complejidad de los sistemas, las capacitaciones las realiza dependiendo de la disponibilidad, a veces él u otro funcionario destinado a lo mismo.

Sobre si es más complejo de manejar SAF o SIGE, respondió que cada uno tiene complejidades propias. SAF es más difícil. Diría que SIGE es más intuitivo que SAF, pero no necesariamente es intuitivo porque SIGE responde a un modelo de procesos del Ministerio Público, podría ser intuitivo para alguien que está dentro del Ministerio Público. Sobre si hizo un estudio sobre eso, es una percepción suya porque es funcionario del Ministerio Público y desarrollador del sistema, por lo que el sistema responde al modelo del Ministerio Público, que no necesariamente es un modelo que alguien que no pertenece al Ministerio Público conoce.

Sobre las capacitaciones, se hacen capacitaciones generales e individuales y es común que deba reforzarse con otras capacitaciones a través del tiempo. El criterio para reforzar capacitaciones en SAF normalmente responde a la solicitud del usuario, porque en el área recursos humanos se generan solicitudes o preguntas a las personas sobre en qué áreas quieren capacitarse. No es un programa de capacitaciones constantes, normalmente es a solicitud del funcionario. También hay otras vías a través de los administradores cuando creen que alguien requiere refuerzo, cuando alguien cambió de función y requieren recapitaciones.

Sobre si cuando llega un funcionario nuevo o practicante, o un funcionario en general, todos reciben capacitación, respondió que en términos generales no porque desde el punto de vista regional, cuando alguien no ha participado en el Ministerio Público sí se hacen capacitaciones, pero también vienen funcionarios de otras regiones que sí vienen con conocimientos. Sobre alguien que nunca ha trabajado en el Ministerio Público que llega a trabajar, siempre se le hace capacitación. Sobre si ella se hace en todos los sistemas, es relativo, depende del perfil del usuario y con eso la institución define qué sistemas va a usar y el área del sistema que usará. Es poco probable que capacite a un funcionario en todos los sistemas y áreas del Ministerio Público. Es más bien por la función. Un fiscal o



abogado asistente, si recién entran al Ministerio Público, siempre recibirán capacitación en el SAF cuando ingresen al Ministerio Público.

Manifestó que el SIGE, cuando se implementó, se implementó gradualmente en la Fiscalía Regional a partir del 2016. Se fueron agregando Fiscalías y en cada Fiscalía se hicieron capacitaciones grupales en terreno y además se gestionaron equipos de apoyo de la Fiscalía Regional usando funcionarios de otras Fiscalías ya capacitados para el apoyo de puesta en marcha. Eso se usó la primera o dos primeras semanas de implementación. Si alguien no recibiera esa capacitación, un abogado asistente que viene llegando a la institución, cree que si su trabajo depende de hacer registros o solicitudes en plataformas, sería complejo que haga su trabajo. Si no está ligado a las plataformas sí, pero cuando un abogado debe hacer trabajo en la Fiscalía normalmente está asociado a las plataformas y debe hacer solicitudes. Si un abogado asistente que nunca trabajó en la Fiscalía debe tramitar causas, un abogado TCMC, requiere usar SAF y SIGE. Si no recibió capacitación cree posible que pueda realizar su trabajo en SAF y SIGE como abogado del TCMC, pero de mala forma. El sistema está abierto, tiene la posibilidad de que alguien lo use si tiene credenciales. Lo que probablemente no ocurra es que haga lo que debe hacer en el sistema. Alguien que sí recibió capacitación en SAF y SIGE puede tramitar una causa sin error y alguien que no, muy probablemente generará errores. Eso no excluye a alguien que tiene capacitación y experiencia que cometa errores. Por eso existen los procesos de mantención. No es sólo de alguien que no sabe usar el sistema. También alguien con capacitación puede equivocarse por las complejidades del sistema. Por eso cada vez que alguien comete un error dentro del sistema, debe hacer una solicitud por mantención al Ministerio Público que se refleja en el sistema.

A la Defensa de Vega Guerrero refirió que un tercero no empleado de la Fiscalía, sin capacitación ni estudios de computación ni conocimientos jurídicos, no cree posible pueda tramitar bien en SAF y SIGE.

El SAF no tiene un sistema para alertar errores jurídicos porque no fue pensado en una misión de decisión, es un sistema de registro. Permite el registro de cualquier persona que tenga las contraseñas para acceder el registro de actividades realizadas o solicitadas pero no la posibilidad de auditar la decisión jurídica. Para ellos eso está limitado a la decisión de los abogados de la institución.



Sobre si SAF tiene un mecanismo para alertar cuando se cambian una relación con calificación jurídica o delitos, hay auditorías, si se hace un cambio en el SAF queda guardado en la base de datos del SAF, disponibles para la consulta. Si se consulta a la base de datos de auditoría indicará quién, cuándo y de qué lugar hizo la modificación, pero no tiene un sistema de alerta que diga que alguien modificó o anuló alguna actividad. La auditoría de SAF es a posterior y normalmente a solicitud de alguna jefatura, normalmente por las regionales a la división de informática que autoriza el acceso a la información. No es habitual.

Sobre capacitaciones a los funcionarios para el manejo de SAF, se hacen de dos tipos. Normalmente personalizadas cuando acceden de forma individual al Ministerio Público y también grupales cuando ingresa más de uno para ahorrar tiempo. Se hacen en bloques de generalidad normalmente, sobre las acciones generales, y las acciones particulares según el perfil del funcionario. A los fiscales normalmente también en las áreas de audiencias y decisiones.

Haremos presente la testigo de la Defensa de la acusada del Pino Acuña, Tatiana Samantha Díaz Coloma, quien es fiscal y trabajó en la Fiscalía de Linares, refirió sobre lo analizado que, en relación con el uso de los sistemas, al ingresar a la Fiscalía no recibió capacitación para trabajar en ellos; que el 2007 ingresó y no tuvo mayor capacitación porque el SAF, dentro de todo, era bastante intuitivo, y lo importante era tener la clave y que funcionara; que un tiempo ella trabajó con la clave de otra persona porque tenía que generar declaraciones, FNI y otros; que las claves desde la Fiscalía Nacional se demoran en llegar; y que no tuvo capacitación en SAF.

Claramente esta testigo no plantea que para efectuar ciertas actividades en el SAF haya necesitado de una capacitación especial, que de hecho no recibió, pero también es verdad que ella, al ingresar a la Fiscalía, necesariamente era una persona con su educación básica y media completa y con una formación universitaria completada exitosamente y coronada con un título profesional que la habilitaba a ejercer como abogado. Ello permite entender por qué tuvo inconvenientes menores para entender la mecánica y realizar actividades en la plataforma digital de contenido jurídico en comento sin una inducción previa y también permite contrastar su situación con la del acusado Vega Guerrero en detrimento del mismo.

Lo antedicho se potencia al considerar que el acusado Vega Guerrero, según lo que reiteradamente ha afirmado y figura en la documental que incorporó su



Defensa, cuenta con educación formal sólo hasta 1° medio aprobado, circunstancia que no fue controvertida por la Defensa, lo que en parte fue refrendado por la acusada del Pino Acuña al señalar, cuando declaró ante este Tribunal, que, mientras convivía con él, su cónyuge decía que no tenía 4° medio.

Así, recordaremos que el acusado Vega Guerrero afirmó al individualizarse y al declarar ante estrados que tiene hasta 1° medio y nunca ha tenido estudios de informática. No trabajó en algún fundo. Empezó a trabajar a los 17, siempre en el campo en cosechas, y después trabajó como cuatro años como apicultor. Ha trabajado en el campo, de apicultor y como chofer y operador de maquinaria pesada. Cuando fue a declarar dijo que estudió hasta 2°. Estuvo a punto de terminar 2°, pero no lo terminó. Están los certificados de estudio.

El señor Jorquera Loyola, según ya se consignó, refrendó que eso le declaró Vega Guerrero en el sumario administrativo que instruyó.

La Defensa de ese inculcado incorporó sobre este punto la prueba nominada en el auto de apertura como “Set de 10 certificados de estudios de su representado más el pantallazo del portal de certificados en línea, de 2° básico a 2° medio”, que efectivamente consiste de diez certificados anuales de estudio suscritos con firma electrónica avanzada por Raúl Alvear Guerra, jefe de la unidad nacional de atención ciudadana del MINEDUC, fechados el 10 de agosto del año 2023, en que, en suma, se certifica que Ricardo Ignacio Vega Guerrero cursó el 2° básico el año 2002, obteniendo como promedio general 4.0, siendo su situación final reprobado; que Ricardo Ignacio Vega Guerrero cursó el 2° básico el año 2003, obteniendo como promedio general 6.2, siendo su situación final promovido; que Ricardo Ignacio Vega Guerrero cursó el 3° básico el año 2004, obteniendo como promedio general 5.7, siendo su situación final promovido; que Ricardo Ignacio Vega Guerrero cursó el 4° básico el año 2005, obteniendo como promedio general 5.3, siendo su situación final promovido; que Ricardo Ignacio Vega Guerrero cursó el 5° básico el año 2006, obteniendo como promedio general 5.2, siendo su situación final promovido; que Ricardo Ignacio Vega Guerrero cursó el 6° básico el año 2007, obteniendo como promedio general 5.7, siendo su situación final promovido; que Ricardo Ignacio Vega Guerrero cursó el 7° básico el año 2008, obteniendo como promedio general 5.3, siendo su situación final promovido; que Ricardo Ignacio Vega Guerrero cursó el 8° básico el año 2009, obteniendo como promedio general 5.1, siendo su situación final promovido; que Ricardo Ignacio Vega Guerrero cursó el 1° medio el año 2010,



obteniendo como promedio general 5.3, siendo su situación final promovido; y que Ricardo Ignacio Vega Guerrero cursó el 2° medio el año 2011, obteniendo como promedio general 3.7, siendo su situación final reprobado.

A todo ello suma que la propia acusada del Pino Acuña, como más adelante se detallará, declaró ante estrados que su cónyuge Ricardo Vega realizaba acciones para como suplir su inferioridad por no tener 4° medio y que él le decía que no tenía 4° medio.

Ello también guarda relación con lo razonado por el testigo señor Jorquera Loyola en cuanto a que desestimó lo que ante él declaró Vega Guerrero, entre otros motivos, debido a que constató durante su investigación que se efectuaron recalificaciones de delitos en las plataformas informáticas de la Fiscalía, cambiando delitos de conducción en estado de ebriedad a delitos amenazas, lesiones leves y hurto de hallazgo, que precisamente son delitos de pena baja cuyos archivos provisionales no requieren de aprobación por parte de la Fiscalía Regional, destacando además que el último de esos ilícitos es muy poco conocido, circunstancia que lo llevó a concluir que quien efectuó esos cambios debió ser alguien que al menos contaba con conocimientos jurídicos especializados.

En relación con ello, recordaremos que el señor Jorquera Loyola manifestó que las recalificaciones que constató fueron de conducción en estado de ebriedad a amenazas, otro a lesiones leves y otro a hurto de hallazgo, que son tres delitos que nunca se envían a la Regional. Es imposible que una persona con 2° medio, que no tiene conocimiento de derecho ni de los criterios regionales y nacionales, sepa que precisamente debe recalificar esos delitos para que nadie lo descubra. Además, acá se cambió una calificación jurídica por otro delito, y hurto de hallazgo no es un delito común, implica tener conocimiento jurídico. Además se deben conocer los reglamentos internos, qué causas que van a archivo van a revisión del fiscal regional, y precisamente esos tres delitos no van a revisión. Por eso concluyó que debió hacer eso una persona de adentro. Por ejemplo, la niña que atiende en el mesón no lo sabe. Sólo los abogados asistentes y los fiscales.

Complementando lo precedente, en el hecho que ahora revisamos, como más adelante se explicará, se probó suficientemente que uno de los cambios que se efectuaron en la plataforma SAF del Ministerio Público precisamente fue la modificación de uno de sus registros, en que específicamente se mutó un delito de conducción en estado de ebriedad a hurto de hallazgo. Adicionalmente, en el hecho



singularizado con el número 2.10 en el noveno considerando de este fallo, también se estableció un cambio de ese tipo, específicamente del delito de conducción en estado de ebriedad al delito de amenazas simples, según también más adelante se consignará.

Habida cuenta de lo anterior, comparte este Tribunal lo razonado por el señor Jorquera Loyola en los términos que se acaban de exponer, dado que efectivamente no resulta esperable que una persona sin conocimientos jurídicos formales, como es el caso del acusado Vega Guerrero, maneje que los delitos de amenazas simples y hurto de hallazgo, en especial el último, por la pena que la ley les apareja, son asimilables al delito de conducción en estado de ebriedad en el contexto del archivo provisional y los requisitos del mismo contenidos en el artículo 167 del Código Procesal Penal. Se trata así ésta de una circunstancia fuertemente indiciaria que refuerza lo declarado por Ricardo Vega Guerrero en la audiencia de juicio oral.

Siguiendo con la exposición de las corroboraciones de dicha declaración que debidamente se demostraron, destaca que tanto el imputado de la causa por manejo en estado de ebriedad que revisamos, que, cabe reiterar, es la RUC N° 2000145861-3, como los imputados de otras causas ventiladas en este proceso, a saber, Samuel Alarcón Urrutia según lo aportado como testigos de oídas por Valesca Alarcón Urrutia y Luis Gutiérrez Gutiérrez, Elías Apablaza Vásquez y Ralph Veloz Rodríguez, mencionaron que cuando Ricardo Vega Guerrero los contactó para ofrecerles terminar sus causas a cambio de dinero, les comentó que esa conducta la estaba realizando conjuntamente con Claudia, con su señora que era fiscal o con un fiscal o persona que tenía en la Fiscalía. De esa manera, incluso al momento efectuar esas ofertas ilícitas, Vega Guerrero ya había revelado consistentemente que estaba actuando de consuno con la acusada del Pino Acuña.

En efecto, recordaremos primero que Rodrigo Adolfo Guerra Morales señaló al respecto que cuando Ricardo lo contactó, le hizo la oferta y le dijo que lo pensara, que fuera rápido para finiquitar el tema, que iba a demorar un par de semanas o un mes pero su causa quedaría en nada. Sólo le dijo que la señora podía hacer el tema porque trabajaba en Fiscalía, la señora era Claudia. Le decía que ella podía hacer el trámite y que quedaría en nada.

Por su parte, Valesca de Las Mercedes Alarcón Urrutia testificó que conoció a Claudia como Claudia Giraldo por una página de Facebook por permuta de ropa.



Fue más menos como dos o tres veces a la casa de ella. La primea vez compartió con Claudia y su esposo. En el domicilio de Claudia sólo compartió con Claudia y su esposo y después conoció al hermano de Ricardo, Andrés, con los mismos apellidos. Sobre Andrés, tuvieron una relación sentimental que duró como un mes, el mismo año, fue como de mayo a junio o mediados de julio del primer año de pandemia. Su hermano es Samuel Alarcón Urrutia. Sí sabía que su hermano fue detenido y que le quitaron su licencia, pero no le preguntó de ahí nada más. Supo que a su hermano lo detuvieron pero no recuerda cuánto tiempo antes. Sobre la razón de su detención, parece andaba en estado de ebriedad conduciendo, cree, no era la primera vez que lo habían detenido. Con su hermano nunca hablaron del tema, pero cuando Andrés le señaló que iba a denunciar, le pidió a su hermano que dijera la verdad o quedaría la embarrada. Su hermano no recuerda bien qué le dijo, pero sí que iba a quedar la cagada. Ahí su hermano recién le dijo que había pagado para que le devolvieran su licencia y que si pasaba algo iba a perder su licencia y no iba a poder seguir trabajando. Le dijo que fue el esposo de Claudia quien lo llamó por teléfono y le dijo que si no le pagaba por la licencia, se iba a ir preso. No le mencionó a otra persona. Sobre si recuerda lo que declaró en la Fiscalía sobre esto, sí. Dijo lo que hablaron con su hermano, quien le dijo que iba a quedar la cagada porque él había pagado por la licencia y que Ricardo se comunicó con él y le pidió una cantidad de plata. Sobre las otras cosas que dijo sobre ello, no lo recuerda. Luego el Ministerio Público efectuó el ejercicio del artículo 332 para refrescar la memoria de la testigo, donde ella leyó que su hermano le dijo que iba a quedar la cagada porque él había pagado dado que le dijo ella que parece a Claudia del Pino la andaba siguiendo la Policía de Investigaciones por las licencias y él le dijo que Claudia y Ricardo le habían cobrado dinero porque si no se iba a ir preso y quedaría la cagada. Tras esa lectura, la testigo afirmó que ahora recordaba eso que declaró textualmente.

El ya citado comisario de la Policía de Investigaciones Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez señaló que, con los antecedentes que aportó Valesca Alarcón sobre la identidad de su hermano y que él dijo que iba a quedar la cagada porque había pagado por el archivo y cierre de las causas, contactaron a Samuel Alarcón Urrutia. Le tomaron declaración a mediados de agosto, el 12 o 13 de agosto del 2020. En calidad de imputado le dieron cuenta de sus derechos por los hechos de la investigación que se llevaba a cabo contra Claudia y Ricardo por cierres o archivos de causas por manejo en estado de ebriedad, donde él habría sido uno de los



beneficiados al que le archivaron una causa por manejo en estado de ebriedad. Les dijo, colaborando con la investigación, que trabaja en el norte y producto de que conduce maquinaria pesada requiere de licencia profesional y por eso era para él muy relevante que no le suspendieran o quitaran la licencia. Por eso mismo, lo detuvieron por manejo en estado de ebriedad en febrero del 2020 y producto de eso mismo, en marzo aproximadamente del 2020, se comunicaron con él por su señora para darle cuenta de la detención que había tenido por manejo en estado de ebriedad. Lo llamaban de la Fiscalía y le dieron una serie de información sobre la causa en su contra. Posteriormente, en abril del 2020, tomó contacto con una persona que le informó respecto a detalles de su causa, detalles más finos con respecto a la fecha de la detención, lugar de detención, domicilio, teléfono, alcoholemia y también, como en los demás casos los antecedentes que mantenía anteriormente. Esta persona que lo llamaba, cree, decía que lo llamaba de la Fiscalía o del Tribunal. Esa persona quería ver la posibilidad de si se podía ayudar o si quería aceptar ayuda para subsanar esa situación de la causa de manejo en estado de ebriedad, si estaba dispuesto a aceptar y, por los antecedentes que le entregó, le pidió se juntaran. Indicó que se juntaron en el patio del Easy de Linares, donde se acercó una persona que llegó en una moto XR250 blanca con rojo, relativamente bajo, contextura gruesa, moreno, que le relató un poquito sobre lo que a él le había ocurrido con el manejo en estado de ebriedad y dentro de eso sacó un papel donde tenía escritos todos los antecedentes sobre su detención y eso le dio credibilidad, le contó todos los antecedentes que mantenía, lugar de detención, alcoholemia, sus antecedentes, y le dijo que trabajaba con un familiar o prima en la Fiscalía que podía ayudar. Con los antecedentes que le dio y lo verosímil que era, aceptó la oferta y llegó a un acuerdo de \$500.000 cree, que tenían que ser pagados al contado y dentro de ese relato dijo que llegó a un acuerdo primero de \$300.000 y después de \$200.000. Ese mismo día volvió a tener un contacto, donde aceptó la oferta, consiguió el dinero y se contactaron después para entregar el dinero frente a la Iansa. Se juntaron, le entregó el dinero en efectivo y la persona le entregó un documento que se llamaba archivo provisional, donde le dice que la causa está archivada, que no hay de qué preocuparse. Guardó el documento. Posteriormente se retiraron y no tuvieron más contacto. Después, esto pasó en abril, en mayo volvieron a tener un contacto porque el acuerdo era que le entregaba \$300.000 en efectivo y después los \$200.000 cuando a él le pagaran en mayo. Se comunicaron telefónicamente, le llevó los \$200.000



adicionales y acordaron entregarlos en Chacabuco con Letelier. Él llega, la persona recepcionó el dinero y le pidió que no lo jodieran ni metieran en problemas y Ricardo le dijo que no se preocupara. En su oportunidad su hermana le pidió que fueran a buscar un vehículo a la casa de una amiga donde compartió, la trasladó y al llegar a la casa en Las Vertientes, se dio cuenta que la persona con quien hizo la movida recibió a su hermana y este señor la llamó por teléfono, Ricardo, y le preguntó qué hacía ahí y le respondió que su hermana era Valesca, a lo que Ricardo le comentó que era chico Linares. Se le hizo Samuel Alarcón un reconocimiento fotográfico sobre la persona a la que entregó el dinero y contactó, y reconoció a Ricardo Vega. Sobre cómo dijo Samuel guardaba o denominaba a Ricardo, policía Cristian parece, o Cristian.

Adicionalmente y corroborando lo aportado por la señora Alarcón Urrutia al refrendar el contacto que mantuvo con los acusados y Nelson Vega Guerrero, el señor Gutiérrez Gutiérrez señaló, cuando el Ministerio Público le exhibió la prueba singularizada en el auto de apertura como “Nueve fotografías aportadas por la testigo Valesca Alarcón Urrutia en las que se aprecia a Claudia del Pino, Ricardo Vega, Nelson Vega y Valesca Alarcón”, que esas imágenes las aportó Valesca sobre la relación que tenía con Claudia y Ricardo y se les ve en una fotografía. En otra se ve a Nelson Vega compartiendo un asado aparentemente en Linares y en otras a Nelson Vega con Valesca y en otras a Nelson Vega, Valesca, Ricardo y Claudia.

Cabe consignar que en esas imágenes efectivamente se observan los rostros de los acusados y de la señora Alarcón Urrutia.

En la misma línea, la Fiscalía mostró a este testigo la prueba denominada en el auto de apertura como “Conversaciones de WhatsApp aportada por la testigo Valesca Alarcón Urrutia desde el 28 de mayo de 2020 a 24 de junio de 2020” de la que incorporó una página, y al observarla el señor Gutiérrez Gutiérrez refirió que es la conversación de Valesca con su hermano Samuel del 28 de mayo del 2020 desde las 7:53 am sobre ir a buscarla para llevarla a la casa de una fiscal por su auto. El último mensaje es de las 11:20 am.

Refrendamos que se trata de una hoja con una columna de fechas que en su mayoría corresponden al 28 de mayo del año 2020, otra de horas que en su mayoría van de las 07:53 a las 11:20, y a otra con textos después de las palabras “Samuel 2” y “Vale”, en que se trata el tema mencionado por la señora Alarcón Urrutia y el testigo en comentario



Prosiguiendo, el testigo Elías Rolando Apablaza Vásquez manifestó que a él lo contactaron por teléfono porque tuvo un problema con una conducción en estado de ebriedad el 25 de febrero del 2020. Después, como a fines de marzo o principios de abril del 2020, lo llamaron por teléfono y le dijeron Elías Apablaza, que fue sorprendido por conducción en estado de ebriedad y respondió que esperaba que lo llamaran de Fiscalía. Le dijeron que estaba afuera el joven. Él tenía sus documentos y estaba a punto de subirlos al sistema para ser llamado. Le preguntó si sabía las consecuencias que tenía haber hecho eso y le dijo que tenía la solución, que podía eliminarle todos los documentos del sistema y no iba a pasar nada y que le cobraba \$400.000 para eliminarlo del sistema. Le dijo que él trabajaba con su señora, que era fiscal, que ella tenía sus documentos listos para subir al sistema y que ella se los eliminaba, que no los subía al sistema si le cancelaba los \$400.000.

El testigo Ralph John Veloz Rodríguez declaró, siempre en lo atinente, que por el año 2019, por mayo, lo pararon y le hicieron un examen de alcoholemia o drogas y se reflejó que manejaba bajo los efectos del alcohol. Por el 2020 recibió una llamada donde le indicaba un hombre que tenía datos sobre él, que lo llamaba directamente de la Fiscalía. Le comenzó a decir que lo detuvieron en tal fecha bajo los efectos del alcohol, le dio el color de su auto. Le dijo sus niveles de alcohol, todo lo que pasó esa noche. Esta persona primero lo llamó y al rato lo llamó de nuevo y le dijo que lo llamaba de Fiscalía. No le dio su nombre. Fue así como se juntaron un domingo ahí mismo en la avenida León Bustos. La persona le dijo que lo podía ayudar. Le dijo que le podían quitar la licencia por este acto, por este delito. Se juntaron un domingo, conversaron. Le dijo la persona que tenía alguien dentro de Fiscalía que lo podía ayudar, un fiscal que lo podía ayudar a costa de un monto de dinero. Le dijo que estaba un poco gastado y le podía ofrecer \$200.000. Le dijo que no. Le parece hizo una llamada y la persona le dijo que no y que para ayudarlo eran \$300.000. Esa persona le dijo que tenía a alguien en la Fiscalía, no que trabajaba él en la Fiscalía, y que esa persona era un fiscal.

En igual sentido, el acusado Vega Guerrero manifestó ante estrados que al contactar a imputados por conducción en estado de ebriedad para realizarles el ofrecimiento ilícito en comento, se identificó ante ellos como Cristian, aseveración que fue ratificada por testigos que depusieron en la audiencia. Además, uno de ellos, Diego Ignacio Vásquez Riquelme, afirmó que, buscando a ese tal Cristian, tomó contacto con la acusada del Pino Acuña y relató que en definitiva ella entendió de



inmediato que Cristian era un nombre utilizado por Ricardo Vega Guerrero, lo que nuevamente es fuertemente indiciario de que del Pino Acuña, en contra de lo que manifestó en la audiencia y durante la investigación, estaba en conocimiento de aquellas ofertas ilícitas que efectuaba su cónyuge.

Pormenorizando, recordaremos primero que Ricardo Vega Guerrero declaró al comienzo del juicio que su cónyuge sacaba la información del computador y escribía en un cuaderno y le pasaba a él un papel con el nombre de la persona, los grados alcohólicos y el número de teléfono y él lo llamaba y le decía que se llamaba Cristian, que había una movida y si le interesaba.

El testigo Enrique Leopoldo Torres Valenzuela señaló que la persona que lo contactó le dijo que si quería recuperar su licencia tenía que pagar \$500.000. Le dijo que le iban a quitar la licencia 5 años. La persona que lo llamó era un hombre. Dijo que él tenía un amigo en la Fiscalía y ese amigo le podía archivar la causa. A él le interesó porque él se movía con su licencia. El contacto de la persona lo archivó y le colocó Cristian policía. Sobre su celular, guardó el contacto de esta persona como Cristian policía. Eso se vio cuando declaró y lo entregó.

El testigo Ralph John Veloz Rodríguez manifestó que con la persona que lo contactó telefónicamente acordó juntarse para tener más detalles de esto. Se juntaron un domingo, no recuerda el día ni la hora. Conversaron. Físicamente la persona habrá tenido 1,60 o 1,65 metros, piel un poco oscura, llegó en una moto roja con negro. Era de contextura medianamente gruesa. De unos 30 a 35 años. Tenía un casco, andaba en moto. Si lo viera lo podría reconocer. Lo reconoce acá, parece es él, sí. Está allá en la punta, al final (allí está sentado e indica al acusado Vega). Esta persona le dijo que se llamaba Cristian. Le dijo esa persona que tenía alguien dentro de Fiscalía que lo podía ayudar a costa de un monto de dinero. En ese minuto la persona le dijo que se llamaba Cristian. Le guardó el número y le puso Cristian.

El comisario de la Policía de Investigaciones señor Gutiérrez Gutiérrez, como ya consignamos, señaló que Samuel Alarcón Urrutia, al declarar ante él en la investigación, manifestó que guardaba o denominaba a Ricardo como policía Cristian parece, o Cristian.

El testigo Diego Ignacio Vásquez Riquelme refirió que tras su detención, pasó eso y un día lo contactaron por teléfono, lo llamaron y le dijeron que podían solucionarle el tema de la licencia, como esconder lo que había pasado con lo de la licencia. Se juntaron un día y él accedió. Lo contactaron con una llamada por



teléfono. El que lo llamó era un hombre. Le explicó ese día que había un costo de esto, le pidió y le dijo que podían hacer esto por el costo de \$400.000 Guardó su teléfono como Cristian fiscal porque dijo que lo llamaba de la Fiscalía o quizás le dijo que era fiscal y dijo que tenía su nombre y su información. Después se juntaron un día en Ignacio Chacón, le entregó la plata y no se contactaron más.

Agregó que ese hombre después le devolvió los \$400.000. Sabía dónde vivía el hombre. Recorre hartos esos mismos lados porque vive cerca y vio la moto y el auto de él. Fue un día que vio que esto había pasado a mayores, que se supo todo y pasó por la casa de él a preguntar por Cristian y no estaba. Salió la pareja debe haber sido y le dijo que ya no vivía con él y que no estaba y le pidió a la pareja que le dijera que Diego Vásquez lo buscaba.

Al Tribunal aclaró que cuando fue a la casa donde sabía él vivía para hablar con él, se encontró con quien pensó era su pareja y ahí preguntó por Cristian, siempre se llamó Cristian para él, hasta hoy. Ahí la pareja que estaba ahí le dijo que ya no vivía con él y le pidió que le dijera que Diego lo buscaba. Sí recuerda que cuando fue a la casa del hombre, preguntó por Cristian.

Al Ministerio Público respondió que cuando fue a la casa de Ricardo, él quedó afuera de la reja y ella en la puerta, a unos 6 o 7 metros de distancia. Le preguntó si ahí vivía Cristian y ella le dijo que ya no vivía con ella. No le respondió quién es Cristian o no conozco ningún Cristian.

El acusado Vega Guerrero también refrendó ese encuentro al declarar en la audiencia que, sobre el caso de Diego que, después que allanaron la casa, los llamaron a declarar y ahí él (Diego) llegó hartas veces a la casa, él ya no vivía en la casa. Claudia lo llamaba y le decía que andaba ese gallo y que el cabro quería la plata. Claudia le pasó el dinero, 400, se los pasó en una cuota y él lo devolvió a Diego Vásquez y Diego ese mismo día cree fue a la Policía de Investigaciones a decir que le devolvió la plata.

Adicionalmente, sobre este encuentro de Vásquez Riquelme con la acusada del Pino Acuña, conviene hacer presente que, dentro de su extensa declaración, el señor Jorquera Loyola refirió que, durante el sumario administrativo que instruyó en contra de Claudia del Pino Acuña, tomó declaración a la misma. A esa declaración también hizo alusión del Pino Acuña ante estrados, pues indicó que Mauricio Jorquera le tomó declaración en el sumario y que eso está firmado por ella. En concordancia, dentro del también extenso expediente de sumario administrativo que



el Ministerio Público incorporó, que en el auto de apertura se nominó como “Copia Sumario administrativo FRM – IA N° 78-2020 junto a resolución FN/MP 58-2021 del fiscal nacional mediante la cual se confirma la sanción de remoción a Claudia del Pino Acuña”, rola, en su foja 93, una declaración prestada por Claudia Andrea del Pino Acuña el día 5 de octubre del año 2020. En ella, entre otras menciones, la declarante planteó que “transcurrido una semana desde que se allanó mi domicilio y después del 20 de agosto del presente año, estaba sola en mi casa con mis 2 hijos y mi marido se había ido de mi casa, esto fue el 05 de agosto y se mantiene al día de hoy, yo estaba en el dormitorio que da al antejardín y veo un sujeto, Salí a ver quién era y el sujeto me dice que buscaba al dueño de la moto que estaba en mi casa y que necesitaba hablar con él, me dice que se llamaba Diego Vásquez y no me dice nada más ya que tenía que hablar solo con mi marido. Como él ya no vivía en mi casa, solo le dije que lo estaba buscando un sujeto en una de las oportunidades que fue a mi casa”. Agregó más adelante que “desconozco cualquier actividad irregular de mi marido, sólo sé que existe una denuncia”.

De esa manera, en dicha instancia administrativa del Pino Acuña, si bien no indica que Diego Vásquez preguntó puntualmente por Cristian, sí corroboró el encuentro, coincidencia que refuerza el mérito de lo aportado por el señor Vásquez Riquelme. Además, allí manifiesta desconocer cualquier actividad irregular de su marido, por lo que difícilmente pudo saber en dicho encuentro que Vega Guerrero se hacía llamar Cristian ante los imputados que contactaba, lo que choca diametralmente con lo expuesto por el testigo Vásquez Riquelme en los términos ya extractados.

Otro elemento de convicción que consolidó lo sostenido por el acusado Vega Guerrero en lo analizado fue que, en su declaración ante estrados, sostuvo que, en relación con el caso de Enrique Torres Valenzuela, a él no se le hizo nada. Lo llamó y al último dijo que no. Era de Colbún parece. Usó la misma modalidad de antes, obtuvo los datos de Claudia y lo contactó. Le ofreció el negocio. Él no tenía la licencia, se la habían quitado. Claudia fue a la Fiscalía un día, sacó la carpeta y en la carpeta no estaba la licencia y por eso no se hizo el negocio, porque él quería la licencia de vuelta.

En conjunción con ello, Enrique Leopoldo Torres Valenzuela también declaró en el juicio y señaló (más adelante se extractará su declaración completa) que tras su detención por haber sido sorprendido conduciendo en estado de ebriedad,



lo llamó un señor diciéndole que sabía todos sus datos. Sabía su nombre, lugar de detención, todo lo que contó antes y le preguntó si quería recuperar su licencia. La persona le dijo, que lo llamó de la Fiscalía, se supone era algo serio. Le dijo que si quería recuperarla, tenía que pagar \$500.000. La persona que lo llamó era un hombre y dijo que tenía un amigo en la Fiscalía y ese amigo le podía archivar la causa. A él le interesó porque él se movía con su licencia. El contacto de la persona lo archivó y le colocó Cristian policía. Después se juntó con esta persona, a los días. Le dijo que si le entregaba la plata, él le podía hacer el trámite y le respondió que sin que no tuviese algo concreto no le podía dar la plata. Con algo concreto se refería a que le entregaran la licencia y un certificado que acreditara que era legal.

Añadió que después llamó a ese hombre para saber qué pasaba y le dijo que su causa estaba archivada, pero que no tenía su licencia y le respondió que sin licencia no había dinero. Después lo llamó en varias ocasiones y nunca más le contestó.

De esa manera, ambos coinciden en que inicialmente Vega Guerrero efectuó a Torres Valenzuela la oferta de archivar la causa, precisando el segundo que dicha oferta contemplaba devolverle su licencia de conducir. Ello supone que Vega Guerrero no sabía en ese momento que no podría acceder a dicha licencia.

Luego Vega Guerrero declara que, para concretar la oferta, Claudia fue a la Fiscalía un día, sacó la carpeta y en la carpeta no estaba la licencia y por eso no se hizo el negocio.

Sobre esa carpeta, el comisario de la Policía de Investigaciones Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez confirmó que fue incautada en el domicilio de los acusados.

En efecto, dicho funcionario señaló en relación con ello que fueron a Rengo con el fiscal y el colega Cristian Bahamondes y entrevistaron a Nelson Vega, quien aportó antecedentes que eran en primera instancia bien vagos pero posteriormente hizo alusión a la identidad de personas que daban cierto indicio de la comisión de algunos ilícitos. En el relato que recuerda entregó Nelson, dio cuenta de que su hermano le señaló que su cuñada, Claudia del Pino, junto a él, Ricardo, hacían gestiones para arreglar causas en los delitos de manejo en estado de ebriedad y dentro de esto, que cobraba por hacer estas movidas entre paréntesis y daba mención de tres personas, entre las cuales recuerda un señor de una botillería, otro de una verdulería y otro de Longaví y mencionó que este señor, dentro del pago, consideró un cordero para un asado, lo que dio cuenta de cómo validar esa información. Indicó



que había mantenido una relación sentimental con la Valesca Alarcón y al hermano de ella le habían ayudado a cambio de dinero por archivar o borrar la causa por un manejo en estado de ebriedad. Siendo un poco verosímil lo que indicó Nelson, en presencia del fiscal, validaron la información de que había efectivamente datos que daban cuenta de hechos irregulares. Posterior a esa declaración, se coordinó con el fiscal una orden judicial. Eso la primera semana de agosto. La declaración fue a fines de julio del 2020 cree, el 30.

Recordó que el 3 de agosto del 2020 se gestionó judicialmente una orden de entrada y registro al domicilio de Claudia del Pino. Se realizó en la villa Las Vertientes, pasaje Estero la Gloria, donde Claudia del Pino compartía con Ricardo Vega. Se gestionó y se ingresó al domicilio dando cuenta a los habitantes, que eran Ricardo Vega y Claudia del Pino, que se ejecutaba la orden de entrada, registro e incautación de documentos y equipos tecnológicos. Se entró, se registró el domicilio y dentro de las diligencias que se hicieron, se incautó un teléfono a Ricardo Vega, otro teléfono asignado a Claudia del Pino, cinco carpetas de la Fiscalía, un set con causas vigentes asignadas a del Pino, tres cuadernos con anotaciones manuscritas, dos computadores. Se solicitó junto con la incautación el acceso a los teléfonos, que entregaran las claves o patrones y en su momento no accedieron a la entrega porque recuerda que del Pino dijo que los teléfonos eran de Ricardo y éste, silente no accedió a la entrega de los patrones o del acceso al teléfono, así que sólo se incautaron. Cuando llegaron al domicilio, en ese momento estaban Vega, del Pino y dos niños hijos de del Pino. Cuando llegaron, les dieron cuenta y del Pino reaccionó alterada, que querían revisarle su bolso y se alteró en extremo, a él lo gritoneó y le hicieron ver que era una orden judicial y frente a la presión, Ricardo entregó el teléfono pero bien silente, y del Pino muy alterada, iba al baño, salía y entraba. Del Pino no se desmayó o tuvo alguna suerte de desvanecimiento. Cuando solicitó las claves de los celulares, del Pino no los facilitó, dijo que los teléfonos eran de Ricardo y ella le dijo a Ricardo que no entregara las claves. Ricardo estaba en silencio y bien entregado a las circunstancias. Las especies incautadas fueron dos teléfonos, uno rosado que manejaba Claudia, uno celeste que manejaba Ricardo, las cinco carpetas de la Fiscalía, los dos notebooks Lenovo, uno gris con plomo y otro negro, tres cuadernos con letras manuscritas que tenían números de causa, RUC, y porcentajes escritos, como las alcoholemias. Dentro de eso tenía un set con causas vigentes de Claudia y dentro de eso posteriormente se dieron cuenta de una causa



que termina en 88-9, cree de un señor que luego salió en la investigación, Enrique Torres, que se dieron cuenta era por un manejo en estado de ebriedad que mantenía.

Precisó que, sobre la causa de Torres, es una de las carpetas que incautaron el 3 de agosto del 2020 cuando entraron a la casa de Claudia y cuando se incautó esa carpeta, no había licencia de conducir. O estaba extraviada o algo pasó en el intertanto. Por lo que indagaron, esa causa se había archivado y la tenía asignada Claudia del Pino. Era la 88-9 la causa de Torres que fue incautada del domicilio de del Pino y estaba en el dormitorio, en un estante.

En relación con dicha diligencia, el Ministerio Público exhibió al señor Gutiérrez Gutiérrez la prueba llamada en el auto de apertura como “Doce fotografías correspondientes al domicilio de Claudia del Pino Acuña y Ricardo Vega Guerrero”, y al observarlas señaló que corresponden a la villa Las Vertientes, a la casa de Claudia del Pino, tomadas el 3 de agosto, el día del allanamiento; a un estante donde se ven archivos, cree que de ahí consiguieron un par de carpetas y no sabe si ahí estaba el set de causas vigentes; a donde estaban las carpetas, esa es la habitación de Claudia donde maneja un ropero con documentos y ropa, las carpetas están en el lado derecho, al rincón derecho, alcanza a ver tres carpetas; a carpetas de la Fiscalía, ve tres; a otras dos carpetas; al momento cuando se juntó el total de las cinco carpetas incautadas en la casa de Claudia, con los RUC que lee, 1800790608-7, 1900283381-9, 1900821076-7, 2000319388-9 y 1800751929-6, añadiendo que una de esas carpetas es de una de las personas a las que Ricardo Vega contactó, donde están todos los antecedentes de la detención, todo lo que involucra esa causa, que es la de manejo en estado de ebriedad de Enrique Torres, la terminada en 88-9; a un set de causas vigentes que tenía asignada Claudia del Pino y dentro de ello, registros manuscritos y cree en el registro 640 y tanto aparece el nombre de una persona que después les hizo vincular a Diego Vásquez, su manejo en estado de ebriedad, que está escrito con letra de imprenta Diego Vásquez, se fijó inclusive aparte, se dieron cuenta de que en esos registros estaban con letra de imprenta y escritas las alcoholemias, los manejos en estado de ebriedad que manejaban algunos, lo que les llamó la atención, y adentro de eso estaban los tres cuadernos con las causas con detalles por manejo en estado de ebriedad; al teléfono de Ricardo, que debe ser celeste, que solicitaron a Ricardo Vega, cree un A70; al que debería ser el teléfono rosado asignado a Claudia del Pino, y cuando los incautaron, los dos teléfonos tenían patrones de seguridad, les solicitaron eso en su momento y se negaron a



entregarlos, Claudia le entregó la responsabilidad a Ricardo, decía que los teléfonos eran de él y que ella no tenía teléfono; al notebook Lenovo gris; a esta carpeta física que tenía Claudia del Pino, pero no tenían claridad de por qué la tenía ella en su casa, en su momento querían buscar algo asociado con pagos, boletas, no con carpetas pero luego, cuando se le hicieron las consultas al Ministerio Público por esas causas, se cruzó la información sobre el archivo de la causa de Enrique Torres

También la Fiscalía mostró a este testigo la prueba descrita en el auto de apertura como “NUE 5948278: Carpeta con logo de la fiscalía regional del Maule RUC N° 2000319388-9”, sobre la que señaló que él inicia la NUE y es una carpeta de la Fiscalía Regional del Maule con el RUC 2000319388-9, caso conducción en estado de ebriedad, recepción 24 de marzo del 2020. Es una causa de Enrique Torres Valenzuela, detenido por manejo en estado de ebriedad el 23 de marzo del 2020, viene el relato de la detención. Esta carpeta física, cuando la encontró en el domicilio, tenía esta misma documentación, el parte policial, la fotocopia de la licencia de conducir, el alcotest, lectura de derechos, declaración de los aprehensores, los datos de atención de urgencia, la solicitud de alcoholemia, el extracto de filiación de Torres Valenzuela, el oficio al Servicio Médico Legal que da cuenta de la extracción sanguínea a Torres el 23 de marzo del 2020 dirigido al Servicio Médico Legal.

Expuesto lo precedente, resulta que lo planteado por el acusado Vega Guerreo guarda total lógica con lo depuesto por el señor Torres Valenzuela y con el hecho de que la carpeta de la causa RUC N° 2000319388-9 haya sido materialmente encontrada en la casa que compartía con la acusada del Pino Acuña, pues si hubiese tomado conocimiento antes de la existencia de dicha carpeta, por ejemplo y como planteó la Defensa de del Pino Acuña, porque ella, en el ejercicio de sus funciones, previamente ya la había llevado a su casa para revisarla y Vega Guerrero aprovechó esa circunstancia para examinarla y obtener los datos de Torres Valenzuela, el primero no habría ofrecido al segundo devolverle su licencia de conducir, pues ya habría sabido que la misma no estaba en dicha carpeta.

Vega Guerrero también señaló que tras la oferta que efectuó a Torres Valenzuela, que éste precisó contenía la devolución de su licencia, del Pino Acuña, dado el acuerdo previo al que habían arribado, trajo desde la Fiscalía la causa de ese imputado, pero allí no estaba la licencia de conducir demandada por Torres Valenzuela. Ello también se condice con que dicha carpeta efectivamente, como



estableció el señor Gutiérrez Gutiérrez la evidencia material que acreditó, estaba en la casa que los acusados compartían y en particular con que Torres Valenzuela haya señalado que después de habersele formulado la mentada oferta, llamó a quien reconoció en la audiencia como el acusado Vega Guerrero y le contó que su causa estaba archivada pero que no tenía su licencia.

En lo relacionado con el vínculo matrimonial a la época existente entre ambos acusados y valiendo esto para los demás hechos en que se afirma tal relación, además de lo reconocido en ese sentido por Claudia del Pino Acuña y Ricardo Vega Guerrero ante estrados, la Fiscalía incorporó la prueba que en el auto de apertura se denominó como “Certificado de matrimonio de Claudia del Pino Acuña Ricardo Vega Guerrero”, que corresponde a una copia de un certificado de matrimonio expedido por el servicio de Registro Civil e Identificación, con firma electrónica avanzada, en que se lee que ambos se casaron el 27 de abril del año 2018.

Siguiendo con el presupuesto fáctico que tuvimos por acreditado consistente en que, consecuentemente y con aquella información que le entregó Claudia del Pino en su poder, Vega Guerrero contactó a Guerra Morales y le solicitó \$300.000 a cambio de que Claudia del Pino Acuña terminara la referida causa, a lo que Guerra Morales accedió, pagando posteriormente dicha suma a Vega Guerrero, tras lo cual Pino Acuña entregó a Guerra Morales, por intermedio de Vega Guerrero, un documento, recordaremos que en sus declaraciones, que ya extractamos, el acusado Vega Guerrero y Rodrigo Adolfo Guerra Morales estuvieron contestes en ello.

Destacable es que el último se trata de un testigo que reconoció hechos que le podrían ser perjudiciales y del cual ninguna posible animadversión hacia los acusados o ganancia secundaria para faltar a la verdad siquiera se insinuó por las Defensas.

Sobre la generación por parte de la acusada del Pino Acuña de la información y del documento que entregó al acusado Vega Guerrero para que a la vez lo hiciera llegar a Rodrigo Adolfo Guerra Morales, cabe recordar lo recién expuesto en relación con el modus operandi que tuvimos por debidamente acreditado y añadir que el documento al que se alude es el que Rodrigo Adolfo Guerra Morales reconoció ante estrados y que en el auto de apertura de juicio oral se denomina como “NUE 5948291 correspondiente a un documento de la Fiscalía Local de Linares, Decisión de archivo provisional de fecha 28 de marzo de 2020”, mismo que, como también ya se explicitó, en suma se trata de un instrumento



asimilable a una decisión de archivo provisional del Ministerio Público extraíble desde los sistemas informáticos de dicha institución.

Ahora, en lo tocante a la consecuente conducta desplegada por la acusada del Pino Acuña consistente en que, contra el mérito de la causa, con fecha 28 de marzo del año 2020 archivó provisionalmente la misma y cambió en un registro del SAF la calificación jurídica de conducción en estado de ebriedad a hurto de hallazgo, obstaculizando con ello gravemente la investigación, todo ello resultó debidamente establecido por lo aportado por la testigo Karem Silvana Torres de La Fuente con la exposición revestida de los atributos que ya destacamos y respecto de la cual damos acá por reproducida la primera parte de su declaración y las aclaraciones que aportó, porque ya fueron extractadas al analizar los hechos relacionados con la causa RUC 1900060766-8.

Sin perjuicio de ello, en lo atinente a los presupuestos que ahora revisamos, la señora Torres de La Fuente, al serle exhibidas las pertinentes fotografías del que se llamó en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA”, que corresponden a las que van de la N° 75 a la N° 90, señaló que la primera corresponde a una pantalla de tramitación de caso del SAF, una causa asignada a Patricia Spiess, del RUC N° 2000145861-3, causa vigente por manejo en estado de ebriedad. Luego ve la pantalla de tramitar caso, del mismo RUC, y después la historia del caso del RUC y la decisión marcada es una de archivo provisional, digitado el 28 de marzo del 2020. Arriba de lo marcado se ve la comunicación de la víctima, dos archivos provisionales más, otra comunicación y una revocación de término. Eso es extraño pero si hubo alguna anulación puede darse. Cuando una causa está terminada puede volver a la vigencia anulando la actividad o con la actividad revoca causa de término. Luego ve una pantalla SIGE donde se solicita archivo provisional en la causa terminada en 861-3, solicitada por Claudia del Pino el 27 de marzo del 2020, causa del imputado Rodrigo Guerra, un archivo sin consulta. Como movimientos, se solicitó el archivo provisional, luego se ejecutó por el proceso masivo, hay un archivo provisional realizado de madrugada, luego otro archivo provisional el 31 de marzo en horario hábil, la comunicación a la víctima en horario nocturno, después otro archivo en abril de madrugada y la nueva comunicación a la víctima en la madrugada. Como usuario solicitante de las decisiones de archivo provisional aparece Claudia del Pino Acuña. Luego ve una pantalla también del RUC que



termina en 861-3, es la decisión de término archivo provisional, la fecha de la decisión es el 28 de marzo del 2020 y aparece como ejecutando la decisión la cuenta de F703CdelPino. Luego ve un escrito de decisión de archivo provisional del mismo RUC, del imputado Rodrigo Guerra, fechado el 28 de marzo del 2020. Este documento aparece en SAF, allí tiene que quedar la actividad y el documento, y también en SIGE. Luego ve la historia del caso del RUC terminado en 861-3 y está marcada la comunicación a la víctima, digitada el 28 de marzo del 2020. Cuando la víctima es NN, no debería generarse esta comunicación en el proceso masivo o si se genera, la persona que genera las cartas, al imprimirla, debería descartarla porque no va a nadie. Después de la actividad marcada hay un archivo provisional del 31 de marzo, otro archivo provisional del 3 de abril, otra comunicación a la víctima y una revocación de decisión de término del 21 marzo del 2022. Luego ve el detalle de la historia de la comunicación a la víctima resaltada en el RUC terminado en 861-3, la fecha es 28 de marzo del 2020, aparece como subtipo de actividad comunicación a la víctima. Aparece generando la actividad la cuenta F703CdelPino. Luego ve una comunicación, sin víctima, del RUC terminado en 861-3, del 28 de marzo del 2020. Este tipo de comunicaciones es extraño en la Fiscalía pero pudo generarse porque había víctima NN. Cuando es archivo provisional, la carta que lo comunica dice que es comunicación de archivo provisional, acá no lo dice, es el formato tipo del SIGE que diga comunicación de archivo provisional, se atrevería a decir que sí. Luego ve la historia del caso que termina en 861-3, y marcada la decisión de término del 3 de abril del 2020. Tiene comunicación del mismo día y una revocación del 2022. Luego ve una pantalla de SIGE, la trazabilidad, de cuando se solicitó el archivo provisional, la solicitante es Claudia del Pino, ejecutada por proceso masivo. Claudia del Pino aparece generando la actividad. Luego ve una pantalla con el detalle del término de archivo provisional en el RUC terminado en 861-3, fecha de la actividad 3 de abril del 2020, y aparece generando el documento F703CdelPino. Luego ve un escrito de una decisión de archivo provisional, del RUC terminado en 861-3, y aparece como delito de hurto de hallazgo. En la fotografía anterior aparece como delito en el SAF conducción en estado de ebriedad, es el mismo RUC. En el sistema aparece que el delito es manejo en estado de ebriedad y la decisión de archivo provisional que es hurto de hallazgo. Eso no es correcto. El archivo provisional toma el delito del SAF. Luego ve nuevamente la historia del caso del RUC que termina en 861-3 con un destacado. Luego ve la historia de esa comunicación a la víctima de archivo



provisional del RUC terminado en 861-3. La fecha de la comunicación es el 3 de abril del 2020. Lo genera la cuenta F703Cdel Pino. Luego ve carta de comunicación del RUC terminado en 861-3, sin víctima, de fecha 3 de abril del 2020. Lee el contenido. En la foto anterior aparece el delito de conducción en estado de ebriedad y en esta comunicación aparece hurto de hallazgo.

Sobre lo que se acaba de exponer, también debe destacarse que, en consonancia con lo que antes ya había explicitado la señora Torres de La Fuente, se trata de imágenes tomadas desde los sistemas SIGE y SAF del Ministerio Público, específicamente relacionadas con actividades registradas en el mismo respecto de la causa RUC N° 2000145861-3, y que aquéllas revelan, dado el historial de dicho proceso y las credenciales de usuario que se muestran, que en esa plataforma informática y RUC la usuaria Claudia Andrea del Pino Acuña al menos, como se sostiene en las acusaciones, ejecutó un archivo provisional de la investigación el día 28 de marzo del año 2020, cuyo contenido en ese sentido puede observarse en la fotografía N° 80, y cambió en un registro del SAF, particularmente en la actividad “comunicación a la víctima (Archivo Provisional)” de ese mismo día, la calificación jurídica de conducción en estado de ebriedad a hurto de hallazgo, como puede observarse en la fotografía N° 83 en relación, dado lo aclarado por la señora Torres de La Fuente, con la fotografía N° 82, que muestran a qué cuenta está adscrita las ubicaciones de dicho archivo.

Finalmente, para este Tribunal resulta evidente, considerando lo dispuesto en el artículo 167 del Código Procesal Penal, que por el tenor de la carpeta investigativa ya expuesta y las declaraciones del acusado Vega Guerrero y de los señores Guerra Morales y Silva Salas, aquél archivo provisional se dispuso por la acusada del Pino Acuña contra el mérito de la investigación y obstaculizándola, pues evidentemente al 28 de marzo del año 2020 en ella aparecían antecedentes que permitían desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos.

Sobre el grave entorpecimiento que significa para el normal desarrollo de una investigación la incorporación a los sistemas informáticos de la Fiscalía de una actividad como el archivo provisional, nos remitimos a lo ya expuesto sobre el punto para no redundar.

En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.9 de la novena motivación de este fallo, resultaron debidamente establecidos, primero, con lo testificado por Valesca de Las Mercedes Alarcón Urrutia ya que, además de lo



que ya se extractó de la declaración que prestó en audiencia, señaló que se dedica a asistente de párvulos por 11 años en Linares. Conoció a Claudia como Claudia Giraldo por una página de Facebook por permuta de ropa. Ella hacía permutas de ropa y empezó a hacer permutas de ropa con ella y por esa razón llegó a su casa. No recuerda el año, 2019 o 2020, el primer año de pandemia fue. Estaban en pandemia. Por eso la conoció. Llegó a su casa y empezó a tener más contacto con ella, se hizo más cercana a ella. Esa casa estaba en Las Vertientes, frente a la María del Valle. Cuando llegó a la casa conoció a su esposo, Ricardo. Después conoció el nombre completo de él, a ella siempre la conoció como Claudia Giraldo. De él supo, cuando conoció a su hermano, que su apellido era Vega Guerra. Fue más menos como dos o tres veces a la casa de ella. La primera vez compartió con Claudia y su esposo. Como habían bebido algo, dejó su vehículo en su casa. Al otro día fue a buscarlo y cuando lo hizo, le pidió a su hermano que la llevara. En el domicilio de Claudia sólo compartió con Claudia y su esposo y después conoció al hermano de Ricardo, Andrés, con los mismos apellidos. Cuando conoció a Claudia, ella en principio no le dijo en qué trabajaba. Después se enteró, le dijeron que era fiscal de Linares. Sobre Andrés, tuvieron una relación sentimental que duró como un mes, el mismo año, fue como de mayo a junio o mediados de julio del primer año de pandemia. Esa vez que fue a buscar su vehículo con su hermano y al llegar al domicilio, bajó del auto y estaba el esposo de Claudia en el jardín. Ricardo le preguntó quién la fue a dejar y le dijo que era su hermano Samuel Alarcón Urrutia. Luego ella entró donde Claudia. Cuando Ricardo vio a su hermano notó algo raro y le pareció extraño que le preguntara. Después retiró su auto y se fue a su casa.

Señaló que tras eso conoció al hermano de Ricardo, Andrés. Tuvieron una relación y se juntaron en la casa de Claudia dos veces cree. Estaban presentes ahí Claudia y Ricardo. Cuando ella empezó a tener más contacto con Andrés, se dio cuenta de que había problemas entre Claudia, Ricardo y Andrés, no sabe por qué, pero siempre se peleaban y decían cosas. Sabía que Andrés originalmente era de Rengo y viajaba a Linares. Viajaba para juntarse con ella. Sobre el estado civil de él, no lo sabía, o si tenía otra relación sentimental. Después había como cosas extrañas, Andrés siempre le decía que discutió con Claudia, que le dijo cosas y siempre se peleaban por teléfono, hasta que una vez que compartieron cree Ricardo le comentó de su hermano y ahí Andrés le dijo lo que pasó entre su hermano y ellos, de lo que ella no tenía idea. Le dijo que Ricardo había llamado a su hermano para devolverle



su licencia y su hermano le pagó. Andrés le dijo que Claudia y Ricardo hacían eso, pedían plata para devolver la licencia. Eso se lo contó la segunda vez que fue a su casa. Con esta información, no supo qué decir, era su hermano y no sabía que él había hecho algo así. Sí sabía que su hermano fue detenido y que le quitaron su licencia, pero no le preguntó de ahí nada más. Supo que a su hermano lo detuvieron pero no recuerda cuánto tiempo antes. Sobre la razón de su detención, parece andaba en estado de ebriedad conduciendo, cree, no era la primera vez que lo habían detenido. Cuando le dijeron que Claudia y Ricardo lo ayudaron con su licencia, le dijeron que a cambio de dinero, no por cuánto dinero. Entendió que Claudia era fiscal de Linares, eso entendió de lo que le dijo Andrés. Después con Andrés se distanciaron por diferencias, él no trataba muy bien a las mujeres.

Comentó que, sobre la relación de Claudia con Ricardo, Andrés le decía que Claudia hacía y decía cosas que a él no le gustaban sobre su hermano, que lo manipulaba. Eso se lo dijo Andrés, ella no lo vio. Sobre los días en que Andrés estaba en Linares, recuerda que un día fueron en su auto y Andrés le dijo que necesitaba ir a dejar unos remedios o algo así donde un caballero a Presidente Ibáñez, y le preguntó ella quién era ese caballero, ella ya sabía lo pasado con su hermano, y Andrés le dijo que Ricardo le contó que a este caballero también le habían comprado la licencia. Eso era en presidente Ibáñez, era una botillería. Era un letrero café. Andrés le dijo que ellos le hicieron una movida, Claudia y Ricardo. Después de eso de la botillería, se fueron.

Sobre la relación entre Andrés y Claudia, él le decía que Claudia siempre lo llamaba para decirle cosas ofensivas sobre ella. No sabe qué cosas le dijo y tuvieron una discusión. Un día Andrés dijo que iba a ir a la Policía de Investigaciones y la iba a denunciar. Cuando le dijo eso, ella le comentó que si hacía eso saldría perjudicado su hermano. Después supo que Andrés sí fue a denunciar a Claudia a la Policía de Investigaciones, le dijo que estaba en Rengo. Sobre si esta denuncia fue ese mismo año, no recuerda la fecha. Tras un ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal, recordó que en junio del 2020 fue eso. Después de junio del 2020, de la denuncia, no supo que la denuncia surtiera algún efecto. Recibió una llamada de la hermana de Ricardo, no recuerda su nombre, quien quería saber si Claudia y Ricardo estaban detenidos porque Ricardo había llamado para decir que había llegado la Policía de Investigaciones y se habían llevado todo y le pidió averiguar. Fue a la



casa de Claudia y no había nadie. Se lo indicó a la hermana de Ricardo y se fue. Luego no habló con alguien más.

Agregó que con su hermano nunca hablaron del tema, pero ella le dijo que habían ido a hacer una denuncia. Ahí le pidió a él que dijera la verdad o quedaría la embarrada. Su hermano no recuerda bien qué le dijo, pero sí que iba a quedar la cagada. Ahí su hermano recién le dijo que había pagado para que le devolvieran su licencia y que si pasaba algo, iba a perder su licencia y no iba a poder seguir trabajando. Le dijo que fue el esposo de Claudia quien lo llamó por teléfono y le dijo que si no le pagaba por la licencia, se iba a ir preso. No le mencionó a otra persona.

Sobre si recuerda lo que declaró en la Fiscalía sobre esto, sí. Dijo lo que hablaron con su hermano, quien le dijo que iba a quedar la cagada porque él había pagado por la licencia y que Ricardo se comunicó con él y le pidió una cantidad de plata. Sobre las otras cosas que dijo sobre ello, no lo recuerda. Tras un ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal recordó que allí señaló que su hermano le dijo que iba a quedar la cagada porque él había pagado dado que le dijo que parece a Claudia del Pino la andaba siguiendo la Policía de Investigaciones por las licencias y él le dijo que Claudia y Ricardo le habían cobrado dinero porque si no, se iba a ir preso y quedaría la cagada.

Sobre Claudia del Pino, conversaban pero hablaban sobre las permutas. Era cercana a ella. Por lo menos ella la tomó como una relación de amistad. Claudia una vez le comentó que estaba con problemas en sus cuentas, que no podía retirare dinero, parece tenía bloqueadas las tarjetas o la cuenta y no podía sacar pero sí transferir y ella le ofreció su cuenta RUT porque ella la tenía pero no la usaba. Se la fue a dejar ella misma y le dio la clave para que la usara. Solamente usaba la tarjeta del cajero. Era para que ella se transfiriera y pudiese sacar dinero. Esto duró no sabe cuánto tiempo, pero le pidió la tarjeta de vuelta y ella se la devolvió. Eso fue por varios días, unas dos o tres semanas. No sabe si Claudia la usó. Ella no ocupaba esa cuenta y no mantenía dinero ahí.

Sobre su hermano y la causa por conducción en estado de ebriedad, sabe que le quitaron la licencia y nada más. Eso fue antes de que hiciera la movida con Claudia y Ricardo. Desde que pasó esto y declararon en la Policía de Investigaciones, no hablaron más del tema. Sabe que su hermano fue a declarar, pero no sabe qué declaró. Después de esto no han hablado con ella Claudio, Ricardo o un



familiar de ellos. Ni con su hermano ha hablado del tema, sólo que los llamaron a declarar.

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña respondió que a Claudia la conocía como Claudia Giraldo, ese era como un apodo que usaba en la página de Face. Pensó que era su nombre real. Ella nunca le dijo que fuese así.

Refrendó que Andrés le dijo que la movida la hacían Ricardo y Claudia, pero ella no los vio haciendo esa movida.

Andrés, Ricardo y Claudia tenían problemas. Andrés tenía un muy mal trato hacia las mujeres. Andrés denunció, Andrés Vega Guerra, no supo su segundo nombre. Sobre si vio a Andrés o Ricardo maltratando a Claudia, no.

Con Andrés fue a entregar un remedio según le dijo Andrés y justo esa persona era la misma que Andrés sabía le habían hecho la movida. No dijo que vio eso. Fueron a dejar el encargo y Andrés le dijo que a esa persona también le habían hecho la movida. Sobre cómo Andrés sabía, era porque Ricardo le contó.

A la Defensa del acusado Vega Guerrero contestó que, sobre la movida entre Ricardo y Claudia para con su hermano, sabe que le entregaron la licencia a su hermano, se la entregó, según su hermano, que pagó y que Ricardo le entregó la licencia de conducir.

Sobre la relación de Claudia con Ricardo y Andrés, Andrés le dijo que Claudia hacía y decía cosas que no le gustaban respecto de su hermano, pero no puede decir qué cosas porque era lo que Andrés le contaba. Decía que se molestaba mucho porque Claudia manipulaba a su hermano, que él tenía que hacer lo que ella le decía. Eso decía Andrés.

Señaló que una o dos veces compartió con ellos en la casa. No se fijó en quién mandaba en la casa.

En relación con lo que el comisario de la Policía de Investigaciones Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez declaró respecto del testimonio que tomó durante la investigación a Samuel Alarcón Urrutia, dado que ello ya fue consignado, daremos acá por reproducida esa parte para no extendernos innecesariamente. Sí cabe agregar, dado que se trata de un supuesto fáctico propuesto por los persecutores al describir los hechos que catalogaron como constitutivos del delito de falsificación o uso malicioso de instrumento público, que tras reproducir los dichos de Samuel Alarcón Urrutia, el Ministerio Público procedió a mostrar al señor Gutiérrez Gutiérrez la prueba denominada en el auto de apertura como “NUE 5948283



correspondiente donde se indica como evidencia dos hojas de la Fiscalía con el título de archivo provisional marzo 2020” y, al observarlo, refirió que ese es el documento que Samuel les aportó al momento de la declaración, donde indicó que Ricardo le entregó, previo al primer pago de los \$300.000 frente a la Iansa, donde se indica que la causa está archivada. Dijo que eso le dio un poquito más de certeza a lo que planteaba Ricardo en cuanto a que tenía una persona en la Fiscalía que podía cerrar o archivar la causa. Ese documento lo tenía él guardado y lo entregó al declarar.

Siguiendo con dicha probanza, la misma consiste en un documento que en su parte superior muestra arriba, un logo en que se lee Fiscalía Ministerio Público de Chile. Después se leen menciones tales como Decisión de Archivo Provisional; R.U.C. 2000237477-4; Fecha denuncia 29-02-2020; Fecha en que se cometió el delito, Hora en que se cometió el delito y Lugar en que se cometió el delito, 29 de Febrero de 2020 00:54 horas Intersección Calle Brasil con Independencia Linares; víctima Nombre: NN Domicilio: (en blanco); Imputado Nombre: Samuel Andrés Alarcón Urrutia C.I. 15.570.264-8 Domicilio: Villa Ancoa, Calle Carlos Rosa N° 69, Linares; En Linares, Marzo de 2020 Vistos: 1.- Que la presente investigación se encuentra en estado de tomarse una decisión de término. 2.- Que a la fecha no aparecen antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. 3.- Que lo anterior se comunicará a la víctima del delito investigado, mediante carta enviada a su domicilio, a fin de que informe si cuenta con nuevos antecedentes, caso en el cual se procederá a la reapertura de la investigación. 4.- Que no se ha producido aún la intervención del Juez de Garantía en este procedimiento. 5.- Lo dispuesto en los artículos 109 letra d) y 167 del Código Procesal Penal; SE DECIDE: Archivar provisionalmente esta investigación. Archívese y sométase si corresponde a la aprobación del Fiscal Regional; Fiscalía Local de Linares y nuevamente el logo del Ministerio Público que se describió al inicio, y sobre ambas gráficas una firma ilegible escrita con lápiz pasta azul.

La testigo Valentina Antonia Roa Acuña señaló ser teniente de Carabineros y aportó que a Carabineros ingresó el 2016. Trabajó en la Primera Comisaría de Linares. Su participación fue por una conducción en estado de ebriedad, la detención en una conducción en estado de ebriedad. El 29 de febrero del 2020 mantenía su dotación en la Primera Comisaría de Linares y estaba de patrullaje con el cabo Nibaldo Venegas por avenida Brasil. Iba de norte a sur y en sentido contrario se movilizaba un automóvil y en la intersección con calle Independencia, el conductor



realizó una maniobra peligrosa, un viraje en u, y cambió su trayectoria de norte a sur, por lo que lo fiscalizaron. Al hacerlo, se percataron de que estaba en manifiesto estado de ebriedad por su hálito. Era Samuel Andrés Jairo Alarcón Urrutia, a quien le realizaron la prueba respiratoria con el equipo Dragger y arrojó 1.38 gramos por litro de alcohol en la sangre, por lo que procedieron a su detención. Finalmente lo trasladaron al SAR San Juan de Dios para constatar lesiones y realizarle la alcoholemia por el frasco 638. Después lo llevaron a la unidad. Ella tomó contacto con el fiscal de turno, quien dispuso que el imputado quedara apercibido por el artículo 26 del Código Procesal Penal y la licencia de conducir a su disposición, pero debía presentarla al momento de la citación. Sobre la licencia, portaba la licencia y estaba al día. Era licencia B y D.

En consonancia con ello, se acompañó la prueba denominada en el auto de apertura como “Causa RUC N° 2000237477-4 por del delito de Conducción en estado de Ebriedad respecto de Samuel Alarcón Urrutia”, en la que puede leerse, en su página 1, un parte de detenidos, emanado de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares en que figura Fiscalía Local de Linares; N° de Parte 00488; fecha de detención 29/02/2020; hora de detención 00:55; funcionario a cargo del procedimiento Valentina Antonia Roa Acuña, subteniente; código del delito 14052 conducción estado de ebriedad con o sin daños o lesiones; fecha del delito 29/02/2020; hora del delito 00:54; lugar de ocurrencia vía pública; dirección Brasil/Independencia de la comuna de Linares; identificación del detenido Samuel Andrés Alarcón Urrutia; N° de documento de identificación 15570264-8; lugar de detención Brasil/Independencia de la comuna de Linares; documentos adjuntos declaración Carabineros, derechos del detenido, acta alcoholemia, certificado médico, verificación de identidad y alcotest; Relación de los Hechos: SAMUEL ANDRES JAIRO ALARCON URRUTIA, 36 años, chileno, casado, estudios medios, chofer, [...]detenido hoy a las 00:55 horas en Calle Brasil esquina Independencia, por Subteniente Valentina Roa Acuña y Cabo 1ro. Nibaldo Venegas Inostroza, ambos de esta dotación y de servicio en la población, pasa a disposición de esa Fiscalía Local de Linares, por el siguiente hecho: Porque hoy mientras el personal aprehensor efectuaba un patrullaje preventivo por Calle Brasil en dirección al Sur, tras llegar a la intersección de Calle Independencia, observan el automóvil marca Hyundai, modelo Accent, color gris grafito, [...] móvil que lo hacía por Brasil en dirección al norte y en dicha intersección efectúa una maniobra de viraje en "U",



razón por la cual proceden a su fiscalización, identificando más tarde a su conductor como; SAMUEL ANDRES JAIRO ALARCON URRUTIA, previamente individualizado en el rubro de imputado. Luego, solicitan a éste la documentación respectiva y alertan que dicha persona lo hacía en evidente estado de ebriedad, circunstancia que constó por su rostro congestionado, incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar, siendo sometido a una prueba respiratoria con el equipo DRAGER, arrojando como resultado 1.38 G/L, corroborando así que lo hacía en estado de ebriedad, razón por la cual procedieron a comunicarle su detención, previa lectura de sus derechos que le asisten conforme a la Ley; que, sobre lesiones y alcoholemia, el imputado fue trasladado al servicio de urgencias del SAR San Juan de Dios, lugar donde el médico de turno de dicho centro asistencial lo atendió y extrajo la muestra de sangre que fue depositada en el frasco Nro. 638, SIN LESIONES, según dato atención médica Nro. 277583; y que, sobre la licencia, el imputado al momento de su fiscalización lo hacía con licencia de conductor clase B y D, de la Ilustre Municipalidad de Linares, vigente al 10.05.2025. Al Final se aprecian dos firmas ilegibles y un timbre de la Primera Comisaría de Linares.

Luego figura un dato de atención de urgencia, emanado del SAR San Juan de Dios de Linares, en que se lee que la fecha de ingreso es 29/02/2020; que el nombre es Alarcón Urrutia Andrés Jairo; que el motivo de la consulta es Alcoholemia y constatación de lesiones; que llegó en un vehículo policial de Carabineros; que, como diagnóstico complementario, presentaba hálito OH escaso; y que se le efectuó una alcoholemia. Al final del documento se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Wilmer Benítez, médico general.

Luego figura una boleta de alcotest titulada Dräger, en que se lee que el puesto de prueba es Brasil/Independencia; que la fecha es 2020.02.29; que la hora es 00:55; que el nombre es Samuel Andrés Alarcón Urrutia; y que la prueba del examinado fue 1.38 g/L. Al final del documento se aprecia una firma ilegible.

Luego figura el Informe de Alcoholemia N° 07-TAL-OH-1763-20, correspondiente a la causa 2000237477-4 de la Fiscalía de Linares, fechado en Talca el 25 de marzo del año 2020. En él también se lee que “el funcionario administrativo que suscribe certifica que la muestra para este examen de alcoholemia se recibió como perteneciente a Don (a): SAMUEL ANDRÉS ALARCÓN URRUTIA C.I. 15570264-8 Siendo tomada el 29/02/2020 a las 01:28 hrs. en el SAR SAN JUAN DE DIOS. Por el Dr.(a) WILMER BENÍTEZ NAVAS [...] según consta en la boleta



de remisión de la muestra. El Perito BIOQUÍMICO LEGISTA que suscribe certifica que el examen científico de dicha muestra, asignada con el 07-TAL-OH-1763-20 dio un resultado de 1,58 (uno coma cincuenta y ocho) gramos por mil. Al final se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Natalia Torrealba Miranda, Perito Ejecutor, Servicio Médico Legal de Talca.

Luego figura una pieza titulada “Decisión de Archivo Provisional”, fechada en Linares el 7 de mayo del año 2020. En ella se aprecia, además, en su parte superior, un logo en que se lee Fiscalía Ministerio Público de Chile; R.U.C. 200037477-4; Fecha denuncia 02-03-2020; Delito, Fecha en que se cometió el delito, Hora en que se cometió el delito y Lugar en que se cometió el delito, lesiones leves, 29-02-2020 0054, Brasil con Independencia de Linares; víctima Nombre: NN Domicilio: (en blanco); Imputado Nombre: Samuel Andrés Alarcón Urrutia; Domicilio: Carlos Rosa 69, Linares; Vistos: 1.- Que la presente investigación se encuentra en estado de tomarse una decisión de término. 2.- Que a la fecha no aparecen antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. 3.- Que lo anterior se comunicará a la víctima del delito investigado, mediante carta enviada a su domicilio, a fin de que informe si cuenta con nuevos antecedentes, caso en el cual se procederá a la reapertura de la investigación. 4.- Que no se ha producido aún la intervención del Juez de Garantía en este procedimiento. 5.- Lo dispuesto en los artículos 109 letra d) y 167 del Código Procesal Penal; SE DECIDE: Archivar provisionalmente esta investigación. Archívese y sométase si corresponde a la aprobación del Fiscal Regional; abajo Carola Milena Dagostini Ibáñez Fiscal Jefe Fiscalía Local de Linares (sin firma); y al lado un timbre circular en que se lee Fiscalía Local, República de Chile, Ministerio Público.

Luego figura un documento titulado “Comunicación”, fechado en Linares el 7 de mayo de 2020, en que se aprecia el número 2000237477-4; que “con el fin de mantenerle informado/a respecto de su denuncia recibida en la Fiscalía Local, mediante Parte Policial de fecha 02-03-2020, que da cuenta del delito de: LESIONES LEVES, me permito comunicar a usted; que a la fecha los antecedentes recibidos resultan insuficientes para lograr el esclarecimiento de los hechos, determinar algún responsable de los mismos o decretar alguna diligencia útil de investigación, por lo que solo en el evento que exista o surja otro antecedente será posible continuar con ésta indagación”; abajo Carola Milena Dagostini Ibáñez Fiscal



Jefe Fiscalía Local de Linares (sin firma); y al lado un timbre circular en que se lee Fiscalía Local, República de Chile, Ministerio Público.

Con dicho instrumento, congruente con las otras probanzas ya expuestas, puede darse por certeramente establecido que el informe de alcoholemia respectivo dio por resultado de 1,58 gramos por mil de alcohol en la sangre respecto del imputado Samuel Andrés Alarcón Urrutia.

Centrándonos ahora el supuesto consistente en que, en conocimiento de que Samuel Andrés Alarcón Urrutia era imputado en una causa por el delito de conducción en estado de ebriedad, Claudia del Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente, a lo menos, en una descripción de la conducta punible a que se refería dicha causa más el nombre, dirección y número telefónico del imputado Samuel Andrés Alarcón Urrutia, así como la graduación alcohólica con que fue sorprendido, con el fin de que solicitara al mismo beneficios económicos a cambio de terminar su causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación, importante es, para iniciar, tener presente que Ricardo Ignacio Vega Guerrero declaró ante estrados y corroboró dicha dinámica, describiéndola en definitiva como un modus operandi que acordó con Claudia del Pino Acuña y que aplicaron en múltiples casos, entre ellos el hecho inmediatamente anterior, éste y otros que se han analizado y más adelante se analizarán.

Dado que la declaración ante estrados del acusado Vega Guerrero ya fue extractada anteriormente, no la repetiremos para evitar redundar. Sin perjuicio de ello, recordaremos que, en lo más pertinente, señaló que un día su esposa Claudia dijo que estaba cagada de plata y que sabía cómo ganar plata. Le dijo que era con el tema de la movida de las licencias y que era fácil para ella porque eran causas de ella y nadie se iba a meter a esas causas. Le preguntó si estaba segura y dijo que la única forma de que la pillaran era que algunos de los que ayudaran, “sapearan”. Así lo hizo. Ella sacaba la información del computador y escribía en un cuaderno que incautó la Policía de Investigaciones, donde estaba todo escrito con letra de ella, escribía los RUC y le pasaba a él un papel con el nombre de la persona, los grados alcohólicos y el número de teléfono y él la llamaba y le decía que se llamaba Cristian, que había una movida y si le interesaba. Unos le decían que sí y otros que no. Con los que accedieron, se juntaron en Linares, les explicaba la movida en



persona y le decían que sí. Ahí él iba a la casa, le decía a ella que este “guevón” dijo que sí y ella hacía el tema en el computador.

También señaló que sobre el caso de Alarcón, lo contactó por teléfono pero resultó ser hermano de una amiga de Claudia, que conoció por Facebook en una página de permutas. A él lo llamó y le explicó la movida que acordó con Claudia. Trabajaba en el norte en ese tiempo. Le explicó que salía 500 lucas y se archivaba la causa y no le iban a quitar la licencia. Le pasó 300 y también se le dio una carta de archivo. Los otros 200 se los dio como a los días o semanas en la alameda de Linares. El dinero lo entregó todo a Claudia. También le entregaron una carta de archivo.

Ya se consignó que este Tribunal concluyó que esos dichos dan cuenta de un *modus operandi* preacordado por ambos acusados que se ajusta al que en este fallo se tuvo por suficientemente probado y que, para formar tal estándar de convicción, no consideramos únicamente dicha declaración, sino que también múltiples razonamientos y corroboraciones que debidamente se demostraron durante la audiencia de juicio oral.

Dado que los mismos se expusieron latamente al analizar el hecho que en la presente motivación singularizamos con el N° 2.8 y que tales consideraciones son, *mutatis mutandi*, plenamente aplicables al hecho punible ahora en comento, daremos a aquéllas por reproducidas en este punto para no extender innecesariamente en demasía este fallo.

Siguiendo con el presupuesto fáctico que tuvimos por acreditado consistente en que, consecuentemente y con aquella información que Claudia del Pino Acuña le entregó en su poder, Vega Guerrero contactó a Samuel Andrés Alarcón Urrutia y le solicitó \$500.000 a cambio de que Claudia del Pino Acuña terminara la referida causa, a lo que Alarcón Urrutia accedió, pagando posteriormente la suma de dinero solicitada a Vega Guerrero, recordaremos que en sus declaraciones, que ya extractamos, el acusado Vega Guerrero y los testigos de oídas Valesca de Las Mercedes Alarcón Urrutia y Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez (éste último refrendando la específica suma de dinero acordada y pagada que indicó Vega Guerrero) estuvieron contestes en ello.

Destacable es que Valesca de Las Mercedes Alarcón Urrutia es una testigo que reconoció hechos que podrían ser perjudiciales para su hermano y de la cual



ninguna posible animadversión hacia los acusados o ganancia secundaria para faltar a la verdad siquiera se insinuó por las Defensas.

Sobre la acreditación de la generación por parte de la acusada del Pino Acuña de la información que entregó al acusado Vega Guerrero para contactar a Samuel Andrés Alarcón Urrutia, nuevamente y para evitar una larga repetición, nos remitimos a lo expuesto en relación con el modus operandi que tuvimos por suficientemente probado.

Ahora, en lo tocante a la consecuente conducta desplegada por la acusada del Pino Acuña consistente en que, contra el mérito de la causa, archivó provisionalmente la misma, obstaculizando con ello gravemente la investigación, todo ello resultó debidamente establecido por lo aportado por la testigo Karem Silvana Torres de La Fuente con la exposición revestida de los atributos que ya destacamos y respecto de la cual damos acá por reproducida la primera parte de su declaración y las aclaraciones que aportó, porque ya fueron extractadas al analizar los hechos relacionados con la causa RUC 1900060766-8.

Sin perjuicio de ello, en lo atinente a los presupuestos que ahora revisamos, la señora Torres de La Fuente, al serle exhibidas las pertinentes fotografías del que se llamó en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA”, que corresponden a las que van de la N° 103 a la N° 112, señaló que la primera corresponde a la pantalla del módulo tramitar causas de SAF, causa asignada a Claudio Ávila, del RUC 2000237477-4, delito manejo en estado de ebriedad. Luego ve otra similar y una pantalla SIGE de trazabilidad, donde se solicita un archivo provisional sin consulta del RUC terminado en 477-4, solicitado por Claudia del Pino el 6 de mayo del 2020 y ejecutado por el proceso masivo de SIGE. Sobre los movimientos, aparece como solicitante Claudia del Pino Acuña. Luego ve la pantalla de detalle del caso en que está marcado ese archivo provisional y después viene una comunicación a la víctima y otros. Luego ve el detalle de la actividad archivo provisional de la causa terminada en 477-4 del 7 de mayo del 2020, aparece generando la actividad la cuenta F703CdelPino. Luego un escrito de archivo provisional del RUC terminado en 477-4. En la fotografía anterior aparece el delito de manejo en estado de ebriedad y en esta fotografía el de lesiones leves, aunque es el mismo RUC. Luego ve el documento con el pie de firma Carola D’Agostini, donde se decide archivar la investigación, también del RUC termina en 477-4. Luego ve la historia del caso del



RUC terminado en 477-4, donde está marcada la comunicación a la víctima. Luego ve el detalle de la historia de la actividad de esa comunicación a la víctima en el mismo RUC, en que aparece gestionando la cuenta F703CdelPino y la actividad que se digita es comunicación a la víctima. Luego ve un documento sin víctima, del mismo RUC, del 7 de mayo del 2020, documento, que alude al delito de lesiones leves. En relación con la fotografía 111, ahí es el mismo RUC que termina en 477-4, el imputado también es Samuel Alarcón y el delito en SAF es manejo en estado de ebriedad, pero en esta fotografía hay otro delito, de lesiones leves.

Sobre lo que se acaba de exponer, también debe destacarse que, en consonancia con lo que antes ya había explicado la señora Torres de La Fuente, se trata de imágenes tomadas desde los sistemas SIGE y SAF del Ministerio Público, específicamente relacionadas con actividades registradas en el mismo respecto de la causa RUC N° 2000237477-4, y que aquéllas revelan, dado el historial de dicho proceso y las credenciales de usuario que se muestran, que en esa plataforma informática y RUC la usuaria Claudia Andrea del Pino Acuña al menos, como se sostiene en las acusaciones, ejecutó un archivo provisional de la investigación el día 7 de mayo del año 2020, cuyo contenido en ese sentido puede observarse en las fotografías N° 108 y N° 109. Se hace presente que en las acusaciones no se sostuvo, en lo atinente al RUC analizado, que del Pino Acuña haya realizado algún tipo de recalificación jurídica.

Finalmente, para este Tribunal resulta evidente, considerando lo dispuesto en el artículo 167 del Código Procesal Penal, que por el tenor de la carpeta investigativa ya expuesta y las declaraciones de Valentina Antonia Roa Acuña, Valesca de Las Mercedes Alarcón Urrutia y Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez, aquél archivo provisional se dispuso por la acusada del Pino Acuña contra el mérito de la investigación y obstaculizándola, pues evidentemente al 7 de mayo del año 2020 en ella figuraban antecedentes que permitían desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos.

Sobre el grave entorpecimiento que significa para el normal desarrollo de una investigación la incorporación a los sistemas informáticos de la Fiscalía de una actividad como el archivo provisional, nos remitimos a lo ya expuesto sobre el punto para no redundar.

En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.10 de la novena motivación de este fallo, resultaron debidamente establecidos, primero, con



lo testificado por Diego Ignacio Vásquez Riquelme, quien manifestó que tiene una empresa de riego tecnificado. Tiene licencia de conducir desde hace 5 o 6 meses. Se la quitaron y se la devolvieron. Un día lo contactaron. Antes, por conducir en estado de ebriedad le quitaron la licencia. Lo pillaron un día conduciendo bajo la influencia del alcohol en calle Yervas Buenas de Linares. No recuerda la fecha, hace unos dos o tres años. Lo detuvieron, conducía en estado de ebriedad. No le quitaron al tiro la licencia, pero lo detuvieron. Fue un procedimiento normal de conducción en estado de ebriedad. Le hicieron alcoholemia. Le hicieron una primera prueba y en el consultorio le hicieron una prueba de sangre. Su licencia ese día no se la retuvieron al tiro. Quedó con ella y se la quitaron un tiempo después, al par de meses. Era la segunda vez que se veía involucrado en algo así. Cree fue el 2014 la primera y esa vez, por lo mismo, también le quitaron la licencia por dos años.

Agregó que pasó eso y un día lo contactaron por teléfono, lo llamaron y le dijeron que podían solucionarle el tema de la licencia, como esconder lo que había pasado con lo de la licencia. Se juntaron un día y él accedió. Lo llamaron no recuerda cuándo. Fue antes de la pandemia, cree el 2020, como hace dos años. Lo contactaron con una llamada por teléfono, le dijeron todas las causas o delitos que tenía a su nombre. Tenía el anterior y cree unos partes por mal estacionamiento y cosas así. El que lo llamó era un hombre. Le dijo que podía ayudarlo con su caso de la licencia para que no pasara nada y quedara en cero su conducción en estado de ebriedad. Sabía cuánto arriesgaba, sabía que eran dos años sin licencia porque la primera vez quedó en eso. Quedaron ese día en juntarse. Se juntaron un día afuera de una bencinera. Llegó el hombre con unos papeles y le dijo que con todo eso se lo podían borrar y quedaría como que no existió su caso. Cuando se juntaron, cree él andaba en su jeep y el hombre llegó en una moto Honda XR50 color blanco. La persona está ahí, la indica en la sala de audiencias, está en la esquina sentado (indica al lugar donde está sentado el acusado Vega en la sala de audiencias), era físicamente tal cual, de la misma contextura, es la misma persona. Para hacer esto, no tomó alguna precaución. Se juntaron y conversaron y le contó la historia que tenía y lo que se podía hacer. Llegó con un papel con varios números de gente y le dijo que él estaba dentro de todos esos compadres a los que pillaron sin licencia y que lo pueden ayudar con el tema de la licencia. Sobre si sabía si trabajaba él con más personas, no lo sabía. Le explicó ese día que había un costo de esto, le dijo que podían hacer esto por el costo de \$400.000. Él estuvo de acuerdo. La persona no le



dijo cómo debía pagar. Cree se juntaron dos veces, en una le pasó \$200.000 y en la otra los otros \$200.000. En esas veces, sobre si tomó alguna medida de seguridad, un día le sacó una foto. Llegó el hombre y con el celular medio escondido le sacó una foto varias veces. La persona andaba en su moto cuando le sacó la foto.

En esta parte de la declaración, el Ministerio Público procedió a exhibir al testigo la prueba llamada en el auto de apertura como “Cinco fotografías entregadas por Diego Vásquez Riquelme que muestran a Ricardo Vega Guerrero” y, al observarlas, el señor Vásquez Riquelme señaló que corresponden a imágenes donde se ve el hombre que lo contactó y con el que se juntó, esas fotos las tenía guardadas en su celular y las cinco son iguales, están afuera de la Iansa de Linares. Sacó la foto por el teléfono por el lado que manejaba y la persona no se dio cuenta.

Sobre dichas fotografías, afianzan el relato del testigo en comentario pues en ellas efectivamente se ve en definitiva cuatro imágenes (la primera fotografía trae miniaturas de las restantes) de la parte superior del lado derecho de un hombre con polera montado sobre una motocicleta al costado de una vía pública, hombre cuyo rostro podemos afirmar, dado lo que nos permite el principio de inmediación, guarda mucha semejanza con el del acusado Vega Guerrero.

Siguió el señor Vásquez Riquelme señalando que pagó primero 200 y la segunda vez que se juntaron le pasó los otros \$200.000. Guardó su teléfono como Cristian fiscal porque dijo que lo llamaba de la Fiscalía o quizás le dijo que era fiscal y dijo que tenía su nombre y su información. Él le habló de su primera vez de que le quitaron la licencia, de otras cosas que tiene que no sabe bien. El primer manejo en estado de ebriedad fue camino a Chillán y le habló de eso. Manejaba información de lo que él tenía. Eso le dio confianza para hacer esto. Recién salía de agrónomo y necesitaba su licencia.

Añadió que después de pasarle el dinero, nada pasó. Después se supo algo de que habían pillado al hombre, que se supo esto y habló con él y le dijo que le devolviera su plata. No sabe cuándo se descubrió esto, pero fue el mismo año 2020. Se enteró que se descubrió porque tenía un amigo que trabajaba en la Fiscalía y él le dio la información de que había pasado todo esto. Ese amigo es Froilán Cofré. Una vez le contó que le hablaron de un lugar en que podían borrar su causa y él le dijo que cómo iba a pasar eso, que no creía. Después no le habló más y él siguió contactándose con el hombre y llegaron al acuerdo. Sobre si la policía lo ubicó, después conversó con “ud.” (el fiscal que le estaba formulando las preguntas) y otro



fiscal de Talca. Con “ud.” conversó en la Policía de Investigaciones de Linares. Ahí entregó la información de lo que había ocurrido más las fotos. Les mostró su estado de cuenta de los giros de dinero que entregó en esa ocasión.

Refirió que después de esto contactó a Ricardo y le pidió la devolución del dinero. Se toparon afuera del colegio Alborada y le dijo que le entregara su plata y él le dijo que sí, que se la iba a entregar. No le contó lo que había declarado, fue antes de las declaraciones. Después se juntaron un día en Ignacio Chacón, él pasó en el auto, le entregó la plata y no se contactaron más. Le devolvió los \$400.000. Sabía dónde vivía el hombre. Recorre hartos esos mismos lados porque vive cerca y vio la moto y el auto de él. Fue un día que vio que esto había pasado a mayores, que se supo todo y pasó por la casa de él a preguntar por Cristian y no estaba. Salió la pareja debe haber sido y le dijo que ya no vivía con él y que no estaba y le pidió a la pareja que le dijera que Diego Vásquez lo buscaba. Sobre si buscó información de esa persona Cristian para saber si era real, por Facebook lo buscó y lo pilló, la foto de él y la moto, ahí supo que su nombre no era Cristian, que era Ricardo. Supo que estaba casado con Claudia del Pino. Esa vez averiguó que ella trabajaba en la Fiscalía.

Tras esto, lo llamaron vino acá, pagó una multa y pasó los dos años sin licencia. Firmó por un año en el centro de reintegración social. Lo condenaron. A dos años sin licencia, la multa y un año firmando. Le quitaron la licencia hace unos dos años atrás. Desde que pagó este dinero, se reactivó la causa como a los seis meses, cree el mismo año, pero los tiempos no los recuerda exactos. Pero como al par de meses lo llamaron y fue como debería haber sido el procedimiento. La licencia se la entregaron hace poco, como hace un año cree, en enero de este año. Se la quitaron dos años.

Indicó que esta persona Ricardo, cuando se acercó a él, tenía papeles con números. Eso era escrito a mano, el primer papel con que llegó.

A la Defensa del acusado Vega Guerrero contestó que fue detenido por Carabineros por manejo en estado de ebriedad y ese día siguió con su licencia. Carabineros no se la quitó. Se la quitaron cuando lo condenaron. Siempre tuvo su licencia, como por 6 meses y cuando lo llamaron a juicio entregó su licencia. Se juntaron con Ricardo y él le dijo que él hacía el arreglo. El papel que tenía Ricardo, estaba a mano, era una hoja de cuaderno con nombres y números. Una hoja de cuaderno y ahí estaba él. Cuando se supo esto, sabía dónde él vivía y habló con la



pareja de él, a ella no la recuerda, fue un minuto y se fue al tiro. A ella solamente le dijo que le indicara a Ricardo que Diego lo buscaba. Cuando le pidió la devolución de su plata a Ricardo, en el colegio Alborada se toparon, pasaba Ricardo por ahí no más.

Al Tribunal aclaró que la primera vez que se juntaron, el hombre por teléfono le dijo que podía esconder su causa, pero no recuerda las palabras precisas, que se podían arreglar sus papeles para que no le quitaran la licencia. En la primera reunión en la bencinera le señaló lo mismo que por teléfono, que podían hacer un arreglo para que no le quitaran la licencia, que eso se lo podían borrar y quedaría como que no existió su caso. Esta persona, en la primera llamada telefónica se identificó como Cristian y señaló que él haría el arreglo, en toda la conversación el hombre no involucró a terceros.

Dijo que cuando fue a la casa donde sabía él vivía para hablar con él, se encontró con quien pensó era su pareja y ahí preguntó por Cristian, siempre se llamó Cristian hasta hoy. Ahí la pareja que estaba ahí le dijo que ya no vivía con él y le pidió que le dijera que Diego lo buscaba. Sí recuerda que cuando fue a la casa del hombre preguntó por Cristian.

Al Ministerio Público, en un nuevo interrogatorio, señaló que cuando conversó con la persona Ricardo o Cristian, no le dijo que haya tenido contactos en la Fiscalía de Linares. Declaró con “ud.” y con la Policía de Investigaciones dos veces, del 3 de agosto del 2020 es su segunda declaración. El hombre no le dijo nada de que tenía contactos en la Fiscalía.

Cuando fue a la casa de Ricardo, estaba afuera de la reja y la señora en la puerta, a unos 6 o 7 metros de distancia. Le preguntó si acá vivía Cristian y ella le dijo que ya no vivía con ella. No le dijo quién es Cristian o no conozco a ningún Cristian.

A Froilán no le dio ninguna información, sólo le consultó, no recuerda, no supo como nada del tema. Le dijo que lo llamaron de la Fiscalía, que podían hacer tal cuestión y le respondió que no creía.

Cuando Cristian le mostró sus antecedentes, eran antecedentes correctos, de causas penales suyas. No le dijo de dónde obtuvo esos antecedentes.

Hasta hoy se llama Cristian porque fue el nombre con que siempre lo conoció, lo recuerda como Cristian y para él es Cristian.



Corroborando la remisión que efectuó el señor Vásquez Riquelme en su declaración y el origen de la denuncia que comenzó la investigación del caso, Froilán Enrique Cofré Méndez testificó que trabajó en el Ministerio Público, en la Fiscalía Local de Linares. Ingresó el 14 de junio del 2018 con grado de auxiliar administrativo, grado con el que se fue. Ahí principalmente ingresaba partes en SIGE, trabajaba en recepción e ingreso de correspondencia, tomas de video entrevistas y funciones de auxiliar como venir a dejar carpetas a Tribunales, contactar a víctimas. La recepción de una denuncia en la Fiscalía podía ser de varias formas. Podía llegar de Carabineros, de la Policía de Investigaciones o denuncias directas. Todos los días llegaba Carabineros y la Policía de Investigaciones a recepción, entregaban las denuncias a la recepcionista y ella a él para que clasificara primero, separar los controles de detención, que se ingresaban primero, y los prioritarios y no prioritarios. Las prioritarias llegaban por correspondencia y todos los días la recepcionista les entregaba el fajo de denuncias que llegaban y separaba la correspondencia de las denuncias.

Comentó que sabe de este caso que una denuncia acusa a Claudia del Pino de realizar una mala maniobra legal. A Claudia del Pino la conoce de la Fiscalía Local de Linares, ella era abogada asistente. Se enteró de esta causa porque le llegó una denuncia, una transferencia de la Fiscalía Local de Rengo en que, de lo que recuerda, una persona la involucró en que contactaba o era parte de un contacto que hacían a imputados de delitos en manejo en estado de ebriedad en donde supuestamente se le pagaba a ella para que se le borrara ese delito o se modificara. Eso venía en la denuncia, era como lo vertebral de lo que recuerda. Ante esa denuncia, encontró que había algo raro que sobrepasaba su poder dentro de la clasificación de denuncias, por lo que fue a hablar con la administradora y la fiscal jefe. Les dijo que ellas vieran, él no lo podía clasificar. Sobre hechos similares en esa Fiscalía no tenía conocimiento.

Manifestó que Diego Vásquez es un amigo suyo. Diego un día cometió el delito de andar bajo la influencia del alcohol. Un día cerca a recibir esta denuncia de Rengo, le habló y le dijo que lo contactaron de la nada con la posibilidad de pagar para quitar el delito. Le dijo que eso ya es ilegal, que no se puede hacer. Diego tenía la idea, porque lamentablemente ya tenía algo con este mismo delito, lo vio como una opción y le dijo que por más amigos que fueran, no le iba a decir que lo hiciera. La conversación quedó ahí. Hubo una foto de por medio, en que lo reconoció a él



(indica hacia el acusado) pero era de costado. Con él se refiere al imputado (indica hacia el lugar en que estaba sentado en la sala de audiencias el acusado Vega Guerrero), que no sabe cómo se llama, pero Diego le mandó una foto. Se preguntó quién podía ser de los funcionarios, esa fue su primera pregunta, porque o a su amigo lo estafaban o había alguien dentro de la Fiscalía que cometía este tipo de delitos. Al imputado lo vio un par de veces no más. En ese momento lo encontró parecido a la pareja de Claudia del Pino. Como era de perfil y a una persona que vio tan pocas veces, tenía una idea, pero para él no era claro si era o no esa persona. Primero pensó en el universo de los funcionarios de la Fiscalía. Le dijo Diego que esto de eliminar el delito era por dinero, cree \$400.000. Diego primero no le contó, que lo iba a hacer, asumió que le había transmitido que no lo hiciera porque era ilegal. Cuando recibió la denuncia de Rengo y que este tipo de delitos se hacía y había una implicada, le habló a Diego y le dijo que de lo que se imaginaba pasaba era el responsable Claudia del Pino y que menos mal que no lo hizo, pero Diego le respondió que lo había hecho. Lo de las fotos fue en la primera conversación. Diego le dijo que se juntaron en un punto y, para asegurarse, tomó la foto. Cuando le dijo Diego que ya lo había hecho, con Diego hubo un quiebre.

Respondió que a la pareja de Claudia del Pino la había visto pocas veces, un simple hola y chao, como se saluda a cualquier persona que entra al estacionamiento o afuera de la Fiscalía. Sólo en esos lugares lo contactó. No recuerda haber conversado con la pareja de Claudia del Pino. Al interior de las oficinas de la Fiscalía no recuerda haberlo encontrado alguna vez. Trabajó en la Fiscalía hasta mediados de junio, cuando cumplió 5 años. Se fue por proyecciones laborales.

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña contestó que en esa foto se ve la cara de perfil del imputado. Cree se ve está sentado en una moto puede ser. Esa foto la sacó Diego, quien se juntó con el acusado para sacar esa foto. La tomó directamente del imputado en la moto estando de perfil. Diego le dijo que sólo el imputado lo había contactado de la nada para ofrecerle este servicio. Diego no mencionó a Claudia del Pino.

A la Defensa del acusado Vega Guerrero manifestó que la denuncia de Rengo decía que se pagaba a Claudia del Pino para que se borrara el delito. Sobre la foto de perfil, en ese momento podía pensar que era él, pero no asumió que era el imputado. Cuando explotó y vio que Claudia del Pino estaba implicada y la pareja



era la persona que lo contactaba, corroboró que por el perfil era él. Solamente ahí, no al principio, lo corroboró con seguridad.

El comisario de la Policía de Investigaciones Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez replicó la declaración que el señor Vásquez Riquelme prestó durante la investigación, con lo que se demostró que ella guarda estrecha relación con la que brindó ante estrados, estabilidad en el tiempo que refuerza su credibilidad.

En efecto, el señor Gutiérrez Gutiérrez también señaló que, dentro de las diligencias que realizó para esta causa, estuvo la de entrevistar a Diego Vásquez. A este joven lo contactaron por algunas causas archivadas de manera irregular. La causa de él estaba por un manejo en estado de ebriedad y cree tenía un archivo por lesiones o amenazas que no se condecía con el manejo en estado de ebriedad. La Fiscalía les entregó esa información, de Diego Vásquez y de otras personas. A Diego Vásquez le dieron cuenta de la investigación que llevaban a cabo, sobre causas que se habían archivado de manera irregular, porque el manejo en estado de ebriedad tenía otra tipificación. Primero, Diego estuvo muy reacio a asistir a la unidad o a entregar antecedentes. Al darle cuenta de los antecedentes que tenía antes, accedió a ir a la unidad, donde se le tomó declaración como imputado, le leyeron sus derechos y le pidieron aportar antecedentes de los hechos investigados. Primero negó todo, desconoció alguna irregular, pero al entregarle la información sobre los involucrados, sobre su causa, dijo que efectivamente él había sido detenido cree en marzo del 2020, el 12, por un manejo en estado de ebriedad. Que lo contactó telefónicamente una persona que se dijo llamar fiscal Cristian, quien le dio cuenta de todos los antecedentes de su detención en marzo por un manejo en estado de ebriedad, le entregó muchos antecedentes que le hicieron muy verosímil que la persona que le entregaba la información era relativamente confiable y le dio cuenta de la detención, del lugar de detención, de por qué lo detuvieron, de la alcoholemia, datos bien reservados. Accedió a tomar contacto con este señor, se pusieron de acuerdo en juntarse en la Shell de frente al hospital para sondear si era verdad lo que le indicaba la persona por el teléfono, el fiscal Cristian como lo denominó. Se acercó una persona en una moto XR250 blanco con rojo, como todos los que declararon con ellos dijeron, era de baja estatura, contextura gruesa y andaba con un papel escrito con todos los antecedentes de él escritos, lugar, fecha, alcoholemia y los antecedentes de detención que tenía de antes en la Fiscalía. Le mencionó una detención en San Carlos el 2016 o 2014. Eso le hizo mucho ruido respecto a que lo



que le indicaba este señor era verdad. La oferta que le traía era si estaba dispuesto a cancelar dinero, \$400.000, por el archivo o borrar la causa por manejo en estado de ebriedad. Con los antecedentes que le entregó, le pareció atractivo, coordinaron el pago en mayo en dos cuotas. Pagó dos veces, a principios y mediados de mayo \$200.000 a este caballero para que borrara la causa. El pago fue en el mismo lugar, en la Shell frente al hospital en calle Brasil. Posteriormente no tomó más contacto hasta que ellos lo contactaron para esa declaración.

Comentó que, sobre la causa de Diego Vásquez por manejo en estado de ebriedad, cuando le tomaron la declaración, estaba archivada, por lesión o amenazas. No estaba en tramitación. Vásquez estaba conduciendo, se trasladaba en su propio vehículo y de hecho se dedicaba a la parte agrícola, pozos de agua, redes de agua y necesitaba tener licencia de conducir, se movía mucho. También Vásquez aportó su teléfono, donde consta el llamado de una persona desconocida pero dio cuenta de la fecha de los llamados. Le hicieron un set fotográfico de reconocimiento de imputado y reconoció a Ricardo Vega. Sobre el celular de Vásquez, obtuvieron una conversación que tuvo con un señor al que le dice que no lo fuera a joder o cagar y dio cuenta de las fechas para la cronología de cuándo lo llamaron. También dijo que, para validar la conversación, al primer contacto le sacó una foto a Ricardo arriba de la moto, con casco, y aportó esa foto a la investigación, dando cuenta de la persona con quien se contactó. Dijo que le sacó la foto sin que se diera cuenta. Eran como dos o tres fotos. Ahí se ve a Ricardo sentado arriba de la moto, una XR250 blanco con rojo. Esa fotografía era de muy cerca, a lo más tres metros. Esa foto se aportó a la causa y se adjuntó al informe policial.

Al llegar a esta parte de su declaración, el Ministerio Público procedió a mostrar al señor Gutiérrez Gutiérrez la misma prueba que exhibió al testigo señor Vásquez Riquelme, la llamada en el auto de apertura como “Cinco fotografías entregadas por Diego Vásquez Riquelme que muestran a Ricardo Vega Guerrero”, y al verlas ratificó que en ellas se aprecia a Ricardo arriba de una moto, es un mensaje por Whatsapp de Diego Vásquez con fotografías. Esas fotos las aportó Vásquez y lo hizo para identificar a la persona a la que pagaba, según él, para que no lo jodiera.

Añadió que, sobre el pago del dinero, se solicitó a Vásquez aportar las cartolas bancarias a través del alzamiento voluntario del secreto bancario para validar que lo que decía era consistente. Decía que sacó en dos pagos de un cajero



automático el dinero y validaron que sacó en la fecha estimada \$200.000 en cada giro, la cantidad acordada con Vega, eso en mayo.

Sobre la causa de manejo, Vásquez manejaba antecedentes previos. Vásquez era profesional, tenía conocimientos y calle. Le sacó una foto al imputado sin que se diera cuenta. En su posterior declaración de septiembre entregó más antecedente y dijo que lo había sondeado por redes sociales, obtuvo información para validar un poco que quien lo contactaba era de fiar y obtuvo que esa persona era esposo de una persona que trabajaba en la Fiscalía y eso le dio más certeza de la persona que contactaba era más de fiar.

Refirió que el 24 de septiembre declaró Vásquez por segunda vez y dio cuenta de que tras la primera declaración que le tomaron a principios de agosto, fue a buscar a Ricardo Vega porque quedó la embarrada, lo involucraban en una situación en que el otro dijo no iba a pasar nada. Señaló que lo encontró cerca del colegio Alborada y le dijo que lo había metido en un problema, que quería la plata de vuelta, y acordaron ahí que le devolvería el dinero a fines de agosto del 2020. Al ver que no había contacto de parte de Vega para la devolución del dinero, llegó a la casa de Ricardo Vega en Las Vertientes tratando de ubicarlo para la devolución del dinero y dio con la casa, al llamar salió una persona, de como 1 metro 70, tez blanca, cabello castaño, en pijama y le dijo que buscaba a Ricardo y la persona le dijo que ya no vivía ahí, ante lo que le pidió que le dijeran a Ricardo que Diego Vásquez lo andaba ubicando. Posteriormente uno o dos días después, contactó a Ricardo y acordaron que en Chacón con Guacolda se haría la devolución del dinero. Llegó este joven en su vehículo, vio a Ricardo subir y le devolvió los \$400.000 en efectivo. Dijo que aprovechó de sacarle una foto al dinero para dar cuenta del pago, que Ricardo le pidió que no fuera a negar que le devolvieron el dinero y después no tuvo más contacto con él.

Acotó que Vásquez tenía guardado en su celular el nombre de Ricardo Vega como fiscal Cristian. Con esa conversación que había en su celular, también se aportó a la causa, se dejó registro de ella.

Tras decir ello, la Fiscalía exhibió a este testigo la prueba denominada en el auto de apertura como “Dos Captura de pantalla de mensaje de texto de conversaciones Diego Vásquez Riquelme con Ricardo Vega Guerrero”, y ante ella refirió que son del teléfono que manejaba Ricardo Vega, terminaba en 2100, del contacto guardado como fiscal Cristian, y corresponden a una conversación de



Vásquez con Vega, donde le pide que no le falle y le responde que no le va a fallar. Es una conversación de Diego con fiscal Cristian.

Cabe observar de esta declaración que si bien el señor Gutiérrez Gutiérrez manifestó que Diego Vásquez declaró ante él que en un momento fue a la casa de Ricardo Vega en Las Vertientes tratando de ubicarlo y allí lo atendió una persona que describió a la que dijo que buscaba a Ricardo que le dijeran a Ricardo que Diego Vásquez lo andaba ubicando, fue el mismo Diego Vásquez Riquelme quien, según testificó ante estrados, señaló y aclaró que en esa oportunidad preguntó por Ricardo Vega Guerrero, pero usando el nombre que le conocía, o sea, Cristian, lo que se condice con que en las fotografías de la conversación que acreditó el señor Gutiérrez Gutiérrez, Diego Vásquez Riquelme guardaba el contacto del acusado Vega Guerrero como fiscal Cristian.

El comisario de la Policía de Investigaciones Pedro Felipe Méndez Tapia recordó en similares términos esa declaración, pues refirió que fue testigo de la declaración de Diego Vásquez, que es una persona citada en esta causa como testigo y que señaló varios hechos. Dijo que fue detenido por conducción en estado de ebriedad o manejo en estado de ebriedad en dos ocasiones. Cuando llegó a declarar primero, el 3 de agosto del 2020, señaló que hacía poco tiempo lo habían detenido por segunda vez por este delito y que lo llamó una persona a su teléfono particular señalando que era funcionario de la Fiscalía, lo tiene guardado en su teléfono como fiscal Cristian. Esa persona le ofreció poder borrar esa causa, como si nunca hubiese cometido este delito, y aparte la entrega de su licencia de conducir, previo pago de \$400.000. Eso le llamó la atención porque trabajaba con su licencia. Por ello aceptó este trato y posteriormente pactó con esta persona juntarse y se juntaron en una Shell frente al hospital de Linares. La persona llegó en una moto tipo enduro blanco con rojo, no recordaba la marca, y primero le pagó \$200.000 que sacó de un cajero de ese servicentro. Tomó confianza con la persona porque traía un papel donde estaban anotadas las dos causas que tenía por manejo en estado de ebriedad. Por eso creyó en esto. Además le dijo él que tenía contactos dentro de la Fiscalía, por lo que iba a diligenciar esta causa. Dijo que solamente le señaló en general que tenía contactos en la Fiscalía. Tras cancelarle los \$200.000, quedó atento a llamados o requerimientos. Dijo que iba a agilizar la causa en la Fiscalía. Pasaron unos días, se juntaron nuevamente y le pasó el resto, los \$200.000. En esa oportunidad le dijo que la causa iba en curso y que estuviera tranquilo.



Agregó que luego Vásquez prestó otra declaración con ellos para complementar la anterior y en ella dijo que no había entrega de licencia y que se encontró con esta persona a la que entregó el dinero, a la que dijo que era investigado por la Policía de Investigaciones, que lo habían pillado por lo que la persona le pidió que no dijese nada, que le iba a devolver el dinero y que si lo citaban o algo no declarara. Luego esta persona le devolvió los \$400.000. Aparte, dentro de su declaración, dijo que averiguó a esta persona a la que le entregó el dinero y obtuvo que vive en villa Las Vertientes en Linares, de hecho fue a su domicilio y contactó a una mujer que vive en el domicilio, de tez blanca, pelo crespo y claro, a la que, al preguntarle por Ricardo Vega, le indicó que no estaba y le dejó dicho que lo contactara. Primero le daba el nombre de Cristian y después se enteró de que se llamaba Ricardo Vega. En esas averiguaciones que hizo obtuvo su nombre, Ricardo Vega, y que era casado con una persona que trabajaba en la Fiscalía llamada Claudia Pino. Cuando pagó, Diego le tomó fotografías una vez a la persona de la moto y esas fotografías están en un set fotográfico. Se puso de acuerdo con este señor para la devolución del dinero porque la Policía de Investigaciones estaba sobre él. Ese dinero fue devuelto por lo que dijo en la entrevista. Sólo le llamó la atención que la causa sí estaba archivada, lo corroboró el testigo.

Refrendando ahora lo relacionado con la detención por el delito de conducción en estado de ebriedad que describió el señor Vásquez Riquelme, el funcionario de Carabineros Carlos Alberto San Martín Almaza declaró, en lo pertinente, que trabaja actualmente en la comuna de Trehuaco, hacia la costa cerca de Quirihue, región del Ñuble. Trabaja ahí desde hace 4 o 5 meses. Antes trabajó en la tenencia Las Trancas y antes en la Primera Comisaría de Linares el 2020. Trabajó en Linares por dos años, como del 2018 al 2020. Acá hacía servicio a la población. Sobre estos hechos, el 5 de marzo del 2020 estaba de servicio de patrullaje con el suboficial Juan Jara y la carabinero Moira Yáñez cuando, como a las 5:00 am o 5:15 am, los enviaron a verificar un vehículo al parecer con el conductor en estado de ebriedad según denuncia anónima en CENCO. Fueron a verificar. Era en calle Yervas Buenas con Camino Las Vegas. Fueron con las características que les dio la Central, un jeep verde que hacía maniobras con peligro de accidente. Fueron, verificaron el jeep, lo fiscalizaron y su conductor era Diego Vásquez Riquelme. Le solicitaron su licencia de conducir, documentos del vehículo. La persona lo hacía con hálito alcohólico e incoherencia al hablar, por lo que se le realizó alcotest, que



arrojó estado de ebriedad, por lo que se concurrió al servicio de urgencia, donde se le realizó la alcoholemia de rigor, se le comunicó el motivo de detención y derechos y se le entregó al servicio de guardia. Se llamó al fiscal de turno que impartió instrucciones. El intoxilycer cree arrojó 1,70. Con la licencia de esta persona, no recuerda qué pasó por el tiempo. En ese momento, por instrucción del fiscal, el detenido quedó en espera de citación. Se confeccionó el parte por conducción en estado de ebriedad.

Al Querellante contestó que verificaron la identidad de los conductores con su licencia de conducir y cédula de identidad. Sobre las licencias de conducir, no recuerda qué pasó con ellas.

Respecto a lo mismo, el Ministerio Público incorporó la prueba denominada en el auto de apertura como “Causa RUC 2000284126-7 de la Fiscalía Local de Linares por el delito de conducción en estado de ebriedad seguida en contra Diego Vásquez Riquelme” que, además de refrendar lo manifestado por los señores Vásquez Riquelme y San Martín Almaza sobre la detención del primero, aporta el grado de alcoholemia con que se encontraba en dicha oportunidad. Así, en aquél documento se lee, en su página 1, un parte de detenidos, emanado de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares en que figura Fiscalía Local de Linares; N° de Parte 00592; fecha de detención 12/03/2020; hora de detención 05:20; funcionario a cargo del procedimiento Juan Luis Jara Sanhueza, suboficial; código del delito 14052 conducción estado de ebriedad con o sin daños o lesiones; fecha del delito 12/03/2020; hora del delito 05:15; lugar de ocurrencia vía pública; dirección Yervas Buenas/John Cristal de la comuna de Linares; identificación del detenido Diego Ignacio Vásquez Riquelme; N° de documento de identificación 17758448-7; lugar de detención Yervas Buenas/John Cristal de la comuna de Linares; documentos adjuntos declaración personal policial, acta alcoholemia, DAU Nro. 279512, verificación identidad, acta de derechos detenidos, alcotest; Relación de los Hechos: DIEGO IGNACIO VASQUEZ RIQUELME, 29 años, chileno, soltero, [...] detenido hoy a las 05:20 horas, en calle Jhon Cristal esquina Yervas Buenas de esta ciudad, por el Suboficial Juan Jara Sanhueza, Cabo 2do. Carlos San Martín Almarza y la Carabinero Moira Yáñez Castillo, todos de esta dotación y de servicio en la población, pasa a disposición de esa Fiscalía, por el siguiente hecho: porque momentos antes de su detención el personal aprehensor recibió un comunicado radial de la Central de Comunicaciones de Carabineros Linares, indicándoles que se



trasladaran a calle Yervas Buenas con camino Las Vegas de la comuna de Linares, en atención a que habían recibido un llamado telefónico al nivel 133 denunciando el vehículo P.P.U. ZV-4328, efectuaba maniobras con peligro de accidente y su conductor al parecer lo hacía en estado de ebriedad. Conforme a lo anterior se trasladaron al lugar antes señalado, verificando el station wagon, marca Ford, modelo Escape XLS, color verde, año 2006, Ptte. ZV-4328, circulaba por calle Yervas Buenas en dirección oriente y su conductor lo hacía en forma errática en zigzag, procediendo a fiscalizarlo siendo identificado como el imputado anteriormente señalado, pudiendo constatar que lo hacía en estado de ebriedad, lo constó por su fuerte hálito alcohólico, incoherencia al hablar, rostro congestionado e inestabilidad al caminar, por lo anterior se le efectuó una prueba respiratoria con el equipo Drager, el que arrojó como resultado 1.71 G/L en la sangre, siendo informado que se encontraba detenido por conducir en estado de ebriedad; alcoholemia: no obstante a ello el conductor fue trasladado al Servicio de Urgencia del Sar San Juan de Dios de Linares, donde le constataron lesiones y se le realizó la alcoholemia, depositando la muestra de sangre extraídas en el frasco Nro. 653; y que, sobre la licencia: el imputado al momento de ser sorprendido, conducía con licencia clase B/C de la Ilustre Municipalidad de Linares, al día. Al Final se aprecian dos firmas ilegibles y un timbre de la Primera Comisaría de Linares.

Luego figura un dato de atención de urgencia, emanado del SAR San Juan de Dios de Linares, en que se lee que la fecha de ingreso es 12/03/2020; que el nombre es Vásquez Riquelme Diego Ignacio; que el motivo de la consulta es Alcoholemia y constatación de lesiones; que llegó en un vehículo policial de Carabineros; que el diagnóstico complementario fue sin lesiones, hálito OH; y que se le efectuó una alcoholemia. Al final del documento se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Benítez Navas Wilmer Médico General.

Luego figuran dos boletas de alcotest tituladas Dräger, en que se lee que la fecha es 2020.03.12; que la hora es 05:20; que el nombre es Diego Ignacio Vásquez Riquelme; y que la prueba del examinado fue 1.71 g/L. Al final de los documentos se aprecia una firma ilegible.

Luego figura el Informe de Alcoholemia N° 07-TAL-OH-1915-20, correspondiente a la causa 2000284126-7 de la Fiscalía de Linares, fechado en Talca el 1 de abril del año 2020. En él también se lee que “el funcionario administrativo que suscribe certifica que la muestra para este examen de alcoholemia se recibió



como perteneciente a Don (a): DIEGO IGNACIO VÁSQUEZ RIQUELME C.I. 17758448-7 Siendo tomada el 12/03/2020 a las 05:35 hrs. en el SAR SAN JUAN DE DIOS. Por el Dr.(a) WILMER BENÍTEZ NAVAS [...] según consta en la boleta de remisión de la muestra. El Perito QUÍMICO FARMACÉUTICO LEGISTA que suscribe certifica que el examen científico de dicha muestra, asignada con el 07-TAL-OH-1915-20 dio un resultado de 2,04 (dos coma cero cuatro) gramos por mil. Al final se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Mauricio Recabal Sandoval, Perito Ejecutor, Servicio Médico Legal de Talca.

Luego figura una pieza titulada “Decisión de Archivo Provisional”, fechada en Linares el 12 de junio del año 2020. En ella se aprecia, además, en su parte superior, un logo en que se lee Fiscalía Ministerio Público de Chile; R.U.C. 2000284126-7; Fecha denuncia 13-03-2020; Delito, Fecha en que se cometió el delito, Hora en que se cometió el delito y Lugar en que se cometió el delito, amenazas simples contra personas y propiedades art. 296 N° 3, 31-03-2020 2015 Maipú con Lautaro, Linares; víctima Nombre: NN Domicilio: (en blanco); Imputado Nombre: Diego Ignacio Vásquez Riquelme; Vistos: 1.- Que la presente investigación se encuentra en estado de tomarse una decisión de término. 2.- Que a la fecha no aparecen antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. 3.- Que lo anterior se comunicará a la víctima del delito investigado, mediante carta enviada a su domicilio, a fin de que informe si cuenta con nuevos antecedentes, caso en el cual se procederá a la reapertura de la investigación. 4.- Que no se ha producido aún la intervención del Juez de Garantía en este procedimiento. 5.- Lo dispuesto en los artículos 109 letra d) y 167 del Código Procesal Penal; SE DECIDE: Archivar provisionalmente esta investigación. Archívese y sométase si corresponde a la aprobación del Fiscal Regional; abajo Carola Milena Dagostini Ibáñez Fiscal Jefe Fiscalía Local de Linares (sin firma); y al lado un timbre circular en que se lee Fiscalía Local, República de Chile, Ministerio Público.

Luego figura un documento titulado “Comunicación”, fechado en Linares el 12 de junio de 2020, en que se aprecia el número 2000284126-7; que “con el fin de mantenerle informado/a respecto de su denuncia recibida en la Fiscalía Local, mediante Parte Policial de fecha 13-03-2020, que da cuenta del delito de: AMENAZAS SIMPLES CONTRA PERSONAS Y PROPIEDADES ART. 296 N° 3, me permito comunicar a usted; que a la fecha los antecedentes recibidos resultan



insuficientes para lograr el esclarecimiento de los hechos, determinar algún responsable de los mismos o decretar alguna diligencia útil de investigación, por lo que solo en el evento que exista o surja otro antecedente será posible continuar con ésta indagación”; abajo Carola Milena Dagostini Ibáñez Fiscal Jefe Fiscalía Local de Linares (sin firma); y al lado un timbre circular en que se lee Fiscalía Local, República de Chile, Ministerio Público.

Con dicho instrumento, congruente con las otras probanzas ya expuestas, puede darse por certeramente establecido que el informe de alcoholemia respectivo dio por resultado de 2,04 gramos por mil de alcohol en la sangre respecto del imputado Samuel Andrés Alarcón Urrutia.

Centrándonos ahora el supuesto consistente en que, en conocimiento de que Diego Ignacio Vásquez Riquelme era imputado en una causa por el delito de conducción en estado de ebriedad, Claudia del Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente en, a lo menos, una descripción de la conducta punible a que se refería dicha causa más el nombre, dirección y número telefónico del imputado Diego Ignacio Vásquez Riquelme, así como la graduación alcohólica con que fue sorprendido, con el fin de que solicitara al mismo beneficios económicos a cambio de terminar su causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación, importante es, para iniciar, tener presente que Ricardo Ignacio Vega Guerrero declaró ante estrados y corroboró dicha dinámica, describiéndola en definitiva como un modus operandi que acordó con Claudia del Pino Acuña y que aplicaron en múltiples casos, entre ellos el hecho inmediatamente anterior, éste y otros que se han analizado y más adelante se analizarán.

Dado que la declaración ante estrados del acusado Vega Guerrero ya fue extractada anteriormente, no la repetiremos para evitar redundar. Sin perjuicio de ello, recordaremos que, en lo más pertinente, señaló que un día su esposa Claudia dijo que estaba cagada de plata y que sabía cómo ganar plata. Le dijo que era con el tema de la movida de las licencias y que era fácil para ella porque eran causas de ella y nadie se iba a meter a esas causas. Le preguntó si estaba segura y dijo que la única forma de que la pillaran era que algunos de los que ayudaran, “sapearan”. Así lo hizo. Ella sacaba la información del computador y escribía en un cuaderno que incautó la Policía de Investigaciones, donde estaba todo escrito con letra de ella, escribía los RUC y le pasaba a él un papel con el nombre de la persona, los grados



alcohólicos y el número de teléfono y él la llamaba y le decía que se llamaba Cristian, que había una movida y si le interesaba. Unos le decían que sí y otros que no. Con los que accedieron, se juntaron en Linares, les explicaba la movida en persona y le decían que sí. Ahí él iba a la casa, le decía a ella que este “guevón” dijo que sí y ella hacía el tema en el computador.

También señaló que, sobre el caso de Diego Vásquez, éste era un cabro que trabajaba en el campo y también lo llamó y se juntaron en la Iansa. Él les pagó \$400.000 en dos cuotas, una en el colegio Alborada y otra en la Shell de calle Brasil, ahí le pagó los otros \$200.000 en efectivo. A él también se le dio una carta de archivo. Era la tercera carta de archivo. Después, como trabajaba en taxis y siempre se lo topaba, quería la plata. Le dijo a Claudia y Claudia ese día le pasó la plata y él se la devolvió a Diego. Diego le pedía la plata porque decía que si no iban a tener problemas. A él fue a único que devolvió la plata. Después que allanaron la casa, los llamaron a declarar y ahí él (Diego) llegó hartas veces a la casa, él ya no vivía en la casa. Claudia lo llamaba y le decía que andaba ese gallo y le dijo que el cabro quería la plata. Claudia le pasó el dinero, 400, se los pasó en una cuota y él lo devolvió a Diego Vásquez y Diego ese mismo día cree fue a la Policía de Investigaciones a decir que le devolvió la plata.

Ya se consignó que este Tribunal concluyó que esos dichos dan cuenta de un modus operandi preacordado por ambos acusados que se ajusta al que en este fallo se tuvo por suficientemente probado y que, para formar tal estándar de convicción, no consideramos únicamente dicha declaración, sino que también múltiples razonamientos y corroboraciones que debidamente se demostraron durante la audiencia de juicio oral.

Dado que los mismos se expusieron latamente al analizar el hecho que en la presente motivación singularizamos con el N° 2.8 y que tales consideraciones son, mutatis mutandi, plenamente aplicables al hecho punible ahora en comento, daremos a aquéllas por reproducidas en este punto para no extender innecesariamente en demasía este fallo.

Siguiendo con el presupuesto fáctico que tuvimos por acreditado consistente en que, consecuentemente y con aquella información que Claudia del Pino Acuña le entregó en su poder, Vega Guerrero contactó a Vásquez Riquelme a los días de su detención en razón de la causa recién singularizada y le solicitó \$400.000 a cambio de que Claudia del Pino Acuña terminara la referida causa, a lo que Vásquez



Riquelme accedió, pagando posteriormente dicha suma a Vega Guerrero, recordaremos que en sus declaraciones, que ya extractamos, el acusado Vega Guerrero y el testigo Diego Vásquez Riquelme estuvieron contestes en ello.

Destacable es que el último es un testigo que reconoció hechos que le podrían ser perjudiciales y del cual ninguna posible animadversión hacia los acusados o ganancia secundaria para faltar a la verdad siquiera se insinuó por las Defensas.

Sobre la acreditación de la generación por parte de la acusada del Pino Acuña de la información que entregó al acusado Vega Guerrero para contactar a Diego Ignacio Vásquez Riquelme, nuevamente y para evitar una larga repetición, nos remitimos a lo expuesto en relación con el modus operandi que tuvimos por suficientemente probado.

Ahora, en lo tocante a la consecuente conducta desplegada por la acusada del Pino Acuña consistente en que, contra el mérito de la causa, archivó provisionalmente la misma y cambió en dos registros del SAF la calificación jurídica de conducción en estado de ebriedad a amenazas simples, obstaculizando con ello gravemente la investigación, todo ello resultó debidamente establecido por lo aportado por la testigo Karem Silvana Torres de La Fuente con la exposición revestida de los atributos que ya destacamos y respecto de la cual damos acá por reproducida la primera parte de su declaración y las aclaraciones que aportó, porque ya fueron extractadas al analizar los hechos relacionados con la causa RUC 1900060766-8.

Sin perjuicio de ello, en lo atinente a los presupuestos que ahora revisamos, la señora Torres de La Fuente, al serle exhibidas las pertinentes fotografías del que se llamó en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA”, que corresponden a las que van de la N° 113 a la N° 122, señaló que la primera corresponde a una causa en la pantalla tramitar caso en SAF, asignada a Carola D’Agostini, por manejo en estado de ebriedad, causa terminada, con el RUC 2000284126-7. Luego ve una pantalla de trazabilidad de SIGE de la actividad que se solicitó, un archivo provisional sin consulta que se solicitó en el RUC terminado en 126-7, solicitada por Claudia del Pino el 11 de junio del 2020, procesada por SIGE, el delito es manejo en estado de ebriedad. En los movimientos de solicitud de gestión es Claudia del Pino, una solicitud de archivo provisional sin consulta. Luego ve la historia de la causa del



RUC terminado en 126-7, marcada esa decisión de archivo provisional. Lee la historia que sigue según el SAF, con una sentencia definitiva digitada el 30 de diciembre del 2020. Luego ve el detalle de la decisión de archivo provisional en el RUC terminado en 126-7, del 12 de junio del 2002, aparece digitando la cuenta F703CdelPino. Luego ve el escrito de decisión de archivo provisional del mismo RUC, por amenazas simples. En la fotografía anterior el delito es manejo en estado de ebriedad y en esta es el mismo RUC pero el delito es distinto. No es el mismo delito. No puede salir en SAF un delito distinto porque es el delito que está guardado en la base de datos. Luego ve una decisión de archivo provisional del 12 de junio de 2020, con el pie de firma de Carola D'Agostini, que corresponde al RUC terminado en 126-7. Luego ve la historia del caso del mismo RUC, está marcada la comunicación a la víctima, digitada el 12 de junio del año 2020. Lee los otros movimientos. Luego ve el detalle de esa comunicación a la víctima del mismo RUC, aparece digitándola o generándola la cuenta F703CdelPino. Luego ve una comunicación, sin víctima, en el mismo RUC, del 12 de junio del 2020, se comunica el delito de amenazas simples. Sobre ese delito, para que no arroje un error de congruencia el sistema, el escrito siempre tiene que leer desde la relación de SAF lo que está ingresado en el SAF. Ahí hay una incongruencia con la pantalla anterior. En cuanto a las amenazas simples, para que no arroje una incongruencia, puede estar en NN, pero en la pantalla anterior no aparece ese delito.

Respecto a ese punto y también relacionado con lo que se expuso en relación con el hecho singularizado en este fallo como 2.8 en cuanto a que allí se estableció que la acusado del Pino Acuña cambió en un registro del SAF la calificación jurídica de conducción en estado de ebriedad a hurto de hallazgo, la señora Torres de La Fuente aclaró al Tribunal, sobre una situación análoga, que en la lámina 111, que lleva a la 112, que muestra un escrito de comunicación, en la primera se ve como delito conducción en estado de ebriedad, esto se hace masivo en el proceso nocturno de archivos provisionales. Ahí hay una plantilla tipo, que se graba en SAF, pero como todos los documentos SAF, se hace doble clic, se abre el Word y se puede modificar. Sobre quién colocó lesiones leves, eso lo modificó una persona porque el proceso masivo toma los datos de SAF, tomó la conducción en estado de ebriedad y generó la carta, siempre trae el delito SAF. En este caso no lo trae porque alguien lo modificó, el SIGE no hace modificaciones del delito al construir la carta, usa el delito del SAF en la carta y la decisión de archivo. Esta



carta se desprende de la persona que hizo la solicitud, pero esto va al proceso masivo nocturno que construye la decisión de archivo y la carta de comunicación y los deja en SAF como un Word, pero siempre toma los datos de SAF, por lo que si hay una carta con un delito distinto de SAF es porque lo modificó una persona. Este archivo Word es lo que estaba guardado en la cuenta de la lámina 111. Eso quiere decir que cuando uno le da doble clic a esa ubicación, una persona puede modificar la carta y queda grabado en la misma ubicación. Lo que generó el proceso masivo claramente alguien lo modificó después. El correo puede ir una vez a la semana, no es que se genera la carta y al otro día se lleva la carta a la víctima. El proceso masivo siempre toma el delito de SAF y lo guarda en la misma ubicación. Esa intervención de una persona para modificar fue posterior al proceso de masivo. Habría que ver cuándo se despachó la carta para saber si lo que se comunicó a la víctima fue la carta que elaboró el proceso masivo o la carta con la modificación que efectuó una persona. No va de la mano el despacho de correo versus el proceso masivo.

Sobre lo que se acaba de exponer, también debe destacarse que, en consonancia con lo que antes ya había explicado la señora Torres de La Fuente, se trata de imágenes tomadas desde los sistemas SIGE y SAF del Ministerio Público, específicamente relacionadas con actividades registradas en el mismo respecto de la causa RUC N° 2000284126-7, y que aquéllas revelan, dado el historial de dicho proceso y las credenciales de usuario que se muestran, que en esa plataforma informática y RUC la usuaria Claudia Andrea del Pino Acuña al menos, como se sostiene en las acusaciones, ejecutó un archivo provisional de la investigación el día 12 de junio del año 2020, cuyo contenido en ese sentido puede observarse en las fotografías N° 118 y N° 119, y cambió en dos registros del SAF la calificación jurídica de conducción en estado de ebriedad a amenazas simples, como puede apreciarse en las fotografías N° 118 y N° 122, en relación, dado lo aclarado por la señora Torres de La Fuente, con las fotografías N° 117 y N° 121 respectivamente, que muestran a qué cuenta están adscritas las ubicaciones de dichos archivos.

Finalmente, para este Tribunal resulta evidente, considerando lo dispuesto en el artículo 167 del Código Procesal Penal, que por el tenor de la carpeta investigativa ya expuesta y las declaraciones del acusado Vega Guerrero y de los señores Vásquez Riquelme y San Martín Almarza, aquél archivo provisional se dispuso por la acusada del Pino Acuña contra el mérito de la investigación y obstaculizándola, pues evidentemente al 12 de junio del año 2020 en ella figuraban



antecedentes que permitían desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos.

Sobre el grave entorpecimiento que significa para el normal desarrollo de una investigación la incorporación a los sistemas informáticos de la Fiscalía de una actividad como el archivo provisional, nos remitimos a lo ya expuesto sobre el punto para no redundar.

En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.11 de la novena motivación de este fallo, primero, en particular respecto de la nomenclatura del delito, la judicialización previa de la causa y el archivo provisional que se dio por probado realizó la acusada del Pino Acuña en la plataforma computacional de la Fiscalía, por lo aportado por la testigo Karem Silvana Torres de La Fuente con la exposición revestida de los atributos que ya destacamos y respecto de la cual damos acá por reproducida la primera parte de su declaración y las aclaraciones que aportó, porque ya fueron extractadas al analizar los hechos relacionados con la causa RUC 1900060766-8.

Sin perjuicio de ello, en lo atinente a los presupuestos que ahora revisamos, la señora Torres de La Fuente, al serle exhibidas las pertinentes fotografías del que se llamó en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA”, que corresponden a las que van de la N° 123 a la N° 132, señaló que la primera corresponde a la pantalla de tramitar casos de una causa asignada a Alexie Cristóforo del RUC 2000014933-1 con dos delitos, causa suspendida. Luego ve la historia del caso del mismo RUC, está marcado el archivo provisional digitado el 27 de mayo del año 2020, después viene la comunicación a la víctima y otros, y antes una recepción de documentos y otros. Según el sistema y las indicaciones del fiscal regional, es extraño porque está el archivo provisional, una orden de detención, una causa judicializada, audiencias. Luego ve una pantalla SIGE de trazabilidad, de una decisión de término por archivo provisional, en el mismo RUC terminado en 933-1, solicitada por Claudia del Pino, es un archivo sin consulta. Sobre los movimientos de la solicitud, fue solicitada por Claudia del Pino y se ejecutó automáticamente por el SIGE. Claudia del Pino solicitó este archivo. Luego ve un detalle de esa actividad SAF del mismo RUC, y aparece gestionando la decisión la cuenta F703CdelPino. Luego ve un escrito de decisión de archivo provisional, del RUC terminado en 933-1, el delito es lesiones menos graves, de fecha 27 de mayo del 2020. Luego ve la continuación del



documento, que indica que se decidió archivar provisionalmente, con pie de firma de Carola D'Agostini, Luego ve la historia del caso del mismo RUC, está marcada la comunicación a la víctima del 27 de mayo del 2020. Antes se denota que la causa está judicializada, por lo que, según los parámetros de la Fiscalía, estando la causa judicializada no se puede aplicar ese archivo. Luego se revocó esa decisión de término y otros. Luego ve una pantalla del mismo RUC terminado en 933-1, es el detalle de la actividad SAF comunicación a la víctima, y genera ese documento la cuenta F703CdelPino. Luego ve el detalle del mismo RUC y de esa actividad de comunicación de la víctima, y aparece que efectúa la solicitud la cuenta F703CdelPino.

Sobre lo que se acaba de exponer, también debe destacarse que, en consonancia con lo que antes ya había explicado la señora Torres de La Fuente, se trata de imágenes tomadas desde los sistemas SIGE y SAF del Ministerio Público, específicamente relacionadas con actividades registradas en el mismo respecto de la causa RUC N° 2000014933-1 referida a lesiones menos graves, y que aquéllas revelan, dado el historial de dicho proceso y las credenciales de usuario que se muestran, que en esa plataforma informática y RUC la usuaria Claudia Andrea del Pino Acuña ejecutó un archivo provisional de la investigación el día 27 de mayo del año 2020, cuyo contenido en ese sentido puede observarse en la fotografía N° 128, y que antes de esa actividad se registran en el SAF una serie de actuaciones judiciales, tales como un “Fija día y hora para audiencia” de fecha 4 de marzo del año 2020, un “Fija día y hora para audiencia” de fecha 4 de febrero del año 2020, y una “Audiencia de control de detención” de fecha 4 de febrero del año 2020, todo ello según se observa en la fotografía N° 125.

Finalmente, a este Tribunal resulta evidente, considerando lo dispuesto en el artículo 167 del Código Procesal Penal, que por el tenor de la carpeta investigativa ya expuesta y las resoluciones previas que se estableció dictó en la misma causa el Juzgado de Garantía de Linares, que aquél archivo provisional se dispuso por la acusada del Pino Acuña contra el mérito de la investigación y obstaculizándola, pues al 27 de mayo del año 2020 ya se había producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento.

Sobre el grave entorpecimiento que significa para el normal desarrollo de una investigación la incorporación a los sistemas informáticos de la Fiscalía de una



actividad como el archivo provisional, nos remitimos a lo ya expuesto sobre el punto para no redundar.

En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.12 de la novena motivación de este fallo, resultaron debidamente establecidos, primero, con lo testificado por Enrique Leopoldo Torres Valenzuela, quien manifestó en la audiencia de juicio oral que se dedica a la construcción dentro de la región del Maule. No tiene licencia de conducir. Sabe que hace un tiempo atrás lo pilló Carabineros bajo la influencia del alcohol y lo llevaron detenido. Estuvo en el calabozo, lo soltaron al día siguiente y le dijeron que podía ir a retirar su licencia a la Fiscalía. Lo detuvieron el 23 de marzo del 2020, como a las 12:00 o 1:00 en el camino a Yervas Buenas, en la circunvalación. Iba conduciendo una camioneta Mazda roja. Lo controlaron primero los militares y después llegó Carabineros. Tenía grados de alcohol. Le hicieron la alcoholemia y el alcotest primero. Arrojó no recuerda cuánto. Sí había consumido alcohol. Lo dejaron en libertad al día siguiente, a las 5:00 am. Su licencia se la retuvieron y ellos le dijeron que podía ir a retirarla mientras salía el juicio o algo así por mientras. Fue a retirarla y le dijeron que su licencia no estaba allá.

Agregó que después, durante unos días, lo llamó un señor diciéndole que sabía todos sus datos. Sabía su nombre, lugar de detención, todo lo que contó antes. Le dijo que si quería recuperar su licencia. También sabía su nombre, su RUT, dónde vivía. Él no tenía antecedente penales. Sí había sido detenido antes por la misma causa 6 o 7 años atrás. Esa información la sabía esta persona. La persona le dijo, que lo llamó de la Fiscalía, se supone era algo serio. Le dijo si quería recuperarla, tenía que pagar \$500.000. Le dijo que le iban a quitar la licencia 5 años. La primera vez se la quitaron 2 años. La persona que lo llamó era un hombre. Dijo que él tenía un amigo en la Fiscalía y ese amigo le podía archivar la causa. Le preguntó qué significaba eso y le respondió que su causa no iba a existir. Le preguntó si era legal y le respondió que sí. No sabía si era legal, sí sospechó que era algo medio tráfugo. A él le interesó porque él se movía con su licencia. El contacto de la persona lo archivó y le colocó Cristian policía. Después se juntó con esta persona, a los días. Le dijo que si le entregaba la plata, él le podía hacer el trámite y le respondió que sin que no tuviese algo concreto no le podía dar la plata. Con algo concreto se refería a que le entregaran la licencia y un certificado que acreditara que era legal. Él le dijo que no había problemas. Se juntaron en el camino



a Panimávida en la Circunvalación. No había visto a la persona antes. Dijo que él iba a llegar en moto y llegó en una XR250 color rojo con blanco. Sobre las características físicas de esa persona que se acercó en la moto, era de estatura media, más menos gordito, cara redonda, de unos 30 años. Era de un metro 70 o 60, más bajo que él. Lo reconoce en la sala de audiencias, está al fondo (indica hacia donde está el acusado Vega Guerrero en la sala de audiencias). Cuando aceptó la oferta de los \$500.000 le dijeron que era en efectivo y todo al tiro. Él juntó ese dinero. Cuando se juntó con él andaba con el dinero.

Señaló que después lo llamó para saber qué pasaba y él le dijo que su causa estaba archivada, pero que no tenía su licencia y él le dijo que sin licencia no había dinero, y sin comprobante. Él igual había aceptado la oferta inicialmente. Después lo llamó en varias ocasiones y nunca más le contestó.

Manifestó que, sobre esa causa de manejo en estado de ebriedad, después se enteró porque le llegó una citación de la Policía de Investigaciones. Le tomaron declaración y le preguntaron todo lo que le preguntaron ahora. Ahí estaban “ud.” (indicó al fiscal que le estaba dirigiendo las preguntas) y otra persona. Ahí contó lo mismo que ahora. Sobre su celular, guardó el contacto de esta persona como Cristian policía. Eso se vio cuando declaró y lo entregó. Ese día lo hicieron reconocer a personas y reconoció al joven que está ahí al fondo. Tras esa declaración, lo llamaron de la Fiscalía de acá porque su causa estaba abierta de nuevo. Eso no recuerda cuándo fue. Al año siguiente más menos. Lo que pasó fue el 2020, el 2021 le habrá llegado. En esa causa está, le quedan como dos meses para recuperar su licencia. Esa causa está vigente, él no puede manejar. Su licencia está retenida por dos años. Eso fue en el Tribunal de acá, en este mismo piso o abajo, en una sala como ésta. Tenía licencia B. Tuvo que pagar una multa, cree media UTM, y firma mensual por un año en el centro. Eso fue ya hace un año.

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña contestó que cuando lo detuvo Carabineros por el manejo, fue el 23 de marzo del 2020. Eso fue como a la medianoche y lo dejaron en el calabozo hasta como a las 5:00. Estábamos en pandemia, el primer día del toque de queda. Le dijeron que se podía ir y le instruyeron que en la Fiscalía estaba retenida su licencia y podía ir a preguntar por ella mientras saliera el juicio y acá se la iban a quitar. Le dijeron que era la Fiscalía la que guardaba la licencia. No se la entregaron allá porque no encontraron su licencia. Eso le dijeron, nada más. Lo atendieron por la ventanilla, porque estaba



cerrado. Puede ser que no verificaran porque era el primer día de pandemia. La señorita se dio una vuelta y le dijo que no estaba. Tenía claro que tenía que retirar la licencia en la Fiscalía. Trató desde el primer minuto solamente con la persona que reconoció acá.

A la Defensa del acusado Vega Guerrero respondió que cuando fue detenido por Carabineros, él andaba con su licencia de conducir. La entregó a Carabineros. En la Fiscalía no estaba su licencia y le explicaron que volviera en unos días más. Después no supo si la licencia estuvo en la Fiscalía. Nunca recuperó su licencia.

El comisario de la Policía de Investigaciones Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez replicó la declaración que el señor Torres Valenzuela prestó durante la investigación, con lo que se demostró que ella guarda estrecha relación con la que brindó ante estrados, estabilidad en el tiempo que refuerza su credibilidad.

En efecto, el señor Gutiérrez Gutiérrez también señaló que en la investigación de esta causa también se contactó a Enrique Torres y tuvo que evacuar su declaración. Torres dio cuenta de que fue contactado por una persona que le ofreció poder archivar o cerrar la causa en su contra por manejo en estado de ebriedad por la que fue detenido. Le ofrecieron \$500.000 para el cierre de la causa. Con esa persona tuvo un contacto telefónico y después se reunieron en la Circunvalación Norte con camino a Yervas Buenas, se entrevistó con esta persona que le ofreció cerrar la causa a cambio de esos \$500.000, quien le dio cuenta de antecedentes de su detención, lugar, fecha, antecedentes que mantenía en la Fiscalía,. Que como requisito solicitó que le entregaran su licencia. Le pareció atractivo, quedaron de acuerdo en eso. Juntó el dinero, esperaba que Ricardo lo llamara para acordar el pago en contraprestación de su licencia de conducir, lo que daría validez a lo que Ricardo le ofrecía, pero se juntaron y su licencia no estaba, por eso se negó al pago mientras no apareciera la licencia, y no se llegó al acuerdo.

Corroborando la detención por conducir en estado de ebriedad que refirió el señor Torres Valenzuela, el funcionario de Carabineros de Chile Carlos Andrés Mora Zenteno testificó que trabaja en la primera comisaría de Linares desde el 2021 cree. Ha estado en otras unidades en Linares, en la SIP, en un destacamento y ahora nuevamente en la Primera Comisaría. Este fue un procedimiento el 23 de marzo del 2020, estaba de servicio nocturno con el cabo Nain Vega cuando como a las 00:15 horas los envió CENCO a verificar un procedimiento por un conductor en estado de ebriedad a la Ruta 35 con la Circunvalación Norte, donde mantenía un retenido



personal de ejército. Llegó y se entrevistó con el cabo Vargas del ejército, que fiscalizaba por la pandemia y el toque de queda. Ese oficial le dijo que fiscalizaron una camioneta roja y el conductor lo hacía en estado de ebriedad. Al entrevistar al conductor, tenía fuerte halito alcohólico e incoherencia al hablar. Era Enrique Leopoldo Torres Valenzuela. Lo trasladaron al SAR San Juan de Dios para la alcoholemia voluntaria y constatación de lesiones. También en el lugar le hicieron la prueba respiratoria y arrojó 1.12 gramos de alcohol en la sangre. Lo trasladaron a la unidad y siguieron el procedimiento de rigor. La Fiscalía instruyó apercibirlo por el artículo 26 y la libertad a las 5:00 am, por el toque de queda, y hacer presente la falta al toque de queda. Sobre la licencia, fue retenida, lo que significa que se adjuntó al parte policial y se envió a la Fiscalía.

Respecto a lo mismo, el Ministerio Público incorporó la prueba denominada en el auto de apertura como “Causa RUC N° 2000319388-9 por el delito de conducción en estado de ebriedad seguida en contra de Enrique Leopoldo Torres Valenzuela” que refrendar lo manifestado por los señores Torres Valenzuela y Mora Zenteno sobre la detención del primero. Así, en aquél documento se lee, en su página 1, un parte de detenidos, emanado de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares en que figura Fiscalía Local de Linares; N° de Parte 00678; fecha de detención 23/03/2020; hora de detención 00:25; funcionario a cargo del procedimiento Carlos Andrés Mora Zenteno, cabo 2do; código del delito 14052 conducción estado de ebriedad con o sin daños o lesiones; fecha del delito 23/03/2020; hora del delito 00:02; lugar de ocurrencia vía pública; dirección Ruta L-25/Circunvalación Norte de la comuna de Linares; identificación del detenido Enrique Leopoldo Valenzuela Torres; N° de documento de identificación 16273294-3; lugar de detención Ruta L-25/Circunvalación Norte de la comuna de Linares; documentos adjuntos declaración personal policial, declaración testigo, derechos del detenido, alcoholemia voluntaria, prueba respiratoria, verificación de identidad y licencia de conducir B; Relación de los Hechos: Enrique Leopoldo Torres Valenzuela, 34 años, [...] retenido hoy a las 00:02 horas en Ruta L-25 con avenida Circunvalación de esta ciudad, por el Cabo 1ro. de Ejército Rodolfo Sebastián Vargas Clave [...], de servicio en la población debido a la contingencia nacional aplicable al estado de excepción constitucional de catástrofe, a raíz del brote mundial del virus denominado coronavirus 2019 o COVID-19 [...] y entregado a las 00:25 horas de hoy al Cabo 2do. Carlos Mora Zenteno y Cabo 2do. Javier Lavín



Vega, ambos dotación de la Subcomisaria Cristian Martínez Badilla, dependiente de esta Unidad y de servicio en la población, pasa a disposición de esa Fiscalía, por el siguiente hecho: Porque a las 00:15 horas aproximadamente, la central de comunicaciones radiales de Carabineros Linares CENCO, dispuso la concurrencia del dispositivo hasta la intersección de Ruta L-25 con avenida Circunvalación, en atención que personal de ejército había solicitado la presencia policial en el lugar antes mencionado, con la finalidad de hacer entrega de una persona que había sido sorprendida conduciendo en estado de ebriedad y en horario de toque de queda, mientras realizaban fiscalización en la vía pública. Una vez en el lugar se entrevistaron con el funcionario de ejército antes identificado, hizo entrega de Enrique Leopoldo Torres Valenzuela, Cédula de Identidad Nro. 16.273.294-3, constatando que lo hacía en estado de ebriedad, denotado por su fuerte hálito alcohólico, motivo por el cual, fue trasladado hasta el SAR San Juan Dios para realizar constatación de lesiones voluntaria, solicitando a Torres Valenzuela en el lugar una prueba respiratoria, arrojando 1,13 g/l. procediendo a su detención, dándole a conocer el motivo de ello y los derechos que le asisten; Prueba Respiratoria: conforme a lo anterior a las 01:06 horas, se le efectuó una prueba respiratoria con el equipo Drager, el que arrojó como resultado 1,13 G/L en la sangre; Alcoholemia: Realizada en el mismo recinto asistencial por el facultativo antes identificado, quien además de constatar sus lesiones le realizó la alcoholemia, depositando la muestra de sangre extraídas en el frasco Nro. 667; Licencia De Conducir: El conductor al momento de su fiscalización portaba su licencia de conducir clase B de la Ilustre Municipalidad de Colbún, vigente al 18.09.2006, la cual se adjunta al parte policial; Vehículo: El vehículo [...] marca Mazda, modelo B-2900, color rojo, quedó estacionado con sus puertas cerradas en el lugar del procedimiento a petición del su conductor. Al Final se aprecian dos firmas ilegibles y un timbre de la Primera Comisaría de Linares.

Luego figura una imagen de una boleta de alcotest, en que se lee, como título, Dräger; como fecha el 2020.03.23; como hora las 01:06; como nombre Enrique Leopoldo Torres Valenzuela; y como prueba de examinado 1.13 g/l. también se aprecia una firma ilegible en su parte inferior.

Luego figura un dato de atención de urgencia, emanado del SAR San Juan de Dios de Linares, en que se lee que la fecha de ingreso es 23/03/2020; que el nombre es Torres Valenzuela Enrique Leopoldo; que el motivo de la consulta es



Alcoholemia y constatación de lesiones; que llegó en un vehículo policial de Carabineros; que, como diagnóstico complementario, presentaba aliento etílico; y que se le efectuó una alcoholemia. Al final del documento se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Mariano Cox Fajardo, médico cirujano.

Luego figura el Informe de Alcoholemia N° 07-TAL-OH-2204-20, correspondiente a la causa 2000319388-9 de la Fiscalía de Linares, fechado en Talca el 14 de abril del año 2020. En él también se lee que “el funcionario administrativo que suscribe certifica que la muestra para este examen de alcoholemia se recibió como perteneciente a Don (a): ENRIQUE LEOPOLDO TORRES VALENZUELA C.I. 16273294-3 Siendo tomada el 23/03/2020 a las 00:54 hrs. en el SAR SAN JUAN DE DIOS. Por el Dr.(a) CELEDONIO COX FAJARDO [...] según consta en la boleta de remisión de la muestra. El Perito BIOQUIMICO LEGISTA que suscribe certifica que el examen científico de dicha muestra, asignada con el 07-TAL-OH-2204-20 dio un resultado de 1,57 (uno coma cincuenta y siete) gramos por mil. Al final se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Natalia Torrealba Miranda, Perito Ejecutor, Servicio Médico Legal de Talca.

Centrándonos ahora el supuesto consistente en que, en conocimiento de que Enrique Leopoldo Torres Valenzuela era imputado en una causa por el delito de conducción en estado de ebriedad, Claudia del Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente en, a lo menos, una descripción de la conducta punible a que se refería dicha causa más el nombre, dirección y número telefónico del imputado Enrique Leopoldo Torres Valenzuela, así como la graduación alcohólica con que fue sorprendido, con el fin de que solicitara al mismo beneficios económicos a cambio de terminar su causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación, importante es, para iniciar, tener presente que Ricardo Ignacio Vega Guerrero declaró ante estrados y corroboró dicha dinámica, describiéndola en definitiva como un modus operandi que acordó con Claudia del Pino Acuña y que aplicaron en múltiples casos, entre ellos el hecho inmediatamente anterior, éste y otros que se han analizado y más adelante se analizarán.

Dado que la declaración ante estrados del acusado Vega Guerrero ya fue extractada anteriormente, no la repetiremos para evitar redundar. Sin perjuicio de ello, recordaremos que, en lo más pertinente, señaló que un día su esposa Claudia dijo que estaba cagada de plata y que sabía cómo ganar plata. Le dijo que era con el



tema de la movida de las licencias y que era fácil para ella porque eran causas de ella y nadie se iba a meter a esas causas. Le preguntó si estaba segura y dijo que la única forma de que la pillaran era que algunos de los que ayudaran, “sapearan”. Así lo hizo. Ella sacaba la información del computador y escribía en un cuaderno que incautó la Policía de Investigaciones, donde estaba todo escrito con letra de ella, escribía los RUC y le pasaba a él un papel con el nombre de la persona, los grados alcohólicos y el número de teléfono y él la llamaba y le decía que se llamaba Cristian, que había una movida y si le interesaba. Unos le decían que sí y otros que no. Con los que accedieron, se juntaron en Linares, les explicaba la movida en persona y le decían que sí. Ahí él iba a la casa, le decía a ella que este “guevón” dijo que sí y ella hacía el tema en el computador.

También señaló que sobre el caso que, en relación con Enrique Torres, a él no se le hizo nada. Lo llamó y al último dijo que no. Era de Colbún parece. Usó la misma modalidad de antes, obtuvo los datos de Claudia y lo contactó. Le ofreció el negocio. Él no tenía la licencia, se la habían quitado. Claudia fue a la Fiscalía un día, sacó la carpeta y en la carpeta no estaba la licencia y por eso no se hizo el negocio, porque él quería la licencia de vuelta. Esa carpeta se la encontraron después a Claudia en la casa. Sobre si era común que Claudia tuviera carpetas de la Fiscalía en su casa, ella siempre andaba con carpetas. No sabe si eso estaba permitido o no.

Ya se consignó que este Tribunal concluyó que esos dichos dan cuenta de un modus operandi preacordado por ambos acusados que se ajusta al que en este fallo se tuvo por suficientemente probado y que, para formar tal estándar de convicción, no consideramos únicamente dicha declaración, sino que también múltiples razonamientos y corroboraciones que debidamente se demostraron durante la audiencia de juicio oral.

Dado que los mismos se expusieron latamente al analizar el hecho que en la presente motivación singularizamos con el N° 2.8 y que tales consideraciones son, mutatis mutandi, plenamente aplicables al hecho punible ahora en comento, daremos a aquéllas por reproducidas en este punto para no extender innecesariamente en demasía este fallo.

Siguiendo con el presupuesto fáctico que tuvimos por acreditado consistente en que, consecuentemente y con aquella información que Claudia del Pino Acuña le entregó en su poder, Vega Guerrero contactó a Enrique Torres Valenzuela y le solicitó \$500.000 a cambio de que Claudia del Pino Acuña terminara la referida



causa, a lo que Torres Valenzuela accedió, sin que éste finalmente pagase dicha suma a Vega Guerrero por cuanto no le fue entregada su licencia de conducir, tanto el acusado Vega Guerrero como el testigo Enrique Torres Valenzuela estuvieron contestes en ello.

Destacable es que es último se trata de un testigo que reconoció hechos que le podrían ser perjudiciales y del cual ninguna posible animadversión hacia los acusados o ganancia secundaria para faltar a la verdad siquiera se insinuó por las Defensas.

Sobre la acreditación de la generación por parte de la acusada del Pino Acuña de la información que entregó al acusado Vega Guerrero para contactar a Enrique Torres Valenzuela, nuevamente y para evitar una larga repetición, nos remitimos a lo expuesto en relación con el *modus operandi* que tuvimos por suficientemente probado.

En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.13 de la novena motivación de este fallo, resultaron debidamente establecidos, primero, con lo testificado por Elías Rolando Apablaza Vásquez, quien manifestó que se dedica a trabajar en una verdulería, es como el administrador, es un negocio familiar en Presidente Ibáñez. No venden alcohol. Al lado hay una botillería, que no es de su familia. Trabaja en esto casi toda la vida. Tiene 32 años. Ahora no tiene licencia, pero tenía. A él lo contactaron por teléfono porque tuvo un problema con una conducción en estado de ebriedad. Fue un 25 de febrero, en que estuvo de cumpleaños compartiendo, tomaron unos tragos, tuvo que ir a dejar a unos amigos a su casa y en el trayecto lo controló Carabineros. Lo llevaron detenido por conducción en estado de ebriedad y ahí Carabineros le dijo que estuviese pendiente al llamado de Fiscalía, que lo iban a contactar por el tema de su licencia. Fue el 25 de febrero del 2020. Él conducía su camioneta. Carabineros ese día lo llevó al hospital de Linares a tomar muestras de sangre para al alcoholemia y después lo trasladaron al cuartel policial. Le hicieron el alcotest, soplar la maquinita. No sabe qué resultado dio, pero dio positivo. Ese día lo llevaron detenido y como a las 8:00 am le dieron la libertad. En ese momento le entregaron su licencia.

Agregó que después esperaba que lo llamaran de la Fiscalía para retirar los documentos y como a fines de marzo o principios de abril del 2020 lo llamaron por teléfono y le dijeron Elías Apablaza, el que fue sorprendido por conducción en estado de ebriedad, y respondió que esperaba que lo llamaran de Fiscalía. Le dijeron



que estaba afuera el joven. Él tenía sus documentos y estaba a punto de subirlos al sistema para ser llamado. Le preguntó si sabía las consecuencias que tenía haber hecho eso y le dijo que tenía la solución, que podía eliminarle todos los documentos del sistema y no iba a pasar nada y que le cobraba \$400.000 para eliminarlo del sistema. Le dijo que él trabajaba con su señora, que era fiscal, que ella tenía sus documentos listos para subir al sistema y que ella se los eliminaba, que no los subía al sistema si le cancelaba los \$400.000. Eso le llamó la atención pero tenía miedo porque nunca lo había visto ni lo conocía. Esa persona con la que hablaba era un moreno, bajo, “maceteadito”, y andaba en una moto blanca con rojo, marca Honda cree. La reconoce en la sala del Tribunal, está al fondo en la esquina (indica hacia donde se encuentra el acusado Vega Guerrero en la sala de audiencias). Cuando le dijo todo eso la persona, terminó la conversación y le dijo que tenía que ir a la carretera por otro tema, que lo pensara y a la vuelta le respondiera. Ahí él llamó a su amiga Jenny Grandón, que es abogada, y le consultó el tema y le dijo que no aceptara eso, que podía ser más perjudicial para él, que podía meterse en problemas y que no aceptara de ninguna manera. Sobre su causa de conducción en estado de ebriedad, iba a hablar con ella para que lo ayudara, pero le dijo que el castigo era uno solo y que había que acatar la sanción, que no se podía hacer nada. En la conversación con el joven, le dijo que había hecho otros contactos y que incluso en ese momento se dirigía a la carretera a ver a otro cliente. Después volvió y le dijo que no lo iba a aceptar. Después nunca más lo vio. Esa última vez hablaron en persona, volvió.

Señaló que tras esto, lo llamaron y le suspendieron su licencia por dos años. Eso fue el 2021 cree acá, en este mismo edificio, en el primer piso. No tiene su licencia actualmente porque después lo volvieron a controlar, es reincidente, y se la quitaron dos años más, una multa y firma mensual. En la primera causa era suspensión por 2 años y pagar \$100.000 a bomberos. Nunca logró recuperar su licencia de conducir.

A la Defensa del acusado Vega Guerrero respondió que se juntó con él pero no aceptó la proposición que le hizo, no obtuvo la licencia de él y no le pagó.

El comisario de la Policía de Investigaciones Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez replicó la declaración que el señor Apablaza Vásquez prestó durante la investigación, con lo que se demostró que ella guarda estrecha relación con la que brindó ante estrados, estabilidad en el tiempo que refuerza su credibilidad.



En efecto, el señor Gutiérrez Gutiérrez también señaló que con los antecedentes que habían aportado las personas a las que se les archivó irregularmente las causas y dentro de los antecedentes que aportó el Ministerio Público, nace el nombre de Elías Apablaza. Al revisar su causa se fijaron en que también estaba archivada, tenía un manejo en estado de ebriedad y al contactarlo le pidieron la toma de declaración y dio cuenta de que fue detenido por manejo en estado de ebriedad en Linares y una persona lo contactó telefónicamente dándole cuenta de la causa que tenía, de los problemas que le podía causar ese manejo en estado de ebriedad y le preguntó si podían entrevistarse para darle más antecedentes. Trabaja en la verdulería de su padre en calle Presidente Ibáñez y a ese local llegó Ricardo Vega y le contó acerca de la causa por manejo en estado de ebriedad y que era factible borrar o archivar la causa por \$400.000 o \$500.000, ese era el rango. Le dio antecedentes, como a los demás entrevistados, del lugar de la detención, los antecedentes que mantenía, entregando antecedentes fidedignos para que la persona acordara un pago por el archivo de la causa. Le dijo que un familiar o su señora trabajaba en la Fiscalía para que creyese en la oferta que le hacía. Este señor en un momento le dijo que lo pensara y Ricardo le dijo que tenía que trasladarse a la carretera para entrevistarse con otro señor por lo mismo, y que al señor de la botillería el Roble también lo ayudó. Que se fue Ricardo y llamó a una abogada amiga y ella le dijo que no hiciera tal, que se podía meter en un problema. Posteriormente, con el consejo de esa abogada, al llegar Ricardo éste le preguntó si harían la movida, y él se desistió del acuerdo. Dijo que a la transacción la llamaban la movida. Gran parte de los consultados aludían a eso, a la movida. Cuando se refirió a quién hacía esto, dijo, si mal no recuerda, que lo hacía su señora, que su señora hacía el cierre de las causas. Dijo que no alcanzó a pagar por el consejo de la abogada. Se verificó que la causa estaba archivada y el testigo no tenía idea. Él estaba con su licencia de conducir, la tenía disponible. Dijo, si mal no recuerda, que la señora trabajaba desde su casa con la Fiscalía. Jenifer Grandón era la abogada amiga y cuando Vega fue a contactar a otra persona que mencionó como un camionero que estaría en la 5 Sur, le dijo que lo pensara y cuando volvió, él ya había consultado con su amiga abogado. A Apablaza le hicieron un reconocimiento fotográfico y le solicitaron el tráfico de llamados.

Refrendando ese relato del señor Apablaza Vásquez en lo relacionado con la detención por conducción en estado de ebriedad, el Ministerio Público incorporó la



prueba denominada en el auto de apertura como “Causa RUC N° 2000222937-5 por el delito de conducción en estado de ebriedad seguida en contra de Elías Apablaza Vásquez”. Así, en aquél documento se lee, en su página 1, un parte de detenidos, emanado de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares en que figura Fiscalía Local de Linares; N° de Parte 00458; fecha de detención 26/02/2020; hora de detención 04:35; funcionario a cargo del procedimiento Nibaldo Venegas Inostroza, cabo 1ro; código del delito 14052 conducción estado de ebriedad con o sin daños o lesiones; fecha del delito 26/02/2020; hora del delito 04:30; lugar de ocurrencia vía pública; dirección Camino La Empresa/ Circunvalación de la comuna de Linares; identificación del detenido Elías Rolando Apablaza Vásquez; N° de documento de identificación 17758932-2; lugar de detención Camino La Empresa esquina Circunvalación de la comuna de Linares; documentos adjuntos: declaración Carabineros, acta alcoholemia, derechos detenido, certificado médico, alcotest; Relación de los Hechos: ELIAS ROLANDO APABLAZA VASQUEZ, 29 años, chileno, casado, estudios medios, comerciante, [...] detenido hoy a las 04:37 horas en Camino La Empresa con Circunvalación Norte, por el Cabo 1ro. Nibaldo Venegas Inostroza y Carabinero Diego Espíndola Ibáñez, ambos de esta dotación y de servicio en la población, pasa a disposición de esa Fiscalía Local de Linares, por el siguiente hecho: Porque hoy siendo las 04:35 horas, mientras el personal aprehensor efectuaba un patrullaje preventivo por camino La Empresa en dirección al Oriente, tras llegar a la Avda. Circunvalación Norte, proceden a la fiscalización del Station Wagon marca Hyundai, modelo Tucson, año 2005, color verde, patente YY-9706, identificando a su conductor como; ELIAS ROLANDO APABLAZA VASQUEZ, previamente individualizado en el rubro de imputado, quien lo hacía en manifiesto estado de ebriedad, circunstancia que constó por su fuerte hálito alcohólico, rostro congestionado, incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar, y tras ser sometido a una prueba respiratoria, arrojó como resultado 1.33 G/L, corroborando así que éste lo hacía en estado de ebriedad, razón por la cual procedieron a comunicarle su detención, previa lectura de sus derechos que le asisten conforme a la Ley. [...] Lesiones y Alcoholemia: El imputado fue trasladado al servicio de urgencias del Hospital Base de Linares, lugar donde el médico de turno de dicho centro asistencial depositando la muestra de sangre extraída en el frasco Nro. 4026, conforme consta en el certificado médico Nro. 1339973, SIN PRONOSTICO MEDICO; [...] Licencia: El imputado lo hacía con licencia de



conductor clase "A2 / A-4" Ley 19,495, de la Ilustre Municipalidad de Linares, vigente hasta el 25.02.2023, cuyo documento fue entregado a su conductor conforme instrucciones impartidas fiscal de turno. Al Final se aprecian cuatro firmas ilegibles.

Luego figura una pieza titulada “Acta de Alchohemia Voluntaria”, en que se lee que el Linares, a 26 de febrero del año 2020, dos funcionarios de Carabineros condujeron hasta el hospital de Linares Elías Rolando Apablaza Vásquez, donde se efectuó el examen de alchohemia voluntaria. Al final se aprecian cuatro firmas ilegibles.

Luego figura un dato de atención de urgencia, emanado del hospital de Linares, en que se lee que la fecha de ingreso es 026/02/2020; que el nombre es Apablaza Vásquez Elías Rolando; que el motivo de la consulta es accidente/traumatismo vía pública; que llegó en un vehículo policial de Carabineros; que se le efectuó una alchohemia y constatación de lesiones; y, como observación, “sin lesiones al examen físico Hálito OH”. Al final del documento se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Francisco González Nome Médico Cirujano.

Luego figura una boletas de alcotest tituladas Dräger, en que se lee que la fecha es 2020.02.26; que la hora es 04:37; que el nombre es Elías Rolando Apablaza Vásquez; y que la prueba del examinado fue siempre 1.33 g/L. Al final de los documentos se aprecia una firma ilegible.

Luego figura un escrito cuya suma en lo principal es “solicitud de audiencia de formalización”, en que Carola Dagostini Ibáñez, fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Linares, en causa RUC N° 2000222937-5, dice “a.- Delito: CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, previsto y nado en el artículo 196 INCISO 1° DE LA Ley 18.290. b.- Lugar de Comisión: CAMINO LA EMPRESA CON CIRCUNVALACION, LINARES. c.- Fecha de Comisión: 26 DE FEBRERO DE 2020”. El escrito está incompleto.

Luego figura el Informe de Alchohemia N° 1590-20, correspondiente a la causa 2000222937-5 de la Fiscalía de Linares, fechado en Talca el 23 de marzo del año 2020. En él también se lee que “el funcionario administrativo que suscribe certifica que la muestra para este examen de alchohemia se recibió como perteneciente a Don (a): ELÍAS ROLANDO APABLAZA VÁSQUEZ C.1. 7758932-2 Siendo tomada el 26/02/202 a las 05:59 hrs. en el HOSPITAL DE LINARES. Por el Dr.(a) FRANCISCO GONZALEZ [...] según consta en la boleta de remisión de la muestra. El Perito BIOQUÍMICO LEGISTA que suscribe certifica



que el examen científico de dicha muestra, asignada con el 07-TAL-OH-1590-20 dio un resultado de 1,31 g%, (uno coma treinta y uno gramos por mil). Al final se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Mauricio Recabal Sandoval, Perito Ejecutor, Unidad de Alcoholemia del Servicio Médico Legal.

Luego figura una resolución del Juzgado de Garantía de Linares fechada el 17 de mayo del año 2021, en que se fija audiencia de formalización para el día 9 de septiembre del año 2021. La resolución está incompleta.

Centrándonos ahora el supuesto consistente en que, en conocimiento de que Elías Rolando Apablaza Vásquez era imputado en una causa por el delito de conducción en estado de ebriedad, Claudia del Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente en, a lo menos, una descripción de la conducta punible a que se refería dicha causa más el nombre, dirección y número telefónico del imputado Elías Rolando Apablaza Vásquez, así como la graduación alcohólica con que fue sorprendido, con el fin de que solicitara al mismo beneficios económicos a cambio de terminar su causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación, importante es, para iniciar, tener presente que Ricardo Ignacio Vega Guerrero declaró ante estrados y corroboró dicha dinámica, describiéndola en definitiva como un modus operandi que acordó con Claudia del Pino Acuña y que aplicaron en múltiples casos, entre ellos el hecho inmediatamente anterior, éste y otros que se han analizado y más adelante se analizarán.

Dado que la declaración ante estrados del acusado Vega Guerrero ya fue extractada anteriormente, no la repetiremos para evitar redundar. Sin perjuicio de ello, recordaremos que, en lo más pertinente, señaló que un día su esposa Claudia dijo que estaba cagada de plata y que sabía cómo ganar plata. Le dijo que era con el tema de la movida de las licencias y que era fácil para ella porque eran causas de ella y nadie se iba a meter a esas causas. Le preguntó si estaba segura y dijo que la única forma de que la pillaran era que algunos de los que ayudaran, “sapearan”. Así lo hizo. Ella sacaba la información del computador y escribía en un cuaderno que incautó la Policía de Investigaciones, donde estaba todo escrito con letra de ella, escribía los RUC y le pasaba a él un papel con el nombre de la persona, los grados alcohólicos y el número de teléfono y él la llamaba y le decía que se llamaba Cristian, que había una movida y si le interesaba. Unos le decían que sí y otros que no. Con los que accedieron, se juntaron en Linares, les explicaba la movida en



persona y le decían que sí. Ahí él iba a la casa, le decía a ella que este “guevón” dijo que sí y ella hacía el tema en el computador.

Ya se consignó que este Tribunal concluyó que esos dichos dan cuenta de un modus operandi preacordado por ambos acusados que se ajusta al que en este fallo se tuvo por suficientemente probado y que, para formar tal estándar de convicción, no consideramos únicamente dicha declaración, sino que también múltiples razonamientos y corroboraciones que debidamente se demostraron durante la audiencia de juicio oral.

Dado que los mismos se expusieron latamente al analizar el hecho que en la presente motivación singularizamos con el N° 2.8 y que tales consideraciones son, *mutatis mutandi*, plenamente aplicables al hecho punible ahora en comento, daremos a aquéllas por reproducidas en este punto para no extender innecesariamente en demasía este fallo.

Siguiendo con el presupuesto fáctico que tuvimos por acreditado consistente en que, consecuentemente y con aquella información que Claudia del Pino Acuña le entregó en su poder, Vega Guerrero contactó a Apablaza Vásquez y le solicitó \$400.000 a cambio de que Claudia del Pino Acuña terminara la referida causa, a lo que Apablaza Vásquez no accedió, el mismo testigo Elías Apablaza Vásquez estableció tales presupuestos fácticos.

Destacable es que se trata de un testigo que reconoció hechos que le podrían ser perjudiciales y del cual ninguna posible animadversión hacia los acusados o ganancia secundaria para faltar a la verdad siquiera se insinuó por las Defensas.

Sobre la acreditación de la generación por parte de la acusada del Pino Acuña de la información que entregó al acusado Vega Guerrero para contactar a Elías Apablaza Vásquez, nuevamente y para evitar una larga repetición, nos remitimos a lo expuesto en relación con el modus operandi que tuvimos por suficientemente probado.

En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.14 de la novena motivación de este fallo, resultaron debidamente establecidos, primero, con lo testificado por Ralph John Veloz Rodríguez, quien manifestó que es ecuatoriano y llegó a Chile el 16 de agosto del 2016. Es químico farmacéutico y trabaja en eso. El 2021 trabajaba en Cauquenes en una farmacia. Por el año 2019, por mayo, tenía un evento en Linares. Vino de Cauquenes y en la entrada, en avenida León Bustos, hubo un operativo como a las 12:00 de la noche. Lo pararon y le hicieron un examen



de alcoholemia o drogas y se reflejó que manejaba bajo los efectos del alcohol. Lo tomaron y lo llevaron le parece a un retén, estuvo por un par de horas. Lo individualizaron y por el fiscal se le entregó la licencia y salió libre. Luego fue a su destino. Otra persona llevó su auto. Al final le dieron la licencia. Como a los dos meses llamó a Carabineros preguntando por su caso y le dijeron que él tenía que esperar.

Agregó que por el 2020 recibió una llamada. Como por junio más menos, o marzo del 2020. Recibió una llamada donde le indicaba un hombre que tenía datos sobre él, que lo llamaba directamente de la Fiscalía. Le comenzó a decir que lo detuvieron en tal fecha bajo los efectos del alcohol, le dio el color de su auto, le dijo sus niveles de alcohol, todo lo que pasó esa noche. Los detalles que le decía esa persona eran totalmente correctos, todo lo que le decía él era cierto. Esta persona primero lo llamó y al rato lo llamó de nuevo y le dijo que lo llamaba de Fiscalía. No le dio su nombre. Le dijo que en tal fecha y hora le habían tomado estos parámetros, que lo llevaron a un retén que no recuerda, y si podían juntarse para conversar. Le dijo que sí. Fue así como se juntaron un domingo ahí mismo en la avenida León Bustos. Antes de juntarse en persona, en la conversación él le dijo que como él había estado en estado de ebriedad, eso en Chile le iba a generar problemas judiciales. Le dijo que en su país en general no es tan grave pero la persona le dijo que en Chile era muy grave y se preocupó mucho porque tenía su visa en trámite y no quería tener problemas. Entonces la persona le dijo que lo podía ayudar. Le dijo que le podían quitar la licencia por este acto, por este delito. Acordaron juntarse para tener más detalles de esto. Se juntaron un domingo, no recuerda el día ni la hora. Conversaron. Fue acá en Linares, en la Avenida León Bustos, donde lo detuvieron la primera vez, donde hay una automotora. Físicamente la persona habrá tenido 1,60 o 1,65 metros, piel un poco oscura, llegó en una moto rojo con negro. Era de contextura medianamente gruesa. De unos 30 a 35 años. Tenía un casco, andaba en moto. Si lo viera lo podría reconocer. Lo reconoce acá, parece es él, sí, es él. Está allá en la punta, al final (allí estaba sentado en la sala de audiencias el acusado Vega Guerrero). Él fue en un auto con su pareja. Ella se quedó en el auto y él bajó cuando conversaron. Esta persona le dijo que se llamaba Cristian. Su preocupación fue que lo tomó como algo real, tenía mucha información suya, sabía todo. Entonces le dio la opción de ayuda, ayudarlo a que su licencia no fuera quitada. Conversaron. Le dijo la persona que tenía alguien dentro de Fiscalía que lo podía ayudar. Le dijo que



era un fiscal, que lo podía ayudar a costa de un monto de dinero. Le respondió que estaba un poco gastado y le podía ofrecer \$200.000. Le dijo que no. Le parece hizo una llamada y la persona le dijo que no y que para ayudarlo eran \$300.000. Él en ese momento le dijo que no le iba a dar una respuesta porque no se sentía seguro porque no sabía si era una estafa. Justo por lo del COVID le dijo que no se podía uno acercar a las oficinas. Pasó la semana y lo llamó y le informó que su pareja le iba a entregar el dinero. La persona aceptó. Para decidir eso, le preguntó a la persona por el respaldo que tenía por darle el dinero y si era verdad y le respondió que le entregaría unos documentos de Fiscalía firmados que dirían que no había cargos sobre él. Confió en él porque dijo que ese documento se lo iban a entregar cuando se le entregara el dinero. Querían hacer una transferencia con su pareja, pero la persona no aceptó, quería el dinero en efectivo. En ese momento él estaba en Cauquenes así que habló con su pareja, la persona fue al trabajo de su pareja y ahí le entregaron la cantidad que habían acordado, los \$300.000. Luego a su pareja le dio los documentos. Ahí llamó a la persona y le preguntó qué hacer con los documentos y los tuvo en su auto mucho tiempo. Tenían el sello de la Fiscalía de Linares. Su mujer los recibió. Pensó que era todo real. Sí sabía que dentro de todo era algo corrupto. Nunca más se acercó a Carabineros ni nada a preguntar. Cuando su señora le entregó el dinero a la persona fue como a la semana de juntarse, porque él dijo que necesitaba que le confirmara. No más de una semana. Lo llamaron como en marzo del 2020. En abril quizás pudo ser. Cree que llamó a la persona después y le dijo que todo estaba ok, que no tenía por qué preocuparse y si tenía algún control, que tuviese guardados los documentos. Eso en abril del 2020. Tras la última llamada cuando le dijo que estaba todo terminado, el 2020, no pasó nada.

Señaló que volvió a tener contacto con la justicia porque el 2021 trabajaba y llegó la Policía de Investigaciones. No sabía por qué. Él trabajaba en la farmacia en Cauquenes, eran como las 2:00 o 1:00 de la tarde. Lo llevaron a tomar declaración. Comenzaron a preguntarle lo sucedido, de lo que hablamos ahora. Declaró, en ese tiempo todo lo que recordaba, cómo sucedió, como lo contó ahora. Con su pareja también fueron porque ella estuvo con él. El documento que mencionó lo entregó a la Policía de Investigaciones. Lo tenía guardado en su auto en Cauquenes. Lo entregó el mismo día que fue a declarar. Si viese ese documento lo podría reconocer.

A continuación el Ministerio Público procedió a exhibir a este testigo la prueba denominada en el auto de apertura como “NUE N° 5948316. Un documento



de decisión de archivo provisional a nombre Ralph John Veloz Rodríguez CI 25.711.952-1 con nombre y logo de la Fiscalía Local de Linares” y, al revisarla, el señor Veloz Rodríguez refirió que se trata de un documento que dice decisión de archivo provisional con fecha, su nombre, su RUT, el logo de Fiscalía. Lo reconoce como el mismo que entregó a la Policía de Investigaciones.

Al Querellante respondió que su pareja se llama Carola Marisel Sánchez Ribera. Ella fue a entregar el dinero, no él porque ella vivía en Linares y él estaba en Cauquenes por trabajo y viajaba tres veces a la semana. El documento lo guardó porque se sentía como con un respaldo y lo guardó por cualquier situación o evento. Entendía que con ese documento su causa estaba terminada, se podría decir que sí.

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña contestó que todos los contactos que tuvo él siempre fueron con la persona que reconoció acá. Cuando lo llamaron por teléfono, fue una voz masculina. Esa persona le dijo que tenía a alguien en la Fiscalía, no que trabajaba él en la Fiscalía, y que esa persona era un fiscal. En ese minuto la persona le dijo que se llamaba Cristian. Le guardó el número y le puso Cristian. Él no dijo que era fiscal, sólo que tenía la ayuda de un fiscal.

Señaló que su pareja Carola estaba en el auto con él cuando conversó con él la primera vez. Ella observó esa conversación pero no la escuchó. El pago lo hizo Carola, \$300.000 en efectivo. También dijo que no estaba él, trabajaba en Cauquenes. Carola tenía seguridad de que entregaba a la persona con que él conversó porque ella lo vio, ella sabía que era él. Nunca más supo de la causa de manejo hasta dos semanas atrás. A San Javier lo fueron a buscar. No sabía de qué se trataba, él estaba en Talca. Llamó a la Policía de Investigaciones, preguntó por qué lo buscaban y le dijeron que tenía una causa y pensó que era ésta. Le dijeron que fuera tranquilo. El mismo día como a las 6:00 pm lo llamaron porque tenía que hacer una declaración por lo sucedido el 2019 por el manejo en estado de ebriedad. La persona que lo llamó en la tarde le dijo que era por un juicio pendiente de hacía muchos años en que él había estado en estado de ebriedad. Ahí no sabía de esta declaración. La persona que lo llamó en la tarde le dijo que tenía que ver con lo del juicio que le pasó hacía años por un estado de ebriedad, pero no le dijo que tenía que declarar. Se enteró de que tenía que venir a declarar ahí, le dijo que tenía que acercarse a la Fiscalía de San Javier, fue al día siguiente y ahí preguntó el motivo de por qué lo llamaban y se enteró de que tenía que ver con todo esto, que tenía que declarar y le dijeron que tenía que declarar porque este era un juicio que tenía que



ver con su licencia. Al llegar a la Fiscalía de San Javier entregó su carnet, lo vio un secretario afuera y le dijo que esperara. A la Policía de Investigaciones de Talca también ingresó y mostró su carnet. El funcionario de la recepción recibió su carnet y verificó quién era él. Al tiempo volvió a preguntar y ya no existía su causa de manejo. Preguntó después de obtener sus documentos, a los seis meses preguntó en Cauquenes cree. Fue a Carabineros de Cauquenes y le dijeron que no tenía nada. En estas últimas visitas a la Policía de Investigaciones o a la Fiscalía, sobre su causa de manejo en estado de ebriedad, le dijeron, en la Policía de Investigaciones, donde preguntó por qué lo buscaban, que a él le reflejaba en el sistema que tenía un tema pendiente por manejo en estado de ebriedad. Se preocupó mucho y le dijo que estuviera tranquilo, que lo iban a llamar y que tenía que hacer lo que le dijeran. Eso fue como a las dos semanas y de ahí fue a la Fiscalía de San Javier al día siguiente. Le dijeron que estuviera tranquilo con su causa y que tenía que declarar en este juicio.

A la Defensa del acusado Vega Guerrero contestó que, sobre la persona que lo contactó, el tema era sobre su licencia de conducir.. La licencia siempre la tuvo en sus manos. No le quitaron la licencia. Lo llamó la persona que dijo que tenía el contacto en Fiscalía y le dio los antecedentes y después se juntó con el acusado. La persona lo llamó por teléfono cree es la misma persona con la que después se juntó con León Bustos, era la misma voz.

En cuanto a la citada probanza que se denominó NUE N° 5948316. Un documento de decisión de archivo provisional a nombre Ralph John Veloz Rodríguez CI 25.711.952-1 con nombre y logo de la Fiscalía Local de Linares”, efectivamente consiste en un documento asimilable a una decisión de archivo provisional emanada del Ministerio Público. Así, en ese documento se aprecia, en su parte superior, un logo en que se lee Fiscalía Ministerio Público de Chile; Decisión de Archivo Provisional; R.U.C. 2000145895-3; Fecha denuncia 06-05-209; Fecha en que se cometió el delito y Lugar en que se cometió el delito, 05-05-2019 León Bustos, Linares; víctima Nombre: NN Domicilio: (en blanco); Imputado Nombre: Ralph Johnn Veloz Rodríguez C.I. 25.711.952-1 Domicilio: Aníbal Pinto 13, Cauquenes; En Linares, Febrero de 2020 Vistos: 1.- Que la presente investigación se encuentra en estado de tomarse una decisión de término. 2.- Que a la fecha no aparecen antecedentes que permitan desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento de los hechos. 3.- Que lo anterior se comunicará a la víctima del



delito investigado, mediante carta enviada a su domicilio, a fin de que informe si cuenta con nuevos antecedentes, caso en el cual se procederá a la reapertura de la investigación. 4.- Que no se ha producido aún la intervención del Juez de Garantía en este procedimiento. 5.- Lo dispuesto en los artículos 109 letra d) y 167 del Código Procesal Penal; SE DECIDE: Archivar provisionalmente esta investigación. Archívese y sométase si corresponde a la aprobación del Fiscal Regional; Fiscalía Local de Linares y nuevamente el logo del Ministerio Público que se describió al inicio, y sobre ambas gráficas una firma ilegible escrita con lápiz pasta azul.

El comisario de la Policía de Investigaciones Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez asentó la permanencia en el tiempo y en lo sustancial de ese relato, pues refirió que, con lo aportado por Ricardo Vega en su declaración, lograron la identificación de Ralph Veloz, quien era un ciudadano ecuatoriano que trabajaba en Cauquenes y, según el Ministerio Público, tenía la causa archivada por un tema de una tarjeta de crédito. Lo ubicaron y dijo que en mayo del 2019 lo detuvieron y no tuvo más antecedentes de la causa. Que una persona lo llamó por teléfono dándole antecedentes de su causa, la alcoholemia, todo lo que implicaba la causa llevada en su contra, y aludió a un problema que tuvo con un banco y una tarjeta, lo que más le llamó la atención porque eso lo sabía él no más y por eso le pareció muy creíble lo que le dijo este caballero. Acordaron juntarse en Linares, se contactó con Ricardo y le sacó un papel donde tenía escrita toda la causa, la detención, la fecha, la alcoholemia, la causa que tuvo por una tarjeta de crédito y le pareció que lo que decía era verdad. En su país esto no era tan grave y Ricardo, para apurarlo, le dijo que era acá grave, que le quitarían la licencia un par de años. Por eso llegaron a un acuerdo de \$300.000 cree. Juntaría el dinero para pagarle y después le solicitó a su polola Carola Gómez o Gálvez, ecuatoriana también, que hiciera de intermediario para pasarle el dinero a Ricardo Vega. Juntó el dinero, se lo transfirió a su polola, quien hizo el pago en una clínica de diálisis en calle Brasil, y a ella Ricardo le entregó un documento de archivo provisional que esta señorita entregó a Ralph, quien a la vez les entregó ese documento, que era un archivo provisional de la Fiscalía que venía firmado, muy similar a los entregados a Samuel y Rodrigo Guerra. Ralph lo mantenía porque era una seguridad que le dio Ricardo de que la causa había quedado archivada. Ese documento se incautó el mismo 12 o 13 de marzo del 2021 en Cauquenes, Ralph lo tenía en su vehículo particular, en el que andaba.



Apoyando lo último y ratificando el origen de ese documento, el Ministerio Público mostró al señor Gutiérrez Gutiérrez la prueba llamada en el auto de apertura como “Set fotográfico de nueve fotografías al vehículo de Ralph Veloz Rodríguez”, y al verlo señaló que se trata de imágenes que corresponden al vehículo en que se trasladaba Ralph, tomada en Cauquenes; a la patente y e interior del mismo; y al documento que le entregaron, titulado decisión de archivo provisional, en que aparece el nombre de Ralph Veloz. Cabe explicitar que en esas fotografías efectivamente se aprecia lo que de ellas describió el testigo.

Refrendando el relato del señor Veloz Rodríguez en lo relacionado con su detención por conducción en estado de ebriedad, el Ministerio Público incorporó la prueba denominada en el auto de apertura como “Causa RUC N° 2000145895-3 por el delito de conducción en estado ebriedad seguida en contra de Ralph Veloz Rodríguez”. Así, en aquél documento se lee, en su página 1, un parte de detenidos, emanado de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares en que figura Fiscalía Local de Linares; N° de Parte 01093; fecha de detención 05/05/2019; hora de detención 00:36; funcionario a cargo del procedimiento Claudio Cancino Faundes, sargento 2do; código del delito 14052 conducción estado de ebriedad con o sin daños o lesiones; fecha del delito 26/02/2020; hora del delito 00:30; lugar de ocurrencia vía pública; dirección Aníbal León Bustos 1312 de la comuna de Linares; identificación del detenido Ralph Johnn Veloz Rodríguez; N° de documento de identificación 257119521; lugar de detención Aníbal León Bustos 1312 de la comuna de Linares; Documentos adjuntos: declaración Carabineros, acta alcoholemia, informe de lesiones, verificación de identidad, prueba respiratoria; Relación de los Hechos: RALPH JOHNN VELOZ RODRIGUEZ, 31 años, ecuatoriano, soltero, estudios superiores, farmacéutico, empleado, [...] detenido hoy a las 00:36 horas en Avda. Aníbal León Bustos, frente al Nro. 1312, por el Subtte. Daniel Agurto Méndez, Sgto. 2do. Claudio Cancino Faundes y Cabo 2do. Diego Villalobos Valverde, todos de esta dotación y de servicio en la población, pasa a disposición de esa Fiscalía Local de Linares, por el siguiente hecho: Porque hoy siendo las 00:36 horas, mientras el personal aprehensor se encontraba de servicio “SENDA”, efectuando controles vehiculares selectivos en Avenida Aníbal León Bustos, específicamente frente al Nro. 1312, procedieron a fiscalizar el automóvil marca Citroën, modelo C-Elysse, año 2018, color blanco, patente JXLX-59, y tras efectuar una prueba respiratoria a su conductor identificado como, RALPH JOHNN



VELOZ RODRIGUEZ, previamente individualizado en el rubro de imputado, arrojó como resultado 1.20 G/L, corroborando así que éste lo hacía en estado de ebriedad, razón por la cual procedieron a comunicarle su detención, previa lectura de sus derechos que le asisten conforme a la Ley; Lesiones y Alcoholemia: El imputado fue atendido en el mismo lugar de su detención por el doctor Luis Monsalve M., según dato de atención Nro. 26821, además le realizó la alcoholemia correspondiente, depositando la muestra de sangre extraída en el frasco Nro. 15115. Licencia: El imputado lo hacía con licencia de conductor clase "B", de la Ilustre Municipalidad de Cauquenes, vigente hasta el 28.11.2023. Al Final se aprecian cuatro firmas ilegibles. Al final se aprecian dos firmas ilegibles.

Luego figura una boletas de alcotest tituladas Dräger, en que se lee que la fecha es 2019.05.05; que la hora es 0:36; que el nombre es Ralph Johnn Veloz Rodríguez; y que la prueba del examinado fue siempre 1.20 g/L. Al final se aprecia una firma ilegible.

Luego figura un informe médico de lesiones, en que se consigna el N° 16821 y como fecha 05/05/2019; que el paciente es Ralph Johnn Veloz Rodríguez; y que no presenta lesiones y se le toma muestra para alcoholemia en el frasco N° 15115. Al final del documento se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Luis Monsalve M. Médico Cirujano.

Luego figura el Informe de Alcoholemia N° 3471/2019, correspondiente a la causa 1900498181-5 de la Fiscalía de Linares, fechado en Talca el 29 de mayo del año 2020. En él también se lee que “el funcionario administrativo que suscribe certifica que la muestra para este examen de alcoholemia se recibió como perteneciente a Don (a): RALPH JOHNN VELOZ RODRIGUEZ C.I. 5711952-1 Siendo tomada el 05/05/2019 a las 01:10 hrs. en el SENDA. Por el Dr.(a) LUIS MONSALVE MORALES [...] según consta en la boleta de remisión de la muestra. El Perito BIOQUÍMICO LEGISTA que suscribe certifica que el examen científico de dicha muestra, asignada con el 3471/2019 dio un resultado de 1,39 g%, (uno coma treinta y nueve gramos por mil). Al final se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Mauricio Recabal Sandoval, Perito Ejecutor, Unidad de Alcoholemia del Servicio Médico Legal.

Centrándonos ahora el supuesto consistente en que, en conocimiento de que Ralph Johnn Veloz Rodríguez era imputado en una causa por el delito de conducción en estado de ebriedad, Claudia del Pino Acuña, previamente concertada



con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente en, a lo menos, una descripción de la conducta punible a que se refería dicha causa más el nombre, dirección y número telefónico del imputado Ralph Johnn Veloz Rodríguez, así como la graduación alcohólica con que fue sorprendido, con el fin de que solicitara al mismo beneficios económicos a cambio de terminar su causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación, importante es, para iniciar, tener presente que Ricardo Ignacio Vega Guerrero declaró ante estrados y corroboró dicha dinámica, describiéndola en definitiva como un modus operandi que acordó con Claudia del Pino Acuña y que aplicaron en múltiples casos, entre ellos el hecho inmediatamente anterior, éste y otros que se han analizado y más adelante se analizarán.

Dado que la declaración ante estrados del acusado Vega Guerrero ya fue extractada anteriormente, no la repetiremos para evitar redundar. Sin perjuicio de ello, recordaremos que, en lo más pertinente, señaló que un día su esposa Claudia dijo que estaba cagada de plata y que sabía cómo ganar plata. Le dijo que era con el tema de la movida de las licencias y que era fácil para ella porque eran causas de ella y nadie se iba a meter a esas causas. Le preguntó si estaba segura y dijo que la única forma de que la pillaran era que algunos de los que ayudaran, “sapearan”. Así lo hizo. Ella sacaba la información del computador y escribía en un cuaderno que incautó la Policía de Investigaciones, donde estaba todo escrito con letra de ella, escribía los RUC y le pasaba a él un papel con el nombre de la persona, los grados alcohólicos y el número de teléfono y él la llamaba y le decía que se llamaba Cristian, que había una movida y si le interesaba. Unos le decían que sí y otros que no. Con los que accedieron, se juntaron en Linares, les explicaba la movida en persona y le decían que sí. Ahí él iba a la casa, le decía a ella que este guevón dijo que sí y ella hacía el tema en el computador.

Cabe recordar que además señaló que, con Ralph, a él lo llamó por teléfono por los datos que sacó Claudia y se juntaron en la carretera afuera. Le explicó la movida y le cobró \$300.000. Se los pagó en efectivo la señora de él, en una clínica de diálisis en calle Brasil y a él se le dio la carta de archivo que confeccionó Claudia. El dinero se lo entregó todo a Claudia.

Ya se consignó que este Tribunal concluyó que esos dichos dan cuenta de un modus operandi preacordado por ambos acusados que se ajusta al que en este fallo se tuvo por suficientemente probado y que, para formar tal estándar de



convicción, no consideramos únicamente dicha declaración, sino que también múltiples razonamientos y corroboraciones que debidamente se demostraron durante la audiencia de juicio oral.

Dado que los mismos se expusieron latamente al analizar el hecho que en la presente motivación singularizamos con el N° 2.8 y que tales consideraciones son, *mutatis mutandi*, plenamente aplicables al hecho punible ahora en comento, daremos a aquéllas por reproducidas en este punto para no extender innecesariamente en demasía este fallo.

Siguiendo con el presupuesto fáctico que tuvimos por acreditado consistente en que, consecuentemente y con aquella información que Claudia del Pino Acuña le entregó en su poder, Vega Guerrero contactó a Veloz Rodríguez y le solicitó \$300.000 a cambio de que Claudia del Pino Acuña terminara la referida causa, a lo que Veloz Rodríguez accedió, pagando posteriormente dicha suma a Vega Guerrero, ello fue así afirmado por el acusado Vega Guerrero y corroborado por el testigo Ralph Johnn Veloz Rodríguez.

Destacable es que el último se trata de un testigo que reconoció hechos que le podrían ser perjudiciales y del cual ninguna posible animadversión hacia los acusados o ganancia secundaria para faltar a la verdad siquiera se insinuó por las Defensas.

Sobre la acreditación de la generación por parte de la acusada del Pino Acuña de la información que entregó al acusado Vega Guerrero para contactar a Enrique Torres Valenzuela, nuevamente y para evitar una larga repetición, nos remitimos a lo expuesto en relación con el *modus operandi* que tuvimos por suficientemente probado.

En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.15 de la novena motivación de este fallo, resultaron debidamente establecidos, primero, con lo testificado por Ralph Johnn Veloz Rodríguez, quien manifestó que se dedica a temporero, trabaja en varias partes, donde haya trabajo, principalmente en Longaví. Vive en Longaví hace como 45 años. Tiene licencia de conducir. Sabe que está citado porque fue a declarar a la Fiscalía. Sabe que el 18 de mayo del año 2019 iba a Longaví a las carreras de perros y antes de llegar, paró la camioneta, se bajó a orinar, ahí llegó Carabineros, le pidió los documentos y lo encontraron en estado de ebriedad. Lo echaron a la patrulla y lo trajeron a Linares. Le hicieron la alcoholemia y de ahí lo llevaron a Longaví de nuevo y lo esperaba su señora para ver qué había



pasado. Ahí llamaron para el fiscal y él dio la orden de que lo dejaran libre hasta el juicio. Lo detuvieron en Longaví. Conducía una camioneta. Lo detuvieron y lo llevaron a Linares a la alcoholemia. También le hicieron la prueba de la bombilla en la boca para respirar. Después lo dejaron en libertad.

Agregó que a los dos días fue a que se la entregaran en la Fiscalía. Pidió copia del parte por su estado de ebriedad. Se la entregaron y pidió una copia del parte. Al tiempo después siguió saliendo a las carreras de perro y en el grupo de ahí lo invitaron a tomar, pero no tomaba porque ya le había pasado. Alguien del grupo se acordó de alguien que limpiaba el parte de estado de ebriedad. Al tiempo, como 8 o 9 meses después, lo contactó un joven que se llama Ricardo. Se juntaron en la Iansa, él llegó en una camioneta blanca, conversaron y le preguntó cuánto cobrara por limpiarle. Él le dijo que se podían limpiar los papeles, que la señora de él trabajaba en la Fiscalía y cobraba \$600.000. Acordaron 500 y le dio los días para juntar la plata. Después le pidió una copia del parte y como tenía los papeles de cuando le entregaron su licencia, le mandó una copia del número del parte para que viera los antecedentes. De ahí, como a los 10 días, se volvieron a juntar y le mostró en un teléfono donde estaba borrado el parte. Le mostró un teléfono con una foto del número del parte. En eso quedaron, le pagó, el hombre le dijo que le vendiera la mitad de un cordero y quedó de pagárselo pero no se lo pagó. Fue a buscar la mitad del cordero a Longaví y no supo más de él. Todo el trámite en que se contactó con él y le dijo que estaba todo listo, duró unos 20 días. Él tenía antes de esto antecedente penales. Estaba firmando. Pero no tenía nada más de lo que le pasó al último. Cuando le mostró el celular, se veía algo chiquitito. No alcanzó ni a ver y es poco entendido. A él le mandó la copia del parte nomás. Cuando le pagó el dinero, él le dijo que estaba listo. Después le entregó la mitad del cordero y no ha sabido más de él. Él le dijo que el cordero era para comerse un asado con unos colegas. No tuvo más contacto con él. Después de esto, con su causa por manejo en estado de ebriedad no pasó nada. No le ha llegado nada. La licencia la tiene él. Confió en esta persona para hacer esto, piensa para salir del problema. No pensó que iba a pasar esto. Cuando habló en persona con él, le dio confianza que la señora trabajaba en la Fiscalía, eso le dijo él, pero a la señora no la conoce.

Comentó que cuando Ricardo lo llamó, sobre cómo supo que necesitaba ayuda, no sabe por quién porque en las carreras se juntan 200 o 300 personas y se



habla. Cuando lo llamó por teléfono, le dijo que podía limpiar el estado de ebriedad. Como le habían comentado antes en las carreras, pensó que se podía hacer.

Al Querellante respondió que estaba en el grupo de las carreras y se comentaba que había alguien que hacía este trámite de limpiar el parte del estado de ebriedad. Ahí se sabía. Lo detuvieron y todos sabían, todo el grupo sabía que se podía hacer. En diferentes lugares hay canchas de carreras. Se conversó un poco, no todos los fines de semana. En cierta oportunidad se conversó y le dijeron que estaba esta posibilidad.

A la Defensa de del Pino Acuña contestó que, sobre la causa por manejo, nada aún ha pasado. No tiene otra causa. Al día de hoy no es investigado por cohecho.

A la Defensa de Vega Guerrero señaló que no se recuerda de Ricardo. Se contactaron y él le dijo que su señora trabajaba en Fiscalía. Ricardo no le dijo para quién era el dinero.

Al Tribunal aclaró que fue a la Fiscalía a buscar su licencia, se la entregaron y ahí pidió la copia del parte para saber de qué se trataba. El primer contacto fue telefónico y la persona dijo que le podía limpiar el parte. Después le mostró el teléfono y le dijo ahí está borrado. El grupo le debe haber dado a Ricardo su número de teléfono porque lo llamó. En el grupo alguien le dio el teléfono. 8 o 9 meses después lo llamó. Se demoró en hacerle el trámite unos 20 días. De ahí 8 meses aproximados para atrás lo contactó.

En un nuevo interrogatorio, al Ministerio Público respondió que no sabe qué persona entregó su celular a Ricardo. Tampoco le consta cuándo llamaron a Ricardo. Supone a alguien del grupo debe haber sido porque sabían ahí que lo habían tomado detenido. El hombre le exhibió un teléfono. Cuando declaró, dijo que ahí estaba borrado el parte. Recuerda que le exhibió que estaban borradas las causas, los antecedentes.

El comisario de la Policía de Investigaciones Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez asentó la permanencia en el tiempo y en lo sustancial de ese relato, pues refirió que durante la investigación solicitaron a Ricardo Vega que accediera a entregar los patrones de su teléfono porque en las pericias a los teléfonos no se pudo acceder a ellos. Accedió a entregar los patrones, la clave y autorizó la diligencia. Se dio ahí la revisión de los teléfonos. La Fiscalía instruyó que se pudiese abrir el teléfono y mandarlo a periciar. En esa pericia ingresaron al teléfono y extrajeron



información de audio, conversaciones de Whatsapp y registros, fotos de una persona, de un parte denuncia que no sabían de quién era. En el primer relato de Nelson Vega, éste aludió a un señor de Longaví que entregó un cordero para un asado al que no podían ubicar. Mandaron los antecedentes de la identidad de la persona a la Fiscalía para identificar a esta persona y respondieron que fue muy difícil ubicar a Eduardo Lobos porque se había cambiado el delito y porque se había acumulado la causa. La Fiscalía les informó que fue muy difícil ubicar a este señor. La tipificación que le habían puesto era por lesiones y como imputado y víctima y la causa estaba acumulada. Pero lograron encontrar la identidad del señor, era Eduardo Lobos. Recepcionado eso, fueron a ubicar a Lobos a la comuna de Longaví. Este señor fue citado a la unidad y le tomaron declaración como imputado. Con lo aportado por el Ministerio Público sobre su detención se procedió a tomarle declaración.

Manifestó que Lobos indicó que en mayo del 2019 fue detenido por un manejo en estado de ebriedad. Que se dedicaba a la competencia con perros y dentro de su círculo trató de encontrar a alguien que lo pudiera ayudar con la causa porque quería hacer conducta, señaló. Dentro de eso, recordaba que entre febrero a abril del 2020 lo contactó una persona de nombre Cristian, quien le preguntó si había sido detenido por un manejo en estado de ebriedad, respondió que sí y le solicitó la persona que le mandara los antecedentes del parte, los que mantuviera, y ahí se vinculó a Lobos con Vega. Que efectivamente le mandó las fotos de su parte y eso fue lo que encontraron a Vega. Ahí fue identificado. El acuerdo que tuvieron era que él le cobraba 500 o \$600.000 por archivarle la causa y llegaron a un acuerdo en \$500.000 y dentro del acuerdo estaba considerado un cordero o la mitad de un cordero, lo que dijo inicialmente Vega en su declaración. Se juntaron en la Iansa, entregó el dinero para el archivo de la causa y al mes, como en mayo, lo llamó de nuevo Ricardo para cobrarle el cordero para el asado, porque iban a venir unos fiscales de Santiago y estaba preparando un asado. Dijo que su señora que trabajaba en la Fiscalía era la que hacía esta ayuda, estas movidas, estos cierres.

Añadió que se le hizo un reconocimiento fotográfico de Ricardo y también se le solicitó la entrega del teléfono. Dio cuenta de que la persona que lo contactó era Ricardo Vega. Relató que Vega fue con otra persona a buscar un cordero, similar a lo que había declarado Vega. Esa causa de Lobos, estaba archivada con la calificación jurídica de lesiones cree menos graves. Dentro de lo que aparecía en el



relato, el día del pago en Linares en la Iansa, dentro de los antecedentes que Lobos dijo le aportó Vega, le mostró en un teléfono lo que mantenía en la Fiscalía como porte de armas, varias imputaciones más y adentro de ellos cree, recuerda que decía víctima e imputado en una misma causa. Vega le mostró un pantallazo como de una consulta en una base de datos donde estaban todos los antecedentes que Lobos mantenía en la Fiscalía.

En este punto de su declaración, el Ministerio Público exhibió al señor Gutiérrez Gutiérrez las pruebas denominadas en el auto de apertura como “Fotografía de parte denuncia de Carabineros por detención de Eduardo tapia Lobos conducción en estado de ebriedad de 18 de mayo de 2019” y “Fotografía de antecedentes que mantiene Antonio Tapia Lobos por detención por conducir en estado de ebriedad”, y al observarlas manifestó que corresponden a imágenes de lo que aparecía en el teléfono de Ricardo, donde se da cuenta del parte denuncia de Eduardo Antonio Lobos Tapia, alude a la detención de un vehículo modelo Terrano en la comuna de Longaví; y a una hoja que también estaba en el teléfono de Ricardo y que alude a una cantidad de causas que, por lo que indica Eduardo Lobos, es lo que se le exhibió a él, donde aparece conducción sin licencia debida, un robo de una máquina de soldar, porte ilegal de armas, manejo en estado de ebriedad, otra infracción a Ley de Alcoholes, otros delitos e infracciones contra la Ley de Alcoholes, información proviene de una base de datos que tiene o a la que accedió Ricardo, quien dice que su señora de la Fiscalía le enviaba esta información.

Cabe consignar, para demostrar la coherencia de la declaración que revisamos, que en esas imágenes se observan primero fotografías de lo que parece ser el acápite de a relación de hechos de un parte denuncia, donde (en la primera imagen porque la segunda no es legible) se puede leer el nombre Eduardo Antonio Lobos Tapia y textos idénticos a los que se leen en el parte de detenidos de la carpeta investigativa que a continuación se extractará, y dos fotografías de lo que parece ser la pantalla de un teléfono celular donde se aprecia un listado de fechas y nombres de delitos distribuidas en columnas llamadas “Fecha Parte” y “Nombre Caso”.

Con respecto a ello y refrendando el relato del señor Lobos Tapia en lo relacionado con su detención por conducción en estado de ebriedad, el Ministerio Público incorporó la prueba denominada en el auto de apertura como “Causa RUC por 1900534650-1 manejo en estado de ebriedad de Eduardo Lobos Tapia”. Así, en



aquél documento se lee, en su página 1, un parte de detenidos, emanado de la Primera Comisaría de Carabineros de Linares en que figura Fiscalía Local de Linares; N° de Parte 00419; fecha de detención 18/05/2019; hora de detención 22:06; funcionario a cargo del procedimiento Freddy Esteban Palma Zurita, sargento primero; código del delito 14052 conducción estado de ebriedad con o sin daños o lesiones; fecha del delito 12/03/2020; hora del delito 05:15; lugar de ocurrencia vía pública; dirección 2 Norte/1 Poniente de la comuna de Longaví; identificación del detenido Eduardo Antonio Lobos Tapia; N° de documento de identificación 10415950-8; lugar de detención dirección 2 Norte esquina 1 Poniente de la comuna de Longaví; documentos adjuntos declaración aprehensor, certificado médico, derechos detenido, intoxilycer, alcoholemia voluntaria, licencia clase A2 y B Parral y acta de notificación persona; Relación de los Hechos: EDUARDO ANTONIO LOBOS TAPIA, 52 años, chileno, soltero, [...] detenido hoy a las 22:06 horas, en Calle 2 Norte esquina 1 Poniente de Longaví, por el Sgto. 1ro. Freddy Palma Zurita y Cabo 1ro. Rodrigo Arriagada Sánchez, ambos de dotación de esta Subcomisaría, pasa a disposición de esa Fiscalía por el siguiente hecho: porque momentos antes de su detención, en circunstancias que efectuaban un Patrullaje por el sector Central, recibieron un comunicado de conductores que transitaban por el lugar, que en Calle 2 Norte se encontraba un conductor en estado de ebriedad, el cual conducía una Camioneta marca Nissan, modelo Terrano, color blanco, motivo por el cual concurrieron en forma inmediata al lugar, procediendo a fiscalizar en Calle 2 Norte esquina 1 Poniente de esta Comuna, la Camioneta Placa Patente CJVZ-70 quien era conducida por el imputado en comento, quien lo hacía en estado de ebriedad, motivo por el cual se le solicitó que descendiera del vehículo, practicándole el examen de Inytoxileizer, arrojando 1.43 g/l en la sangre, por lo que en forma inmediata se procedió a la detención, leyéndoles sus derechos que le asisten, trasladándolo en forma inmediata al Hospital Base de Linares, con la finalidad de constatarle sus lesiones y efectuarle el examen de alcoholemia en forma voluntaria, dándole cuenta posteriormente de lo sucedido al Sr. Fiscal de turno, quien dispuso el procedimiento de rigor, entregando al detenido en el Servicio de Guardia de la Subcomisaría Longaví; alcoholemia: a juicio del personal aprehensor el imputado lo hacía en estado de ebriedad, no obstante a ello se le efectuó el examen de alcoholemia en forma voluntaria, en el Hospital Base de Linares a las 22:54 horas, con el Frasco Nro. 3202, por el Médico de Turno Doctor Dickson Acosta Céspedes, como



asimismo se le realizó la prueba respiratoria alcohotest arrojándole 1.43 g/l en la sangre, a las 22:06 horas y posteriormente a las 23:01 horas, arrojando 1.58 g/l en la sangre, adjuntando actas respectivas; y sobre la licencia: el imputado lo hacía con Licencia Clase A-4 y E de la Ilustre Municipalidad de Parral, al día. Al Final se aprecian dos firmas ilegibles y un timbre de la Primera Comisaría de Linares.

Luego figuran dos boletas de alcotest tituladas Dräger, en que se lee que la fecha es 2019.05.19; que la hora es 00:01; que el nombre es Eduardo Antonio Lobos Tapia; y que la prueba del examinado fue 1.58 g/L. Al final de los documentos se aprecia una firma ilegible.

Luego figura un dato de atención de urgencia, emanado del hospital de Linares, en que se lee que la fecha de ingreso es 18/05/2019; que el nombre es Lobos Tapia Eduardo Antonio; que el motivo de la consulta es Alcoholemia y constatación de lesiones; que llegó en un vehículo policial de Carabineros; y que se le efectuó una alcoholemia. Al final del documento se aprecia una firma ilegible sobre las menciones Acosta Céspedes Dickson Médico Cirujano.

Luego figura una pieza titulada “Comprobante de Entrega”, con el logo de la Fiscalía Ministerio Público de Chile, en que se lee que comparece Eduardo Antonio Lobos Tapia, a quien se hace entrega de la licencia de conducir clase A4 otorgada por la Municipalidad de Parral, a nombre de Eduardo Antonio Lobos Tapia, recibéndola a entera conformidad. Al final se aprecian dos firmas ilegibles, una sobre el RUT 10415950-8.

Centrándonos ahora el supuesto consistente en que, en conocimiento de que Eduardo Antonio Lobos Tapia era imputado en una causa por el delito de conducción en estado de ebriedad, Claudia del Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente en, a lo menos, el nombre y número telefónico del imputado Eduardo Antonio Lobos Tapia, con el fin de que solicitara al mismo beneficios económicos a cambio de terminar su causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación, importante es, para iniciar, tener presente que Ricardo Ignacio Vega Guerrero declaró ante estrados y corroboró dicha dinámica, describiéndola en definitiva como un modus operandi que acordó con Claudia del Pino Acuña y que aplicaron en múltiples casos, entre ellos el hecho inmediatamente anterior, éste y otros que se han analizado y más adelante se analizarán.



Dado que la declaración ante estrados del acusado Vega Guerrero ya fue extractada anteriormente, no la repetiremos para evitar redundar. Sin perjuicio de ello, recordaremos que, en lo más pertinente, señaló que un día su esposa Claudia dijo que estaba cagada de plata y que sabía cómo ganar plata. Le dijo que era con el tema de la movida de las licencias y que era fácil para ella porque eran causas de ella y nadie se iba a meter a esas causas. Le preguntó si estaba segura y dijo que la única forma de que la pillaran era que algunos de los que ayudaran, “sapearan”. Así lo hizo. Ella sacaba la información del computador y escribía en un cuaderno que incautó la Policía de Investigaciones, donde estaba todo escrito con letra de ella, escribía los RUC y le pasaba a él un papel con el nombre de la persona, los grados alcohólicos y el número de teléfono y él la llamaba y le decía que se llamaba Cristian, que había una movida y si le interesaba. Unos le decían que sí y otros que no. Con los que accedieron, se juntaron en Linares, les explicaba la movida en persona y le decían que sí. Ahí él iba a la casa, le decía a ella que este “guevón” dijo que sí y ella hacía el tema en el computador.

Cabe recordar que además señaló que, sobre el caso de Lobos, de Longaví, a él lo contactó por un amigo cree. Llegó y le dijo que tenía un problema por un tema de la licencia. Le dijo a Claudia, ella vio la causa, parece no era de ella, no sabe qué habrá hecho y a él le cobró \$700.000, pero terminó pagando 500. A él no se le dio carta de archivo. Pagó en efectivo a él y entregó todo el dinero a Claudia.

Ya se consignó que este Tribunal concluyó que esos dichos dan cuenta de un modus operandi preacordado por ambos acusados que se ajusta al que en este fallo se tuvo por suficientemente probado y que, para formar tal estándar de convicción, no consideramos únicamente dicha declaración, sino que también múltiples razonamientos y corroboraciones que debidamente se demostraron durante la audiencia de juicio oral.

Dado que los mismos se expusieron latamente al analizar el hecho que en la presente motivación singularizamos con el N° 2.8 y que tales consideraciones son, mutatis mutandi, plenamente aplicables al hecho punible ahora en comento, daremos a aquéllas por reproducidas en este punto para no extender innecesariamente en demasía este fallo.

Siguiendo con el presupuesto fáctico que tuvimos por acreditado consistente en que, consecuentemente y con aquella información que Claudia del Pino Acuña le entregó en su poder, Vega Guerrero contactó a Lobos Tapia y le solicitó \$500.000 a



cambio de que Claudia del Pino Acuña terminara la referida causa, a lo que Lobos Tapia accedió, pagando posteriormente dicha suma a Vega Guerrero, ello fue así afirmado por el acusado Vega Guerrero y corroborado por el testigo Eduardo Antonio Lobos Tapia.

Destacable es que el último se trata de un testigo que reconoció hechos que le podrían ser perjudiciales y del cual ninguna posible animadversión hacia los acusados o ganancia secundaria para faltar a la verdad siquiera se insinuó por las Defensas.

Sobre la acreditación de la generación por parte de la acusada del Pino Acuña de la información que entregó al acusado Vega Guerrero para contactar a Eduardo Lobos Tapia, nuevamente y para evitar una larga repetición, nos remitimos a lo expuesto en relación con el *modus operandi* que tuvimos por suficientemente probado.

En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.16 de la novena motivación, resultaron debidamente establecidos, primero, en particular respecto de la nomenclatura del delito y el ejercicio de la facultad de no iniciar investigación que se dio por probado realizó la acusada del Pino Acuña en la plataforma computacional de la Fiscalía, por lo aportado por la testigo Karem Silvana Torres de La Fuente con la exposición revestida de los atributos que ya destacamos y respecto de la cual damos acá por reproducida la primera parte de su declaración y las aclaraciones que aportó, porque ya fueron extractadas al analizar los hechos relacionados con la causa RUC 1900060766-8.

Sin perjuicio de ello, en lo atinente a los presupuestos que ahora revisamos, la señora Torres de La Fuente, al serle exhibidas las pertinentes fotografías del que se llamó en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA”, que corresponden a las que van de la N° 91 a la N° 102, señaló que la primera corresponde a una causa asignada a Claudia del Pino, el RUC terminado 2000185678-3, del imputado Manuel Alejandro Pared, causa terminada. Luego ve la historia del caso del RUC, está marcada una decisión de no iniciar investigación de fecha de digitación 2 de abril del 2020. Luego sigue otra FNI del 29 de abril del 2021, luego la aprobación de decisión de término en el Tribunal y después una petición de nulidad del año 2022. Luego ve el detalle de la historia del FNI destacado del mismo RUC, fecha de la actividad 2 de abril 2020, se dice que se usó la plantilla de FNI para interconexión y está la cuenta



F703CdelPino. Luego ve la historia del mismo RUC terminado en 678-3, marcada una FNI del 29 de abril del 2021. Después aparece la aprobación por el Tribunal y una solicitud de nulidad del 2022. Luego ve un apantalla del mismo RUC, ese documento lo genera la cuenta F703CdelPino. Luego ve dos imágenes un escrito de FNI del RUC terminado en 678-3 y lee su contenido visible. Luego ve la historia del caso del RUC terminado en 678-3, marcada una aprobación de decisión de término del 14 de mayo del 2021. Luego ve el detalle de la historia del mismo RUC, de la aprobación de la decisión de término, fecha de resolución 12 de mayo del 2021. Aparece digitando la actividad la cuenta C703CdelPino. Luego ve un escrito que dice aprueba artículo 168 del 12 de mayo del 2021, en que se aprueba la decisión de abstenerse de investigar, aparece el RUC terminado en 678-3 y el RIT 2342-2021.

Sobre lo que se acaba de exponer, también debe destacarse que, en consonancia con lo que antes ya había expuesto la señora Torres de La Fuente, se trata de imágenes tomadas desde el sistema SAF del Ministerio Público, específicamente relacionadas con actividades registradas en el mismo respecto de la causa RUC N° 2000185678-3, y que aquéllas revelan, dado el historial de dicho proceso, que en esa plataforma informática se ingresó al menos una decisión de no iniciar la investigación el día 2 de abril del año 2020. Sobre quién ejecutó dicha actuación, dado que en la fotografía N° 100 lo que aparece destacado es una resolución llamada “Aprobación Decisión de Término” de fecha 14/05/2021 y no una de las dos decisiones de término llamadas “Decisión de no Iniciar Investig” que se leen, de fechas 29/04/2021 y 02/04/2020 (aludimos sólo a la segunda porque es la que está dentro del marco temporal de la acusación), de acuerdo a lo que la misma señora Torres de La Fuente explicó no es posible vincular la imagen 101 con alguna de dichas decisiones de término. Ello queda corroborado por el hecho de que en esta última fotografía, la actividad que detalla precisamente es una “Aprobación no Inicio Investigación”, y no una decisión de no iniciar la investigación.

Por lo anterior y a falta de más probanzas pertinentes producidas en el juicio oral, este Tribunal estima que no es factible aseverar, con el estándar exigido por la ley, que, como la parte Querellante sostuvo en su libelo, haya en esta causa existido una prueba de intoxicilizer respecto al imputado Manuel Alejandro Paredes Dagnino de 1,64 gramos por mil, o que con aquella decisión de no iniciar investigación, la acusada del Pino Acuña haya impedido y obstaculizando gravemente la



investigación y persecución criminal, sin perjuicio que el escrito no se halla presentado efectivamente al Tribunal.

En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.17 de la novena motivación, resultaron debidamente establecidos, primero, con el mérito de la prueba incorporada por el Ministerio Público denominada en el auto de apertura como “Copia causa RUC 2000213518-4 de La Fiscalía Local de Linares por el delito de uso fraudulento denunciante víctima CLAUDIA DEL PINO ACUÑA” en que, en lo relevante y especialmente sobre el tenor de la denuncia que en ella figura, se lee, en su página 1, la carátula de una carpeta física que muestra el logo de la Fiscalía Regional del Maule y como, RUC N° 2000213518-4, como caso “uso fraudulento de tarj.c” y como fecha de recepción el 25-02-2020; un parte denuncia en que se lee que la región es la VIII del Maule, que la fecha de la denuncia es el 25/02/2020, que el código del delito es 12151 “uso fraudulento de tarj.cred.y deb.Ley 20009 sobre uso de TC”, que el sitio del suceso fue “cajero automático”, que la identificación del denunciante es Claudia Andrea del Pino “Acu?a”, que su número de identidad es 13101361-2, que es una profesional con master/magíster y la siguiente relación de hechos, todo en mayúsculas y tras la cual figura una firma ilegible sobre la mención “denunciante”: “VENGO EN DENUNCIAR EL SIGUIENTE HECHO: SOY TITULAR DE LA CUENTA CORRIENTE NUMERO 39100065511 DEL BANCO ESTADO, CUENTA EN LA CUAL ME DEPOSITAN MI SUELDO. ES DEL CASO QUE CON FECHA 20 DE FEBRERO 2020, SIENDO ALREDEDOR DE LAS 13:30 HORAS REALICE UN GIRO POR LA SUMA DE \$200.000 PESOS EN UN CAJERO AUTOMATICO UBICADO EN LA SUCURSAL DEL BANCO SANTANDER DE LINARES, UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA DE LINARES, DESCONOZCO NUMERACION, POSTERIORMENTE ME DIRIGI A MI DOMICILIO CON TODA MI DOCUMENTACION. AL DIA SIGUIENTE, 21 DE FEBRERO 2020, EN HORAS DE LA MA?ANA, INGRESE A LA PLATAFORMA BANCO ESTADO DE INTERNET CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UNOS PAGOS YA QUE RECIENTEMENTE HABIA RECIBIDO MI SUELDO, ADVIRTIENDO EN ESE MOMENTO QUE ESE MISMO DIA SIENDO EXACTAMENTE LAS 00:41 HORAS, ES DECIR, PASADA LA MEDIA NOCHE, ALGUIEN RABIA EFECTUADO UNA TRANSACCION, AL PARECER UN GIRO EN UN CAJERO AUTOMATICO QUE DESCONOZCO, TRANSACCION QUE NO FUE



REALIZADA POR MI Y POR NADIE AMI SOLICITUD YA QUE EN ESE MOMENTO YO ME ENCONTRABA EN MI CASA ACOSTADA. POR LO ANTERIOR, PUEDO DEDUCIR QUE AL UTILIZAR MI TARJETA DE DEBITO DE MI CUENTA CORRIENTE EN EL CAJERO DEL BANCO SANTANDER ESTA FUE CLONADA Y FRAUDULENTAMENTE UTILIZADA PARA EL GIRO QUE DESCONOZCO. AGREGO QUE MANTENGO SEGURO CONTRA FRAUDES PARA MI CUENTA CORRIENTES Y CUENTAS ASOCIADAS AMI RUT TODAS DEL BANCO ESTADO, POLIZA QUE SE ENCUENTRA VIGENTE Y QUE AL MOMENTO DEL GIRTO FRAUDULENTO SE ENCONTRABA PAGADO Y VIGENTE COMO HE SE?ALADO, POR LO QUE SOLICITO SE LE HAGA REINTEGRO DEL MONTO DEFRAUDADO. ACOMPA?O COPIA DE MI CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE DONDE APARECE CON DESTACADOR EL GIRRO FRAUDULENTO QUE DESCONOZCO. AGREDO ADEMAS CARTA DIRIGIDA A LA COMPA?IA DE SEGUROS QUE TENGO CONTRATADA SE?ALANDO LO SUCEDIDO Y SOLICITANDO EL REINTEGRO DEL MONTO FRADULENTAMENTE GIRADO DESDE MI CUENTA CON EVENTUAL CLONACION DE MI TARJETA DE CUENTA CORRIENTE”.

Ello en lo nuclear coincide con lo que la acusada del Pino Acuña declaró sobre el punto al comienzo del juicio oral y renunciando a su derecho a guardar silencio, ya que manifestó que en julio se produjo uno de los supuestos fraudes, cuando ella despertó en la pieza de su hijo con una notificación del Banco Estado donde se decía que se había hecho una transferencia a la cuenta de Ricardo. Lo fue a encarar y le preguntó qué pasó. Le respondió que él no lo hizo. Él tiene acceso a sus tarjetas de coordenada, le sacaba sus tarjetas. Él le dijo que debía ir al banco a denunciar para que le devuelvan la plata. Le preguntó a él qué pasó, que la plata estaba en su cuenta y se la devolviera y él señaló que no se la podía devolver, que lo hicieran todo formal y fuera al banco. Fue a la Fiscalía, habló con Marcela Norambuena, encargada de las denuncias directas, le dijo que sufrió un fraude del banco, le preguntó cómo hacerlo y ella le dijo que a ella le había pasado lo mismo y cuando le pasó, ella misma se tomó la denuncia porque esa denuncia es para ir al banco con la denuncia de la Fiscalía, así que le indicó que se la tomara ella no más. Ahí denunciaron ella y Ricardo porque él consultó en el banco y le habían sacado la plata de su cuenta. Ella pasó las denuncias a preclasificación a cargo de Paulina



Salazar. Nunca tramitó una causa de fraude porque no tenía posibilidad de pedir un FNI o nada. Cuando se vea el pericial 90 y las capturas de pantalla, se verá que en las decisiones de todos los fraudes, que tienen equivocaciones en el RUC y la fecha, ella no tuvo ninguna intervención porque una se investigó, en otra se aplicó FNI y en la otra no existió. Cuando Ricardo empezó a negarle este tema, fue a hablar con el encargado del banco, quien le dijo que no eran los responsables de esto, que tenían una empresa externa que averiguaba si procedía hacer las devoluciones porque no era una devolución a todo evento, debe proceder porque hubo una conducta de clonación o de fraude y si se le devolvieron dineros, es porque así corresponde. Se quedó con esa sensación. Esa situación de fraude se repitió una o dos veces más. De esas veces ella hizo dos denuncias que son las que el banco reporta, no tres como se indica en la acusación. Ahí a Ricardo ese día le congelaron la cuenta, le cerraron la tarjeta y más encima la culpó a ella por eso. Tuvieron la media discusión, donde de nuevo la empezó a agredir, que era por su culpa y tuvieron otra pelea.

De esa manera, del Pino Acuña hizo alusión a dos o tres situaciones como la analizada y a denuncias que se tomó a sí misma en la Fiscalía, lo que se condice con la carpeta investigativa que se acaba de extractar.

Coincidiendo en suma con esos dichos, aunque elevando el número de veces en que habrían ocurrido los eventos, el acusado Vega Guerrero declaró, también al comienzo del juicio oral y renunciando a su derecho a guardar silencio, que, sobre el tema del banco, de la transferencia que figura a su nombre, ese día cuando ella le dijo eso, ella tenía su tarjeta. Si bien su tarjeta nunca estaba con plata, ella siempre le transfería 20, 50, plata para ir al supermercado porque siempre había que comprar cosas y le transfería. Ese día salió reflejada la transferencia pero nunca la hizo del teléfono de ella o de alguna parte y él mismo la acompañó al banco a hacer la denuncia porque supuestamente a ella le habían clonado su tarjeta. A los días se percató de que su tarjeta (del testigo) estaba bloqueada. Fue al banco y debió hacer un papel de su puño y letra sobre que ella le había bloqueado su tarjeta en base a la denuncia que hizo y a la que la acompañó. Sobre la transferencia del banco, tenía protección por fraude en el Banco Estado donde tenía cuenta corriente y cuenta RUT. La tarjeta de coordenadas la tenía ella siempre en su cartera. Esa transferencia que fue alegada, fue de \$150.000 que ella un día en la mañana le dijo que había aparecido reflejada en su cuenta, pero él no tenía su cuenta. Después a ella esa plata del seguro se la devolvieron del seguro. O sea, según ella, apareció una transferencia



desde su cuenta a la de él pero él no tenía la tarjeta de coordenadas, nunca, de hecho ni siquiera tenía la aplicación en su teléfono para transferir. Ella lo llamó y le preguntó si fue él, respondió que no, él mismo la fue a buscar a la Fiscalía y fueron los dos al banco y ella hizo la denuncia por el tema del fraude, lo hizo en el banco. No sabe si se denunció en la Fiscalía. Sí sabe que le devolvieron la plata. El problema de las transferencias, con él, fue esa vez no más, pero ella siempre llamaba porque le habían clonado la tarjeta y el seguro iba y le devolvía la plata. Eso pudo ocurrir unas siete veces. Sobre los montos, siempre eran 200, 100. No sabe si esas transferencias o clonaciones eran efectivas o no.

Engarza en particular con lo planteado por la acusada del Pino Acuña la prueba llamada en el auto de apertura como “Una fotográfica de carta presentada en Banco estado para activar seguro de fraude, compuesto de 4 hojas, de fecha 26 de febrero de 2020, firmada por Claudia del Pino, anexo de comprobante de entrega al banco y posterior respuesta de aprobación de devolución de dinero”, ya que en ella se aprecia primero una fotografía de una carta manuscrita dirigida a “Seguros Banco Estado”, que en su parte inferior tienen una firma ilegible bajo el nombre Claudia del Pino Acuña, en que en suma se manifiesta que el día 26 de febrero del año 2020 interpone una denuncia contra el Banco Estado y pone en conocimiento del área de seguros contra fraudes que el 20/02/2020 a las 13:37 horas efectuó un giro desde un cajero automático, al día siguiente ingresó a la plataforma internet del Banco Estado y advirtió que el 21/02/2020 a las 00:41 horas se había ejecutado una transacción, al parecer un giro desde un cajero automático que desconoce por \$100.000, el cual no fue realizado por ella y por nadie a su solicitud, por lo que deduce que su tarjeta le fue clonada y fraudulentamente fue utilizada para realizar el giro que desconoce y niega haber hecho. Se solicita finalmente el reintegro de la suma defraudada de \$100.000.

Dentro de esa misma prueba, y en lo atinente a la devolución de los fondos reclamados, se incorpora un escrito con el logo del Banco Estado, dirigido a Claudia del Pino Acuña, en que se le informa que se tomó conocimiento del reclamo que presentó el 26/02/2020 y, al final, otro escrito, también con el logo del Banco Estado y dirigido a Claudia del Pino Acuña, en que se le informa que, luego del análisis correspondiente, le efectuaron un pago por la suma de \$100.000 que corresponde al total de las transacciones objetadas.



En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.18 de la novena motivación, resultaron debidamente establecidos, primero, con el mérito de la prueba incorporada por el Ministerio Público denominada en el auto de apertura como “Copia causa RUC 1901128408-9 de La Fiscalía Local de Linares por el delito de uso fraudulento denunciante víctima CLAUDIA DEL PINO ACUÑA” en que, en lo relevante y especialmente sobre el tenor de la denuncia que en ella figura, se lee, en su página 1, la carátula de una carpeta física que muestra el logo de la Fiscalía Regional del Maule y como, RUC N° 1901128408-9, como caso “uso fraudulento de tarj.c” y como fecha de recepción el 18-10-2019; un parte denuncia en que se lee que la región es la VIII del Maule, que la fecha de la denuncia es el 18/10/2019, que el código del delito es 12151 “uso fraudulento de tarj.cred.y deb.Ley 20009 sobre uso de TC”, que el sitio del suceso fue “cajero automático”, que la identificación del denunciante es Claudia Andrea del Pino Acuña, que su número de identidad es 13101361-2, que es una profesional con master/magíster y la siguiente relación de hechos, todo en mayúsculas y tras la cual figura una firma ilegible sobre la mención “denunciante”: “VENGO A INTERPONER DENUNCIA POR LOS SIGUIENTES HECHOS: CON FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2019, ALREDEDOR DEL MEDIO DÍA, CONCURRÍ AL BANCO ESTADO DE LINARES A REALIZAR UN TRÁMITE PERSONAL EN EL CUAL DEBÍA PAGAR EN EFECTIVO UNA SUMA DE DINERO, ESTANDO CON EL EJECUTIVO QUE ME ESTABA REALIZANDO EL TRÁMITE Y PARA CONCLUIR ÉSTE ME DIRIGÍ A LOS CAJEROS AUTOMÁTICOS DEL MISMO BANCO A RETIRAR EL MONTO QUE DEBÍA ENTREGAR EN EFECTIVO Y TODOS LOS CAJEROS ME SEÑALARON QUE EL MONTO SOLICITADO EXCEDÍA LO QUE TENÍA EN MI CUENTA, LO QUE ERA IMPOSIBLE YA QUE ME HABÍAN PAGADO MI REMUNERACIÓN DE OCTUBRE EL DÍA ANTERIOR 16 DE OCTUBRE. PARA FINALIZAR MI TRÁMITE TUVE QUE TRANSFERIR DESDE MI CUENTA CORRIENTE A MI CUENTA RUT Y CON ESA TARJETA LOGRE HACER EL GIRTO QUE NECESITABA, LO QUE DA CUENTA DE QUE EFECTIVAMENTE EL PROBLEMA NO ERA FALTA DE FONDOS. EL DÍA DE AYER 17 DE OCTUBRE, SIENDO LAS 18:34 HORAS RECIBÍ UN CORREO ELECTRÓNICO A MI MAIL REGISTRADO EN BANCO ESTADO EL CUAL ME SEÑALABA QUE SE ACABABA DE HACER UN GIRO DESDE MI CUENTA CORRIENTE POR \$200.000 PESOS, SITUACIÓN



QUE ERA IMPOSIBLE YA QUE LA TARJETA ESTABA CON PROBLEMAS SEGÚN LO MANIFESTPE EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, POR LO QUE DE INMEDIATO ADVERTÍ QUE HABÍA SIDO VÍCTIMA DE LA CLONACIÓN DE LA MISMA O DELITO SIMILAR, POR LO CUAL LO PRIMERO QUE HICE FUE TRANSFERIR TODO EL MONTO QUE TENÍA EN LA CUENTA CORRIENTE AMI CUENTA RUT Y ASÍ EVITAR QUE ME SIGUIERAN HACIENDO GIROS FRAUDULENTOS. DE ESTA FORMA, DESCONOZCO ABSOLUTAMENTE ESE GIRO O MOVIMIENTO BANCARIO E INTERPONGO ESTA DENUNCIA PARA EFECTOS DE QUE SEA REMITIDA Y CONOCIDA POR LOS EJECUTIVOS DEL SEGURO QUE MANTENGO EN MI CUENTA CORRIENTE CONTRA FRAUDES DE ESTA NATURALEZA Y SE ME RESTITUYA EL MONTO DEFRAUDADO”.

Reiteramos que ello, en lo nuclear, coincide con lo que la acusada del Pino Acuña declaró sobre el punto, haciendo alusión a dos o tres situaciones como la analizada y a denuncias que se tomó a sí misma en la Fiscalía, lo que se condice con la carpeta investigativa que se acaba de extractar.

El acusado Vega Guerrero, cuando declaró también al comienzo del juicio oral y renunciando a su derecho a guardar silencio, en suma coincidió con la referida acusada, sin perjuicio de que haya elevado el número de veces en que habrían ocurrido los eventos.

Dado que las declaraciones de ambos acusados ya se extractaron en lo atinente al analizar el hecho 2.17 de este fallo, no las repetiremos para evitar extendernos inoficiosamente.

Engarza en particular con lo planteado por la acusada del Pino Acuña la prueba llamada en el auto de apertura como “Fotografía de carta presentada en Banco Estado de fecha 06 de noviembre de 2019 relacionada con movimientos no reconocidos de fecha 17 de octubre de 2019 por un monto de \$ 200.000, pesos junto a comprobante de notificación de giro en cajero red banc por la suma de \$ 200.000”, ya que en ella se aprecia primero una fotografía de una carta manuscrita dirigida a “Seguro Banco Estado(Fraudes)”, que en su parte inferior tienen una firma ilegible bajo el nombre Claudia del Pino Acuña, en que en suma se manifiesta que con fecha 17 de octubre del año 2019 fue al Banco Estado de Linares y al retirar dinero del cajero, éste le señaló que el monto excedía al máximo, lo que no era posible porque le habían depositado el sueldo el día 16/10. Ese día, a las 18:34 horas, le llegó un



correo en el cual se le decía que se había realizado un giro por \$200.000, lo que era imposible porque su tarjeta estaba mala y la había destruido, lo que le da muestra de que fue víctima de la clonación de su tarjeta o de delitos similares. Luego se aprecia una fotografía de una página con el logo del Banco Estado, que consiste en un correo dirigido a Claudia del Pino y en que se informa que se realizó un giro en cajero Redbanc por \$200.000 el día 17/10/2019.

En lo tocante a la devolución de la suma de dinero en comento, consta de la prueba llamada en el auto de apertura como “Oficio Banco estado de fecha 25 de abril de 2021 el cual adjunta [...] e. Sinistro 3203376”, que en su parte superior muestra el logo de la empresa BNP Paribas Cardif, pudiendo leerse luego lo siguiente: Dictámen: aprobado; N° de Sinistro: 3203376; Producto: cuenta corriente; cobertura: fraude y clonación de tarjeta; Monto Reclamado: [Pesos] 200.000; Asegurado Sinistrado: Claudia Andrea del Pino Acuña; Fecha Ocurrencia: 17/10/2019; Fecha Denuncia: 07/01/2020; Causa del Sinistro; clonación; Fecha Dictámen: 08/01/2020; Fecha de Pago: 10/01/2020; Monto Pagado \$: 200.000; y Observaciones Generales: con fecha 10/01/2020 se cancela siniestro por monto de \$200.000.

En lo tocante a los presupuestos fácticos descritos en el punto 2.19 de la novena motivación, resultaron debidamente establecidos, primero, con el mérito de la prueba incorporada por el Ministerio Público denominada en el auto de apertura como “Copia causa RUC 1900171008-k de La Fiscalía Local de Linares por el delito de uso fraudulento denunciante víctima CLAUDIA DEL PINO ACUÑA” en que, en lo relevante y especialmente sobre el tenor de la denuncia que en ella figura, se lee, en su página 1, la carátula de una carpeta física que muestra el logo de la Fiscalía Regional del Maule y como, RUC N° 1900171008-K, como caso “uso fraudulento de tarj.c” y como fecha de recepción el 14-02-2019; un parte denuncia en que se lee que la región es la VIII del Maule, que la fecha de la denuncia es el 14/02/2019, que el código del delito es 12151 “uso fraudulento de tarj.cred.y deb.Ley 20009 sobre uso de TC”, que el sitio del suceso fue “cajero automático”, que la identificación del denunciante es Claudia Andrea del Pino Acuña, que su número de identidad es 13101361-2, que es una profesional con master/magíster, que el imputado no fue definido y la siguiente relación de hechos, todo en mayúsculas y tras la cual figura una firma ilegible sobre la mención “denunciante”: “QUE SOY CLIENTE DEL BANCO ESTADO MANTENIENDO CON DICHA



INSTITUCIÓN CUENTA CORRIENTE Y CUENTA RUT, CON SUS CORRESPONDIENTES TARJETAS (PLÁSTICOS). LOS HECHOS EN QUE CONSISTE MI DENUNCIA ES QUE CON FECHA 25 DE ENERO 2019 SE REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA DESDE MI CUENTA CORRIENTE A OTRA QUE DESCONOZCO DE \$20.000, LA CUAL YO NO EFECTUÉ; POSTERIORMENTE ADVERTÍ QUE CON FECHA 28 DE ENERO DE REALIZÓ UN GIRO POR \$70.000 PESOS QUE TAMPOCO REALICÉ. ME HAN LLEGADO AMI CORREO ELECTRÓNICO CORREOS ALUSIVOS A TRANSFERENCIAS POR MONTOS MENORES ENTRE O HACIA PERSONAS QUE NO CONOZCO, SITUACIÓN QUE REPORTÉ EN SU MOMENTO AL BANCO ESTADO VÍA TELEFÓNICA. CUENTO CON SEGURO CONTRA FRAUDES, LO QUE CLARAMENTE OCURRIÓ EN ESTE CASO. HARTE, ADEMÁS, EL RECLAMO RESPECTIVO EN LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUTIONES FINANCIERAS PUES CUANDO LLAMÉ PARA REPORTAR LA SITUACIÓN ME SEÑALARON LLAMARME DENTRO DE UN PLAZO DETERMINADO EL CUAL SE ENCUENTRA CON CRECES VENCIDO”.

Luego figura un escrito dirigido a un Juzgado de Garantía cuya suma es Comunica Principio de Oportunidad, en que se lee que la fiscal Carlos D’Agostini Ibáñez comunica que el Ministerio Público ha resuelto no iniciar la persecución penal respecto del hecho consistente en que “CON FECHA 25 DE ENERO 2019 SE REALIZÓ UNA TRANSFERENCIA DESDE MI CUENTA CORRIENTE A OTRA QUE DESCONOZCO DE \$20.000, LA CUAL YO NO EFECTUÉ; POSTERIORMENTE ADVIERTO QUE CON FECHA 28 DE ENERO DE REALIZÓ UN GIRO POR \$70.000 PESOS QUE TAMPOCO REALICÉ. ME HAN LLEGADO A MI CORREO ELECTRÓNICO CORREOS ALUSIVOS A TRANSFERENCIAS POR MONTOS MENORES ENTRE O HACIA PERSONAS QUE NO CONOZCO, SITUACIÓN QUE REPORTÉ EN SU MOMENTO AL BANCO ESTADO VÍA TELEFÓNICA”.

Luego figura una resolución del Juzgado de Garantía de Linares de fecha 28 de febrero del año 2019, en que se lee que se constata con la presentación del fiscal que el ppiode oportunidad ejercido satisface los presupuestos formales del artículo 70 del Código Procesal Penal y se ordena comunicar a la víctima dicha decisión, dándole a conocer sus derechos.



Luego figura otra resolución del Juzgado de Garantía de Linares de fecha 4 de junio del año 2019, en que se lee que se ordena notificar a Claudia del Pino Acuña por cédula la resolución del 28 de febrero del año 2019, exhortándose al Juzgado de Garantía de Rengo.

Reiteramos que ello, en lo nuclear, coincide con lo que la acusada del Pino Acuña declaró sobre el punto, haciendo alusión a dos o tres situaciones como la analizada y a denuncias que se tomó a sí misma en la Fiscalía, lo que se condice con la carpeta investigativa que se acaba de extractar.

El acusado Vega Guerrero, cuando declaró también al comienzo del juicio oral y renunciando a su derecho a guardar silencio, en suma coincidió con la referida acusada, sin perjuicio de que haya elevado el número de veces en que habrían ocurrido los eventos.

Dado que las declaraciones de ambos acusados ya se extractaron en lo atinente al analizar el hecho 2.17 de este fallo, no las repetiremos para evitar extendernos inoficiosamente.

UNDÉCIMO: Que los hechos consignados en el noveno considerando de este fallo son constitutivos únicamente de los siguientes delitos, según la numeración que se les asignó en el noveno considerando de este fallo:

a) respecto de los hechos N° 2.8, N° 2.9 y N° 2.10, de sendos delitos consumados de cohecho, figura descrita y sancionada en el artículo 248 bis del Código Penal, y de obstrucción a la investigación, figura descrita y sancionada en el artículo 269 ter del Código Penal.

b) respecto de los hechos N° 2.12, N° 2.13, N° 2.14 y N° 2.15, de sendos delitos consumados de cohecho, figura descrita y sancionada en el artículo 248 bis del Código Penal.

De esa manera, a juicio de este Tribunal todos esos hechos son constitutivos del llamado delito de cohecho agravado de funcionario público del artículo 248 bis del Código Penal, norma que a la letra establece que “el empleado público que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero para omitir o por haber omitido un acto debido propio de su cargo, o para ejecutar o por haber ejecutado un acto con infracción a los deberes de su cargo, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y, además, con las penas de inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo al cuádruplo



del provecho solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de cien a mil unidades tributarias mensuales”.

En el plano de los hechos, damos por reproducido lo descrito en los citados numerales que van del 2.8 al 2.15, excluyendo el 2.11, en lo que, en lo medular y relacionados con el N° 1 de la novena motivación, se establece que un empleado público, específicamente un abogado ayudante o asistente de fiscal adscrito al Grado IX del Escalafón Superior del Poder Judicial, con contrato indefinido, en conocimiento de causas por el delito de conducción en estado de ebriedad que se tramitaban en la Fiscalía en que se desempeñaba, previamente concertado con su cónyuge, entregó a éste información con el fin de que solicitara a siete imputados por dichos procesos beneficios económicos a cambio de terminar sus causas, en circunstancias que debían seguir en tramitación. Consecuentemente y con aquella información en su poder, el citado cónyuge contactó a aquellos imputados y les solicitó sumas de dinero a cambio de que el mentado empleado público terminara sus causas, pago que cinco de esos imputados enteraron.

Se tratan así los revisados, en concepto de este Tribunal, de siete hechos distintos en que un empleado público y otra persona previamente concertados conjuntamente solicitaron, y en cinco casos aceptaron, un beneficio económico para sí a cambio de ejecutar un acto con infracción a los deberes del cargo del primero, descripción que subsume plenamente y siete veces en el tipo penal consumado del artículo 248 bis del Código Penal.

Respecto del delito de obstrucción a la investigación, en el artículo 269 ter del Código Penal se prescribe que “el fiscal del Ministerio Público, o el abogado asistente del fiscal, en su caso, que a sabiendas ocultare, alterare o destruyere cualquier antecedente, objeto o documento que permita establecer la existencia o inexistencia de un delito, la participación punible en él de alguna persona o su inocencia, o que pueda servir para la determinación de la pena, será castigado con presidio menor en cualquiera de sus grados e inhabilitación especial perpetua para el cargo”.

En este capítulo, lo que se dio por acreditado fue que en tres de los siete hechos antes referidos, un abogado ayudante o asistente de fiscal adscrito al Grado IX del Escalafón Superior del Poder Judicial, con contrato indefinido, como consecuencia de la oferta que, en concierto previo con su cónyuge, efectuó a imputados consistente en que, a cambio de dinero, terminaría sus causas en



circunstancias que debían seguir en tramitación, en un caso archivó provisionalmente la respectiva causa y cambió en un registro del SAF la calificación jurídica que correspondía, en otro archivó provisionalmente la respectiva causa y en otro archivó provisionalmente la respectiva causa y cambió en dos registros del SAF la calificación jurídica que correspondía, obstaculizando con ello gravemente las tres investigaciones afectadas en los términos que ya se expusieron en el décimo considerando.

Debe destacarse el contexto en dicho empleado público ejecutó tales actuaciones en cada una de esas tres causas, esto es, tras entregar a su cónyuge información con el objeto de que contactara a los referidos imputados para, por su intermedio, solicitarles dinero a cambio de terminar sus causas en circunstancias que las mismas debían seguir en tramitación. De ello, estima este Tribunal, debe necesariamente colegirse el dolo especial requerido por la figura analizada y descartar, por incompatibilidad lógica, un mero error o un dolo eventual.

De ese escenario fáctico, concluyen estos Sentenciadores que estamos antes tres hechos distintos en que un abogado asistente del fiscal, a sabiendas y sobre todo al aplicar tres veces el instituto del archivo provisional del artículo 167 del Código Procesal Penal, en tres causas ocultó antecedentes que permitían establecer la existencia de un delito y la participación punible en él de tres personas, descripción que subsume plenamente y tres veces en el tipo penal consumado del artículo 269 ter del Código Penal.

DUODÉCIMO: Que, respecto de la participación punible de los acusados en los ilícitos que se acaban de calificar jurídicamente, ella ha de fundarse también en la descripción decantada de los siete hechos que van del 2.8 al 2.15, excluyendo el 2.11, según la numeración que se les asignó en el noveno considerando de este fallo, y en los razonamientos, fundados en las probanzas producidas en el juicio oral, que en la motivación siguiente latamente explicitamos y que damos, en lo que corresponde, por reproducidos en este apartado para no caer en una reiteración innecesaria.

Analizando aquellas descripciones, este Tribunal se convence de que, en lo tocante a los delitos de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal, cada una de aquellas descripciones da cuenta clara de sendos hechos de carácter colectivo en Claudia del Pino Acuña y Ricardo Vega Guerrero, la primera con las características especiales exigidas por el tipo penal, previamente concertados procedieron, cada una



de ellos con dominio del hecho pues, dentro de su designio delictivo y plan común, no era realizable ni concretable la oferta ilícita ni obtenible el pago indebido sin el aporte funcional de ambos, a obtener y compartir la información que permitía contactar imputados por delitos de conducción en estado de ebriedad, a realizarles una proposición apoyada en dicha información y a solicitarles por terminar sus causas una retribución en dinero e incluso a recaudar el mismo en cinco casos. Queda así configurada una coautoría y, por ello, han de imputarse recíprocamente a ambos acusados las conductas ejecutadas por cada uno conforme se tuvo por debidamente establecido.

Debe sí analizarse particularmente la situación del acusado Vega Guerrero debido a que el ilícito en comento exige, para su comisión, que el sujeto activo sea un empleado público, cual no es su caso. Ello impone adentrarnos en el tema de la comunicabilidad en los delitos especiales en que participa más de un agente.

Sobre el punto, autorizadamente se ha considerado que “son delitos especiales propios aquellos que solo pueden ser cometidos por determinadas personas: la prevaricación judicial del artículo 223 N° 1 o el incesto del artículo 375 [...]. Son especiales impropios aquellos donde la característica personal parece únicamente a agravar o disminuir la pena de un delito común: respecto del homicidio del artículo 391 N° 2, ser determinado pariente agrava la pena en el parricidio del artículo 390, y la atenúa en el infanticidio del artículo 393. [...] La solución a este problema según la doctrina y jurisprudencia mayoritarias, se encuentra esbozada en el artículo 64 [...] Según esta doctrina, en los casos de los delitos especiales impropios solo a los intervinientes con esas características personales (intraneus) se les imputa el delito que las comprende, mientras que al resto (extraneus), solo la figura base. [...] En cambio, tratándose de delitos especiales propios, como en la prevaricación del artículo 223, se sostiene que, no existiendo delito base, la calidad del sujeto activo es un elemento constitutivo del delito en sí y no de su agravación o atenuación, por lo que corresponde imputar recíprocamente esa calidad a todos los que, conociendo su existencia, colaboran en el hecho colectivo: quién, concertado para su ejecución, facilita los medios para que un juez prevarique, también responde por prevaricación, ya que los particulares nunca podrán prevaricar” (Jean Matus y María Ramírez; “Manual de Derecho Penal Chileno Parte General”; 2ª Edición; 2021; Editorial Tirant lo Blanch; Valencia; p. 502, 503 y 505).



Ello encuentra eco en jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que también ha considerado que “la disputa acerca de la comunicabilidad o incomunicabilidad trae a colación el distingo entre delitos especiales propios e impropios. Tratándose de los primeros, en que la calidad personal concurrente en el sujeto activo es fundante del injusto y la ausencia de ella determina la atipicidad de la conducta ilícita, se afirma la comunicabilidad. En cambio, los delitos especiales impropios tienen la característica de que la cualidad personal sólo produce el efecto de agravar el título de la imputación, manteniéndose la punibilidad del comportamiento aún en el evento de no concurrir el factor personal (no parricidio, pero homicidio; no malversación, pero hurto; no fraude al Fisco, pero estafa)” (Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema el 3 de mayo del año 2023 en la causa Rol N° 59.856-2022).

Dentro de ese encuadre conceptual, para lo revisado primero debemos determinar si el delito de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal es un delito especial propio o impropio, y este Tribunal es de opinión de que corresponde al primer de ellos, pues si quien realiza la conducta que allí se describe no es un empleado público, la misma resulta atípica. Consecuencialmente, hemos de afirmar en este caso la comunicabilidad de la calidad de empleado público de la acusada del Pino Acuña al acusado Vega Guerrero.

En relación con el tipo de participación que se debe adjudicar a cada encausado, del Pino Acuña, en razón de la coautoría establecida y la imputación recíproca que le es inmanente, debe responder como autora conforme al N° 1 del artículo 15 del Código Penal, por haber tomado parte en la comisión del delito de manera inmediata y directa.

Respecto de Vega Guerrero, estima este Tribunal que, al no concurrir en él la calidad específica que exige el tipo penal del artículo 248 bis, no puede reputársele autor del artículo 15 N° 1 del Código Penal, más sí debe tenersele como un autor del artículo 15 N° 3 de ese mismo cuerpo legal habida cuenta de que, conforme ya se dio por legalmente probado, concertado para la ejecución del delito de cohecho en comento facilitó los medios con que se llevó a efecto ese delito al, en los siete casos revisados, utilizar la información que al efecto le proporcionó del Pino Acuña para cumplir con su parte del plan delictivo y contactar a los imputados por los delitos de conducción en estado de ebriedad, solicitarles dinero a cambio de terminar sus respectivas causas y, en cinco casos, recaudar ese dinero.



Relevante es destacar que indudablemente Vega Guerrero estaba en pleno conocimiento de la calidad de empleado público de del Pino Acuña pues, como los dos declararon ante estrados y consta del certificado de matrimonio incorporado, el primero sabía que la segunda trabajaba en Linares como funcionaria de la Fiscalía, sin perjuicio de que además ambos se encontraban, a la época de estos hechos, casados y conviviendo juntos, lo que permite asumir con seguridad tal conocimiento.

Lo antedicho, a juicio del Tribunal, descarta la posibilidad de asignar a Vega Guerrero la calidad de cómplice, pues dicha participación punible, por expresa disposición del artículo 16 del Código Penal, sólo cabe cuando la conducta del involucrado no puede ser comprendida en el artículo 15 de ese mismo código.

Pasando ahora a los delitos de obstrucción a la investigación del artículo 269 ter del Código Penal, damos por reproducido lo expuesto en el primer párrafo de esta motivación y añadimos que la autorizada e ilustrativa explicación y acreditación que efectuó la señora Torres de La Fuente de las respectivas fotografías que forman parte de lo que se llamó en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA” permitió dar por establecido, sin duda razonable alguna, que la acusada del Pino Acuña fue quien ejecutó en los sistemas informáticos del Ministerio Público las actuaciones procesales decantadas, que a lo menos incluyeron el archivo provisional de tres investigaciones.

Por ello y lo ya explicitado en el considerando anterior, la participación de la acusada del Pino Acuña en los ilícitos revisados es la de autora del N° 1 del artículo 15 del Código Penal, por haber tomado parte en la comisión de todos los delitos de obstrucción a la investigación decantados de una manera inmediata y directa.

DECIMOTERCERO: Que el Ministerio Público y la parte Querellante, en lo que no obtuvieron y aún no ha sido analizado, en suma postularon, en relación con los delitos de obstrucción a la investigación, que todos los hechos que al efecto describieron en sus acusaciones completan tal tipo penal.

Revisando cada uno de ellos y siguiendo la numeración utilizada en el noveno considerando de este fallo, el N° 2.1 corresponde al hecho I.1.1 de la acusación del Ministerio Público y al 1.2.1 de la acusación del Querellante. En él se desechó dar por acreditado también que la acusada del Pino Acuña, tras archivar provisionalmente la investigación, adoptó la facultad de no inicio de la investigación



debido a que en la fotografía N° 21 de la prueba llamada en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA”, donde, en relación especialmente con lo explicado y acreditado por la señora Torres de La Fuente, se aprecia la historia de esta causa registrada en SAF, no se observa el ejercicio de aquella facultad después de la actividad de archivo provisional del 11 de diciembre del 2019. Si bien figura allí el ejercicio de una facultad de no iniciar la investigación, ella está registrada con la fecha 15 de octubre del año 2019 (en la fotografía N° 17 puede verse mejor dicha data), o sea, es anterior al referido archivo provisional, por lo que no puede ser considerada so pena de vulnerar el principio de congruencia contenido en el artículo 341 del Código Procesal Penal.

En cuanto al motivo de la absolución, cabe recordar que el artículo 269 ter del Código Penal demanda, para su configuración, la concurrencia de dolo directo con la expresión “a sabiendas”, esto es y para el caso, un dolo que contenga el conocimiento y la voluntad específicos de que lo que se está realizando y lo que se quiere es ocultar antecedentes que permiten el establecimiento de la existencia o inexistencia de un delito, la participación punible en él de alguna persona o su inocencia o que pueda servir para la determinación de la pena.

En dicho escenario normativo, al que debe sumarse el estándar probatorio de razonabilidad que para estos efectos contempla el artículo 340 del Código Procesal Penal, cobra relevancia lo planteado por varias de las probanzas incorporadas al juicio oral que, por su congruencia, establecieron que los abogados asistentes o ayudantes de fiscal que trabajaron en la unidad llamada TCMC de la Fiscalía local de Linares durante los años 2019 y 2020, entre los que estaba la acusada del Pino Acuña, debían absorber una excesiva carga de trabajo que, sumada a constantes requerimientos que se les efectuaban en el sentido de mantener activas las causas que se les asignaban, los llevaba a cometer errores de tramitación, lo que a todas luces resulta incompatible con el dolo especial que ya relevamos.

Habida cuenta de ello, dado que en este caso y en otros que más adelante se expondrán no se estableció debidamente, como sí ocurrió con los hechos 2.8 a 2.10 que intervino un factor (el concierto previo con detalle se describe en esos tres eventos) que evidencia que la acusada del Pino Acuña obró con el dolo especial que ya delineamos, se absolverá por no haberse justificado, con el estándar legal, que la



en comento constituya una acción dolosa en los particulares términos requeridos por el tipo penal aplicable.

Si bien, como sostuvieron ciertos testigos de cargo y en particular el señor Jorquera Loyola, esos defectos en la tramitación de causas pudieron evitarse si la acusada del Pino Acuña hubiese actuado con diligencia en el desempeño de sus funciones, menos se trata el examinado de un delito que pueda cometerse sólo con culpa del agente.

Desarrollando lo precedente, la fiscal jefe de la Fiscalía local de Linares, Carola Milena D'Agostini Ibáñez, testificó sobre el tema que el equipo de la Fiscalía de Linares de TCMC eran Patricio Spiess y Gustavo Flumen. A fines del 2017 Gustavo pidió su traslado a Talca y quedó el cargo vacante. Pensó iban a llamar a concurso interno. Linares no tiene muy buena fama por la carga de trabajo. En marzo o abril llegó Claudia del Pino. Al reincorporarse el 18 de mayo del año 2018 a sus funciones de fiscal jefe, se encontró con este equipo de trabajo con una abogada asistente menos. Pidió apoyo porque la carga de trabajo era muy fuerte. Era complejo el trabajo del TCMC por los ingresos. La vigencia era muy alta, por sobre 1000 causas por abogado asistente. El 2018 ella se hizo cargo de las causas asignadas a Claudia que Claudia prácticamente no vio porque llegó y se fue con licencia médica. Cree volvió en enero del 2019, pero estuvo todo el 2018 afuera. Tuvieron breves apoyos de abogados asistentes que vinieron a trabajar por unos meses, pero no fue mucho el avance. Los fiscales jefe son los jefes de equipo y deben hacer varias labores de control, como la vigencia, los califican, ven sus metas, asocian lo que hacen al cumplimiento de metas. El control de vigencia siempre ha sido bien importante. En eso hay un control regional mensual en que se les manda un reporte de causas sin actividad por más de 60 días y se solicita a los abogados asistentes y a los fiscales también que vayan avanzando con las causas sin actividad. En el caso de TCMC los atrasos eran de 6 meses a un año, nunca excedió de ese tiempo de atraso, de 60 días hasta un año, no lo tiene tan claro. Van por tramos de 2 a 6 meses, porque se supone que su meta es no tener causas sin actividad por más de 60 días. Cuando asumió como reemplazante Claudia, le correspondió ir a juicio orales, atender víctimas y testigos de las causas de los Fiscales. Sobre si además tenía que hacer el trabajo de las 1300 causas que tenía asignadas como abogado asistente, la verdad es que el trabajo de abogado asistente no lo deja nunca y lo que hace respecto del fiscal es reemplazarlo solamente cuando debe ir a audiencias y



eventualmente si tenía un juicio oral. Cree también que dentro de lo que se les pide está revisar los requerimientos del SIAU que requieren respuesta en corto tiempo. Están para subrogar en audiencias, los turnos, eventualmente si hay un juicio oral, SIAU y revisar carpetas nuevas por si falta alguna diligencia.

Añadió que, sobre los manejo en estado de ebriedad, un manejo que del principio no debió ser asignado a un abogado asistente, del minuto uno la persona a la que se le asignó esa carpeta debió pedir la reasignación. El preclasificador sí pudo equivocarse al asignar un manejo en estado de ebriedad con licencia suspendida a un abogado asistente, pero ese abogado debe saber que eso no iba a simplificado. En una audiencia de simplificado por un manejo agravado han tratado de revertir la situación, pero el Juzgado de Garantía les dijo que estaba afinado el procedimiento y no lo podían cambiar por cautela del acusado, que ese fue un error del Ministerio Público. Sí se le hace presente al abogado por qué no se percató, eso ha pasado más de una vez.

Dado lo extractado en el párrafo precedente, cabe dar por razonablemente acreditada parte de la prueba de descargo denominada en el auto de apertura como “74 correos obtenidos de los correos respaldados de correo institucional de Claudia Del Pino entre el 04 de enero de 2019 al 30 de agosto de 2020”, en la parte en que se leen numerosos correos electrónicos, muchos de ellos con el nombre Carola D’Agostini Ibáñez como remitente o destinataria, que confirman la efectividad de la problemática que dicha testigo refirió en relación con la preclasificación errada de causas. Así, figura uno fechado el 29 de octubre del año 2019, de Claudia del Pino a Carola D’Agostini Ibáñez, donde la primera informa que se comunicó con la víctima de una causa que le reveló información por la cual solicita reasignar la causa a “Maite”, ya que “formalizar sólo por lesiones menos graves no creo que esté acorde al relato del afectado”. En otro, en que figura como remitente Tatiana Díaz Coloma, fiscal que también declaró en el juicio e hizo referencia al tema, fechado el 15 de julio del año 2020, se lee “Claudia, te asignaron mal esta causa de riesgo alto, siendo que en el parte estaba la pauta de riesgo alto, veré la reasignación para mí”. En otro, en que figura como remitente Tatiana Díaz Coloma y como destinatarias Claudia del Pino y Patricia Spiess, fechado el 3 de julio del año 2020, se lee “Paty y Claudia, les pio revisar bien sus casos y ver todos los riesgos altos que les hayan asignado mal para que sean reasignados a mí con anticipación, incluso hasta desacatos de controles les han asignado y he pedido resignación”. En, en que figura como



remitente Tatiana Díaz Coloma y como destinataria Nelly Zenteno Flores, fechado el 21 de julio del año 2020, se lee “este caso pasó a control el lunes 15 de junio por desacato VIF, pero fue asignado por error a TCMC-Claudia del Pino”. En otro, en que figura como remitente Carola D’Agostini Ibáñez y como destinataria Claudia del Pino, fechado el 10 de julio del año 2020, se lee “junto con saludar solicito que la causa RUC [...] sea reasignada por tratarse de riesgo alto en VIF”. En otro, en que figura como remitente Carola D’Agostini Ibáñez y como destinataria Claudia del Pino, fechado el 27 de noviembre del año 2019, se lee “Hola Claudia, gracias por avisar a tiempo, por especialidad la causa corresponde a Carmen, a quien le será reasignada”.

Por su lado, Mauricio Jorquera Loyola testificó que preguntó a Carola D’Agostini cómo era el trabajo de Claudia y le contó que entró el 2018, que el 2019 empezó a trabajar, que era bogada del TCMC, que era en Linares un grupo de tres abogados asistentes con una alta carga laboral, alrededor de 1000 causas fácilmente cada uno. Le dijo que en esa época ella no había tenido comportamientos extraños, sí atrasos en la vigencia de las causas. Le señaló un incidente con una causa por manejo en estado de ebriedad en que aplicó principio de oportunidad y el Juzgado de Garantía de Linares le representó eso por correo. A partir de eso se comunicó con Claudia y le señaló este tema y le respondió que fue un error de digitación, que digitó mal el RUC que era de una estafa y que iba a solucionar el tema, pero el Juzgado de Garantía ya había rechazado el principio de oportunidad, y que iba a solicitar una audiencia de formalización. En la investigación comprobó que eso era efectivo, ella cometió el error al digitar el RUC que era de una estafa. Efectivamente hubo un error, nada extraño.

Agregó que los controles de los abogados se hacen por actividades. Por ejemplo, siempre se ha hecho la vigencia de la causa, cuántas se tienen, cómo se terminan, cuántos requerimientos se hacen, etc. Son reportes. En esa fecha, porque ahora están más modernos, el mayor proceso de fiscalización respecto de Claudia era el de descongestión, que se hizo el 2019 y 2020, en que se revisaban todas las causas vigentes de abogados asistentes y fiscales y se les daba movimiento a las causas atrasadas y sin tramitar.

Respondió que, en relación con los argumentos que usó Claudia [en los descargos que presentó en el sumario administrativo que instruyó] sobre la carga de trabajo, todo abogado asistente, incluida Claudia, tenía una gran cantidad de trabajo,



como 1000 causas que tramitar. Eso es así. Revisó las causas que terminó Claudia del 2019 y 2020 y las causas vigentes de conducción en estado de ebriedad y ahí se percató de lo que hacía o no y a partir de ello estableció los cargos. Alguien muy eficiente hace 20 requerimientos al mes. Un requerimiento de monitorio requiere poco tiempo. El simplificado más tiempo. Depende de cada uno.

La fiscal del Ministerio Público Tatiana Samantha Díaz Coloma aportó que el 2018 fue nombrada fiscal en la Fiscalía de Linares, donde estuvo hasta agosto del 2021. Sobre la forma de trabajo de la Fiscalía, en Linares los abogados asistentes tramitaban delitos con simplificado y las acusaciones eran de especialidad. Por ejemplo, tramitaban robos, violencia intrafamiliar, manejos, pero siempre sin acusación. Respondían el SIAU, atendían a sus citados, a veces tomaban denuncias e iban a audiencias las dos abogados porque la otra abogado asistente, Paulina Salazar, preclasificaba. Hacían minutas para las audiencias. También subrogaban a fiscales y tomaban juicios en ese caso. Ese era en general su trabajo. No había reglas claras en cuanto a lo que hacía el abogado asistente del fiscal. Los dos fiscales nuevos de Linares pidieron que se estableciese bien para evitar sobrecargas, pero eso no se estableció por lo que dependía de cada fiscal qué entregaba al abogado asistente. En su caso, era responder el SIAU y se encargó de que no se cerraran causas en su ausencia. No había reglas claras de qué debía hacer el abogado asistente en las subrogancias. Eso generaba una sobrecarga para los asistentes porque Paty y Claudia [del Pino] debían hacer minutas de todas las causas con audiencias. Ella, el 2019, tenía más de 500 causas y ellas [Patricia Spiess y Claudia del Pino] tenían el doble, como 1000 causas cree. Tenían sobrecarga por responder los SIAU o requerimientos de víctimas y abogados, que son con plazo. A veces responder los SIAU del fiscal subrogante y hacer escritos de plazo en causas que no habían tramitado. Sobre la sobrecarga, objetivamente, cuando se creó la ley para que los abogados asistentes subrogaran, hubo una sobrecarga a nivel nacional. En la región, ella con un colega, como fiscales nuevos, trataron de establecer labores críticas que hacer por el abogado asistente subrogante, pero eso no se estableció en Linares hasta que después, a nivel regional, se establecieron labores críticas que hacía el abogado asistente. Respecto de la carga de trabajo, para un abogado asistente lo normal sería haber arreglado antes el juicio, que el fiscal dejase la preparación lista y el abogado sólo tomase el juicio. Que no hubiese escritos de plazo y que el fiscal hubiese dejado las acusaciones hechas o preocuparse de que no se cerraran en su ausencia. No ir



tanto a audiencias. Además de la sobrecarga de las 1000 causas en promedio, había sobrecarga al subrogar fiscales. Eso pasaba. No había directrices claras. Después se establecieron reglas más claras. En un comienzo en Linares no era así. Recuerda que cuando salió de vacaciones el 2019 tuvieron problemas con Mario por el tema de las subrogancias y quién los iba a subrogar porque ellos eran de un grado inferior, y ahí intervino recursos humanos y les dijo que se establecerían labores críticas que haría el abogado asistente subrogante. Eso fue el 2020 o 2019, por ahí. Sobre los efectos prácticos de esa sobrecarga en general, las 1000 causas también eran una sobrecarga. La sobrecarga de trabajo que tenían podía generar errores en ingreso de solicitudes al sistema. Ella cometió errores y pidió correcciones, pero a veces no se dan cuenta. Trabajaban con el SAF, que es nacional, el SIAU, que es para responder solicitudes del público, y el SIGE, que es la carpeta digital. Por la sobrecarga a veces se equivocaba en solicitudes que hacía en SIGE. Algunas eran anuladas y otras quedaban. Todos cometían errores. Era algo común porque uno se daba cuenta de los errores de los demás, principalmente cuando se iba a audiencias en garantía.

Añadió que, sobre la cantidad de trabajo en un día de los abogados asistentes de Linares, era relativo el número de solicitudes y requerimientos que se podían hacer en un día. Ella, el 2019, tuvo un promedio de 500 SIAU que responder en el año. Desconoce el número de ellas, quizás era el doble. Eso no se responde en 5 minutos. También los abogados asistentes debían apoyar denuncias directas, atender a sus citados, ir a audiencia y hacer sus escritos. Quizás tramitar cinco causas o hacer cuatro simplificados, más las tramitaciones de instrucciones y oficios. Pero eso es subjetivo, depende de cada persona y de la rapidez de internet. En ese tiempo había muchos problemas con el internet en Linares. La carpeta digital era más lenta que ahora.

Finalmente, en relación con la calificación jurídica propuesta por el Querellante, a saber, la del artículo 228 del Código Penal, dicha norma prescribe que “el que, desempeñando un empleo público no perteneciente al orden judicial, dictare a sabiendas providencia o resolución manifiestamente injusta en negocio contencioso-administrativo o meramente administrativo, incurrirá en las penas de suspensión del empleo en su grado medio y multa de once a quince unidades tributarias mensuales. Si la resolución o providencia manifiestamente injusta la diere por negligencia o ignorancia inexcusables, las penas serán suspensión en su grado mínimo y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales”.



Como puede apreciarse, este ilícito también exige para su configuración un dolo especial, directamente dirigido a la dictación de una providencia o resolución manifiestamente injusta. Sobre ello, valga, *mutatis mutandi*, lo que ya se expuso sobre el punto en relación con el dolo directo exigido por el artículo 269 ter del Código Penal.

Sin perjuicio de ello, autorizadamente se ha considerado que este tipo penal “exige, enseguida, que la resolución o providencia injusta recaiga en un negocio contencioso-administrativo o meramente administrativo. Estas expresiones, que no tienen por qué ser interpretadas necesariamente en un sentido técnico, aluden a cualquier asunto análogo a aquellos que las leyes ponen bajo la competencia de autoridades judiciales, que implique tener que resolver un conflicto entre dos o más intereses contrapuestos – tal es lo que se quiere expresar a través del empleo de la voz contencioso – o que tenga la aptitud para restringir los derechos de un tercero, como sucede señaladamente cuando la Administración – con o sin juicio previo – impone una sanción en uso de sus facultades disciplinarias o gubernativas” (Luis Rodríguez y María Ossandón; “Delitos contra la Función Pública”; Segunda Edición; 2008; Editorial Jurídica de Chile, p. 452). En ese encuadre y conforme a lo ya explicitado, no advierte este Tribunal que lo acreditado corresponda a una resolución o providencia manifiestamente injusta y que recaiga en un negocio contencioso-administrativo o meramente administrativo

Pasando ahora al N° 2.2, que corresponde al hecho 1.1.2 de la acusación del Ministerio Público y al I.2.2 de la acusación del Querellante, en lo relevante de él sólo se cambió la graduación alcohólica sostenida por los persecutores dado el resultado del informe de alcoholemia atendido el contenido del informe respectivo que se acompañó en la prueba denominada en el auto de apertura como “Causa RUC N° 1900104808-5 por del delito de Conducción en estado de Ebriedad respecto de Fabian Ortega Bustamante”.

En cuanto al motivo de la absolución por los cargos que recaen en dichos presupuestos fácticos, son los mismos que se acaban de exponer para el hecho 2.1, por lo que damos por reproducido lo allí expuesto para no extendernos inoficiosamente.

Pasando ahora al N° 2.3, que corresponde al hecho 1.1.3 de la acusación del Ministerio Público y al I.1.1 de la acusación del Querellante, en lo relevante en él se desechó dar por acreditado también que la acusada del Pino Acuña, haya “ocultado



antecedentes al Tribunal para la toma de la decisión jurídica, debido a que los hechos investigados no permitían dicha decisión, alterando maliciosamente los antecedentes entregados al Tribunal para obtener la aprobación de dicha salida facultativa”, por insuficiencia probatoria. Así, siempre en relación con lo declarado y acreditado por la señora Torres de La Fuente, en las fotografías N° 35 y N° 36 de la prueba llamada en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA” y en la prueba de descargo llamada en el auto de apertura como “Tramitación electrónica que consta en la oficina virtual del poder judicial de los 11 hechos de obstrucción a la investigación señalados por la Fiscalía, cuyos Ruc son: [...] 1900680959-9 [...]” se aprecia primeramente que dicha causa está ingresada al sistema SAF únicamente con la tipificación de “cuasidelito de lesiones”, observándose a la vez una sola relación llamada “Luis Antonio Godoy Vasq cuasidelito de lesiones artículo”. También allí se lee que con fecha 25 de julio del año 2019 la acusada Claudia del Pino Acuña ingresó al sistema SAF un principio de oportunidad en que se relata, en los hechos, que “La víctima Nataly Alejandra Lara Sobarzo, expuso ante carabineros que el 21 de junio de 2019, siendo las 17:40 horas aproximadamente, en circunstancias que se encontraba en su lugar de trabajo, ubicado en la ruta L-13 km 2 callejón interior Sta. Ana de Queri, en la empresa áridos denominada santa fe, donde se encontraba compartiendo con un grupo de trabajadores de dicha planta, instante que mantuvo un intercambio de palabras con el dueño de la planta, el Sr. Luis Antonio Godoy Vásquez, el cual mantiene una relación amorosa y por lo que decidió retirarse del lugar y antes de salir de la planta de áridos, se percató que detrás de ella venía en la misma dirección una camioneta, de la cual desconoce mayores antecedentes y la que era conducida por Luis Godoy Vásquez, al cual le realizó señas para que se detuviera, haciendo caso omiso de esta, no deteniéndose, impactándola con la parte delantera, cayendo al suelo, para posteriormente retirarse del lugar la camioneta en dirección desconocida, procediendo la víctima a llamar a carabineros para estampar la denuncia. Acción policial: personal de servicio de población procedió a efectuar un patrullaje por el sector, con la finalidad de dar con la ubicación del autor y conductor de la camioneta, trasladándose además a la empresa de áridos, encontrándose esta cerrada, por lo que se procedió a trasladar a la víctima hasta el hospital San Javier para constatar sus lesiones. lesiones : la víctima resulto con "aumento de volumen y equimosis occipital derecha, heridas erosivas en



codo derecho, dolor a palpación costado derecho, aumento de volumen y equimosis ante pie derecho, fractura de costilla, halito etílico", de carácter de mediana gravedad, según comprobante de atención de urgencia del hospital base de San Javier, con el dato de atención urgencia nro. 32047 4, otorgado por el facultativo de turno Dra. Loreto valentina Hernández Álvarez, quien la observó y derivó a su domicilio”.

De lo anterior desprende este Tribunal, a falta de más probanzas relevantes y atingentes, que no se probó suficientemente que la acusada del Pino Acuña haya maliciosamente ocultado y alterado al Juzgado de Garantía hechos de esta causa que daban cuenta de un atropello doloso, dada la detallada descripción fáctica que se acaba de transcribir, que no permite colegirlo en dicho sentido. Tampoco que haya ocultado un resultado de lesiones graves, dado también que además no se produjo prueba que certeramente instalase dicha calificación en contra de lo relatado en la descripción recién aludida, donde se habla de lesiones menos graves.

Dicho ello, no procede calificar lo acreditado como constitutivo del delito de obstrucción a la investigación, por lo que se desechará este cargo.

Pasando ahora al N° 2.4, que corresponde al hecho 1.1.4 de la acusación del Ministerio Público y al I.1.2 de la acusación del Querellante, en lo relevante en él se desechó dar por acreditado también que en la causa existía una alcoholemia de 0,92 gramos por mil respecto a Carlos Manuel Sumonte Vásquez y que la acusada Claudia del Pino Acuña haya ocultado, al requerir procedimiento simplificado, que dicho imputado conducía sin haber obtenido la licencia de conducir y el antecedente de la alcoholemia para evitar la agravación de la pena, por insuficiencia probatoria.

Ello porque, siempre en relación con lo declarado y acreditado por la señora Torres de La Fuente, en las fotografías N° 41 a N° 44 de la prueba llamada en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA” y en la prueba de descargo llamada en el auto de apertura como “Tramitación electrónica que consta en la oficina virtual del poder judicial de los 11 hechos de obstrucción a la investigación señalados por la Fiscalía, cuyos Ruc son: [...] 1900840692-0 [...]” se aprecia que la referida acusada efectuó en esa causa un requerimiento de procedimiento simplificado en que describió, como hechos, que “el día 04 de agosto de 2018, siendo aproximadamente las 20:55 horas, en la intersección de las calles Chorrillos esquina Presidente Ibáñez de la ciudad de Linares, el imputado CARLOS MANUEL SUMONTE VASQUEZ



conducía su motocicleta marca Kinlon, P.P.U. BVT.015-7, en estado de ebriedad, con una dosificación alcohólica de 0.92 G/L de alcohol en la sangre”, que calificó esos hechos como constitutivos del delito de “CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD, prescrito y sancionado en el artículo 196 inciso 1° de la Ley N° 18.290” y que ofreció como prueba, entre otras, la “Hoja de vida del conductor del imputado” y el “Informe de Alcoholemia N° 5772/2019, emitido por el SML de Talca respecto del imputado, el que se acompaña al tenor del artículo 315 inciso 2° Código Procesal Penal”.

De ello se infiere que la requirente, por un lado, no ocultó el resultado de la alcoholemia pues de hecho la indica y ofrece un informe pericial de alcoholemia. Si aquel resultado es distinto del que se informó pericialmente es un hecho que en el juicio se desconoce por no haberse producido prueba al respecto. Luego, si bien en el citado requerimiento no se hace alusión a que el imputado no había obtenido licencia de conducir, impide afirmar con certeza que ello implica ocultar tal información el que a la vez se ofrezca como prueba la hoja de vida del conductor. Adicionalmente, tampoco se acompañaron probanzas que estableciesen que el imputado no había obtenido licencia de conducir.

Por todo ello, concluyen estos Sentenciadores que en este caso no se probaron debidamente hechos que constituyan una obstaculización de la investigación y menos que, por las razones ya expuestas, la acusada del Pino Acuña haya procedido con el dolo especial que exige el artículo 269 ter del Código Penal.

Pasando ahora al N° 2.5, que corresponde al hecho 1.1.5 de la acusación del Ministerio Público y al I.1.3 de la acusación del Querellante, en lo relevante en él se desechó dar por acreditado también que la solicitud de formalización decantada no fue formalmente presentada por interconexión al Tribunal o que con un requerimiento de procedimiento simplificado se ocultaron antecedentes, obstaculizando así gravemente la investigación, por insuficiencia probatoria.

Ello porque, siempre en relación con lo declarado y acreditado por la señora Torres de La Fuente, en las fotografías N° 59 a N° 64 de la prueba llamada en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA” se aprecia que la referida acusada efectuó en esa causa dos solicitudes de audiencia de formalización, pero ninguna de esas probanzas permite determinar si en definitiva las mismas se enviaron o no formalmente por interconexión al Juzgado de Garantía competente. En cuanto a que sólo se haya



formalizado por un delito de las causas agrupadas, en dichas fotografías no se explicita que se haya mostrado la historia SAF de las dos relaciones de la causa, y además las imágenes del texto de los escritos de solicitud de audiencia de formalización se aprecian incompletos (fotografías N° 61 y 64), por lo que no es posible leer cabalmente sus contenidos. Respecto del requerimiento de procedimiento simplificado, efectivamente en las fotografías N° 56 a N° 58, a pesar de ser ilegible parte de las dos primeras, resulta patente que posee varios blancos. Sin embargo y precisamente por lo evidente de tales omisiones, no estima este Tribunal que ello pueda ser atribuible con certeza a la intención de ocultar antecedentes.

En razón de ello, concluyen estos Sentenciadores que en este caso no se probaron debidamente hechos que constituyan una obstaculización de la investigación y menos que, por las razones ya expuestas, la acusada del Pino Acuña haya procedido con el dolo especial que exige el artículo 269 ter del Código Penal.

Pasando ahora al N° 2.6, que corresponde al hecho 1.1.6 de la acusación del Ministerio Público y al I.1.4 de la acusación del Querellante, en lo relevante en él se desechó dar por acreditado también que la acusada del Pino Acuña no haya solicitado la formalización respecto del responsable de un cuasidelito de lesiones o que, habiendo el Tribunal solicitado nuevos antecedentes, éstos nunca fueron presentados, omitiendo así realizar los actos propios de su cargo y ocultando antecedentes que obstaculizan gravemente la persecución criminal, por insuficiencia probatoria.

Ello porque, siempre en relación con lo declarado y acreditado por la señora Torres de La Fuente, en las fotografías N° 65 y N° 67 de la prueba llamada en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA” y en la prueba de descargo llamada en el auto de apertura como “Tramitación electrónica que consta en la oficina virtual del poder judicial de los 11 hechos de obstrucción a la investigación señalados por la Fiscalía, cuyos Ruc son: [...] 1900836255-9 [...]” se aprecia que se trata de una causa por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol que comprende una sola relación. No se consigna así en esos registros que además sea una causa por el cuasidelito de lesiones. Sobre el contenido de la solicitud de audiencia de formalización que se registra, la imagen respectiva (fotografía N° 68) evidentemente no muestra el texto íntegro de ella, pero ello fue subsanado por la documental de descargo citada. Si



bien allí se lee que únicamente se requiere por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol del artículo 193 de la Ley 18.290, dado lo antedicho difícilmente puede afirmarse que con ello se omitió, correspondiendo, hacer mención a otro ilícito. Concluyendo, en lo tocante a que el Tribunal solicitó nuevos antecedentes y estos nunca fueron presentados por la acusada del Pino Acuña, con lo que ocultó antecedentes, de la prueba de descargo citada consta que con fecha 27 de diciembre del año 2019 el Juzgado de Garantía de Linares resolvió en la causa en comento que “previo a resolver, aclárese la solicitud de audiencia de formalización, en cuanto a las víctimas y delito ingresado al sistema informático SIAGJ, lo que difiere de lo indicado en dicha solicitud”. Si bien en el historial SAF de la causa (fotografía 66) no figura una presentación efectuada con dicho fin, estima este Tribunal que tal omisión, por los motivos ya expuestos relacionados con la recarga de trabajo y los requerimientos de eficiencia, no puede certeramente atribuirse, como los persecutores plantearon, a que la acusada del Pino Acuña obró así para ocultar antecedentes.

Por todo ello, concluyen estos Sentenciadores que en este caso no se probaron debidamente hechos que constituyan una obstaculización de la investigación y menos que, por las razones ya expuestas, la acusada del Pino Acuña haya procedido con el dolo especial que exige el artículo 269 ter del Código Penal.

Pasando ahora al N° 2.7, que corresponde al hecho 1.1.7 de la acusación del Ministerio Público y al 1.2.3 de la acusación del Querellante, ciertamente, como fluye de lo declarado y acreditado por la señora Torres de La Fuente, de la fotografía N° 72 de la prueba llamada en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA” y de la prueba de descargo llamada en el auto de apertura como “Tramitación electrónica que consta en la oficina virtual del poder judicial de los 11 hechos de obstrucción a la investigación señalados por la Fiscalía, cuyos Ruc son: [...] 2000122215-6 [...]”, antes del archivo provisional establecido medió intervención del Juzgado de Garantía en la causa, por lo que dicha actuación sí va contra lo dispuesto en el artículo 167 del Código Procesal Penal y, objetivamente, obstaculizó la investigación.

Pese a ello, este Tribunal concluyó que la parte subjetiva del tipo de obstrucción a la investigación tampoco concurre en este caso, por las razones ya expuestas al analizar, en este mismo considerando, el hecho 2.1. y que por lo mismo



no reiteraremos. También nos remitimos a ese acápite para justificar el rechazo del cargo formulado a este respecto por el Querellante, dado que igualmente allí se analiza ese punto.

Pasando ahora al N° 2.11, que corresponde al hecho 1.1.11 de la acusación del Ministerio Público y al I.2.8 de la acusación del Querellante, en lo relevante se trata de un caso análogo al inmediatamente precedente, pues acá también se acreditó suficientemente que la acusada del Pino Acuña objetivamente aplicó un archivo provisional de la investigación en contra el mérito de la misma atendido que se trataba de una causa ya judicializada y lo dispuesto en el artículo 167 del Código Procesal Penal.

Nuevamente en este caso concluimos que la parte subjetiva del tipo de obstrucción a la investigación no se configura, por las razones ya expuestas al analizar, en este mismo considerando, el hecho 2.1. y que por lo mismo no reiteraremos. También nos remitimos a ese acápite para justificar el rechazo del cargo formulado a este respecto por el Querellante, dado que igualmente allí se analiza ese punto.

En lo tocante a los cargos por el delito reiterado de violación de secreto, figura descrita y sancionada en el artículo 246 del Código Penal, este Tribunal estima que, si bien tal ilícito, en relación con la acusada del Pino Acuña, cabe en lo que se tuvo por legalmente probado según se describe en los números 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 y 2.14 del noveno considerando de la presente sentencia definitiva, atendida la unidad de acción que advertimos entre las conducta que completan aquel ilícito y el de cohecho y el análogo bien jurídico que ambos delitos cautelan, resulta aplicable a ellos el llamado concurso aparente de leyes penales en virtud del cual, por consunción, únicamente debe pervivir el delito de cohecho.

Al respecto, como marco normativo conviene consignar que en el artículo 8 de la Constitución Política de la República se mandata, desde el 26 de agosto del año 2005, que “[...] son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional”. En conjunción con ello, en el artículo cuarto transitorio de esa misma Carta se dispone que “se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre



materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales”. En relación con esto último, en el artículo 182 del Código Procesal Penal, bajo el epígrafe “Secreto de las actuaciones de investigación”, se establece que “Las actuaciones de investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento. El imputado y los demás intervinientes en el procedimiento podrán examinar y obtener copias, a su cargo, de los registros y documentos de la investigación fiscal y podrán examinar los de la investigación policial. [...] Los funcionarios que hubieren participado en la investigación y las demás personas que, por cualquier motivo, tuvieran conocimiento de las actuaciones de la investigación estarán obligados a guardar secreto respecto de ellas”. En igual sentido, en el artículo 7 de la Ley 19.628, publicada en agosto del año 1999, se ordena que “las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo”.

En lo fáctico, para los siete hechos que los persecutores calificaron como constitutivos también del delito de violación de secreto en comento, resumidamente plantearon en sus libelos que la acusada del Pino Acuña, en razón de sus funciones y cargo, a través de las plataformas informáticas del Ministerio Público accedió a información reservada que consistía en partes policiales, datos de domicilios, teléfonos y otros, datos privados que entregó al acusado Vega Guerrero para que éste tomara contacto con imputados para instar por el cohecho”. En congruencia con ello, este Tribunal, como ya se explicitó y para los seis hechos en comento, por las razones que también se expusieron latamente en este fallo dio por acreditado, con el estándar legal, que la empleada pública Claudia del Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente en, a lo menos, una descripción de la conducta punible a que se refería cada causa por conducción en estado de ebriedad, el nombre, dirección y número telefónico de seis imputados y la graduación alcohólica con que fueron sorprendidos (en el hecho 2.15 se acotó esa información al nombre y número



telefónico de Eduardo Antonio Lobos Tapia dado lo que el mismo declaró ante estrados en relación con que él entregó al acusado Vega Guerrero, a petición de éste, una copia de su parte policial de detenido) con el fin de que solicitara a los mismos beneficios económicos a cambio de terminar sus causas, en circunstancias que debían seguir en tramitación. Cabe hacer presente que, en particular respecto de la descripción de la conducta punible a que se refería cada causa por conducción en estado de ebriedad, y a la graduación alcohólica con que fueron sorprendidos aquellos seis imputados, este Tribunal es del parecer de que se trata de información no accesible por fuentes públicas y que sí debe catalogarse de secreta en los términos del artículo 246 del Código Penal en relación con la demás normativa recién invocada.

Conjugando lo anterior, concluyen estos Sentenciadores que efectivamente lo establecido fue que en seis oportunidades la acusada del Pino Acuña reveló secretos de los que tenía conocimiento en razón de su oficio a un tercero no autorizado para conocerlos, como era el caso de su cónyuge, el acusado Vega Guerrero.

Sin perjuicio de ello, advertimos también que, entre las respectivas conductas que se calificaron jurídicamente como cohecho del artículo 248 bis del Código Penal y aquella conducta de revelación de secretos, hay unidad jurídica de acción, pues, de acuerdo a los correspondientes hechos expuestos en las acusaciones y lo que se tuvo por probado, por un lado la revelación de secretos ocurrió después de darse comienzo a la ejecución del delito de cohecho con el concierto previo y la obtención de los datos y, por el otro, antes de su consumación, al cumplir Vega Guerrero con su parte del plan delictivo común y solicitar a los imputados beneficios económicos a cambio de terminar sus causas, en circunstancias que debían seguir en tramitación.

Ante ello, debe averiguarse, por el alto valor indiciario de consunción que conlleva, qué bienes jurídicos protegen las dos figuras penales en juego. Al respecto, autorizadamente se ha postulado que “la doctrina vincula el objeto de tutela de las figuras de las figuras de revelación de secretos con el tema de los servicios que determinadas personas y entidades prestan a la comunidad. En el caso de los órganos públicos, se considera que lo protegido es el correcto desempeño de los cometidos estatales [...]” (Luis Rodríguez y María Ossandón; “Delitos contra la Función Pública”; ob. cit. p. 467). Sobre el delito de cohecho, esos mismos autores postulan



que “mayoritariamente, la doctrina contemporánea afirma que el bien jurídico protegido es el mismo, tanto en el cohecho del funcionario como en el del particular; estimándose que éste consiste – como en la generalidad de los delitos de este grupo – en el correcto desempeño de la función pública” (Luis Rodríguez y María Ossandón; “Delitos contra la Función Pública”; ob. cit. p. 330). De esa manera, tenemos, por un lado, el correcto desempeño de los cometidos estatales y, por el otro, el correcto desempeño de la función pública. Adicionalmente, ilustrativo es que el delito del artículo 246 del Código Penal en suma tipifica la conducta del empleado público que infringe el correcto desempeño de su función de una manera específica, mientras que el artículo 248 bis castiga conductas indebidas mucho más amplias del empleado público, quien además las debe realizar u omitir solicitando u aceptando recibir un beneficio.

Por lo anterior, considera este Tribunal que, en lo tocante a los delitos de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal y de violación de secretos del artículo 246 de ese mismo cuerpo legal, dada la unidad de acción que hay entre ellos en los seis hechos en que se configuraron (que corresponden a los números 2.8, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 y 2.14 del noveno considerando de este fallo), las conductas que aquellos ilícitos castigan y los bienes jurídicos que cautelan, opera en este caso, por consunción, un concurso aparente de leyes penales dado que, parafraseando al profesor Cury Urzúa (Enrique Cury; “Derecho Penal Parte General”; Octava Edición; 2005; Ediciones Universidad Católica de Chile; p. 669), a pesar de que los correspondientes hechos parecen ser captados por dos tipos, el disvalor delictivo que implica la ejecución de uno de ellos (cohecho) contiene al que supone la realización del otro (revelación de secretos), por lo que aquél consume o absorbe a éste, desplazándolo.

A todo ello se debe sumar, respecto del acusado Vega Guerrero y más allá de lo que ya se consignó sobre la comunicabilidad, que la revelación de secretos que los persecutores le atribuyen, de acuerdo a sus postulados fácticos y a lo que resultó legalmente acreditado, tuvo por destinatarios precisamente a los titulares de tales datos, a saber, los imputados de cada una de esas seis causas por conducción en estado de ebriedad, por lo que difícilmente puede predicarse, atendido lo dispuesto en el artículo 182 del Código Procesal Penal ya citado, que dicha conducta implica una difusión indebida, o sea, a terceros no autorizados para conocerlos.



En razón de lo anterior, se absolverá por los cargos formulados por el Ministerio Público y el Querellante en relación con el delito de violación de secretos del artículo 246 del Código Penal.

Ahora, en lo atinente a los delitos de falsificación o uso malicioso de instrumento público sostenidos por los acusadores, en síntesis los cuatro hechos pertinentes que postularon, que recaen en las causas RUC N° 2000145861-3, N° 2000237477-4, N° 2000145895-3 y N° 1900104808-5, aluden, como objeto del delito, a cartas de comunicación de archivo provisional.

Así, en el respectivo acápite de sus libelos, el Ministerio Público y el Querellante sostienen que “Claudia del Pino Acuña, en su calidad de abogada asistente de fiscal, grado IX de la Fiscalía Local de Linares, abusando de su oficio, firmó a nombre de la Fiscalía Local de Linares las cartas de Archivo Provisional dictadas en las causas RUC 2000145861-3, RUC 2000237477-4, RUC 2000145895-3 y RUC 1900104808-5. Para ello, confeccionó los referidos documentos públicos emanados por competente funcionario y que guardan requisitos y formalidades legales específicas. Estos corresponden a las cartas de comunicación de archivo provisional que fueron confeccionadas por la citada del Pino Acuña [...]”. Reafirman esa idea al especificar que, “sumado a esto, es decir en las citadas causas y en los procesos RUC 2000145861-3 y RUC 1900104808-5 confeccionó las cartas de archivo provisional en la impresora que le fue incautada en su propio domicilio particular, específicamente impresas en la impresora marca “Brother”, modelo DCP-T510W, que no corresponde a la Fiscalía Local de Linares, sino a una impresora particular”.

Sin embargo y desde la perspectiva de la congruencia, lo que en su caso se probó fueron entregados por Vega Guerrero a imputados que contactó, que corresponden, según las argumentaciones de los acusadores y las acreditaciones que se efectuaron de los mismos por sus respectivos destinatarios, a las pruebas denominadas en el auto de apertura como “NUE 5948291 correspondiente a un documento de la Fiscalía Local de Linares, Decisión de archivo provisional de fecha 28 de marzo de 2020”, “NUE 5948290 correspondiente a evidencia. Una hoja de con logo de Fiscalía Decisión de Archivo Provisional”, “NUE 5948283 correspondiente donde se indica como evidencia dos hojas de la Fiscalía con el título de archivo provisional marzo 2020” y “NUE N° 5948316. Un documento de decisión de archivo provisional a nombre Ralph John Veloz Rodríguez CI



25.711.952-1 con nombre y logo de la Fiscalía Local de Linares” (en este último figura el citado RUC N° 2000145895-3, que el Ministerio Público y el Querellante indican, en los números 1.2.6 y I.3.6 de sus acusaciones, constituye un RUC ficticio o inventado), son documentos que contienen una decisión de archivo provisional, o sea, instrumentos jurídica y materialmente distintos de una carta de comunicación de archivo provisional, como se desprende del artículo 167 del Código Procesal Penal y se corrobora especialmente con lo depuesto sobre el punto por las testigos Carola D’Agostini Ibáñez y Karem Torres y con lo que se observa en las correspondientes fotografías del sistema SAF que se incorporaron, en que figura que, incluso para efectos informáticos, se trata de dos conceptos, actividades y documentos diferentes. Tal incongruencia, dado el tenor del artículo 341 del Código Procesal Penal, impide construir, sobre la base de las mentadas decisiones de archivo provisional, una sentencia condenatoria. Por lo mismo, también se omitió hacer referencia, en lo que se dio por debidamente probado, a las cartas de comunicación de archivo provisional aludidas por los persecutores en los hechos de los RUC N° 2000145861 y 1900498181-5.

Pormenorizando, Carola D’Agostini Ibáñez testificó sobre el punto que, sobre la autonomía de las abogadas asistentes del TCMC para tramitar sus causas, sobre todo de Claudia del Pino, era de casi el 100%, salvo pequeños controles que se hacían. Nadie les iba a fiscalizar lo que hacían, como cuántas actividades hicieron, qué tipo de actividades.

Agregó que, en relación con los archivos provisionales y el proceso de esa decisión, el archivo provisional se puede tomar al principio cuando se lee el parte y se dice acá no hay nada y se archiva inmediatamente la causa. Muchas causas llegan con imputados NN, en lugares en que no hay cámaras de seguridad o testigos, donde no se puede seguir una línea investigativa. Para hacerlo materialmente, ella entra a SIGE y le pide a un equipo de la Fiscalía Regional que ejecute ese archivo provisional y se genera el documento que lleva el logo de la Fiscalía y el nombre del funcionario que emite la decisión. En el caso de TCMC, debería ir todo con su nombre porque ella es el jefe de ese grupo de trabajo. Todo lo que sale de TCMC va con su nombre. Eso en todo. Por ejemplo, si van a presentar un requerimiento, una audiencia de formalización. No va con el nombre de Patricia Spiess o Gustavo Fluman o Claudia del Pino, eso va con su nombre como quién pide, ni siquiera como delegación. Eso porque los abogados asistentes no pueden presentar escritos a



nombre del Ministerio Público salvo que sean subrogantes o suplentes. Esa decisión firmada va a la carpeta y solamente tratándose de las víctimas, se les envía una carta de notificación porque así lo dice la ley. Muchas veces, a través del SIAU pide la gente que se reabra la causa y se puede reabrir. Carta de archivo no se le envía a los imputados. A los imputados nada se les notifica. El documento de archivo nunca se ha firmado. Antiguamente sí, del 2001 a 2004 tal vez se firmaba. Después los archivos se hicieron masificados y no van con firma porque es un documento que queda anexo a la carpeta y como no se notificaba, se mandaba una carta solamente, sin firma de alguien. Ella no firma sus archivos provisionales. Antes sí. Hoy se genera el documento que sí es una decisión de ellos como Fiscales de aplicar un término. Ese documento tiene como el registro digital de la causa, es un documento público porque es una decisión que ella toma como funcionaria pública y emite su decisión para que su causa quede archivada, pero no va con firma.

El Ministerio Público exhibió a esta testigo las pruebas que se llamaron en el auto de apertura como “NUE 5948291 correspondiente a un documento de la Fiscalía Local de Linares, Decisión de archivo provisional de fecha 28 de marzo de 2020”, “NUE 5948283 correspondiente donde se indica como evidencia dos hojas de la Fiscalía con el título de archivo provisional marzo 2020”, “NUE 5948290 correspondiente a evidencia. Una hoja de con logo de Fiscalía Decisión de Archivo Provisional” y “NUE N° 5948316. Un documento de decisión de archivo provisional a nombre Ralph John Veloz Rodríguez CI 25.711.952-1 con nombre y logo de la Fiscalía Local de Linares”, ante las que explicó, en ese orden, que el primero parece ser un documento que ellos emiten cada vez que se archiva provisionalmente la causa, de hecho el título dice decisión de archivo provisional, con una fecha, y el RUC 2000145861-3, el imputado es Rodrigo Adolfo Guerra y es de fecha 28 marzo 2020. Así como se ve, más o menos pareciera ser un documento de la Fiscalía porque faltan datos, falta el RUC, el RIF, está mal encuadrado, las horas siempre salen con los dos puntos, la dirección dice Manimávida que no existe, y la hora y lugar en que se cometió están en blanco, y eso automáticamente sale en el documento cuando se ingresan correctamente los datos y no ve por qué no deberían estar correctamente los datos. En víctima y domicilio nada sale porque en el recuadro de víctima o denunciante debería aparecer la víctima o al menos una unidad de Carabineros; en cuanto al imputado, también el recuadro está incompleto, donde se coloca el domicilio lo mismo en el recuadro de imputado. Se ven varias



falencias. A simple vista es un documento oficial de la Fiscalía. No recuerda si en su apellido se coloca la comilla de su primer apellido. Este documento debería formar parte de la carpeta digital y del SAF porque ahí se ejecutan las actividades del archivo provisional y se genera la copia digitalizada en SIGE. Sobre el segundo manifestó que a grandes rasgos es un documento bastante mal hecho pero que tiene la apariencia de una decisión de archivo provisional y una firma que no es de ella. Mal hecho por más menos lo mismo que antes. Podría faltar el RIF de la causa. Las fechas no aparecen con guion. Tampoco la fecha, nunca se ha escrito así, sino que con slash. El lugar en que se cometió el delito nunca se ha escrito así, con la palabra intersección. El domicilio de Villa Ancoa, es primera vez que lo escucha. El tipo de letra es bastante extraño porque ese recuadro es chico. Habitualmente los archivos caben en una página y este es muy grande. La fecha tiene letras en negrilla y otras no, y se coloca la fecha completa de la decisión. En la segunda página se ven letras de distintos tamaños y eso no es real. Sobre el tercero expuso que acá se borró la fecha, los tipos de letra son diferentes y aparece suscrito por Claudia del Pino como fiscal adjunto, lo que no corresponde a menos que ella subrogara, pero si era una causa TCMC debió ir su nombre. Acá hay un logo que es un timbre de autenticación porque no lleva firma, pero es emitido por la Fiscalía. Aparecen en blanco varios datos que debería estar, sobre el imputado se borraron sus datos porque deberían aparecer automáticamente, como también borraron la fecha. A simple vista parece un documento de la Fiscalía. Sobre el último señaló que también aparece como una decisión de archivo provisional, ve fechas y, a diferencia de los otros documentos, se omitió señalar el delito y la hora. La víctima aparece como NN y el imputado con todos sus datos, Ralph Veloz. También se borró la fecha porque debería aparecer el día. La firma que aparece ahí no la reconoce, eso que está ahí nunca ha correspondido a su firma, no sale además su nombre ni cargo, ese timbre de abajo está malo, no existe en un archivo provisional, falta el timbre que vimos en otro documento. Si es causa TCMC debería aparecer el nombre del abogado asistente que la tramitó pero omite el nombre de la fiscal, el suyo, que debería aparecer ahí.

Al Tribunal aclaró, siempre en lo pertinente, que, sobre el archivo provisional y el documento que se genera por ello, esa decisión antiguamente se firmaba materialmente, no recuerda si hasta el 2004. Actualmente no es que lleven una firma material. Por eso, sobre los documentos que le mostraron, no es necesario



firmar un archivo provisional porque es una decisión suya como funcionario público que se materializa con una instrucción que se da a un equipo de trabajo y queda como parte de la carpeta penal pública de investigación y no lleva una firma de lápiz. Lo que le exhibieron son decisiones de archivo provisional, no cartas de comunicación de archivo provisional. Esos archivos no debieron llevar firma. Las cartas de archivo provisional sólo se le enviaban a las víctimas y no iban con firma, van con timbre solamente.

Complementariamente, Karem Silvana Torres de La Fuente, jefe de la unidad de gestión informática de la Fiscalía Regional del Maule, refirió que en el archivo sin consulta, el fiscal o abogado debe marcar la relación que se verá afectada por ese archivo sin consulta y esto, en la noche, como esos archivos no requieren aprobación del fiscal regional, se genera un proceso masivo que graba en SAF la actividad de archivo provisional, la causa con eso pasa de vigente a terminada, le genera la actividad de comunicación a la víctima que es una carta predefinida regionalmente y al otro día la funcionaria a cargo del proceso imprime las cartas y se preocupa de que estén aplicados los archivos y remite las cartas al servicio postal.

El documento de archivo lo genera automáticamente el SIGE porque SIGE tiene la carta de comunicación que está definida en la región y automáticamente SIGE, por funciones, como tienen la causa, tienen la trazabilidad completa de cuando un fiscal pide un archivo sin consulta, la relación afectada. Por tanto SIGE lee los datos SIGE de la solicitud, en que solicitan un archivo sin consulta por un imputado y un delito, y SIGE automáticamente genera la carta y la graba en SAF y también graba en SAF la actividad de archivo provisional y la actividad de comunicación a la víctima del archivo provisional. Son las dos actividades que se registran en SAF por los archivos. El documento de comunicación del archivo se definió cuando partieron el 2008 y siguió con SIGE el 2016. El pie de firma en realidad es un timbre y va siempre el nombre completo del fiscal jefe de la Fiscalía Local. Eso se definió. Como es un proceso automatizado, SIGE sabe quién es el fiscal jefe. Si pide el archivo sin consulta un fiscal o abogado asistente, se genera el documento con el nombre del fiscal jefe. La carta de comunicación de archivo sale con el pie de firma de fiscal jefe, no con el de abogados del TCMC si es un fiscal, sale con el nombre del fiscal. Esa carta se coordina con correos. Se envía esa comunicación de archivo provisional a las víctimas registradas en SAF porque SIGE lee de la relación que marcó el fiscal o abogado del TCMC, la víctima o víctimas de



esa relación y del SAF trae la información de la víctima, nombre y dirección y la consigna en la carta, que es un documento Word que se genera con la dirección de la víctima y eso entregan al servicio postal. Es una carta que se entrega doblada y corcheteada, donde la persona de correos sólo puede ver el nombre de la víctima y la dirección. Esos datos SIGE los lee desde SAF. A los imputados, sobre el archivo provisional, la información que se les da debe ser lo definido en el protocolo. Como regla de negocios, no se notifica a los imputados el archivo provisional. Las cartas se generan sólo para las víctimas. La carta de archivo y la decisión de archivo son dos cosas distintas. Una es la decisión que toma el fiscal o abogado del TCMC que queda registrada en SAF como decisión de archivo y que termina la causa que antes estaba vigente en SAF. Al pedir el archivo sin consulta y tras el proceso automático nocturno se genera la actividad de decisión y se refleja en SAF que el fiscal o abogado asistente decidió terminar la causa por archivo provisional. En SIGE se puede ver que es un archivo sin consulta. La comunicación es una segunda actividad que genera el SIGE y también se graba en SAF, después de la decisión y con el documento Word que generó SIGE de manera automática. Son dos actividades y registros distintos.

Ejemplificando lo anterior, al exhibírsele a la señora Torres de La Fuente la prueba llamada en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA”, específicamente la fotografía N° 77, señaló que en ella se ve la historia del caso del RUC 2000145861-3, la historia de la causa y la decisión marcada es una de archivo provisional digitada el 28 de marzo del 2020. Arriba de lo marcado se ve la comunicación de la víctima.

Reiteramos que, conforme a lo precedente, las dos testigos recién citadas, así como la fotografía acreditada por la última, dan clara cuenta de que la decisión de archivo provisional es un actuación totalmente distinta de la carta de comunicación de archivo provisional, tanto conceptual como informática y materialmente.

Sin perjuicio de ello, que a juicio de este Tribunal es suficiente para arribar a una decisión absolutoria por los cargos en examen, desde la perspectiva de la calidad de instrumento público de una decisión de archivo provisional, pertinente es consignar que autorizadamente se ha definido, para los efectos analizados, a los instrumentos públicos como “aquellos autorizados por el competente funcionario, con las solemnidades legales, y que dan cuenta del nacimiento, modificación o



extinción de obligaciones” (Jean Matus y María Ramírez; “Manual de Derecho Penal Chileno Parte General”; 2ª Edición; 2021; Editorial Tirant lo Blanch; Valencia; p. 274).

Sobre la concurrencia en la especie de la primera parte de dicha conceptualización, estima este Tribunal quedó en duda atendido lo informado en juicio en cuanto a que, a pesar de lo dispuesto en el citado artículo 167, en la realidad se trata el archivo provisional de una decisión que es computacionalmente ordenada por un funcionario que bien puede no ser un fiscal adjunto del Ministerio Público y que, además, actualmente se genera y redacta de manera automática, sin intervención en ello del competente funcionario y sin firma del mismo.

En ese sentido y apoyándonos nuevamente en los extractos de las dos declaraciones que acabamos de efectuar, quedó en evidencia que, al menos en la Fiscalía local de Linares, el archivo provisional es en la práctica una actuación que se solicita en el sistema SIGE por un fiscal o abogado asistente del TCMC y que en definitiva materialmente se genera a través de un procedimiento automatizado que cuenta con una plantilla que se llena, en lo específico a cada caso, con datos que están registrados en las plataformas del Ministerio Público. Ambos testigos afirman que dicho documento resultante no refleja en realidad quién tomó la decisión de archivo provisional pues, si bien puede adoptarla un fiscal, está internamente validado en la Fiscalía local de Linares que la adopte, dentro de alto grado de autonomía que se le concede al TCMC y a pesar de lo prescrito en el artículo 167 del Código Procesal Penal, un abogado asistente de dicha unidad, sin perjuicio de que, internamente también, se haya definido que en esos casos el documento de generación automatizada en que se plasme tal decisión de archivo provisional aun así lleve el pie de firma del fiscal jefe. También concordaron en que, no obstante lo último, ese documento no lleva firma alguna.

Por todo ello, estiman estos Sentenciadores que los instrumentos que los acusadores incorporaron al juicio oral para acreditar los hechos en que sustentaron sus cargos de falsificación o uso malicioso de instrumento público difícilmente pueden ser catalogados con certeza como instrumentos autorizados por el competente funcionario con las solemnidades legales, elementos de la esencia para tenerlos por instrumentos públicos.

Por otro lado y dado su tenor, que tal como indica su nombre, es de efecto transitorio, no es dable afirmar que, a través del archivo provisional se produce el



nacimiento, modificación o extinción de obligaciones, que es el contenido que autorizada doctrina eleva como de la esencia de un instrumento público.

Concluyendo, el Ministerio Público incorporó prueba pericial consistente en la declaración de un perito grafológico que se pronunció sobre el tema.

Así, Germán Edgardo Miranda Pérez expuso que mediante oficio N° 118 del 14 abril del 2021, la BRIDEC de Linares solicitó al LACRIM, a la sección documental, un peritaje en relación a una eventual procedencia escrituraria de unas firmas trazadas en los documentos que individualizará y verificar si estos documentos fueron impresos en la tecnología incautada. En atención a ello, redactó el informe N° 49 del 13 de mayo del 2021, que consta de tres partes principales. Primero, la descripción de los documentos dubitados, después las operaciones practicadas y sus resultados y en tercer lugar las conclusiones.

Los documentos dubitados que tuvo a la vista fueron cuatro, que dicen decisión de archivo provisional, Fiscalía, Ministerio Público de Chile, de acuerdo a los cuatro NUES que están ahí, 5948283, 5948290, 5948291 y 5948316. De ellos, en dos se consignan firmas.

En el NUE 5948315 se le enviaron unas impresoras para realizar el estudio de ellas y verificar si se imprimieron en ellas o no los documentos. Una marca Brother y la otra marca HP. La primera es una impresora modelo CDPT510W y la HP es una láser modelo Jet 1102W.

De acuerdo a estas evidencias, en el punto dos, dos aspectos realizó: los ámbitos caligráficos y el documentoscópico, relacionado con las impresoras.

En el primero, para realizar todos estos procedimientos se realizaron procedimientos caligráficos a Claudia del Pino Acuña, a Carola D'Agostini Ibáñez y a Ricardo Vega Guerrero. A esas tres personas. A Carola en la Fiscalía en marzo del 2021. Igual a Ricardo, pero en la BRIDEC con oficiales policiales y a Claudia en el LACRIM. Sobre esa base se realizaron estudios paralelográficos y se verificaron tres puntos. El primero, que en los documentos NUE 5948283 y 5948316 están consignadas firmas. Las estudió en lo relevante e hizo el mismo proceso con las firmas de las personas a las que se tomaron las muestras caligráficas para ver aspectos generales y particulares caligráficos. Partió con Claudia del Pino y a estas firmas se le verificaron parecidos en lo morfológico global. Luego en los matices de tensión, el trazado y en lo específico de cada firma. En la primera se verificó, por ejemplo, que tenía dos construcciones en la misma, de tipo óvalo, uno mayor y otro



interior, de la misma calidad, y en su proyección media unos trazos en zigzag para luego proseguir con un rasgo perfil y grueso comprimidos. El último dio pie a un trazo que figura como ovoide. Todos estos trazos están correlacionados con cada una de sus actuaciones de la prueba caligráfica. Están consignado en el informe los números de las pruebas caligráficas en que aparecen esos signos. La otra firma también es un signo ovalado, vertical, ligeramente inclinado a la derecha, que consigna unos trazos en zigzag pequeños y un signo ovalado, ovoide, cuya circunferencia interior es un signo elíptico. De acuerdo a los estudios y relacionado con las muestras caligráficas de Claudia del Pino, ella es la autora de esas firmas.

Sobre el punto dos, derivado y por descarte, igual hizo el estudio completo de todas las firmas de las personas de las pruebas caligráficas con las dos firmas dubitadas. Se compararon con esas firmas de los documentos dubitados las firmas u escritos de Carola D'Agostini y Ricardo Vega y no se encontraron semejanzas sustanciales. Por el contrario, se observaron diferencias. Por tanto, desde el punto de vista caligráfico, estas dos personas no escribieron las firmas de los documentos dubitados.

Como punto tres, estudió las impresoras. Como no se enviaron los discos de instalación, solamente consignó un estudio genérico respecto de lo que se consigna en internet y desde sus conocimientos de ese tipo de impresoras. Se verificó que la impresora de inyección a tinta tiene como característica principal que al formar los signos deja puntos aleatorios que se ven con una lupa y se verifican. Es la impresora común de la casa. Este tipo de característica de esta impresora es acorde con las impresoras que tuvo a la vista. No pudiendo determinar si se utilizaron en la impresión de los documentos dubitados que tuvo a la vista porque no le trajeron los discos de instalación.

La impresora láser deja depósitos de tóner. Generalmente es monocromática y este modelo es así. Esas características de este tipo de modelo de impresoras son acordes con las que tuvo a la vista en la impresión de los documentos dubitados. Pero insiste en que eso es genérico, lo verificó a nivel de internet.

Por ello, puede deducir que la tecnología que tuvo a la vista es acorde con la impresión de los documentos dubitados a la vista.

Al Ministerio Público respondió que, sobre su preparación para emitir estas conclusiones, van a ser ya 20 años que hace este trabajo. Realizó estudios, de aspectos criminológicos en la Academia Superior y en la escuela de Investigaciones



y tutorías de personas de más de 30 años de experiencia en este trabajo, que es complejo, muy meticuloso y en que se emiten conclusiones de acuerdo a los antecedentes que se tuvieron a la vista. Llevaba hace 3 o 4 años atrás como 750 informes, pero cada informe puede contener cientos de peritajes. Además está el aspecto caligráfico. Puede decir que son miles las experticias que ha realizado en estos años. La pericia que realiza es de certeza cuando se pronuncian. Cuando se va a probabilidad, generalmente es un 70 u 80%. Se hablaba antes de eso. Esos porcentajes se hablaban antes porque no es el que revisa todo el proceso, está el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones. Llegan a tener una convicción o el Ministerio Público o el Tribunal de acuerdo a lo que él aportó con su pericia. En sus conclusiones no señala porcentajes de probabilidad, señala certeza.

Agregó que, sobre su pericia, la obtención de las muestras caligráficas es fundamental. En otras instancias se puede llegar a tener un material de cotejo, pero en este caso se solicitaron las muestras para ver, lo principal, la impronta, lo propio, dictado por el cerebro, que es prácticamente inmodificable y cualquier modificación se verifica en ciertos indicios. Hay un protocolo para obtener muestras caligráficas, que son recomendaciones. Por ejemplo, las condiciones en que se realiza como la superficie que se realizó, la posición de la persona, y tratar de reproducir las situaciones. Tenía antecedente de dos personas antes de Claudia, va teniendo así una convicción de cómo se dieron esas acciones. Ahora, lo específico de cómo la persona realizó la acción, sólo lo sabe la persona, como estados ansiosos, pero la estructura básica de la caligrafía está. Acá no manejaba eso. Sobre Claudia del Pino, el oficial a cargo no le informó de alguna situación límite a tener presente. Mientras menos se involucren, mejor. Cuando él tomó la prueba caligráfica, no detectó algo anormal de Claudia del Pino. La muestra caligráfica no tuvo algún tipo de entorpecimiento o evento que la impidiera, fue pausado porque ella estaba un poco, levemente nerviosa, como puede ser en todo el mundo. Esto demoró más menos unos 35 o 40 minutos. Fue tranquilo. La cantidad de hojas que se escriben, en este caso fueron ocho páginas, sentada. Calificaría ese proceso de toma de muestra como normal. El proceso de obtención de pruebas de Ricardo Vega fue normal completamente. Se da una orientación a las personas y cómo deben realizar el procedimiento. El de Carola D'Agostini también. Le pidió la cédula de identidad incluso. Las tres muestras fueron obtenidas de manera normal.



Señaló que en el proceso de análisis va dejando registro en su informe de lo que es de interés criminalístico. Se ve el aspecto morfológico global, detalla los aspectos relevantes, especificaciones que le pueden servir para tomar una decisión final. En esta oportunidad, para que las cosas fueran más claras, se realizaron fotografías para graficar.

A continuación la Fiscalía le exhibió las pruebas denominadas en el auto de apertura como “50 fotografías que están anexas al informe pericial documental 49-2021, evacuado por el perito German Miranda” y al revisarlas comentó que corresponden a uno de los documentos periciados, el 5948291; al documento de la NUE 5948283 y una de las firmas periciadas, que es compatible o acorde con la Brother de inyección de tinta, se hizo un estudio con lupa milimétrica y se verificó que este tipo de impresoras, los signos o números o letras los imprime con inyección de tinta, que significa una confusión de puntos de colores distribuidos al azar, esa firma fue realizada por Claudia del Pino, es una firma inventada; al documento 5948316, también con el título de Fiscalía y también otra firma que es inventada, diferente a la anterior; a la 5948290, también dice Fiscalía y el mismo título Decisión de Archivo Provisional, es de una impresión láser, con depósitos de tóner para crear los signos; a dos imágenes de las impresoras que tuvo a la vista; a una de las firmas de los procesos de análisis caligráfico, se ven grafismos ampliados de la firma dubitada y de las pruebas caligráficas de Claudia del Pino, un grafismo es una escritura, sinónimo de trazo, rasgo, todo en ese contexto, ese trazo como “m” se correlacionan fisonómicamente; a otra de las firmas con aumentos y también de las muestras de Claudia del Pino, los trazos de cada persona son distintos; a una diferencia que se ve en un trazo similar; a firmas dubitadas con trazos de Carola D’Agostini que no se correlacionan con las firmas dubitadas; a lo mismo respecto de Ricardo Vega, buscó los que más se podían parecer y verificó que no se notan algunos elementos estructurales que puedan decir que él confeccionó estas firmas; a la impresora de inyección de tinta; a las características de la impresora Brother y un acercamiento a los puntos; a otro caso con aumento de una letra; al otro NUE, un acercamiento a la impresora de inyección de tinta; a la impresora láser que ya indicó; y al documento que se correlaciona o es acorde con este tipo de impresoras láser.

Manifestó que su primera conclusión fue que determinó quién hizo esas firmas. En el segundo punto, sobre las otras personas, descartó su participación



caligráfica. Esa es certeza. Siguiendo los criterios de su especialidad, trabajan en equipo, son tres peritos documentales y a veces se preguntan opiniones. En este caso mostró las muestras de todas las personas y se verificó que había ciertos signos en la firma de del Pino que dan la referencia que ella escribió las firmas. Un perito, siguiendo su misma metodología y viendo las mismas muestras caligráficas, no podría llegar a una conclusión totalmente diversa en este caso porque los antecedentes que tuvo a la vista fueron concluyentes.

Con Claudia del Pino alguna vez en la Fiscalía local de Linares se cruzaron. No tiene amistad o enemistad hacia ella. Cuando le hizo la pericia, conversó con ella lo humano, ella dijo que estaba muy afectada por el proceso. Sobre si alguien le pidió que la inculpara a ella, no, y nunca se prestaría para algo así.

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña respondió que las impresoras no pudo prenderlas o imprimir documentos con ellas. Sólo indicó algo genérico sobre ellas. No pudo determinar cuál era a color o blanco y negro porque no pudo instalar su software. Lo vio de internet y de lo que él conoce.

Tomó muestras caligráficas. Está consignado cuándo se tomaron. El documento mismo de la muestra de firmas está en los NUE 1337215 y 1337216 le parece, y 17. Esas muestras están en sus NUES respectivas. Sobre las muestras de firma y las firmas dubitadas, sólo se consignó lo que vimos en las fotos en su informe.

Al Tribunal aclaró que, sobre los porcentajes que mencionó, antes se usaba lo de la presunción. A los peritos les daban a entender el porcentaje. Un perito o tutor le decía que si hablaba de un 70% es porque es. Eso fue hace muchos años atrás. Acá es certeza. Si se pronuncia, significa que hay una convicción completa de que es un sí o un no. No hay un estudio sobre porcentajes de falso positivo. Cuando emite un juicio categórico es un sí o un no. Está también la opción de no pronunciarse cuando está la duda. En este caso la firma dubitada fue comparada con la firma de tres personas, y entre ellas Claudia del Pino es la que confeccionó esa firma. Tiene 100% de certeza en este caso de su afirmación sobre que del Pino confeccionó esas firmas, ella realizó esa firma de entre todas las personas.

Paralelamente, la Defensa de dicha acusada también incorporó una pericia de la especialidad. En efecto, Cristian Alfonso Cáceres Muñoz expuso que se le encargaron dos exámenes que son distintos completamente. Se le encargó realizar una metapericia respecto del informe pericial N° 49-2021 del Laboratorio Regional



Talca de la Policía de Investigaciones. Un informe que contiene el análisis a firmas puestas en documentos de la Fiscalía de Linares realizadas por un perito del LACRIM Talca. La metapericia consistió en determinar si existió un correcto análisis metodológico o falta de rigor técnico en el examen realizado por el perito, que luego fue evacuado en ese informe pericial. Específicamente de las 10 hojas que contiene este informe pericial documental, se le pidió determinar si entre las hojas 3 a 7 inclusive se evidencia esta falta de rigor técnico o metodología adecuada para el proceso de análisis caligráfico. El informe está en dos partes, uno caligráfico documental y uno caligráfico que era referido a unas impresoras, que no era objeto de su metaperitaje.

Refirió que al estudiar el informe del colega, le impresionó que no indica si los documentos los estudió en su formato original o si se trataba de copias fotostáticas o escaneadas. No lo dice, debiendo hacerlo. Luego, realizó el perito un cotejo utilizando, bajo su experiencia, una metodología que tampoco señala ni indica y refiere como base fáctica para realizar el peritaje. No lo contiene. En base a lo que él presenta advierte que se trata del método scopométrico dado el acto comparativo que realiza. Tampoco indica, en base a la metodología utilizada, los rasgos y elementos característicos de las firmas dubitadas estudiadas. Tanto es así que no menciona, por ejemplo, rasgos íntimos como puntos de inicio, de salida, enlaces, cruzamientos, superposiciones de trazos, presión pulsátil. No presenta ninguno de los elementos que todo informe pericial caligráfico debe contener para entender el trabajo bien realizado. Realiza una somera comparación entre las firmas contenidas en ese informe versus las caligráficas indubitadas que tuvo a la vista y, en razón de eso, concluyó que las firmas dubitadas procederían de la mano que le realizó una muestra caligráfica voluntaria y al mismo tiempo descarta la participación de dos personas más.

Lo interesante es que para concluir cómo llega a descartar la participación de alguien y determinar la presencia de otra no menciona el sustento metodológico ni hace alusión al rigor técnico para llegar a esa conclusión, sino que basa su pronunciamiento en semejanzas en unos aspectos, a métodos cuantitativos que no se condicen con el método scopométrico, y bajo esa mirada deja serias dudas en cuanto a la objetividad de la conclusión porque es un informe adolece de rigor técnico eficiente, no presenta la metodología en que se sustenta y no indica cuántas metodologías hay para realizar esta pericia y por qué eligió una en desmedro de otra.



Solamente dice que una persona es autora de las firmas dubitadas y los otros no. Por eso concluyó que el informe adolece de una clara falta de rigor técnico, de metodología utilizada, no indicando los elementos centrales y esenciales que debe contener un buen informe caligráfico. Su informe metapericial fue del 15 de febrero del año 2022.

Agregó que el segundo análisis que se le pidió es pericial caligráfico a dos firmas contenidas en dos documentos que estaban custodiados en la Fiscalía de San Javier bajo los NUE 5948316 cree una y 5948283, por lo que tiene memoria. Son dos documentos de la Fiscalía local de Linares que dan cuenta de un archivo provisional, si mal no recuerda. Las firmas dubitadas están en la segunda hoja de ambos documentos. Como materia indubitado tuvo a la vista muestras caligráficas aportadas por la señora D'Agostini, la señora del Pino Acuña y del señor Vega Guerrero, muestras que tomó un funcionario de la Policía de Investigaciones y que estaban en custodia de la Fiscalía de San Javier, con sus cadenas de custodia. También una muestra caligráfica que él tomó a la señora del Pino Acuña, en que usó un proceso bastante riguroso. Le tomó ocho muestras de pie y sentada y después de la tercera hoja se le pide que aumente la velocidad para luego frenarla y pedirle que vuelva a escribir de manera normal. El motivo de eso es que se produce un relajamiento en el músculo escritor y cuando quiere la persona disimular la firma, ya no lo puede hacer, el cerebro lo hace volver a escribir de manera autónoma. Entonces comparó las muestras dubitadas que estaban en la Fiscalía de San Javier con las indubitadas que mencionó. Respecto de las dubitadas, son dos firmas. Una la del documento NUE 5948316. Es una firma construida en tres movimientos escriturarios pero que mantiene dos velocidades de construcción. Los dos primeros movimientos rápidos y el tercero normal. Se advirtieron en esas firmas dubitadas ciertas indecisiones en el trazado, algunas esquirlas de fallas de masa. Determinó la orientación y ubicación de rasgos tipos y la presión pulsátil. Sobre la firma en el documento NUE 5849283, está construida en un solo movimiento y también con dos velocidades de construcción, una para los dos óvalos iniciales y otra para la parte final de la firma.

Explicó que, para hacer el análisis comparativo, usó un barrido de filtro azul porque las firmas, dubitadas e indubitadas, fueron construidas con un lápiz de tinta pastosa azul. Para determinar rasgos íntimos, las fotografió y pasó por un software con un filtro azul para anular el color. Al anularse, sobre todo en la construcción de



un trazo, se advierte el ductus, que es el surco que queda por el paso del elemento escritor y al hacer eso se pueden determinar cruzamientos de línea y algo muy personal de quien escribe, que es la presión pulsátil, que es distinta en cada persona. Realizado ese cotejo, se permitió revisar ciertos elementos que afloraron que eran disímiles en las firmas dubitadas versus las muestras caligráficas de del Pino. Había elementos que si bien desde la forma, el dibujo, eran similares, el dibujo similar de la firma de la señora del Pino era diferente por la presión pulsátil usada. Eso es propio de las firmas cuando se falsifican por memoria o en una imitación servil. Quien imita una firma la memoriza o la tiene a la vista, pero no pudo evadir su presión al construirla. Eso le permitió diferenciar la firma puesta en los documentos dubitados versus la de la señora del Pino. Con mayor razón pudo descartar la participación de la señora D'Agostini, porque el dibujo y construcciones eran completamente disímiles. Le llamó la atención un gesto típico presente en la firma de Vega Guerrero presente en la firma del documento 5948236, que es un gesto típico que se conforma de manera muy particular en cuanto al lineado que conforma el trazado. Ese mismo gesto tipo está en esta firma dubitada. Al mismo tiempo, otros elementos integrantes, como ciertas indecisiones, esquirlas y fallas de masa presentes en las muestras caligráficas de Vega también estaban presentes en el documento NUE 5948316 y 283, en ambos documentos. Esa es la razón por la cual tomó, como muestras caligráficas y fotografías, las que levantó el perito de la Policía de Investigaciones porque le pareció extraño que, habiendo él levantado la firma, no se percatase de las similitudes en ambas muestras. En el informe, las muestras indubitadas que presenta son las que levantó el perito colega que las que levantó él, le parecieron de mejor calidad

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña respondió que su primera formación de perito forense en documentología viene del 2007. Desde el 2010 es perito judicial calígrafo documental y criminalístico. Es abogado, magíster en derecho procesal, tiene diplomados en derecho laboral y procesal. Es docente de la cátedra de ética y argumentación jurídica en una universidad y columnista del Diario Constitucional. También es autor de un libro. Este peritaje se lo solicitó la señora del Pino Acuña. Esto tiene un costo, 20 uf, eso pide siempre por un informe documental o pericial caligráfico. A del Pino no la conocía de antes. Si mal no recuerda, lo ubicó por su sitio web. No tiene un interés en esta causa.



Señaló que una metapericia es una actividad donde un experto o metaperito realiza un análisis para revisar un informe pericial afin a su ciencia, regla, arte u oficio, evacuado por otro perito. La finalidad es determinar si existió falta de rigor técnico o correcta aplicación metodológica al realizar la pericia. No es un contraperitaje, que es periciar lo ya periciado. Es una revisión a un documento para ver si está bien construido o no. Eso decanta en un informe o dictamen. En la pericia caligráfica también emitió un dictamen en su informe.

La grafoscopia es una palabra construida de scopia u observación y grafo o construcción de una letra. Es el estudio de la construcción de una letra. Si se le adosa forense, esa disciplina se enmarca dentro de lo judicial. Estudia la conformación de las letras, firmas o cualquier dibujo gráfico de puño y letra o de otras formas de escribir. Dentro del método grafoscópico, el más usado es la scopometría, que es un análisis empírico del grafismo con un método deductivo. Al tener a la vista dos muestras llamadas dubitadas o indubitadas, el método scopométrico tiene dos partes, uno extrínseco que dice cómo es la figura que se ve y si tiene elementos que pueden estar presentes en ambas muestras. Si eso es así, se pasa al análisis intrínseco, que es observar la construcción del signo, en que se usa la microscopía y se determinan elementos como puntos de inicio, enlaces, cruzamientos, dimensiones, profundidad del trazo, pausas y una serie de cosas que no revela el análisis macroscópico. En el informe metapericiado, el colega no indicó qué método utilizó, pero se deduce, pudo utilizar un método grafométrico o el INGPEC, pero no señala. Él usó la scopometría porque es el más confiable porque como es un análisis cualitativo, es de observación. Le llama mucho la atención del informe que metaperició que todos somos seres humanos y podemos cometer errores. Entonces, cuando se desarrolla un peritaje, necesariamente se debe plasmar eso en el informe, la bibliografía especializada dice que el informe pericial debe tener todo el trabajo vertido. El que lo lee no es experto y se puede confundir o producir errores en el sistema y dar por ciertos elementos que no lo son.

La misma Defensa procedió en este punto a mostrar al perito parte de la prueba llamada en el auto de apertura como “50 fotografías que están anexas al informe pericial documental 49-2021, evacuado por el perito German Miranda”, y al verla el señor Cáceres Muñoz señaló que, en la que se llamó fotografía 6, llama mucho lo que se señala como grafismo, esa firma es dubitada, cree en el documento NUE 5948316. El colega se impresiona por un dibujo gráfico, son iguales (indica los



del medio), pero el colega no advirtió, si hubiese usado el video espectro comparador, que permite hacer barridos con diferentes luces para anular las frecuencias y determinar el recorrido del instrumento, que esa línea baja con muy poca presión (indica el lado izquierdo), no obstante la indubitada (indica la de la derecha) baja con una presión pulsátil alta y a la izquierda la curva sube con mucha presión y en el de la derecha disminuye hasta desaparecer. Lo criticable del colega es que se deja llevar por el dibujo. El elemento del trazo claramente, desde lo macroscópico, no es evidente, pero microscópicamente es evidente que no provienen de la misma mano. Cuando se le pidió a del Pino en una prueba caligráfica inventar una firma, el dibujo es similar, aumenta al bajar y baja al subir y en la dubitada es todo lo contrario. Nadie puede repeler su propia forma de escribir. En el de abajo se ve exactamente lo mismo. Es trazado suave el de la izquierda y a la derecha el trazado es con fuerza, presenta una falla de masa y si el colega lo hubiese presentado al microscopio hubiésemos visto seguramente ahí perfiles más troquelados. Arriba se ven dibujos desde la fisonomía global, sin dificultad para hacerse y por ello fácil de imitar. Por ello, al presentar una dubitada frente a otra dubitada, necesariamente debió indicar el perito la construcción interna de ellas porque serán las cualidades del lineado, lo interno, lo que permitirá decir quién hizo el dibujo. Si el colega no dice cómo llegó a esa conclusión y sólo presentó dibujos, el informe carece de rigurosidad técnica, más si no presentó la metodología que utilizó. Sobre la fotografía a la que se le asignó el N° 7 refirió que es lo mismo, en la de arriba a la izquierda, la dubitada, el colega le pidió a del Pino inventarla y el trazo ascendente comienza a ganar fuerza y el de la derecha pierde fuerza en el borde derecho. Cando a una persona se le dice que copie un dibujo, siempre lo va a copiar en base a la movilidad y diseño que uno se crea en su cabeza, pero la pulsación que da la profundidad es invariable, no se puede rehuir a ello. El trazo de la izquierda no es el mismo que el de la izquierda, son completamente distintos en la presión pulsátil. También la cualidad interna muestra otro tipo de perfiles. Indicó que parece esa fueron los dos fotos que usó del informe del colega para la metapericia. Además también leyó el contenido. De acuerdo a lo que le muestran ahora, hay claras diferencias, no es la misma mano de la dubitada y la indubitada, no proceden del mismo individuo. Sobre la fotografía a la que se le asignó el N° 8 manifestó que el dibujo de la izquierda en su informe tiene un trazo. Esa firma está en un solo movimiento, el lápiz no se levantó del soporte, pero se ve que al medio tiene un



juego que hace cinco vueltas y eso es el ritmo escriturario. Al confrontarlo con una firma dentro de las indubitadas del señor Vega, tiene el mismo ritmo escriturario de cinco. Esas fueron las firmas que revisó para el informe. Sobre la fotografía a la que se le asignó el N° 9 señaló que concuerda con el metaperitaje que las firmas no guardan relación con la señora D'Agostini. De ella y del Pino no hay gestos tipo en esas firmas.

Afirmó que, sobre la seguridad de estos peritajes, nada es 100% seguro. Hay metodologías que son más efectivas que otras. La seguridad está dada por la predisposición del perito, la información y objetividad del mismo. En términos generales, la scopometría es la metodología más efectiva para determinar la autoría de una construcción gráfica. Es el método que él usó. Más que porcentaje de seguridad, la scopometría es un método cualitativo, por eso es el más efectivo, no tiene que ver con porcentajes. Usó barrido infrarrojo y con los colores de los lápices usados en las dubitadas e indubitadas. Eso lo echó de menos en el informe del colega, porque no lo indicó.

Al Ministerio Público contestó que, sobre si revisó el NUE original, ese revisó, de la Fiscalía de San Javier con la cadena de custodia. En la cadena de custodia quedó firmado por la persona que le facilitó ese día el 11 de febrero del 2022. Recuerda que firmó un documento en que él señaló que ese día estuvo presente ahí y revisó. No recuerda haber firmado la cadena de custodia. Sí abrió delante de él el documento.

Sobre su peritaje de la firma de del Pino, también tomó para peritaje el material indubitado de las muestras que se tomaron a D'Agostini y Vega, las que tomó el perito. Él revisó las mismas muestras que el colega tomó y aparte él le tomó a del Pino muestras caligráfica. No le tomó muestras a Vega y D'Agostini. No pudo hacer con ellos la técnica de cambiar las velocidades. Las muestras que tomó Germán Miranda eran de buena calidad. Su principal objeción es que no explicó la metodología empleada y que es evidente en el mundo pericial caligráfico que se dispone del equipo, debe determinarse con la tecnología si lo que se ve es verdad o no. Por eso dedujo que usó la scopometría, pero no señaló qué instrumental usó. La razón es que de haber usado el video espectro comparador se habría dado cuenta de las diferencias de presión pulsátil. Si es perito con experiencia, debió ver esas diferencias que eran evidentes. Esa es la diferencia de apreciación que tiene con el perito Miranda.



Concluyó que las marcas de los documentos fueron hechos por Vega en que figuran las similitudes, a pesar de no haber tomado muestras a Vega ni haber observado los cambios de velocidad.

En juicios orales penales, como perito ha declarado dos veces más. Generalmente hace peritajes privados por su profesión para llegar a conciliaciones o arreglos.

Al Tribunal aclaró que, sobre el porcentaje de falsos positivo y falsos negativos, desde el punto de vista de la scopometría no hay estudios. Estudios internacionales, Mauricio Duce los ha investigado todos, son en cuanto a las declaraciones de peritos en estrados y la poca diligencia para revisar sus exámenes que incide en error judicial. No sabe si en Chile se ha hecho un estudio cuantitativo similar al que se hace en EEUU. Sobre los resultados de ese estudio de Mauricio Duce, no los recuerda. Sí hay diferencias en las metodologías y ahí se pueden detectar errores. Le ha pasado al metapericiar informes de un grupo que usa una metodología específica, ese sí ha arrojado errores. Ha revisado cuatro informes de esos peritos y los cuatro llegan al mismo problema, porque es cuantitativo y emiten dictamen sobre la base de un porcentaje.

Del contraste de ambas pericias fluye con claridad que la segunda contiene un contraperitaje cuyos resultados son totalmente opuestos en lo referente a la autoría de las firmas que pueden observarse en los documentos incorporados y denominados en el auto de apertura como “NUE 5948283 correspondiente donde se indica como evidencia dos hojas de la Fiscalía con el título de archivo provisional marzo 2020”, y “NUE N° 5948316. Un documento de decisión de archivo provisional a nombre Ralph John Veloz Rodríguez CI 25.711.952-1 con nombre y logo de la Fiscalía Local de Linares, pues el primero afirma con certeza que vienen de la mano de la acusada del Pino Acuña y el segundo que no es así, agregando incluso este último que una de esas firmas, al confrontarla con una firma dentro de las indubitadas del acusado Vega Guerrero, tiene el mismo ritmo escriturario de cinco vueltas.

Valorando ambas probanzas, si bien la expuesta por el señor Miranda Pérez, dado su contenido y la experticia, capacitación y labor especializada que efectúa, permite asignarle un alto mérito, a la vez no podemos desconocer que a la pericia expuesta por el señor Cáceres Muñoz, también por su contenido y estudios que refirió y con su deposición demostró, debe concedérsele un valor probatorio



relevante. En ese escenario y dado el estándar de convicción aplicable conforme el artículo 340 del Código Procesal Penal, concluyen estos sentenciadores que con la segunda de dichas pericias sí se generó en el juicio oral una duda razonable en cuanto a la autoría de las firmas puestas en los documentos recién aludidos, duda que desvirtúa las pretensiones de los acusadores específicamente en lo tocante a las cartas de comunicación de archivo provisional que relacionaron en sus libelos con el RUC N° 2000145895-3, en que señalaron que Claudia del Pino Acuña “supuso la intervención del fiscal jefe de Linares confeccionado una firma sobre el nombre de “Fiscalía Local de Linares”, confeccionado una firma sobre el nombre de “Fiscalía Local de Linares” en el documento de Archivo provisional que beneficiaba a RALPH VELOZ RODRÍGUEZ”, y con el RUC N° 2000237477-4, en que señalaron que Claudia del Pino Acuña “supuso la intervención del fiscal jefe de Linares, confeccionado una firma en el documento de Archivo provisional que le beneficiaba a SAMUEL ALARCÓN URRUTIA”.

No huelga añadir que, en relación con la otra supuesta forma de falsificación o uso malicioso de instrumento público, los persecutores circunstanciadamente postularon que en los procesos RUC 2000145861-3 y RUC 1900104808-5 [Claudia del Pino Acuña] confeccionó las cartas de archivo provisional en la impresora que le fue incautada en su propio domicilio particular, específicamente impresas en la impresora marca “Brother”, modelo DCP-T510W, que no corresponde a la Fiscalía Local de Linares, sino a una impresora particular.

Sobre este punto conviene consignar que, además de lo aportado por el señor Gutiérrez Gutiérrez, el comisario de la Policía de Investigaciones Patricio Antonio Salgado Cerda testificó que, conforme a una investigación que era llevada por el comisario Luis Gutiérrez, el 10 de marzo del año 2021, por requerimiento de la misma investigación, fue a un domicilio en Linares, en la villa Las Vertientes, pasaje Estero la Gloria 1879 de Linares, donde conforme a una orden judicial ingresaron al domicilio, una entrada y registro. Esto fue el 10 de marzo del 2021 a las 19:55 horas.

Sobre la causa, sabía en general de qué se trataba. Conforme a una investigación por cohecho por parte de una funcionaria de la Fiscalía Local de Linares. En esa investigación hasta ese momento no había participado directamente. Le pidió esto el comisario Luis Gutiérrez, encargado de la investigación, quien en ese momento tomaba una declaración. Le pidió su colega entrar al domicilio



buscando principalmente dos impresoras que tenían vínculo directo con la investigación para asociarlas a unos documentos que entregó la funcionaria de la Fiscalía respecto de archivo de causas. Participó en esta diligencia con el subcomisario Carlos Castillo, colega de la unidad. También estaba el fiscal con que habla (Patricio Caroca). Autorizó la jueza Claudia Olea, la entrada y registro y la incautación de dispositivos electrónicos e informáticos relacionados con la investigación.

En el domicilio señalado estaba Paulina Cisterna, quien dijo ser amiga de Claudia del Pino, facilitó el ingreso y firmó el acta. Estuvo con ellos mientras realizaban la diligencia. Sobre por qué estaba ella en la casa, sólo recuerda que señaló ser amiga de Claudia del Pino. Sobre si supo si durante ese período Claudia del Pino se enteró de la diligencia, sí, porque Paulina la llamó y le informó que había personal de la Policía de Investigaciones en su domicilio e iban a entrar para buscar material informático.

Hicieron ingreso y en una dependencia del domicilio encontraron dos impresoras, una Brother y otra HP, que fueron incautadas. Esas impresoras no recuerda dónde estaban, sí dentro del domicilio, que se veía deshabitado, como en proceso de entrega, porque no tenía muchos muebles y había muchas cajas.

Las impresoras estaban en buen estado, con sus cables. Las levantaron con acta y cadena de custodia y las entregaron al comisario Gutiérrez.

Paulina Cisternas firmó un acta, la de incautación y entrega como encargada del domicilio. Ella estaba dentro de la casa y tenía llaves de la casa.

Esto se fijó fotográficamente. Se fijó el domicilio y las impresoras incautadas.

Acto seguido, el Ministerio Público procedió a exhibir al testigo la prueba llamada en el auto de apertura como “siete fotografías de la casa de Claudia del Pino Acuña donde se incauta las impresoras indicadas en los puntos 97 y 98” y al ver las imágenes que lo componen, señaló que corresponden al el domicilio donde se realizó la entrada y registro, que cuando llegaron, estaba cerrado y al interior Paulina Cisternas quien, luego de manifestarle la orden de entrada y registro, previo al llamado telefónico a Claudia del Pino, accedió a que ellos entraran al domicilio; a la camioneta que, por lo que Paulina Cisternas, era de ella; al ingreso principal al domicilio; a una de las impresoras, no ve la marca; a la Brother, la anterior era la HP; y a la impresora que estaba en la cocina.



También la Fiscalía le mostró las pruebas denominadas en el auto de apertura como “NUE 5948315: Una impresora marca brother, modelo DCP-T510w” y “NUE 5948315: Una impresora marca HP, modelo Laser Jet P1102W”, y al revisarlas indicó que una es la impresora marca HP que refirió en su declaración, la reconoce; y la otra es la impresora Brother DCP-T5-10W, es la misma a la que se refirió en su declaración y se incautó en el domicilio.

Dichas evidencias, que el Tribunal pudo observar, efectivamente corresponden a dos impresoras color negro.

Anotado lo precedente y sin perjuicio de todo lo antedicho en relación con los delitos de falsificación o uso malicioso de instrumento público, el perito señor Miranda Pérez en definitiva concluyó que, sobre las impresoras que se le remitieron, como no se le enviaron los discos de instalación, solamente realizó un estudio genérico basándose en internet y en sus conocimientos de ese tipo de impresoras, con lo que podía determinar que los documentos dubitados eran compatibles con impresiones a inyección de tinta y láser, mas no que efectivamente dichas impresoras se utilizaron en la impresión de los documentos dubitados que tuvo a la vista porque no le trajeron los discos de instalación. Por lo mismo, y a falta de otras probanzas pertinentes incorporadas, tampoco se probó suficientemente el supuesto fáctico de cargo transcrito.

Concluyendo, en relación con los delitos de fraude de seguros propuestos por la Fiscalía, ilícito previsto y sancionado en el artículo 470 N° 10 en relación con el artículo 467 N° 2, ambos del Código Penal, los hechos que decantamos sobre la base de las probanzas producidas no permiten subsumirlos en tales normas dado que no implican que el agente haya obtenido indebidamente y de forma maliciosa el pago total o parcial de un seguro.

Analizando cada uno de ellos, sobre el primero el Ministerio Público planteó que “con fecha 05 de julio del año 2019, la imputada Claudia del Pino Acuña denunció en causa RUC 2000213518-4 que la transferencia electrónica realizada desde su cuenta Rut 18.890.618-4 del Banco Estado a su cónyuge Ricardo Vega Guerrero por la suma \$200.000, denunciando falsamente que esta transferencia no se había ejecutado ni había sido autorizada por ella, con el objeto de hacer valer el seguro de fraude a todo evento por ella contratada. En circunstancias que efectivamente realizó la transferencia antes indicada y el dinero fue recibido por Vega Guerrero, obteniendo del banco antes mencionado una devolución indebida”.



Al respecto, lo primero que salta a la vista al revisar la carpeta investigativa de la causa RUC N° 2000213518-4 que la Fiscalía incorporó al efecto y que ya fue extractada en este fallo es que la denuncia no es de fecha 5 de julio del año 2019, sino que es del 25 de febrero del año 2020. Luego es llamativo que en esa causa RUC N° 2000213518-4 lo denunciado por la acusada del Pino Acuña no fue que no efectuó ni autorizó una transferencia electrónica desde su cuenta Rut 18.890.618-4 del Banco Estado a su cónyuge Ricardo Vega Guerrero por la suma \$200.000, sino que denunció que el 21 de febrero, exactamente las 00:41 horas, alguien había efectuado una transacción, al parecer un giro en un cajero automático, transacción que no fue realizada por ella ni por nadie a su solicitud, sin mencionar el monto de esa transacción, ni que dicho giro haya sido realizado por Ricardo Vega Guerrero.

De esa manera, los hechos descritos por el Ministerio Público en este caso, especialmente en lo tocante a que del Pino Acuña denunció en la causa que singularizó una transferencia electrónica realizada desde su cuenta Rut 18.890.618-4 del Banco Estado a su cónyuge Ricardo Vega Guerrero por la suma \$200.000, no guardan relación con los que constan en la prueba que rindió al efecto, incongruencia que impide tenerlos por suficientemente acreditados.

Si bien es cierto que de las alegaciones que sobre el tema efectuó dicho interviniente y de la prueba que incorporó consistente, según el auto de apertura, en una “Copia causa RUC 1900718513-0 de La Fiscalía Local de Linares por el delito de uso fraudulento denunciante víctima CLAUDIA DEL PINO ACUÑA” figura una denuncia en que se lee que la acusada del Pino Acuña denunció textualmente “QUE CON FECHA DE HOY 5 DE JULIO DE 2019, ME DI CUENTA DE QUE EN MI CUENTA CORRIENTE APARECE UNA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA RUT 18890618.4 DE RICARDO VEGA GUERRERO, TRANSFERENCIA QUE YO JAMÁS HE REALIZADO. TOMÉ CONTACTO CON ESTA PERSONA Y ME DICE QUE SU CUENTA RUT ESTABA BLOQUEADA DESDE EL JUEVES 04 DE JULIO, Y A ÉL LE RETIRARON ESE DINERO DE UN CAJERO AUTOMÁTICO. LA OPERACIÓN ES LA NUMERO 7061191, APARECE CON FECHA 5 DE JULIO DE 2019. HAGO ESTA DENUNCOA PARA EFECTOS DE QUE ALGUNA VEZ EL BANCO ESTADO ME DEVUELVA FONDOS QUE ME HAN SACADO FRAUDULENTAMENTE DE MI CUENTA CORRIENTE, SEÑALO QUE MANTENGO SEGURO CONTRA ESTE TIPO DE TRANSACCIONES EL QUE



HARÉ VALER Y PONDRÉ LA CORRESPONDIENTE DENUNCIA EN LA SBIF, PUES NO ES LA PRIMERA NI SEGUNDA VEZ Que ME PASA ESTO”, fácil es constatar que, además de la desigualdad en el número de RUC, igualmente hay diferencias gruesas con la propuesta fáctica del Ministerio Público, ya que no se habla allí de una transferencia electrónica realizada desde una cuenta RUT, sino que a una realizada desde una cuenta corriente, ni de una suma transferida ascendente a \$200.000, sino que de una suma transferida cuyo monto no se indica.

Cabe acotar que la diferencia entre una transferencia de una cuenta corriente y de una cuenta RUT no es en este caso irrelevante, pues de la prueba acompañada por la Fiscalía y que se denomina en el auto de apertura como “Siniestros, cuentas de ahorros e información de productos de Claudia del Pino Acuña”, se advierte que la última, al 25 de abril del año 2021, contaba con una cuenta corriente y dos cuentas RUT.

Por otro lado, si bien dentro de las probanzas incorporadas por el Ministerio Público y denominadas en el auto de apertura como “Oficio Banco estado de fecha 25 de abril de 2021 el cual adjunta. - a. Movimientos efectuados entre el 01-01-2019 al 30-08-2020 de los productos registrados a nombre de la clienta Claudia Andrea del Pino Acuña. b. Movimientos efectuados entre el 01-01-2019 al 30-08-2020 de los productos registrados a nombre del cliente Ricardo Vega Guerrero [...]” figura la cartola histórica N° 12 del Banco Estado de Chile, referida a la cliente “del Pino Acuña Claudia Andrea”, que abarca desde el 28/06/2019 al 12/07/2019 y recae en su cuenta corriente terminada en 551-1, y en ella se ve una “transferencia fondos internet” de fecha 5 de julio por el cargo de \$150.000 que fue destacada por aquél interviniente, además de la cartola histórica N° 1 del Banco Estado referida al cliente “Vega Guerrero Ricardo Ignacio”, que abarca desde el 21/06/2019 al 23/07/2019 y recae en su chequera electrónica o cuenta vista terminada en 130-6, y en ella se ve una “transferencia fondos internet” de fecha 5 de julio por el abono de \$150.000, que por el número de la cuenta vista que indica se puede relacionar con la prueba denominada en el auto de apertura como “Siniestros, cuentas de ahorros e información de productos de Ricardo Vega Guerrero”, ya que allí figura dicho número como correspondiente a una cuenta RUT de Vega Guerrero, no puede olvidarse que esa fecha de transferencia bancaria no fue señalada como tal por la Fiscalía, ya que indicó en los hechos el 5 de julio del 2019 como la fecha de la denuncia, ni figura en la causa RUC N° 2000213518-4. Adicionalmente, dicha



transferencia no fue efectuada por del Pino Acuña desde su cuenta RUT y tampoco fue por la suma de \$200.000, como se sostiene en la acusación.

Concluyendo, los acusados, como se extractó de sus declaraciones ante estrados, hicieron referencia a un evento relacionado con una transferencia de dinero, que Vega Guerrero precisó eran \$150.000, desde una cuenta bancaria de del Pino Acuña a una del segundo, sin precisar fecha. Ello coincide con el tenor de la denuncia que corresponde a la citada causa RUC N° 1900718513-0 y a lo que revela la prueba singularizada en el auto de apertura como “Oficio de fecha 21 de febrero de 2022 de Banco estado compuesto de 6 hojas” en la parte en que se informa por dicha institución bancaria que Claudia del Pino Acuña objetó una transacción de fecha 5 de julio del año 2019 por el monto de \$150.000, cuya “cuenta destino “fue “internet, internet principal – destino Vega Ricardo”. Sin embargo, por los motivos antedichos, todo ello no cabe dentro del contenido de la acusación.

El cúmulo de las deficiencias probatorias ante descritas, a juicio de este Tribunal, impide dar por probado, con el estándar de convicción exigible, el hecho propuesto en los términos que respectivamente postuló el Ministerio Público, por lo que se absolverá por dicho capítulo.

Siguiendo con el segundo hecho que ese mismo interviniente sostuvo era constitutivo del delito de fraude de seguros, a la letra consiste en que “en causa RUC 1901128408-9, la imputada Claudia del Pino Acuña denunció que con fecha 17 de octubre de 2019, se había realizado un giro desde su cuenta corriente por la suma de \$200.000, situación que indicó no era posible y que correspondía a un fraude por una transacción no autorizada, denunciando falsamente esta transferencia que no había sido ejecutada ni autorizada por ella, para hacer valer el seguro de fraude a todo evento por ella contratada. En circunstancias que efectivamente sí realizó la transferencia antes indicada y el dinero fue retirado por la propia del Pino Acuña de la cuenta, obteniendo la devolución de estos dineros”

En relación con la efectividad de que lo así denunciado es falso dado que del Pino Acuña sí realizó la transferencia que cuestionó, ninguna prueba relevante se rindió. Recordaremos al respecto que ninguno de los acusados así lo afirmó y agregaremos que la probanza denominadas en el auto de apertura como “Oficio Banco estado de fecha 25 de abril de 2021 el cual adjunta. - a. Movimientos efectuados entre el 01-01-2019 al 30-08-2020 de los productos registrados a nombre de la clienta Claudia Andrea del Pino Acuña [...]”, si bien contiene la cartola



histórica N° 16 del Banco Estado, referida a la cliente “del Pino Acuña Claudia Andrea”, que abarca desde el 17/10/2019 al 28/10/2019 y recae en su chequera electrónica o cuenta vista terminada en 038-2, y en que ella observa un “giro cajero automático” del 17/10/2019 por la suma de \$200.000, ello nada aporta en relación con la falsedad de lo denunciado en este capítulo por la acusada del Pino Acuña.

En razón de ello, se absolverá también por tal concepto.

Sobre el tercer hecho que el Ministerio Público sostuvo era constitutivo del delito de fraude de seguros, a la letra consiste en que “en causa RUC 1900171008-K, la imputada Claudia del Pino Acuña denunció que con fecha 25 de enero de 2019 se realizó una transferencia desde su cuenta corriente 39100065511 por la suma de \$20.000 y luego un giro por \$70.000, que desconocía haber ejecutado ni haber sido autorizada por ésta, con el objeto de hacer valer el seguro de fraude a todo evento por ella contratada. En circunstancias que efectivamente realizó la transferencia antes indicada y este dinero fue retirado por la propia del Pino Acuña, obteniendo una devolución indebida”

En relación con la efectividad de que lo así denunciado es falso dado que del Pino Acuña sí realizó la transferencia que cuestionó y ella misma retiró ese dinero, ninguna prueba relevante se rindió. Recordaremos al respecto que ninguno de los acusados así lo afirmó y agregaremos que la probanza denominadas en el auto de apertura como “Oficio Banco estado de fecha 25 de abril de 2021 el cual adjunta. - a. Movimientos efectuados entre el 01-01-2019 al 30-08-2020 de los productos registrados a nombre de la clienta Claudia Andrea del Pino Acuña [...]”, si bien contiene la cartola histórica N° 4 del Banco Estado, referida a la cliente “del Pino Acuña Claudia Andrea”, que abarca desde el 25/01/2019 al 18/02/2019 y recae en su cuenta corriente terminada en 551-1, y en ella se observa una “transferencia fondos internet” del 25/01/2019 por el cargo de \$20.000 y un “giro por redbanc” de la misma fecha por \$70.000, ese dato nada aporta en relación con la falsedad de lo denunciado en este capítulo por la acusada del Pino Acuña.

En razón de ello, también se absolverá en dicho capítulo.

Para terminar, el Querellante acusó por un hecho no compartido por el Ministerio Público, a saber, que “en la causa RUC N° 2000185678-3 de la Fiscalía Local de Linares, por el delito de conducción en estado de ebriedad, existía una prueba de intoxilyzer respecto al imputado MANUEL ALEJANDRO PAREDES DAGNINO de 1,64 gramos por mil, no obstante, la querellada terminó la causa en el



sistema informático aplicando la Facultad de no iniciar investigación, impidiendo y obstaculizando gravemente la investigación y persecución criminal, sin perjuicio que el escrito no se halla presentado efectivamente al Tribunal”, que corresponde al hecho N° 2.16 del noveno considerando del presente fallo.

Sobre ello, ya se expuso en la décima motivación que, por las razones allí señaladas y que damos por reproducidas y a falta de más probanzas pertinentes producidas en el juicio oral, este Tribunal estima que no es factible aseverar, con el estándar exigido por la ley, que, como la parte Querellante sostuvo en su libelo, haya en esta causa existido una prueba de intoxilyzer respecto al imputado Manuel Alejandro Paredes Dagnino de 1,64 gramos por mil, o que con aquella decisión de no iniciar investigación, la acusada del Pino Acuña haya impedido y obstaculizando gravemente la investigación y persecución criminal, por lo que igualmente se absolverá en esta parte.

DECIMOCUARTO: Que la Defensa de la acusada del Pino Acuña, en lo que no obtuvo y aún no ha sido analizado, en suma postuló introductoramente que la acusación nos remite a la época de la pandemia, de los encierros y cuarentena. En ese tiempo, Claudia tuvo que trabajar desde su casa, desde su computador, con todos los sistemas institucionales que la misma Fiscalía incorporó a su computador personal para que pudiera realizar sus gestiones porque ella tenía ciertas patologías base que recomendaban que su trabajo lo hiciera desde su domicilio. Según su teoría del caso, esa fue la circunstancia que Ricardo Vega aprovechó para utilizar los instrumentos que tenía Claudia para trabajar y, teniendo plena disposición de esos elementos, poder, desde el domicilio en común, realizar todos los delitos por los que se acusa. Es importante saber que no sólo tuvo acceso por estar en el mismo domicilio, sino que además pretende demostrar la sumisión que existía de Claudia en relación con los maltratos reiterados que recibió de Ricardo Vega. Generan incluso denuncias de violencia intrafamiliar, de tal manera que Claudia ni siquiera pudo percatarse del riesgo que corría respecto de su trabajo y no supo de esto hasta que la Policía de Investigaciones llegó a allanar su domicilio.

En relación con ello, la acusada Claudia del Pino Acuña renunció a su derecho a guardar silencio y prestó declaración al comienzo del juicio oral, manifestando en suma que, sobre cómo conoció a Ricardo Vega, lo conoció a finales del 2017 en Rengo por un amigo, Joel García, quien es receptor en la Corte de Apelaciones de Rancagua porque Ricardo trabajaba para él como chofer en carreras



cortas dentro de Rengo. Joel casi nunca estaba en Rengo porque trabajaba para afuera. Eran súper amigos desde la universidad de Talca. En noviembre de ese año salió de una relación espantosa con el papá de su hijo, a quien a esa fecha lo hicieron salir de la casa por una suspensión condicional de procedimiento porque la agredió, le rompió cosas, la amenazó de muerte y se tuvo que ir. Su mamá tuvo que viajar de Talca a cuidarla porque ese tipo venía de las fuerzas armadas. Estuvo como dos meses sin salir de la casa. Un día coincidió con Joel en Rengo y le dijo que se juntaran. Antes de eso ya le había pasado lo mismo con el papá de su hija mayor que le había tirado la camioneta, la sacó del camino, la volcó y también salió de la casa con una suspensión y una orden de alejamiento. Cuando coincidió con Joel, ella llevaba dos meses encerrada, no quería salir. Le dijo a su mamá que la dejara salir un rato y Joel justo estaba en Rengo y la invitó a un restaurante de Rengo. Fue, conversaron, le contó lo pasado y en ese momento él recibió un llamado de Ricardo, lo puso en altavoz, conversaron, bromearon y le dijo que estaba recién separado, que lo invitaba a un asado y Joel le dijo que no porque estaba con su amiga Claudia. Joel la invitó para allá y dijo que no porque la retarían si llegaba tarde. Finalmente llamó a su mamá, que le dijo que fuera para despejarse. Ahí conoció a Ricardo en su casa en un asado que había terminado. Él era un tipo joven, simpático, tiraba la talla, era como lo que nunca ella había tenido. Había pasado por tantas desgracias y pensó que quizás una persona así le iba a venir bien. Como el asado ya había terminado, hicieron una especie de picadillo y ahí, en el primer momento de esa tarde noche, se dieron un beso. La primera vez. Ahí Joel se reía y todo se tiró a la talla. En resumen comenzaron una amistad, después una relación sentimental y en enero y febrero del 2018 subrogó a todos los Fiscales en Rengo y en febrero le avisaron de la Fiscalía del Maule que una permuta que esperaba del 2013 surgió y le daban la posibilidad de ir a tres lugares. Ella eligió Linares porque quedaba más cerca de la casa de sus papás. Pidió que se postergara un poco para terminar su subrogancia, que se lo aplazaran por eso 10 o 15 días, y llegó en definitiva en marzo del 2018 a Linares a trabajar. Cuando le contó esto a Ricardo, él le dijo que cómo se iba, que no se fuera, que la amaba y se consiguió un amigo, Rodrigo Tapia, al que ella conocía de antes, y otros amigos más la ayudaron con el traslado de sus cosas a Linares. Sus papás no entendía qué hacía este tipo ahí.

Ella empezó a trabajar el 2018, pero ella ya venía con una patología a la columna desde Rengo por años. Siguió consultando su traumatólogo de Rancagua.



En la última consulta el traumatólogo le dijo que sólo le quedaba operarse de la columna, que dependía de ella hacerlo y debía firmar consentimientos porque corría riesgo de quedar inválida. A mediados de mayo quedó sin moverse y el 2 de junio del 2018 se operó de urgencia de la columna y comenzó para ella una licencia médica que duró mucho tiempo, del 2 de junio hasta finales de diciembre del 2018.

En un acto de impulsividad, se casaron con Ricardo en abril del 2018. Ahora comprende que no sabe cómo pudo cometer un acto tan impensado, sin ver la situación que vivía. Todos le decían qué hizo. Consultó a un psicólogo y le dijeron que tenía impulsividad muy marcada.

Como estaba con licencia, Ricardo se empezó a comportar terrible porque se empezó a aburrir y no podía salir. Empezó él a salir solo, le sacaba el jeep sin avisarle, empezó con agresiones físicas, no llegaba a la casa o llegaba borracho y lo único que quería era esconder esto de sus papás e hijos. Todo el 2018 fue así. En un momento él se fue a Rengo, se llevó su vehículo, se llevó sus tarjetas del Banco Estado y le sacó \$300.000 que tenía en su cartera. Ella, desesperada, llamó a su mamá y sus papás llegaron a Linares y ellos fueron testigos cuando él llegó a la casa en grúa con el auto destruido. Él finalmente pidió perdón, dijo que la quería e iba a cambiar, pero eso nunca ocurrió.

Pasando al 2019, en enero se cambiaron de casa a donde ocurrieron los hechos de la acusación, en la Villa Las Vertientes. Ahí no tuvieron vida de pareja. Ella dormía con su hijo y él se apropió de la pieza matrimonial. Ella le decía que no había cómo seguir la relación. Empezó a tratar él mal a su hijo chico de 6 años. En una pelea llegó Carabineros, sus papás tuvieron que volver a Linares. Era todo un desastre que empeoraba.

En julio se produjo uno de los supuestos fraudes cuando ella despertó en la pieza de su hijo con una notificación del Banco Estado donde se decía que se había hecho una transferencia a la cuenta de Ricardo. Lo fue a encarar y le preguntó qué pasó. Le respondió que él no lo hizo. Él tenía acceso a sus tarjetas de coordenada, le sacaba sus tarjetas. Él le dijo que debía ir al banco a denunciar para que le devuelvan la plata. Le preguntó a él qué pasó, que la plata estaba en su cuenta y se la devolviera y él señaló que no se la podía devolver, que lo hicieran todo formal y fuera al banco. Fue a Fiscalía, habló con Marcela Norambuena, encargada de las denuncias directas, y le dijo que sufrió un fraude del banco y le preguntó cómo hacerlo y ella le dijo que a ella le había pasado lo mismo y cuando le pasó, ella



misma se tomó la denuncia porque esa denuncia es para ir al banco con la denuncia de la Fiscalía, así que le indicó que se la tomara ella no más. Ahí denunciaron ella y Ricardo porque él consultó en el banco y le habían sacado la plata de su cuenta. Ella pasó las denuncias a preclasificación a cargo de Paulina Salazar. Nunca tramitó una causa de fraude porque no tenía posibilidad de pedir un FNI o nada. Cuando se vea el informe pericial 90 y las capturas de pantalla, se verá que las decisiones de todos los fraudes, que tienen equivocaciones en el RUC y la fecha, que ella no tuvo ninguna intervención en las decisiones que se tomaron en cada causa porque una se investigó, en otra se aplicó FNI y en la otra no existió. Cuando Ricardo empezó a negarle este tema, fue a hablar con el encargado del banco, que le dijo que no eran los responsables de esto, que tenían una empresa externa que averiguaba si procedía hacer las devoluciones porque no era una devolución a todo evento, debe proceder porque hubo una conducta de clonación o de fraude y si se le devolvieron dineros, es porque así corresponde. Se quedó con esa sensación. Esa situación de fraude se repitió una o dos veces más. De esas veces ella hizo dos denuncias que son las que el banco reporta, no tres como se indica en la acusación. Ahí a Ricardo ese día le congelaron la cuenta, le cerraron la tarjeta y más encima la culpó a ella por eso. Tuvieron la media discusión, donde de nuevo la empezó a agredir, que por su culpa y tuvieron otra pelea. En esa fecha le dijo que no podía seguir con esta situación.

En enero y febrero estaba subrogando porque volvió a trabajar el 4 de enero del 2019 después del tema de la columna, pero seguía cojeando por una artrosis severa en ambas caderas que no se había pesquisado. Seguía con muchos dolores, pero lo que pasó en ese tiempo fue absolutamente contrario al 2018 porque el 2018 no la dejaba manejar y él la iba a dejar, a buscar, después volver a dejarla y a buscarla. Ella le dijo que estaba aburrida porque no podía manejar su propio vehículo.

En marzo del 2019 volvió al trabajo administrativo después de subrogar en audiencias todos los días en enero y febrero del 2019. Pero se produjo algo terriblemente incómodo para ella que fue que Ricardo no sólo la iba a dejar. Él entraba a su oficina, que estaba para adelante donde se atendía el público. Ella tenía un computador y un ventanal muy grande hasta la puerta y él se sentaba todo el rato ahí con su celular y tomaba café como si fuese uno más de la Fiscalía. Ella trataba de explicarle que eso no era regular y que se fuera, pero cada vez que se lo pedía quedaba la tremenda discusión. Si no era en ese momento, era a la hora de almuerzo



o en la tarde. Hasta que un día él se puso violento en la oficina. Él tenía la intuición de que ella lo engañaba con una auxiliar de la Fiscalía. En ese tiempo ella pesaba como 100 kilos, cojeaba, estaba enferma, le preguntó a él cómo podía dudar. Él empezó a tironearla dentro de la Fiscalía. Le dijo que parecía una vaca, que quién la iba a pescar. Cuando la tironeó, tomó ella el hilito de las persianas para que se bajaran. Cuando él se dio cuenta de que hacía un escándalo, se fue. Esas escenas se empezaron a repetir hasta que el segundo semestre del 2019 le dijo que esto se acabó, que no quería denunciarlo de nuevo. Cuando se casó no sabía que él tenía condenas.

Como en octubre él dijo que estaba aburrido de esta situación y se iba, pero para no llegar de repente a su casa iba a hablar con su mamá. Ella le pasó el jeep, él habló con la mamá que le dijo perfecto, que volviera. En ese trayecto, la tía Teresa, que era la mamá de él, le mandaba audios en que le decía cúdate de Ricardo que no es buena persona, le mandaba audios a él en que le pedía no pelear con ella, que lo cuidaba y lo mantenía mientras buscaba trabajo, lo que nunca hizo. Después la mamá le dijo que esperara un mes porque iba a conseguirle trabajo en una línea de taxis para que luego volviera a trabajar. Él le exigió como condición para irse que le pasara \$500.000 para comprar un documento para sacar la licencia profesional. Le preguntó cómo si para eso tiene que dar pruebas psicológicas y manuales y él respondió que había un tipo que lo hacía más rápido y le prestaría el camión. Terminó comprándole en \$500.000 ese documento para que se pudiera ir. Ahí llegamos a noviembre y diciembre del año 2019.

Dentro de todo ello y las peleas que se suscitaban, hay fotografías en que ella estaba toda moreteada, en la cara, un combo, no podía moverse. Una vez su mamá le dijo a él que se tenía que ir de la casa y él le dijo “care palo” que se iba pero ella le tenía que dar \$4.000.000 para llegar a Rengo con algo en las manos. Su mamá le dijo que lo podía hacer, pero le pagó más de \$1.000.000 de pensiones de su hija. Lo ha mantenido todo este tiempo, ella le pagaba un departamento que la hermana arrendó en Viña del Mar para estudiar derecho, de lo que hay prueba que se aportará, ayudaba a la mamá todos los meses. Como él tenía su cuenta congelada, empezó y ella le cortó lo de darle plata para salir a sus carretes y no volver porque la perjudicaba con el vehículo. Él empezó a pedir plata prestada a personas que llegaban a su casa a cobrarle cuando él no estaba. Empezó entonces todos los meses



a abonarle a Rodrigo Tapia, a Miguel, a muchos a los que debía 50 a uno, 100 a otro, todas deudas de Ricardo, nunca de ella.

Jamás ha tenido mala situación económica. Ella llevaba 15 años en el Ministerio Público cuando se encontró con este sujeto. El vecino del frente se daba cuenta de todo. Llamó a Carabineros una vez tratando de defenderla. La mamá la llamaba para preguntarle si estaba bien. Al final terminó apropiándose de todo.

En ese tiempo se metió a una página de permutas para salir de la rutina porque ella no podía salir porque no podía conducir su vehículo y no tenía sus tarjetas casi nunca. Conoció a Paulina Cisternas. Permutaron una vez y se hicieron como amigas y empezó a frecuentar la casa más seguido. Cuando llevaban una amistad de cuatro meses, le contó que vio algo terrible, que cuando ella estaba en otra parte de la casa, Ricardo le sacó dos tarjetas de la billetera, plata y salió. Fue a revisar y no tenía ni la cuenta RUT ni la de la cuenta corriente. Le faltaba la tarjeta de coordenadas además y la plata en efectivo tampoco estaba. Empezó a llamarlo, le cortaba y después le apagó el teléfono. Le dijo ella que además se notaba que a su hijo él lo trataba mal, lo humillaba.

Sobre problemas de dinero, nunca los tuvo. Hay una prueba documental por un depósito de más de 8 millones que le hicieron en marzo del 2020 y él dice que en esa fecha ella tenía problemas económicos. Eso dice él en su declaración. Él le exigió, bajo amenaza de muerte, que le comprara un vehículo para movilizarse porque no se pudo ir porque entraron en pandemia. Que le comprara una moto y que después de la pandemia ella viese que hacía con la moto, pero le debía comprar algo porque estaban casados. Después él declaró que él le usaba sus tarjetas, pero sus tarjetas estaban congeladas desde julio del año 2019 y no tenía un peso, no tenía dónde caerse muerto.

Ellos, en febrero del 2019, no se hablaban y no dormían juntos. Conoció por Facebook al testigo Jonathan Rebolledo Durán, sobre el que hay pruebas materiales, documentales, videos. Tenían una relación de amistad. Se conocieron el 28 de marzo del 2019 personalmente y siguieron hablando sólo por medios sociales porque como era pandemia, ella era súper “cuática” en ese sentido, no salía.

Siempre tuvo con la familia de Ricardo una buena relación. La hermana viajó dos veces a Linares. Se presentará a declarar en juicio para hablar de su relación cuando ella los vio compartir dos o tres veces en los años que estuvieron juntos. Ella no sabe nada de lo que ella vivió. Sabe sólo lo que Vega le pudo contar



en una de sus escapadas a Rengo. Ella se llevaba bien con todos en su familia, pero al único que no conocía bien era justamente al denunciante, Nelson Vega. Después Joel García, su amigo receptor, le contó que entre los dos tenían una apuesta de cuál la conocía y engrupía primero. Resulta que nunca conoció a Nelson sino que a Ricardo.

A Ricardo le pagó millonadas de pesos que él debía. Finalmente le compró la moto. Le dijo que la usara para las compras y las cosas mínimas y cuando se fuera al terminar la pandemia, que él le dejara todo. Él dijo que sí y empezó a salir en la moto. Ya pasado el 2019 en que él iba a la oficina a verla trabajar todos los días.

Dos veces Ricardo hizo cosas de informática que le llamaron la atención. Le preguntó cómo hizo eso. Él le empezó a explicar que cuando se borraban archivos se borraban por capas y que lo dejara de huevón no más porque todos se burlan de él porque no tenía cuarto medio. Le preguntó dónde estaban los documentos que se le borraron. Le mostró que si cerraba acá salía esto, apretó un botón y salieron todos los archivos que ella había perdido. Le pidió le enseñara. Después le pidió lo mismo con un set de fotos de sus hijos que almacenaba en un disco duro externo y él le dijo que eso era otra cosa, que eran archivos gif, jpg y otros, que hay que poner un asterisco y le pidió el computador dos horas. Él tomó el computador, se encerró en la pieza matrimonial y le pasó todas las fotos recuperadas. Una vez su hijo quería instalar un juego súper complicado y publicó que necesitaba un informático. Él tomó el computador, bajó no sabe qué y lo hizo al tiro. Mostraba destreza. Él le había contado que en el tiempo en que estuvo en Rengo trabajó en una empresa agrícola y trabajó en computación, pero le pagaban una “cagá”, no tenía salud ni previsión y la mamá de su hija lo tenía chato porque no había podido pagar las pensiones y terminó renunciando. Ahí trabajó de manera informal. Trataron de averiguar dónde, pero no pudieron. Tenía esos conocimientos previos. Paulina Cisternas lo vio a él ingresar a páginas de la Fiscalía. Ella le dijo un día que cuando ella salió en el nuevo jeep que tuvo que cambiar porque él la obligó y por uno que no estaba inscrito y tenía que regularizar con la señora que también es testigo de esta causa, de apellido Aldai. La obligó a cambiar el auto por uno que ni siquiera estaba regularizado. Se lo cambió solo dos veces, por un jeep rojo y uno blanco que le sustrajo. También le robó la moto. Hay dos querellas a presentarse prontamente por apropiación indebida porque ella ya notificó hace más de dos años el cese de convivencia y él no quiere darle el divorcio no sabe por qué.



Sobre el contacto con Nelson Vega, entre marzo y abril llamó la mamá de Ricardo y le dijo que su hermano salió del centro de rehabilitación de drogas, no quiso terminar la terapia y está con depresión y necesita contención. Ricardo lo dejó así. Después Nelson lo llamó. Ellos no se llevaban bien de lo poco que lo había visto, se trataban a garabatos y peleaban siempre. Le dijo que su hermano estaba con depresión y si se podía quedar en la casa y ella le dijo que no, que lo había visto dos veces, era drogadicto y con hijos menores en la casa. Él le puso el dedo en el pecho y le dijo que más le valía que su hermano lo fuera a ver porque esa casa es de él y ella porque se casaron y que si no quería que sufrieran sus hijos las consecuencias, debía dejar que su hermano se fuera a quedar. Esa fue la primera vez que Nelson fue a su casa, como en abril. Se quedó tres o cuatro días. Con Ricardo todo mal hacía más de un año y Nelson era un desconocido para ella.

El allanamiento se produce porque Nelson volvió y conoció a una niña y empezó una relación paralela en Linares con Valesca, que también es testigo. Estuvo cinco días más en la casa, se fue, hicieron un aseo y al otro día sintió tensión entre ellos y Ricardo le dijo que volvió a las drogas y se quería ir y se fue. Después supieron que se había ido a vivir con Valesca.

El 3 de agosto, lunes, el martes tenía audiencias que preparaba, ella en el living. Estaba la misma secuencia, estaba la mesa de vidrio, él sentado y ella tenía una mesa a la que él miraba todo lo que ella hacía desde que entró ella en pandemia. Él le decía que éste era el SIGE, el SAF, el SAO, que se peinaba con eso, como que quería suplir su inferioridad de no tener 4° medio diciéndole que tenía más conocimiento que los fiscales y los abogados, siempre palabras peyorativas sobre los titulados en general. Llegó él corriendo desde la pieza que da al antejardín donde ella trabajaba preparando las minutas y dijo que había cuatro funcionarios de la Policía de Investigaciones en la reja. Él estaba completamente descolocado. Le dijo qué tenía de malo y que lo más probable era que fuese por sus pensiones impagas. Le dijo que saliera y preguntara qué necesitaban. Él le preguntó y si vienen por otra cosa. Ella le preguntó por qué otra cosa podían venir.

Días atrás la había llamado el hermano, después de ese asado, y le dijo que Ricardo le contó en el asado que él se metía en los sistemas y hacían cosas truchas o turbias con licencias de conducir y le preguntó si le había contado a lo que se dedicaba, que le era infiel con la galla de las flores y que se metía a los sistemas cuando ella no estaba en la casa. Ella se puso a llorar y gritar y estaba la señora



Valero haciendo el aseo, que dijo que se iba. Le preguntó a él y le dijo que no le creyera, que Nelson volvió a las drogas. Eso fue poco antes del allanamiento.

Entró la Policía de Investigaciones a la casa, ella súper tranquila, en un sillón con manillas y les dijo que pasaran. Dijeron que estaban con una orden de entrada y registro del Juzgado de Garantía de Linares por el delito de cohecho. Ella quedó sin alma, se le nubló la vista y no podía reaccionar. A Ricardo sólo lo veía tratando de marcar números. Ella no pudo escuchar. Preguntó contra quién y le dijeron que no le podían dar esa información y que se comunicara con el fiscal Caroca de San Javier, al que ella ubicaba. Se llevaron el computador de su hijo con juegos, su computador institucional que siempre lo usaba Ricardo cuando iba sola a ver a sus papá con sus hijos, que era las veces contadas en que él la dejaba tomar su auto. Les pidieron el celular y ella entregó al tiro el suyo. Ofreció su clave y el Policía de Investigaciones Luis Gutiérrez le dijo que no era necesario porque el LACRIM Central tiene los medios para desbloquear cualquier teléfono. Quiso firmar al tiro el alzamiento bancario y otro Policía de Investigaciones dijo a Gutiérrez que no, porque eso no lo requirió el fiscal Caroca. No firmó y después se abrió otra causa donde hicieron todo un delito de fraude para alzarlo. Ella siempre ha querido colaborar. No sabía qué pasaba. Delante de los policías de Investigaciones preguntó a Ricardo si sabía algo de eso y respondió que no sabía nada.

Quedó incomunicada. Como pudo se contactó con los abogados Huber Hidalgo y Víctor Venegas cree, que habían renunciado a la Defensoría el viernes anterior. Les preguntó qué hacer y le dijeron que se juntaran en su oficina al otro día. Dijo que sí y que iría con Ricardo para contarles los dos. Cuando se dio cuenta de lo que pasaba en su casa estaba toda su casa desordenada. Le pidió a Ricardo que la acompañara para explicarles con más facilidad. Él dijo que no iba a ir. Le preguntó por qué y eso la hizo dudar más de que algo pasaba. Fue sola, les contó a Huber y Víctor lo pasado y el contexto y ellos le dijeron que necesitaban hablar con su marido. Ella les dijo que trataría de decirle que fuera. Volvió a la casa y le pidió a Ricardo que fuera a hablar con ellos, que el cohecho era un delito súper grave y ella no sabía respecto de quién. Él dijo que no sabía qué pasaba, pero con cara máxima de mentira, y que quería ir a hablar con los abogados porque si pasaba algo quería participar como testigo y después irse. Él le dijo que si ella la acompañaba o llegaba a la mitad de la entrevista, él se iba de la oficina de los abogados.



Finalmente el 5 de agosto del 2020 Ricardo fue a la oficina de los abogados. Ella lo esperaba a la vuelta en la casa y al llegar, lo vio desencajado y él se puso a llorar, se tiró al suelo y le empezó a pedir perdón. Le preguntó que lo perdonara de qué. Le respondió que dejó la “cagá” y le confesó que él, mientras ella no estaba en la casa y cuando lo veía en el computador, pudo tener acceso a los sistemas de la Fiscalía que le nombró, al SAF, SIGE y SAO, lo que le costó mucho, que el 2019 no la iba a ver por celos a la oficina, que no iba a perder un año entero con una coja de mierda, que estuvo siempre ahí para verla trabajar. Ahí se dio cuenta de que su maldad se venía “craneando” de años anteriores. Ella no podía respirar. Él le dijo que ella tenía un legajo de causas, que también está incorporado como prueba, y que ahí había muchos delitos y que él conocía muchos delitos porque él ha cometido muchos delitos. Extrañamente para ella, le causó siempre dudas que su hoja SAO se actualizó pero la de él nunca se actualizó, por lo que no pudo tener acceso a los delitos de él en el pasado, sólo lo que le contaba él, que le pegó a la ex, que lo pillaron en un robo, lo que le contó cuando ya estaban casados. Le preguntó y le dijo que era súper fácil y que se metió al legajo de conducciones en estado de ebriedad, eligió unos nombres, se metió al SAF, sacó datos de los tipos y los anotó en un papel y después salió en moto para contactarlos para ofrecerles plata por borrarles las causas. Ella le respondió que eso de borrar las causas no existe. Él quizás pudo aprender a utilizarlos pero ella tiene muy claro que lo que se hace en SAF se actualiza automáticamente, pero eso no tiene reflejo en SIGE. Tendría que ser muy tonta para hacer una recalificación sabiendo que el SAF tiene que ir acorde al SIGE. Eso él no lo sabía y ahí le confesó que se había juntado con un tipo y nada más. Hasta ahí sabía lo que había hecho pero no sabía si era uno o más. Le dijo a él que se fuera de la casa y ese día se fue él para siempre.

Después, con el tiempo, ella pasó a sumario, mandó a sus hijos a Talca. Se trató de defender. Pudo renunciar pero no quiso porque ella no era culpable. Presentó apelación con otro recurso en subsidio, hasta la última instancia, por dichos del sumariante que concluyó que no era creíble la declaración. Decía ella cómo era posible, tenía las mejores notas, intachables, trabajó en Rancagua, subrogaba a todos los Fiscales de Rengo y Linares. Le dijo que le revisaron todas las causas en que subrogó y nada irregular detectaron excepto cuando empezó el período de pandemia y eso era terrible porque su marido estaba involucrado. Lo citaron una vez, fue a declarar y declaró la verdad, habló de cómo a tres imputados de manejo en estado de



ebriedad contactó. Declaró escuetamente que él lo hizo todo solo, que ella no tenía idea, que ella no se dio cuenta de nada.

Él se fue de la casa y después él se enteró de que ella hablaba por teléfono con Jonathan el 27 de septiembre y cuando se enteró, él entró a su casa, la escuchó hablando con él, le tomó su teléfono nuevo después de que le incautaron el suyo, le pegó en la cara con el teléfono reiteradamente, le dejó toda moreteada la cara, empezó a quebrar cosas de vidrio, todo delante de sus hijos en la casa, su hija mayor le preguntó hasta cuándo soportaba a este tipo. Le dijo que este gallo le hizo algo terrible, algo con su trabajo que le ha costado tanto, que le costó tanto terminar el magíster. Ahí se acordó de sus amenazas, decía que ella lo había obligado a irse a Linares con ella y a renunciar a su línea de taxis y por eso él la tenía que dejar en la peor situación y ojalá que sus papás se murieran y que ella quedara presa y sin trabajo. Nunca pensó que esas amenazas las iba a poder concretar. Aprovechó la pandemia para eso.

Sobre el tema de los sistemas de la Fiscalía, en el SAF se ingresa la clave y la clave no se cae jamás. Entonces su clave siempre queda ingresada. Se metía el RUC y se desplegaba la causa con un menú donde sale hecho delictual, delito, imputado. Para una persona del conocimiento que tenía Ricardo, era súper fácil. El SAF es lo más fácil. Kareem Torres declara en ese sentido. Él declaró en el sumario y dijo que hizo recalificaciones, cambio fechas, cambió delitos, los sacó de un legajo que ella tenía ahí y eligió los delitos que él más conocía, que eran amenazas, hurtos, lesiones cree. Pero cuando supo de su relación con Jonathan, dejó la embarrada y empezó a cambiar todo el cuento y a mandarle audios diciendo que la iba a involucrar en los delitos, que iba a dejarle la cagada en la vida, que ella lo había engañado cuando no eran nada, eran dos personas ajenas viviendo bajo el mismo techo mientras se acababa la pandemia. Los audios los empezó a recopilar en su celular desde el 10 de agosto al 27 de septiembre cuando él le quebró el teléfono. Esa vez perdió la mayoría de la información. Sin embargo, tuvo la corazonada de mandar un pantallazo por Whatsapp en que él le hablaba cosas atroces en el sentido de reconocer los hechos, de involucrar al fiscal Caroca, que le ofrecía por involucrarla en la causa, al que llamaba “Caroquita”, que había comenzado a trabajar en la línea Achibueno, que una noche lo llamaron por teléfono, eso está todo con prueba, para ir a buscar a una persona que estaba en un carrete. Le dijo en el Whatsapp y Huber y Víctor insistían en que no lo bloqueara. Así que seguía



recibiendo la información y los audios. Dijo que salió de la casa Luis Gutiérrez, “raja de curado”, al que metió como pudo al taxi y se le quedó la tarjeta de la Policía de Investigaciones en el taxi. Empezó a involucrar a la Policía de Investigaciones, que Luis Gutiérrez era su amigo, que lo querían ayudar, que si no la involucraba a ella a él le iba a salir más caro, que el fiscal le hacía ofrecimientos, que el fiscal le dijo que el sumario no tenía nada que ver con la causa penal pero después se determinó en el Juzgado de Garantía que todo el sumario valía en la causa penal. Le respondió que no conocía al fiscal Caroca y que no creía que se prestara para que un tipo como él hiciera esto para limpiar el nombre de la Fiscalía porque él vulneró el sistema y ella quedó como está porque ella es la funcionaria pública. De eso hay muchos Whatsapp que lo respaldan.

Después le empezó a mandar audios en que hablaba como si ella estuvo involucrada desde el comienzo. Le habló de un viejo de Longaví, con lo que empezó a intuir que los tipos que contactó no fueron sólo los que nombró en el sumario. Le preguntó si se acordaba de un tipo extranjero, como si ella supiese toda la información, prefabricando prueba. Incluso en un audio y en un Whatsapp él dice que le manda estos audios porque los va a escuchar “Caroquita” cuando él vaya a declarar y mostraría todo esto como si fuera cierto. Después le mandaba Whatsapp preguntándole si le gustaban los audios que le mandó hoy, que hasta buen actor pudo ser sin 4° medio.

Le quebró el teléfono, ella no podía seguir comprando teléfonos porque él saltaba la reja. Al arrancar se tiraba a canales de regadío y Carabineros nunca lo pudo detener en flagrancia. Cuando ya se iba entre enero y febrero porque ya le habían dado la sanción de remoción, tenía unos baúles para llevarse sus libros y cosas y este tipo volvió a saltar la reja por donde no daba la cámara de seguridad y le volvió a quebrar el teléfono, que era de su hermana. Pero a principios de octubre se consiguió ese teléfono y todos esos audios se los reenvió a Jonathan Rebolledo para asegurarse.

Pasó el tiempo, ella se fue a Talca, llegó a Talca entre febrero o marzo de 2021. Su Defensa no hacía nada por ella. Tuvo que cambiar cuatro defensas. Le decían no ha lugar. Les mandaban una copia y faltaban declaraciones, su abogado le pedía investigar. En definitiva no lograban nada porque el fiscal les ocultaba la carpeta hasta que llegó la Policía de Investigaciones a su casa con una orden de detención por el delito de cohecho, falsificación. Para ella era impresionante si él



mismo dijo que él firmó las cartas, que las imprimió en un ciber de la calle Lautaro de Linares, que él las entregó y ahora la llegaban a detener a ella y la formalizaron por todos esos delitos y su Defensa inoperante dijo que, como le iban a pedir pp, se allanara a un arresto domicilio total. Le preguntó a Huber por qué se iba a allanar si no hizo nada. Huber le respondió que era lo que le convenía. Vio que sus abogados llegaron sin la carpeta de la investigación a la audiencia. Ellos no tenían idea de nada de nada. Lo que se argumentó en esa audiencia y se argumentó para pedir la pp de Ricardo y que ella se allanara a la cautelar, ellos recién se enteraban, no habían hecho ningún trabajo jurídico ni técnico durante todo el tiempo que estuvo con ellos. Sin embargo, ellos sabían todo lo que Ricardo hizo. Al escuchar los audios se asustaron, después el fiscal empezó a investigar a uno, también se asustó, quisieron retirarse de la causa, les dio miedo. Al final todo era oculto. Después tomó otra Defensa y tampoco les querían dar la información. Cuando el tema reventó, ella ya había leído las declaraciones de Ricardo, todas contradictorias. Incluso la involucró en que ella recibió dinero de un imputado, que él llamó a Claudia y le dijo que fuera al supermercado porque iba a ir este tipo a entregarle plata y se juntaron ahí y le entregó el dinero a Claudia. El fiscal le tomó la declaración al imputado y dijo que no conocía a esta persona ni de nombre, que le transfirió la plata a su polola y ella dijo que este tipo llegó en una moto, ella sacó la plata de su pololo, el imputado por manejo, y se la entregó a él, un tipo gordo, negro bajo, y que no conocía a Claudia del Pino. Después le tomaron otra declaración donde dijo que quería decir que mintió en la declaración pasada o quería aclarar algo y que en realidad Claudia no recibió esa plata y que parece se equivocó. Todo era una secuencia acomodaticia de declaración contradictorias.

Ese día estaba ella citada a un horario y media hora antes Jonathan Rebolledo. Él tenía todas las pruebas. La intención de él era aportar las conversaciones de Whatsapp para que el fiscal se enterara de lo que Ricardo hablaba de él, que lo metía en delitos de corrupción, y le iba a entregar más de 150 audios. La declaración empezó como a las 3:00, él entró solo y ella estaba afuera con su abogado Huber. Después él salió y ni la miró. Después supo que el fiscal lo humilló, lo trató con garabatos, de amenazarlo por formalizarlo por obstrucción a la investigación siendo que él iba voluntariamente a aportar estas pruebas. Le dijo que le incautaron el celular y que el fiscal no lo dejó mandarle nada. Pero se dijo que no importaba porque al recuperar el celular, estarían las pruebas ahí. Él pidió como



cinco veces la devolución y finalmente este año se lo devolvieron y cuando entró a su celular a ver, le habían sacado de la matriz del Whatsapp la aplicación donde se almacenan los audios y se habían reenviado a la casilla personal Gmail del fiscal Caroca más de 150 audios y se borraron. Todos los pantallazos y fotos borradas y los dos correos que el fiscal ofrece del 30 de junio estaban borrados, pero no se dio cuenta de que los dejó en la papelera de reciclaje y pudieron recuperarlos para saber de qué se trataba lo que ofrecía. Pero se quedaron sin ningún audio donde Ricardo hablaba del fiscal, de Luis Gutiérrez, de los ofrecimientos que le hacía, que le iba a salir barata, que iba a salir con pena cumplida pero que ella tenía que caer porque si no, no se iba a limpiar la imagen del Ministerio Público, y él decía que no lo querían agarrar a él sino que a ella.

Al Ministerio Público contestó que se casó con Ricardo el 27 de abril del año 2018. Esa relación comenzó en diciembre del 2017. En ese período sufrió violencia, desde el segundo semestre del 2018, violencia física y psicológica, pero en el primer semestre a él ya le daban ataques de ira cuando no le daba dinero. Desde ese período, en que estaba en rehabilitación por la columna, la primera denuncia en contra de él fue el 27 de septiembre del 2020 en la tarde, una en la Policía de Investigaciones, por hechos de la mañana, y en la noche llegó Carabineros a su casa porque una persona comunicó que la agredían en su domicilio y le tomaron la denuncia en el carro policial, como a las 10:00 pm. Ni el 2018 o 2019 ni el primer semestre del 2020 lo denunció. A esa fecha del 2020 la Policía de Investigaciones ya había allanado su domicilio. La denuncia es posterior, el allanamiento en agosto y las denuncias en septiembre. En esas denuncias, Carabineros le dijo que debía saber lo que pesaba una denuncia por violencia física y amenazas, pero ella no quiso denunciar por vergüenza porque sería la tercera denuncia por violencia intrafamiliar que tenía y porque era pandemia y estaba sola con sus dos hijos chicos en la casa y para ir al hospital de Linares, prefirió quedarse con la denuncia por amenazas. Propuso ir a un aclínica privada y le dijeron que no.

Ricardo tenía muchos conocimientos computacionales. No tenía cursos, trabajó muchos años en una empresa agrícola en Rengo, él le contó, estaba a cargo del área informática. Cree estuvo 3 o 4 años ahí y se retiró porque le pagaban una cagada dijo y no tenía salud ni previsión. Sobre si dijo eso en su primera declaración en el sumario, no, no se lo preguntaron. Cuando declaró en el sumario no sabía qué pasaba, ni lo que Ricardo hizo porque ella declaró primero que él. Sólo sabía que



habían allanado su domicilio por un delito de cohecho. Eso no lo dijo en el sumario y cree tampoco en la causa penal porque ud. (el fiscal que le formulaba las preguntas) le pidió un pendrive y si tenía un dispositivo con su declaración, ud. la copió y no le hizo ninguna pregunta.

Sobre si lo que declaró en el sumario fue como el 5 de octubre del 2020, puede ser, porque la de Ricardo fue en noviembre. No recuerda si ya posterior al allanamiento y la denuncia de amenazas. Sabe que declaró el 1 de julio en la causa penal. No recuerda la fecha de la declaración del sumario.

Sobre si indicó a Mauricio Jorquera, quien le tomó esa declaración, que era imposible que Ricardo haya sabido cómo funcionaban los sistemas de la Fiscalía, respondió que no, ahí hubo un error de tipeo de él porque claramente le dijo que sí era muy posible que él tuviera conocimiento y él anotó ahí que no era posible. Sabe que faltó una palabra y se recuerda que está en la segunda hoja, primer párrafo, en que dijo esto no lo dije yo, debe haber sido un error de tipeo. Está escrito así pero mal, falta una palabra. En vez de decir no, hay un espacio. Eso está firmado por ella. No leyó esa declaración cuando la firmó. Iba preparada para otra cosa y se enfocó a recordar otras causas sobre las que le preguntaron. Ella quería dar mucha más información y no se le permitió. Dijo que desconocía cualquier actividad irregular de su marido, ella desconocía a esa fecha lo que pasaba. El 2022 se enteró de más cosas por los audios que le mandaba.

Sobre su declaración con él (el fiscal que le formulaba las preguntas), tampoco dijo que Ricardo tenía conocimientos computacionales. Ella la firmó. Ella había hecho una declaración en su casa para recordar lo más posible y rescató del primer quiebre del celular un audio que lo aportó, en que Ricardo decía claramente que se mandó todas las cagadas y que iba a decir la verdad. Eso que escribió, antes lo envió a Jonathan Rebolledo, del 27 de noviembre, le mandaba todo a Jonathan Rebolledo, porque no vivía él en Linares. No sabe si ella tenía en su correo la declaración de Jonathan Rebolledo antes de declarar él, sabe que se la mandó, la declaración del sumario, y él le pidió escribir la declaración a mano, se la fue a dejar, ella la tipeó y se la devolvió, después a él no le gustó, se la reenvió y no recuerda si la complementó. Posiblemente se la pudo mandar porque le mandó hasta las copias de la investigación. Perdió todo, los 160 audios. No podía no mandar lo que llegaba a su poder a alguien. Le mandó su declaración a Jonathan Rebolledo, le mandaba todo. Escribía dos párrafos y se los mandaba y le decía que lo resguardara.



Antes de que declarara Jonathan como testigo no le había mandado lo que tenía que decir. Él vivió y escuchó cada cosa que declaró. Los percibió con sus testigos. Ya no están en una relación, la terminaron, pero quedaron como amigos e igual quiere venir y exponer lo que vivió, escuchó todo, cuando le pegaron, cuando le quebraron el celular. No recuerda si le envió ella una declaración por mail, en Word, donde él resumía lo que iba a decir. Él escribió su declaración a mano porque no tenía computador y se la fue a dejar a su casa para que ella se la transcribiera y ahí quedaron porque él le dijo que no le había gustado la declaración porque tenía muy poco contenido y quería agregarle más cosas. No recuerda si ella se la mandó por mail. Sí sabe que le mandó la declaración del sumario y todo lo que recordaba le había pasado a ella se lo mandaba, copia de causas se la mandaba, declaración de testigos, se lo mandaba todo.

Señaló que Ricardo, con sus conocimientos, no aprendió a usar todos los sistemas de la Fiscalía. Fue a su oficina todo el 2019 y todos lo saludaban como un funcionario más de la Fiscalía y él con solo manejar SAF podía sacar la información. En SAF se anota el RUC y la causa se despliega, se aprieta una pestaña y sale el hecho y si se borra automáticamente se actualiza. Él tiene que haber aprendido a usar SAF, SIGE y SAO. Al menos el SAF, no sabe en qué medida. Ese es el sistema de apoyo a Fiscales, donde sale toda la información de los imputados, el delito, se cambia, se recalifica. Ella siempre tenía su clave personal puesta. Ella nunca transfirió su clave, menos a las personas de la Fiscalía porque ella solamente tenía claves de otras personas cuando subrogaba, a Fiscales, jamás tuvo clave de un abogado asistente. También tenía clave de SIGE, suya, su propia clave. Sobre el SAO para ver los antecedentes de las personas, era una clave que usaba la Fiscalía completa, era un número. Sí era con su usuario.

En la Fiscalía llevaba 15 años cuando fue removida.

Ricardo Vega pasó a su oficina y tuvieron estas escenas de violencia en su oficina todo el 2019, partiendo de marzo, porque subrogó enero, febrero y la mitad de marzo del 2019 a todos los Fiscales porque nadie más quería subrogar. Ella le decía que no correspondía que estuviera ahí y que se fuera. Cuando le decía que se fuera tipo 11:00 am peleaban porque él decía que ella lo engañaba con alguien de la Fiscalía.

Sobre los hechos que se le imputan, todos ocurrieron en el período de pandemia. En la conversación con Mauricio Jorquera le dijo que se había demorado



mucho el sumario porque revisaron todas las causas de los Fiscales que subrogó el 2018 y 2019 y lo del 2020 y hasta el día anterior a que ella entrara en pandemia, todo fue regular, y dentro de las 1.100 causas que ella tenía asignadas, encontraron nueve, que son las de obstrucción a la investigación, en que obviamente cometió errores, por ejemplo, archivar una causa ya judicializada en que no hay perjuicio, algunas causas terminaron en suspensión condicional, en acuerdo reparatorio. En otra ella misma archivó sin querer porque ella veía mal, no sabía en ese momento porque se había operado de la vista, tenía patologías, y archivó una causa en que ella misma pidió una cautelar previa y cuando tenía el decreto y lo pasó a la víctima, pidió audiencia de formalización agregando minuta, y sabemos que cuando se comete un error administrativo, lo que ocurría a cada rato, el fiscal informaba eso, pero cuando una causa llega al Tribunal ya uno puede hacer lo que sea, archivarla, quemar la carpeta, pero la causa seguirá su curso regular. En la causa del señor Sumonte, donde se le acusa de ocultar antecedentes al Tribunal porque se requirió el simplificado por manejo en estado de ebriedad y él no tenía licencia de conducir, donde ella había evitado la agravación de la pena, eso ocurría a cada rato por un error de preclasificación y de la fiscal jefe, porque esa vez se le asignó esa causa y pensando que Linares era tan organizado como Rengo, y le pidió a un practicante que ingresara la causa y no advirtió que el tipo no había obtenido licencia de conducir y que obviamente correspondía acusación y que por tanto la fiscal Carmen Caamaño debió tener la causa en primera instancia. Esos errores están todos aportados como prueba en los correos electrónicos en que pide a Carola D'Agostini que reasignara un hurto agravado, un robo con violencia, no sabe cuántos manejos en estado de ebriedad agravados. Era regular que en la Fiscalía de Linares que se cometieran estos errores. Cuando pedía esto recibía respuestas evasivas de los Fiscales especializados. Se le pasó 1 de 1.100.

Refirió que esto pasó en pandemia y ella estaba en su casa trabajando. Esto de que Ricardo operaba los sistemas, Ricardo declaró que aprovechaba cuando ella no estaba en la casa, por ejemplo, cuando iba a ver a sus papás a Talca con los niños, cuando iba al supermercado, cuando iba a la farmacia cuando él la dejaba salir. Para ella era imposible creer que su propio marido, al que había mantenido y soportado, le hiciera algo tan espantoso.

Sus primeros abogados fueron Huber Hidalgo y Víctor Venegas. Fueron abogados siempre de ella. Los contrató para ella y cuando Ricardo se entrevistó con



ellos dijo que quería declarar como testigo. Los dos abogados fueron de ella, ambos comparecieron a audiencias. Sobre si representaron a Ricardo Vega, jamás. Sólo sabe por conversación con Huber que después de confesarles parte de lo que hizo, él iba a la oficina de estos abogados y les gritaba de afuera hasta que lo bloquearon del teléfono y le pidieron que le dijera que los dejara de molestar. En las denuncias del 27 de septiembre de 2020, denunció a Ricardo por amenazas. En esa causa recuerda que había un defensor de Cauquenes que fue a la audiencia de control de detención. No sabe si antes tuvo Defensa porque se fue de la casa el 5 de agosto. No sabe que lo defendió Huber Hidalgo, es imposible, se determinó en la preparación de juicio oral que nunca representaron a Vega. No sabe si Ricardo les propuso lo defendieran, pero las defensas eran completamente incompatibles. En la causa por amenazas no sabe si tenía defensor. Se decretó sobreseimiento definitivo derechamente. Además ella retiró la denuncia por las amenazas que él le envió para que lo hiciera.

En su casa tenía su computador personal con que trabajaba, el computador familiar, cualquiera podía ingresar cuando ella no trabajaba. En pandemia ella hacía cosas domésticas. También tenía dos impresoras. No se dio cuenta, dio la información al fiscal de la impresora que usó Vega para imprimir los documentos. Ella dio esa información en su declaración penal.

Sobre Jonathan Rebolledo Durán, cuando declaró era su pareja.

A la Defensa del acusado Vega Guerrero respondió que ella trabajaba en la Fiscalía de Linares. Ricardo Vega, el 2019, se la pasaba en la oficina casi toda la mañana cuando no tenía audiencias. Cuando sí. Él la iba a dejar y se quedaba hasta la audiencia. Él no trabajaba, salía con amigos, se escapaba en el jeep, no volvía en la noche.

Su familia eran los cuatro, sus dos hijos ella y él. Sus hijos estaban en edad escolar. Él no la dejaba llevar al colegio a sus hijos, los llevaban los dos. No la dejaba manejar su vehículo e iba de acompañante siempre. Tenía una nana, la señora Valero, y lo demás lo hacía todo ella.

Cuando Ricardo llegaba a la Fiscalía, no le dijo a su jefe que lo sacara, ella lo saludaba como a una persona más de la Fiscalía. También lo vio el auxiliar Froilán. Lo vieron no usando computadores, sí en su oficina. Paulina Cisterna sí lo vio en páginas de la Fiscalía en su casa según le contó.

A Talca iba a ver a sus papás. Trataba una vez a la semana si Ricardo la dejaba. Podía ir en la semana con día administrativo y si no, trataba de ir los fines de



semana, coordinando que estuviese su hermana. Cuando se iba, dejaba su computador encendido. Siempre lo mantenía encendido, jamás lo apagaba, sólo cerraba la pantalla.

Es abogado. Antes estudió teatro un mes, inglés un año y medio e ingeniería comercial menos de seis meses. Estuvo en un taller de teatro. No aprendió nada.

Al Tribunal aclaró que, sobre la declaración que le tomó Jorquera, cuando declaró con él le dijo que era muy posible que Ricardo supiera manejar algún sistema de la Fiscalía, pero no se anotaron las razones. No sabe si él dejó el espacio y se equivocó y no puso el no o el sí.

Sobre el SAF, arriba aparecía Cdelpino. Ingresaba la clave una vez y no salía nunca más a menos que apagara el computador. La sesión no se terminaba sola. Sobre el SIGE, cree duraba 10 o 20 minutos sin actividad la clave. El SAO igual. Además, tenía todas sus claves en un post it pegado a la orilla del computador. En cuanto a este post it, lo tenía pegado en el pc de su casa.

Analizando esta declaración de la acusada del Pino Acuña a la luz de las pruebas que posteriormente se produjeron en el juicio oral, varias incongruencias aparecen que la desvirtúan.

Así, esta acusada afirmó que el 5 de agosto del 2020 Ricardo fue a la oficina de los abogados. Ella lo esperaba a la vuelta en la casa y al llegar, lo vio desencajado y él se puso a llorar, se tiró al suelo y le empezó a pedir perdón. Le preguntó que lo perdonara de qué. Le respondió que dejó la “cagá” y le confesó que él, mientras ella no estaba en la casa y cuando lo veía en el computador, pudo tener acceso a los sistemas de la Fiscalía que le nombró, al SAF, SIGE y SAO, lo que le costó mucho, que el 2019 no la iba a ver por celos a la oficina, que no iba a perder un año entero con una coja de mierda, que estuvo siempre ahí para verla trabajar. Le preguntó y él le dijo que era súper fácil y que se metió al legajo de conducciones en estado de ebriedad, eligió unos nombres, se metió al SAF, sacó datos de los tipos y los anotó en un papel y después salió en moto para contactarlos para ofrecerles plata por borrarles las causas.

Sin embargo, a la vez manifiesta más adelante que, sobre si lo que declaró en el sumario fue como el 5 de octubre del 2020, podía ser pero no lo recordaba, y que cuando declaró en el sumario no sabía qué pasaba, ni lo que Ricardo hizo porque ella declaró primero que él. Sólo sabía que habían allanado su domicilio por un delito de cohecho.



En relación con ello, el señor Jorquera Loyola recordó que, en el sumario administrativo que instruyó, tomó declaración a Claudia del Pino, quien en lo pertinente le señaló que su marido Ricardo Vega no trabajaba y siempre estaba con ella sentado en el comedor viéndola trabajar y que no tuvo conocimiento de que Ricardo Vega haya hecho estos actos de cobrar a ciertas personas.

En el mismo sumario administrativo, que consta en la prueba llamada en el auto de apertura como “Copia Sumario administrativo FRM – IA N° 78-2020 junto a resolución FN/MP 58-2021 del fiscal nacional mediante la cual se confirma la sanción de remoción a Claudia del Pino Acuña” se lee, en su foja 93, un documento llamado “Declaración” en que se consigna que en Talca, el 5 de octubre del año 2020, compareció Claudia del Pino Acuña y declaró, siempre en lo atinente, que “nunca he sabido de algún actuar irregular por parte de mi marido, sólo ahora me entero”, que “él siempre me ha dicho que no ocultaba nada y que no había hecho nada”, “que él sabía lo que era SAF y SIGE pero desconozco si sabía utilizarlos, pero él siempre se sentaba atrás mío y me veía trabajar” y que “desconozco cualquier actividad irregular de mi marido”.

Engarzando esos datos, resulta que por un lado la acusada del Pino Acuña afirma ante estrados que el 5 de agosto del 2020 recién se enteró, por boca de su marido Ricardo Vega Guerrero, de que éste pudo acceder a los sistemas de la Fiscalía SAF, SIGE y SAO, que era súper fácil para él y que se metió al legajo de conducciones en estado de ebriedad, eligió unos nombres, se metió al SAF, sacó datos de los tipos, los anotó en un papel y después salió en moto para contactarlos para ofrecerles plata por borrarles las causas. Pero también resulta que dos meses después declaró en un sumario administrativo que su marido siempre le ha dicho que nada ocultaba y que nada había hecho y que ella desconocía cualquier actividad irregular de su marido. Se trata así de una contradicción sustantiva y diametral que por lo mismo afecta la fiabilidad de los dichos de esta encartada.

Por otro lado, resulta patente que en su declaración Pino Acuña en definitiva sostuvo que Vega Guerrero aprendió a usar la plataforma SAF en buen medida porque la acompañó en numerosas oportunidades a su oficina en la Fiscalía de Linares, donde la observó trabajar. Así, manifestó que en marzo del 2019 volvió al trabajo administrativo después de subrogar en audiencias todos los días en enero y febrero del 2019, pero se produjo algo terriblemente incómodo para ella que fue que Ricardo no sólo la iba a dejar, él entraba a su oficina, donde ella tenía un



computador y él se sentaba todo el rato ahí con su celular y tomaba café como si fuese uno más de la Fiscalía. Ricardo Vega pasó a su oficina todo el 2019, partiendo de marzo. Ricardo Vega, el 2019, se la pasaba en la oficina casi toda la mañana cuando no tenía audiencias. También planteó que el 5 de agosto del 2020 Ricardo, tras ir a la oficina de los abogados, le confesó que pudo tener acceso a los sistemas de la Fiscalía que le nombró, al SAF, SIGE y SAO, y que el 2019 no la iba a ver por celos a la oficina, que no iba a perder un año entero con una coja de mierda, que estuvo siempre ahí para verla trabajar.

Sin embargo, fueron múltiples las probanzas que desmintieron que el acusado Vega Guerrero haya ingresado a la oficina de del Pino Acuña en la Fiscalía de Linares.

En efecto, la fiscal jefe de la Fiscalía de Linares manifestó que Claudia del Pino, en ese período de enero o febrero de 2019, estaba en la segunda oficina del primer piso. Ella estaba en el segundo piso. En las mañanas, al llegar, saluda a la gente, abre puertas y veía a Claudia habitualmente. Después supo que estaba casada. Sí recuerda haber visto que su hija la acompañara, es bastante habitual eso porque los deban pasar a buscar a la salida del trabajo. Recuerda a la pareja de Claudia, pero no sabía si era casada o no, quien la iba a dejar o a buscar a la Fiscalía, lo que vio porque su oficina da al estacionamiento de la Fiscalía y ve quién entra y sale. Veía entrar y salir un jeep que al comienzo no sabía de quién era, se asomó a mirar y se dio cuenta de que iban a dejar a Claudia del Pino. Eso lo vio varias veces, era ir a dejarla y el vehículo se iba de inmediato, no recuerda que se estacionara. Dentro de las oficinas nunca vio a la pareja de Claudia del Pino. De hecho nunca se lo presentaron, no lo conoció. Sobre si escuchó de alguien que él fuera habitualmente a la Fiscalía, no. Nelly se lo habría comentado de inmediato, les habría llamado la atención al tiro.

Nelly del Carmen Zenteno Flores, administradora de la Fiscalía de Linares, manifestó que, sobre Claudia del Pino, sabe que tenía pareja, pero desconoce su estado legal. A esa pareja la vio en el estacionamiento de la Fiscalía cuando la iba a dejar y retirar. Jamás vio a esa pareja en la Fiscalía o en la oficina de Claudia. Él venía con los niños, dejaba a Claudia y como muchas veces, comentó Claudia, él iba a dejar a los niños al colegio. Sólo al estacionamiento llegaba. Nunca vio al marido de Claudia bajar del vehículo. Tampoco entraba al interior porque ella siempre hace



eso de bajar a las oficinas, es parte de su trabajo. Por eso lo puede afirmar, que no lo vio en la Fiscalía

Froilán Enrique Cofré Méndez refirió que trabajó en el Ministerio Público, en la Fiscalía Local de Linares, desde el 14 de junio del 2018 y trabajó allí por 5 años. A la pareja de Claudia del Pino la vio pocas veces, un simple hola y chao como se saluda a cualquier persona que entra al estacionamiento o afuera de la Fiscalía. Sólo en esos lugares lo contactó. No recuerda haber conversado con la pareja de Claudia del Pino. Al interior de las oficinas de la Fiscalía no recuerda haberlo encontrado alguna vez.

Paulina Alejandra Salazar Hernández, fiscal de la Fiscalía de Linares, señaló que entendía que Claudia estaba casada. A su esposo lo ubicaba porque Claudia, por sus problemas a la cadera, cojeaba y el marido la iba a dejar a la Fiscalía y todas las tardes la iba a buscar cuando ella se retiraba. Con él no tuvo interacción, sólo hola y chao. Dentro de la Fiscalía nunca lo vio a él, ni en la oficina de Claudia del Pino. Sobre si personas acompañan a funcionarios a trabajar, no, excepcionalmente hijos de funcionarios que esperan a los papás.

Adicionalmente, la acusada del Pino Acuña aseveró que cuando la Policía de Investigaciones allanó su casa el día 3 de agosto del año 2020, entró la policía a su casa y ella estaba súper tranquila en un sillón con manillas y les dijo que pasaran. Dijeron que estaban con una orden de entrada y registro del Juzgado de Garantía de Linares por el delito de cohecho. Ella quedó sin alma, se le nubló la vista y no podía reaccionar. Les pidieron el celular y ella entregó al tiro el suyo. Ofreció su clave y el Policía de Investigaciones Luis Gutiérrez le dijo que no era necesario porque el LACRIM Central tiene los medios para desbloquear cualquier teléfono. Ella siempre ha querido colaborar.

En relación con ello, el funcionario de la Policía de Investigaciones Cristian Eduardo Bahamondes Mardones manifestó que trabajó en la BRIDEC de Linares del 2019 hasta hace 3 días y que el 3 de agosto del 2020 se le ordenó concurrir al domicilio de Claudia del Pino para practicar una entrada y registro decretada por el Juzgado de Garantía de Linares, por la magistrado Paula Sánchez, en la que participó como testigo en la incautación de tres cuadernos Torre, cinco carpetas que tenían el diseño de la Fiscalía Regional del Maule, un computador marca Lenovo gris, un computador marca Lenovo color gris con negro, dos teléfonos celulares Samsung rosado con celeste y un set de causas vigentes a nombre de Claudia del



Pino. En esa diligencia participaron él, el comisario Gutiérrez, el comisario Ramírez y el subcomisario Castillo. Fue en la tarde. Gutiérrez es superior a él, un comisario, y él estaba a cargo de la diligencia. Cuando llegaron al domicilio estaban Claudia del Pino y Ricardo Vega. Cuando llegaron al lugar, su primera impresión fue que ellos estaban asombrados, preocupados. Sobre los elementos incautados electrónicos, computadores y teléfonos, no se aportaron las claves para ingresar a ellos. Incautaron dos notebooks y dos equipos celulares. Pidieron las claves y ambas personas se negaron a entregar las claves según acta. Eso quedó registrado. Incautó dos computadores, eran notebook arca Lenovo. Incautó el computador. No recuerda otras cosas asociadas al computador. No recuerda claves anotadas en alguna parte.

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña respondió que al incautar los equipos electrónicos, no les entregaron claves. Cuando hay entrega de claves, hay un acta. Cuando se niega la entrega, cree se coloca en el acta y se colocó. En general, al incautar un celular, se registra en el acta la incautación, y cuando se solicita la clave, también se consigna en un formulario. Sobre si en esta diligencia existe o no esa acta donde se indica que se entregó o no la clave, respondió que, por lo que recuerda, sí existe.

A la Defensa del acusado Vega Guerrero contestó que en los computadores, adheridos a ellos, no recuerda pegadas claves de acceso a los computadores. En la casa de Claudia y Ricardo, no recuerda que Claudia se cayera de la silla en que estaba sentada.

Sobre lo mismo, el Comisario de la Policía de Investigaciones Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez testificó que el 3 de agosto del 2020 se gestionó judicialmente una orden de entrada y registro al domicilio de Claudia del Pino en la villa Las Vertientes, pasaje Estero la Gloria, donde Claudia del Pino compartía con Ricardo Vega. Se gestionó y se ingresó al domicilio dando cuenta a los habitantes, que eran Ricardo Vega y Claudia del Pino, que se ejecutaba la orden de entrada, registro e incautación de documentos y equipos tecnológicos. Se entró, se registró el domicilio y dentro de las diligencias que se hicieron, se incautó un teléfono a Ricardo Vega, otro teléfono asignado a Claudia del Pino, cinco carpetas de la Fiscalía, un set con causas vigentes asignadas a del Pino y tres cuadernos con anotaciones manuscritas, más dos computadores. Se solicitó junto con la incautación el acceso a los teléfonos, que entregaran las claves o patrones, y en su momento no accedieron a la entrega porque recuerda que Claudia del Pino dijo que los teléfonos eran de Ricardo y, éste



silente, no accedió a la entrega de los patrones o del acceso al teléfono, así que sólo se incautaron. Cuando llegaron al domicilio, en ese momento estaban Vega, del Pino y dos niños hijos de del Pino. Cuando llegaron, les dieron cuenta y del Pino reaccionó alterada, que querían revisarle su bolso y se alteró en extremo, a él lo gritoneó y le hicieron ver que era una orden judicial. Frente a la presión, Ricardo entregó el teléfono pero bien silente, como que sabía qué pasaba, y del Pino muy alterada iba al baño, salía y entraba. Del Pino no se desmayó o tuvo alguna suerte de desvanecimiento. Cuando solicitó las claves de los celulares, del Pino no las facilitó, dijo que los teléfonos eran de Ricardo y ella le dijo a Ricardo que no entregara las claves. Ricardo en silencio y bien entregado a las circunstancias. Las especies incautadas fueron dos teléfonos, uno rosado que manejaba Claudia, uno celeste que manejaba Ricardo, las cinco carpetas de la Fiscalía, los dos notebooks Lenovo, uno gris con plomo y otro negro, tres cuadernos con letras manuscritas que tenían números de causa, RUC y porcentajes escritos, como las alcoholemias. Dentro de eso tenía un set con causas vigentes de Claudia y dentro de eso se dieron cuenta de una causa que termina en 88-9, cree de un señor que luego salió en la investigación, Enrique Torres, un manejo en estado de ebriedad. Claudia del Pino ordenó a Ricardo Vega que no entregara las claves. En esa situación Claudia dominaba. Se percibía que tenía don de mando sobre Ricardo. Cuando se intentó revisar su bolso personal, se destempló y empezó a gritar, sobre todo con él, y tuvo que explicarle que se trataba de una orden judicial. Cuando Claudia le habló, quiso en ese momento ejercer un grado de su estatus como abogada y que se vulneraba un derecho a la privacidad y que la incautación no implicaba sus cosas personales. Sobre el gritoneo hacia él que mencionó, no recuerda las palabras exactas, pero fue una reacción destemplada.

Para apoyar la veracidad de sus dichos, el Ministerio Público exhibió a este testigo una página de la prueba denominada en el auto de apertura como “NUE 5948278: un set de detalle causas vigentes a nombre de Claudia del Pino Acuña”, y sobre ella el señor Gutiérrez Gutiérrez refirió que es el set de causas asignadas a Claudia del Pino, de causas vigentes. Incluye arriba el RUC, la asignación, la fecha de la vigencia, la recepción, el listado y la última actividad. Llega del 1 al 1062. En el listado, en el registro 642 lee causa RUC 2000284126-7 año 2020, fecha 13 marzo 2020, conducción en estado de ebriedad estado vigente, decisiones de término y archivo provisional, Diego Vásquez. Lo inicial es manuscrito, (en la línea superior



indica) está escrito manualmente al lado de un asterisco. Ese número del listado que leyó es relevante porque está escrito manualmente y destaca dentro del listado total. Está también vinculado a una persona a la que se archivó la causa, Diego Vásquez. Están los antecedentes de la causa, el RUC y se indica al final que la causa está archivada y eso les llamó la atención. Se nota que es una mano femenina por los trazos. Eso está asignado a Claudia del Pino. Ese listado es de Claudia del Pino

No obstante no compartir este Tribunal que sea evidente que las anotaciones manuscritas puestas en dicho documento provengan de la mano de una mujer, sí podemos constatar que, como había descrito antes, se trata de un listado de causas identificadas por RUC, año, fecha, tipo de delito, estado y menciones de actuaciones procesales.

También le mostró la Fiscalía una página de la prueba singularizada en el auto de apertura como “NUE 5948279: Un cuaderno marca Torre tapa color negro”, y ante él señaló que es de un cuaderno universitario negro marca Torre, el que tenía anotaciones manuscritas. Está encabezada con “revisión correspondencia bandeja SIGE 27 de junio del 2019” y primero ve un número terminado con 537-1 y “Bastián con 1,83%” y otros datos. Otro número terminado en 860-K con una flecha y “hurto hallazgo”. Otro terminado en 181-5 con una flecha y manejo en estado de ebriedad, Ralph Veloz 1,39%. Es relevante porque aparece ahí el nombre Ralph que es una de las personas a las que se le archivó una causa por manejo en estado de ebriedad y al que Ricardo Vega dio datos para identificarlo.

Dejamos constancia que en dicha evidencia se observa que se trata de una página de un cuaderno universitario (dado el espiral característico que se ve al costado izquierdo) y que en particular contiene las anotaciones contienen las anotaciones manuscritas leídas sobre la causa cuyo RUC termina en 181-5.

Además le exhibió las pruebas llamadas en el auto de apertura como “Un celular marca Samsung A70, color celeste, el domicilio pje. Estero la gloria N°1879 Villa Las vertientes de Linares”, “Un notebook marca Lenovo color gris. Encontrado en el domicilio pje estero la gloria N°1879 Villa Las vertientes de Linares”, “Un celular marca Samsung Galaxy 80 color rosado encontrado en el domicilio pje estero la gloria N°1879 Villa Las vertientes de Linares” y “Un notebook marca Lenovo color negro, encontrado en el domicilio Pje estero la gloria N°1879 villa Las vertientes de Linares”, y al revisarlas comentó corresponden, la primera, a la NUE 5948277 del 3 de agosto del 2020 y es un teléfono Samsung



celeste, su titular es Ricardo Vega; a un notebook marca Lenovo color gris, que fue encontrado en la casa de Claudia del Pino y cuando fue incautado estaba así, no tenía nada, ningún registro, ni post it o papel; a un celular Samsung rosado Galaxy 80 que tenía Claudia del Pino; y a un notebook Lenovo plomo con base negra.

Hacemos presente que dichas evidencias son consistentes en su apariencia con lo que describió el señor Gutiérrez Gutiérrez como parte de lo incautado en la diligencia de allanamiento que relató.

Añadió que, posteriormente, en diciembre del 2021, se ejecutaron las órdenes de detención contra Claudia y Ricardo. Después hay una instrucción del Ministerio Público de solicitar a Claudia del Pino que entregue los patrones de su teléfono porque Ricardo accedió y querían contrastar la información del teléfono de ella. Fueron al domicilio y ella no accedió, indicando que no recordaba por el tiempo transcurrido el patrón. Se levantó un acta en ese momento, donde ella escribió que no recordaba por el tiempo transcurrido el patrón. Esa diligencia la hizo él mismo. No se pudo obtener información del teléfono rosado. Cuando ella declaró no entregó esa clave, ni en el allanamiento. Ella no manifestó en algún momento voluntad de hacer esto.

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña contestó que sobre la incautación de los celulares y las claves, cuando se incauta se trata de hacer lo más preciso para individualizar lo que se incauta. Sobre si cuando incautó los celulares dejó constancia de si estaban bloqueados o desbloqueados o si se entregó clave, consta en el acta cree recordar, no sabe si desbloqueado o bloqueado, y ahí debe haber una leyenda. Hay un acta de incautación de celular y otra acta de acceso al aparato, la autorización. En esta causa, respecto de esta incautación, hay otra acta que señala lo que indica.

Con ello, estima este Tribunal, queda en evidencia que la acusada del Pino Acuña, en el allanamiento que se efectuó a su domicilio, no demostró esa voluntad de declarar que aseveró ante estrados, donde incluso indicó que ofreció a la policía la clave de su teléfono celular, sobre todo dada la actitud que adoptó especialmente con el funcionario de la Policía de Investigaciones a cargo y por su negativa sostenida a desbloquear el teléfono celular que se le incautó en dicha diligencia.

Desde otra perspectiva, la Defensa de dicha encausada sostuvo, apoyándose en la declaración de la misma que acabamos de extractar y comentar, que, respecto a la acusación de violación de secreto y cohecho, se basa únicamente en las



declaraciones cambiantes del coimputado, sin que haya existido prueba alguna que corrobore los dichos de Ricardo Vega. En ese sentido puede verificar que Ricardo Vega entrega una primera declaración ante el abogado asesor Mauricio Jorquera, en la cual indica cómo accedía a la información a través del computador que tenía la clave de SAF de Claudia, que lo hacía cuando ella no se encontraba utilizando el computador, indicando también detalles de cómo contactaba a las personas a las cuales le ofrecía la movida, los precios, los datos de esos imputados, y que anotaba para poder contactarlos. Esa primera declaración entregada en el sumario es la única declaración que resultó plenamente corroborada por los testigos que declararon, por los documentos, acompañados, incluso por el Ministerio Público. Ahora cuando tratamos de entender por qué Ricardo Vega empieza a cambiar su declaración, es porque queda en evidencia que se percató de la existencia de Jonathan Rebolledo. Cambia ahí radicalmente su versión y es así como se presenta a declarar ante el fiscal de la causa, entregando antecedentes respecto a los cohechos y relatando una versión llena de detalles, entienden que con el fin de que pueda ser creíble decirle al fiscal que efectivamente quiere cooperar. En esa nueva versión entregada al fiscal habla de la participación de Claudia en los hechos.

Como puede apreciarse de lo anterior, esta Defensa plantea en suma que la imputación de cohecho dirigida en contra de su representada se funda en la declaración de Ricardo Vega Guerrero, al que no debe creérsele porque en realidad fue él quien realizó las conductas que se imputan por aquél ilícito, porque ha cambiado su declaración y porque ello se debe a que se percató de la existencia de Jonathan Rebolledo. Sobre ello estima este Tribunal que, en el décimo considerando del presente fallo, ya se consignaron los razonamientos, contruidos sobre la base de las pruebas producidas en el juicio oral, que formaron nuestra convicción, más allá de toda duda razonable, en cuanto a que lo manifestado por el acusado Vega Guerrero antes estrados, al tenor que también ya se extractó, fue suficientemente corroborado. Dado que ello está explicitado en numerosas páginas de la citada motivación, a ellas reenviamos y no las reproduciremos para evitar redundar innecesariamente.

Sin perjuicio de ello destacaremos que, sobre esa primera declaración que el acusado Vega Guerrero prestó en el sumario administrativo ante el señor Jorquera Loyola, la falta de conocimiento y de capacidad práctica que el primero demostró ante el segundo al efectuar el ejercicio práctico que éste le solicitó evidentemente



corroborar que Vega Guerrero en esa oportunidad, como afirmó en la audiencia, falsamente intentó cargar con toda la culpa en dicha sede a fin de exculpar a su cónyuge, dado que, siendo innegable, considerando lo que allí manifestó, que esa era su intención, no se explica de otra manera la total ineptitud en el manejo de los sistemas SIGE y SAF que aseveró haber constatado personalmente el señor Jorquera Loyola y de la cual dejó la debida constancia en la causa que instruía. Por otro lado, conviene comentar que todos los antecedentes, factores e indicios de corroboración que se enunciaron y desarrollaron en la citada décima motivación son cronológicamente anteriores al comienzo de la relación amorosa que surgió entre la acusada del Pino Acuña y el señor Rebolledo Durán, que éste con precisión fijó partir del 22 de agosto del año 2020 (comentando además que ese día fue la primera vez que estuvieron juntos y se dieron cuenta de que podían tener algo y que ahí cambió el estatus de su relación), después del allanamiento que la Policía de Investigaciones efectuó en la casa de la acusada del Pino Acuña.

Además, el mismo señor Rebolledo Durán comentó que en octubre del año 2020 escuchó otro episodio en que quedó en evidencia que el acusado Vega Guerrero ya tenía conocimiento de la relación afectiva que mantenía con la acusada del Pino Acuña desde agosto de ese año, ya que Vega Guerrero incluso lo insultó y amenazó telefónicamente. De haber sido entonces ese el motivo del cambio de versión que destaca esta Defensa, no se explica por qué el 20 de noviembre del año 2020, fecha en que, según consta en la prueba denominada en el auto de apertura como “Copia Sumario administrativo FRM – IA N° 78-2020 junto a resolución FN/MP 58-2021 del fiscal nacional mediante la cual se confirma la sanción de remoción a Claudia del Pino Acuña”, Vega Guerrero declaró en dicha investigación sumaria y allí en definitiva quiso convencer de que él era el único culpable de los cohechos investigados.

Luego esta Defensa planteó que, en las declaraciones que en la investigación y en la audiencia de juicio dio el acusado Vega Guerrero, éste incurrió en varias inconsistencias, procurando así menoscabar su credibilidad.

En ese sentido primero resaltó, siempre en lo medular, que Ricardo, relata, respecto a Ralph Veloz, haber llamado a Claudia y que ésta estaba justamente en el supermercado en el cual estaría Ralph y que estaba con el dinero para pagar la movida, como la denominaron, y que él le dijo que se acercara a Ralph para poder ella recibir el dinero. En evidencia quedó que este relato de la segunda declaración



ante el fiscal, donde sí estaba diciendo la verdad, no se pudo corroborar. Es más, se pudo descartar absolutamente eso por todas las declaraciones que escuchamos, principalmente por la declaración de Ralph. El principal PDI que trabajó en esta causa, Luis Gutiérrez, señaló que después de esa declaración donde dijo toda la verdad y todo lo que hizo Claudia con Ralph, volvió a declarar, señalando que lo que dijo antes no era correcto, que se había equivocado, que en realidad Claudia no había tenido contacto con Ralph.

Sobre ello, el señor Gutiérrez Gutiérrez manifestó que tomaron contacto con Ricardo Vega cree el 10 u 11 de marzo para tomarle declaración y en esa declaración aludió a un tal Ralph, quien dijo era venezolano o extranjero, dando cuenta de él. Después, por los antecedentes que Vega les aportó, pudieron dar con este señor Ralph. Sobre Ralph, Vega dijo que esta persona lo contactó, acordaron un pago de 300 o \$400.000 y esta persona le iba a pagar a Claudia, que se iban a juntar en un supermercado y cuando le confirmara estaba todo ok. A la Defensa contestó que la segunda declaración de Ricardo Vega se dio en el contexto de una solicitud de toma de muestra caligráfica y en ese contexto Vega quiso ampliar los antecedentes que entregaba a la Fiscalía. Le indicó en ese minuto a Ricardo que Ralph señaló que no era verdad lo que haya pagado o visto a Claudia y Ricardo quiso aclarar eso y le contó otra versión distinta a la primera.

Si bien acá se observa la inconsistencia relevada por esta Defensa, a la vez se aprecia que, según el comisario a cargo de la investigación, lograron llegar a Ralph Veloz Rodríguez gracias a esa primera declaración del acusado Vega Guerrero. De esa manera, efectivamente, como explicó dicho encausado ante estrados, lo lógico es que tal incongruencia se debió más bien a un error porque si hubiese querido inculpar falsamente a la acusada del Pino Acuña, derechamente no habría aportado datos que permitiesen llegar al señor Veloz Rodríguez y con eso, abrir la posibilidad de que lo desmintiese, como en definitiva ocurrió en el aspecto analizado.

También esta Defensa destacó que se pudo descartar, de la segunda declaración Vega Guerrero, que le haya hecho la movida a Richard Araya Brunett, quien negó haber tenido una causa por manejo en estado de ebriedad, negó que Ricardo le hubiese ofrecido alguna movida y además nos indicó que él ha sido comprador de la botillería, que hasta fiado compraba o con las tarjetas de Claudia,



porque incluso señaló, recordarse de la situación en que se confundió con las claves de su señora.

Al respecto, el señor Gutiérrez Gutiérrez aportó que el imputado Elías Apablaza dijo que se juntó con Ricardo y éste le señaló que a un señor de una botillería, El Roble, le había hecho la movida. Se determinó que esa persona de la botillería era Richard, quien tenía un problema en un ojo. Esa persona, cuando la entrevistaron, indicó que nunca había sido contactado para hacer un tipo de movida o ayuda con respecto al tema de la causa pero que sí conoce a Ricardo, lo ubica porque era un cliente habitual de la botillería, compraba alcohol.

Richard Lorenzo Araya Brunett fue presentado por esta Defensa a testificar y señaló que entiende está en el juicio porque tenía un local y por ahí está acá, según él le hizo documentación por alcoholemia y no se hizo. Alguien lo involucró en esta causa, Ricardo. Conoce a Ricardo, está acá, al fondo, vestido de negro (indica hacia el acusado Vega Guerrero), él lo involucró. Él tenía una botillería donde el caballero era cliente y le iba a comprar dos o tres veces a la semana. Esa botillería estaba en avenida Presidente Ibáñez 972 de Linares, se llamaba botillería El Roble. Ricardo era su cliente, como otras personas. Ricardo le compraba un champagne, Riccadonna. Normalmente eso pasaba a buscar, pasaba normalmente dos veces a la semana. Cuando iba a comprar, iba solo. Cuando le pagaba, le pagaba en dinero o con tarjeta. Era una tarjeta de él y una vez pasó una tarjeta y no le resultó la clave, le lo dijo y respondió que se había equivocado y cambió la clave y ahí resultó. Dijo que era la tarjeta de su señora. Sí dijo que con su señora tomaba ese champagne que compraba. Llegaba en auto a comprar y no se fijó si venía con alguien más, pero normalmente bajaba él a comprar. Sobre esa vez en que se equivocó de clave, pagó con tarjeta, fue como una vez, y se equivocó, y si mal no recuerda, dijo que era de la señora, por la clave. Las veces que iba él siempre le pagaba con efectivo o con tarjeta. Una vez sí le pidió, porque se le habían quedado los documentos, que le pasara una botella y que se la pasaría a pagar después.

Sobre que él lo involucró en esta causa, le comentó que él supuestamente tenía una gestión para ayudar gente y él no necesitaba nada de eso. Dijo que, por ejemplo, si tenía un problema judicial o cosas así, le podía prestar apoyo, y le respondió que no, que no tenía necesidad de eso. No le dijo en qué tipo de causas. Fue una conversa mientras atendía, nada más.

Ricardo también compraba cerveza.



Supo que estaba involucrado porque lo llamaron un día de la Policía de Investigaciones, que se fuera a presentar. Preguntó por qué y que cuando fuese le informarían. Fue al cuartel de la Policía de Investigaciones, lo atendió un señor de San Javier, y lo interrogó un Policía de Investigaciones y otra persona que le hacía preguntas, no sabe si era fiscal o abogado. No recuerda nombres. Esa otra persona le dio a entender que era de San Javier. Le preguntó si conocía a estas personas, qué hizo, cómo lo conoció. En el momento no se acordaba, pero le refrescó y dijo ah claro, es cliente. Se sintió como presionado, muy encima, y se sintió un poco mal. No le decían que lo acusaban de esto. Sintió presión porque como que se aseguraban de que era culpable de algo, sintió que si no hablaba podía irse hasta preso. De hecho le pidió su teléfono para revisarlo. Se asustó. No firmó un acta. Le dijo que quería revisar su teléfono y estaba que se lo pasaba o no porque no sabía si estaba en lo reglamentario. El otro caballero se lo revisó y trajinó su teléfono. Cuando revisó su teléfono le preguntó si tenía registrado a este caballero en el teléfono y lo tenía como fiscal porque dijo que su señora trabajaba en la Fiscalía. Le decían que supuestamente tenían al caballero en otra sala. Le dio a entender que se podía hasta ir detenido. Su teléfono no quedó incautado. Un señor escribía y lo hicieron firmar un documento al que puso su nombre y RUT. Ni siquiera lo leyó porque estaba nervioso y quiso puro irse.

A la Defensa de Vega Guerrero contestó que tenía una licorería y conoce a Ricardo porque pasaba a comprar champagne Riccadonna y cervezas. Él le dijo que el champagne era para su mujer y que su señora era de la Fiscalía. Ese champagne cuesta como \$12.000 y dos o tres veces a la semana compraba.

Sobre si antes de estar acá, se reunió con los abogados presentes, el 2 de noviembre con el señor de ahí (indica hacia uno de los abogados de la acusada del Pino Acuña). Le pasó la hojita de la declaración que dio.

Ricardo pagó en efectivo y con tarjeta. Una vez le dejó un cheque para pagar, pero lo retiró porque no tenía fondos según él. No recuerda a qué cuenta corriente pertenecía.

Al Ministerio Público respondió que en la declaración que prestó en Linares se sintió mal porque le efectuaron preguntas que daban cuenta de que estaba involucrado en algo. Respondió que no estaba involucrado en nada. Fue la manera. Finalmente no fue involucrado en nada. No presentó reclamos.



Sobre hasta cuándo Ricardo le compro este champagne, no fue tantas veces, un mes sería, un poco más. El cheque era chico, como de \$30.000. Era de la deuda que tenía en el local porque se lo dejó en garantía porque andaba sin documentos.

No tiene antecedente penales. No ha sido condenado. Sí problemas intrafamiliares. Tuvo restricción de acercarse a la casa. Si le dicen que tuvo una condena por violencia intrafamiliar por desacato y amenazas, lo recuerda. No recuerda el año, 12 o 13 años atrás, cuando se separó. No recuerda la fecha. Estuvo firmando un año parece.

Al Tribunal aclaró que tenía registrado a Ricardo como Ricardo Fiscalía. Tenían reparto de delivery. Le puso Fiscalía para tener una referencia porque no le sabía el apellido y tenía otros Ricardo. Una vez le dijo Ricardo que era casado con una señora que trabajaba en la Fiscalía.

En un nuevo interrogatorio, a la Defensa de la acusada del Pino Acuña contestó que el 2 de noviembre estaba citado y la funcionaria le dijo que debía conversar con los abogados, lo derivaron con el funcionario que indicó y le entregaron la declaración que hizo en esta causa ese día con la Policía de Investigaciones, la que tenía su firma.

De lo antedicho se desprende que si bien el señor Araya Brunett, en la investigación penal, afirmó que nunca había sido contactado por el acusado Vega Guerrero para hacer algún tipo de movida o recibir ayuda con respecto al tema de una causa, ante estrados matizó ello señalando que Vega Guerrero en realidad le comentó que supuestamente tenía una gestión para ayudar gente, que si tenía un problema judicial o cosas así le podía prestar apoyo, y él le respondió que no, que no tenía necesidad de eso. Así, en la audiencia reconoció, sin dar detalles, haber recibido de parte de Vega Guerrero una oferta de ayuda con problemas judiciales. Por lo mismo y ante ese reconocimiento progresivo, la incongruencia en comentario no nos parece suficientemente establecida.

También planteó esta Defensa que, de acuerdo a lo manifestado por su testigo Richard Araya Brunett, respecto al consumo de alcohol lo único que se puede establecer es que quien consumía y quien compraba era Ricardo, no Claudia, aunque eso ni siquiera podría tener algún interés en esta causa, porque nada afectaría los delitos por los cuales se está acusando, pero cómo fue un tema del cual se habló mucho y se trató de dar como una justificación en el contexto en que Claudia podría ser autora de esto, tiene que hacerse cargo. Incluso con respecto a Richard Araya se



pudo acreditar que era Ricardo quien consumía de manera reiterada alcohol, señaló dos a tres veces por semana.

Sobre ello y sin perjuicio de que el señor Araya Brunett exactamente no afirmó que Vega Guerrero le compraba alcohol para consumirlo él, compartimos con esta Defensa que toda la temática y antecedentes relacionados con el eventual consumo excesivo de alcohol de los acusados, ventilada inclusive en la declaración de la testigo Camila Aileen Guerrero Vega presentada por la Defensa del acusado Vega Guerrero, en nada relevante atinge a los delitos sobre los cuales versa el presente juicio.

También cuestionó esta Defensa que Ricardo Vega señaló en su segunda declaración que Claudia había reconfigurado su computador, entienden que como para poder justificar que al momento de analizar el computador de Claudia no se encontró ningún elemento que pudiera vincularla a los hechos de esa acusación, señalando que esa configuración del computador se hizo a través de un funcionario informático llamado Fernando, quien presta servicios a la Fiscalía, pero que de una manera inexplicable resultó que nadie lo conocía. Solo existía esa persona en la declaración que entregó Ricardo.

Al respecto, durante el juicio oral no se incorporó prueba que estableciese, como sostiene esta Defensa, que en los computadores incautados por la Policía de Investigaciones en el domicilio de los acusados no se encontró algún elemento que pudiera vincular a del Pino Acuña con los hechos de la presente causa. En lo atinente, únicamente se acompañaron materialmente una CPU y dos notebooks, pero no pericias a su respecto. Tampoco se produjo prueba que acreditase que se realizaron diligencias para ubicar a ese tal Fernando o descartar que haya prestado servicios para la Fiscalía. Si bien sobre ello la testigo señora D'Agostini Ibáñez primero aseveró que jamás existió la asesoría de un asesor externo de nombre Fernando, luego matizó esa afirmación agregando que pudo existir esa asesoría, pero si fue así, fue derivado de la Fiscalía Regional porque los externos particulares sólo son contratados por la Fiscalía Regional y esas personas se presentan con la administradora, se acreditan con ella y la Fiscalía Regional avisa previamente que irá una persona a efectuar reparaciones. Así, tampoco refirió que esos eventuales asesores externos particulares deban presentarse ante ella, como para que tuviese la posibilidad de, en algún momento al menos, conocerlos a todos. Por lo mismo, la incongruencia en comentario tampoco nos parece suficientemente establecida.



Además argumentó esta Defensa que su principal prueba para demostrar que no podemos cómo saber quién asesoró a Ricardo de tal manera para realizar las acciones de cohecho es que un año después de la desvinculación de Claudia del Pino, hubo movimientos en las causas según las pericias que realizó el Ministerio Público con las claves de Claudia del Pino y al día de hoy no sabemos quién sería esa tercera persona que habría asesorado a Ricardo Vega para realizar las gestiones que realizó cobrando dinero a terceros, en lo que se denominó en la investigación “la movida” para terminar las causas. En cuanto al uso de las claves, entienden que claramente quedó establecido, con toda la prueba que se incorporó, que todos los movimientos en las causas de la acusación por cohecho sí se realizaron con las claves de Claudia. Eso entienden quedó absolutamente acreditado. Pero que eso ocurrió también incluso cuando ella ya no era parte del Ministerio Público y justamente en las causas que fueron objeto de esta acusación. Carola D’Agostini señaló que, ya estando Claudia suspendida de sus licencias, encontrándose bloqueadas sus cuentas, se realizó una modificación en una de esas causas por manejo en estado de ebriedad, explicando incluso Carola D’Agostini que cómo era posible que Claudia estuviera suspendida, con sus claves bloqueadas, por lo que ya no tenía acceso al computador con VPN ni a su oficina, y se duplicó esa causa apareciendo como un fraude, todo ello sólo en el sistema SAF. Queda la interrogante de si Claudia no lo pudo hacer, quién lo hizo. Preguntó quién estaba ayudando Ricardo a realizar este tipo de gestiones con la clave de Claudia, ya que eso no se puede cuestionar, que todo fue con la clave de Claudia. En la fotografía 101 del informe 90 incorporado por la Fiscalía se puede visualizar la causa RUC 2000185678-3 por manejo en estado de ebriedad, la cual fue terminada el 14 de mayo del año 2021, supuestamente por Claudia del Pino, ya que con esa clave se pudo ver que se realizó la gestión, pero sus claves, como ya lo indicó, estaban bloqueadas desde agosto del año 2020 y a esa fecha incluso ella ya se encontraban destituida del Ministerio Público, por lo que de su computador con VPN nunca más pudo acceder a su oficina. Preguntó quién ayudaba a Ricardo a usar la clave de Claudia para hacer estas modificaciones en todas estas causas de la acusación. Corrigió luego que fue Mauricio Jorquera quien dijo que cinco personas sí tenían la clave de Claudia y que además se encontró con una causa, una de las de cohecho, manipulada de tal manera que incluso después del bloqueo de las claves y cuentas de



Ricardo, aparecía duplicada la causa con otro delito por fraude. Eso se explica por la declaración de Carola D'Agostini y Mauricio Jorquera.

Al respecto, la información relevante que se incorporó al juicio oral, según citó esta Defensa, fue primero lo señalado por la testigo Carola D'Agostini Ibáñez, quien sobre el punto contestó precisamente a dicha Defensa que, sobre si verificó que en una causa hubo movimientos después de la denuncia de cohecho, no lo recuerda. Sobre si verificó si una causa por manejo se había ingresado y hecho otra paralela por un delito de fraude, recuerda lo que declaró sobre eso. Sobre si Claudia ya estaba suspendida, no. Declaró que a ella Patricio le hizo llegar un RUC de causa y, al revisarlo, aparecía como uso fraudulento de tarjetas y le dijo que era una causa por manejo en estado de ebriedad. Se fue a SIGE, revisó el RUC y sí era un manejo en estado de ebriedad pero en SAF aparecía el uso fraudulento de tarjeta. Buscó por sujeto si esa persona existía antes y se dio cuenta de que existía una causa anterior de uno o dos años antes, pudo ser del 2019, y esa causa del 2019 se copió en íntegramente en SAF a la causa 2020 y eran exactamente iguales. De esa manera, esta testigo no aportó lo que citó la Defensa.

Por su lado, el señor Jorquera Loyola manifestó, también a esta Defensa, que, sobre si Carola le dijo que hubo cambios en causas de Claudia posteriores a la suspensión y bloqueos de sus cuentas después de la suspensión del 1 de agosto, es imposible. Hubo una causa en que Claudia dijo, una conducción en estado de ebriedad, que la tramitación no le correspondió a ella y que la tramitación fue posterior, pero eso era falso. El hecho había ocurrido el 2019, a ella se le asignó, pidió audiencia formalización, después suspensión, se fijó para diciembre, pero toda la tramitación, incluso un archivo provisional que le pegó y no saben por qué, la realizó Claudia de su computador y de ella es la tramitación de la causa. Es una de las causas dudosas en cuanto a los criterios que aplicó. Sobre que se hizo desde el computador de Claudia y que el informático no se refiere al computador de Claudia sino que a las claves y a cuentas de Claudia, respondió que son dos cosas distintas. Una es que está acreditado en el sumario día y hora en que se produjo la calificación jurídica y desde qué computador y desde qué cuenta, de Claudia del Pino. De eso no hay la menor duda y están las certificaciones. Pidió un listado de causas de conexiones y vio que dos funcionarios ingresaron con la cuenta de Claudia, Hugo y otro más, en que pidieron diligencias en unas causas y en otras entraron al SIAU. Esas causas no fueron más de cinco. También estableció que MQuezada y otro



nombre ocuparon la cuenta de Claudia para hacer un requerimiento de simplificado. Entre los dos, no alcanzaban a ser ocho causas. Sobre cómo establece que en otros casos se actuó desde el computador de Claudia, se pidió a Santiago de dónde fueron modificadas las calificaciones jurídicas de conducción en estado de ebriedad en las tres causas que señaló más el archivo. Se pidió autorización a Santiago para que comunicaran de qué IP y cuenta, y eso fue Claudia del Pino, marzo y junio, y de eso no cabe duda porque no hay error en ese sistema. Si se le pregunta si otras personas tenían acceso a la cuenta de Claudia, responderá que sí porque comprobó que sí existía eso respecto de estos funcionarios. Eso es muy distinto a decir de qué computador se realizó, y el cambio de calificación jurídica fue de un solo computador, del de Claudia del Pino, desde su casa. De eso no tiene la menor duda y están los registros, hora, IP y cuenta. El VPN permite comunicarse al computador de la oficina. Ese VPN está asociado a un IP. Claudia llevó su notebook para que le instalaran el VPN y en ese computador solamente hay una cuenta de usuario específica. Por tanto, esas conexiones sólo se pudieron realizar del computador de Claudia. Agregó que cree que la Defensa tiene razón en el sentido de que cuando suspendieron a Claudia del Pino, se imagina que sus cuentas quedan de inmediato bloqueadas y eso debió haber ocurrido. No tiene certeza, pero cree debe haber sido eso.

En relación con lo mismo, la testigo Torres de la Fuente refirió que en el caso de Claudia del Pino, se le deshabilitaron las cuentas de todos los sistemas. La primera es, por protocolo, la cuenta de red, también la de VPN y la cuenta en los sistemas. Por ello no debiese aparecer con posterioridad a ese bloqueo un movimiento con esa cuenta F703CdelPino. A ella se solicitó el bloqueo de todas las cuentas de acceso de Claudia del Pino a todos los sistemas, lo que ella hizo solicitándolo a informáticos del Ministerio Público y del Pino quedó suspendida de sus funciones por la investigación administrativa. A ella le llegó la instrucción de bloqueo de las cuentas de acceso dado el inicio de la investigación administrativa. No recuerda si fue el mismo día, recuerda cuando le llegó a ella la instrucción y tomó conocimiento del inicio del sumario. Si no fue el mismo día, debió ser algo inmediato. Ella no bloquea las cuentas, lo pide al encargado de informática. El bloqueo lo hace la Fiscalía Nacional. En ese minuto no estábamos en pandemia de lo que recuerda, no tiene certeza de la fecha. Sobre si verificó que las claves estuviesen bloqueadas, la orden del bloqueo de claves la recibió de la Fiscalía Regional y ella



solicitó a Fiscalía Nacional, que le mandó el reporte de que las claves estaban bloqueadas y no lo podía validar ella porque desconoce las claves de la usuaria. Efectivamente las claves se bloquearon, pero no tiene forma de validarlo. Es deshabilitar en los software que tienen todas las cuentas de red del Ministerio Público. Ella lo pidió y la respuesta fue que estaba hecho y el reporte fue que esas claves del sistema estaban bloqueadas.

Consignado ello, por un lado resulta que la testigo señora D'Agostini Ibáñez no refirió ante estrados lo que esta Defensa planteó. El señor Jorquera Loyola, instructor del sumario administrativo, corroboró que dicha testigo no le dijo que hubo cambios en causas de Claudia posteriores a la suspensión y bloqueo de sus cuentas después de la suspensión del 1 de agosto.

Añadió el señor Jorquera Loyola que pidió un listado de causas de conexiones y vio que dos funcionarios ingresaron con la cuenta de Claudia del Pino, Hugo y otro más, en que pidieron diligencias en unas causas y en otras entraron al SIAU, causas que no fueron más de cinco. También estableció que MQuezada y otro nombre ocuparon la cuenta de Claudia para hacer un requerimiento de simplificado. Entre los dos, no alcanzaban a ser ocho causas. Sin embargo, explicó también que establece que en los otros casos se actuó desde el computador de Claudia del Pino porque se pidió a Santiago informar de dónde fueron modificadas las calificaciones jurídicas de conducción en estado de ebriedad en las tres causas que señaló más el archivo. Se pidió autorización a Santiago para que comunicaran de qué IP y cuenta, y correspondía al computador de Claudia del Pino, ya que ella llevó su notebook para que le instalaran el VPN y en ese computador solamente hay una cuenta de usuario específica. Por tanto, esas conexiones sólo se pudieron realizar del computador de Claudia del Pino.

Cabe rescatar, entonces, que los usos de la cuenta de la acusada del Pino Acuña que mencionó el señor Jorquera Loyola fueron bastante acotados y restringidos a ciertas actuaciones no relacionadas con esta causa. Además, dado el carácter personal e intransferible de las claves de acceso a los sistemas informáticos del Ministerio Público que contestemente afirmaron, en especial, la señora D'Agostini Ibáñez, la señora Salazar Hernández y el señor Becerra Maldonado, sumado al bloqueo sobre el que ilustró la señora Torres de La Fuente, ha de asumirse que ello ocurrió con la autorización de la acusada del Pino Acuña, por lo que difícilmente puede aceptarse que por esa vía terceros ejecutaron las actividades



en cuestión en las plataformas digitales de la Fiscalía que empecen a estos antecedentes, sobre todo en las causas vinculadas a los delitos de cohecho por los que se condenará dado el concierto previo y el plan colectivo de comisión acreditados.

Concluyendo este capítulo, la referencia que esta Defensa efectúa a la fotografía N° 101 del llamado en el auto de apertura como “143 fotografías contenidos en el informe pericial fotográfico N° 90/2022 LACRIM TALCA”, según ya se razonó al analizar el hecho 2.16 de la numeración asignada en el noveno considerando de este fallo, es equívoca porque lo que allí aparece debe relacionarse con la fotografía N° 100, donde se ve la historia SAF de la causa RUC N° 2000185678-3 y dentro de ella, destacada está específicamente una resolución de término llamada “Aprobación Decisión de Término”, cuya fecha es 14/05/2021. Por lo mismo, según la mecánica que expuso la señora Torres de La Fuente, ha de entenderse que la imagen siguiente muestra el detalle de aquella resolución, donde efectivamente se indica que la ubicación del archivo es “F703_CDELPINO” y que la fecha es 14/05/2021 pero, reiteramos, esa información corresponde a una resolución judicial, no a una actividad ingresada por la usuaria de la cuenta, lo que queda corroborado al observar que en esa fotografía N° 101 se consigna que tal detalle corresponde a una “Aprobación no Inicio Investigación”. Ciertamente es que en el historial de la fotografía N° 100 se aprecian dos actividades llamadas “Decisión de no Iniciar Investig” de fechas 29/04/2021 y 02/04/2020, pero no se plasmó el detalle de las mismas dentro de las fotografías en comento como para determinar si la primera fue realizada con la cuenta de la acusada del Pino Acuña. También es relevante que este punto bien pudo ser ahondado por esta Defensa al contrainterrogar a la testigo señora Torres de La Fuente, pero ello no ocurrió.

Planteó además la Defensa de la acusada del Pino Acuña que se acreditó que parte del servicio que ofrecía Vega Guerrero era entregar la licencia de conducir retenida, pero quedó en evidencia que las licencias, cuando son retenidas por Carabineros, son enviadas a la Fiscalía y custodiadas y sólo mediante gestiones con la fiscal jefe se pueden devolver. Sin embargo, dicho trámite era tan simple como ir a la Fiscalía y la persona de atención de público tramitaba la solicitud y realizaba la devolución del documento. Eso quedó absolutamente claro durante la declaración de los testigos. Esta información la conoce cualquier funcionario de la Fiscalía, lo que lleva a la lógica conclusión de que si un abogado asistente quisiera realizar dichos



arreglos con el imputado, hacer la movida con los imputados, les indicaría que fueran a retirar su licencia en la Fiscalía. Es más, con el afán de poder engañar a estas personas, podría simplemente haber dicho, si hubiese la participación de un abogado asistente, que la licencia va a quedar a disposición para su retiro en la Fiscalía, usándolo como un elemento para poder hacer parecer más serio el negocio ofrecido, como si hubiese habido una gestión para poder recuperar la licencia directamente en la Fiscalía. Como entiende no hubo participación de ningún abogado asistente, Ricardo no podía tener esa información y nunca supo cómo poder captar y concretar la movida con Enrique Leopoldo Torres, porque a lo que él se comprometía era entregar la licencia, cosa que claramente sabemos y todos los funcionarios saben, no se podía hacer.

Sobre el punto, importante es consignar que la fiscal Carola D'Agostini Ibáñez testificó que, sobre las licencias de conducir en causas de manejo en estado de ebriedad, el protocolo del 2019 y 2020 en adelante siempre ha sido que cuando la licencia viene adjunta al parte, se saca del parte y se deja una constancia. Si hay que devolverla se deja una copia de la devolución con su autorización (de la testigo) porque hay que revisar el parte, si la licencia es falsificada, si estaba suspendida. Había que analizar eso y si no estaba ella, un fiscal debía autorizarlo. Si la licencia no se reclamaba, se sacaba del parte y quedaba en custodia de la Fiscalía a través del administrador. Eso debería ser así por protocolo. Muchas veces Carabineros retenía la licencia pero no había cautelar de por medio y se devolvía la licencia a la persona y se dejaba constancia en el parte o la gente iba más tardíamente a reclamar su licencia y la administradora tenía un acta de devolución de licencias. Para una suspensión condicional o una pena de suspensión de licencia, esos tiempos se los descontaban, por eso era bien importante ir dejando constancia de que se entregó la licencia a la persona porque muchas veces decían que la licencia estaba en la Fiscalía y ya la habían devuelto. Esos manejos en estado de ebriedad normalmente, casi el 100%, los tramitaba TCMC. La mayoría eran manejos simples. Los con licencia suspendida, por la pena de 541 se supone las veía un fiscal, pero también vieron muchas veces causas con licencia suspendida. Si era con lesiones graves o muerte, obviamente pasaban a manos de un fiscal. No eran pocos manejos en estado de ebriedad que llegaban con retención de licencia y no todos pasaban necesariamente por ella (la testigo), porque no estaba o alguien lo hizo por su



cuenta. También pudo ocurrir que alguna licencia se quedara en el parte y ellos no haberse fijado.

Aclaró al Tribunal que si el parte se quedaba con la licencia, debió quedar en el centralizado. Esto quedaba en una carpeta con tapa de cartón con una pieza plástica para colgarla. Quedaban en unos muebles que, para buscarlas, se debía pedir al encargado del centralizado por SIGE, que arrojaba un aviso de límite de 30 acusas para pedir las. Esa solicitud de carpetas llegaba al encargado del centralizado, quien se metía a la bodega, que funcionaba con clave. A la época de estos hechos, si un abogado asistente quería retirar una carpeta del centralizado, bastaba que lo pidiera por el SIGE, pero no podía pedir carpetas que no fuesen de su asignación, el mismo sistema no lo iba a permitir.

Engarzando con ello, recordaremos que el comisario de la Policía de Investigaciones señor Gutiérrez Gutiérrez testificó que en el allanamiento que diligenció el 3 de agosto del 2020 en el domicilio de Claudia del Pino en la villa Las Vertientes, pasaje Estero la Gloria, donde Claudia del Pino compartía con Ricardo Vega, incautó, entre otras especies, una carpeta referida al delito de manejo en estado de ebriedad de Enrique Torres terminada en 88-9. Por lo que indagaron, esa causa se había archivado y la tenía asignada Claudia del Pino. Estaba en el dormitorio, en un estante. Luego, al serle exhibida a este testigo la prueba llamada en el auto de apertura como “Doce fotografías correspondientes al domicilio de Claudia del Pino Acuña y Ricardo Vega Guerrero”, al observarlas esas imágenes señaló que corresponden a la villa Las Vertientes, a la casa de Claudia del Pino, tomadas el 3 de agosto, el día del allanamiento, y que en ellas se ven las carpetas allí incautadas, de los RUC que lee y son el 1800790608-7, el 1900283381-9, el 1900821076-7, el 2000319388-9 y el 1800751929-6, añadiendo que una de esas carpetas es de una de las personas a las que Ricardo Vega contactó, donde están todos los antecedentes de la detención, todo lo que involucra esa causa, que es la de manejo en estado de ebriedad de Enrique Torres, la terminada en 88-9. También la Fiscalía mostró a este testigo la prueba descrita en el auto de apertura como “NUE 5948278: Carpeta con logo de la fiscalía regional del Maule RUC N° 2000319388-9”, sobre la que señaló que él inicia la NUE y es una carpeta de la Fiscalía Regional del Maule con el RUC 2000319388-9, caso conducción en estado de ebriedad, recepción 24 de marzo del 2020, y es una causa de Enrique Torres Valenzuela, detenido por manejo en estado de ebriedad el 23 de marzo del 2020, carpeta física



que, cuando la encontró en el domicilio de Claudia del Pino, tenía la misma documentación

De ello se infiere que si bien en la Fiscalía de Linares, a la época de los hechos que nos convocan, existía un protocolo que establecía que a los partes policiales por manejo en estado de ebriedad que ingresaran a dicha unidad pública con la licencia de conducir del imputado adosada debía serles ésta retirada para ingresarla a una custodia, en la práctica ocurría, como reconoció la señora D'Agostini Ibáñez, que alguna de dichas licencias se quedara en el parte y, en ese caso, la respectiva carpeta física con la licencia de conducir quedaba en una dependencia llamada "Centralizado", desde la cual el abogado que la tuviese asignada podía recuperarla materialmente, previa solicitud en el SIGE, pero no era ese abogado quien la tomaba directamente de ese Centralizado, sino que se la entregaba el encargado de dicha unidad. Ya esta posibilidad resta decisivamente valor al argumento de descargo analizado. Luego, la causa física que cita esta Defensa al efecto, esto es, la por manejo en estado de ebriedad en que el imputado es Enrique Leopoldo Torres Valenzuela, resulta que se comprobó, de la manera ya expuesta, que fue encontrada en el domicilio de la acusada del Pino Acuña, por lo que necesariamente debe colegirse que fue ella quien la solicitó a través del mecanismo que describió la señora D'Agostini Ibáñez y que no permitía que el solicitante, antes de recibirla, supiese si contenía o no una licencia de conducir, circunstancia que esta vez derechamente desvirtúa la alegación en comento.

Además argumentó la Defensa de la acusada del Pino Acuña que sí se acreditó que Ricardo Vega contactó a Diego Ignacio Vázquez Riquelme, a Samuel Alarcón Urrutia, a Enrique Leopoldo Torres Valenzuela, a Rodrigo Guerra Morales, a Elías Orlando Vázquez, Ralph John veloz Rodríguez y Eduardo Antonio Lobos. Todos esos contactos ocurrieron en periodo de pandemia, cuando Claudia efectivamente trabajó desde su casa con un computador que, como quedó establecido, tenía una VPN para poder acceder a los sistemas de Ministerio Público y que de otra forma, de otro computador, era imposible poder realizar eso. Sin embargo, también se acreditó que en ese momento, ya existían las carpetas digitales. Para acceder a ellas bastaba ingresar a los sistemas de la Fiscalía. Lo único distinto es que Ricardo ahora también podía acceder a las carpetas que llevaba a casa Claudia o en el computador familiar, que tenía a lo menos la clave del sistema SAF, la cual, como se acreditó en el juicio, era la única que no se caía, que había que



volver a ponerla. Mientras el computador estuviera prendido, la clave no se caía una vez ingresada. Justamente es sólo en el sistema SAF en que se encontraron modificaciones, el sistema SIGE no fue modificado, más allá de lo que explicaron todas las personas que declararon en cuanto a que al terminar una causa se refleja de manera automática en el sistema SIGE, pero no es una alteración directa que se haya hecho en el sistema SIGE, solamente se hicieron modificaciones en el sistema SAF, justo el sistema en que la clave nunca se caía a menos que se cerrara el computador.

Para hacernos cargo de dicha alegación y no redundar, nos remitimos a lo ya expuesto en el décimo considerando de este fallo, pues allí consignamos las razones, fundadas en las probanzas producidas en el juicio oral, por las cuales se dio por suficientemente acreditado que Claudia del Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente, a lo menos, en la descripción de la conducta punible a que se refería dicha causa, así como la graduación alcohólica con que fueron sorprendidos múltiples imputados, con el fin de que les solicitara beneficios económicos a cambio de terminar sus causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación.

Manifestó también esta Defensa que, por ejemplo, en algunos casos de obstrucción a la investigación, debe acreditarse el dolo, el querer obstruir la investigación generando elementos que impidieran que se pudiera determinar quién es el verdadero culpable o el hecho delictivo. Sin embargo, no hubo dolo en las obstrucciones a la investigación que se presentaron por el Fiscal. Además, respecto de varias de las causas de obstrucción a la investigación ni siquiera hubo investigación, no se pasó a control de detención e internamente se presenta un requerimiento simplificado. Para que haya obstrucción a la investigación debe haber una investigación, diligencias por realizar para que se pueda realizar alguna acción que impida el normal desarrollo de diligencias propias de esa investigación. En varias de esas causas ni siquiera hubo investigación como para plantear la existencia de ese delito. Y en general, en ninguna de esas causas hubo algún elemento que permitiera o impidiera el normal desarrollo de las causas en los tribunales. Este delito debe recaer en lo que podemos ver en los tribunales y eso no ocurrió. En varias de esas causas en que se le cuestionó su postura jurídica en cuanto a la manera de tramitar y terminar las causas, con el tiempo se corroboró que su criterio jurídico era correcto, volviendo a terminar las causas de la manera que se cuestionó a su representada.



En apoyo de este argumento, la Defensa incorporó lo que en el auto de apertura de llamó “Tramitación electrónica que consta en la oficina virtual del poder judicial de los 11 hechos de obstrucción a la investigación señalados por la Fiscalía, cuyos Ruc son: 1900060766-8, 1900104808-5, 1900680959-9, 1900840692-0, 1900915769-k, 1900836255-9, 2000122215-6, 2000145861-3, 2000237477-4, 2000284126-7 y 2000014933-1”, causas de las que no presentó las correspondientes a los RUC 1900104808-5 y 1900915769-K, que efectivamente consisten en nueve grupos de escritos, actas y resoluciones del Juzgado de Garantía de Linares referidos a los RUC que se indicaron y que muestran al final contienen, una resolución que sobresee total y definitivamente la causa RUC 1900060766-8; una resolución que aprueba un principio de oportunidad en la causa RUC 1900680959-9; un acta de audiencia en que se declara el sobreseimiento definitivo de la causa RUC 1900836255-9; una sentencia en que se condena por el delito consumado de conducción en estado de ebriedad en la causa RUC 1900840692-0; una resolución en que se declara rebelde al imputado en la causa RUC 2000014933-1; un acta de audiencia de acuerdo reparatorio en la causa RUC 2000122215-6; una sentencia en que se condena por el delito consumado de conducción en estado de ebriedad en la causa RUC 2000145861-3; un acta de suspensión condicional del procedimiento en la causa RUC 2000237477-4; y una sentencia en que se condena por el delito consumado de conducción en estado de ebriedad en la causa RUC 2000284126-7.

En relación con ello y sólo en lo tocante a los delitos de obstrucción a la investigación por los cuales se condenará, en los mismos, de las respectivas carpetas investigativas incorporadas como prueba de cargo, necesariamente debe colegirse que dichas investigaciones sí estaban iniciadas al momento de proceder la acusada del Pino Acuña a su archivo provisional. Además, tal actuación, conforme a la prueba que al efecto ya se analizó, sí significó, por sus alcances procesales y como se exige en el artículo 269 ter del Código Penal, que se ocultaron antecedentes que permitían establecer la existencia o inexistencia de un delito o la participación punible en él de alguna persona o su inocencia. Finalmente, en cuanto al dolo especial requerido por ese mismo artículo, dado el contexto preconcertado y el designio delictivo compartido en que se probó cada una de dichas obstrucciones a la investigación tuvo lugar, necesario es colegir que en ello la acusada del Pino Acuña sí procedió con aquella particular disposición subjetiva.



A la vez planteó esta Defensa que toda la investigación no fue más que una cacería de brujas, porque se pudo constatar, una y otra vez, toda la discriminación que ha sufrido Claudia por estar casada con un hombre menor. Fue cuestionada incontables veces a ese respecto y por la violencia que ella y los testigos relataron sufrió durante el matrimonio con el coimputado. Ha sido juzgada por el hecho de estar con un hombre que tiene menos estudios que ella y por eso entiende que es una discriminación de género, asegurando que eso no se habría dado en el caso de que fuera al revés y fuera un hombre el que se presentara acá casado con una persona de pocos estudios y de menor edad que el imputado. Por ello ha quedado en evidencia absoluta que sí hay un contexto de género en la manera en que fue tramitada esta causa y en la manera en que fue investigada.

En relación con ello, para nada comparte este Tribunal tal apreciación, ya que no advertimos, ni esta Defensa señaló, de qué manera y en qué parte del juicio oral se actuó o se interpretó o aplicó el derecho de forma arbitrariamente discriminatoria, con sesgos o sin respetar el principio de igualdad a la luz de las normas nacionales e internacionales pertinentes.

Planteó la esta Defensa que, sobre los documentos aportados con los números 10, 11 y 12, que serían las cartas de término de las causas que, en palabras de la fiscal jefe Carola D'Agostini, están con distintos tamaños de letra, algunos no tienen fecha, sin hora, sin lugar, sin víctima, documentos mal hechos expresa la fiscal, que alguien de la Fiscalía sabría que faltan datos. Si Claudia estuviera involucrada, las cartas de término que se entregaron a los imputados no estarían tan mal redactadas, incompletas y con tantos defectos como lo están. Ella tiene 15 años de experiencia, sabía manejar perfectamente el sistema, conocía perfectamente las cartas que se entregaron. Indicó que llega a la conclusión de que no fue Claudia y fue posiblemente Ricardo, ya que como él bien señaló, no dominaba el sistema y le costaba poder hacer gestiones dentro del sistema SAF cuando se le pidió, meses después de la última vez de haber ingresado al sistema, por Mauricio Jorquera, para que demostrara sus habilidades. Agregó que en el informe 90, foto 88, cuando se preguntó a la testigo Karem Torres por qué en esa causa existen tres decisiones de término incorporadas, dijo que era muy extraño y que alguien que sabe manejar el sistema no cometería ese error. Eso la lleva a poder indicar que una persona abogado asistente, con 15 años de experiencia, no cometería ese error.



Sobre ello nuevamente, para hacernos cargo de esta alegación, nos remitiremos a lo ya expuesto en el décimo considerando de este fallo, pues allí consignamos las razones, fundadas en las probanzas producidas en el juicio oral, por las cuales se dio por suficientemente acreditado que Claudia del Pino Acuña, previamente concertada con su cónyuge Ricardo Ignacio Vega Guerrero, entregó a éste información consistente, a lo menos, en la descripción de la conducta punible a que se refería dicha causa, así como la graduación alcohólica con que fueron sorprendidos múltiples imputados, con el fin de que les solicitara beneficios económicos a cambio de terminar sus causas, en circunstancias que debía seguir en tramitación. A ello añadiremos que, con lo que explicó la señora Torres de La Fuente, resulta patente lo complejo que es, para alguien no capacitado, la obtención desde el sistema SAF de al menos las plantillas para modificar o confeccionar sobre su base un texto de decisión de archivo provisional. Por otro lado, no se advierte la razón por la cual tendría que existir preocupación por parte de la acusada del Pino Acuña de entregar a los imputados que contactó a través de su cónyuge una decisión de archivo provisional directamente extraída del SAF, sobre todo si podía evitar que esos textos pudiesen ser atribuibles, dados los manifiestos defectos que destacó su Defensa, al trabajo de un abogado asistente de fiscal. También cabe consignar que fue la propia acusada del Pino Acuña quien destacó la excesiva recarga de trabajo que tenía que soportar, tema que ya se trató en este fallo al analizar los cargos por el delito de obstrucción a la investigación y el dolo especial que requiere para su comisión, como explicación de posibles errores cometidos por ella en la tramitación de sus causas, indicando ella incluso que, por error, archivó una causa sin querer porque veía mal.

Además sostuvo esta Defensa que el Ministerio Público, pese a la disposición expresa en el sentido de prohibir la incorporación de documentos policiales como partes o declaraciones, utilizó esa forma para tratar de acreditar la existencia de los delitos de manejo en estado de ebriedad que recaen en los cohechos. También la declaración de los funcionarios policiales, las cuales, pese a haber sido ofrecidas sobre determinadas causas, lo que fue objeto de una discusión ante este Tribunal, porque el auto de apertura indicaba que iban a declarar respecto a RUC que acompañaba su nombre. Se refiere a las causas de cohecho que recae en un manejo en estado de ebriedad, donde se incorpora la alcoholemia sin la declaración del perito, sin que se haya solicitado ni debatido respecto a introducirla vía 315,



prescindiendo de la declaración del perito, lo que requiere solicitud y previo debate. En la causa de Eduardo Lobos Tapia ni siquiera se acompañó la alcoholemia de esta manera indebida, simplemente no existe tal elemento en esa causa.

En relación con ello y como contra argumentaron los persecutores, este Tribunal es del parecer de que el artículo 334 del Código Procesal Penal, que es en definitiva la norma invocada por la Defensa, hace alusión a que no se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el juicio oral a los registros y demás documentos que dieran cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público en la causa que es materia del juicio oral, por lo que no cabe extender tal prohibición a los registros y demás documentos que dieran cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía o el Ministerio Público referidas al objeto del juicio oral, como ocurre respecto de las carpetas investigativas que cuestiona esta Defensa. En cuanto a que ciertos testigos se extendieron en sus declaraciones a puntos impertinentes, ello, como recordó ese interviniente, generó dentro del juicio oral un incidente que este Tribunal, previo debate, fundadamente resolvió, por lo que no se ahondará en ello.

Además la Defensa de la acusada del Pino Acuña refirió que pudimos verificar en la declaración de Camila que ella señala por qué motivo se realiza esta denuncia por parte de su hermano Nelson, a quien ella se nombra como Andrés. Dice que Ricardo se encontraba en tal situación de vulnerabilidad, violencia intrafamiliar y sometimiento, que su hermano decidió, para poder salvarlo de esa situación, realizar la denuncia. Lo raro es que Luis Gutiérrez, quien sí tuvo acceso a toda la carpeta de investigación, dijo que Valesca, quien conoció los detalles respecto a cómo se dio esta denuncia, señala que esto ocurrió en el momento en que Nelson, en un ímpetu de vengarse de Claudia porque le había contado a Valesca que él tenía otra pareja embarazada en Rengo, denunció a su hermano y a Claudia. No como refirió Camila en una declaración absolutamente acomodaticia, quien además, nos indica que Ricardo no sabe usar su celular. La descripción que hace de Ricardo es prácticamente como un subnormal que no sabe usar el celular. Sin embargo, pudimos apreciar durante todo este juicio que lo que más hizo Ricardo fue estar utilizando todas las aplicaciones que existen en su celular. Además viene a declarar respecto a la dinámica familiar que existía en la casa de Claudia pese a que indicó que hace 4 años vive en Viña del Mar, sin indicar cuántas veces vino, cuándo vino, en qué fechas vino, solamente relatando que vio que Claudia lo maltrataba en los



mismos términos en que señaló Ricardo en su declaración, en la última de las declaraciones.

En relación con esta declaración de la testigo de la Defensa del acusado Vega Guerrero, Camila Aileen Guerrero Vega, compartimos que, por el parentesco que tiene con dicho encausado y el tenor de su declaración, en que manifestó un evidente desagrado hacia la acusada y su Defensa, no corresponde asignar mayor valor a sus dichos, lo que se traduce en la presente sentencia.

Sostuvo esta Defensa que, en cuanto a la declaración de Jonathan, él señaló que tuvo con su representada una relación afectiva y que tienen una relación ahora muy cercana. Efectivamente, la ha acompañado en distintos días durante este juicio, él puede señalar incluso que a lo menos en 15 oportunidades la trajo o la fue a dejar. Pero resulta que, respecto a lo que declaró Jonathan, no tiene absolutamente nada que ver con la prueba que se incorporó durante este juicio. Aunque Claudia o cualquier otra persona le hubiese comunicado esta situación, lo cierto es que toda la información que él entrega en este juicio se basa en todo lo que ocurrió mientras él usaba su celular, en lo que escuchó mientras estaba al otro lado de la línea, en toda la información que Claudia le mandaba para respaldar a raíz de las agresiones que sufría Claudia de Ricardo del teléfono que quedó inutilizado. Jonathan finalmente terminó siendo la persona que guardaba toda la información que Claudia estimaba le podía servir para poder comprender qué estaba ocurriendo y poder demostrar su inocencia. Luego, no tiene ninguna importancia si Claudia se juntó con él o no y además estamos hablando de los tiempos actuales, o sea, no era necesario que Jonathan viniera para acá, podría cualquier persona haberlo llamado, Claudia haberlo llamado, haberlo llamado la misma abogada y haberle contado día a día qué era lo que estaba ocurriendo. Entonces, ese contacto que tuvo con Claudia no tiene ninguna importancia y no afecta la información para la cual él finalmente fue ofrecido como testigo. Lo esencial es escuchar los hechos de violencia intrafamiliar y a raíz de eso es que Claudia, porque quedó muy claro que efectivamente no hizo ninguna denuncia anterior, sólo las hizo cuando ya hubo participación en eso, presión en eso, acompañamiento en eso tanto de Jonathan como de su ex amiga Paulina Cisterna, para que efectivamente hiciera la denuncia que durante todo el tiempo de maltrato no hizo. Preguntó si hay alguna sorpresa en esto, si hay alguna dinámica de violencia intrafamiliar que no se acomode exactamente a lo que describió Claudia, que vivió ella su vida sin hacer denuncias, aguantando con temor,



haciendo las denuncias, retirándolas. Preguntó si hay alguna diferencia con los hechos de violencia intrafamiliar que generalmente vemos en los Tribunales. Se respondió que ninguna, es la situación clásica de violencia intrafamiliar. Respecto al testigo Jonathan, lo importante y lo que quedó en evidencia es que él voluntariamente se presentó a declarar porque quería compartir con la Fiscalía todos los elementos de prueba para poder sostener la inocencia de Claudia del Pino y finalmente, como se pudo apreciar por este Tribunal, no sólo ello no fue incorporado en los informes en que se bajó toda la información del celular de Jonathan, sino que además fue eliminada toda la evidencia, todos los correos, todos los Whatsapp, todos los audios que Jonathan fue recopilando del reenvío de Claudia para poder aportar a la causa y demostrar su inocencia. Luego, al día de hoy, si tuviéramos toda esa información que fue eliminada, podríamos concluir que Claudia del Pino es probablemente inocente, pero no lo podremos saber porque esa información no se pudo recuperar y, a diferencia de lo que señaló la Fiscalía, no es que no tenía internet. Claro, se mostró una foto en que efectivamente no se podía ver el símbolo de estar conectado con internet, las rayitas, pero en todas las demás fotos sí se ve y el Tribunal pudo apreciar que toda esa operación de prender el celular y verificar en qué estaba y tratando de rescatar y ver todos los archivos eliminados, sí estaba conectado a internet y si no se pudo hacer y además al entregar el teléfono, el mismo Tribunal puede verificar que esa información es así, siendo eliminada y reenviada a correos del fiscal y de Luis Gutiérrez de una manera absolutamente irregular porque esa prueba debió quedar custodiada para su análisis pertinente, retiro de toda la información, y no mandarse a pericia después de eliminarse toda la información que importaba a la Defensa para poder acreditar la inocencia de Claudia. Jonathan, conoció a Claudia físicamente en marzo del año 2020, relató donde se encontraron, dónde fueron, qué comieron. Lo interesante de eso es que efectivamente, en las cartolas, hay un giro de \$200.000 pesos, del 28 de marzo del año 2020, que corrobora lo señalado por Jonathan respecto a que estaban juntos al momento en que se hizo ese giro, misma fecha en que Ricardo, por otro lado, hacía las modificaciones en el sistema el día 28 de junio. Tanto la cartola con el giro, como la declaración de Jonathan nos permite determinar que ella no pudo acceder en ese momento al VPN y a su computador para realizar los cambios.

Al respecto, el testigo Jonathan César Rebolledo Durán declaró ante estrados y expuso que conoce a las personas de esta causa, Claudia del Pino y



Ricardo Vega. A Claudia la conoció por redes sociales en febrero del 2020 y comenzaron una relación de amistad por redes sociales y se contaban su día a día y después esas conversaciones se hicieron más amistosas y ella le contaba los problemas que tenía con su ex marido, el señor Vega, problemas conyugales de violencia, gritos, que comenzaron al poco tiempo de que se casaron el 2018. Eso se lo contó por redes sociales y después conversaron más directamente. Esa dinámica de contarse el día a día partió el 2020 y duró meses. Pasado el tiempo, en marzo se conocieron personalmente. El 28 de marzo del 2020 porque ella tenía que viajar a Talca donde tenía sus hijos con sus padres. Ese día aprovechó de venir a Linares por unos trámites, estuvieron un par de horas juntos, pasaron a comer y ella pasó a un cajero, sacó dinero y después lo pasó a dejar al terminal y ella se fue y él se devolvió a Longaví donde vivía en ese momento. Recuerda la fecha exacta porque es un día especial, conoció a una persona especial.

En marzo del 2020 Claudia vivía en Linares, no sabe exactamente dónde. Vivía ella con Ricardo Vega y sus dos hijos Alina y Claudio. Sabía que eran marido y mujer pero en el papel, porque por lo que ella comentó, al par de meses de casados comenzaron a tener problemas porque este señor salía y cuando llegaba, llegaba ebrio. Ella pagaba y él llegó a los golpes inclusive. Eso lo sabe porque ella se lo contó. Hubo varios eventos que vivió directamente, quizás no viéndolos. Recuerda el 27 de septiembre de ese año 2020 donde estaba hablando por teléfono cerca de las 11:00 pm con Claudia y sintió cuando este hombre le quitó el teléfono, lo rompió y sintió los gritos de Claudia diciendo suéltame Ricardo y él la insultaba, tratándola de lo peor. Cree en ese tiempo ya no vivían juntos, él se fue a los pocos días del allanamiento según le contó Claudia. Hablaban por teléfono, en calma, sentía sólo la voz de ella. En eso sintió los gritos de Ricardo Vega diciendo te pillé maraca conche tu madre y después sintió golpes, vidrios que se quebraban y gritos de Claudia que decía suéltame, me duele y sentía golpes, asume de puño porque se sentían golpes a masa. Escuchó unos segundos, cortó y llamó al 133. A esa altura Claudia le había dado la dirección de su casa ante cualquier eventualidad porque este hombre ya había ingresado y golpeado varias veces. Ella le contaba de los insultos y cosas que él le hacía. Él le preguntaba por qué no lo denunciaba o hacía algo para sacarlo de la casa y decía que no podía porque tenía miedo porque este hombre la amenazaba siempre de que si lo denunciaba, la iba a matar. Le consta eso porque después de ese evento del 27 de septiembre del 2020, ante el miedo de Claudia, este hombre le



quebró el celular que compró ella poco después del allanamiento y perdió información que tenía donde este hombre la insultaba y amenazaba. Él le dijo que quizás una forma de guardar esa información era que se la enviara a él y en su celular resguardó, en un período de unos 6 o 7 meses, más de 200 audios de Vega donde insultaba a Claudia, la amenazaba. Son audios difíciles de reproducir porque dan rabia, molestia, de cómo una persona puede ser tan insensible con una mujer, capaz de amenazarla hasta de muerte. Esos audios los clasificó en su teléfono según lo que él decía. Los escuchó varias veces. Sabe lo que tenía en ese teléfono y lo que había. Puso una carpeta archivos causa con los Whatsapp y en documentos de su celular otra carpeta con pantallazos y cosas que él le enviaba relacionado con el proceso que ella vivía prácticamente de locos. Le dijo a Claudia que le renviara lo que Ricardo le enviaba. Eso porque él ya le había roto el teléfono y no tenía respaldo y había perdido información. Sobre por qué no la mandó a los papás, en ese tiempo él no los conocía. Cree que cualquier mujer bajo amenaza de muerte lo que menos quiere es preocupar a los padres. En alguna ocasión ella se lo dijo. Sus padres son jubilados, su papá está operado al corazón. Ella le dijo eso. Claudia esos archivos entiende algunos los compartió con una amiga de ella, Pachi o Paulina, a la que vio dos o tres veces. Sobre otro evento posterior, en octubre este señor nuevamente entró a la casa de Claudia y golpeó y quebró otro celular que Claudia se había conseguido. En esta de octubre también estaban hablando, sabe lo que escuchó y pasó. Fue bastante similar pero más temprano, como a las 17:00 horas. Este hombre entró a la casa, escuchó insultos, lo mínimo maraca conche tu madre te voy a matar. Incluso él se puso a hablar con él por teléfono y lo insultó y le dijo que donde lo pillara lo iba a llenar de tajos. Después le mandó un mensaje por Whatsapp, más menos con las mismas palabras. Se imagina que él sacó el número del teléfono de Claudia. El número decía llamada o número privado. Esa vez también llamó a Carabineros. Entiende que llegaron a la casa y tomaron declaración, pero no sabe detalles. Antes de eso, entiende que en la del 27 de febrero Claudia denunció porque el 28, por la situación, la fue a ver y le comentó que sí había hecho la denuncia y comprobó los moretones que tenía en su cara, rodilla, espalda, cómo quedaron las cosas, una palmera que en su macetero dejó llena de hoyos. Le sacó una foto a su cara, a un moretón que tenía al lado derecho.

Cuando se conocieron en Linares, eran amigos. Ese 28 de marzo los dos se dieron cuenta de que había algo especial. A él le gustó y lo cautivó. En junio de ese



año empezaron a conversar mucho más y notaron que había algo más que fue creciendo con el tiempo. El 22 de agosto de ese año fue la primera vez que estuvieron juntos y se dieron cuenta de que podían tener algo. Ahí cambió el estatus de la relación. Es difícil explicar en qué se convirtió por la lejanía, su trabajo, la pandemia. Había un interés sentimental entre los dos. La relación cambió a un interés sentimental mutuo.

Tras eso, a ella le fueron sucediendo cosas, cosas que Ricardo hacía hacia ella. Era complicado ayudarla o contenerla. Había un audio que recuerda, de muchos, donde le decía si colocai una denuncia más te mato maraca conche tu madre. Asume que con la denuncia que ella colocó tras el 27, este señor la empezó a amenazar con el tema de las denuncias. Tenía otros audios más, más de 200 audios, ciento y algo de pantallazos e información. Recuerda también uno con exactitud, partía con como ni los tiburones que colocaste en la reja te van a salvar maraca culiá y las cámaras se hackean y agradece que no te llenaron la casa de plomo los mandados porque estaban tus hijos maraca conche tu madre. Ese tenor de amenazas le hacía este hombre y era prácticamente todos los días. Claudia mandó a colocar los tiburones que van soldados en la parte de arriba de la reja. Recuerda que él se jactaba de que ganaba mucha plata por el tráfico de cocaína. Otro audio donde está con un interlocutor con el que se jactaba de lo mismo, de los tiburones y las cámaras donde Vega preguntaba compadre o compañero, si me voy pa adentro tú te puedes hacer cargo del negocio, y el interlocutor le decía que si necesitaba plata le podían depositar un millón si quería para darle comida a los niños. De ese tenor.

Sobre esta causa, a grandes rasgos sabe que Vega intervino un sistema o programa de su trabajo y cambió cosas, no sabe qué. Sí que se metió a algo y cambió cosas y pidió dinero a más de una persona. Eso se lo dijo Claudia. Él se refirió a estos hechos. Cuando el 1 de julio del 2020 declaró ante el fiscal, el primer audio que se escuchaba decía más menos oye Claudia, voy a hablar con esos huevones y les voy a decir la verdad de que yo soy el culpable así que quédate tranquila. Lo escuchó 50 veces, por eso lo recuerda. Con Vega no habló personalmente. Sí lo vio un par de veces.

Sobre esos audios y pantallazos que mencionó, sobre si alguno se refirió a los hechos de la causa, fueron muchos, de distinta índole y tipo. Sobre algunos, en lo que era audio había algunos muy similares a los que ya comentó, donde reconocía su participación en los hechos e inclusive le pedía perdón, que diría la verdad y lo



perdonara, que quería volver con ella y diría la verdad, que daría la cara, que así se lo había enseñado su papá. En otro hablaba del sumario, donde también decía que diría la verdad. También otro en que se daba vuelta la chaqueta y la trataba de lo peor y que la iba a dejar sin pega, que la iba a matar. Más le llamaba la atención, dos o tres audios, donde se jactaba de tener un trato directo con el fiscal Caroca. Decía que Caroca sabía que él era el culpable de lo sucedido pero a quien buscaban era a Claudia. Hay audios y Whatsapp que estaban en su teléfono que decían lo mismo en su base. Decía que ante la oferta del fiscal Caroca no se podía resistir y que a la que van a cagar es a ella maraca tal por cual, que iba a tener que vender empanadas a la calle conche tu madre. Él entregó ese material en su declaración ese 1 de julio. A las 14:28 horas entró a la Fiscalía. Estaba citado a las 14:30. Lo hicieron pasar a una sala con un Policía de Investigaciones de apellido Gutiérrez y un fiscal. Le pidieron datos personales y por qué quería declarar. Dijo que sabía lo que había hecho Vega a espaldas de Claudia y que tenía material para aportar. Una de las primeras cosas que hizo fue presentarles el audio desde su teléfono donde Vega reconocía, el que señaló antes. Cuando hizo eso, explicando además que tenía audios y conversaciones de Whatsapp y pantallazos, con amenazas de muerte a él también con un audio y pantallazo, donde dijo que sabía dónde vivía y trabajaba y que donde lo pillara lo mataría. Lo amenazaba a él porque creía que él tenía una relación con Claudia, cuando su relación empezó después de que él se fue de la casa. Ese día dijo al fiscal que esa era una prueba que tenía para aportar y lo hizo escuchar ese primer audio y él, sobre la misma, le quitó el teléfono y le dijo que estaba bajo juramento, que tenía que decir la verdad y que le iban a requisar el teléfono. Preguntó por qué si venía a aportar voluntariamente. Tomó el teléfono y puso otro audio y le dijo que no lo podía tomar. Insistió en que venía a aportar y que los audios se los podía enviar o copiar, que no podía estar incomunicado ni tenía plata para comprar a otro teléfono. En eso llamó a una jueza entiende para que le incautaran el teléfono y no puso objeción. Al final firmó su declaración y el acta de entrega del teléfono. Eso a las 4:00 pm. Cuando el fiscal le tomó el celular de forma violenta, por no decir lo menos, y procedió inmediatamente a revisarlo entero. El Policía de Investigaciones tomaba nota en un notebook. El señor Caroca le tomó el celular y empezó a revisarlo íntegramente y sus preguntas hacia lo que venía a aportar, cambiaron abruptamente, le empezó a preguntar cosas personales, su relación con Claudia. Le decía que tuviera cuidado con lo que decía porque si mentía lo podía formalizar por



obstrucción a la justicia y mañana mismo lo podía meter preso. Se empezaron a jactar entre él y el PDI porque no tenía clave el teléfono. Sobre la marcha, mientras el fiscal llamaba a la jueza, el Policía de Investigaciones le volvía a insistir en que dijera la verdad porque estaba bajo juramento o si no iba a dormir en un calabozo. Se preguntaba por qué si sólo había ido a aportar. Finalmente autorizó la incautación del celular. Una vez que se lo incautaron, por ejemplo, como tenía todo asociado a él, su correo, redes sociales, podría haber cambiado el correo o la clave de su correo para que no quedara abierto. Se hizo otro correo para no dar pie a que hablaran. Ya lo estaban presionando con meterlo preso por obstaculizar la investigación, pensó que si bloqueaba su correo quizás qué iban a decir. Empezó a declarar, puso uno o dos audios al fiscal, él le tomó el teléfono. Eso fue antes de firmar la autorización de incautación que firmó a las 16:00 horas cuando terminó de declarar. En ese intertanto navegó en su teléfono.

En este punto la Defensa de la acusada del Pino Acuña le exhibió la prueba denominada en el auto de apertura como “Un celular marca Samsung modelo A – 31 incautado a Jonathan Rebolledo Duran”, y al verlo señaló que es su celular por la información que tiene, la misma carcasa, tiene parte de la información que manejaba, su correo. La pantalla de inicio tiene la foto de Claudia. Es modelo A31. También puede ver su correo, que ni recuerda ya, jrebolledoduran10976 cree. Eso le permite decir que es su teléfono. Además, solicitó que se lo devolvieran en cuatro ocasiones y se lo devolvieron tras dos años, cuando entiende ya se había terminado la investigación cuando, al incautárselo, el fiscal dijo que en no más de un mes tendría el teléfono de vuelta. Lo pidió dos veces al señor Gutiérrez vía correo y la tercera vez lo bloqueó. Ninguna de las cuatro veces le respondió. Cuando el 6 de mayo se lo entregaron, revisó esa información que quiso entregar el 1 de julio y se encontró con una sorpresa desagradable. Fue a la carpeta de Whatsapp y no había Whatsapp, no estaba ni el ícono de Whatsapp ni la aplicación, la habían borrado. Como no podía acceder y el teléfono estaba desactualizado, para poder revisarlo lo actualizó y la sorpresa que se llevó fue que se fue al correo donde tenía información guardada y al abrirlo, revisó y se dio cuenta de que en la papelera de mensajes de Gmail había cuatro correos, dos de ellos en que el fiscal Caroca se envía información de su teléfono al de él, a su correo personal, y en esos correos que él se reenvió sale la hora, 15:21, cuando ya le había incautado el celular y no había firmado todavía el acta de entrega, y más de 200 audios que envió a su correo



personal y trató de eliminar esa información y quedó ese registro en la papelera de Gmail. Después procedió a borrar la información del teléfono. Por ende, cuando mandó a periciar este teléfono, la información que él guardaba ya no estaba y por eso esa información no aparece en la investigación. Sobre esa información que tenía en su teléfono, puede resumirlo. Revisando el teléfono, se dio cuenta de que ingresó a declarar a las 2:30. Toda su vida ha usado reloj, no acostumbra ver la hora en el celular. Sabe que antes de las 3:00 llamó a la jueza y el acta de entrega la firmó a las 16:00. Por ende, mientras declaraba él se auto envió la información y borró la información. Hay otro correo desde su celular a las 16:58 cuando él ya no estaba en el celular. El fiscal lo acompañó del brazo hasta la puerta de la Fiscalía, como a un delincuente. A las 16:58 había otro correo enviado al correo lgutierrez arroba Policía de Investigaciones. Ese teléfono fue intervenido como quisieron, las veces que quisieron y manipularon la información que quisieron antes de periciarlo. Eso está comprobado porque están todavía aquí (señala la evidencia que se le exhibió) los archivos y los correos con las horas. Se puede acceder a abrir las pantallas para darse cuenta de lo que dice.

Luego la misma Defensa le mostró la prueba singularizada en el auto de apertura como “205 fotografías del celular de propiedad del testigo Jonathan Rebolledo Durán que el mismo las tomó respecto en la forma que le fue devuelto el celular por parte de la Fiscalía”, de las que incorporó cuarenta y tres, y al verlas manifestó que corresponden a una foto de su correo, cree de la papelera, y esos cuatro correos son los que se renviaron mientras declaraba y no firmaba el acta de incautación de su teléfono. Le quitaron el teléfono a los 10 minutos de empezar. Lo hizo escuchar el primer audio, cree dos más y le dijeron que dejara el teléfono ahí y llamó a la jueza. No sabe si llegó la autorización de la jueza. Al terminar su declaración firmó el acta. Esta foto la sacó él. El teléfono se lo devolvieron el 6 de mayo y se demoró varios días en actualizarlo y entre el 10 y 11 hizo fotografías que se exponen acá. A una imagen del “Chat de Whatsapp”, es el primero correo que aparece de su correo personal al correo personal del fiscal. A otra de las fotos del mismo set donde se ve que a las 16:58, cuando salió del Tribunal, 16:10 máximo, estaba afuera, fue enviado a lgutiérrez. A los archivos que contenía el primer correo dirigido al fiscal, son imágenes en su mayoría, en formato de imagen y corresponden a pantallazos en su mayoría de conversaciones que le mandó Claudia con Vega donde, como explicó, hay capturas con insultos, amenazas de muerte, donde



reconocía sus hechos, le pedía disculpas y perdón. No se podía pinchar porque eliminaron esos Whatsapp del teléfono. Pinchaba y decía archivo no encontrado. Lo que se ve es un archivo borrado. Tomaron la información, la mandaron al correo del fiscal mientras declaraba y después los borraron. Cada programa dentro de un celular crea carpetas, pero al revisar su celular no estaba la carpeta de Whatsapp y dentro de Whatsapp se subdividen las carpetas y están las de enviado, recibido, imágenes, video, pero no había nada y dentro de ellas estaban los archivos que mencionó, que eran 200 y tantos audios y cerca de una cincuentena de pantallazos que no están. En su teléfono nada de información había. Logró recuperar, encontrando un técnico en computación, cierta información que tenía en otra carpeta de documentos, entre ellas las fotos que tomó a Claudia de los moretones del 28 de septiembre cuando Vega la golpeó, de la rotura del celular, la mesa y del macetero de la palmera, de voucher que le mandó de respaldo y un audio de Vega. Deben ser una docena de archivos, que fue lo único que se recuperó porque no estaba en Whatsapp. A una secuencia y se puede contar la cantidad de imágenes y de audio que fueron borrados y enviados al fiscal. Se ve el ícono de foto y cuando es audio aparece un audífono. A “decl Jonatan Rebolledo”, que es otro correo de las 15:21, el primer correo que el fiscal se envió a su correo con la información de su celular. Se ve el correo, con 200 o 250 archivos adjuntos. A más imágenes. A “Jonathan”, que es un correo de las 15:23, en un lapso de 10 a 15 minutos él se envió tres o cuatro correos a su correo personal con información de su teléfono que después borraron. A más archivos, los mismos tipos de archivo y como el archivo no está, sólo refiere el nombre. A otro correo de las 15:22 horas, sigue mandándose correos. Se ve que corresponde a la declaración que él tenía preparada porque el fiscal dijo que podían llevarla impresa y la llevó en su celular por cualquier eventualidad. Esta declaración la empezó a hacer como en mayo 2020 y en julio 2020 la envió a los abogados de Claudia, Huber, que le respondió el 2 de junio y ese correo es el que Gutiérrez de la Policía de Investigaciones se envió a las 16:18 cuando él no estaba en la fiscalía. A cuando terminan de pasar las imágenes y empiezan los audios, los “ptt” o audios de Whatsapp. Los audios no los pudo escuchar o bajar. Todo eso también estaba. Lo tenía todo registrado y clasificado. Demoró más de un mes en lograr registrar todo. A “FWD: declaración final”, que el fiscal también se lo envió a su correo personal, era la declaración que tenía en su teléfono. A más audios que se pueden contar porque tienen números distintos, ninguno lo pudo recuperar. A lo mismo. Los sumó



y eran cerca de 227 audios y encontró sólo uno para recuperar porque lo tenía guardado en otra carpeta. Al mismo listado. A más audios borrados, es el mismo correo, es sólo un correo con 220 y tantos audios y otros.

Tiene fotos del 28 de septiembre después de que Ricardo Vega golpeó a Claudia y le rompió el celular. Además de esas fotos que sacó al recuperar su celular, grabó videos de cómo encontró el celular y de un proceso donde explica y va accediendo al Whatsapp y no puede y cómo accede al correo y se da cuenta de que el fiscal se auto envió a su correo personal toda la información.

Acá la Defensa que lo presentó exhibió a este testigo la prueba llamada en el auto de apertura como “Siete videos grabados por el testigo Jonathan al momento de recuperar su celular que le fue incautado y periciado por la Fiscalía que recae en la evidencia NUE 5948328, devuelto el 05 de mayo de 2023 y video capturado el 11 de mayo de 2023”. En el primero aparece un hombre que se asemeja al señor Rebolledo Durán, que dice que es testigo en la causa de Claudia del Pino, da el RIT, del celular incautado en la declaración voluntaria el 1 de julio del año 2021 y que le fue devuelto el 6 de mayo del año 2023 y hoy 11 de mayo del 2023, en su domicilio de Talca, hace este video para ver las condiciones en que le devolvieron su celular. Tiene una quebradura en la pantalla. Está además revisada la información que tenía en carpetas identificadas con información de esta causa que quería mostrar al fiscal en su declaración y que estaba identificada con sus nombres respectivos en Whatsapp y en su correo Gmail del momento. En el segundo se ve un teléfono sobre una mesa. La voz dice que el teléfono tiene una quebradura en la esquina y está sin carga, no se puede encender, procede a cargarlo, dice que se aprecia sin carga y que lo dejará enchufado. En el tercer video la voz dice que continúa con la revisión del teléfono, que se ve la quebradura, que el teléfono está con la carga al 100% y procederá al encendido. Se ve que prende y dice Samsung modelo A31. Dice que está con la foto de bloqueo que tenía y lo primero que aprecia es que en una parte vacía había un ícono de Whatsapp y ya no está, que sí está en otra pantalla y que como estuvo casi dos años guardado el teléfono, pide se configure la fecha y la hora. Dice que no se puede acceder a Whatsapp, que algo pasa. En el cuarto video la voz dice que ingresa al Gmail y también pide actualización, que le interesa revisar un correo del 30 de junio que el fiscal mostró como prueba y la última fecha del celular es 1 de julio del 2021, que fue cuando le incautaron el teléfono en la declaración que fue a dar ante el fiscal Caroca y el comisario Luis Gutiérrez, que esto fue a las 14:30



que empezó esa declaración, y busca el correo que él aportó como evidencia de que su declaración fue prácticamente hecha por Claudia del Pino, lo que aclaró y desmintió en esa declaración. Revisa correos. Pasa al 29 y dice que ese correo no está. Revisa el 20 de julio. Dice que revisará el resto de las carpetas de Gmail y dice que ve que hay correos enviados el 1 de julio, que abre, y que aprecia con gran sorpresa que terminada su declaración alguien envió el correo que buscaba a la cuenta de Luis Gutiérrez a las 16:59, que esa es la declaración que el fiscal Caroca ofrece, haciendo entender al Tribunal que fue Claudia del Pino hizo esa declaración, lo que aclaró y aclarará. Dice que revisará la papelera. En el quinto video se dice que sigue con la revisión, que está en la papelera del correo de Gmail y que abrirá el primer correo, con fecha 1 de julio, el día de su declaración donde el fiscal y dice chat de Whatsapp con Claudia Dpa original. Dice que hay algo raro, son muchos archivos, imágenes, audios. Dice que se devuelve y se da cuenta de que mientras él terminaba su declaración, porque la hora es 15:26 y empezó la declaración a las 14:30, estos archivos fueron enviados desde su celular al correo personal del fiscal Caroca. Eso mientras su teléfono fue incautado. Dice que los archivos no se pueden descargar o abrir porque seguramente fueron eliminados de su celular. Ese correo al correo personal del fiscal fue cuando el celular ya había sido incautado. En el sexto video se dice que sigue revisando el celular, que éste es el video 6 y que le llama la atención que dice declaración de Jonatan Rebolledo, que es la supuesta declaración que el fiscal aporta en su momento en formato Word, y el perito dice que los archivos no se pudieron descargar y aquí se prueba que no es cierto y que además, que el fiscal haya enviado a su correo personal sus archivos que eran sus pruebas que logró juntar con Claudia del Pino, además los dejó en la papelera como mostró, él intentó eliminar esa información deliberadamente. Siguen las declaraciones que claramente él se las reenvía a su correo personal y luego las trata de eliminar del celular cuando su teléfono ya había sido incautado, estaba en su poder. Que abre otro correo que vuelve a decir su correo personal pcarocaluengo. Dice que como programador, si esos archivos se conectan a un notebook por cable, el dispositivo se transforma en disco duro y se pueden descargar todos los archivos y es imposible que no se hayan podido descargar y además es un teléfono de última generación con todas las posibilidades de descargarse. Dice que va a revisar los borradores con los archivos no enviados y que aprecia que nuevamente se trata de enviar la información del chat y aparecen muchos audios nuevamente que son los que él guardaba en su



celular en Whatsapp que fueron eliminados, es la misma lista anterior, son muchos. Dice que no aparece el destinatario porque seguramente, por la cantidad, el peso no permitió el envío, o sea, trataron de enviar esta información al correo personal y quizás a quien más y los borraron, los archivos que exculpan a Claudia del Pino de los actos que se le imputan. En el video siete se dice que, siguiendo con la revisión el celular, como comentó en el video anterior, los celulares se pueden conectar a un notebook y usarlos como disco duro o pendrive y se ve que conectó el celular, que se ve Galaxy A31, que es el mismo dispositivo, y que lo abre y se puede ver la lista de carpetas donde están todos los archivos que el celular usa, se ve la carpeta Android, datos, alarma, un sinfín, DCMI para las imágenes de la cámara y video, pero si baja se puede dar cuenta de que dentro de todas las carpetas, la única aplicación que posee una carpeta propia es Whatsapp y puede ver que la última carpeta es voice record o grabadora de voz y no está la carpeta de Whatsapp. Dice que, entonces, esa carpeta tiene subcarpetas y la carpeta fue eliminada y por ende la información que tenía adentro. Dice que concluye que el 1 de julio del 2021 fue a declarar voluntariamente ante el fiscal Caroca, a las 14:30 empezó esa declaración, y el celular se le incautó a los 15 minutos aproximadamente después al hacerle escuchar un audio donde Ricardo Vega reconocía haber hecho él todas estas cosas de que tratan de inculpar a Claudia y como mostró en los videos anteriores, a las 15:05 el fiscal trató de enviar un correo que, por su volumen, no fue enviado, no sabe a qué destinatario, y quedó en la carpeta borradores, y a las 15:26 él volvió a enviar un correo estas vez con sólo archivos de audios y algunas pocas imágenes a su correo personal, donde hay un total de 150 y algo audios, donde había todo tipo de audios donde Vega no tan solo reconocía la autoría de los hechos, sino que también había amenazas de muerte, de extorsión, insultos y un sinfín de cosas e imágenes de conversaciones con Claudia donde él por escrito asumía su culpa y que alguna vez le dijo vieran la posibilidad de sacar copia o guardar en otro dispositivo por seguridad. Tras ese envío del señor Caroca a su correo personal, él eliminó la información y trató de eliminar el correo donde se auto envía estos archivos a su correo personal y quedó en la papelera. Obviamente cuando el celular se envió a la pericia iba sin esa información. Lo dice porque tuvo acceso a la pericia de su celular y los archivos que mantenía en su equipo no se incluyen, no aparecen siquiera mencionados. Entonces, dice, se eliminaron esas carpetas y obviamente el peritaje se hizo sin esa información. Dice que en la pericia no están y que saquen los demás sus



conclusiones. Que él hizo estos videos para que se vea la forma en que se procedió a hacer esta investigación y que toda la información que exculpaba a Claudia de los cargos que se le imputan estaba ahí y fue eliminada deliberadamente y obviamente son capaces de hacer cualquier cosa o lo que encuentren conveniente para quienes están a cargo de esta investigación. Dice que saquen sus propias conclusiones de cómo se ha actuado en esta investigación.

Tras observar esos videos, el señor Rebolledo Durán manifestó que decidió hacerlos antes de encender el celular porque lo primero que vio de su teléfono fue que venía con la pantalla quebrada y le llamó la atención. Se ve al tomar el teléfono. Después de tener el teléfono por dos años incautado, que se había comprado dos meses antes de la declaración, también quería revisar que estuviera la información y cotejar. Cuando logró cargarlo y grabar el primer video, actualizarlo, accedió y no vio la información de Whatsapp, le llamó poderosamente la atención.

Agregó que la pericia a la que se refirió la vio después de recibir el celular. Le llamó la atención tras ver esto, lo conversó con Claudia y ella le envió una copia del informe y cotejó la información que no era nada que ver con lo que él tenía ahí. El informe pericial lo vio después de los videos. Comentó lo que vio a Claudia y ella le comentó que no dijeron lo de los audios. Esos videos los hizo para demostrar, desde su punto de vista, el mal actuar del fiscal. Había amenazas de muerte a Claudia y sus hijos donde Vega decía que iba a mandar plomo y balas a la casa. Eso lo considera importante y si el fiscal tuvo la oportunidad de verlas y más encima después de eliminarlas, ella quedó desprotegida. Por eso hizo el video, para mostrar a los jueces lo que el fiscal es capaz de hacer. Si él es capaz de hacer esto, es capaz de hacer cualquier cosa.

El correo de Huber y ella sí estaba en el celular. Nada más había. Todo fue eliminado. Estaba sí ese correo, que como fue enviado desde un pc, no del celular, quedó en la nube de Gmail y se puede descargar. Mostró el correo que pinchó y da la opción de descargarlo y eso es porque no fue enviado del celular, fue enviado de un notebook y es distinto porque quedó en la nube, no grabado en el dispositivo. Se veían varios correos incluido ese, que mostró en un video. Esos correos fueron enviados mientras él declaraba. Él firmó su declaración y la hoja en que entregó su celular a las 16:00 aproximadamente. Estos correos fueron enviados de su correo personal al personal del fiscal y después trató de eliminar esa evidencia porque no



están en la carpeta de enviados sino que en la papelería. Eliminó la información pero no la papelería.

En una pantalla aparece su correo y otros correos como de AFP. Sobre si esos otros correos seguían en el celular, sí, se podían abrir. En el fondo no fue toda la información eliminada, específicamente la que tenían que eliminar para conveniencia, desde su punto de vista. En esa carpeta de Whatsapp estaba casi toda la información que le mandó Claudia. Había cierta información que respaldo en otra carpeta pero también fue eliminada. Esas carpetas, cuando le entregaron el celular y pidió que algo rescataran, se rescataron unas pocas imágenes y audio. Lo que no tenía que ver con la causa sí se mantiene, salvo lo de Whatsapp.

Cuando le tomó el fiscal el teléfono, no tuvo la oportunidad de tocar el teléfono. Estaba el Policía de Investigaciones amenazándolo de que lo iba a meter preso.

A la Defensa del acusado Vega Guerrero respondió que, sobre su profesión u oficio, se dedica a gerente zonal de una empresa de materiales de construcción, estudio programación en el colegio y administración de empresa en Inacap. Trabaja en una empresa con casa matriz en Santiago. Él trabaja acá en una sucursal camino a San Clemente.

Sobre el señor Vega, lo que presencié fueron dos llamadas por teléfono en que hablaba con Claudia y sintió los gritos de él directamente en el teléfono.

Sobre la acusación contra del Pino, entiende que Vega intervino sistemas o programas de la Fiscalía y cambió ciertas cosas con lo que cobró dinero a los involucrados en esos hechos. Eso se lo dijo Claudia, le consta por lo que ella le dijo.

Sobre que Vega amenazaba a Claudia, es cosa de ver las fotos de Claudia con los moretones. Si hubiese cumplido las amenazas no estaría acá.

Sobre que Vega se jactaba de que ganaba dinero por la venta de droga, estaba en los audios que fueron eliminados. Eso lo dijo después de octubre o noviembre 2020, en ese rango de fecha. No sabe si hay denuncias contra Vega.

Esos audios que nunca pudimos oír, entiende no se periciaron porque se eliminaron antes de la pericia.

Ahora no es pareja de Claudia, hasta hace 2 o 3 meses. Hay un cariño obviamente cuando se conocen personas especiales. Declara porque acá se cometió una injusticia sobre la información que él tenía, porque hubo amenazas de muerte



contra Claudia y se comprometió a ayudarla mientras esto durara. Es una persona íntegra y cumple su palabra.

Sobre si Vega estuvo privado de libertad por esta causa, no lo sabe.

Sobre la eliminación de audios y archivos de la causa, se eliminaron el 1 de julio, aparece en los correos. Cuando grabó esos videos estaba solo, le nació en el momento. Sobre la credibilidad que se le puede dar a eso, responde que acá está su teléfono y se puede revisar.

No está enterado de los movimientos de este juicio. Los días que puede trasladar a Claudia desde y a Talca. 15 días la ha trasladado. Le comenta del juicio pero no detalla, no tiene idea de detalles.

Al Ministerio Público contestó que no compartió personalmente con Ricardo Vega. No ha conversado con él, solamente cuando, como mencionó, Ricardo tomó el teléfono cuando hablaba con Claudia. Una vez lo vio afuera de la casa de Claudia, pero no habló con él. Las amenazas que mencionó no fueron denunciadas a Carabineros.

La declaración con el fiscal comenzó como a las 14:30 y duró como una hora y media y luego firmó, a las 16:00, el acta de incautación del teléfono. Eso el 1 de julio del año 2021. Antes tuvo contacto con los abogados Huber Hidalgo y Víctor Moraga. Entiende ellos eran los abogados defensores de Claudia y a ellos envió su declaración. Posteriormente intervino en la Fiscalía retirando copias de documentos y de evidencia a nombre de Claudia del Pino. También revisó los peritajes, pero solamente el que correspondía a su teléfono, que era un peritaje propio de la carpeta investigativa. Se lo entregó Claudia tras revisar él su teléfono.

Sobre si también tuvo acceso a la declaración del sumario de Claudia, no. No lo recuerda en realidad. Tampoco recuerda si también tenía la declaración de Claudia en la investigación penal. Hay información que ella le envió, pero no recuerda cuál es cuál porque no sabe los nombres.

Sobre las fotografías que acabamos de ver, sabe que le envió la información, pero da nombres con códigos, con número, y no recuerda exactamente qué archivo estaba en su correo. No recuerda si en las fotografías que le mostró la Defensa, aparecen correos de Claudia hacia él con declaraciones.

Sobre si entre las fotografías que le enviaron hay una del 30 de junio del 2021 donde Claudia le envía una declaración final, correcto, esa se la envió a Huber Hidalgo el 1 de junio del 2020 y él le respondió el 2 de julio del 2020.



Sobre una declaración enviada por Claudia a él con la declaración final, hay una declaración final. Ella estaba asustada con lo que vivía y le envió información. Él no tenía computador como para digitar cosas de ella. Sí hay una declaración enviada.

En las fotos que le mostró la Defensa aparece en ella el día y la hora en que se tomaron, en cada archivo, cuando se saca una foto, aparece la fecha. En lo que vimos acá, no hay registro. Sí explica en los videos que era el 11 de mayo, que fue cuando tomó las fotos.

Cuando hizo ese ejercicio que mostró de no poder descargar los archivos, el teléfono estaba sin internet. Le tuvo que convidar y se comprobó que no se podía bajar. Cuando ese ejercicio tenía internet, le convidaba la del teléfono con el que grababa.

El Ministerio Público procedió a exhibirle el video número cuatro de los que antes había mostrado la Defensa de del Pino Acuña a este testigo, y al verlo señaló que, en los 52 segundos, se ven un par de barras. Señala que no aparece con wifi, pero tiene la señal de teléfono. No aparece 3G o 4G. Se le convida internet al teléfono para que funcione. Cuando hizo ese ejercicio, el teléfono tenía el chip original que todavía está ahí. Ese no tiene internet. Tuvo que convidarle internet. En el video le tenía que dar internet a medida que hacía las cosas. Seguramente en algunos videos se muestra que no y en otros sí. Se puede hacer la prueba en el teléfono ahora convidándole internet.

Antes del 1 de julio tuvo la conversación con los abogados Huber Hidalgo y Víctor Moraga.

Sobre esos videos y audios que alega como desaparecidos, eran más de 220. No lo recuerda con exactitud. Sobre si sabía que ese teléfono fue periciado en su totalidad, sí. Le pareció incorrecto que el fiscal se enviara a su correo personal mientras él declaraba y no firmaba el acta de incautación.

El celular, el fiscal Caroca se lo quitó prácticamente de las manos poco después de empezar su interrogatorio, cuando le mostró el primer audio de Vega. Eso antes de las 15:00. Él firmó a las 4:00 de la tarde. No presentó reclamos de ello porque el fiscal lo amenazó de meterlo preso por obstrucción a la justicia. Comentó el tema a los abogados Hidalgo y Venegas pero ellos tampoco supieron darle una respuesta en el momento y por lo mismo tampoco hizo algo. No denunció, sólo lo que contó ahora.



Ese teléfono lo recibió en mayo del 2023. Sobre si entregó a un técnico especialista para peritaje, no. Lo trató de llevar a un lugar para ver si le podían rescatar información. No a un especialista.

Durante todo el juicio ha trasladado a Claudia, no siempre de ida, no siempre vuelta, es relativo porque depende de su trabajo. Aproximadamente, del total, unas 15 veces la ha venido a dejar y no todas a buscar. Le comentó generalidades de lo declarado por Pedrito y Juanito. A él le colapsa esta situación. Está en esto porque se comprometió a ayudarla. Sobre ese Juanito y Pedrito, no se le grabaron los nombres de las persona. No le comentó lo que se declaró en el juicio. Solamente cuando le tocó a Vega o cuando le tocó a no sabe quién o que hoy día declaró un perito x, pero no sabe detalles y no le preguntó por esos detalles. Ella contó cuando declaró Vega y le informó nada, solamente estaba colapsada y no le gusta ahondar cuando la ve así, trata de desviarle el tema. Sobre si le contó cuando ella dio su versión, tampoco, dijo que colapsó y le tocó declarar. Le contó cuando declaró su mamá. No le dio detalles y él no le preguntó, evita detalles porque ella colapsa y no es la idea. A Paulina Cisternas la conoce, es una amiga o ex amiga de Claudia. Una o dos veces estuvo con ella. No sabe cuándo declaró ella.

Sobre si tiene resentimiento hacia Ricardo, es lo que escuchó en audio y vio en pantallazos que enviaba, las amenazas que hacía y escuchó dos veces cómo él la golpeaba mientras hablaba con ella. Sobre por qué no denunció, cuando quisieron hacer la denuncia Vega le dijo que si colocaba otra denuncia la iba matar. Le dijo que lo hiciera. Entiende que ella puso dos denuncias, pero no sabe el término de si las retiró o continuaron.

Sobre si tiene animadversión hacia el fiscal que lo acompaña (al fiscal Patricio Caroca), siente que hay cosas que no son correctas. Si no ha firmado todavía su acta de incautación del teléfono y él se envía información y además la elimina, siente que hay un acto de mala fe. Desde su punto de vista hay un acto de mala fe.

El policía Gutiérrez era quien tomaba la declaración. No sabía que él declaró. Sobre si sabe que ese policía declaró que quien había enviado esas declaraciones a los correos particulares e institucionales de Gutiérrez fue él, preguntó cómo se explica que él salió de la Fiscalía a las 4:00 y el correo dice 16:58. Hay un correo que dice lgutierrez arroba investigaciones.cl y la hora es 16:58 y él salió a las 16:00 horas de la Fiscalía y el teléfono ya estaba requisado. Los del fiscal, lo hizo apenas él le incautó el teléfono y lo empezó a revisar y no lo dejó tocarlo



más y eso fue antes de las 15:00 horas y él ingresó a las 14:30. Fue antes de las 15:00. Está seguro de eso. Sobre si pudo ser a las 15:26 horas, imposible porque le puso el primer audio y le dijo que lo dejara ahí y de ahí no lo pudo tomar más.

Ese 1 de julio del 2021, llegó a declarar a la Fiscalía con Claudia, quien declaró después que él y él la esperó. A ella le contó lo que le pasó con el teléfono. Pensaron con Claudia denunciar, pero los abogados dijeron que quizás no era conveniente, que esperaran y en esa espera ella cambio de abogado y se diluyó el tema.

El Ministerio Público procedió a exhibirle la fotografía número ocho del set de imágenes que en el interrogatorio le había mostrado la Defensa de la acusada del Pino Acuña y, al verla, indicó que la fecha que aparece en ese envío de correo es 1 de julio de 2021 a las 15:23 y dice enviado de Jonathan a Patricio Caroca. Sobre que dijo que eso es imposible porque eso ocurrió antes de las 3:00, respondió que dijo que a los pocos minutos de iniciar su declaración, el fiscal le arrebató el teléfono. Si se sigue la cadena de custodia de su teléfono tiene que estar la hora de la autorización, y eso fue antes de las 15:00 y ese correo dice 15:21. Antes de las 3:00 le incautó el teléfono y llamó a la jueza para incautar el teléfono

En su declaración autorizó al fiscal para que revisaran y extrajeran el contenido de su teléfono. Sobre la cadena de custodia, se imagina estará en alguna parte. Lo que le entregó la Defensa, no tiene la cadena de custodia.

Al Querellante contestó que a su correo Gmail podía acceder libremente desde cualquier otra plataforma. No quiso acceder de ningún lado porque quedaría registro y porque ya lo habían acusado de obstrucción a la justicia y decidió no intervenirlo ni cambiar claves ni acceder a ese correo. Podía acceder, pero no lo hizo.

Al Tribunal aclaró que, sobre si le consta o no que los archivos que estaban en su teléfono que ahora no puede encontrar están en la carpeta investigativa, no le consta al 100%. Sólo sabe que tenía 200 y tantos audios y no están en su teléfono, ni su Whatsapp ni la información guardada, aparte de los correos guardados que se trataron de eliminar. En la pericia que se hizo a su teléfono aparecían algunas cosas, pero un 10% del 100% y no eran los audios más importantes, como donde Vega reconocía su culpa y los pantallazos de amenazas de muerte, nada de eso estaba.



En un nuevo interrogatorio, al Ministerio Público respondió que vio el informe pericial del teléfono. Sobre si aparece ahí que él le haya enviado al fiscal un correo electrónico de su teléfono, no lo recuerda.

Respecto a dicha argumentación, cabe primero destacar que el testigo señor Rebolledo Durán reconoció ante estrados que, durante el juicio oral, trasladó durante 15 días al menos una vez a la acusada del Pino Acuña desde Linares a Talca y que en esas oportunidades ella le comentó generalidades de lo declarado por ciertos testigos o peritos. Ello pugna con lo dispuesto en el artículo 329 del Código Procesal Penal en el sentido de que, “antes de declarar, los peritos y los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír ni ser informados de lo que ocurriere en la audiencia”. Sin bien en ese artículo no se apareja una sanción específica a la infracción de dicha prohibición, ésta no puede sino generar un detrimento sustantivo de la fiabilidad de los dichos del testigo que, como en el caso del señor Rebolledo Durán, recibió de uno de los acusados información de lo que ocurrió en la audiencia de juicio oral. Por ello, jurídicamente no procede asignar a sus dichos mérito probatorio relevante, sobre todo si, al contrario de lo planteado por esta Defensa, sí aludió a temas que habían sido ventilados por las pruebas producidas con anterioridad, como lo que días antes había testificado el señor Gutiérrez Gutiérrez sobre los detalles de la declaración que el señor Rebolledo Durán prestó ante él y un fiscal y de lo que sucedió con su teléfono.

En efecto, el comisario de la Policía de Investigaciones Luis Gutiérrez Gutiérrez, más de una semana antes de la comparecencia ante estrados del señor Rebolledo Durán, refirió que a requerimiento del defensor Huber Hidalgo se coordinó tomar declaración a Claudia del Pino y a un testigo que ella aporta, Jonathan Rebolledo, para el 1 de julio del 2021 en la unidad. Se presentó primero Jonathan a prestar declaración voluntariamente, dijo para aportar y ayudar en la causa. Ya sabían que ellos mantenían un vínculo amoroso o sentimental, lo que se ratificó con la información que obtuvieron. Llamó la atención que cuando dijo que se presentaba voluntariamente y le preguntaron si tenía un vínculo sentimental con Claudia, lo negó. Dentro de su relato, no mencionó la causa que investigaban, aludió a que es testigo de oídas de supuestos malos tratos o amenazas de parte de Ricardo a Claudia. Relató que mantiene información relevante en la investigación, que la deseaba aportar posteriormente y que en ese instante deseaba aportarla, pero tenía primero que validarla o analizarla bien. Eso les pareció extraño porque iba a aportar



antecedentes relevantes que decía que tenía y estaba dubitativo. Le pidieron que si tenía antecedentes relevantes, que los aportara. El fiscal presente le dijo que si no accedía iba a pedir una orden para el análisis del teléfono y respondió que accedía a la entrega de la información que mantenía registrada en su teléfono. Por lo mismo se levantó un acta de entrega voluntaria firmada por Rebolledo, quien dijo que era información relevante para la investigación. El teléfono no tenía patrones en su momento y se indicó en el acta. En la declaración que hizo no aportó mayores antecedentes sobre lo investigado, solamente que cuando ayudó a Claudia a trasladar enseres de Linares a Talca, Claudia le dijo que tenía un manual de manejo de los sistemas y que le parecía extraño que no estuviese porque ahí aparecía todo sobre el manejo de sistemas y que eso le pareció muy extraño, que ese manual no estuviese donde debía estar porque era un manual de usuario muy básico que permitía entrar a los sistemas y permitía hacer todo. Sobre si se obtuvo la orden judicial, se estaba gestionando porque Rebolledo primero aceptó, después se negó, estaba dubitativo y el fiscal optó por gestionar la orden, pero después lo entregó voluntariamente como se plasmó.

Añadió que, sobre la revisión del celular de Jonathan Rebolledo, se mandó a periciar, se extrajo la información del teléfono y en agosto encontraron conversaciones por Whatsapp, grabaciones que no estaban originalmente en el teléfono de Ricardo Vega, registros de audio que mantenía. Lo más lógico era que los mantuviese Claudia del Pino por la fecha de los audios y lo que en ellos se indicaba. Ella aportó un audio, pero había más audios que se extrajeron del teléfono de Jonathan que hacían alusión a audios donde Ricardo Vega, de lo que recuerda, le saca en cara que esto irregular del cierre de la causa no lo hizo él, que era imposible porque cómo iba él a saber las claves de la señora Spiess de la Fiscalía, dio cuenta de la clave que manejaba en ese momento, que no tenía acceso a esas claves. Hay conversaciones de Whatsapp, fotografías. En la pericia que se solicitó, aparte de extraer conversaciones de Whatsapp y audios, se solicitó a los peritos extraer correos electrónicos que se habrían mandado. Esto previo a la declaración del 1 de julio del 2021. Había correos electrónicos de la primera semana de junio donde el testigo Rebolledo manda una declaración ya realizada supuestamente por él al abogado Huber, la declaración que él iba a entregar en la Fiscalía y le pidió a Huber que la revisara y que si había que hacer modificaciones, se lo indicara y el abogado le pide se lo mande por Word. Ese mismo correo es compartido por del Pino y



estaba dentro de los correos que no pudieron ser extraídos por no haber compatibilidad de los sistemas de los peritos, así que se tuvieron que fijar fotográficamente y se ve el envío de este correo entre Huber, Claudia y Jonathan y que un día antes de la declaración del 1 de julio, Jonathan le informa a Claudia que se reenvió. Dentro de los correos estaban las declaraciones que Claudia hizo en octubre del 2020 en el sumario, parece extrajeron información de ahí para coordinar las declaraciones posteriores. Alude a conversaciones de Whatsapp que ella guarda en su correo electrónico, al parecer sacó una especie de respaldo en esos correos a los que no se pudo ingresar físicamente, sólo fotografiarlos.

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña contestó que Jonathan quería cooperar con la investigación, pero se le solicitó la entrega de la información y estaba dubitativo. Ante ese estado de duda, el fiscal dio cuenta de que si no lo aportaba, solicitaría la orden judicial y mientras la gestionaba, Jonathan accedió a la entrega voluntaria y quedó en el acta ello y en la declaración. Lo entregó y el teléfono venía sin patrón. Parece eso sí lo consignó en el acta. En general, cuando se hace la incautación de una evidencia, al recibirla se levantan las actas pertinentes donde queda constancia del lugar, fecha, domicilio, la persona que entrega, la especie. Cuando se levanta esa acta, con el que entrega y los que intervienen, se lleva a la unidad donde se levanta un NUE y se guarda para, según las instrucciones del fiscal, remitirla. Cuando es un celular, se hace para llevarlo a pericia. La idea es que expertos lo examinen y extraigan toda la información posible. Cuando se entrega esa evidencia, eso se tiene que almacenar, cosa que no sufra un problema o deterioro. El NUE se da en la unidad. Al recibir la evidencia se sella de inmediato para preservarla. No es que quede sobre el escritorio o que alguien más la pudo tomar. Eso fue lo que ocurrió en este caso. El teléfono recibido de manos de Jonathan no quedó sellado en ese mismo minuto porque no tenían para embalarlo. Él lo mantuvo visible para trasladarlo a la unidad, la trasladó a Linares donde trabaja. Cuando le entregó el celular no lo manipuló, lo preservó. Recibió el teléfono, lo conservó, no lo manipuló y lo entregó a la unidad para el procedimiento de custodia. Ese teléfono quedó almacenado en la unidad. Sobre la hora en que Jonathan hizo la entrega voluntaria, fue como en el rango de las 3:00 o 4:00 pm. De ese minuto el teléfono quedó resguardado por él para que nadie lo tocara. En el acta debe estar consignada la hora. Tras un ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal, recordó que fue entre las 16:00 y 16:05 del 1 de julio que se entregó este



celular. Ahí estaba presente el fiscal Caroca. Jonathan en eso de que quería y no entregar información, le mandó un correo de su celular a su correo institucional. Esa información no recuerda qué era. Sobre si desde su correo el imprimió e incorporó a la investigación esa información, no lo recuerda. Lo esperado era imprimir ese correo para consignar qué información aportaba el testigo. No recuerda haberlo hecho. Tras incautar el celular terminó la declaración de Jonathan y pasaron a la declaración de Claudia de manera continua.

En este punto la Defensa exhibió al testigo una de las fotografías que forman parte de la prueba llamada en el auto de apertura como “205 fotografías del celular de propiedad del testigo Jonathan Rebolledo Durán que el mismo las tomó respecto en la forma que le fue devuelto el celular por parte de la Fiscalía” y al observarla refirió que corresponde a un correo electrónico y la dirección de quien recibe es la suya, es del 1 de julio del 2021 y proviene de Jonathan Rebolledo Durán a las 16:58.

De lo anterior, resulta evidente que el testigo señor Rebolledo Durán, en la audiencia, se refirió con sumo detalle a esa diligencia que ya había descrito ante este Tribunal el señor Gutiérrez Gutiérrez.

Sin perjuicio de lo precedente, lo que fundamentalmente reprocha esta Defensa es que, según los dichos del señor Rebolledo Durán, uno de los fiscales de la causa habría eliminado del teléfono que dicho testigo llevó a su declaración investigativa todos los elementos de prueba para poder sostener la inocencia de Claudia del Pino, elementos con lo que, si los tuviéramos, podríamos concluir que Claudia del Pino es probablemente inocente, pero no lo podremos saber porque esa información no se pudo recuperar. Agregó que ese teléfono no debió mandarse a pericia después de eliminarse toda la información que importaba a la Defensa para poder acreditar la inocencia de Claudia.

Dado que tal argumentación parte de la base de dar por suficientemente veraz lo declarado sobre el punto por el señor Rebolledo Durán, desde ya pierde decisivamente fuerza de convicción atendido lo ya expuesto sobre la credibilidad que se puede asignar a lo depuesto en juicio por aquel testigo.

Sentado ello, no huelga añadir que reiteradamente, tanto el último como la Defensa, afirmaron que el teléfono celular en cuestión, al ser periciado, carecía de la información que aseveran fue eliminada por el fiscal, pero esa supuesta pericia no fue incorporada al juicio, por lo que difícilmente estos Sentenciadores pueden tener



ello por cierto, sobre todo si el señor Gutiérrez Gutiérrez manifestó que el teléfono celular de Jonathan Rebolledo se mandó a periciar, se extrajo la información del teléfono y en agosto encontraron conversaciones por Whatsapp, grabaciones que no estaban originalmente en el teléfono de Ricardo Vega, registros de audio que mantenía, mientras que el señor Rebolledo Durán aclaró al Tribunal, sobre si le consta o no que los archivos que estaban en su teléfono que ahora no puede encontrar están en la carpeta investigativa, que no le consta al 100% y, modificando lo que antes había afirmado en cuanto a que el señor Caroca eliminó de su teléfono celular la información y obviamente, cuando el celular se envió a la pericia, iba sin esa información, lo que dice porque tuvo acceso a la pericia de su celular y los archivos que mantenía en su equipo no se incluyen, no aparecen siquiera mencionados, aclaró finalmente que en la pericia que se hizo a su teléfono sí aparecían algunas cosas, pero un 10% del 100%. Por ello, tampoco cuenta este Tribunal con antecedentes suficientes como para concluir sobre bases serias que la información que el señor Rebolledo y esta Defensa reclaman fue realmente borrada y no está incluida en la investigación.

Para concluir este acápite, la diligencia probatoria que pide la Defensa de la acusada del Pino Acuña al Tribunal, a saber, que estos Sentenciadores personal y privadamente manipulen la evidencia material que incorporó para examinarla y determinar si la mentada información está o no registrada en él, no tiene cabida en nuestra legislación procesal.

También esta Defensa planteó que, en cuanto a la situación que Ricardo prácticamente tiene una inteligencia inferior, no pudieron ver ninguna opinión técnica al respecto. El que sea flojo para el colegio o no le guste estudiar, eso jamás, nunca ha implicado un deterioro cognitivo o una inhabilidad. Ni siquiera se pudo determinar que afectara esa parte de la inteligencia que permite tener el razonamiento lógico que permite utilizar sistemas informáticos que cualquier persona que tiene esa habilidad en ese ámbito de la inteligencia sí lo puede hacer, independiente de su formación. Eso porque es una situación que todos sabemos, todos conocemos a alguien, todos podemos corroborar que efectivamente hay personas sin formación con ciertos talentos y con cierto tipo de inteligencia. No hubo algún informe al respecto para poder determinar que fuera realmente un subnormal que nos ha venido a decir que no sabe usar el celular.



Sobre ello, en el décimo considerando de este fallo se analizó lo referente al nivel educativo formal que posee el acusado Vega Guerrero y a la alta complejidad del manejo de los sistemas digitales del Ministerio Público, en especial del SAF y del SIGE, por lo que damos esos pasajes por reproducidos en esta parte para no redundar. A ello agregamos que este Tribunal para nada ha partido de la base de que el acusado Vega Guerrero tiene una inteligencia inferior o de que no tenga algún tipo de facilidad para el manejo de dispositivos electrónicos. Sí afirmamos, sobre la base recién invocada, que ello está muy lejos de bastar para realizar las operaciones jurídico - informáticas decantadas en este juicio. A ello también suman todos los otros antecedentes e indicios que también ya latamente explicitamos en el mismo considerando citado y que corroboran lo declarado ante estrados por el acusado Vega Guerrero.

Destacó esta Defensa que, respecto a Claudia, compareció una psicóloga que la describe con características de sumisión, sometimiento, idealización, que por más que pasen cosas, no consigue verlas, por el contrario, las justifica, niega las cosas negativas que puedan haber y eso explica perfectamente por qué Claudia aguantó tanto tiempo tanto maltrato, tanta vulneración psicológica, física y económica por parte de Ricardo. También entiende que corrobora esa versión de la Defensa la declaración de Paulina, quién señaló que llevaba más de 1 año sin tener ningún contacto ni con Claudia ni con su familia a raíz del temor que le generó estar involucrada en toda esta situación. Nos dijo que él no la dejaba conducir, no la dejaba hacer nada sola. Lo cierto es que quedó en evidencia que, hasta el día de hoy Claudia aún no le cuenta toda la realidad que efectivamente vivió en la casa con Ricardo y que fue verificada por Paulina, sobre todo después del allanamiento, que fue cuando Paulina empezó a estar entre comillas cuidando a Claudia por toda la violencia y amenazas que estaba ejerciendo Ricardo sobre ella.

Relacionado con ello, la misma Defensa presentó al juicio a la perito Nidia Silvana Insulza Palma, quien expuso ser psicóloga y que la evaluación a la imputada se realizó a solicitud de la abogada defensora Silvia Carreño para evaluar las características de personalidad de Claudia Andrea del Pino Acuña. Este informe se realizó en abril del 2023. Ella tenía 43 años, casada, dos hijos, cursos superiores, abogada y se dedicaba a labores del hogar en ese momento. Realizó cuatro entrevistas el 31 marzo y 3, 4 y 10 de abril del año en curso. Sobre la metodología, fueron cuatro entrevistas individuales, semiestructuradas y presenciales. También



observación clínica en ese proceso y pruebas gráficas y proyectivas. En este caso la prueba del dibujo del árbol, del dibujo de la persona, aplicación del test de Rochard y aplicación del inventario clínico multiaxial. El 10 de abril realizó una entrevista individual con la madre, Sonia Acuña, para triangular información. Todo para investigar el delito que se le señaló. Cohecho.

Sobre antecedentes relevantes, en resumen ella es la hija mayor de dos hermanas, nacida de una relación de progenitores con roles complementarios. Se describe y también su madre como una persona que de pequeña fue bastante autónoma, dedicada a sus estudios. Refirió que cursa derecho y el 2005 comenzó a desarrollarse en la Fiscalía de Rengo. A posterior, el 2009 a 2011 aproximadamente, por su buen desempeño es cambiada a la Fiscalía de Rancagua. Retornó a Rengo y el 2018 es trasladada a la Fiscalía local de Linares. En paralelo, en su vida personal, mientras estaba en la Sexta Región, se casó y nacieron hijos. El 2018, al trasladarse a Linares, estaba con una nueva pareja, Ricardo Vega. Refirió que viviendo con él se casaron, luego primero tuvieron una relación armónica pero luego ciertas situaciones de violencia, también elementos que considera de control, por ejemplo, que Ricardo la acompañaba todos los días a su trabajo a la Fiscalía y se sentaba junto a ella lo que era poco habitual para un adulto. Llegada la pandemia comenzó el teletrabajo el 2020 porque presentaba hipertensión arterial. Traslado sus elementos de trabajo a su casa para trabajar y Ricardo reiteró esta dinámica de sentarse y observar lo que ella realizaba. En agosto del 2020 señaló se presentó la Policía de Investigaciones en su casa con una orden de registro que la acusa de cohecho. Retiraron su computador de trabajo y celulares, ella estaba confundida, le preguntó a su pareja, quien también le dijo que desconocía los hechos. Tras ello se dictó arresto, pero ella estaba con problemas de salud física, le costaba la movilidad y tenía que operarse y pasar por recuperación quínésica, por lo que le dieron la posibilidad de arresto domicilio directo.

En relación con los principales resultados de la evaluación, en términos cognitivos se pondera su formación profesional, el desempeño laboral y en la entrevista, la observación clínica. Observó un funcionamiento intelectual normal promedio, con capacidad adecuada, sin embargo esas habilidades se ven debilitadas cuando las traslada a los ámbitos relacionales porque ella tiene un funcionamiento más intelectual que la deja en desventaja cuando enfrenta una situación altamente angustiante o estresante y le impide su funcionamiento intelectual tomar decisiones



propias del sentido común o práctico. Se observa que cuando están esas emociones internas, tiende a bloquearse y funciona negando y se queda únicamente con situaciones que le permitan funcionar.

En términos de las principales características de personalidad, aplicado el test respectivo, vuelve a aparecer esto de que cuando ella se enfrenta a algo nuevo, que la toma sin resguardos y aparece una emoción intensa, tiene dificultades para organizarse y tiende a ocurrir que la realidad no es abordada neutralmente, sino que tiñe lo que siente con las evaluaciones que hace.

En términos relacionales, la prueba aplicada da cuenta de que es una persona que se muestra más bien insegura, dependiente, donde para poder regularse necesita del apoyo de otro, lo que le afecta principalmente en relaciones de pareja, donde hay tendencia a idealización, es decir, se posiciona en la relación de pareja como si la otra persona fuese buena en el sentido de que sólo se conecta con los atributos. También cierta tendencia a resolver situaciones que no le acomodan con fantasía y ensoñación, lo que es propio de un adolescente. También se observa que en su vida el principal conflicto que aparece en las pruebas es la formación de relación de pareja, donde por una parte puede reprimir lo que siente y sus necesidades con la de mantener el vínculo y si aquello no es logrado, ella prontamente resuelve un término y una nueva relación de pareja, asociado a un gran temor a la soledad, angustia si no está en relación de pareja, y tiende a depositar la responsabilidad de su funcionamiento adecuado o estable en las parejas. Desde ahí que acude a otra rápidamente cuando termina una relación.

En términos afectivos, se observa que a ella le cuesta procesar situaciones o emociones que no le son gratas. Es una persona que no tiende a conectarse con la angustia, sino a que a negar los hechos y sólo se conecta con ellos cuando se ve involucrada. Esto también lo aplica consigo misma. Se observa en las pruebas que por periodos puede parecer una imagen como muy empoderada, pero en otros momentos aparece con una imagen vulnerable, devaluada, donde no sabe cómo recuperarse de lo que vive.

Las pruebas aplicadas arrojan que ella reconoce las figuras de autoridad, las normas, es capaz de someterse a ellas, sin embargo, cuando un cercano significativo las transgrede, ella, por su funcionamiento, lo puede obviar y volver a conectarse sólo cuando hay un problema más complejo.



Para evaluar posibles trastornos psicológicos aplicó el inventario clínico que primero arrojó una disposición abierta a responder la prueba, puntúa con sinceridad, no intenta simular. Sobre categorías, más aparecen características de depresión, dependencia y de masoquismo, donde vuelve a aparecer esta idea de inseguridad y de necesidad de contar con un significativo en su vida para regularse. Considerando que en esa prueba y las otras se repiten ciertos indicadores en inseguridad y de manera de relacionarse, se aprecia un estilo de personalidad limítrofe o border line, donde aparece este patrón repetitivo de relacionarse consigo misma y los otros. Puede extraerse de su historia esta inestabilidad en las relaciones de pareja, cierta impulsividad al relacionarse y este temor inminente de ser abandonada o estar sola, que es lo que más la moviliza.

Por otra parte, considerando de Claudia, por lo que ella menciona y lo que refiere su madre, no cuenta con historial de delitos, le consultó qué pudo influenciar para que ella se viese involucrada en la investigación y dijo que si bien en su momento no pudo darse cuenta, lo único que repite es que ella no fue parte directa del delito sino que el responsable es Ricardo Vega. Que aunque ella no lo pudo observar, ahora puede entender tras leer declaraciones que él en la primera declaración dijo que toda la responsabilidad es de él, descarta que ella haya participado, pero luego cambio la versión hipotetizando ella que esto se debe a que él se enteró que ella estaba en una nueva relación de pareja y porque cuando tenían conflictos cuando vivían juntos, él en varias ocasiones señaló su intención de perjudicarla si la relación terminaba. Ahora ella le da sentido a lo que antes pensaba eran deseos de dominar o de celarla cuando él se sentaba a su lado todo el tiempo en la Fiscalía y ahora entiende que probablemente él observaba lo que ella hacía en los sistemas informáticos de la Fiscalía y con el teletrabajo se facilitó ese acceso refiriendo que el sistema de la Fiscalía era bastante amigable para manejarlo, que la gráfica casi era intuitiva y con sólo observarlo él pudo entender. Dijo que si bien ella no se considera negligente en torno a cómo manejó su trabajo, sí asume que pudo ser descuidada porque mientras estaba en teletrabajo dejaba a la vista carpetas de los casos o tenía anotadas claves del Poder Judicial, pero se justifica en que en ninguna instancia desconfió de su pareja y desde ahí lo naturaliza.

Retomando esta forma de Claudia o lo que aparece como estilo de personalidad límite, se aborda también cómo ha sido la manera de relacionarse de ella para entender si había cierta vulnerabilidad. Al respecto, Claudia describió y



refirió que lo que ella puede observar como elemento común en su vida amorosa es que ella tuvo siempre dificultades con la corporalidad, desde pequeña obesidad y desde ahí vivenció burlas. Desde los 6 años con sus vecinos, lo que se repitió en la universidad y trabajos, lo que considera pudo influir en la manera en que ella se posicionaba con las parejas, donde se considera que, al ser poco atractiva, ella debía compensar que las parejas aceptaran estar con ella y desde ahí se desprenden descripciones que ella hace en torno a cómo se relacionaba con parejas y en todas ella puede ver transgresiones de las que ella era objeto. Por ejemplo, en la universidad, ella pololeaba y que ahora puede ver que esa relación era instrumental, él obtenía apoyo económico y ella lo ayudaba con las notas. Esa relación terminó por infidelidad. Al poco tiempo conoció a una persona con la que tras una semana de pololeo se casó y luego cesó ese vínculo por infidelidad. El 2006 conoció a un chofer de camiones, iniciaron una convivencia, decidieron tener un hijo, se casaron, la persona al principio preocupada pero luego empezó la violencia y la manipuló para obtener un crédito bancario de 40 millones que él no pagó sino que ella y que ella debía mantener a la familia. A posterior, el 2011 una colega compartió un link donde se conocían personas por internet, conoció así a una pareja, iniciaron convivencia, también decidieron tener un hijo y como el 2013 esa relación empezó a complicarse por violencia, habló de violencia física grave que implicó que ella lo denunciase por violencia intrafamiliar. Esa relación terminó el último trimestre del 2017 y a poco tiempo conoció a Ricardo Vega, se fueron a vivir a Linares por su trabajo y decidieron casarse. En esta relación, si bien primero armónica, volvieron a aparecer eventos de transgresión.

La madre de Claudia dijo que en el último caso conocía diversas transgresiones de Ricardo. Por ejemplo, que él tomaba dinero de la cartera de Claudia, pudiendo ser grandes cantidades. Que se aprovechaba de que Claudia mantuviese la casa. Ella le daba dinero para pagar una pensión de alimentos y para una deuda que tenía su suegra. También dijo la madre que esta forma de actuar de su hija siempre les ha preocupado como padres porque la consideran muy ingenua, donde basta que alguien le muestre un poco de cariño para obnubilarse. Esta forma de vincularse, que puede ser propia de la personalidad límite, se observa en otros vínculos de Claudia. Por ejemplo, en sus amistades. Relató que conoció a una persona por un evento en Linares, prontamente la consideró de confianza y estableció amistad y esta mujer se quedó con sus bienes muebles cuando ella se



cambió a Talca con la promesa de venderlos y entregarle el dinero, quien por la investigación no trabajaba. Sin embargo, esta amiga cesó todo contacto con ella y se quedó con los bienes porque no le entregó dinero. Se ve una transgresión en los vínculos.

Finalmente se pondera la posibilidad de riesgo en reincidir en el delito investigado y es importante que esta situación delictiva aparece como la única. Claudia y la madre niegan que en su familia exista contaminación criminológica y Claudia refiere que pese a que puede ser condenada, considera que tiene la capacidad para recomponer su vida y trabajar en otros ámbitos, siendo importante para ella su recuperación física para la manutención de sus hijos y aportar a su familia y no ser carga para sus padre.

Concluyó primero que Claudia es una persona imputada de manipular el sistema informático de la Fiscalía para cesar causas o cambiar los delitos obteniendo ganancia económica de ello, situación que ella niega, diciendo que fue su esposo Ricardo Vega el único responsable y que obtuvo ganancias de ello. Luego, que ella tiene un funcionamiento intelectual normal promedio, sin embargo, este funcionamiento más intelectual no sirve al momento de lo interrelacional dado que, por su estilo de personalidad límite, ella tiende a focalizarse sólo en pautas relacionales de idealización o devaluación, por lo que no aplica la inteligencia sino que se deja llevar por las emociones cuando debe resolver algo con otra persona significativa, especialmente si es una pareja. También concluyó que tiene un funcionamiento más dependiente en que requiere estar en una relación de pareja para funcionar establemente. Ella funciona, tiene periodos en que está estable emocionalmente y aparece funcional. De ahí se puede entender su desarrollo laboral y funcional. También concluyó que pese a la situación en que era investigada, aparecen factores protectores, como el reconocimiento de autoridad y normas, no contaminación criminológica por lo informado por ella y la madre.

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña respondió que trabajó primero con el relato de Claudia. Buscó otras fuentes de información para corroborar ese relato. Sobre las herramientas que usó, aplicó distintos test.

Sobre su formación, es psicóloga de la Universidad Católica del Maule, titulada el 2008. Después por las áreas en que se ha desarrollado, ha tenido estudios de postítulo en sicología del testimonio y victimización, el 2020 cursos de especialización en técnicas proyectivas como Rochard y este año respecto de daño



psicológico y simulación en stress postraumático. Desde el 2009 realiza pericias, primero de credibilidad de testimonio y después para la Defensoría en distintos delitos y desde el 2020 también como perito de la Corte de Apelaciones de Talca también en otros ámbitos, como el laboral.

Sobre las características de Claudia de relación de pareja, llegó a la conclusión que indicó a propósito de la triangulación, en que compara el historial que ella señala y la progenitora con indicadores de los test. En este caso, el test de Rochard y el inventario, aparecen categorías de cómo ella se relaciona y eso se compara con el manual DCM 5 y se hace el despliegue de que hay un estilo de personalidad límite por la impulsividad en las relaciones de pareja, la inestabilidad, la dependencia, etc. Con esas características, en una relación de pareja, el rol de Claudia sería más el de dominado. Efectivamente en una conclusión aparece que es plausible que, por la historia que ella tiene repetida de vulnerabilidad frente a las parejas, pudo ser influenciada o dominada para poder involucrarse en una situación como la investigada.

En los test que aplicó, esto de verse sometida es una relación que aparece constante dentro de su historia, por eso describió las diferentes parejas y cómo aparecían elementos donde ella, por ejemplo, mencionaba que mantenía económicamente a la familia o era sometida a vigilancia constante por al menos dos parejas, que la siguen y observan. Además está otra forma de vincularse que también puede observar vulnerabilidad, como esta relación de amistad en que prontamente confía en alguien que no conoce. Le preguntó cómo era que ella trabajando en Fiscalía no averiguó antecedentes de su esposo y ella contestó que cuando conoce a una pareja sólo se centra en la atracción, pero que con ninguna pareja averiguó sus antecedentes. Hay una impulsividad de por medio e ingenuidad como dijo la madre a no prevenir otras situaciones que tengan consecuencias negativas para ella.

Sobre la idealización de las parejas, en el día a día, las personas que funcionan en ese polo, en el periodo de idealización, sólo ven aspectos positivos y cuando aparece un conflicto pasan al polo de la devaluación, donde pueden considerar esos aspectos negativos que no había visualizado. Debe ser muy reiterativa una situación para que la persona se sienta vulnerada y no perdonar lo que hace la pareja. En general las personas con estructura limítrofe tienden a negar cualquier elemento no coincidente a la imagen que tienen en su mente de una persona, dejan de ver lo negativo.



Sobre parejas anteriores a Ricardo, le dijo que con su tercera pareja tuvo conflictos, que hizo denuncia y hay órdenes de alejamiento por violencia intrafamiliar y respecto de Ricardo dijo que por vergüenza no se atrevía a denunciar. Ella relató hechos de violencia verbal, psicológica y física con su último esposo.

Sobre la idealización, es progresivo hasta que llega un minuto en que se sale de ello y se puede ver la integralidad de la persona. Como característica de los trastornos límite de personalidad, son personas divididas psicológicamente, sólo ven lo bueno o malo. Idealizan y cuando ya se ven afectados repetidamente por algo, logran conectarse y ver que la persona también tiene elementos negativos. Como funcionan en polo, se conectan con lo negativo y deciden terminar el vínculo. Claudia refirió que la relación se desgastó, que muchas veces se empoderaba y le pedía a él que se fuera de la casa, lo que la progenitora ratifica, y él reaccionaba con llanto, se arrodillaba y le pedía perdón y decía que cambiaría. Frente a eso Claudia cambiaba, aparecía armonía en la relación, pero luego volvía a aparecer la violencia. Eso cesó por la repetición, la causa en investigación y porque Claudia conoció a una nueva pareja.

Sobre la idealización, antes de ver a la persona íntegramente, la ve sólo en el polo de la idealización, sólo en aspectos positivos. Por tanto, los aspectos negativos los niega, no lo ve. No tiene la capacidad de verlo. Alguien le presentara pruebas, si sigue en idealización, dirá que eso es falso.

A la Defensa del acusado Vega Guerrero contestó que su pericia es de ocho páginas cree. Es psicóloga. Su pericia fue solicitada por la defensora pública y ahí tiene sus certificados de título. En la pericia no acompañó su título. Tampoco que es perito judicial.

Entrevistó a Sonia Acuña. No al padre de ella porque preguntó a quién podía entrevistar y la madre estuvo dispuesta. Sobre si la madre le dijo cuántas veces conversó con Ricardo Vega, no.

Ha declarado ante este Tribunal hace muchos años por credibilidad de testimonio en delitos sexuales. Tiene la impresión de que ha declarado frente a los tres jueces presentes.

El hecho de que una persona idealice a otro no impide cometer delitos.

Al Ministerio Público respondió que, sobre la actual pareja de Claudia, no preguntó antecedentes. Ella comentó que era una persona de esta zona que la ha



estado ayudando en torno por ejemplo a trámites que ella decía hacer y como tenía ella problemas de movilidad, la acompañaba. No lo entrevistó ni sabe su nombre.

Sobre si comprobó la información que Claudia y su madre le entregaron sobre lo de violencia intrafamiliar, no tuvo a la vista documentos. Testimonios, sólo el de Claudia. No conversó con Ricardo. Ella fue amenazada previamente por Ricardo según Claudia, amenazada con perjudicarla. No dijo de cuándo. Que cuando ella decía que la convivencia terminaría, él refería esas amenazas y ella no desconfió de su pareja. Efectivamente le consultó cómo se podía mantener en las relaciones de pareja pese a las situaciones de violencia y ella señaló que le piden perdón y se mantenía el vínculo.

Sobre si ella incluso asume descuido en sus funciones en su domicilio respecto de una persona que la amenazaba, ella hizo referencia a que al dejar documentación o claves asumía un descuido, pero a Claudia le complica la temporalidad. No dijo que a cuando dejaba carpetas en la mesa era amenazada. Lo intentó en la entrevista, pero ella perdía la temporalidad, comprensible en una persona que ha vivido diferentes hechos de violencia con la pareja. Como no citó fechas, explica ahora por qué. Cuando se intentaban señalar fechas, Claudia no lo podía establecer claramente, sí que lo de las amenazas pasaba antes o después. Dijo ella que una amenaza era que él la iba a perjudicar si ella lo dejaba. No recuerda quién denunció. Claudia habló de un tercero que denunció, una persona a la que Ricardo contactó, a la que se le ofrecía llegar a un acuerdo económico, pero no tiene claridad de que esa persona denunció. Sobre si fue un hermano de Ricardo, no lo sabe.

Sobre si sabe que Ricardo y Claudia al comienzo del proceso tuvieron el mismo abogado, no lo sabía. Claudia sí dijo que había unos abogados particulares primero, pero cuando ella tomó la pericia estaba con una defensora penal pública.

Solicitó a la defensoría antecedentes sobre estas amenazas pero sólo se acompañó lo señalado por la periciada.

Sobre que Ricardo tenía condenas previas pero ella no los revisó y eso le parecía poco creíble, no lo dijo así. Le planteó la pregunta de que pudiese ser poco creíble que Claudia no haya hecho eso, no que fuese poco creíble que no haya hecho esa averiguación porque no es una pericia de credibilidad. Tras un ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal, señaló que en su informe refirió que se aborda cómo contrae matrimonio con persona que sabe que actualmente tiene causas



judiciales, analizándose como poco creíble que no hubiese averiguado antecedentes del mismo, pero que luego refirió que se le preguntaba sobre eso y ella contestó que confiaba, pero a ella (la perito) le pareció poco creíble eso como para hacerle esa pregunta.

Sobre si además de las entrevistas y test que realizó, tuvo otro antecedente distinto para llegar a sus conclusiones, no.

En cuanto a la testigo Paulina Alejandra Cisterna Muñoz, ella declaró que conoce a los involucrados en el juicio, Claudia y Ricardo. A ella la conoció porque buscaba cosas para comprar en Facebook y encontró unas botas nuevas y bonitas, escribió a la persona y era ella, le dio su dirección, fue a su casa, vio las botas, su esposo muy simpático y le habló de motos, ella corre en motos. A ella le encantó que le hablara de motos. Fueron muy amables. Empezaron a hablar de perfumes porque ella tenía muchos perfumes y quedaron en cambiar un perfume por otras botas. Después siguieron en contacto pero por cierto tiempo, hablaban de sus hijos. Ella tiene cinco hijos. Dos de ellos de la edad de los hijos de Claudia. Empezaron a ir a su casa, los niños se llevaban bien. No tan seguido porque ella trabajaba todo el día. Algún fin de semana iban porque ellos iban a la casa de amigos en el campo.

Cuando empezó la pandemia fueron un poco más seguido, no tanto tampoco porque ella no tiene mucho tiempo. Los niños jugaban, era aburrido estar encerrados en la casa. Ahí el trato que él daba a los niños y a ella a ella nunca le gustó. Iba por ella y por los niños, pero no le gustaba ir por él. Nunca dejó a su hija dormir allá por Ricardo. Se metía él en todo y eso le cargaba, el trato que él le daba a los niños y a ella. Lo que él decía se tenía que hacer. No la dejaba manejar ni hacer algo. Le llamaba mucho la atención eso. Ella pasaba encerrada y él salía a todos lados, usaba su auto, su plata, porque pagaba siempre con la tarjeta de ella. Un día vio al Cayo dibujando una estupidez, a una persona ahorcada y Cayo le dijo que era un hombre ahorcado porque Ricardo le pidió dibujar eso, lleno de sangre ese dibujo.

Él siempre decía tu huacho y una palabra que no recuerda, horrible. Siempre se burlaba del niño sobre todo. Era doloroso y por eso no le gustaba ir. Después le empezó a tomar cariño y sintió como la obligación de protegerlos. Le daba mucha pena eso.

Ricardo trataba mal a Cayo o Claudio, hijo de Claudia, que ahora debe tener 10 años y dos años atrás unos 8 años, no recuerda.



Sobre que también trataba mal a Claudia, no vivía con ellos pero vio mucho. Ella andaba con moretones en la cara y brazos, se notaba porque andaba siempre muy nerviosa. Sobre los moretones, no vio cómo se los hizo. Sobre si alguien le contó, ella le contó que él le daba. Los niños también, se notaba, era obvio. Una vez le dijeron algo, no recuerda qué. Sobre esos moretones, de lo último recuerda más. Ella siempre se quedaba cuando pasó todo este problema. Se refiere a esto, cuando le contó ella que allanaron su casa y la acusaron de cohecho. La fueron a ver unos días después y al ir a su casa con los niños vio a Ricardo sentado como mirando la nada, como destrozado. Esa fue su impresión. Estaba con una polera como rosada y le preguntó qué le pasaba y le respondió que nada. Después él se fue de la casa y siempre la amenazaba por teléfono. Ella se quedaba lo que más podía ahí porque ella estaba sola.

Sabe que la amenazaba por teléfono porque ella le mandaba los audios como respaldo. Él le quebraba todos los teléfonos, se los quitaba y los quebraba. Compraron tiburones, esos que se ponen arriba de la reja, y cámaras porque él se pasaba por arriba de la reja y le pegaba, le quitaba el teléfono y le pegaba. Ella no vio eso. Cuando soldaban los tiburones, él, con un tipo, empezaron a enviar audios diciendo que los pusiera más altos porque iba a pasar igual y que las “cagás” de cámara no le importaban porque era fácil hackearlas.

Conoció a Claudia y Ricardo y al principio le parecieron simpáticos. Eso a mediados del 2018 o fines del 2018. Ahí empezaron a conversar y en la pandemia más seguido. Cuando frecuentaba su casa antes de la pandemia, sobre que la trataba mal, vio la forma en que le hablaba, le decía coja de mierda, “perra culiá”. Nadie te va a pescar guatona de mierda. Le decía Claudita por qué no va a gimnasio y se rehabilita y opera. Cuando veía que la trataba así, Claudia se limpiaba las lágrimas y nada decía y eso le impresionaba. Ella se quedaba agachada y eso le daba impotencia, pero no se podía meter más allá en su matrimonio.

En esa época que compartió con ellos, a Ricardo nunca lo vio trabajar. Se encontraba con ella en la mañana porque él iba a dejar a los hijos Cayo y Alina al colegio y Claudia al trabajo. Cree los niños entraban al colegio a las 8:15. Pasaba a dejar a los niños y después a Claudia a su trabajo en la Fiscalía. Lo vio muchas veces. El colegio de su hijo estaba en la esquina de la Fiscalía. Hartas veces lo veía ahí parado mientras ella bajaba.



Después llegó la pandemia y ella un día le escribió y le dijo que allanaron su casa, que tenía un tremendo problema y la acusaban de cohecho. No recuerda si hablaron de eso. Ella le dijo que la iría a ver y a los días fueron. Ahí ella le contó que la acusaban de cohecho y ella no entendía quién hizo eso, pero siempre se imaginaba (la testigo), era como obvio. Siempre pensó que fue su esposo, era obvio, vivía con ella. Claudia no sabía quién había sido. Era obvio, si no fue ella, fue él. Al principio Claudia pensaba que alguien fue, pero no desconfiaba de él. Ella sí porque él se metía en todas las cosas de ella. Por ejemplo, una vez él colocaba música en su computador. Ella siempre sentada porque le dolía la cadera, pocas veces ella se paraba y una vez se paró no sabe dónde y él estaba en su computador y pensó que chateaba con alguien, con otra mujer. Él se dio cuenta de que miró y la miró. no chateaba con otra mujer. Lo que alcanzó a ver, porque no podía estar mirando lo que él hacía, no correspondía, era una cuestión amarilla, o sea, azul, un mono azul. Fue lo único que vio. Después lo reconoció, se dio cuenta de que era el logo de la Fiscalía. Cuando ella se paró, él se paró a cambiar la música. Eso ocurrió dos veces, no sabe si otra vez. Lo que recuerda fue eso. No leyó lo que había en el computador, sólo vio lo que dijo. Además de esa situación sobre el computador, algo parecido vio después, pero no lo vio encima. Cuando lo vio, él nada le dijo, pero con la mirada le dijo todo, como “qué mirai”. Siempre pensó que él chateaba con otra mujer porque una vez él se encerró en la pieza y lo escucharon hablar por teléfono y dijo chao te amo y Claudia le preguntaba a ella quién era. Por eso se quedó con eso. Pensó que chateaba por eso con otra persona y que se pasó este tipo. Ella pensaba que era una amante y después él le dijo que era su hija. Claudia lloraba y se secaba las lágrimas. Ella nada dijo delante de él, se quedaba callada, aguantaba el llanto y se secaba las lágrimas.

Sobre la dinámica de la casa, de las labores domésticas, se encargaba él entre comillas porque siempre había un desorden horrible. Él cocinaba. Compraba porquerías a los niños, cosas para freír. Muchas veces ella (la testigo) les cocinaba a los niños.

Sobre las dinámicas que vio ahí, como los gastos de la casa y compras, todo lo hacía él, incluso una vez ella le pidió si podía llevar una Coca Cola a su trabajo y ella andaba cerca. Fue, se la llevó y justo él la llamó por un cambio de aceite para un auto y era muy caro lo que decía y le señaló a Claudia que sabía dónde podía ir más barato pero él exigía lo más caro. Sobre los supermercados, ella se sabía los precios



y él decía a Claudia dónde comprar, pero él tenía que ir a las partes más caras, no era su plata. Él compraba todo con la plata de ella. Cuando estaban ahí él tomaba sus cosas y se iba a comprar con la plata de ella. Si no la llevaba, le decía a ella que le transfiriera. Llevaba la plata y las tarjetas o le decía que ella que le transfiriera. No sabe qué cuenta tenía él. Él tenía que comprar, no por gentil. Le extrañaba mucho porque era como que ella estuviese presa. Una vez la vieron manejando un jeep rojo y les dio alegría porque por primera vez la vio manejando un auto. Él nunca la dejaba manejar, decía que él manejaba, que ella manejaba mal, si se acordaba de una vez que no sabe qué y decía que él conducía mejor. Una vez le pidieron acompañarlos a Rancagua a comprar un jeep. Fueron en su camioneta y él quería manejar su camioneta y ella no se la iba a pasar. Él quería a toda costa manejar su camioneta y le dijo que él se mareaba. Fueron a comprar y él se puso a pelear con la persona del jeep y al final no compraron. Cuando él le pidió la llave, siempre su actitud era como exigiendo, a veces con tono de broma pero exigiendo. Ella no sabe, no le da risa eso.

Estuvo más presente después del allanamiento. Le contó eso y dijo que le quitaron su teléfono y el de los niños igual y que se habían llevado todo. Desde ese allanamiento, cambió algo porque ellos siempre tenían mala relación pero cuando fueron a verlos, estaba todo peor, más desordenada la casa, el ambiente era horrible. Ellos seguían viviendo juntos pero peleaban hartos. En algún momento él se fue de la casa y ahí la acompañó un poco más porque él le robó el jeep a ella, la moto igual, y ella no tenía en qué ir al supermercado o llevarlos si estaban enfermos. Ella los ayudaba con su camioneta. Decidió pasar tanto tiempo con ella porque estaba sola. No le quería decir Claudia a su papá porque estaba enfermo y decía que si le contaba, su papá se podía morir.

En ese tiempo del allanamiento, vio los teléfonos quebrados. Él siempre hacía las cosas cuando ella no estaba. Ella corre motos, él sabía eso y sabía que si él hacía algo, ella llamaría a un amigo de las motos. Él sabía que si le hacía algo, la defenderían. Él la amenazó a ella y a su esposo de muerte, tiene los audios, dijo que los tenía encargados. La amenazaba porque ella ayudaba a Claudia. Él quería que Claudia estuviese sola. Cree que Claudia, sino no la hubiese ayudado, estaría hasta muerta. Él es muy violento. Con escuchar sus audios se van a dar cuenta todos.

Sobre alguna situación concreta, esa vez que pusieron los tiburones y cámaras, la acompañó lo que más pudo. Ese día fueron a la Policía de



Investigaciones, la acompañó para reclamar su jeep. Fueron a denunciar que le robó el jeep y esa noche él se pasó por arriba de la reja. Ella dijo que la arrastró, le quebró el teléfono. Ella la llamó como pudo, le mandó un audio. Llamó a los Carabineros y a la Policía de Investigaciones llorando para que la ayudaran porque le pegaban. Fueron y cree esa vez él arrancó y se metió a un canal. Al otro día ella tenía moretones en la cara y brazos. Vio el teléfono todo hecho tira. Ya eran muchos teléfonos que él le había quebrado, por eso ella le mandaba audios para respaldarlos. Tiene mil pendrives. Fueron muchas cosas que pasaban, muchas veces la vio con moretones y no la quería dejar sola.

Cuando pasó todo eso, Claudia vivía acá en Linares, en la María del Valle. Cuando los conoció vivían en otra casa. Se habían cambiado cuando pasó todo lo demás. Se cambiaron a esa misma villa pero más adentro. Ella fue a las dos casas. Ahí Claudia vivió hasta que pasó todo y después se fue a Talca donde sus papás. Se refiere a después del allanamiento, de las peleas. Una vez estaba en la casa de ella con tres de sus hijos desarmando una piscina gigantesca y en la casa del lado un tipo les sacó fotos, se llama Rodrigo Guerra, y con una persona de la Policía de Investigaciones. Le sacaban fotos a ella, a su camioneta y a sus hijos. Ahí la llamó su hijo diciéndole que la buscaba la Policía de Investigaciones, que buscaban unas impresoras y preguntaban por ella. Habló con el fiscal y le preguntó si tenía ella unas impresoras de Claudia escondidas. En su casa tiene cámaras con audio y se escucha todo lo que él le habló por teléfono. Le preguntó que qué se creía que iba a su casa por eso y recordó que había unas impresoras botadas en una galería de ella y se lo dijo. Empezó a ver los videos y él gritó preguntando por ella. Le dio mucha vergüenza. La culpaba de algo que no había hecho. Llegó allá y le dijo que se quedara tranquila, que ella no tenía que ver. Él llegó a la casa de ella, cuando desarmaba la piscina. Le dijo que fueran a buscar las impresoras. Estaba muy enrabada y sus hijos súper asustados. Entraron, encontraron esas impresoras. Ya no quedaba casi nada porque ella tenía que llevar un camión a buscar las cosas. Le decían a ella y sus hijos que estuvieran tranquilos, que ella no tenía nada que ver.

Partieron en su casa, llegaron a la casa de Claudia y se llevaron las impresoras. Las personas del lado sacaron fotos a ella y a sus hijos. Con esas impresoras ella no tiene relación. Claudia no le pidió que se deshiciera de esas impresoras. Ella nunca le pidió nada raro, ni le hablaba de su trabajo. Se llevaron dos impresoras que estaban en una galería. No sabe si estaban buenas o malas.



Después de eso, él pasaba todos los días molesto en el radiotaxi, pasaba acelerando muy fuerte. Él entraba y le pegaba. Ella la llamaba después y estaba toda morada. Le daba rabia que no lo denunciara. Una vez la convenció.

Antes de que la acompañara, no se había atrevido Claudia a hacer denuncias. No sabe su motivación. Él siempre la amenazaba y le decía que iba a perder su trabajo y todo. Lo sabe porque ella le mandaba el audio de respaldo. Le mandaba los audios para tener respaldo. Eso ocurrió cuando pasó esto del allanamiento. Ahí empezaron los problemas de ellos más graves. Antes de que él se fuera había discusiones y malos tratos. Lo de los audios fue después del allanamiento, cuando ella le mandaba los audios para respaldo porque él le quebraba sus teléfonos. Con su hija le dijeron eso.

Después Claudia se fue a Talca a la casa de sus papás, a los que conoció. Tras irse Claudia a Talca, la relación fue buena pero más distante. Estaba hastiada de las amenazas de él, de lo que le pasó con el fiscal. Eso fue horrible. Fue a la Policía de Investigaciones a decir que no tenía nada que ver en eso. Un Policía de Investigaciones se burló de ella porque le dijo que estaba muy nerviosa, que es una secuela de una enfermedad.

Sobre la relación de Claudia con sus hijos, nunca vio que ella les pegara o discutiera con ellos. Claudia adora a sus niños y siempre estaba muy preocupada de ellos. Cuando presencié que Ricardo ofendía a Claudia, alguna vez los niños estaban presentes, ella también. Cuando Claudia se fue a Talca, ya no la veía. Esto la afectó, sentía un cansancio horrible. También las amenazas de él más lo del fiscal que la fueron a acusar. Se alejó de Claudia, más de un año sin tener contacto con Claudia ni con sus papás, ni con Ricardo. Ricardo amenazó súper feo a su esposo.

A la Defensa del acusado Vega Guerrero contestó que en el tiempo que frecuentó a Claudia, no puede recordar las veces exactas que fue. Antes de la pandemia pocas veces, después no tantas pero después de que él se fue sí fueron más veces. En el primer tiempo, antes de la pandemia, se visitaron unas tres veces, pero no lo puede asegurar.

Vega, cuando lo conoció fue muy amable. Él era simpático con ella pero muy violento con ella (Claudia) y sus hijos y después sí se puso medio pesado con ella.

Sobre los episodios violentos que relató y de los que no hay denuncia, la última vez que la Policía de Investigaciones fue a la casa ella tenía moretones.



También tiene como 50 audios de él. Había lesiones y moretones, no sabe si ella (Claudia) las constató porque no vivía con ellos. Esa vez que ella llamó a Carabineros y la Policía de Investigaciones era de noche y no sabe qué pasó después.

El tipo que mandó audios era una persona que se juntaba con él, Cristian cree. Eso fue cuando él ya se había ido. No puede saber exactamente cuándo fue. No sabe cuándo se fue él, no sabe fechas exactas. Ella le daba el respaldo de audios.

De la acusación que se sigue contra Claudia, sabe por Claudia que la acusaban de cohecho. Sabe por lo que hablaba que había personas que tenían antecedente, imputados, y él salía en una moto que también le robó.

Conoce a la mamá de Claudia y compartió con ella en un cumpleaños. Esa información que refirió hoy no sabe si la tenía la mamá de Claudia, esto de los tratos de Vega. A la madre nunca le gustó Ricardo porque se daba cuenta. No cree supiese del principio que le pegaba. Después la mamá supo que le pegaba, lo que pasaba. A la suegra le caía mal Ricardo porque él no trabaja y ocupa la plata de ella y todo lo que él dice se debe hacer.

No sabe si Claudia y Ricardo son matrimonio aún. Claudia es mayor que Ricardo. No sabe su diferencia de edad.

Él siempre hacía las cosas cuando ella no estaba. No siempre, igual la insultaba cuando estaba ella. Era obvio que no le iba a pegar delante de ella.

Las impresoras se las llevaron, eran dos.

Antes de esta audiencia se contactó con los abogados de Claudia porque les pidió la declaración que hizo en el sumario. Ayer y antes de ayer no.

Al Ministerio Público señaló que es correcto que conoce a Claudia desde mediados del 2018. Segura que el 2018. Ahí iniciaron esta relación, primero comercial y después de amistad, empezó a sentir cariño por ella. Empezó a ir a la casa de ella. Fue varias veces a su casa, no recuerda cuántas. A veces le compraba cosas y se las iba a dejar. Con Claudia, eran amigas. Se contaban sus problemas. No se ayudaban económicamente. No se pasaban plata entre ellas. Ella sí le transfería dinero porque le iba a comprar cosas a los niños. Le transfería y al ratito ella pasaba a comprar, eso se puede comprobar.

La amistad siguió el 2019. En pandemia fue cuando la cuidó mucho. Iban a veces a su casa por los niños pero después de la pandemia fue más a la casa. El 2019 no se veían tanto porque las dos trabajaban. Algunos fines de semana iban. Claudia



y Ricardo también iban mucho al campo donde unos amigos. Ese año Claudia trabajaba en la Fiscalía. Sabía que era abogada y que trabajaba de abogado asistente. No sabía qué trabajo hacía, no recuerda. No le comentó lo que hacía en la oficina, Claudia nunca le habló de su trabajo. Nunca interactuó con ella sobre cosas de su trabajo.

Está bajo juramento. El 2019, el 4 de septiembre, tuvo un problema con un vecino que le chocó el auto y fue muy desagradable. La persona de la Fiscalía que le tomó la denuncia era Claudia. Ahí la conocía poco, no eran amigas. Le dijeron que fuera a denunciar a la Fiscalía porque si no, quedaría en nada. Por eso fue a la Fiscalía. Ese día la atendió Claudia del Pino, aunque en ese momento no eran amigas cercanas, la conocía. En noviembre tuvo otro problema con este vecino que la amenazó. Eso comenzó el 2019 en que la chocó a propósito y esto terminó el 2023 y lo condenaron. Después este señor la amenazó y no recuerda si la atendió Claudia del Pino. Ella mandó medidas de protección y también una magistrado porque en sus cámaras se ve y escucha todo.

Su esposo es Víctor Chacón. Nunca dijo nada a Ricardo. Su esposo no recuerda si estuvo detenido por golpearla a ella. No recuerda eso.

Su hijo pololea con la hija de una jueza, hace años. Eso cuando el fiscal fue a hacer escándalo a su casa.

Sobre las lesiones que ella vio en Claudia del Pino, vio eso unas cinco veces. Sobre cuándo vio eso, durante el 2019 sí la vio con moretones y después que él se fue de la casa la vio muy seguido con moretones. Fue entonces el 2019 y 2020. Después dejó de tener contacto con ella porque se fue de Linares. Claudia no hizo denuncia nunca. Estimó que era conveniente que denunciara, pero no podía porque a ella no la habían golpeado. Logró convencerla de denunciar cuando él le robó el jeep y la moto. No quiso ella denunciar porque no le correspondía. No sacó fotos de esas lesiones. Sobre si Claudia las sacó, no sabe, no recuerda. Sobre si vio a Ricardo golpearla, una vez vio que le pegó fuerte con su pie en el tobillo, sentados al comedor, el 2019 cree. También hizo tira una puerta de su pieza y le tiró algo y alcanzó a cerrar la puerta. Ella estaba con sus hijos y se tuvo que ir. Cree que Claudia llamó a Carabineros.

Cuando estaba en la casa de Claudia desarmando la piscina grande, era porque Claudia tenía que llevar un camión y faltaba eso. Ahí estaba ud. (el fiscal que



le formulaba las preguntas) en su casa preguntando por las impresoras, que estaban en la casa de Claudia.

Ricardo se robó una motocross. No recuerda la fecha, pero fue después de que le robó el jeep. No recuerda la fecha.

En el mismo tópico, la comisario de la Policía de Investigaciones Irene Katherine Castillo Aravena testificó que lleva en funciones aproximadamente 15 años. Ha trabajado en la investigación de delitos sexuales y en la BRIC un tiempo. Actualmente se desempeña en el Departamento de Policía Internacional de Linares.

Sobre este juicio, el año 2020 estaba en cometido en la BICRIM para funciones de mando más que nada. Esa vez se le endosó una orden de investigar por una denuncia en contexto de violencia intrafamiliar. El 8 de octubre, de la Fiscalía de Cauquenes. Consistía en realizar diligencias para esclarecer el hecho. Se adjuntó como referencia un parte denuncia realizado en las dependencias de la BICRIM de Linares el 27 de septiembre del 2020 aproximadamente. Con esos antecedentes, buscó el parte denuncia de la fecha y en general decía que la denunciante era Claudia del Pino Acuña daba cuenta de que en el año aproximadamente 2018 se casó con Ricardo Guerra Vega, pero por mucho tiempo tuvieron problemas de malos tratos físicos y psicológicos hacia ella. Que se conocieron en Rengo y se trasladaron a Linares porque ella tenía su domicilio laboral en esa ciudad. Que no tenían hijos en común y vivían casados en domicilio Las Vertientes, calle La Gloria a la altura del 1800. Según lo recabado el 27 de septiembre del 2020, ella dio cuenta de que los problemas comenzaron el 2019 y aumentaron, pero lo que gatilló el término de la relación con Ricardo Vega fue que el 3 de agosto del 2020 llegó la Policía de Investigaciones por orden del Juzgado de Garantía de Linares e incautó una serie de computadores y celulares. Ella dio cuenta de que en esa oportunidad se percató de que desde el 2019 había recibido muchas amenazas de parte de Ricardo, su marido en ese entonces, y ella le decía que para terminar la relación le solicitaba que se fuera y él le decía que si lo echaba no se las iba a llevar peladas e inventaría lo que fuera para que ella perdiese su trabajo. Luego ella se percató de que el acusado, mientras estaba la policía incautando, estaba muy nervioso, no quería dar su número, lo que a ella le llamó mucho la atención y le hizo dudar más porque algo escondía. Daba la impresión de eso, según los dichos de ella en sus declaraciones. Agregó que a partir de ese día se terminó la relación entre ambos, pero que le dio un plazo hasta el 5 de agosto aproximadamente, donde él tenía que retirar sus pertenencias de la



casa. En una semana más menos él fue a retirar las especies que tenía en el inmueble de Las Vertientes de Linares. El hecho puntual que fue a denunciar fue que el día 27, el mismo 27, recibió mensajes y dentro de ellos él decía que iba a retirar el resto de sus pertenencias y al ingresar él al inmueble, se percató de que ella recibió una llamada telefónica de un amigo, quien respondió, y al responder se produjeron discusiones. Ella dio cuenta de zamarreos, gritos, de que el imputado empezó a tirar cosas afuera de la casa y a romper cosas. Luego ella dice que lo que se rompió fue una loza de la mesa y que ella no tuvo lesiones porque fueron netamente zamarreos. Que la persona que había escuchado esas discusiones fue un amigo de ella, Jonathan Rebolledo, y él llamó al 133 solicitando la presencia de Carabineros. Según el relato de la denuncia, Claudia dio cuenta de que se apersonó personal de Carabineros, pero que ella no quiso hacer denuncia alguna. En la denuncia ella señaló que el imputado en una oportunidad le sacó el vehículo aún no inscrito, que había comprado en marzo, un Kia Sportage y posteriormente le sacó también una moto Honda que había adquirido en abril del mismo año. La fecha de denuncia fue el 27 de septiembre del 2020.

Antes de eso, sobre si pudo verificar si había otras denuncias entre Claudia y Ricardo, se solicitó formalmente si había denuncias previas y no existían y en su base de datos tampoco había denuncias previas.

Ella dijo que no tenía testigos presenciales, que sólo escuchó la discusión Jonathan Rebolledo Durán.

En conocimiento de esa denuncia del 27, entró a la base de datos y verificó las direcciones de la víctima e imputado y el 8 de octubre del 2020 fue a calle Estero la Gloria a la altura del 1800, donde se contactó con Claudia del Pino y, desde la reja del antejardín le explicó el motivo de su presencia y ella dijo que ratificaba los hechos y que no tenía celular porque el anterior estaba en reparaciones, aportó otro celular y que Ricardo estaba en Rengo.

El mismo día fue a la dirección del imputado Ricardo, en calle Luis Carrera a la altura 1400, que era una casa de dos pisos aparentemente cerrada y sin moradores. Ahí contactó a una vecina que le dijo que efectivamente el imputado vivía en ese lugar, pero que hacía un tiempo no residía ahí pero lo veía de forma recurrente en el sector porque manejaba un radio taxi Achibueno. Con esa información con su colega fue a las dependencias de la base de los taxis Achibueno y previas autorizaciones, le dieron el teléfono de Ricardo Guerrero. Se contactó con



él, le dio cuenta de su presencia y las instrucciones de la Fiscalía y él dijo que estaba en una carrera y llamo a presentarse a las dependencias de la policía y dar su declaración por los hechos investigación.

El 9 de octubre, en dependencias del cuartel, en conocimiento de sus derechos fue apercibido y dio como dirección Ignacio Chacón. Esa declaración fue coordinada por un fiscal vía zoom. El imputado comenzó señalando que la relación con su esposa Claudia de un tiempo estaba mal, del 2019 cree. Que tenía grabaciones en que ella estaba ebria y también de los malos tratos consignados. Dijo que el día de los hechos fue al inmueble, por el acuerdo para retirar sus cosas, pero que no la amenazó ni agredió, que ni le tocó un pelo, sólo le dijo que se iba a arrepentir. Cuando le preguntaron sobre la participación de Claudia en tema del cohecho, dijo que por indicación de sus abogados no se iba a referir al hecho. Sobre los abogados defensores del imputado, cree comentó era Huber Hidalgo. Además dijo que era dueño de un camión, que estaba ahora manejando un taxi. Sobre la amenaza dijo que efectivamente se percató de la infidelidad que vivía y que el amigo Jonathan Rebolledo era la persona con que su esposa le era infiel, quien respondió el teléfono ese 27 de septiembre en la mañana.

Posteriormente trató de contactar a la víctima, la llamó tres veces cree, a Claudia. En una le respondió que declararía y al pedirle un teléfono de contacto del testigo Jonathan Rebolledo, le cortó la llamada. Le envió un correo electrónico solicitándole la diligencia y ella le respondió que lo que iba a relatar sería su declaración, que a través de ese correo electrónico iba a declarar y que no quería continuar ni con esta causa ni con otra en contra del imputado, que no recibió ayuda de la unidad de protección de víctimas ni alguna medida de protección, por lo que debió poner protecciones en su casa y que no tenía ninguna información sobre su amigo Jonathan Rebolledo. Fue muy escueta.

Logró contactar al testigo Jonathan Rebolledo. Le dieron a conocer los pormenores de la investigación y dijo que no recordando la fecha exacta, recibió un llamado de su amiga Claudia, a la que escuchó con mucho miedo, escuchó discusiones y gritos con su pareja, el imputado de la causa, por lo que decidió llamar al 133. Que el mismo día llamó nuevamente a Claudia y la vio muy temerosa y angustiada, por lo que nuevamente llamó al 133. Que la misma Claudia le dijo que no había denunciado.



Sobre si Jonathan y Claudia hablaron de haber tenido una relación más allá de la amistad, no, sólo lo dice el imputado.

Sobre la declaración de Ricardo, dijo que no declararía sobre otros puntos por consejo de su abogado. Sobre si él hizo presente si sabía cuál era el abogado de Claudia, no lo recuerda. Tras un ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal, recordó que dijo que Huber Hidalgo era el abogado de Claudia y otro abogado que trabaja con Huber de que no recordaba su nombre. Dijo al principio que su abogado era Huber Hidalgo y luego que era otro abogado de la misma oficina, pero que el abogado de Claudia era Huber. Ese patrocinio y poder no se lo mostró.

En su oportunidad se mandó un documento formal a Carabineros para solicitar si había una denuncia. Eso nunca llegó porque no existió. La víctima dijo que ratificaba y muy escueta, porque la atendió fuera de la casa. El imputado negó y el testigo dijo que solamente escuchó discusiones y gritos no logró establecer fehacientemente el delito de amenazas.

Sobre si pudo establecer lesiones, no. La misma víctima en la única declaración que hizo, dijo que no tenía lesiones. Cuando fue a verla para el tema de la declaración, fue con su colega Carlos Cancino Ampuero.

Al Querellante respondió que el 27 de septiembre del 2020 fue la denuncia. Ella fue al domicilio de ella el 8 de octubre, que fue cuando tuvo la orden.

La víctima denunció que del 2019 en adelante tuvo malos tratos, amenazas, zamarreos y el 27 reportó haber recibido solamente amenazas. También dio cuenta de que cuando estuvo el imputado con el testigo Jonathan, Ricardo quebró cosas. Ella se refirió a daños, que quebró muchas cosas y el imputado reconoce que quebró la loza que estaba sobre la mesa. La misma víctima dijo que no tuvo lesiones.

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña contestó que el imputado no supo decir el nombre de su abogado, no lo recordaba. El imputado declaró sin abogado.

Sobre el celular de Claudia, la vez que fue a contactarla, ella dio cuenta, desde el antejardín que había enviado a reparar su celular porque lo rompió el imputado. Éste no reconoció eso. Cuando le tomó declaración al imputado Ricardo por la denuncia de violencia intrafamiliar, dijo que rompió cosas, loza que estaba encima de la mesa que era de él. Con respecto a los celulares, cree dijo estaban a nombre de él y los había dado de baja. Sobre el celular de Claudia, no recuerda si le



mencionó alguna acción. Dijo que cuando entró, Claudia hablaba con un tercero que ambos dijeron era Jonathan. Ante eso, no recuerda lo que él dijo sobre el celular. Tras un ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal, recordó que el imputado declaró que le rompió el celular a Claudia. Dijo él que cuando sorprendió a Claudia hablando con Jonathan, le rompió el celular. Esa sería la explicación de por qué Claudia le dijo que reparaba su celular cuando la contactó en su casa.

Sobre lo declarado por Vega y Claudia, eso podría corresponder a un delito de daños. Sin embargo, esta causa no se siguió investigando según entiende, al menos por su unidad.

A la Defensa del acusado Vega Guerrero señaló que Ricardo, al tomarle declaración dijo, que había firmado una especie de mandato al abogado Huber Hidalgo o a otro abogado de su estudio. No mencionó el nombre del otro abogado que trabaja con Huber Hidalgo. Sobre si mencionó si él y Claudia le habían dado mandato a los mismos abogados, entiende que no.

Vega dijo que rompió loza de él, propia.

Sobre si vio algún celular dañado, no.

Al Tribunal aclaró que Ricardo dijo que su abogado era Huber Hidalgo. Dijo que al parecer el abogado Huber Hidalgo era el abogado de Claudia y que también al parecer era de él y que iba a rectificar lo anterior según patrocinio y poder. Dijo Ricardo que el abogado de Claudia era Huber Hidalgo, no recuerda textualmente si también era de él. Dijo que lo iba a ratificar con un patrocinio y poder, eso dijo. No tiene claro por qué dijo eso. Huber Hidalgo era el abogado de Claudia. No tiene claro si dijo que Huber Hidalgo era abogado de él también.

En un nuevo interrogatorio, a la Defensa de la acusada del Pino Acuña respondió que no recuerda quién dijo Ricardo era su abogado. Sobre si en su declaración él indicó si había otra persona que era su abogado, no indicó el nombre. Sobre si dijo que tuviese otro abogado distinto a Huber, no recuerda. Sobre si Ricardo le dijo que tenía abogado, sí. Cuando dijo eso, sobre quién podría ser, habló dos veces de abogados, primero cuando se le preguntó por el cohecho hacia él dijo que por recomendación de sus abogados no se referiría y al finalizar su declaración cree habló de sus abogados. Sobre si al hablar de sus abogados indicó a uno en particular, cree indicó a Huber Hidalgo. Sobre si indicó que era Huber su abogado, así directamente no recuerda. No recuerda si dijo que Huber Hidalgo era su abogado, pero dio a entender que pertenecían al mismo grupo, que eran dos



abogados que trabajaban juntos. Le dio a entender que había más abogados y entendió que su abogado era Huber Hidalgo, eso dio a entender. Tras un ejercicio del artículo 332 del Código Procesal Penal, manifestó que entonces es otro abogado que trabaja con Huber el de Claudia. Sobre si Ricardo le hizo llegar ese patrocinio y poder que dijo tenía con el otro abogado, no.

A la Defensa del acusado Vega Guerrero contestó que Vega dijo que le había dado un mandato a unos abogados del mismo estudio.

Además esta Defensa presentó a la testigo Sonia Eugenia Acuña Corsini, quien señaló ser madre de la acusada del Pino Acuña y suegra del acusado Vega Guerrero y que viene por la causa en que está implicada su hija. Conoce la dinámica familiar que tuvo, hechos importantes porque visitaban a su hija con su esposo todas las semanas de Talca a Linares, por lo que tiene muy claro lo que ha sucedido en su convivencia del 2018 al 2020.

Su hija ha sufrido mucho, tanto por este caso como por su precaria salud. Ha sido operada múltiples veces, de la vista, por un tumor, de la columna, de las caderas. Esto que vive ha sido terrible. A pesar de todo esto, ella ha sacado fuerza para seguir guiando y acompañando a sus hijos, satisfaciendo las necesidades básicas. Sus nietos tienen buenos promedios y adoran a su madre. Ella da todo por sus hijos.

Sobre la relación de Claudia con Ricardo, hay muchos hechos. A Ricardo lo conoció cuando su hija se iba a trasladar a Linares. Ella conoció a Ricardo después de la separación con el papá de su nieto menor. Llegó con él. Sabía que simpatizaba con una persona y al llegar a la casa lo conoció. Eso fue el 2018, como en marzo, cuando llegaron a vivir a Linares. A ellos siempre les han preocupado los nietos, que estén bien.

Situaciones concretas que ellos vivieron, recuerda haber conversado con Ricardo una vez, cuando ya era la pareja de Claudia, le preguntó cómo conoció a Claudia, le dijo que por un amigo común, un receptor judicial llamado Joel, quien le habló maravillas de su hija y él le pidió invitarla un día para conocerla, y así sucedió. Claudia estaba bien vulnerable por su relación anterior, en que por violencia intrafamiliar tuvo que irse de la casa el papá de su nieto menor. Ahí él le dijo que la quería pero la gente de su entorno habla mal y decía que andaba con Claudia por interés, pero el tiempo demostraría lo contrario. A la semana siguiente o subsiguiente, también le preguntó, o después, con qué ingresos contaba él, cómo



aportaría a la casa, y le dijo que tenía una flota de cinco taxis en Rengo y con eso aportaría, que todos los fines de semana los choferes le mandaban dinero y una vez al mes iba a conversar con ellos. Eso se cayó porque él mismo mandó a su esposo un Whatsapp donde le decía que quería reconocerle que no tiene nada, que era falso lo de la flota de taxis. No sabe por qué mintió.

El siguiente episodio fue que generalmente la invitaban a ella, su marido tiene una enfermedad y estas cosas a él lo descomponen. Se sentaron con ella y Ricardo le dijo que amaba a esta mujer y quería casarse con ella. Claudia estaba sentada y asentía. Le dijo que no estaba de acuerdo porque recién se conocían y Claudia tenía pendiente la operación de columna y debía integrarse a sus funciones en la Fiscalía de Linares. Como a las dos semanas la llamó Claudia y le dijo que se iban a casar y si ellos los podían acompañar. Le respondió que no participarían porque no estaban de acuerdo. Igual se casaron. Fue la familia de Ricardo, los niños y la nana.

Como a los tres meses Claudia los llamó y les pidió ir a verla porque sucedió algo. Llegaron y la vieron bien afectada y les contó que había discutido con Ricardo y que Ricardo le había llevado el auto sin su autorización y le sacó \$300.000 de la billetera y se fue con un hermano a Rengo, se embriagaron y se gastaron todo el dinero. Esto fue como tres días. Al rato llegó Ricardo en el RAV 4 de su hija, en grúa, le faltaba una rueda de atrás. Entró él y les pidió sentarse, reconoció lo que hizo y les pidió disculpas, que no sabía lo que hacía, que no volvería a pasar, que no pretendió dañar a Claudia. Era un poco creíble, estaba afectado. Claudia no dijo nada. Eso salió caro a Claudia, le salieron \$900.000 de una. Esa vez vio cuando llegó la grúa con el RAV sobre ella y que le faltaba un neumático. La grúa la pagó Claudia y los otros \$300.000 que él se llevó. La compra del neumático no la vio. Claudia le dijo que él sacó el dinero y él también lo reconoció. Claudia la hizo escuchar un Whatsapp de la mamá de él en que decía por dios este hijo mío, la edad que tiene y hace estas cosas.

Esto fue in crescendo. Empezaron episodios de violencia intrafamiliar, primero con Carabineros. Un día también Ricardo le escribió un Whatsapp a su esposo que estaba Carabineros afuera de la casa. Eso debió ser después de lo del RAV, por junio del 2018. Los llamó como 11:30 pm que estaba Carabineros afuera. Partieron a Linares y al llegar, todavía estaba el vehículo de Carabineros afuera pero no vieron movimiento en la casa, todo apagado. Le pidió a su marido que bajara él y



entró. No supieron más hasta tiempo después, en que Claudia les contó lo que pasó. Ese día su marido bajó y había un carabinero en la casa. Ella no bajó. Su marido le contó que estaba todo oscuro y Ricardo le dijo que Claudia dormía y la dejaran dormir. Con el tiempo supieron la historia real. Hubo un episodio de violencia y un vecino llamó a Carabineros. Ellos no le abrieron la puerta a Carabineros por lo que no dejaron constancia, pero Ricardo al otro día salió a investigar qué vecino llamó a Carabineros y dio con ese vecino, el dueño del almacén del frente y lo levantó y lo dejó caer según palabras de Ricardo.

Con el tiempo Claudia no les contaba las cosas al tiro. Un día vio un vidrio quebrado en el ventanal de la puerta, ese día le había pegado y la encerró en la pieza y le dijo que si salía, ahí estaban sus hijos o huachos. Eso le contó Claudia sobre aquel episodio. Que él la encerró para que no atendiera al papá. Siempre Claudia disimulaba todo para que los niños no vieran estos episodios. Ella vio el vidrio roto en la casa. Ellos peleaban mucho pero casi siempre ellos llegaban al final.

Recuerda otro. Ella a veces se quedaba un mes o una semana allá. Para ayudar. Un día él se fue y no volvió en toda la noche, habían discutido. Volvió al otro día él. Ella salió a mirar porque no sabía en qué condiciones iba a llegar también fue por la pelea que ellos tuvieron.

Otra vez, llegaron de improvisado y también habían discutido por algo y él se iba de la casa. Se devolvió y entró al dormitorio y empezó a sacar ropa mezclada con ropa de Claudia. Al final el papá le dijo que lo dejara que se llevara todo pero ahí ella lloró y dijo eso lo compré yo. Luego ellos conversaron y se arreglaron, se dieron las disculpas correspondientes y se calmaban.

Otro episodio fue más al final. Después que Ricardo se había ido, Claudia llegó a la casa con un moretón en la mejilla derecha y dijo que nada le pasó. Con el tiempo supieron que Ricardo le había aventado un celular en la cara que después pisoteó y le quebró un escritorio de vidrio. Ahí llegó Carabineros pero él alcanzó a huir. Eso fue después que había pasado esto, el allanamiento a la casa, porque él entró saltando la reja y Claudia había puesto unos tiburones pero así y todo saltó y dijo lo que contó y volvió a saltar la reja cuando supo que venía Carabineros y se metió en un canal. Carabineros le dijo a Claudia que fuera a constatar lesiones pero ella no fue porque no tenía con quién dejar a los niños.

Sobre el allanamiento, un día llegó la Policía de Investigaciones a su casa, la pilló de sorpresa. Esto fue en agosto del año 2020 porque él se fue a los días de esto.



Primero le dijeron que la acusaban por cohecho y varias otras cosas más e incautaron el computador de ella, de Claudio, el celular de ella, el celular de Ricardo que no quería entregar. Claudia quedó paralizada le dijo, que no entendía nada. Después viendo y averiguando se dio cuenta de que fue Ricardo, quien le pidió perdón. Él había cometido estos delitos. Por lo que entiende fue algo así que archivaba causas y cobraba a las personas de la causa no sabe si por cerrarle la causa y como su hija trabaja en la Fiscalía, la culparon a ella. Ese allanamiento es el de esta causa por cohecho. Sobre que el que hizo todo esto fue Ricardo, Ricardo se lo confesó a Claudia. Parece consta en algunos documentos porque cuando fue a declarar al sumario él lo dijo. Siente que después se ha retractado.

Sobre lo que pasó después del allanamiento, Claudia es medio inocente para sus cosas y demasiado confiada. Ella no pensó que Ricardo había hecho esto. Por algo él reconoció. Ella no lo escuchó de él.

Algo pasaba que Claudia en todos los conflictos que tuvo no reaccionaba en el momento, como que quedaba paralizada, como que tenía miedo, siempre les comunicaba tarde estos sucesos. Si esto pasó en agosto, ellos en octubre supieron estos hechos. Él parece entraba y salía cuando quería. Ella no lo vio. En una de esas idas y venidas se llevó las llaves del auto y de la moto, un Kia blanco y una moto a nombre de Claudia que usaba Ricardo.

Sobre si ella trató de intervenir en esta dinámica de ellos, ella iba sumando y fue otro día y algo había en el ambiente y Claudia le mostró el celular donde había un párrafo largo en que él la insultaba de manera impresionante, le decía guatona y para colmo me saliste coja. Le preguntó si Ricardo le había pegado y le respondió que sí. Le dijo a Claudia que lo de ellos no daba para más y que se separaran y él le dijo que se iba si le pagaba \$4.000.000. Ella dijo, pero ud. ha vivido acá y Claudia le pagó la pensión de sus hijos y más encima pide plata. No sabía que Claudia ayudó a la mamá y a la hermana, les prestó dinero. Ahí Ricardo reaccionó y dijo ya, entonces nada más, nada. Claudia estaba parada ahí y tampoco reaccionó. Cree ahora que como esa vez la encerró en la pieza y la amenazó con los niños, la amenazaba. Pero lo hacía bien porque ante ellos era otra persona. No estaban de acuerdo con el matrimonio, pero a Ricardo lo recibieron muy bien en la casa. Compartió con ellos varias fiestas. Ahora, sabiendo más detalles, que vinieron a saber en octubre estas cosas. Ahora sabe que Claudia tenía miedo, que Ricardo la amenazaba. Ha visto Whatsapp con amenazas de muerte, que si colocaba una violencia intrafamiliar más



la mataba. Le empezó a dar pánico por cosas que ha hecho Ricardo, amedrentarla. El otro día pasó con su auto y frenó y aserruchó como queriendo decir con cuidado. También un día había un hombre en una moto igual a la de Claudia. Tiene miedo de que Ricardo le pueda hacer algo a su hija o matar a alguien porque cuando él se fue, hombres con voz de delincuente llamaban a Claudia por teléfono, la molestaban y Ricardo mandaba por Whatsapp audios insultando, amenazando, hablando mal de ellos. Por eso dice que Claudia tenía miedo.

Sobre si en algún momento intervino con ellos y se metió en la relación, no. Supo muy tarde, en octubre y todas estas amenazas y lo que hizo, los delitos, fueron en agosto. Ella se cuidaba mucho de no interferir por las repercusiones con los nietos.

Sobre lo que conoció de Ricardo y Claudia, cree que en esa relación, dado lo que supo después, el control de la relación lo tenía Ricardo. Basado en lo que ella vio directamente, en realidad se veía una relación bien mixta. Era todo muy disimulado. A veces cosas molestas porque Ricardo era muy bueno para burlarse de Claudia, de cómo veía tv, cuando llamaba a alguien o compraba algo. Piensa que ese es un trato vejatorio, denostador para su hija.

Sobre si supo de qué vivía Ricardo, supuestamente de los taxis que tenía y de una herencia. Dijo que recibió una herencia y se lo creyó. Cuando se enteró de la verdad por la conversación de su marido con Ricardo, se preocupó por cómo él aportaría, pero pensó que tendrían un proyecto, no armó gran problema.

Sobre la personalidad de Ricardo o sus capacidades, pasados unos cuatro o cinco meses Ricardo conocía a todos los vecinos de la villa, de los alrededores. Hacía favores y se los hacían. Era muy extrovertido. Muy simpático con los amigos. Tenía muchas habilidades sociales. Con ellos no se portaba mal. Era muy comunicativo, muy sociable. Tiene otras capacidades y habilidades. Tenía habilidades lingüísticas, básicamente saber leer, escribir, hablar y escuchar. Tiene habilidades en computación, mucha habilidad en computación. Habilidades de liderazgo, donde estaba se hacía notar. Cuando Claudia celebraba su cumpleaños o de sus hijos, ella tenía dos amigos y Ricardo compartía de igual a igual con ellos. Era muy sociable y divertido, atendía a todos bien. Algo le llama la atención que se ha dicho de Ricardo es que es un pobre cabrito, que no es capaz de hacer nada. Ha llegado a pensar que ha habido perjuicios con su hija en esta investigación, es su percepción. Ese día que fueron a detener a su hija ella estaba sentada y un



subprefecto le preguntó si sabía de qué se trataba esto y él dijo, este pobre cabrito qué va a hacer y ella se molestó y dijo él es el culpable. Le preguntó por el RAV 4 blanco de quién era. Resulta que hoy hay muchos paradigmas, muchos modelos. Un paradigma es que el individuo aprende sólo en la escuela y hoy está la computación en que Ricardo es muy experto. Si preguntara si usan medios sociales y entran a internet y todos los días aprenden algo, ella aprende todos los días y tal vez más de lo que le enseñaban en el colegio. Sobre las habilidades computacionales de Ricardo, cómo se manejaba con el computador y el celular. Recuerda una vez que Claudia le contó que perdió una capeta con como 400 o 500 fotos de su nieta mayor, hija de Rolando Valdebenito con Claudia. Claudia se desesperó y dijo que iba a llamar a un técnico. Las fotos no estaban en el computador ni en la papelería. Ricardo dijo que él lo arreglaría y se encerró en el dormitorio como por una hora y media y le recuperó las fotos. Dijo que este trabajo se hace por capas. Él, además de tener la habilidad, es técnico en esto. El problema de Ricardo no es la parte intelectual, es muy capaz. Si se encauzara por el buen camino, sería exitoso. Tiene un problema de actitud, es muy mentiroso y violento con las mujeres especialmente.

Ha relatado ya episodios de mentira, con lo que ganaba, su proyecto de taxis. Una vez la mamá le advirtió a Claudia que Ricardo es el hombre más mentiroso que pisa la tierra. Y ha mentido porque ha declarado distintas cosas.

Sobre las habilidades computacionales, Claudia le contó del archivo de fotos. La nieta también sabía que se habían recuperado esas fotos por Ricardo. Le mostró su nieta la carpeta que tenía esas fotos que eran de la trayectoria de vida de su nieta.

Sobre el carácter de Ricardo, aparentemente era afable. Muy extrovertido. Tenía disposición de colaborar. No se notaba por ningún lado que estuviesen tan mal, si no fuese por lo que vio. Era respetuoso.

Sobre si le consta cómo Ricardo generaba dinero, no le consta. No tenía ingresos porque lo que le dijo era falso. Vivía de Claudia.

Sobre problemas económicos de Claudia, cuando ella se cambió aumentó considerablemente su sueldo. Aumentó su sueldo en un millón de pesos y tenía con ese dinero para vivir bien, pero no para que llegara una persona y quisiese darse más lujos. A Ricardo le gustaban las cosas de marca. Con el sueldo de tres millones, en la casa y nana y otros gastos, queda un millón para lo cotidiano. No es ser rico, pero alcanza para vivir bien. Con el tiempo empezó a verle otra clase de ropa a Ricardo y



un día le preguntó él si le gustaban sus zapatillas que le costaron 80 o 90. No le dijo quién las compró, pero era obvio. Sobre lo económico de Claudia y que ellos le prestaban dinero a Claudia, ellos ahora están jubilados pero cuando ellos trabajaban, siempre les han hecho regalos a las hijas pensando en los nietos. Por darles un gusto les hacían regalos. Podían incluso pagarles algunas cuotas del colegio. No se hacían problema con ello. Era un regalo, no por problemas económicos, menos cuando se vino a trabajar acá. Ellos adoran a sus nietos y todo lo que les pueden dar se lo dan. Eso lo hacía, por ejemplo, a veces transfiriéndole a Claudia. Cuando hubo que matricularlos, porque ellos hicieron los trámites en Linares, su esposo dijo que ellos pagarían los primeros meses como un regalo. También con cheques y le transferían a Claudia. Si recibía un bono, parte le daba para los niños, para que se dieran un gusto.

Cuando llegaron a Linares, los niños estudiaban en Rengo, en el colegio Antilén, y acá en el colegio Concepción. Claudia llegó el 2018. Ellos, cuando se fueron a Talca, terminaron el año en Linares. Empezaron acá el 2018 y 2019, en el colegio Concepción. Sobre el horario del colegio, tenían que estar a las 8:00 para empezar las clases a las 8:15. Ella y su esposo los matricularon y les entregaron las especificaciones. El primer día de clases ella acompañó a Claudia a dejar a los niños al colegio. En ese tiempo era a las 8:00 am. Durante esos años 2018 y 2019, entiende que Ricardo llevaba a los niños al colegio. Claudia no. Sabe que a Ricardo no le gustaba pasarle el auto a Ricardo porque se perdía, se demoraba mucho, no conocía Linares y le costaba porque cambiaron el auto a un automático y a Claudia le costaba. A él le gustaba manejar. Claudia y Ricardo tenían una rutina, iban a dejar primero a los niños al colegio y de ahí Ricardo la traía a la Fiscalía.

Sobre la relación de Ricardo y Claudia, esa relación la verdad es que duró el 2018. Después, el 2019 y 2020 entiende, no tenían vida marital. Incluso dormían en piezas separadas. Desde que se fue él de la casa, entiende no hicieron más vida en común. Sobre más relaciones sentimentales de Claudia, entiende ella conoció a una persona por internet y se escribieron bastante cartas bastante tiempo. Se conocieron físicamente en septiembre del 2020 y empezaron una relación a inicios del 2020 pero sólo por internet, intercambiaban información. Lo sabe porque Claudia se lo contó. Conoce a esa persona, se llama Jonathan Rebolledo. Ese contacto por internet, empezó a principios del 2020 y empezaron a concretar esa relación en septiembre del 2020. Claudia no sabe si todavía mantiene esa relación. Diría que sí, aunque un tiempo habían terminado. No sabe ahora. En ese tiempo pareciera que la



relación de ellos fue más abierta porque Ricardo también tenía otras parejas, pero su hija la vino a tener en septiembre del 2020. Ricardo le mandaba fotos a Claudia besándose con otra en el auto, después que tenía una huasita no sabe dónde. Ese matrimonio estaba disuelto. Parece que después Ricardo no quiso firmar los papeles.

A la Defensa del acusado Vega Guerrero respondió que, sobre si sabe con quién vive Claudia del Pino, ahora vive con ellos. Conoce a Jonathan Rebolledo. Q Rebolledo no lo conoce hace mucho tiempo pero como está en su casa, no ve ninguna demostración. Él va todos los días a buscarla para traerla al juicio. A veces se viene con la abogada. Hoy la trajo él a su hija.

Sobre el caso de hoy, entiende que en este momento no habría mayor cosa porque Ricardo usaba las tarjetas de su hija. Esto lo han venido conversando desde octubre con su hija. Su hija llega apaleada de las audiencias.

Sobre consumo de drogas y alcohol de su hija, no, su hija jamás ha consumido drogas y alcohol sólo socialmente, nunca al extremo de sobrepasarse con el alcohol. Las veces que fue a su casa.

Sobre la edad de ambos, de su hija y Ricardo, su hija es “mononita” y cree no se ve mayor. Físicamente Ricardo se ve mayor. Respeta mucho las elecciones de su hija, aunque se equivoque, es su vida y ellos atentos a sus nietos. Supo la edad de Ricardo por el RAV 4 porque la mamá mandó un Whatsapp en que dijo que su hijo ya tenía 23 años y no aprende. Hay muchas relaciones con esa diferencia de edad y han funcionado. Ricardo no es nada de tonto, puede ser muy exitoso.

Sobre si no quiere mucho a Ricardo Vega, respondió que le tenía harta estima y se fue desilusionando y cuando supo esto otro, pensó que no lo podría ver a la cara pero lo ha hecho hartas veces porque dijo la verdad. Ricardo no es un don nadie frente a su hija porque tiene potencial, sólo que se junta con gente adecuada y hace cosas incorrectas.

A su hija la ama con todo. Declara hoy porque su hija es inocente. No ha declarado ante un fiscal, no la llamaron. Ella no sabía nada hasta octubre. Antes de eso, su hija nada les había comunicado.

Sobre si alguna vez habló con Ricardo sobre las cosas que le contaba Claudia de su vida, esas cosas, salvo lo de la RAV 4 que vivieron y lo de Carabineros, lo grande lo vinieron a saber, y lo del allanamiento, a fines de octubre. Sobre lo de la cara, le vieron la marca en la cara y no dijo primero nada, lo dijo en octubre.



Sobre el celular que decía guatona y coja, eso, en que le mostró el teléfono, debe haber sido el 2019 porque el 2020, estábamos en pandemia y dilataban más las visitas.

En la relación cara a cara este matrimonio fue de escasa vigencia en comunidad. Sobre cuánto tiempo vio cara a cara a Ricardo Vega, los dos solos, muy pocas veces. Compartían siempre en familia. Cuando conversaron fue la primera vez en que le preguntó cómo conoció a Claudia y también cuando le preguntó de qué vivía. Dos veces. Las otras fueron conversaciones entre todos.

A Ricardo un día le preguntó por qué no se iba y le dijo que sí pero que le pagara 4 millones. No le pagó porque cree todavía no estaba este asunto de las acusaciones. Si lo hubiese sabido, lo habría pagado. Tampoco puede llegar y pagarle a una persona. Él tendría que haberse ido por propia iniciativa.

Esta declaración que ha dado nadie se la redactó. Es profesora jubilada y tiene capacidades. Esta declaración que ha dado no la ha compartido con alguien. No la mandó por correo electrónico a otros.

Al Querellante contestó que, sobre la operación de la vista de su hija, esto fue como al principio, no recuerda el año.

La nana de Claudia, la que fue al matrimonio, vivía en la casa y le decían Pepita. No conoce su nombre.

Sobre las visitas, ellos viajaban prácticamente todos los fines de semana a Linares, no en pandemia, y el matrimonio también iba a su casa en Talca, salvo una vez cuando fue Claudia con la marca en la cara, quizás otra vez.

Durante todo este tiempo ella con su marido ha vivido en Talca. Nunca han vivido en Rengo ni en Linares.

Esta Defensa también incorporó la prueba descrita en el auto de apertura como Acta de audiencia de formalización en causa Ruc 1701166996-4 de fecha 10 de diciembre de 2017, víctima Claudia Del Pino, imputado Arturo Daniel Canales Vega”, “Acta de audiencia de formalización en causa Ruc 1200391563-6 de fecha 16 de mayo de 2012, formalización respecto de Rolando Gabriel Valdebenito Bustamante por el delito de amenazas en contexto Violencia Intrafamiliar , como víctima Claudia Del Pino” e “Informe de cese de convivencia entre los imputados para demostrar la dinámica entre ellos, de fecha 08 de enero de 2021”.

En la primera se lee que se trata de un acta de audiencia fechada el 10 de diciembre del año 2017, celebrada ante el Juzgado de Garantía de Rengo y



correspondiente a su causa RIT 4212-2017, en que el imputado es Arturo Daniel Canales Vega y la víctima Claudia del Pino Acuña; que el delito es lesiones menos graves; y que se aprobó una suspensión condicional del procedimiento por un año con condiciones de las letras e y g del artículo 238 del Código Procesal Penal y de las letras a y b del artículo 9 de la Ley 20.066.

En la segunda se lee que se trata de un acta de audiencia fechada el 16 de mayo del año 2012, celebrada ante el Juzgado de Garantía de Rengo y correspondiente a su causa RIT 1166-2012, en que el imputado es Rolando Gabriel Valdebenito Bustamante y la víctima Claudia Andrea del Pino Acuña; que el delito es amenazas en contexto de violencia intrafamiliar; y que se aprobó una suspensión condicional del procedimiento por un año con condiciones de la letra b del artículo 238 del Código Procesal Penal y de la letra b del artículo 9 de la Ley 20.066.

En la tercera se observa, siempre en lo relevante, que corresponde a un certificado de cese de convivencia emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, referido al matrimonio entre los acusados de esta causa, en que se consigna que con fecha 8 de enero del año 2021 ante un oficial civil de Linares comparece Claudia del Pino Acuña y declara haber cesado su convivencia común con Ricardo Vega Guerrero.

A ello se debe agregar lo testificado por Jonathan Rebolledo Durán, en los términos que ya se extractaron.

De lo precedente colige este Tribunal, en lo relevante, que fue razonablemente acreditado que la acusada del Pino Acuña tiene un funcionamiento intelectual normal promedio; que tiene, según una perito sicóloga, un estilo de personalidad límite por el que tiende a focalizarse sólo en pautas relacionales de idealización o devaluación, especialmente si es se trata de una pareja; que, según la misma perito, tiene un funcionamiento más dependiente en que requiere estar en una relación de pareja para funcionar establemente; que tuvo relaciones sentimentales en que denunció haber sufrido violencia intrafamiliar; y que con su actual cónyuge mantuvo una relación marital en que a menos hubo violencia intrafamiliar verbal.

En relación con las dos últimas conclusiones, destaca, en cuanto a su extensión en el tiempo y su efectividad, que la señora Castillo Aravena corroboró que la primera denuncia de violencia intrafamiliar que formulaba la acusada del Pino Acuña fue la que interpuso el 27 de septiembre del 2020. Añadió que dicha denuncia era sólo por amenazas, donde la misma del Pino Acuña, en la única declaración que



dio, dijo que no tenía lesiones. También aportó que, en su declaración, Jonathan Rebolledo señaló que recibió un llamado de su amiga Claudia, a la que escuchó con mucho miedo, escuchó discusiones y gritos con su pareja y al imputado de la causa.

Todo ello contrasta con lo sostenido por la acusada del Pino Acuña en relación con los habituales hechos de violencia intrafamiliar que señaló haber sufrido de parte del acusado Vega Guerrero mientras convivió con él, dado que ella, siendo incluso una abogada que trabaja en el Ministerio Público, presentó la primera denuncia sobre el tema en septiembre del año 2020, esto es, cuando ya se había producido el allanamiento de su domicilio por parte de la Policía de Investigaciones y estaba en conocimiento de que era imputada por el delito de cohecho. También lo hace con el hecho de que, en la declaración que prestó al comienzo del juicio oral, señaló en lo pertinente que ella hablaba por teléfono con Jonathan el 27 de septiembre cuando su cónyuge entró a su casa, la escuchó hablando con él, le tomó su teléfono nuevo y le pegó en la cara con el teléfono reiteradamente y le dejó toda moreteada la cara, cuando en la respectiva denuncia afirmó que no resultó con lesiones en ese evento. También lo hace con el hecho de que el señor Rebolledo Durán declaró ante estrados que el 27 de septiembre del año 2020 estaba hablando por teléfono cerca de las 11:00 pm con Claudia y sintió cuando este hombre le quitó el teléfono, lo rompió y sintió los gritos de Claudia diciendo suéltame Ricardo y él la insultaba, tratándola de lo peor. Sintió los gritos de Ricardo Vega diciendo te pillé maraca conche tu madre y después sintió golpes, vidrios que se quebraban y gritos de Claudia que decía suéltame, me duele, y golpes, asume de puño porque se sentían golpes a masa. Escuchó unos segundos, cortó y llamó al 133. Añadió que el 28, por la situación, la fue a ver y le comentó que sí había hecho la denuncia y comprobó los moretones que tenía en su cara, rodilla, espalda, le sacó una foto a su cara, a un moretón que tenía al lado derecho. Evidentemente ello no coincide con lo que ese mismo testigo declaró ante la señora Castillo Aravena, pues a ella únicamente señaló que es esa misma oportunidad escuchó por teléfono a Claudia del Pino con mucho miedo, escuchó discusiones y gritos con su pareja, sin aludir a golpes o a moretones.

Lo antedicho impone cuestionar seriamente la credibilidad de la acusada y del citado testigo en lo analizado, con lo que pierde sustento el argumento revisado.

Por su lado, la señora Cisternas Muñoz en lo sustancial afirmó haber visto a la acusada del Pino Acuña con moretones en la cara o los brazos unas cinco veces durante los años 2019 y 2020, antes de irse el acusado Vega Guerrero de la casa en



que ambos convivían, pero reconoció que, sobre si en alguna oportunidad vio a Vega Guerrero golpear a del Pino Acuña, no lo observó agredirla en esas partes del cuerpo y sólo pudo evocar una vez en que afirmó que vio que él le pegó a ella fuerte con su pie en el tobillo mientras estaban sentados al comedor, pero no dio detalles de ese evento que permitiesen contextualizarlo. Además aseveró que Vega Guerrero las amenazaba, a su esposo inclusive, y que Claudia le enviaba audios para respaldarlos, que tiene mil pendrives con eso, pero lo cierto es que, para apoyar esos dichos, tales esos audios no fueron incorporados al juicio oral. También señaló que escuchó a Vega Guerrero tratar con garabatos y ofensas a del Pino Acuña, lo que sí constituye un acto de violencia intrafamiliar verbal.

En relación con el testimonio de la señora Acuña Corsini, claramente, desde su perspectiva de madre, prácticamente se limitó a afirmar hechos de violencia intrafamiliar que le relató su hija, pero que no presenció, a pesar de que refirió que se quedaba períodos considerables de tiempo conviviendo con ese matrimonio, indicando que a veces se quedaba un mes o una semana con ellos para ayudar. Así también manifestó que, sobre una eventual relación jerárquica entre los acusados en su matrimonio, creía, dado lo que supo después (que se lo relató su hija), que el control de la relación lo tenía Ricardo, pero agregó que, basada en lo que ella vio directamente, en realidad se veía una relación bien mixta.

Sobre lo mismo, cabe hacer presente que esta testigo señaló que el acusado Vega Guerrero tiene habilidades en computación, mucha habilidad en computación, pero en lo sustantivo justificó tal aseveración nuevamente en un relato de su hija.

Sin perjuicio de todo ello, además no advierten estos Sentenciadores de qué manera el contexto de violencia intrafamiliar y el eventual sometimiento que pudo sentir la acusada del Pino Acuña hacia su cónyuge puede desvirtuar los razonamientos que, fundados en las pruebas incorporadas, expusimos en el décimo considerando de este fallo, especialmente en lo atinente a los delitos de cohecho, que es la materia en que podrían influir.

En ese sentido, la acusada del Pino Acuña, al declarar (sea en el sumario administrativo o en la audiencia de juicio oral) como mecanismo de defensa, en ningún momento planteó que el acusado Vega Guerrero la haya forzado o que al menos el contexto de violencia intrafamiliar en que se relacionaban la haya conminado a acceder a una eventual demanda de su cónyuge de entregarle información de imputados por causas de conducción en estado de ebriedad que ella



tramitase, específicamente una descripción de la conducta punible a que se refería la más el nombre y número telefónico de los imputados así como la graduación alcohólica con que fueron sorprendidos, y menos de proceder en un momento a archivar sus causas en los sistemas informáticos del Ministerio Público.

La Defensa planteó en su momento que pretendía demostrar la sumisión que existía de parte de su representada hacia Vega Guerrero en relación con los maltratos reiterados que recibió de él, de tal manera que Claudia ni siquiera pudo percatarse del riesgo que corría respecto de su trabajo y no supo de esto hasta que la Policía de Investigaciones llegó a allanar su domicilio.

Sin embargo, los hechos imputados y que congruentemente se tuvieron por acreditados no van por la línea de reprochar a la acusada del Pino Acuña no haberse percatado de las acciones ilícitas desplegadas por su cónyuge, sino que derechamente, en lo revisado, por haberse concertado con él para entregarle la información referida para contactar imputados de causas por conducción en estado de ebriedad con el fin de solicitarles beneficios económicos a cambio de terminar su causa, en circunstancias que debía seguir en tramitación.

Finalmente, esta Defensa relevó que la testigo Paulina nos entregó una información súper importante, que incluso antes del allanamiento ya había visto a Ricardo en el computador familiar y que pudo verificar en al menos dos oportunidades que estaba en una página con el logo de la Fiscalía y que le llamó mucho la atención, no pudo ver de qué se trataba porque Ricardo se enojó, le puso mala cara y le llamó la atención y quedó tan marcado eso que cuando declaró, nos señaló que efectivamente se dio esa situación.

Sobre ello, recordar que la testigo señora Cisterna Muñoz declaró al respecto que una vez Ricardo Vega colocaba música en su computador. Claudia siempre sentada porque le dolía la cadera, pocas veces ella se paraba y una vez se paró no sabe dónde y él estaba en su computador y pensó que chateaba con alguien, con otra mujer. Él se dio cuenta de que miró y la miró. No chateaba con otra mujer. Lo que alcanzó a ver, porque no podía estar mirando lo que él hacía, no correspondía, era una cuestión amarilla, o sea, azul, un mono azul. Fue lo único que vio. Después lo reconoció, se dio cuenta de que era el logo de la Fiscalía. Cuando ella se paró, él se paró a cambiar la música. Eso ocurrió dos veces, no sabe si otra vez. Lo que recuerda fue eso. No leyó lo que había en el computador, sólo vio lo que dijo.



Analizando ese testimonio, destaca primero que la testigo, en consonancia con que indicó que no estaba mirando lo que hacía Vega Guerrero y que por ello hablaba de lo que alcanzó a ver, fue dubitativa en cuanto al color de la “cuestión” o del “mono” que dijo haber visto en la pantalla del computador que operaba el acusado Vega Guerrero, lo que resulta relevante para identificar un logo institucional, especialmente el del Ministerio Público. Tampoco explicó qué fue lo que “después” le permitió darse cuenta que eso que había visto antes, era el logo de la Fiscalía, ni por qué no lo identificó de inmediato. Esto ya permite dudar seriamente de que realmente logró ver con claridad, en la oportunidad que indicó, tal logo. A ello se debe sumar, para desvirtuar el valor indiciario que a esta información pretende asignarle la Defensa de la acusada del Pino Acuña, lo que sobre el punto expuso el señor Jorquera Loyola en cuanto a que, dentro de los descargos que Claudia del Pino presentó en el sumario administrativo que instruyó, ella pidió la declaración de una testigo de apellido Cisternas, quien declaró en el sumario y, entre otras cosas, señaló que Ricardo Vega entraba al computador y colocó música, pero después lo vio trabajar en páginas del Ministerio Público, lo que sabía porque tenían el logo del Ministerio Público, pero, afirmó el señor Jorquera Loyola, quien, recordaremos, indicó haber trabajado en el Ministerio Público como abogado asesor entre el 2001 y el 2009 y luego del 2019 a la fecha, el SIGE y el SAF no tienen el logo del Ministerio Público, lo que las fotografías y videos que se acompañaron de esos sistemas al juicio oral corroboran.

DECIMOQUINTO: Que la Defensa del acusado Vega Guerrero, en lo que no obtuvo, en suma postuló la incomunicabilidad de la calidad de empleado público a su representado para los efectos del delito del artículo 248 bis del Código Penal. Dado que ello fue analizado en profundidad en el undécimo y duodécimo considerandos de la presente sentencia definitiva, los damos acá por reproducidos para no extendernos innecesariamente.

Sin perjuicio de ello, cabe añadir que esta Defensa planteó que Ricardo Vega era sujeto de una relación jerárquica o dominante de su cónyuge hacia él, una asimetría de poder. Ella era la abogada, la fiscal, 20 años mayor que él, quien no lo dejó trabajar porque él hacía las cosas de la casa.

En relación con ello, esta Defensa presentó a la testigo Camila Aileen Guerrero Vega, quien manifestó que alternó sus apellidos hace poco. Es hermana de



Ricardo Vega Guerrero. Estudia derecho, cursó su cuarto año. Ha tenido ramos como ética y filosofía. Entiende los alcances de una declaración.

Sobre los imputados, a Claudia la conoció por Ricardo. Un día compartían en su casa Ricardo, su mamá y ella en un asado y en ese momento Ricardo llamó a Joel, un conocido, para invitarlo a la casa y él le comentó que estaba con una amiga que era fiscal de Rengo y que podía ir con ella a la casa. Aceptaron y llegaron a la casa a compartir con ellos. Claudia llegó ebria a la casa. Fue una relación sentimental súper rápida, de hecho ese mismo día Claudia le dio un beso a Ricardo. Ricardo era colectivero en Rengo y debía entregar diariamente al dueño de los colectivos y cuando ellos empezaron a salir, una relación súper rápida e intensa, Claudia pretendía estar todos los días con él, ella le ofrecía pasarle la plata de la entrega para que no trabajara. Luego empezaron una relación sentimental. Se conocieron las familias. Claudia les comentó más adelante que le salió un traslado a la Fiscalía de Linares y quería irse con Ricardo porque en Linares no conocía a nadie y se querían venir juntos. En marzo del 2018 se vinieron a Linares a vivir y en abril se casaron. Para el casamiento vinieron unos días antes para ayudar, pero ella y su mamá nunca estuvieron de acuerdo porque todo se dio muy rápido. Llegaron a Linares y un día Claudia les comentó que nadie de su familia sabía que se iba a casar con Ricardo, porque ella siempre decía que recibía recriminaciones de la mamá, que era la oveja negra de la familia y le daba medo comentarle. Un día antes del matrimonio, Claudia le contó a su mamá que se casaba al otro día. Claudia tenía el teléfono en altavoz y escuchó que su mamá la recriminó, que a otra persona más le arruinaría la vida y que todo lo que tocaba lo destruía. Conversaron con Ricardo antes del matrimonio y dijo que estaba seguro. Se casó al otro día. Siempre ahí para apoyarlo. En el casamiento estaban los hijos de Claudia, la asesora de hogar, Ricardo, ella y su mamá. Fue en la casa de Claudia.

Luego empezaron los problemas más fuertes de la relación. Claudia pasaba tomando, ella tiene problemas con el alcohol y cree por eso se dieron problemas en la relación. Ricardo nunca ha negado que él también toma alcohol, pero decía que lo hacía porque ella se enojaba y cuando él no quería tomar, ella le decía que era un viejo “culiao” porque no quería tomar con ella ni compartir. Fueron sabiendo de varias cosas que pasaron en la relación. Ella viajó muchas veces a ver a su hermano, su mamá igual cuando podía. También Ricardo les comentó cosas que les calzaban porque veían lo que pasaba en la casa de ellos. La relación de ellos con sus hijos no



era muy de mamá a hijo porque Ricardo era el que siempre hacía todo en la casa, lavaba, planchaba, cocinaba, llevaba a los niños al colegio y a ella al trabajo. Ayudaba a los niños a hacer los trabajos. Mientras, ella trabajaba a medias y el resto se lo tomaba en alcohol. Presenció cuando su hija Alina faltó el respeto a Claudia y le pegó porque dijo que estaba chata de ver a su mamá consumir alcohol.

Cuando fue, a Ricardo lo vio mal. Él intentaba tirar a la talla las cosas que pasaban pero en un tiempo lo vieron desgastado, que no era el mismo. La primera asesora de hogar que tuvieron con la que se fueron de Rengo, la Pepita, les aconsejó a ella y su mamá que sacaran a Ricardo de esa casa porque había muchos problemas, que no aguantaba a Claudia y que seguía en esa casa por el hijo de Claudia. Ella dijo que tanto era así que se retiraría y así fue, se retiró y Ricardo pasó a ser el que hacía todas las cosas. Claudia no se buscó un marido, sino una nana, y si no también había problemas. Ricardo se empezó a apagar. Siempre se levantaba contento y se empezaron a dar cuenta de que había una relación muy dominante y humilladora de parte de Claudia, no tanto con Ricardo, con ellos como familia también, que eran pobres, ignorantes, que ella era funcionaria pública, fiscal, que podía hacer lo que quisiera. Un día les comentó que antes de conocer a Ricardo, el papá de Alina se llevó a Alina sin preguntarle, poco más que la secuestró y que ella paró la carretera para buscar a su hija y ese era el poder que ella podía tener.

Empezó a notar que Ricardo le tenía miedo y mucho respeto. Por ejemplo, cuando Claudia iba a su casa y su mamá le decía a Claudia que ella recogiera su plato, Ricardo pedía que no le dijeran nada. Se dieron cuenta de que el miedo que Ricardo tenía hacia ella era real. También Ricardo sufrió violencia intrafamiliar de ella, lo maltrató y golpeó. Claudia se refería a Ricardo como la gorda delante de ellos, de la familia. Era la gorda. Le decía gorda hazme esto y lo otro. Ricardo llegaba y lo hacía sin objeciones, acataba lo que ella le decía. Se fueron dando cuenta de varios hechos que los hicieron concluir que Ricardo sí sufría violencia intrafamiliar. Muchas veces Ricardo llamó a Carabineros, pero como ella era fiscal, veían que era ella y conversaban con ella y él tenía que entrarse porque qué más iba a hacer. No había denuncias porque Ricardo no podía hacerlas.

Sobre la acusación, antes de que les allanaran la casa a ellos, nada sabían de esto. Cuando allanaban la casa, Ricardo llamó a su mamá para informarle que se quedaría sin teléfono. Hasta ese momento nada sabían. A los días, Ricardo les contó que el motivo del allanamiento, fue que Claudia sobornaba a personas a cambio de



archivar causas y le debían entregar un dinero y lamentablemente él era la cara visible, pero quien hacía todo era ella. De eso no le cabe duda porque Ricardo ni siquiera sabe usar bien su teléfono. Para descargar una canción, para guardar sus claves, le pide a ella que se las guarde porque a él se le olvidan y no sabe ocuparlo. Cuando él se quiso crear un Facebook, le pidió a ella que se lo hiciera. Que Ricardo hiciera todo lo computacional en cuanto a archivar delitos, es difícil. Ricardo tienen educación hasta 1° medio. Es bien limitado.

Sobre las edades, les llamó la atención porque Claudia es 20 años mayor que su hermano, podría ser su mamá. Obviamente no estaban en igualdad de condiciones. Ella tenía profesión, ostentaba su poder y 20 años mayor.

Ricardo no trabajaba en Linares porque cuando se fueron a Linares, antes Ricardo trabajaba y en Linares quería trabajar en un taxis, era como lo más de igualdad que podía encontrar acá y en que él sabía manejarse, pero ella nunca lo dejó. Ella hacía mucho show de celos y ese era el motivo por el cual ella no lo dejaba trabajar. Siempre hubo muchos problemas por eso. Según ella, con su sueldo alcanzaba para todo y él no tenía que trabajar, si no dedicarse a la casa.

Sobre la relación, al principio fue buena. Cuando recién se conocieron, antes de casarse. Claramente después se dieron cuenta del daño psicológico que le hacía Ricardo y tomaron distancia. Siempre que ella iba a la casa de ellos llegaba con alcohol o con una bolsa de limones y cerveza para hacerse micheladas y la gorda tenía que hacerlo. Por ejemplo, una vez en su casa compartían y Claudia estaba con trago, Ricardo también, y Ricardo empezó a bailar con un palo leseando y Claudia se puso celosa de eso y le golpeó una cerveza entera de la cabeza hacia abajo. Estaban ella y su mamá. Después de eso no volvieron a tener la misma relación del principio.

Sobre ella y Claudia, al principio le tenía mucho respeto, le llamaba la atención que era fiscal y le preguntaba cómo postular para ser fiscal. Una vez ella la invitó al Juzgado de Garantía para una audiencia, en el audio está su nombre. Ella dijo que era una alumna en práctica, pero iba en primer año. Claudia, para variar andaba borracha, había tomado toda la noche. Después se enteró por Ricardo que la jefa de Claudia le entregó una carta de amonestación porque ella no era alumna en práctica.

Sobre su hermano Nelson Vega, después de que se enteraron de lo pasado y de que esto comenzó por la denuncia de Nelson Andrés, o Andrés, le preguntaron y



también se generó una discusión grande. Le preguntaron por qué decidió eso y les comentó que fue porque la última vez que fue a Linares, fue a la casa de Claudia y Ricardo le comentó lo que pasaba, que no daba más, que estaba chato y no sabía cómo salir de ahí, que cuando Claudia empezó a hacer este delito él le advirtió si estaba segura. Según Andrés, como vio tan mal a Ricardo y lo mal que estaban como pareja, decidió denunciar.

Sobre la relación de esta pareja, Claudia mandaba y decidía.

Sobre su domicilio, vive en Viña del Mar donde arrienda un departamento. Lo arrienda desde hace 4 años. Cuando empezó a buscar arriendo, el departamento estaba con una corredora y son estrictos en cuanto a los documentos y a ella le solicitaban que quien firmara el contrato de arriendo ganara tres veces el valor del arriendo. En su familia no había nadie con ese contrato y le pidió a Claudia que firmara el contrato por ella. Pero los pagos están hechos de su cuenta, igual que los gastos. El año dos ya lo firmó su papá y el tercero y cuarto ella, porque ya tienen confianza con la dueña. Del Pino nunca le pagó el arriendo para estudiar en Viña del Mar.

Sobre los presentes, conoce al defensor que le habla y a los abogados de Claudia porque ellos fueron a su casa por mandato de Claudia. Se individualizaron como sus abogados y fueron a su casa a pedirles, cuando Ricardo estaba preso, que él se echara la culpa de los delitos y que no podían tomar a Ricardo como cliente pero sí con otro abogado que tuvieran de confianza y trabajar las defensas juntas para que Ricardo se culpara. Con su mamá les dijeron que no porque Ricardo no tenía por qué responder por algo que no hizo y ahí ellos les plantearon que trabajaran las defensas juntas, que había que sacar al fiscal del caso porque el fiscal estaba ocultando evidencias sustanciales para el juicio y que ellos querían unir a las defensas para sacarlo y si no lo hacían, el fiscal lo único que quería era dar las máximas penas a Ricardo y Claudia. Eso fue el 29 de septiembre del 2022, lo sabe porque ella tiene la grabación de cuando ellos fueron a su casa. Ella los grabó de su teléfono. Luego de que ellos empezaron a hablar de que Ricardo se culpara, ella, por cuenta propia, tomó su teléfono y se puso a grabar porque se dijo que podía que le sirviera y tendría la evidencia. Sobre esa grabación, a nadie había comentado su existencia. Tiene un pendrive con esa grabación.

A la Defensa de la acusada del Pino Acuña respondió que es estudiante de derecho de 4° año. Esa carrera completa la ha realizado en Viña del Mar. Al



principio, Claudia firmó el contrato con ella, se llevaban bien en esa oportunidad. Posteriormente su padre asumió el contrato con la dueña del departamento, Jennifer Gacitúa. Claudia jamás le ayudó en más que en firmar el contrato.

A continuación esta Defensa exhibió a la testigo la prueba denominada en el auto de apertura como “Captura de pantalla donde consta transferencia realizada por Claudia Del Pino a Jennifer Gacitua Arenas por concepto de arriendo de departamento”. Se trata de la captura de una pantalla de un teléfono titulada “Comprobante de Transferencia”, en que se lee como “monto”, \$250.000; como “desde”, Claudia Andrea del Pino; como “hacia”, Jeniffer Grace Gacitúa Arenas”; como “asunto”, “arriendo depto Camila Vega faltan 10000; y como fecha, 27/03/2020. Luego se observa una fotografía de lo que parece ser un cheque del Banco Estado cortado en cuatro partes, en que se alcanza a leer la suma de \$260.000, la fecha 25/07/2020 y la orden de pagar a Jeniffer Gacitúa. Al ver dichas imágenes, la señorita Guerrero Vega contestó, a la pregunta de si eso puede ser un pago de Claudia por el departamento, que no. Ese dinero se lo pasó a ella por mano y fue una vez. Sobre la segunda prueba, un cheque, en el contrato está estipulado que la dueña del departamento le exigía como garantía diez cheques por si ella no pagaba y la dueña nunca debió hacer valer un cheque y después la dueña rompió los cheques. Ella entregó a Claudia el dinero por transferencia. Ella le pasó el dinero a Claudia, quien vivía en Linares. Ella no llegaba aún a vivir a Viña porque era el primer arriendo. Cuando fue a ver a Ricardo, le pasó la plata en efectivo. El arriendo era de 260 el primer año. Era para que Claudia el hiciera la transferencia a la dueña. Ella no depositó el dinero a la dueña. El contrato estaba a nombre de Claudia. No le transfirió directamente a la dueña porque ella tenía el dinero en efectivo. Fue a ver a su hermano y le pasó el dinero a Claudia, no viajó de Rengo sólo para entregar el dinero a Claudia.

Empezó a estudiar en marzo del 2020, en pandemia. Fue on line.

Al Ministerio Público contestó que, sobre lo que ocurrió en esa audiencia a la que compareció, no recuerda fecha pero se puede corroborar con el audio y la amonestación que dieron a Claudia por esa situación. Compareció a esa audiencia porque había llegado días antes a Linares para verlos a ellos y Claudia pasaba con trago y cuando le tocaba estar de turno y Carabineros la llamaba por diligencias, ella estaba borracha y ellos tenían que despabilarla un poco para que atendiera el teléfono. El día anterior se había trasnochado Claudia hasta muy tarde estuvo



bebiendo alcohol y ya la había invitado al Tribunal y Ricardo le dijo que mejor la acompañara. Estuvo al lado de ella compareciendo y eso motivó la sanción por parte de la fiscal jefe, según entiende. Ella en esa época estaba recién en primer año, por lo que fue el año 2020.

Sobre el tema de la grabación que obtuvo, la obtuvo en su casa en Rengo, en la casa de su mamá. Los dos abogados fueron a la casa de su mamá y delante de la casa hay un minimarket, ella con su mamá conversaban y llegaron ellos. Pensaron primero eran del SII y se identificaron y dijeron que venían de parte de Claudia. Ellas quedaron preguntándose qué hacían ahí, su hermano estaba preso. Ellos dijeron que los mandó Claudia. La abogada le preguntó si ella era la hermana que estudiaba derecho. Eso fue en el local comercial. Sobre si supo si Claudia y Ricardo tuvieron a los mismos abogados defensores, al comienzo sí, tuvieron los mismos abogados defensores, no recuerda sus nombres pero sabe eran dos. Esa relación con los abogados terminó cuando Ricardo decidió irse definitivamente de la casa y Claudia al principio le decía que se inculpara de todo y así ella no perdería su trabajo y contrataron a los mismos abogados. Sobre la época en que Ricardo abandonó el patrocinio con esos abogados, no sabe. Sí después del allanamiento, pasaron como dos semanas y Ricardo se fue de la casa de Claudia.

Sobre la conversación con los abogados, la petición que les hicieron fue que Ricardo se culpara de todos los delitos por los que acusaban. En ese tiempo Ricardo estaba preso. Esa grabación no la entregó a nadie porque Ricardo tuvo primero a una abogada de apellido Greco, luego a unos abogados de San Fernando que fueron varios y lamentablemente ninguno fue de confianza porque por lo que ella fue captando por las llamadas de teléfono cuando les preguntaba por la causa, esos abogados ofrecían la misma teoría de los abogados de Claudia. Por eso no quiso entregar la grabación a nadie. Con don Víctor sí la quiso entregar. Cuando Ricardo estaba preso y le pidieron que cambiara la versión, entiende que Ricardo en el sumario se culpó de todo porque a los días les contó a ella y su mamá que se culpó, sus razones, y luego le aconsejaron que dijera la verdad y que no tenía por qué responder por algo que no hizo y así fue. Cuando los abogados de Claudia llegaron a conversar con ellos, Ricardo ya había dicho la verdad y querían que Ricardo se culpara. La declaración del sumario de Ricardo fue concordado con Claudia y sus abogados.



Ricardo, en materias computacionales, es muy limitado. Sobre si en el sumario le hicieron pruebas computacionales, entiende que Ricardo no supo hacer nada.

A los abogados de Claudia, ante la petición de modificar la declaración en el proceso penal, con su mamá primero dijeron que no aconsejarían a Ricardo que se culpara, ya le habían aconsejado que dijera la verdad. Entonces empezaron como a cambiar la versión y ella empezó a grabar, que podían trabajar las defensas juntas porque el Fiscal escondía muchas pruebas y querían sacarlo del caso, que escondía unos discos duros, y que al único que perjudicaban era a Ricardo. Ante su negativa del cambio de declaración, pidieron el trabajo conjunto de las defensas para sacar al fiscal, eso le dio a entender, porque el fiscal quería darle las penas máximas a cada uno. Esta grabación la hizo el 29 de septiembre del 2022. No recuerda la fecha de la acusación de esta causa. No declaró en esta causa. Lo que informa es la primera vez que se conoce. Lo de este audio no lo había contado a nadie.

Respecto a esta alegación, ya expusimos que el valor probatorio que asignaríamos a la declaración de la señorita Guerrero Vega es menor por el vínculo fraternal palpable que existe entre ella y el acusado Vega Guerrero y por el contenido de su declaración, en que evidentemente manifiesta animadversión hacia la acusada del Pino Acuña, sobre todo al relatar hechos de violencia graves que ni Vega Guerrero refrendó, como que observó que del Pino Acuña en una oportunidad golpeó en la cabeza con una cerveza entera a Vega Guerrero porque se puso celosa debido a que él en broma comenzó a bailar con un palo.

Sin perjuicio de ello y análogamente a lo que se razonó sobre un planteamiento similar formulado por la Defensa de la acusada del Pino Acuña, no advierte este Tribunal de qué manera estos problemas de convivencia entre los acusados que describió la señorita Guerrero Vega atingen de manera relevante a los hechos que empecen al acusado Vega Guerrero, desde que éste no planteó, ni en el sumario administrativo ventilado ni ante estrados, que haya sido expresa o tácitamente compelido o forzado por del Pino Acuña a realizar las acciones por las que se le sancionará en este fallo. Si bien su Defensa técnica destacó que Ricardo Vega era sujeto de una relación jerárquica o dominante de su cónyuge hacia él, una asimetría de poder, en que ella era la abogada, fiscal, 20 años mayor que él, y no lo dejó trabajar porque él hacía las cosas de la casa, la eventual instrumentalización que sugiere no tiene correlato en la defensa material.



Sobre lo mismo esta Defensa sostuvo que su representado declaró que era el mensajero y que nunca se quedó con un peso, y era la coimputada quien, por su rol y estatus, tenía el dominio total del hecho y además era la que ostentaba el cargo público.

Revisando lo manifestado en la audiencia por Vega Guerrero sobre el punto, resulta que manifestó que un día Claudia le dijo que estaba cagada de plata y que sabía cómo ganar plata con el tema de la movida de las licencias y que era fácil para ella porque eran causas de ella y nadie se iba a meter a esas causas. Entonces él le preguntó si estaba segura y dijo que la única forma de que la pillaran era que algunos de los que ayudaran, “sapearan”. Más adelante precisó que Claudia le propuso eso de la movida, ante lo que le preguntó si estaba segura y que lo pensara bien porque era su pega y ella respondió que no la iban a pillar, que si alguien “sapeaba”, ahí sí jodía, pero que las causas nadie se las revisabas. Afirmó que así fue y ella sacaba la información del computador, la escribía en un cuaderno y él llamaba a los imputados y les decía que se llamaba Cristian, que había una movida y si les interesaba. Unos le decían que sí y otros que no. Con los que accedieron, se juntaron en Linares, les explicaba la movida en persona y le decían que sí. Ahí él iba a la casa, le decía a ella que este “ghevón” dijo que sí y ella hacía el tema en el computador.

Así, Vega Guerrero habla de una propuesta delictiva que se le realizó por parte de su cónyuge y que él en definitiva aceptó y materializó conjuntamente con ella. No se describe en ello como un mero instrumento de del Pino Acuña o como un simple mensajero de la misma.

En un punto aseveró que la plata que le entregaban los imputados él a su vez la entregaba a del Pino Acuña, pero también señaló varias veces que gastos de la casa en que tanto él como su esposa convivían, eran pagados por ella.

Finalmente, esta Defensa postuló que la figura que se le plantea a su representado no es reiteración, sino que es un delito continuado en que es posible apreciar por una conducta típica reiterada por hechos independientes, pero que pueden ser calificados bajo una unidad.

En relación con ello, autorizadamente se ha considerado que “el delito continuado, sin perjuicio de que no tiene consagración legal en Chile, ha significado hondas discrepancias en la doctrina, lo que, como dice Eduardo Novoa, hace imposible al intérprete apoyarse en ella con cierta consistencia (Eduardo Novoa



Monreal. “Curso de Derecho Penal Chileno”, Editorial Conosur, 1985, Tomo II , página 291), de manera que, de acuerdo a este autor, en doctrina debe aplicarse el texto desnudo de la ley positiva vigente y, “para la ley chilena, el que realiza varias acciones distintas que están legalmente tipificadas, comete varios delitos, a no ser que el propio tipo de a entender claramente que la pluralidad de acciones integra una sola infracción penal” (sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema el día 3 de mayo de 2023 en su Rol N° 59.856-2022). Ya desde esta perspectiva, la solicitud en comento debe ser desechada. No obstante ello, tampoco advierte este Tribunal, que entre los siete delitos de cohecho por los cuales se condenará al acusado Vega Guerrero se dé el vínculo subjetivo que habitualmente se requiere para la configuración de un delito continuado por la doctrina que lo afirma, ya que se trata de siete hechos claramente diferenciables uno del otro, tanto en tiempo como en espacio, en que se contactó a distintos imputados y a cada uno de ellos se formuló una oferta ilícita, sin que pueda así predicarse que entre esas acciones hay unidad de resolución delictiva.

DECIMOSEXTO: Que, en cuanto a las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal concurrentes y respecto de la acusada del Pino Acuña, tanto el Ministerio Público, el Querellante como la Defensa invocaron, en la audiencia de la parte final del artículo 343 del Código Procesal Penal, la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal, a saber, la irreproachable conducta anterior, fundándola en el respectivo extracto de filiación y antecedentes emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile que la Fiscalía incorporó al efecto, mismo que, a la luz de los principios de inocencia y buena fe, a juicio de este Tribunal es suficiente para atribuir a la conducta anterior de dicha encausada el carácter de irreproachable.

Además esta Defensa solicitó, en igual instancia, el reconocimiento para ella de la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, a saber, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, argumentando que si al coimputado que declaró en el juicio y pese a que nada de lo que señaló fue un real aporte a la investigación, se le reconoce el artículo 11 N° 9, con mayor razón pide esa atenuante para su representada. Ella, cuando llegó la Policía de Investigaciones a su casa, permitió el ingreso, entregó el computador que se buscaba y el otro computador que usaban sus hijos para cooperar con la investigación. Hay que ver todo el comportamiento en el juicio y en la investigación. Esa conducta es claramente una cooperación. Sobre los celulares hay una controversia, el policía dijo que no entregó



la clave y Claudia que sí, pero no quedó registro de ello en el acta de incautación. Es cooperación también cuando ella indicó al declarar que una impresora no funcionaba, que mantuvo las impresoras y a más de un año todavía las mantenía y que llamó a Paulina para que entregara esas impresoras a la policía, lo que permitió que el Ministerio Público investigara, pudiendo eliminar esas impresoras. También se presentó a la prueba caligráfica. Declaró en la investigación, aportó antecedentes, hay audios ofrecidos incluso por el Ministerio Público. No se puede desconocer que en su declaración hay algo concreto, la entrega de un audio al Ministerio Público que además ofrece como prueba en la acusación.

Al respecto, este Tribunal desechará tal pretensión debido a que, estimamos, basta contrastar la declaración que del Pino Acuña prestó durante el juicio oral con lo que dimos por legalmente acreditado para evidenciar elocuentemente que la primera en suma no sólo no cooperó con el esclarecimiento de los hechos sino que, por el contrario, intentó tergiversarlos. Todo lo opuesto a lo que acontece con lo depuesto ante estos Sentenciadores por el acusado Vega Guerrero, por lo que sí procede diferenciar sus aportes.

Sin perjuicio de ello, que para este Tribunal ya es suficiente para rechazar la minorante en comento, las colaboraciones probatorias a las que aludió su Defensa carecieron de relevancia ya que ni de los computadores ni de las impresoras que citó se extrajo algún antecedente sustancial que haya sido incorporado al juicio. Sobre la prueba caligráfica aludida, que debe entenderse es la que efectuó en la investigación ante el perito del LACRIM, las consecuencias probatorias de la misma, conforme ya se expuso, fueron limitadas precisamente debido a la nueva prueba caligráfica que realizó ante el perito privado de la Defensa y el dictamen del mismo.

Por su parte, la Defensa del acusado Vega Guerrero invocó, también en la audiencia de determinación de pena, la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, justificándola en cómo se planteó el juicio y cómo su representado declaró, asumiendo, y cada aspecto que declaró se fue validando en la causa. Además en la investigación Luis Gutiérrez contó que el aporte de Vega fue relevante. Fue un aporte al Tribunal para determinar la verdad del proceso. Pidió además que se le tenga como muy calificada.

El Ministerio Público y el Querellante adhirieron sólo en lo tocante a la concurrencia de esa minorante, más no a su calificación.



Sobre ello, concordamos con dichos intervinientes en que lo aportado por el acusado Vega Guerrero, en especial lo que de manera detallada y coherente expuso al comienzo del juicio oral, renunciando a su derecho a guardar silencio e inculpándose, sí constituyó un aporte sustancial al esclarecimiento de los hechos, lo que resulta patente de la lectura del décimo considerando de este fallo y del contraste de aquellos dichos con los presupuestos fácticos que dimos por legalmente acreditados.

No obstante ello, en relación con la calificación solicitada por esta Defensa, el artículo 68 bis del Código Penal prescribe que “cuando sólo concurra una atenuante muy calificada el Tribunal podrá imponer la pena inferior en un grado al mínimo de la señalada al delito”. Por otro lado, la atenuante del artículo 11 N° 9 del mismo cuerpo legal requiere para su simple configuración que el aporte probatorio del acusado sea sustancial para el esclarecimiento de los hechos, de lo que se colige que, para poder tenerla como muy calificada en los términos del citado artículo 68 bis, tal función esclarecedora debe exceder tal sustancialidad.

En ese contexto, cobran relevancia las probanzas de cargo producidas, dentro de las que resaltan para estos efectos las declaraciones de Karem Torres de La Fuente, Paulo Marcel Becerra Maldonado, Mauricio Jorquera Loyola, Rodrigo Adolfo Guerra Morales, Eduardo Antonio Lobos Tapia, Valesca de Las Mercedes Alarcón Urrutia, Enrique Leopoldo Torres Valenzuela, Elías Rolando Apablaza Vásquez, Diego Ignacio Vásquez Riquelme, Ralph John Veloz Rodríguez, Víctor Segundo Muñoz Faúndez, Fabián Enrique Ortega Bustamante, Luis Alberto Gutiérrez Gutiérrez, ya que todos ellos aportaron antecedentes que fueron sumamente significativos para este Tribunal a la hora de formar nuestra convicción. Por lo mismo, no se accederá a la calificación pedida por la Defensa del acusado Vega Guerrero.

La misma Defensa solicitó además la aplicación de la atenuante del artículo 11 N° 8 del Código Penal, justificándola en que su representado fue a la Policía de Investigaciones, declaró toda la verdad y eso es lo que ha servido de soporte a la decisión del Tribunal. Eso lo dijo el señor Gutiérrez, dijo que fue un aporte siempre, que fue constructivo.

Al respecto, primero conviene consignar que en dicha norma se establece que se concede una minorante de responsabilidad penal al que, “pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u ocultándose, se ha denunciado y



confesado el delito”. Siendo esos los requisitos de procedencia de esta atenuante, no puede olvidarse que el comisario de la Policía de Investigaciones señor Gutiérrez Gutiérrez declaró que esta investigación nació a fines junio del 2020 por un requerimiento de la Fiscalía de San Javier para investigar un hecho por una denuncia de Nelson Vega, quien denunció en Rengo a mediados de junio del 2020 una situación irregular que estaba vinculada a una persona relacionada con él, su hermano Ricardo Vega. Entre las primeras diligencias que se realizaron estuvo validar si el denunciante era fiable y los antecedentes que aportaba eran acordes a lo que indicaba. Para eso fueron a Rengo con el fiscal y el colega Cristian Bahamondes y entrevistaron a Nelson Vega quien aportó antecedentes que eran en primera instancia bien vagos pero posteriormente hizo alusión a la identidad de personas que daban cierto indicio de la comisión de algunos ilícitos. En el relato que recuerda entregó Nelson, dio cuenta de que su hermano le dio cuenta a él de que su cuñada, Claudia del Pino, junto a él, Ricardo, hacían gestiones para arreglar causas en los delitos de manejo en estado de ebriedad y dentro de esto, que cobraba por hacer estas movidas entre paréntesis y daba mención de tres personas, entre las cuales recuerda un señor de una botillería, otro de una verdulería y otro de Longaví y mencionó que este señor, dentro del pago, consideró un cordero para un asado, lo que dio cuenta de cómo validar esa información. También refirió que había mantenido una relación sentimental con la Valesca Alarcón y al hermano de ella le habían ayudado a cambio de dinero por archivar o borrar la causa por un manejo en estado de ebriedad.

Acotó el señor Gutiérrez Gutiérrez que esa declaración tuvo lugar a fines de julio del 2020 y más adelante refirió que la primera declaración que prestó Ricardo Vega Guerrero en la investigación fue el 10 u 11 de marzo del año 2021.

De lo precedente sólo cabe colegir que acá el acusado Vega Guerrero no se denunció, incluso considerando esa voz en términos extensivos, pues varios meses antes de declarar en la investigación ya había sido individualizado por un denunciante y ya habían sido descritas en lo nuclear las conductas que ahora se le imputan. Por lo mismo, no cabe hacer lugar a la minorante analizada.

Finalmente, esta Defensa pidió se considere la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal. Explicó que asumió la Defensa de Vega Guerrero en julio o agosto del año 2023 en el Juzgado de Garantía y se dio cuenta de los antecedentes penales en agosto. Revisó las causas y en todas ellas aparece que se omitan los



antecedentes de Ricardo Vega y sí se omitieron en los certificados para fines especiales. El Registro Civil funciona en sus tiempos y aún no se han limpiado esos antecedentes. Lo pidió al Juzgado de Garantía, pero no ha pasado nada. Pidió la eliminación formal al Registro Civil y no ha pasado nada. Hay que evitar la injusticia, seguramente los antecedente serán eliminados en unos días. Lleva días desde que pidió al Registro Civil dicha eliminación y no ha pasado. Preguntó qué pasaría si en días más se eliminan los antecedentes. Aludió expresamente a las causas 1279-16 y 1334-2016 del Juzgado de Garantía de Rengo e hizo lectura resumida de documentos que acompañó para sustentar su exposición, consistentes en resoluciones y oficios emanados de dicho Tribunal y en escritos presentados al mismo en que se solicita eliminar los antecedentes penales de Ricardo Vega Guerrero. Dentro de ellos destaca la resolución dictada por el Juzgado de Garantía de Rengo con fecha 5 de junio del año 2019, en que, en su causa RIT 1279-2016, ordena, teniendo presente el cumplimiento satisfactorio de la condena por parte del sentenciado Ricardo Vega Guerrero, que se oficie al Registro Civil e Identificación a fin de que proceda al tenor de lo dispuesto en el artículo 38 inciso 3° de la Ley 18.216, y la resolución de esa misma magistratura, fechada el 25 de mayo del año 2017, en que, en su causa RIT 1334-2016, ordena, teniendo presente el cumplimiento satisfactorio de la condena por parte de Ricardo Vega Guerrero, que se oficie al Registro Civil e Identificación a fin de que proceda al tenor de lo dispuesto en el artículo 38 inciso 3° de la Ley 18.216.

Antes de proseguir, conviene consignar que el Ministerio Público incorporó en la audiencia de determinación de pena el extracto de filiación y antecedentes del acusado Vega Guerrero emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación el día 14 de diciembre del corriente, en que figuran las siguientes condenas:

1. La dictada por el Juzgado de Garantía de Rengo en su causa 1334/2016 el día 19 de mayo del año 2016, en que se le condena como autor del delito de conducción de vehículo motorizado sin la licencia profesional debida a la pena de 61 días de presidio y accesorias generales, pena remitida y cumplida por resolución del 25 de mayo del año 2017; y

2. La dictada por el Juzgado de Garantía de Rengo en su causa 1279/2016 el día 25 de octubre del año 2016, en que se le condena como autor del delito de robo en lugar no habitado consumado a la pena de 541 días de presidio y accesorias generales, pena remitida y cumplida el 29 de mayo del año 2019.



De lo argumentado por esta Defensa y los citados antecedentes que acompañó, se desprende que su pretensión, cuyo objetivo es que este Tribunal proceda a preterir dichas anotaciones prontuariales pretéritas, se basa en lo dispuesto en el artículo 38 inciso 3° de la Ley 18.216, que a la letra establece que “el cumplimiento satisfactorio de las penas sustitutivas que prevé el artículo 1° de esta ley por personas que no hubieren sido condenadas anteriormente por crimen o simple delito, en los términos que señala el inciso primero, tendrá mérito suficiente para la eliminación definitiva, para todos los efectos legales y administrativos, de tales antecedentes prontuariales. El tribunal que declare cumplida la respectiva pena sustitutiva deberá oficiar al Servicio de Registro Civil e Identificación, el que practicará la eliminación”.

Sin embargo, olvida esta Defensa que en ese mismo artículo, esta vez en su inciso final, se prescribe “exceptúanse de las normas de los incisos anteriores los certificados que se otorguen para el ingreso a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y a Gendarmería de Chile, y los que se requieran para su agregación a un proceso criminal”. O sea, el citado inciso 3° no se aplica, en lo relevante para lo analizado, a los certificados que se requieran para su agregación a un proceso criminal. Dado que precisamente este último es el caso, pues el extracto de filiación y antecedentes incorporado por el Ministerio Público evidentemente fue requerido, como ocurrió, para su agregación al juicio criminal que nos convoca, lo alegado por la Defensa del acusado Vega Guerrero no incide en el contenido de dicho certificado, pues aun cumpliendo el Servicio de Registro Civil e Identificación (y no consta que no lo haya hecho) con lo ordenado por el Juzgado de Garantía de Rengo en las resoluciones que se relevaron, ello no alteraría el tenor del extracto de filiación y antecedentes presentado por la Fiscalía.

Cabe añadir que las hipótesis de eliminación que abarcarían lo postulado por la Defensa, a saber, las contempladas en el Decreto Supremo N° 64 de 1960 del Ministerio de Justicia o el Decreto Ley 409 de 1932 del Ministerio de Justicia, no fueron invocadas y menos acreditadas.

Por lo anterior, se rechazará la petición en comento.

DECIMOSÉPTIMO: Que, en suma, se condenará a la acusada del Pino Acuña como autora de siete delitos consumados de cohecho, figura descrita y sancionada en el artículo 248 bis del Código Penal, y de tres delitos consumados de



obstrucción a la investigación, figura descrita y sancionada en el artículo 269 ter del Código Penal.

En cuanto al citado delito de cohecho, la pena que abstractamente trae aparejada ese ilícito consumado respecto del autor adulto, como unidad, es la de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y, además, la inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado.

En este punto, pertinente es consignar que el Ministerio Público y el Querellante solicitaron la aplicación, respecto de este delito de cohecho y respecto de la acusada del Pino Acuña, del artículo 251 quinquies del Código Penal, argumentando que el mismo debe ser relacionado con el artículo 2 de la Ley 19.640 del Ministerio Público, que establece que a los abogados asistentes de fiscal se les aplicarán las normas sobre responsabilidad aplicables a los fiscales.

Sobre ello, primero debe anotarse que el artículo 251 quinquies del Código Penal mandata, en lo pertinente, que, en lo tocante a ciertos delitos, entre los que efectivamente está el del artículo 248 bis de ese mismo cuerpo legal, se excluirá el grado mínimo de las penas señaladas respecto de todos sus responsables, cuando hayan sido cometidos por un fiscal del Ministerio Público. Por su lado, en el inciso final del artículo 2 de la Ley 19.640 se prescribe que “a los abogados asistentes de fiscal les será aplicable lo dispuesto en los artículos 9º, 9º bis y 9º ter, las inhabilidades establecidas en el Título IV, y las normas sobre responsabilidad aplicables a los fiscales”.

Del examen de dicha normativa y en especial de la última, que debe ser además matizada con el específico alcance que le da el artículo 48 de la misma Ley 19.640, concluye este Tribunal que aquélla no sustenta lo pretendido por los acusadores pues dicho inciso final del artículo 2, atendida su ubicación, ley a la que pertenece y contenido, así como la delimitación que del mismo se efectúa en el citado artículo 48, si bien establece que a los abogados asistentes de Fiscal les serán aplicables las normas sobre responsabilidad aplicables a los fiscales, está claramente haciendo alusión a las normas sobre responsabilidad contenidas en el título III de la misma Ley 19.640, precisamente llamado “Responsabilidades de los fiscales del Ministerio Público”. Por lo mismo, a nuestro parecer no es jurídicamente factible asimilar sobre esa base, para los efectos revisados, a un abogado asistente de fiscal con un fiscal del Ministerio Público.



En cuanto a las modificatorias de responsabilidad, como ya se explicitó, en este caso concurre solamente la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal por lo que, de acuerdo al artículo 68 del mismo código, este Tribunal no podrá imponer la referida pena corporal base en su grado máximo.

Para la determinación de la sanción específica a aplicar a cada uno de los siete delitos de cohecho conforme se indicará en lo dispositivo, nos estaremos a los principios de equidad y proporcionalidad de la pena y a lo prescrito en el artículo 69 del Código Penal, respecto al cual consideraremos especialmente la entidad de la afectación que produjo esta acusada al bien jurídico protegido, a saber, el correcto desempeño de la función pública, relevado por la importancia de la materia en que recayó el acto por el que se solicitó o aceptó de dinero para ejecutarlo con infracción a los deberes del cargo. Por ello, fijará este Tribunal en 4 años de reclusión menor en su grado máximo la pena por cada uno de los siete delitos consumados de cohecho analizados.

Respecto a la multa, atendido lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal y la disminución de las capacidades económicas de la acusada del Pino Acuña que necesariamente implica la privación total de libertad a que se ha visto afecta en razón de las medidas cautelares personales que han pesado sobre ella en la presente causa, el provecho solicitado o aceptado en cada uno de los siete delitos de cohecho se duplicará, que es la multiplicación mínima que contempla la ley.

Cabe acotar sobre ello que la Defensa de esta acusada únicamente pidió sobre el punto la rebaja de la multa de manera proporcional a las atenuantes que solicitó. Dado que en definitiva sólo se reconoció una minorante y que no se invocó y menos acreditó un caso calificado de los exigidos en el artículo 70 del Código Penal para proceder a la imposición de una multa inferior al mínimo señalado por la ley, no se accederá a dicha rebaja.

En cuanto al delito de obstrucción a la investigación, la pena que abstractamente trae aparejada ese delito consumado respecto del autor adulto, como unidad, es la de presidio menor en cualquiera de sus grados e inhabilitación especial perpetua para el cargo.

Con respecto a las modificatorias de responsabilidad, como ya se explicitó, en este caso también concurre solamente la atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Penal por lo que, de acuerdo al artículo 68 del mismo código, este Tribunal no podrá imponer la referida pena corporal base en su grado máximo.



Para la determinación de la sanción específica a aplicar a cada uno de los tres delitos de obstrucción a la investigación conforme se indicará en lo dispositivo, nos estaremos a los principios de equidad y proporcionalidad de la pena y a lo prescrito en el artículo 69 del Código Penal, respecto al cual consideraremos especialmente la entidad de la afectación que produjo esta acusada al bien jurídico protegido, a saber, el correcto funcionamiento de la administración de justicia, con las conductas que para cada caso se dieron por suficientemente justificadas. Por ello, fijará este Tribunal en 200 días presidio de menor en su grado mínimo la pena por cada uno de los tres delitos consumados de obstrucción a la investigación analizados.

Sin perjuicio de ello, tratándose el de la especie de un caso de reiteración de ilícitos, ha de determinarse si la acumulación jurídica de penas favorece o no a la encausada. Al respecto, distinguimos dos grupos de delitos, cada uno de la misma naturaleza y especie, atendido esto último a que afectan el mismo bien jurídico: siete delitos consumados de cohecho del 248 bis del Código Penal, que afectan el correcto desempeño de la función pública, y tres delitos consumados de obstrucción a la investigación del artículo 269 ter, también del Código Penal, que afectan el correcto funcionamiento de la administración de justicia.

En razón de lo mismo, al primer grupo procede aplicar lo dispuesto en el artículo 351 inciso 1° del Código Procesal Penal, que prescribe que “en los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados”.

Por ello, cabe estimar a las siete citadas infracciones como un solo delito cuya pena aparejada por la ley es de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo más una multa, misma que este Tribunal decide aumentar en dos grados atendido el número de delitos acumulados y el tipo de participación punible atribuida a la acusada del Pino Acuña, quedando así dicha pena base única radicada en el tramo comprendido entre la reclusión mayor en su grado medio y la reclusión mayor en su grado máximo más la multa. Tras el juego de la atenuante reconocida y considerando nuevamente lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, dicha sanción queda restringida a la reclusión mayor en su grado medio más la multa. En ese tramo este Tribunal, por las consideraciones ya expuestas en relación con los artículos 69 y 70 del Código Penal, fijaría la pena



única por los siete delitos consumados de cohecho revisados en 11 años de reclusión mayor en su grado medio más la multa equivalente al duplo del provecho solicitado o aceptado, que en total asciende a \$5.800.000, más las accesorias legales.

Sobre los tres delitos de obstrucción a la investigación y aplicando la misma mecánica, cabe estimarlos como un solo delito cuya pena aparejada por la ley es de presidio menor en cualquiera de sus grados, misma que este Tribunal decide aumentar en un grado atendido el número de delitos acumulados, quedando así dicha pena base única radicada en el tramo comprendido entre el presidio menor en su grado medio y el presidio mayor en su grado mínimo. Tras la aplicación de la atenuante reconocida y considerando nuevamente lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, dicha sanción queda restringida al presidio menor en su grado medio al presidio menor en su grado máximo. En ese tramo este Tribunal, por las consideraciones ya expuestas en relación con los artículos 69 y 70 del Código Penal, fijaría la pena única por los tres delitos consumados de obstrucción a la investigación revisados en 541 días de presidio menor en su grado medio.

Comparando ahora ambos sistemas de acumulación de pena, resulta que el jurídico favorece más a la acusada, pues con éste se llega a un total de 11 años de reclusión y multa más 541 días de presidio (que deben unificarse en la reclusión teniendo presente lo dispuesto en el artículo 32 del Código Penal y el principio in dubio pro reo), todo ello con las accesorias legales, mientras que con la agregación material el resultado llega a 28 años de reclusión y multa más 600 días de presidio, todo ello con las accesorias legales. Consecuentemente, nos estaremos al primer mecanismo.

Pasando ahora al acusado Vega Guerrero, se le condenará como autor de siete delitos consumados de cohecho, figura descrita y sancionada en el artículo 248 bis del Código Penal, y de tres delitos consumados de obstrucción a la investigación, figura descrita y sancionada en el artículo 269 ter del Código Penal.

La pena que abstractamente trae aparejada ese delito consumado respecto del autor adulto, como unidad, es la de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y, además, la inhabilitación absoluta temporal para cargos u oficios públicos en su grado máximo y multa del duplo al cuádruplo del provecho solicitado o aceptado.

En cuanto a las modificatorias de responsabilidad, como ya se explicitó, en este caso concurre solamente la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal por



lo que, de acuerdo al artículo 68 del mismo código, este Tribunal no podrá imponer la referida pena corporal base en su grado máximo.

Para la determinación de la sanción específica a aplicar a cada uno de los siete delitos de cohecho conforme se indicará en lo dispositivo, nos estaremos a los principios de equidad y proporcionalidad de la pena y a lo prescrito en el artículo 69 del Código Penal, respecto al cual consideraremos especialmente la entidad de la afectación que produjo esta acusada al bien jurídico protegido, a saber, el correcto desempeño de la función pública, relevado por la importancia de la materia en que recayó el acto por el que se solicitó o aceptó de dinero para ejecutarlo con infracción a los deberes del cargo, y morigerado por la menor intensidad relativa del disvalor de la autoría con que actuó este encausado en la comisión de los ilícitos, que se radicó en la del artículo 15 N° 3 del Código Penal. Por ello, fijará este Tribunal en 3 años y 1 día reclusión menor en su grado máximo la pena por cada uno de los siete delitos consumados de cohecho analizados.

Respecto a la multa, atendido lo dispuesto en el artículo 70 del Código Penal y la disminución de las capacidades económicas del acusado Vega Guerrero que necesariamente implica la privación total de libertad a que se ha visto afecto en razón de las medidas cautelares personales que han pesado sobre él en la presente causa, el provecho solicitado o aceptado en cada uno de los siete delitos de cohecho se duplicará, que es la multiplicación mínima que contempla la ley.

Sin perjuicio de ello, tratándose el de la especie también de un caso de reiteración de delitos, ha de determinarse si la acumulación jurídica de penas favorece o no a este encausado. Al respecto, distinguimos acá un grupo de delitos de la misma naturaleza y especie, lo último atendido que afectan el mismo bien jurídico, compuesto por siete delitos consumados de cohecho del 248 bis del Código Penal, mismos que afectan el correcto desempeño de la función pública.

En razón de lo mismo, procede aplicar lo dispuesto en el artículo 351 inciso 1° del Código Procesal Penal, que prescribe que “en los casos de reiteración de crímenes o simples delitos de una misma especie se impondrá la pena correspondiente a las diversas infracciones, estimadas como un solo delito, aumentándola en uno o dos grados”.

Por ello, cabe estimar a las siete citadas infracciones como un solo delito cuya pena aparejada por la ley es de reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo más una multa, misma que este Tribunal, no



obstante tratarse también de siete delitos, decide aumentar en un grado atendido el menor disvalor del tipo de autoría en que se subsumió la conducta de este acusado, esto es, la del artículo 15 N° 3 del Código Penal, quedando así dicha pena base única radicada en el tramo comprendido entre la reclusión mayor en su grado mínimo y la reclusión mayor en su grado medio más la multa. Tras la aplicación de la atenuante reconocida y considerando nuevamente lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, dicha sanción queda restringida a la reclusión mayor en su grado mínimo más la multa. En ese tramo este Tribunal, por las consideraciones ya expuestas en relación con los artículos 69 y 70 del Código Penal, fijaría la pena única por los siete delitos consumados de cohecho revisados en 6 años de reclusión mayor en su grado mínimo más la multa equivalente al duplo del provecho solicitado o aceptado, que en total asciende a \$5.800.000, más las accesorias legales.

Comparando ahora ambos sistemas de acumulación de pena, resulta que el jurídico favorece más a este acusado, pues con éste se llega a un total de 6 años de reclusión y multa más las accesorias legales, mientras que con la agregación material el resultado llega a 21 años y 7 días de reclusión y multa con las accesorias legales. Consecuentemente, nos estaremos al primer mecanismo.

DECIMOCTAVO: Que, de la prueba rendida en el juicio, únicamente se desestimó la siguiente, enunciadas de la manera en que se singularizan en el auto de apertura:

a) Del Ministerio Público y la parte Querellante:

1. La “Causa RUC N 200030964-9 por del delito de Conducción en estado de Ebriedad respecto de Patricio Campos Bahamonde” por irrelevante, ya que recae en una causa que no fue objeto de las acusaciones.

2. “Siete fotografías de oficina de Claudia del Pino Acuña de la Fiscalía Local de Linares, al momento de la incautación de las especies que se encontraban en dicha dependencia”, por irrelevante, ya que ningún hecho materia del juicio se relacionó con esa diligencia y nada significativo aporta.

3. “Un CPU marca Lenovo modelo think centre, evidencia encontrada en la oficina de CLAUDIA del Pino Acuña de la Fiscalía Local de Linares”, por irrelevante, ya que ningún hecho materia del juicio se relacionó con esta especie, nada significativo aporta y tampoco se incorporó algún examen o pericia a su respecto.

b) De la Defensa de la acusada del Pino Acuña:



1. “Certificado de dominio y anotaciones de la moto patente EN-0106” y “Seguro obligatoria del vehículo patente GX.RP-96 pagado por Cladia Del Pino”, por irrelevantes dado que no fueron acreditados y nada significativo aportan.

2. “Dos conversaciones mediante plataforma de WhatsApp entre los acusados Claudia Del Pino y Ricardo Vega entre los meses de noviembre de 2020 al 22 de febrero de 2021, que recae en el teléfono que aparece las copias de la página 74”, por irrelevante, dado que en definitiva consiste en una sucesión de textos que son asimilables a las conversaciones que se realizan por aplicaciones de redes sociales, sin fecha ni individualización de los supuestos interlocutores (estimamos que el encabezado “Waton Vega QI” con que comienzan todas las páginas, no es suficiente para ello). Adicionalmente, el o los segmentos acompañados de las supuestas conversaciones no permiten conocer el contexto y alcance de lo que allí se dice. Desde ahí resultaba indispensable que la Defensa acreditase suficientemente esta probanza, pero ello no ocurrió, sobre todo porque a ningún testigo o perito fue exhibida para que se refirieran a ella, ni siquiera a la propia acusada del Pino Acuña.

Adicionalmente y reforzando lo recién expuesto, este Tribunal comparte con los persecutores que al menos resta decisivamente confiabilidad a esta prueba el contenido de la misma, pues en suma, de tratarse, como sostiene la Defensa de la acusada del Pino Acuña, de una conversación entre ésta y Ricardo Vega Guerrero, resultaría que el último, estaría confesando por esa vía y ofreciéndole así a del Pino Acuña una forma de registrarlo, que la responsabilidad por los hechos de esta causa es exclusiva de él. También es sumamente llamativo cómo, por el lado que en definitiva se atribuye por esta Defensa al acusado Vega Guerrero, el lenguaje es sumamente soez, autoinculpatorio y descriptor de ilícitos cometidos, mientras que por el lado que dicha Defensa atribuye a su cliente, el lenguaje es moderado, compuesto, y expone con detalle hechos que van en claro apoyo de su teoría del caso. Así, puede leerse en estas conversaciones “voy a declarar la verdad en tu caga de sumario porke las cagas me las mandé solo”, o “solo yo y tu sabemos ke todas tus cagas de tus cagas de causas las ice solito”, o “me sake la csm trabajando en computación en esa caga de rengo” y “eso nadie lo sabe ni lo sabra no tenia ni cobtrato ctm jajaja”, o “igual me costo al principio pero después me lasié con tu sige con tu saf”, o “ay wna me das pena nadie t va a creer a ti porke todos me ven como un pobre wn”, o “igual la ice ctm y ni cuenta te diste en tu propia casa jajajaja”, o “siemprrr voy a recordar su sige saf sao y la ctm jajajaja weas fomes fácil y penca me



las meti en la raja y tu mierda de compouador”, o “ya te robe el jeep la moto y ahora me mandare mi mejor actuación culpándote de todo lo ke ice solo aweona nadie te va a creer”, o “saldré libre de todo gracias a carokita ice too solito y sij 4to medio”, todo ello entre garabatos de grueso calibre. En cambio, en la parte en que esta Defensa plantea quien habla es su representada, el lenguaje es compuesto y expone hechos que van en claro apoyo de su teoría del caso, como cuando se responde a epítetos como “todos de mi lado coja maldita” y “muérete perra”, lo siguiente: “Que horror. Todos los días me hablas puras tonteras . Me tienes hartaaaa. Si andas traficando como dices hazlo y déjame tranquila En cuanto al tal Gutiérrez has lo que quieras. Finalmente los PDI son así y recordando como ese tipo entró prepotente a micasa Te creo que lo llevaste ebrio a su casa son todos iguales Ese día te acuerdas? En que yo no tenía idea de que estaba pasando y tú sabías todo y te hiciste el tonto y no querías entregar tu celular [...] Así que te repito déjame en paz o te voy a denunciar que aun tengo moretones de la ultima vez”, a lo que se contesta “perro maldita ya te dije una vif mas que tenga y te mato ahora si Acuerdate ke trafuco con perkin malos ke bo usan armas de juguete Ya la caga la deje y lo ice bien no soy como carokita me kiere hacer ver jajajaja sso e cacha”.

Si bien a este respecto el Ministerio Público rindió en el juicio oral prueba conforme se le autorizó al alero del artículo 336 inciso 2° del Código Procesal Penal, es por las razones que acabamos de exponer, que a nuestro juicio son más que suficientes para ello, que desestimaremos esta probanza por irrelevante al no cumplir siquiera con el más mínimo estándar de fiabilidad.

3. “Fotografía de conversación de WhatsApp, entre Ricardo VEGA y Claudia DEL PINO, donde se especifica el número de teléfono +5642768633, consta de 4 páginas”, por irrelevante, dado que en definitiva consiste en lo que parecen ser tomas de pantalla de un celular y de una aplicación de redes sociales en que no se distingue alguna real individualización de los interlocutores (sólo se lee en ese sentido “Rick LoVe”) y figura una sucesión de textos que no permiten comprender el tema de la supuesta conversación o su contexto y alcance. Así, se lee “que bueno ver eso, No sabes cuanto!! Ahora me lanzo. Ojalá Dios te de 7 veces lo que me ha hecho”, luego “saliendo”, luego Amor”, luego Too el rato”, luego “Me dolió”, luego “Peleas”, luego “O cagadera”, luego “La wuata”, y así a continuación. Desde ahí resultaba indispensable que la Defensa acreditase suficientemente esta



probanza, pero ello no ocurrió, sobre todo porque a ningún testigo o perito fue exhibida para que se refirieran a ella, ni siquiera a la propia acusada del Pino Acuña.

4. “Cuatro Certificado de la oftalmóloga Ramina Ferreti Difonso: 1.- Presbicia; 2.- certificado de diagnóstico de astigmatismo y presbicia; 3.- receta de anteojos; 4.- receta de medicamentos con fines oftalmológicos, para poder ilustrar la dificultad que tuvo la imputada en algún momento en el uso de los sistemas de la Fiscalía, de fecha 25 de abril de 2023 y los otros tres del 21 de abril de 2023. Por irrelevantes por la fecha”, por irrelevantes, dado que, como se puede apreciar al leerlos, todos ellos están fechados en abril del 2023 y en sólo uno se alude a un antecedente anterior, cual es “Paciente con antecedente de cirugía ocular láser Lasik”, de lo que nada puede colegirse en relación con los hechos de esta causa, que están circunscritos a los años 2019 y 2020.

5. “Fotografía de conversación WhatsApp ceja ctm”, por irrelevante, dado que en definitiva consiste en lo que parece ser una conversación a través de una aplicación de redes sociales en que no se distingue alguna real individualización de los interlocutores (sólo se lee en ese sentido “Cej Y La Ctm”) y figura una sucesión de textos en que puede entenderse una parte cobra dinero a la otra. Desde ahí resultaba indispensable que la Defensa acreditase suficientemente esta probanza, pero ello no ocurrió, sobre todo porque a ningún testigo o perito fue exhibida para que se refirieran a ella, ni siquiera a la propia acusada del Pino Acuña.

6. “NUE 5948329: Un compact Disc que contiene audio aportado por Claudia del Pino Acuña”, por irrelevante, dado que en definitiva consiste en una breve pista de audio (19 segundos) en que únicamente se escucha una voz masculina que no se identifica y además no es posible determinar el contexto de lo que se expresa. Desde ahí resultaba indispensable que la Defensa acreditase suficientemente esta probanza, pero ello no ocurrió, sobre todo porque a ningún testigo o perito fue exhibida para que se refirieran a ella, ni siquiera a la propia acusada del Pino Acuña.

7. “Transferencia realizada por Claudia Del Pino a Hernán Villanueva Estrada, en cuyo asunto se lee abono Ricardo Vega”, por irrelevante, dado que se trata de una imagen en que quizás se puede distinguir una pequeña imagen del logo del Banco Estado, en que se lee “Comprobante de Transferencia”; Monto “15.000”; desde “Claudia Andrea del Pino”; hacia “Hernán Marcelo Villanueva Estrada”; asunto “abono Ricardo Vega”; fecha 19/11/2019. Por lo mismo resultaba



indispensable que la Defensa acreditase suficientemente esta probanza, pero ello no ocurrió, sobre todo porque a ningún testigo o perito fue exhibida para que se refirieran a ella, ni siquiera a la propia acusada del Pino Acuña. Tampoco se nombró en el juicio a alguna persona llamada Hernán Marcelo Villanueva Estrada.

8. “Cinco fotos que recaen en una denuncia de violencia intrafamiliar”, por irrelevantes, dado que se trata de imágenes en blanco y negro de una resolución sumamente pobre, que apenas permiten ver siluetas y adivinar a qué corresponden. Por lo mismo resultaba indispensable que la Defensa acreditase suficientemente esta probanza, pero ello no ocurrió, sobre todo porque a ningún testigo o perito fue exhibida para que se refirieran a ella, ni siquiera a la propia acusada del Pino Acuña.

9. “26 audios extraídos de la pericia al celular del co imputado Ricardo Vega que están dentro de los CD que se ofrecen como anexos de la pericia correspondiente”, de los cuales se reprodujeron ocho, por irrelevantes, ya que son pistas de audio cortas y descontextualizadas en que diversas voces masculinas hablan, en suma y dentro de lo que se logra entender, de un cobro de dinero en que Ricardo no contesta el teléfono y se pide disculpas a Claudia; de que necesita un millón de pesos para repuestos de un jeep que están respaldados y ahí la (o lo) llevará donde está el jeep; de que lo que fue a declarar no tenía que ver con lo penal; de que Claudia en un momento le caía bomba pero ella es tu señora y que Iván la influencia en muchas cosas; de que odia a una persona; y de no tiene un peso y está parado. Por lo mismo resultaba indispensable que la Defensa acreditase suficientemente esta probanza, pero ello no ocurrió, sobre todo porque a ningún testigo o perito fue exhibida para que se refirieran a ella, ni siquiera a la propia acusada del Pino Acuña.

DECIMONOVENO: Que, en cuanto a la posibilidad de imponer alguna de las penas sustitutivas contenidas en la Ley 18.216 en lugar de las sanciones privativas de libertad procedentes, atendida la cuantía de las mismas, ninguna de aquellas procede, por lo que resulta inoficioso pronunciarse sobre el informe pericial aportado por la Defensa del acusado Vega Guerrero en la audiencia de determinación de pena.

VIGÉSIMO: Que, en cuanto al comiso de las especies incautadas solicitado por los acusadores, atendida lo considerado y dispuesto en este fallo y las pruebas incorporadas al juicio oral, se hará lugar a ello únicamente respecto del teléfono celular marca Samsung modelo A70 color celeste, que fue acreditado por el señor



Gutiérrez Gutiérrez como el que fue incautado al acusado Ricardo Vega Guerrero y en el que se encontraron imágenes de un parte denuncia y de un listado de causas referidos a Eduardo Antonio Lobos Tapia, contenido que establece que, de acuerdo al tenor del artículo 31 del Código Penal vigente a la época de comisión de los delitos, se trata dicha evidencia material de un instrumento con que se ejecutó un delito.

Respecto a las demás evidencias incorporadas, no se hará lugar al comiso debido a que no se acreditó suficientemente que correspondan a efectos provenientes de alguno de los delitos decantados o a instrumentos con que se ejecutaron.

VIGÉSIMOPRIMERO: Que, en cuanto a las costas, respecto de las absoluciones se eximirá totalmente a los acusadores de las costas de la causa atendido que, de lo que se tuvo en esos casos por debidamente establecido y de las razones por las cuales se desecharon esos cargos, queda en evidencia que aquéllos tuvieron motivos plausibles y serios para sostener esas pretensiones punitivas desechadas.

En relación con las condenas, dado lo precedente, es decir, que se desecharon cargos formulados en contra de ambos encausados, y a las penas privativas de libertad efectivas que se les impondrán por el presente fallo, circunstancia que sin duda mermará decisivamente sus capacidades económicas, también se les eximirá totalmente del pago de las costas de la causa.

Y TENIENDO ADEMÁS PRESENTE lo dispuesto en el número 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; artículos 1, 5, 11, 14, 15, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 31, 39, 39 bis, 39 quáter, 50, 68, 68 bis, 69, 70, 74, 70, 193 N° 1 y 4, 196, 248 bis, 251 quáter, 251 quinquies, 269 bis y 269 ter del Código Penal; artículos 1, 4, 7, 45, 47, 48, 53, 93, 94, 102, 182, 227, 228, 246, 295, 296, 297, 315, 334, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 348 y 468 del Código Procesal Penal; artículos 2 y 45 de la Ley N° 19.640; y artículos 1, 4, 8, 11, 15 y 15 bis de la Ley 18.216,

SE RESUELVE:

I. Que se **CONDENA** a la acusada **CLAUDIA ANDREA DEL PINO ACUÑA**, ya individualizada, a la pena única de **DOCE AÑOS Y CIENTO SETENTA Y SEIS DÍAS DE RECLUSIÓN MAYOR EN SU GRADO MEDIO; multa ascendente a \$5.800.000; inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; inhabilitación para ejercer cargos, empleos,**



oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública por el período de 10 años; e inhabilitación especial perpetua para el cargo de abogado ayudante o asistente de Fiscal del Ministerio Público, todo ello como autora de los siguientes ilícitos:

1. siete delitos consumados de cohecho, figura descrita y sancionada en el artículo 248 bis del Código Penal, cometidos entre los años 2019 y 2020 en la comuna de Linares, y

2. tres delitos consumados de obstrucción a la investigación, figura descrita y sancionada en el artículo 269 ter del Código Penal, cometidos entre los años 2019 y 2020 en la comuna de Linares.

II. Que no concurriendo los requisitos establecidos en la Ley N° 18.216, no se decreta en favor de la acusada CLAUDIA ANDREA DEL PINO ACUÑA pena sustitutiva alguna para el cumplimiento de la sanción de reclusión que se le impone en este fallo, **debiendo ella ser cumplida efectivamente y abonársele setecientos treinta y dos días, correspondientes al período en que estuvo totalmente privada de libertad en razón de la presente causa entre los días 16 de diciembre del año 2021 y 17 de diciembre del año 2023.** Ello según lo consignado en el auto de apertura de juicio oral y lo que figura en la carpeta judicial virtual en relación con la detención infructuosa de la acusada en referencia de fecha 17 de diciembre del corriente y la consecuente declaración de rebeldía a su respecto.

III. Que se ABSUELVE a la acusada CLAUDIA ANDREA DEL PINO ACUÑA, ya individualizada, **de los restantes cargos fiscales que la sindicaban, además, como autora de otros cuatro delitos consumados de obstrucción a la investigación, de ocho delitos consumados de prevaricación administrativa, de siete delitos consumados de violación de secreto y de cuatro delitos consumados de falsificación o uso malicioso de instrumento público**, todos supuestamente cometidos durante los años 2019 y 2020 en la comuna de Linares.

IV. Que se CONDENA al acusado RICARDO IGNACIO VEGA GUERRERO, ya individualizado, a la pena única de **SEIS AÑOS DE RECLUSIÓN MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO; multa ascendente a \$5.800.000; inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y**



derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; e inhabilitación para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública por el período de 10 años, todo ello como autor de siete delitos consumados de cohecho, figura descrita y sancionada en el artículo 248 bis del Código Penal, cometidos entre los años 2019 y 2020 en la comuna de Linares.

V. Que no concurriendo los requisitos establecidos en la Ley N° 18.216, no se decreta en favor del acusado RICARDO IGNACIO VEGA GUERRERO pena sustitutiva alguna para el cumplimiento de la sanción de reclusión que se le impone en este fallo, debiendo ella ser cumplida efectivamente y contarse, conforme al artículo 26 del Código Penal, desde el día de su detención, a saber, el 16 de diciembre del año 2021, pues a partir de esa fecha ha permanecido ininterrumpida y totalmente privado de libertad con motivo de la presente causa. Ello según lo consignado en el auto de apertura de juicio oral.

VI. Que se decreta el comiso únicamente del teléfono celular marca Samsung modelo A70 color celeste, que fue incorporado al juicio oral como prueba de cargo.

VII. Que, se exime totalmente al Ministerio Público, al Querellante y a los acusados del pago de las costas de la causa.

VIII. Que, en su oportunidad, se devolverá a los intervinientes la prueba que respectivamente incorporaron al juicio y se remitirán estos antecedentes al Juez de Garantía correspondiente para el cumplimiento de la sentencia.

Fallo acordado con una prevención del magistrado Mauricio Leyton Salas quien estuvo:

I) Por atribuir y sancionar al acusado Ricardo Vega como partícipe en los delitos de cohecho aquí asentados, en los términos de entender que la participación que despliega en ellos se debe calificar como la de un cómplice en términos del artículo 16 del Código Penal, por los argumentos que pasa a exponer:

Sabido es que el delito de cohecho pertenece aquellos que la doctrina especializada agrupa como “Delitos Especiales Propios”. Especiales por cuanto sólo pueden ser autores, un círculo determinado de personas y; propio, porque no tienen



correspondencia con un delito común. En consecuencia, Ricardo Vega es un “extraneus” que en principio no puede ser considerado autor, ni coautor, porque Ricardo Vega no es funcionario público; por lo mismo, tampoco pueden adjudicársele penas que están establecidas para quienes son autores o se les considera como tales, sin afectar en ello el principio de tipicidad y legalidad de la pena.

1) No obstante, lo anterior, este juez comparte la tesis que hay comunicabilidad limitada en delitos especiales propios, como éste, respecto de otros partícipes como el encubridor y; el cómplice.

2) Nada impide que “el encubridor” [art.17CP] sea sancionado como tal cuando intervenga [...con conocimiento de la perpetración de un crimen o de un simple delito - (cualquiera este sea)-, con posterioridad a su ejecución”] y; en la medida que su conducta se ajuste típicamente a las hipótesis y modalidades que se expresan en los cuatro numerales que se indican en su redacción.

3) Así tampoco, nada impide que “el cómplice” [art. 16CP], pueda ser sancionado como tal, bajo la premisa que no puede o debe ser sancionado como autor y que su conducta se subsuma en la de quien “coopera a la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos” como precisamente ocurre en este caso.

En este orden de ideas, insiste este magistrado que el acusado Ricardo Vega debe ser, bajo la tesis de comunicabilidad limitada de un delito especial propio como es el caso, condenado únicamente como CÓMPLICE del artículo 16 del código penal de los delitos de cohecho que fueron establecidos en la sentencia, porque se demostró su cooperación a la ejecución de estos, desplegando actos anteriores o simultáneos, debiendo desestimarse que pueda ser castigado bajo la hipótesis del artículo 15 N°3 del código penal porque tal hipótesis afecta el principio de tipicidad y de legalidad de la pena al no ser este acusado funcionario público y a desatender lo que el propio legislador precisa en relación a tal artículo, respecto de los tres numerales y por cierto a las hipótesis sostenidas en el ya tantas veces citado art, 15 N° 3 en razón a que taxativamente todos ellos “SE CONSIDERAN AUTORES”.

II) En cuanto a la determinación de las penas:

1) En coherencia con lo señalado en el punto anterior, este magistrado estuvo, por aplicar al condenado Ricardo Vega la norma del artículo 51 del código penal que impone adjudicar al cómplice del cohecho, la pena inmediatamente



inferior en grado, a la señalada por la ley para el autor de este delito consumado, esto es, la pena de presidio menor en su grado medio y a continuación, determinar respecto de la pluralidad de delitos (siete) cual es, en su caso, la regla que le resulta más favorable, en base a la acumulación material del art. 74 del código penal o la regla de acumulación jurídica del art. 351 del código procesal penal aumentada según su criterio “en un grado”

2) Ahora bien, en relación con Claudia del Pino condenada como autora de Tres (3) delitos consumados de Obstrucción a la Investigación, este magistrado estuvo por aplicar la pena de 100 días de presidio menor en su grado mínimo por cada uno de estos delitos consumados, en atención a que concurre la atenuante de irreprochable conducta anterior y no le perjudica agravante alguna, esto es en total una pena única de 300 días. En tanto, que por los Siete (7) Cohechos consumados, estuvo por aplicar la acumulación jurídica establecida en la hipótesis del inciso primero del artículo 351 del código procesal penal, aumentándola en “un grado” en los términos solicitados por los acusadores radicándola en una única pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo

3) Agregando, en ambos casos, las penas accesorias que correspondan.

Fallo redactado por el Juez Christian Leyton Serrano y el voto de prevención por su autor.

Regístrese, archívese y comuníquese en su oportunidad.

RUC: N° 2000670379-9.-

RIT: N° 178-2023.-

Pronunciada por la Segunda Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Linares, integrada por los Magistrados don Mauricio Leyton Salas, quien presidió, doña Scarlet Quiroga Jara y don Christian Leyton Serrano. No firma el Magistrado Mauricio Leyton Salas por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.





Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XFRXKLLXRV